



Tipo de documento: Tesis de Doctorado

Título del documento: La construcción de representaciones sociales en torno protesta social y a la represión institucional : seis estudios de caso entre los años 1996 y 2002

Autores (en el caso de tesis y directores):

Matías Artese

Inés Izaguirre, dir.

Datos de edición (fecha, editorial, lugar,

fecha de defensa para el caso de tesis: 2009

Documento disponible para su consulta y descarga en el Repositorio Digital Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Para más información consulte: <http://repositorio.sociales.uba.ar/>

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Argentina.
Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 (CC BY 4.0 AR)



La imagen se puede sacar de aca: https://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR

Matías Artese

LA CONSTRUCCIÓN DE REPRESENTACIONES SOCIALES
EN TORNO PROTESTA SOCIAL Y A LA REPRESIÓN
INSTITUCIONAL.

Seis estudios de caso entre los años 1996 y 2002.

Tesis para optar al título de Doctor en Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

Directora: Inés Izaguirre

Buenos Aires
2009

La construcción de representaciones sociales en torno protesta social y a la represión institucional. Seis estudios de caso entre los años 1996 y 2002.

Resumen

La siguiente investigación indaga en las particularidades de los enfrentamientos físico-materiales y simbólicos entre los sujetos involucrados directa o indirectamente en seis episodios de protesta entre 1996-2002, período en el que se registra un alza general del conflicto social y una profundización de la crisis económica y laboral que afectó a la mayoría de la población del país.

Mediante el análisis de declaraciones publicadas en medios gráficos de información y entrevistas a los protagonistas de las protestas, se analizan las propiedades atribuidas tanto a las acciones colectivas de protesta como al tratamiento represivo del Estado.

En este campo de disputa por el sentido de las acciones, el objetivo principal será revisar qué tipo de interpretaciones –construcciones de conocimiento- se producen en los momentos en que se adquieren altas magnitudes del enfrentamiento, poniendo especial atención al proceso de estigmatización y criminalización de la protesta en los momentos precisos en que la represión estatal se materializa.

La hipótesis que atraviesa la tesis es que la interpretación del conflicto es resultado de una relación entre sujeto y objeto en la que interviene un paradigma de comprensión de la realidad donde operan saberes precedentes y valoraciones ideológicas y morales que condicionan el proceso de conocimiento.

The construction of social representations of social protest and state repression. Six case studies between the years 1996 and 2002.

Abstract

This research examines the physical-material and symbolic confrontations between the subjects involved directly or indirectly in six episodes of protest between the years 1996-2002. This period registered a rising social conflict and a deepening economic and labor crisis that affected the majority of the population of the country.

The dissertation analyzes public statements and interviews from the main actors of the protest/repression; published in the press during the period. In particular, the study focuses on the ways in which the collective actions of protest and the repressive practices of the State are defined.

This is a study of a field of dispute for the sense of the actions. The primary target will be to review what types of interpretations -constructions of knowledge- take place at these moments of high level of confrontations. Special attention is given to the processes of social stigmatization and criminalization, which occur precisely in those conjunctures when state repression is materialized.

The main hypothesis of this dissertation is that the interpretation of the conflict is the result of a relation between subject and object, which comes from a particular paradigm of understanding reality. This paradigm operates through ideological and morals valuations which condition the process of knowledge-construction.

Indice

Introducción.....	4
Capítulo 1: En torno al abordaje teórico, epistemológico y metodológico: construcción de conocimiento y discurso.	12
Capítulo 2: Expropiación económica, instituciones democráticas y conflicto social.....	43
Capítulo 3: Hacia un estado de la cuestión. La protesta social, los cortes de ruta y sus caracterizaciones.....	61
Capítulo 4: Cutral Có y Plaza Huinul, 1996. Los indicios de la deslegitimación del conflicto.....	95
Capítulo 5: Ciudad de Neuquén, Cutral Có y Plaza Huinul, 1997. De la protesta docente al “rebrote subversivo”.....	129
Capítulo 6: Corrientes, 1999. Se afianza la criminalización de la protesta	179
Capítulo 7: General Mosconi y Tartagal, 2000. La “violencia organizada” de los trabajadores desocupados.....	218
Capítulo 8: General Mosconi y Tartagal, 2001. Piqueteros y francotiradores: el camino de la guerrilla.....	254
Capítulo 9: La Masacre de Avellaneda y el “complot por la toma del poder”.....	282
Capítulo 10: Consideraciones finales. La construcción social e ideológica del conflicto... ..	321
Anexo Mapas.....	338
Bibliografía.....	345

Agradecimientos

Todo trabajo de investigación es, sin dudas, un trabajo de cooperación. Esta tesis fue proyectada en un marco de trabajo colectivo y llevada a cabo también gracias a la intervención de distintas personas que indefectiblemente dejaron su huella a través de su pensamiento y sus palabras, o de sus aportes bibliográficos.

En este trabajo colectivo, Inés Izaguirre tiene un lugar preponderante por ser la persona con quien trabajo desde mi graduación, directora de mi tesis de maestría y quien hoy sigue acompañándome - con paciencia y perseverancia- en el camino de mi formación en la investigación social. A ella el primer gran y afectuoso agradecimiento.

En el camino de escritura y reescritura, pensar y repensar muchas de las ideas que fueron verdidas aquí, intervinieron muchas personas, compañeros/as y amigos/as de años. Quienes integran el Programa de Investigación en Conflicto Social tuvieron un fuerte peso en esta tarea, en especial los aportes invalorable de Agustín Santella, Leandro Gielis y Damian Melcer. El mismo lugar le cabe al Programa de Investigaciones sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), en particular María Celia Cotarelo, Ricardo Donaire y Nicolás Iñigo Carrera.

Otros amigos y amigas que hicieron colaboraciones de diverso tipo fueron Juan Wahren, Rodolfo Elbert, José Benclowics, Marina Murruni, Paula Boniolo, An Baccaert, Alejandro González, Victoria Ugartemendia, Leandro Rodríguez, Jorge Cresto. A ellos/as un caluroso GRACIAS.

En el itinerario de tratar de indagar en los recuerdos y reflexiones de cada uno de los manifestantes de las distintas protestas que se trabajarán aquí, el enorme agradecimiento a las siguientes personas, quienes colaboraron con la logística en dicho itinerario, y a los propios entrevistados que desinteresada y generosamente me abrieron las puertas de sus casas y de sus memorias:

En Neuquén, Cutral C6 y Plaza Huincol: el especial agradecimiento a Laura Blanco, Gustavo Peña Ponce (Cipolletti), Clara Camili6n y Anibal Rodr6guez Lupo (Plottier), quienes me alojaron y compartieron conmigo sus vidas cotidianas, recuerdos y afectos. Tambi6n a Jorge Sabatini, Silvia Barco, y Jos6 Luis Bonifacio, de la Universidad del Comahue. Entrevistados: Rita Santarelli, Ariel Petrucelli, M6nica Bonini, Marcela Romero, Daniel Zapata, Liliana Obreg6n, Oscar Flores, Juan Carlos Garc6s, Norberto Calducci, Dar6o Torchio, Silvia Su6rez, Mariela Su6rez, Monica Damicelli, Gladys Rodr6guez, Oscar Di Diego, Omar Pinchulef, Juan Vergara, Patricia Sandoval, Verena Sandoval.

En Corrientes: En especial el enorme aporte de Hilda Presman, Gabriela Barrios y Pablo Teler. Otros entrevistados: Violeta Groglio, Lucio Mauri6o, Miguel Pelozo, Karina Paiva, Balbina Pittoni, Luc6a Abad, Juan Carlos Gonz6lez, Feliciano Romero, Dar6o Rambau, Liliana Sosa, Eugenio Montero, Ignacio Cardozo, Jorge Cardozo, Jos6 Luis Talavera, Fernando Marc6pulos,

En General Mosconi y Tartagal, Salta: la solidaria predisposici6n de "Pepe" Barraza, Mario Andreani y "Chiqui" Peralta fueron fundamentales en aquellas ciudades. Otros entrevistados: Oscar Mongelli, Renato Cruz, Omar Maldonado, Luis Gil, Ferm6n Hoyos, Carlos "Tyson" Fernandez, Judith Guerrero, Anibal Arias y Mabel Carrizo.

Puente Pueyrred6n y Avellaneda: especialmente a Jorge Jara, quien tambi6n form6 parte de las entrevistas junto con Alberto Spagnolo, Ram6n Barrionuevo, "Neka" Jara, Angel Ib6ñez, Elisa Delboy, Sergio "Coco" Insaurralde.

Como se suele decir (y no por ello menos cierto): sin todos ellos y ellas, esta tesis no hubiera sido posible.

Introducción

Después de la última dictadura militar, la década de 1990 acaso sea un período histórico que, por su complejidad e implicancia en los tiempos posteriores, debamos revisar en una innumerable cantidad de ocasiones. Seguramente todavía no hayamos acabado con el estudio de los aspectos sociales, políticos y culturales producto de una transformación económica –sólo posible a partir de un triunfo de unos sobre la derrota de muchos- pocas veces visto en un plazo tan corto. Si debiéramos traducirla en fechas, decisión que siempre es arbitraria, 1989 sería el comienzo de este período que finalizó en 2002, año en donde comenzaron a registrarse ciertos cambios en un modelo hasta ese momento hegemónico. Parafraseando a Eric Hobsbawm, quizás se trate de la década más larga del último medio siglo en la historia del país. La presente tesis intenta revisar algunos aspectos del conflicto social inscriptos a lo largo de seis años dentro de esa larga década.

Un primer avance de esta investigación que lleva ya varios años, ha sido plasmado en una tesis de maestría. Los casos tratados allí tuvieron una delimitación temporal y geográfica específica: los dos más importantes conflictos protagonizados por cortes de ruta en la provincia de Neuquén durante 1996 y 1997. A partir de esa demarcación nos propusimos conocer las características, los enfrentamientos y principalmente los tipos de representaciones que surgieron en torno a esos primeros cortes de ruta.

Nuestros supuestos surgieron de una mirada impresionista que luego cobró mayores certezas con los datos relevados. Entendimos que el conflicto social comprendía otras aristas que se abrían con la visibilidad del enfrentamiento físico: existía un debate de interpretaciones, una construcción de conocimiento y de comprensión de los conflictos evidenciada en discursos; que a su vez influirían en las definiciones posteriores de una de las formas principales que adoptó la protesta social en la década de 1990 –los cortes de ruta- y sobre quienes los ejecutaron –conocidos de manera general como “piqueteros”-. Con estas primeras inquietudes nos propusimos conocer qué tipo de mensajes surgieron en los precisos momentos en que esos episodios de protesta se llevaban a cabo. Así comenzamos a esbozar un proyecto que suponía una *genealogía* de las interpretaciones producidas en torno a la protesta social reciente. Y en tal sentido, los hechos que seleccionamos para continuar la investigación sobre las interpretaciones del conflicto nos

llevaron a planificar un análisis *post festum*,¹ es decir, alejado de una elaboración especulativa y basado en hechos ya sucedidos. De modo que los supuestos, preguntas y objetivos que elaboramos fueron impulsados a partir de considerar que para analizar lo que hoy conocemos como *criminalización de la protesta* -que desde ya, excede la esfera jurídica-, se precisaba de un camino en el que se debía desentrañar sus primeras y también principales manifestaciones.

En la presente tesis reanudamos la segunda parte del proyecto original de la investigación, que incluye seis casos en un período mayor de tiempo: la profundización de los dos casos tratados en la primera parte del plan sumados a otros cuatro casos. Ahora bien, ¿por qué indagar en estas *representaciones del conflicto*? Podríamos argüir dos respuestas: en primer lugar lo que podríamos llamar una sensibilidad intelectual, es decir, ciertos intereses que se han ido forjando en nuestro -comenzado recientemente- oficio de la investigación social. Ese camino fue iniciado y continúa en proceso de consolidación en el Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social² del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Entre los diversos objetivos allí trabajados, comenzamos a indagar en la complicidad de diversos sectores de la sociedad con respecto al inicio del proceso de exterminio en la década de 1970: comprobamos que, producto de la intensísima confrontación material y de proyectos políticos y económicos entre clases y fracciones sociales, también se estableció una disputa ideológica como una dimensión más de aquellos enfrentamientos. Hoy tenemos la certeza de que aquel proyecto político y económico que transformó la sociedad no pudo ser ejecutado sólo con violencia material, sino también con un amplio arsenal moral e ideológico que cuestionó las luchas populares, desvirtuando sus acciones y objetivos, y promoviendo la necesidad de restablecer “el orden y la seguridad”.

En segundo lugar, notamos que este tipo de inquietudes no estaban del todo desarrolladas en un gran campo de investigaciones basadas en el estudio de los recientes episodios de protesta mediante el corte de rutas y calles. Muchas de esas investigaciones se abocaron a trabajar sobre la utilización de nuevas metodologías en la acción colectiva de

¹ - O *después de los acontecimientos*. Hoy podríamos decir que todas las investigaciones en ciencias sociales requieren en mayor o menor medida de este camino metodológico. Marx (1992) explicita claramente este abordaje en su obra *El Capital* en el apartado sobre el fetichismo de la mercancía, que le abrió el camino a la investigación científica sobre la producción de mercancías y el carácter del dinero en el capitalismo. Se trata del método necesario para comprender el origen de un fenómeno a partir de su manifestación empírica: “la reflexión acerca de las formas de la vida humana, incluyendo por tanto el análisis científico de esta, sigue en general un camino opuesto al curso real de las cosas. Comienza *post festum* y arranca, por tanto, de los resultados preestablecidos del proceso histórico” (p.40).

² - Coordinado por Inés Izaguirre.

protesta y sobre la conformación de sujetos e identidades también renovadas, afirmaciones que revisaremos a lo largo de la tesis. Pero consideramos que todavía no se prestó suficiente atención tanto a las acciones provenientes de los sectores políticos dominantes y a sus interpretaciones sobre esos hechos: qué tipo de tratamiento político aplicaron, qué dijeron al respecto y en qué momentos lo hicieron. Como tampoco se prestó suficiente atención, creemos, a la perspectiva de los manifestantes sobre aquellas respuestas represivas y a su justificación, en algunos de los cortes de ruta más importantes de la década de 1990 y principios de la década actual.

La elección de estudiar episodios en los que se aplicó una violencia institucional de alta intensidad, no es casual. Sabemos que los cortes de ruta no siempre fueron objeto de un mismo tipo de respuesta por parte del Estado. En algunos casos se recurrió a la negociación pacífica o al “desgaste” de sus integrantes, pero el eje de nuestra investigación serán aquellas protestas en las que se movilizaron tropas y, en cinco de los seis casos, provocaron muertes y decenas de heridos graves. Como iremos viendo a lo largo de la investigación, es en este tipo de avance represivo cuando se registra la justificación y legitimación de la violencia institucional con mayor vehemencia, y cuando se multiplican las caracterizaciones estigmatizantes de quienes protestan. Una identificación de un *otro* peligroso, ilegal y marginal que incluyó imágenes relacionadas a luchas y enfrentamientos pasados en el marco de lo que podríamos llamar un *nuevo paradigma de la seguridad*, instalado lenta pero firmemente en la década de 1990.³

Al arsenal simbólico que desde el plano discursivo abonó la instalación de imágenes maniqueas y desvalorizadas de los manifestantes, se suma el hecho de que muchos de quienes participaron de las protestas fueron acusados de cometer una violación a la ley y a la Constitución Nacional y fueron procesados judicialmente incluso al día de hoy.

Es por ello que la condena social sobre quienes protestaron constituye un elemento fundamental para entender las propuestas de represión como recurso para resolver un problema social y retornar al “orden” vulnerado.

³- La Doctrina de Seguridad Nacional formó parte de un verdadero paradigma político en el continente latinoamericano durante dictaduras y gobiernos constitucionales que consideraron a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad. Impulsada primero por el ejército francés en su lucha colonialista como doctrina de la guerra revolucionaria (Izaguirre, 2006 c) y luego por el gobierno de EUA a través de la Escuela de las Américas (Panamá), tuvo su apogeo durante las dictaduras militares en la década de 1960 y 1970. En muchas de las luchas sociales de la década de 1990 resurgieron términos político-ideológicos que eran utilizados durante la DNS como justificativo de las guerras internas que llevaron a cabo las dictaduras.

Esta clase de interpretaciones chocan, evidentemente, con las razones y argumentos de quienes protagonizaron las protestas, que también revisaremos. Se plantea de este modo un enfrentamiento de juicios de valor que reprodujo los conflictos en un campo simbólico e ideológico, de manera paralela y al mismo tiempo condicionado por el enfrentamiento material. Este aspecto dialéctico –la relación intrínseca que se establece entre los enfrentamientos simbólicos y los enfrentamientos materiales- será fundamental para entender el desarrollo y los objetivos de esta investigación.

Como mencionamos, en un primer avance verificamos que la protesta social tiende a ser valorada negativamente con mayor intensidad y frecuencia en los momentos en que se promueve o ejecuta el monopolio –y la razón- de la fuerza, que no es sino el momento más importante en que se ejerce y se realiza el poder, su punto materialmente más visible. A partir de allí nos propusimos continuar con los interrogantes relativos a las estrategias del uso del discurso en el proceso de construcción y legitimación de la dominación: ¿es posible encontrar ciertas regularidades en un período más amplio de tiempo sobre aquellas interpretaciones del conflicto provenientes de sectores política y económicamente dominantes? ¿Mantienen especificidades a lo largo del tiempo o cambian según las diversas coyunturas? ¿Qué interpretaciones realizan quienes impulsaron las protestas, qué tipo de representaciones producen, en qué se diferencian de las versiones oficiales? ¿Es posible establecer una relación sistemática entre la legitimación del uso de la violencia institucional y la estigmatización moral e ideológica de los manifestantes durante los conflictos? Somos conscientes de que estas inquietudes no son inocentes: implican una defensa de posición no sólo académica sino política, atendiendo a que nos referimos a toda una temática que hoy sigue siendo trabajada desde las ciencias sociales, y que se basa en movimientos y actores sociales que ejercen su activismo político y social en la actualidad.

I. El problema de investigación: supuestos y objetivos

Atendiendo a lo expuesto hasta aquí, la hipótesis o supuesto general de la presente investigación podría desglosarse en dos proposiciones. En primer lugar considerar que: *durante el desarrollo de episodios de enfrentamiento material entre sectores antagónicos se generarían lecturas de la realidad que, de manera directamente proporcional a la intensidad de los conflictos, impulsarían la estigmatización político-ideológica de quienes*

protagonizan luchas sociales y sus acciones y la justificación del uso de la violencia institucional. En segundo lugar: en estas expresiones producidas por diversas fracciones de las clases dominantes, dirigentes y sus aliados intervendrían paradigmas de comprensión de la realidad en donde operan valoraciones ideológicas y morales precedentes que condicionan el proceso de conocimiento de esos conflictos.

Para avanzar desde este supuesto, el objetivo general y el método de la investigación será indagar, mediante el registro discursivo en medios gráficos de información y mediante la realización de entrevistas a los protagonistas de los episodios de protesta., aquellos indicadores que den cuenta de la construcción de representaciones sociales del conflicto durante un período de alza en la intensidad de la protesta social entre los años 1996 y 2002. En este marco se pretende comprobar la reiteración de modelos de confrontación ideológica producidos que hayan influido en la caracterización de las fracciones asalariadas más movilizadas y en la promoción de políticas de seguridad interior.

Es para ello necesario entender las particularidades de cada uno de los conflictos seleccionados, los sujetos que intervinieron en ellos, sus objetivos y la coyuntura político-económica en la que se desarrollaron. Esto nos lleva a otra serie de preguntas, a saber: ¿cuáles son los orígenes y consecuencias de cada episodio? ¿Quiénes componían y conducían las protestas, es decir, su inserción laboral, orígenes sociales, militancias políticas o gremiales? Por otra parte, ¿cuáles fueron las políticas represivas aplicadas en cada uno de estos episodios, en qué consistieron y cuáles fueron las consecuencias materiales y simbólicas? Estas preguntas se plasman en los siguientes objetivos específicos:

1. Describir y distinguir los diversos episodios de protesta y enfrentamiento mencionados en cuanto a la magnitud, alcance, fines y sujetos que intervinieron.
2. Procesar, analizar e interpretar todas las declaraciones registradas por medios gráficos, con el propósito de verificar períodos, frecuencias y finalidades de esas declaraciones al interior de cada episodio de protesta y en comparación con los restantes.
3. Conocer, mediante la realización de entrevistas en profundidad, la *reflexión a partir de la acción* de quienes fueron protagonistas de los episodios de protesta, e indagar en esa rememoración la interpretación actual de las caracterizaciones durante aquellos conflictos.

Estas dimensiones del problema conforman un plano *descriptivo* de la investigación, pues hasta aquí nos referimos a la búsqueda de información para conocer relaciones y

comparaciones entre distintos estudios de caso, características principales, dinámicas de confrontación tanto material como simbólica, etc. Sin embargo, este planteo no impide un posterior principio explicativo pues es posible dar cuenta de ciertas regularidades.

Tomaremos los siguientes episodios de protesta característicos no sólo por la situación económica y socio-política que comparten sino también por el “tratamiento” represivo que recibieron desde diversos gobiernos:

A) Gobierno Menem

1. Junio de 1996. Cortes de ruta en Cutral-Co, Plaza Huincul. Primer corte de ruta de repercusión masiva a nivel nacional.
2. Marzo-Abril de 1997, o segundo “Cutralcazo”. Consolidación de un nuevo sujeto social: los piqueteros y fogoneros. Muerte de Teresa Rodríguez (24).

B) Gobierno De la Rúa

3. 17 de diciembre de 1999. Represión a la manifestación de asalariados “Autoconvocados” en la toma del puente Resistencia-Corrientes. Muerte de Francisco Escobar (25) y Mauro Ojeda (18).
4. 10 de noviembre de 2000. Tartagal, Salta. Enfrentamiento de piqueteros con Gendarmería. Muerte de Aníbal Verón (37).
5. 18 de junio de 2001. Gral. Mosconi, Salta. Enfrentamiento de piqueteros con “francotiradores” paramilitares. Muerte de Carlos Santillán (27) y José Oscar Barrios (16).

C) Gobierno Duhalde

6. 26 de junio de 2002. Protesta de diversas organizaciones de trabajadores desocupados en el Puente Pueyrredón, represión y muerte de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

La propuesta metodológica, los objetivos y preguntas que nos planteamos nos llevaron a delinear un plan de trabajo que hoy se materializó en el registro y procesamiento de unas 800 declaraciones recogidas a lo largo de más de 400 ejemplares de diarios nacionales y provinciales en seis episodios de protesta en cuatro provincias, y casi 60 manifestantes entrevistados; un conjunto de información que tuvo por finalidad conformar las coordenadas básicas para acercarnos al conocimiento de cómo fueron representados esos episodios.

Así consideramos una necesidad metodológica trasladarnos a los lugares en que se llevaron a cabo los hechos (Ciudad de Neuquén, Cutral Có y Plaza Huincul en la provincia de Neuquén; Ciudad de Corrientes; Tartatal y General Mosconi en la provincia de Salta; y algunos puntos de la zona sur del Conurbano Bonaerense con respecto a la protesta en el Puente Pueyrredón), conocer las locaciones de las protestas y las represiones, escuchar las rememoraciones de sus protagonistas y comparar las mismas con las descripciones inmediatas –el registro día a día- que nos presentaban los documentos hemerográficos y al análisis teórico y empírico de la profusa bibliografía sociológica.

II. Plan de exposición

Podrá observarse que la tesis tiene una estructura diferenciada en dos secciones. Desde una presentación general, la primera parte constará de tres capítulos en los cuales introduciremos por un lado el abordaje epistemológico, teórico y metodológico, y por otra parte el desarrollo contextual y bibliográfico de nuestro problema: circunscribiremos históricamente las acciones de protesta seleccionadas y nos introduciremos en un estado de la cuestión sobre el estudio local de las mismas. En esta sección serán fundamentales algunos elementos básicos del materialismo histórico y de la epistemología genética, cuerpos teóricos que consideramos complementarios.

A partir de allí nos abriremos camino hacia la segunda parte de la tesis, constituida por la exposición de los seis casos de estudio que precederán a las conclusiones. Esta exposición, quizás clásica, no excluye que remitamos a ejemplificaciones empíricas y teóricas a lo largo de toda la tesis. Entendido como una totalidad, este trabajo de investigación intenta plantear un *diálogo* interno a lo largo de toda su extensión.

Como señalamos, el primer capítulo estará integrado por el marco teórico-epistemológico y metodológico que sustenta los datos trabajados. Los conceptos desarrollados por el constructivismo, en particular la escuela de epistemología genética, serán el bagaje teórico que consideramos necesario para analizar las interpretaciones de los hechos sociales. La metodología y a las técnicas de investigación utilizadas también serán señaladas en este primer capítulo. El relevamiento de declaraciones públicas constituyen los indicadores de aquellas interpretaciones que –lejos de manifestar un conocimiento puro o espontáneo de los hechos- están condicionadas por la historia social y política del país y

de cada fracción social. Las entrevistas realizadas tuvieron por objetivo contrastar la construcción de *verdad oficial* sobre los hechos, e indagar en el conocimiento e interpretación de los hechos por parte de los propios manifestantes.

En el capítulo dos analizaremos el contexto económico, social y político en el que se desarrollaron los episodios de protesta. Es decir el plano estructural del problema, que incluye el desmantelamiento de la formación local del “Estado keynesiano” fundado en la década de 1940 y el proceso de marginalidad y desigualdad social que produjo el nuevo modelo de acumulación capitalista consolidado a fines de 1980 con el paradigma neoliberal. El rol de las instituciones democráticas también será indagado en relación a las manifestaciones de resistencia popular que se produjeron en este período.

El capítulo tres presenta un estado de la cuestión relativo a los llamados “nuevos movimientos sociales”, la teoría de la acción colectiva y específicamente cómo fueron aplicados estos conceptos a las manifestaciones del conflicto en la historia reciente. Para desarrollar nuestros objetivos, dirigidos principalmente a una reconstrucción en una dimensión simbólica de los conflictos, consideramos necesario adentrarnos en las características que adoptó el conflicto social en la última década. Para ello intentamos circunscribir los hechos de protesta en un análisis concreto de las frecuencias, métodos que fueron utilizados y sujetos que intervinieron. Si bien todavía hoy siguen produciéndose investigaciones sobre esta temática, una buena parte de la bibliografía utilizada es del período 2000-2005, cuando urgía dar respuestas y análisis al fenómeno de la acción colectiva y del conflicto social local. Tuvimos la prudencia de hacer una lectura crítica sobre esta bibliografía con los datos e investigaciones que se disponían en el momento de haberse producido.

Del capítulo cuatro al nueve desarrollaremos los casos seleccionados. Cada uno de ellos será un capítulo aparte donde se expondrá la génesis, desarrollo y desenlace de cada episodio, atendiendo al marco teórico y epistemológico presentado anteriormente, los cuales contendrán a su vez la presentación de los análisis de datos, compuestos por las declaraciones producidas en torno a los conflictos.

Finalmente en las conclusiones y consideraciones finales haremos un balance del trabajo de investigación y presentaremos nuevos interrogantes y cuestiones por elucidar.

Capítulo 1

En torno al abordaje teórico, epistemológico y metodológico: construcción de conocimiento y discurso.

En este primer capítulo presentaremos diversos aspectos epistemológicos y teóricos que darán la estructura conceptual para el posterior análisis de los casos. En primer lugar y siguiendo a Gianella (2005), consideramos a la epistemología como una ciencia que puede tener dos grandes dimensiones: la primera referida a la pregunta sobre cómo es posible el conocimiento y a las maneras de avanzar en ese proceso (teoría del conocimiento, o *gnoseología*). Es decir, el modo de establecer cómo se puede avanzar en el conocimiento atendiendo a las fuentes, los criterios y tipos de conocimiento posibles y la relación de cada uno de estos elementos con la realidad. Y la segunda dimensión, referida al estudio de la estructura interna de las ciencias o del conocimiento científico, y cómo este se desarrolla en los distintos campos de investigación (*filosofía de la ciencia*). Es decir, lo concerniente al alcance, la naturaleza y el origen del conocimiento en la historia de la ciencia.

Si bien podríamos relativizar una separación tajante entre la gnoseología y el desarrollo histórico del análisis científico –pues ambos están mancomunados–, para la presente investigación nos centraremos en la primera dimensión, más precisamente en el conocimiento de hechos de conflicto. Partiendo de la premisa de que existe una *construcción* de conocimiento en la interpretación de la realidad y una inherente relación establecida entre el sujeto y el objeto observado, indagaremos en algunos de los conceptos desarrollados por la epistemología genética (EG de aquí en adelante).

Piaget desarrolló su teoría epistemológica y la aplicó en el campo de la psicología genética y del aprendizaje (es un epistemólogo antes que un psicólogo), lo que le permitió comprobar y explicar fenómenos cognoscitivos en psicología, pedagogía y en estudios sobre la historia de la ciencia. Sus investigaciones verifican la existencia de *esquemas de acción y explicación* que los sujetos desarrollan, accediendo así a distintos estadios de conocimiento. Una definición de diccionario de filosofía dirá que “la pregunta que moviliza a la epistemología genética es cómo aumentan los conocimientos. Averiguar por las etapas

por las que pasan los conocimientos, incluso los que son considerados erróneamente como verdades eternas” (Ferrater Mora, 2004, p. 1042).

En tal sentido, quizás la tesis fundamental de la EG es que existen diversas instancias y grados de conocimiento e interpretación de la realidad que están condicionadas por etapas precedentes –en las que intervienen marcos epistémicos particulares- y que a su vez condicionarán etapas futuras. Mediante la experimentación grupal e individual ha verificado un *desarrollo* del proceso cognoscitivo: existe

“la idea corriente según la cual el desarrollo de los conocimientos sería lineal, y cada etapa reemplazaría así a la precedente, conservando ordinalmente algún vínculo con esta última, pero sin ninguna relación con las primeras. En realidad, el proceso es muy diferente. En efecto, no sólo los estadios sucesivos de la construcción de las diferentes formas del saber son secuenciales –es decir, que cada uno es a la vez resultado de las posibilidades abiertas por el precedente y condición necesaria de la formación del siguiente-, sino, además, cada nuevo estadio comienza por una reorganización, a otro nivel, de las principales adquisiciones logradas en los precedentes” (Piaget y García, 2004, p. 9).

Una de las ideas centrales dentro del marco epistemológico constructivista es que el conocimiento es una interacción entre sujeto y objeto, lejos de las posturas del innatismo y del empirismo. Es decir, no se entiende el conocimiento como una concepción a priori o producto de la especulación filosófica -que como teoría de conocimiento es definitivamente desplazada por la ciencia (García, 2000)-, ni por la experiencia sensorial.

La primera coincidencia entre la EG y el empirismo se basó justamente en otorgar a la ciencia el lugar primordial como marco para el conocimiento, pero esa coincidencia encerraba al mismo tiempo un punto de distanciamiento: el empirismo –y el empirismo lógico como la corriente más acabada en la primera mitad del siglo XX- no podía comprobar empíricamente sus postulados. La pregunta “¿cuáles son las observaciones, las evidencias empíricas que han permitido sustentar la afirmación de que efectivamente la observación sensorial es la fuente primaria de conocimiento?” (García, 2000, p. 22), en principio quedó sin respuesta.

La propuesta de la escuela piagetiana será que el conocimiento es producto de una construcción efectiva y continua, que no radica de manera total en la percepción sensorial “ni en los caracteres pre-existentes del objeto, ya que sólo son conocidos gracias a la mediación necesaria de estas estructuras, las cuales los enriquecen al encuadrarlos” (Piaget, 1986, p. 35). Se trata, como dijimos, de una propuesta *interaccionista* que establece una

relación dialéctica entre sujeto y objeto en el que se produce una *interpretación* de los hechos.⁴

En cuanto al estudio del conocimiento científico, las investigaciones realizadas desde la EG permiten entender cómo su historia también está condicionada por paradigmas ideológicos -considerados *marcos epistémicos*- que persisten en el tiempo, aunque en muchas ocasiones estén compuestos por elementos ilusorios.⁵

Consideramos entonces que los fundamentos teóricos de la EG pueden ser aplicados a nuestros objetivos de investigación por las siguientes razones:

1) Los esquemas de conocimiento se reelaboran permanentemente a partir de la acción sobre un objeto -dato- que se constituye en observable a partir de la dotación de sentido por parte de los sujetos. Pretendemos indagar en las propiedades que cambian o se sostienen de las interpretaciones realizadas sobre determinados episodios de conflicto en un período corto de tiempo.

2) En las interpretaciones sobre esos episodios también intervienen marcos epistémicos o paradigmas ideológicos propios del *orden social* de una época, que condicionan la producción de conocimiento de los sujetos.⁶

Como indicadores de esas construcciones de sentido, nos basaremos en las declaraciones públicas que conforman un conjunto de interpretaciones de los casos a

⁴- Rolando García (2000) grafica con un elocuente ejemplo el “pasaje” de *dato* a *observable* mediante la interpretación del sujeto: “cuando llegamos a una comunidad agrícola, no ‘vemos’ campesinos. Los *datos* que tenemos frente a nosotros son individuos con ciertas características en el resultado de una elaboración conceptual concerniente a las actividades de dichos individuos y a sus relaciones con la producción dentro de la sociedad a la cual pertenecen. Es natural, sin embargo, que cuando arribamos a ese lugar inmediatamente identifiquemos a los individuos que ‘vemos’, como campesinos. El individuo es un *dato* de la experiencia. El campesino es un *observable*, en el sentido de ser una *interpretación* (conceptualización) del dato” (pp. 69-70).

⁵- Algunas teorías que se mantuvieron unívocas durante siglos fueron comprobadas al fin como erróneas. Tal el caso de la teoría geocéntrica ptolomeica, que se convirtió en paradigma vigente durante más de mil años, hasta las formulaciones de Copérnico (siglo XVI). Aunque la teoría geocéntrica había sido un modelo de notable exactitud para la ubicación de cuerpos celestes, durante aquel siglo XVI se llegó a afirmar que un sistema como el ptolomeico era tan complejo e inexacto que era imposible que pudiera existir en la naturaleza. Los postulados de Copérnico fueron continuados por Kepler y Galileo -y definitivamente instalados con Newton-, quienes desarrollaron e instalaron como nuevo paradigma la teoría heliocéntrica.

⁶- Un antecedente importante en la investigación empírica desde el marco teórico de la escuela de la EG lo constituye el trabajo de Edna Muleras: “Sacralización y encantamiento...”. Allí la autora aplica exhaustivamente los conceptos epistemológicos y teóricos de la EG sobre decenas de encuestas realizadas a las personas que formaban filas para ver, tocar, pedir y agradecer a la representación de San Cayetano (considerado el “santo del trabajo”) en la iglesia homónima en el barrio de Liniers. Se indagó en el proceso de conocimiento y de toma de conciencia de cuestiones políticas, laborales y sociales en relación a la devoción religiosa de los fieles y de su contacto o cercanía con la imagen del santo, es decir, la relación entre conocimiento de la realidad y creencia religiosa. Se tuvieron en cuenta, entre otras variables, la edad, sexo e inserción de clase de los entrevistados.

estudiar.⁷ Advertimos la dicotomía que se podría suponer entre los “hechos” frente a los “dichos”, o entre lo “material” y lo “simbólico” o subjetivo. Los estudios desarrollados desde la EG se basan en lo que el sujeto *hace* en su relación sujeto/objeto: conocer un hecho –aunque más no sea observarlo e interpretarlo- es también ejercer una *acción*.⁸ En tal sentido, las diversas declaraciones que dan cuenta de esas interpretaciones, también pueden constituirse como *observables*:

Podemos pues considerar el ‘hecho’ como un observable, pero a partir del momento en que es ‘interpretado’, es decir, revestido de una significación relativa a un contexto más amplio. Por consiguiente, un hecho es, siempre, el producto de la composición entre una parte provista por los objetos y otra construida por el sujeto (Piaget y García, 2004, p. 24).

Tratar de entender las explicaciones sobre la realidad como observables de una investigación merece una advertencia: nos referimos a un soporte empírico que posee un significado intrínseco dado por sus autores en un período histórico particular, que a su vez, mediante el análisis que aquí realicemos, se mostrarán como parte de una nueva explicación.⁹

Tratar de elucidar la confrontación simbólica entre distintas fracciones sociales a través de las formaciones discursivas que dan sentido político e ideológico a los hechos de protesta social y a quienes los realizan, nos permite acercarnos al conocimiento sobre esas confrontaciones materiales, en los que intervienen *paradigmas* de interpretación. Es decir, formas de conocimiento *social* de un hecho.

⁷- Más adelante nos detendremos en la metodología y en las técnicas utilizadas para dicho registro.

⁸- Esto se ha comprobado a través de numerosos experimentos realizados por Piaget (1984 a) con niños en etapas de aprendizaje sensorio-motrices (del nacimiento al año y medio o 2 años de edad), pre-operatorias (del año y medio de vida a los 7 años), de operaciones concretas (de los 7 a los 11 años) y luego formales (de los 11 años hasta la edad adulta), mediante problemas simples de física, geometría y álgebra. También se ha comprobado, manteniendo aquellas etapas distinguidas por promedios de edad, que existen diversas *acciones de conocimiento* sobre temas como el origen de los astros o de los fenómenos atmosféricos, así como las reglas y normas a seguir durante los juegos. En estas indagaciones se comprobó que existen esquemas de interpretación de la realidad que se reordena y traduce en nuevas concepciones en etapas posteriores de crecimiento.

⁹- Esta propuesta evoca el concepto de “doble hermenéutica” que plantea Giddens. Si bien éste no es un trabajo estrictamente sujeto a este tipo de metodologías, también me ocupo de “un universo que ya está constituido dentro de marcos de sentido por los actores sociales mismos, y se reinterpretan dentro de esquemas teóricos mediante el lenguaje corriente y el técnico” (Giddens, 1997 a, p. 194). En este caso se trata de declaraciones que caracterizan sujetos o acciones y que provienen tanto de los actores involucrados en el conflicto como de aquellos que no participaron directamente, observables que provienen de un mundo pre-interpretado. (Giddens, 1997 b).

1.1. La noción de Paradigma en la explicación de hechos.

Vinculamos la noción de *paradigma* a la idea de que los conocimientos adquiridos están condicionados por el ámbito histórico-social, en contraposición a la imagen que ubica al conocimiento de la realidad como una “generación espontánea” de saberes.

Dicho concepto ha sido largamente discutido, fundamentalmente para poder explicar los marcos teóricos que se convierten en hegemónicos en distintas épocas de la historia de la ciencia. Según Kuhn, el establecimiento de un nuevo paradigma está relacionado a un fenómeno peculiar que consiste en un sistema de conceptos que desde una posición en principio marginal, se difunde hasta ser dominante.¹⁰ Nuevamente acudimos al diccionario de filosofía: “Kuhn ha considerado que el estudio histórico de la ciencia es indispensable para entender no solo cómo se han desarrollado las teorías científicas, sino asimismo por qué en ciertos momentos determinadas teorías han sido aceptadas en vez de otras, y han sido por tanto justificadas y validadas” (Ferrater Mora, 2004, pp. 2043, 2044).

En la concepción kuhniana, cuando dentro de un paradigma establecido surgen problemas que no llegan a ser explicados o postulados que no se resuelven, se reconsidera la efectividad de ese sistema de conocimientos para abordar preguntas o problemas: “el surgimiento de nuevas teorías es precedido generalmente por un período de inseguridad profesional profunda. Como podría esperarse, esta inseguridad es generada por el fracaso persistente de los enigmas de la ciencia normal para dar los resultados apetecidos.” (Kuhn, 1993, p. 114). Surgiría entonces una etapa de *crisis* con nuevos métodos y teorías para el análisis, desatando una *revolución científica*: un nuevo paradigma más acabado o con menos fisuras sustituye al paradigma preexistente.

Este planteo, de todos modos, conserva la idea de *salto* en el conocimiento científico. Desde la EG, Piaget y García retoman algunos de los conceptos del espectro kuhniano, pero para pensar no ya una sociología del conocimiento o una historia de la ciencia -que es como ellos definen al análisis de Kuhn-, sino una *sociogénesis del conocimiento*:

un sujeto enfrenta el mundo de la experiencia con un arsenal de instrumentos cognoscitivos que le permiten asimilar, y por consiguiente interpretar, los datos que recibe de los objetos circundantes, pero también asimilar la información que le es transmitida por la sociedad en la cual está inmerso. Esta última información se refiere a

¹⁰- Así, este modelo desafiaba el sistema “formalista” y racional de Popper, al reflexionar el desarrollo de la ciencia desde una perspectiva historicista. Aunque desde la perspectiva de Popper y Lakatos, quienes trabajan con la noción del *progreso científico*, la propuesta de Kuhn sería algo *irracional*.

objetos y situaciones ya interpretadas por dicha sociedad (Piaget y García, 2004, p. 232).

De modo que la construcción de conocimiento está condicionada por “creencias” y conductas aceptadas por un grupo social, y la interacción entre el mundo sensible y el individuo no es unívoco en distintas etapas y escenarios sociales.¹¹ Dos ejemplos pueden graficar esta idea: en primer lugar Piaget Y García (2004) lo hacen retomando espacios y tiempos disímiles que en principio nos presentan una situación paradójica:

Cinco siglos a.C. encontramos la siguiente afirmación de un pensador chino: ‘La cesación del movimiento se debe a una fuerza opuesta. Si no hay fuerza opuesta, el movimiento nunca se detendrá’. Debían pasar más de dos mil años antes que la ciencia occidental llegara a esta concepción. [Se refiere al principio de inercia mecánica. M. A.] (...) Aquí encontramos una de las raíces de la relación entre ciencia e ideología. La ideología de una sociedad determinada condiciona el tipo de ciencia que en ella se desarrolla (pp. 232-233).

Que un hecho sea parte del mundo sensible y pueda ser aprehendido, no explica por sí mismo el proceso de conocimiento que se establece entre un sujeto y ese hecho u objeto. Marx ejemplifica esto en su obra *El Capital* (1992) a partir de las diferentes concepciones que encierran las mercancías según el marco epistémico en el que se de cuenta de ellas. El concepto de valor equivalente de las mercancías –o la magnitud de trabajo abstracto contenido en un objeto concreto posible de ser medido y equiparado según el tiempo de trabajo necesario para su producción - sólo pudo ser concebido en el modo de producción capitalista:

Aristóteles no podía *descifrar* por sí mismo, analizando la forma del valor, el hecho de que en la forma de los valores de las mercancías todos los trabajos se expresan como *trabajo humano* igual, y por lo tanto, como *equivalentes*, porque la sociedad griega estaba basada en el *trabajo esclavo* y tenía, por tanto, *como base natural la desigualdad entre los hombres y sus fuerzas de trabajo*. El secreto de la expresión de valor, la igualdad y equiparación de valor de todos los trabajos (...) sólo podía ser descubierto a partir del momento en que la idea de la igualdad humana poseyese ya la firmeza de un prejuicio popular (Tomo I, p. 26).

Según esta cita, en la sociedad griega las mercancías contenían dentro de sí una condición quimérica, no del todo develada, que las hacía intercambiables. Sólo fue posible

¹¹- Los autores consideran que el camino del conocimiento científico no es racional y acumulativo (como sí lo consideran Popper y Lakatos), anárquico o irracional (Feyerabend), o establecido mediante comunidades científicas que ponen en crisis y adoptan nuevos paradigmas (Kuhn). Intentan explicar a través del estudio empírico, no solo el *cómo* en los procesos de conocimiento, sino el *por qué* de estos cambios.

llegar a las “entrañas” de la mercancía en una sociedad en donde las relaciones de producción se plasman entre productores “iguales”, formalmente libres en donde no existiera el trabajo esclavo. El esfuerzo intelectual de concebir al trabajo humano abstracto como fuente del valor –y posteriormente como una mercancía en sí misma con propiedades particulares en el proceso productivo capitalista-, dio a Marx la clave para desarrollar la teoría del valor y de la acumulación capitalista.

Los ejemplos de las distintas instancias de conocimiento no sólo pueden encontrarse en la vida cotidiana o en la historia de la ciencia, sino en la misma producción científica actual. En particular en el análisis sociológico, la labor investigativa nos presenta permanentemente conceptos que están condicionados ideológicamente, y no por ello se los considera menos ligados a la explicación científica de un problema:

Un caso extremo de inversión del punto de vista de las ciencias sociales a partir de las transformaciones ideológicas, es el de los llamados *trabajadores informales*. En los años sesenta, se conceptualizaba a más o menos la misma población como ‘marginal.’ (...) Otro tanto ocurre con el término ‘populismo’. Habiendo sido tomado de la historia política de los Estados Unidos y Rusia, fue adaptado a los casos latinoamericanos para indicar el tipo de alianza social que apoyaba a los gobiernos de inspiración desarrollista, especialmente los movimientos como el peronismo argentino. (...) De este modo, el término pasa de la política a la economía (Yochevzky, 1997, p. 162).

Izaguirre (2006 b) también señala los cambios suscitados en el vocabulario teórico de las ciencias sociales, desde donde se imponen ciertas hegemonías discursivas que marcan tendencias. Retomar el tema de la lucha de clases, por ejemplo,

puede sonar a conocido, reiterado o ‘fuera de moda’ en particular en nuestro ámbito académico, pero no lo es: se trata de otro prejuicio. (...) De hecho se habla y se investigan procesos y dimensiones de la lucha de clases desde otras perspectivas teóricas sin reconocer su sociogénesis, por ejemplo cuando se analizan *movimientos sociales* viejos y nuevos, o *representaciones sociales*. Se olvida que *cada* movimiento social, desde los que luchaban en el pasado hasta hoy, por diversos derechos conculcados (...) busca recuperar un lazo social vulnerado, una relación social destruida por un acto de poder cuya resultante ha sido siempre el disciplinamiento de un grupo (Izaguirre, 2009, cap. 1, parágrafo 1.1).

En relación a nuestros objetivos de investigación, nos centraremos en aquellas interpretaciones que se instalan o resurgen en relación directa con valoraciones y concepciones dominantes en un período determinado. En lo que se refiere a los conflictos sociales, la historia reciente del país permite abordar conceptos *atravesados* por

construcciones ideológicas que nos hablarían de sistemas de representaciones que se transmiten entre generaciones.

Si bien sería arriesgado hablar de un *paradigma epistémico* relacionado a las caracterizaciones de la protesta y del conflicto social -para ello deberíamos realizar una investigación sobre la historia de las representaciones del conflicto en un período de tiempo mayor al que aquí proponemos-, entendemos que estamos ante *resignificaciones* de conceptos que lograron ser dominantes en períodos de fuertes enfrentamientos y que hoy siguen siendo condicionantes.¹²

¿Podríamos considerar que la llamada “criminalización de la protesta” (la judicialización y penalización de militantes y manifestantes junto a una retórica basada en la discriminación o estigmatización moral y político- ideológica de algunos de los participantes de las luchas sociales),¹³ se basó en los últimos años en promover diversas formas de condena a partir de esquemas de comprensión históricamente condicionados?

1.2. El discurso en torno al conflicto.

Aunque la nuestra es una investigación dirigida a explorar y analizar las representaciones del conflicto en un período específico, no pretendemos enmarcarla en las disciplinas de la lingüística, las teorías de la comunicación y los enunciados, o la

¹²- La deslegitimación y el repudio de quienes desobedecen el sistema de normas y leyes nos habla de conceptualizaciones que, intentando una *genealogía*, están influenciadas por etapas históricas anteriores. Desde la sociología del conocimiento, Berger y Luckmann (2001) consideran que dentro de los *universos simbólicos* existen una serie de elementos que hace perdurar a los mismos en el tiempo y el espacio: *legitimación* de las representaciones fundamentales por parte de los miembros integrantes que se transmite a generaciones posteriores, la existencia de *expertos* que ejercen *roles* específicos, etc. Estos universos se sostendrían a través de conocimientos que se suceden con cierta cohesión: “El universo simbólico también ordena la historia y ubica todos los acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente que incluye el pasado, el presente y el futuro. Con respecto al pasado, establece una ‘memoria’ que comparten todos los individuos socializados dentro de la colectividad” (p. 133). Esas cosmovisiones hegemónicas, agreguemos, son producto de una larga historia de confrontaciones y disputas entre diversos sectores sociales en la que una de esas fracciones es capaz de instalarse como dominante material e ideológicamente. A partir de allí es posible reproducir un modelo o sistema subjetivo de explicación del mundo presente, además de interpretar el pasado e imaginar un futuro.

¹³- El estigma adquirido en una persona o grupo social forma parte de su constitución identitaria en relación con el mayoritario grupo de *normales*, que son generalmente los que identifican y califican a los desviados. Si bien nuestra investigación no puede enmarcarse en las técnicas de la etnografía, la microsociología o el interaccionismo, consideramos pertinente el estudio de Erving Goffman (2003) sobre los estigmas. En su trabajo considera al estigma como una “ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona, racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras diferencias, como, por ejemplo, la de clase social.” (p. 15). A lo largo del trabajo veremos cómo la utilización sistemática de determinados conceptos abonan a la construcción de un aspecto peligroso o desviado en hechos de conflicto.

semiología. Sin embargo, estamos obligados a rastrear y utilizar en nuestro marco teórico algunos de los conceptos de estas disciplinas que consideramos elementales y al mismo tiempo centrales para nuestra exposición.

Hasta aquí dejamos sentado el punto de vista epistemológico que cruzará la investigación: en una acción cognoscitiva de la realidad intervienen elementos o *productos ideológicos* que condicionan dicha acción, incluso en estadios primarios del conocimiento científico. Teniendo en cuenta estos elementos, introduzcámonos en la dimensión de la producción de significados en el campo del conflicto social.

Para el lingüista ruso Valentín Volóshinov, uno de los referentes más importantes de la teoría marxista del lenguaje, los productos ideológicos son reproducción y reflejo de un hecho de la realidad, es una *significación*, es decir, aparecen como signo. Los signos representan y refractan, sin por ello dejar de ser parte de la realidad material:

Los signos son también cosas materiales y singulares, y cualquier objeto de la naturaleza, de la técnica o del consumo puede convertirse en un signo. (...) A todo signo pueden aplicársele criterios de una valoración ideológica (mentira, verdad, corrección, justicia, bien, etc.). El área de la ideología coincide con la de los signos. Entre ellos se puede poner un signo de igualdad. Donde hay un signo, hay ideología. *Todo lo ideológico posee una significación signica* (Volóshinov, 1976, p. 33).

Siguiendo al autor, “el carácter sígnico y el condicionamiento global y multilateral mediante la comunicación no se expresa en ninguna forma tan descolante y plana como en el lenguaje. *La palabra es el fenómeno ideológico por excelencia*” (p. 37). Y en tal sentido, en tanto formas de interacción ideológica, los discursos también expresan relaciones de poder –y de confrontación- entre una parte dominante y otra subordinada: “la intersección de los intereses sociales de orientación más diversa dentro de los límites de un mismo colectivo semiótico, representa una lucha de clases. (...) El signo llega a ser la arena de la lucha de clases” (p. 49).

Es decir que las ideologías forman parte constante de la producción de la vida social, ordenándola y dándole sentido mediante un determinado campo de significados. Este es un tema tratado por el marxista inglés Terry Eagleton (1997), quien considera que además de encarnar determinados *corpus de sentido* con los que interpelamos la realidad, los sistemas ideológicos pueden naturalizar, justificar o alentar las acciones de dominación, la promoción y legitimación de los intereses de un grupo social en la conformación de un *nosotros* dueño de la visión correcta de las cosas, y un *otros* al que se diferencia con la

aplicación de atributos ligados a lo temible, desviado o peligroso. Ejemplo de esto son las ideologías racistas o etnocéntricas que se basan en la discriminación y estigmatización de distintos grupos humanos por considerarlos inferiores; los sexistas o machistas justifican la subordinación de la mujer, o los referidos a la dominación económica que naturalizan la explotación y la marginalidad argumentando las “capacidades individuales” deficientes de los sectores expropiados, etc. Es decir, constituyen “procesos por los que se enmascaran, racionalizan, naturalizan y universalizan cierto tipos de intereses, legitimándolos en nombre de ciertas formas de poder político” (Eagleton, 1997, p. 253).

Ahora bien, ¿cómo utilizar y aplicar estos conceptos con nuestros objetivos de investigación? Retomamos la distinción que realiza Eagleton (1997) sobre algunos aspectos vinculados a la construcción de conocimiento ideológico y su comunicación mediante el discurso, a saber:

1- A la hora de proponer una acción (de represión del conflicto, por ejemplo, o de caracterización negativa de quienes realizan una protesta) se *promocionan creencias* y valores que intentan legitimar o generar consenso sobre esa acción. Es decir, se rescatan ciertos valores que fundamentan el orden social y la necesidad de recomponerlo cuando se lo ha resquebrajado.

2- Las mismas se *naturalizan* y *universalizan* para hacerlas evidentes, o inevitables.

3- Se *denigran* las ideas que cuestionan o desafían aquellas verdades establecidas.

4- Se *excluyen* así las formas contrarias al pensamiento dominante.

Esta conjunción de elementos generan una situación de “*mistificación* que a menudo enmascaran o suprimen los conflictos sociales” (p. 24), al menos en el discurso del poder.

Antes de proseguir dejemos en claro nuestra posición: no es *a causa del discurso* que se desarrolla una confrontación, aunque sí es posible acceder por su intermedio a las diversas interpretaciones de un conflicto. En tal sentido el discurso, como vehículo de saberes ideológicos, se inserta en un campo de batalla imposible de ser divorciado de las confrontaciones materiales. Por ello, y siguiendo a Bonnet (2007), intentamos no adoptar una “fetichización postestructuralista del discurso” (p. 156) que priorice el análisis de la articulación discursiva dejando en un segundo plano o directamente postergando el carácter antagónico de las relaciones sociales capitalistas. Para el autor, las perspectivas post estructuralistas (en particular la de Laclau) ignoran dicho carácter, que existe independientemente de la articulación discursiva.

Por el contrario, la teoría discursiva de Laclau rechaza la distinción en prácticas discursivas y no discursivas. No niega la existencia de la “realidad material”, sino la dicotomía que se suele plantear entre realidad y pensamiento, “la afirmación de que [los objetos] puedan constituirse como objeto al margen de toda condición discursiva de emergencia” (Laclau E. y Mouffe, Ch. 2004, p. 147). Para los autores, tanto los hechos materiales como su carácter antagónico y contradictorio se constituyen como tales en el plano del discurso. Por ello distinguen ambas categorías y cuestionan el modo en que son utilizadas: una oposición real empíricamente constatable (perteneciente al mundo de los objetos reales), no necesariamente implica una contradicción (perteneciente al mundo de los conceptos), que remite a una lectura dialéctica de ese hecho. De modo que, si aplicáramos esta lógica, se podría decir que “lo antagónico en la lucha de clases es el acto físico por el que un policía golpea a un militante obrero, o los gritos de un grupo en el parlamento que impiden hablar a un representante de un sector opuesto” (p. 166); sin que esas escenas nos remitan necesariamente a una contradicción en sí misma. El plano de la contradicción existiría sólo si esos hechos “son descritos en términos de contradicción lógica” (p.167).

Está de más decir que la lucha de clases no se reduce a esos ejemplos mecanicistas y vulgares: en todo caso la lucha y las contradicciones que se plasman en los ejemplos de Laclau y Mouffe –y que entendemos, van más allá de lo discursivo- las protagonizan sujetos que encarnan personificaciones que son producto de una historia previa de confrontaciones, con objetivos disímiles en esa disputa, y por supuesto, con consecuencias también disímiles y antagónicas para los sujetos involucrados: la realización de una acción de dominación o de poder de un sector sobre otro.

Siguiendo la lógica de los autores, la explotación de la fuerza de trabajo y la acumulación de capital en el modo de producción capitalista conformarían un *proceso histórico antagónico* solo, en todo caso, cuando es enunciado mediante *una lógica antagónica*. Así, que la fuerza de trabajo tenga un valor de uso en el proceso productivo cuyo fundamento es generar un *valor extra* que luego será expropiado, sería contradictorio sólo atendiendo a una lógica dialéctica forzada.¹⁴

¹⁴- Borón (2000) cuestiona las argumentaciones de Laclau y Mouffe con un elocuente párrafo: “las contradicciones del capitalismo se convierten, mediante la prestidigitación ‘postmarxista’, en simples problemas semánticos. Los fundamentos estructurales del conflicto social se volatilizan en la envolvente melodía del discurso, y de paso, en estos desdichados tiempos neoliberales, el capitalismo se legitima ante sus víctimas pues sus contradicciones sólo serían tales en la medida en que existan discursos que lacanianamente

Si bien consideramos que el discurso “contribuye a moldear y construir las relaciones sociales” (como señalan los autores, p. 149) -de hecho los objetivos planteados para estas tesis se acercan a este postulado-, pensamos a los discursos en torno al conflicto como la expresión de las luchas ideológicas que responden a contradicciones y antagonismos del mundo material y que están condicionados históricamente por ellos. Y en ese sentido, en esta investigación tomaremos a los enunciados discursivos como *indicadores de la subjetividad* de quienes participaron directa o indirectamente de un conflicto: las declaraciones –distinguibles analíticamente, pero indefectiblemente relacionadas entre sí-, hacen explícito el campo de disputa ideológico de los enfrentamientos materiales.

La perspectiva de Foucault (1975) en la producción discursiva está ligada a las relaciones de poder que los discursos encierran, es decir, en la *función estratégica* que cumplieron en el momento de ser emitidos. Por ello los considera “acontecimientos” con el mismo valor que cualquier otro acontecimiento producto de la interacción social, que puede ser estimado como un objeto de estudio en la historia, y en tal sentido el autor considera que “somos producto de lo que se ha sido dicho, hace siglos, meses o semanas” (p. 4). Por ello el autor reconoce no dedicarse al aspecto lingüístico o semántico de los discursos, sino en el desempeño que han tenido en un entramado de relaciones de poder.

El carácter histórico que el autor adjudica a los discursos se vincula en parte a la perspectiva que pretendemos trabajar en esta investigación. Coincidimos en la necesidad de revisar los discursos en un sistema de poder, su función como parte de un campo de luchas en el que intervienen aspectos ideológicos. Por tal motivo sí consideramos pertinente detenernos no sólo en el momento en que estos discursos fueron realizados, sino en su contenido, en el sentido que dieron a hechos de conflicto.

En principio diremos que los enunciados y los significados que allí se encierran no son manifestaciones empíricas de conciencias individuales como tampoco están sujetas a leyes naturales; son productos de la interacción social y de su desarrollo histórico. El contenido que adquieren los signos del lenguaje (los significados o conceptos, tomando a Saussure),¹⁵ son inescindibles de las épocas y los entornos sociales en que se producen; y

les hablen. La lucha de clases se convierte en un deplorable *malentendu*. No hay razones valederas que la justifiquen: ¡todo se reduce a un simple problema de comunicación!” (p. 79).

¹⁵- Saussure (1961) diferencia a los hechos de la conciencia (conceptos o *significados*) de los signos lingüísticos (imágenes acústicas o *significantes*) en el proceso de expresión del habla. Este acto en donde por lo menos participan dos individuos, está caracterizado básicamente por un fenómeno fisiológico que es escuchar y transmitir al cerebro el sonido del mensaje emitido por otro individuo, y la asociación psicológica que luego se da al vincular ese sonido a un concepto correspondiente. Vigotski (2007) dirá que “el sonido y el

por ello consideramos necesario detenernos en esos significados, más aún si los consideramos producto de una construcción de conocimiento previo.

En este sentido, Voloshinov (1998) dirá que la lengua como sistema de signos está condicionada por el entorno social en que circula. Los signos existen en íntima relación con los valores sociales, culturales e ideológicos que una comunidad de hablantes le otorga a los conceptos. Así, el lenguaje como un instrumento de acceso al conocimiento y a la comunicación, se conforma como

producto de la actividad humana colectiva, y refleja en todos sus elementos tanto la organización económica como la sociopolítica de la sociedad que la ha generado. (...) Con la ayuda del lenguaje se crean y se forman los sistemas ideológicos, la ciencia, el arte, la moral, el derecho, y al mismo tiempo por medio del lenguaje se crea y se forma la conciencia de cada hombre (Voloshínov / Bajtin, 1998, pp. 23-39).

Los estudios en psicología genética y lingüística hechos por Vigotski (2007) van en esta línea. El psicólogo bieloruso expone, a partir de las primeras manifestaciones verbales de los niños, la comprobación empírica de que un mismo significado puede aplicarse a numerosos referentes. Es decir, se emplean iguales palabras para la calificación de diferentes objetos, aunque con patrones similares (color, textura, tamaño). Ocurre algo similar en el desarrollo histórico del uso de las palabras. Desde un análisis etimológico, el investigador toma como ejemplo el caso de la palabra “tinta” en el idioma ruso (*chiernila*), mientras que el color negro es *chiorni*, formando una misma familia de palabras (p. 237, Nota del Traductor). Ocurre que en un principio las tintas eran de color negro, pero esto no impidió que hoy se siga utilizando esa misma palabra para hablar de tintas de distintos colores, y no sólo negra. ¿Qué queremos decir con esto? Que las palabras tienen una *función indicativa* además de semántica –vinculada en el niño al aprendizaje y conocimiento de su entorno-, que en el lenguaje cotidiano dependen de un contexto histórico y cultural. La transferencia de nombres a objetos nuevos se produce sobre la base de enlaces concretos, dando por resultado significados que pueden variar o sostenerse en el tiempo con respecto a los referentes a los que se aplican, siempre según las circunstancias del uso que culturalmente se le da a esos conceptos.

En tal sentido el autor dirá que “el pensamiento discursivo no es una forma natural y espontánea de comportamiento (...) sino que debemos incluir en esta forma de

significado no están en absoluto vinculados entre sí. Ambos elementos están reunidos en el signo, pero viven en él completamente separados” (p.15). En seguida nos referiremos a esta cuestión y al carácter histórico intrínseco a esta definición.

comportamiento todas las reglas metodológicas que el materialismo histórico establece en relación con todos los fenómenos históricos en la sociedad humana” (pp. 166-167).

Hablamos entonces de una base de “sobrentendidos” –o las “presunciones que el interlocutor alcanza infiriendo la intención del que habla” (Kornblit y Verardi, 2004, p. 119)- que hará posible una comunicación con significados preestablecidos en el tejido social. En este marco, ¿cómo explicar la calificación de la protesta con conceptos denostados moral y políticamente relativos a la “subversión”, “violencia”, “ilegalidad”, “delincuencia”, “ilegitimidad”, “activismo de izquierda”, “guerrilla” o “infiltración política”?¹⁶ Contienen un carácter indicativo específico sobre los conflictos y los actores allí involucrados, y si bien no expresan exactamente el mismo sentido que representaban en otras épocas, sin dudas contienen valoraciones que cumplen una función similar. Dan cuenta de una *sociogénesis* de la conceptualización del conflicto social en el marco ideológico hegemónico en el que se producen. Dicho de otro modo, “el lenguaje no existe independientemente de sus usuarios, y los usuarios sólo utilizan el lenguaje en situaciones históricas concretas” (Raiter, 1999, p. 19).¹⁷

Las caracterizaciones que mencionamos, además, han estado acompañadas de una exigencia, de reclamos por la aplicación de sanciones o castigos sobre quienes “alteraron un orden establecido”. Los estadios primarios del desarrollo moral implica una creencia en una sanción expiatoria -es decir, una justicia retributiva- para poder enmendar un daño. Es decir, se busca aplicar un castigo como respuesta moralmente aceptable a la falta, independientemente de que ese castigo produzca o no una enmendación del daño. El reclamo por reinstalar el “orden” y sanciones, desde ya, no se ejerce en cualquier ocasión y sin motivo alguno, sino en momentos específicos.¹⁸ Como veremos a lo largo de la

¹⁶- Conceptos como “sujetos peligrosos para la seguridad política” o las imágenes demonizadas de la militancia de izquierda nos remiten directamente al *macarthysmo*, fuertemente instalado en el país y en todo occidente en plena Guerra Fría. En febrero de 1950, el senador por Wisconsin Joseph McCarthy denunció una conspiración comunista en el mismo seno del departamento de Estado de EUA. A partir de allí se inició una persecución político-ideológica en la administración pública, los laboratorios de investigación y el ambiente intelectual y artístico. Desde entonces, el término *macarthysmo* es sinónimo de “anti izquierdismo” en nombre de la seguridad nacional.

¹⁷- Por otra parte, distintos significados pueden aplicarse a mismos referentes u objetos, en donde también está presente un condicionamiento histórico/ cultural. De modo que “cuando constatamos que actualmente en la Argentina llamamos ‘inversores extranjeros’ al mismo referente que en la década del ’70 llamábamos ‘empresas imperialistas’, o ‘empresarios’ a los que antes eran ‘patrones’ constatamos un cambio ideológico, un cambio en la concepción del mundo.” (Raiter, 1999, p. 22).

¹⁸- Las inequidades que intentan ser menguadas también pueden ser motivo para que se exija un “reordenamiento” desde algunos sectores sociales. Obviamente, esas exigencias pueden ser halladas mucho antes al período que aquí trabajamos: “algunas desigualdades que antes parecían soportables se sienten luego como un escándalo intolerable. (...) En primer lugar debería tratarse de no seguir estimulando

investigación, los pedidos y reclamos por la utilización de la violencia institucional parece ser la solución a la infracción de leyes o normas: “el único medio de volver las cosas a su sitio es conducir al individuo a la obediencia por medio de una coerción suficiente y sensibilizar la censura acompañándola de un castigo doloroso” (Piaget, 1984 b, p. 173).

En sus investigaciones el autor comprueba que la *heteronomía* -u obediencia unilateral a la autoridad, que no está determinada por la razón del sujeto sino que es ajena al mismo- es paulatinamente dejada de lado por la construcción por medio de la acción de lazos entre iguales, o de *autonomía* en la toma de decisiones. La noción de justicia en torno a los juegos y a diversas situaciones de la vida cotidiana comienza a cambiar entre los 11 y 12 años, cuando los niños establecen un estadio de codificación de las reglas y de toma de conciencia de las mismas: nace la cooperación entre los individuos. Es decir, se descubre que las reglas no son eternas y se comienza a comprender que pueden ser cambiadas. En esa misma investigación el autor hace una observación que aquí retomamos por su pertinencia, y por lo central de su cuestionamiento:

¿cómo es posible que la práctica de la democracia esté tan avanzada en el juego de canicas de los muchachos de 11 a 13 años, mientras que es tan poco familiar al adulto, en muchos terrenos? Es evidente que es más fácil entenderse en ciertos aspectos que en otros, y que las reglas del “cuadrado” [dibujo donde se desarrolla el juego de las canicas M.A.] no excitan tanto las pasiones como una discusión sobre el derecho de propiedad o la legitimidad de la guerra (p. 62).

1.2.1. Los enunciados como indicadores de las representaciones sociales.

Desde la EG, Piaget (1984 a) ha abundado en investigaciones acerca de las representaciones. Diferencia una concepción *objetiva* de los hechos frente al *realismo* a través del cual se los interpreta:

la objetividad consiste en conocer tan bien las ilusiones del yo en el pensamiento de todos los días y las mil ilusiones que de ellas derivan que, para emitir juicios, se empieza por desprenderse de las trabas del yo. El realismo, por el contrario, consiste en ignorar las trabas del yo, y, desde luego, en tomar la perspectiva propia por inmediatamente objetiva y absoluta. (...) Son todas las ilusiones que abundan en la historia de las ciencias (p. 38).

irresponsablemente expectativas de toda clase, que se sabe que no podrán cumplirse. Tendríamos que estar dispuestos a aceptar desigualdades inevitables (de origen genético o del ambiente familiar) y también las convenientes para un mejor ordenamiento social.” Palabras del economista Carlos Moyano Llerena. Publicadas en el diario *La Nación* del 2 de junio de 1984. (Izaguirre, 1984).

¿Cómo aplicar esta diferencia conceptual a los hechos de conflicto social y a sus explicaciones? Producto de las relaciones de poder que también se establecen en las interpretaciones de la realidad, se instala con mayor fuerza un tipo de realismo hegemónico, o sea aquella visión que contiene elementos ideológicos dominantes. Así, los discursos con elementos de las ideologías dominantes son un ejemplo de *realismo nominal* (Piaget, 1984 a, pp. 61-83), es decir, de aquellas lecturas de la realidad que en determinados momentos adquieren *fuerza de verdad*, o la visión naturalizada de la realidad. Estas versiones de la realidad tienden a convertirse en lecturas *objetivas*, o al menos disputan por serlo.

Hasta aquí los conceptos manejados pueden aplicarse perfectamente a un espectro individual, pero es la circulación de inferencias generalizadas y compartidas lo que nos permite hablar de creencias sociales. Como expusimos más arriba, el conocimiento sobre esas creencias generalizadas no necesariamente requiere de una acción directa o de una manipulación, si tenemos en cuenta que la observación de la realidad también puede implicar una acción –una acción cognoscitiva-. La misma opera partiendo de creencias previamente consensuadas, que en sus formas más rudimentarias de conocimiento –los prejuicios, basados en experiencias de pocas personas y que se generalizan bajo la tutela de preconceptos ideológicos- pueden instalarse como verdades. En este sentido entendemos que mediante el discurso como una de las formas de expresión del conocimiento, podemos acceder a la producción de lo que aquí llamaremos *representaciones sociales del conflicto*, que desde ya, también cargan con valoraciones y significados que se tornan hegemónicos.

Ahora bien, en cuanto al estudio de las Representaciones Sociales (RS), uno de los principales exponentes es el psicólogo social Sergei Moscovici, que toma como punto de partida para sus investigaciones la idea de *representaciones colectivas* de Durkheim. A diferencia de estas últimas, que se imponen externamente a las conciencias los sujetos, las RS se producen e intercambian en un proceso comunicativo; por lo tanto son dinámicas, producto de la interactividad entre sujetos y de su necesidad de explicación de la realidad.

Raiter (2002) define a las RS como producto de un proceso de cognición “en la que el sujeto es necesariamente activo, construye imágenes y realiza una operación mental sobre lo recibido, almacenando el resultado de esa operación. Estas imágenes, representaciones del mundo, constituyen las creencias del sujeto sobre el mundo” (p. 12). La noción del

sujeto en una posición *activa* con respecto a la construcción de imágenes se vincula a la noción de *acción* de conocimiento de la realidad.

Como expusimos anteriormente, dichas acciones se realizan en un marco social producto del condicionamiento histórico en el uso de los significados. El autor señala: “las imágenes ya existentes también intervienen en el proceso, condicionando la que será la imagen resultante para un estímulo particular. El papel de las creencias previas en la construcción de las nuevas representaciones es fundamental.” (p. 12).

Hacia una definición de lo que entendemos por RS, retomo el trabajo de diversos autores –van Dijk (1999), Raiter (2002), Moscovici (2003), Castorina y Kaplan (2003), Gaston et al (2003) Petracchi y Kornblit (2004)- para considerarlas como el producto de los actos del pensamiento o la mente de los miembros de una comunidad lingüística –como las distintas expresiones, opiniones y conceptos- que, siendo parte de un entramado de relaciones comunicativas, reproducen simbólicamente una cosa, evento, acción o situación que han percibido y socializado de una manera determinada.

Nos adentramos en el terreno específico de la psicología cognitiva, la cual se basa en el estudio del procesamiento de la información, en percepción e interacción con símbolos y su razonamiento. Si bien no adoptaremos en nuestro trabajo a esta disciplina, consideramos a las declaraciones como *indicadores* de representaciones sociales, como nociones que los sujetos han estructurado en tanto expresión de la interpretación de los hechos de la realidad con cargas valorativas específicas. En la acción de observar y conocer un hecho se plasma la reorganización de nociones previas, que a su vez influirán a las asimilaciones cognoscitivas posteriores.

El concepto de RS se vincula también al concepto teórico que Bourdieu (1998) llamó *hábitus*, como el conjunto de esquemas de obrar, pensar y sentir estructurados en un campo determinado y que tienen carácter perdurable. Los hábitos están condicionados por una historia anterior y están *predispuestos a funcionar como una estructura estructurante*, es decir, se constituyen desde las experiencias a lo largo de la historia de cada sujeto y suponen la interiorización de la estructura social.

Esto no implica afirmar que los sujetos simplemente están determinados causalmente en sus acciones, pues aquellas estructuras incorporadas pueden desplegar una diversidad de prácticas. O, como veremos en los capítulos donde se expondrán los casos estudiados, que existan representaciones perfectamente delimitadas, por ejemplo, según la clase social a la que se pertenezca. La historia de los conflictos sociales nos demuestra que existe un

complejo entramado de alianzas sociales que no puede verse de manera esquemática o cristalizada, pues dependen de diversas variables como los momentos, las condiciones sociales, económicas y políticas y las diferentes fracciones sociales involucradas en un conflicto. No obstante, los momentos de enfrentamiento tienden a dicotomizar las representaciones del mismo, aunque no siempre se dicotomicen de la misma manera. Ahora bien, ¿cómo acceder a estas representaciones, de qué modo construir los indicadores que nos permitan revisar los modos en que se interpretaron los diversos episodios de protesta?

1.3. La prensa escrita y las representaciones del conflicto: la construcción de indicadores.

Según Wodak (2000), la política se basa en el discurso.¹⁹ Aunque la política encierra muchas más dimensiones, coincidimos con esa afirmación que también es aplicable a nuestra investigación en la que queremos indagar el proceso de criminalización de la protesta como política de Estado. La autora señala que para avanzar en estas cuestiones, “la aproximación histórico discursiva tiende a integrar el conocimiento que se tiene más a mano acerca de las fuentes históricas y el marco de los campos sociales y políticos, en el que los ‘eventos’ discursivos están incluidos” (p. 128). En cuanto nuestros objetivos, avanzamos en el análisis de los enunciados de la retórica política²⁰ en un aspecto histórico, para reconstruir lo que llamamos *representaciones sociales del conflicto*.

Para ello fue necesaria una combinatoria de técnicas de análisis cuanti y cualitativas. Los principales soportes empíricos para indagar en los esquemas de interpretación de los hechos de conflicto serán las noticias plasmadas en la prensa escrita –tomando a Verón

¹⁹ Esa fue la premisa en la investigación que la lingüista austriaca Ruth Wodak realizó en el año 2000 para intentar desentrañar por qué el ultraderechista Partido de la Libertad de Austria –conducido por Jörg Haider, reconocido xenófobo– obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 1999. Su propuesta era formular herramientas teóricas para elucidar, a través de la sociolingüística, los elementos constitutivos de la estrategia comunicativa de este partido durante la campaña política que le permitió obtener semejante resultado.

²⁰ Como sistema de recursos y reglas discursivas, la retórica tiene su origen en la Grecia Clásica: era el arte de la persuasión en la lengua hablada. Aquí utilizamos el término para textos escritos, retomando el concepto de persuasión como forma de argumentación que tiene la intención de sentar como algo verdadero o como evidencia suficiente algo que se dice: “el hecho de persuadir conlleva la idea esencial de que existe otro que necesita o debe ser convencido. El que persuade lo hace sobre sus ideales, convicciones, etc., que no necesitan ser de origen propio sino que pueden estar reproduciendo otros valores a los que él a su vez adhiere; así se va constituyendo una cadena persuasiva” (Pardo, 2000, p. 138).

(1987), serán nuestros *soportes significantes*-,²¹ que se sumarán a un registro de entrevistas al cual nos referiremos más adelante.

Este tipo de fuente documental nos permite acceder a un registro de las modalidades de cada episodio de protesta, conocer quiénes protestaban, por qué y contra quiénes lo hacían; además de la relación entre esos enfrentamientos y los discursos y categorías político-ideológicas producidas. Es decir, nos permite adentrarnos en la producción simbólica acerca de qué, cuándo y cómo las personas concibieron –representaron y explicaron- los hechos de conflicto. De modo que con la lectura de las noticias, además de conocer el *contexto* de lo que sucede, también accedemos a la producción de *textos* que describen y explican aquel contexto. Y esas explicaciones manifiestan una comunicación: siempre hay un sujeto (o sujetos) al que se está dirigiendo un mensaje. Se trata de hechos que prácticamente todos los adultos que habitamos en Argentina hemos conocido, estableciendo un *conocimiento social* en gran parte de la población que sabe *de qué se está hablando* cuando se remite a uno de estos conflictos.²²

Pero la sistematización de declaraciones publicadas en la prensa, ¿es adecuada para encaminar un acercamiento a las representaciones sociales del conflicto? Somos concientes de que la fuente documental elegida no es “pura” y está supeditada a una línea editorial con valoraciones propias y roles específicos según distintas coyunturas en las que se pugnan intereses económicos, políticos e ideológicos. Y en este sentido los *multimedia*, y la prensa gráfica como parte de esos emporios comunicativos, no pueden ser concebidos como un universo cabal de las interpretaciones, desde el momento en que nos internamos en una fuente documental que no está exenta de ejercicios de manipulación de información y de conocimiento. Por otra parte, difícilmente obtengamos una genuina y completa información sobre lo que piensan quienes suscriben y publican declaraciones en la prensa gráfica, pues éstas son solo fragmentos de un complejo más amplio de representaciones de la realidad.

En cuanto a la temática que abordamos, sabemos que el rol de los medios masivos de información durante la última década “ha sufrido un fuerte proceso de concentración, ha

²¹- Retomando la distinción sausseriana entre *significante* y *significado*, la prensa gráfica será el soporte o documento en el que se transmite información plasmada en noticias escritas, que continuarán el ciclo comunicativo mediante el acto de lectura y comprensión del texto.

²²- En momentos de alta intensidad del conflicto las caracterizaciones apelan a saberes previos que se combinan con la dinámica propia de la protesta. Raiter (2002) habla de *agenda* para referirse a aquellas representaciones sociales que se activan en un momento dado: ciertos conceptos pasan a ser instalados, debatidos o masivamente reconocidos en un momento dado, formando parte de una *agenda pública* de interpretaciones o explicaciones de la realidad. Para que ello sea posible se requiere un “estado de la cuestión” compartido. “Sin una información que pueda darse por sentada, la noticia no sería inteligible. (...) El estilo de la noticia lleva los indicadores de estas presuposiciones compartidas” (Van Dijk, 1996, p. 113).

sido crucial para la instalación de una suerte de sentido común caracterizado por el rechazo a la protesta piquetera, definida en la actualidad como un “problema” y, a la vez, como un “peligro” para la gobernabilidad del sistema.” (Svampa y Pandolfi, 2004, p. 296).²³ Esta concentración del tipo de información que señalan los autores –y la capacidad de difundirla masivamente- es, sin embargo, una de las características principales que nos lleva a trabajar con estas fuentes.

Hechas las salvedades que mencionamos, consideramos que la utilización de medios gráficos de información nos permite rescatar explicaciones –estadios de conocimiento- de la realidad como tribuna de difusión de interpretaciones, conformando una “radiografía” de un proceso de *aprehensión de la realidad*. Como veremos, la reconstrucción discursiva de los enfrentamientos da cuenta de una disputa de sentidos que pugnan por ser reconocidos como verdaderos, por contener una versión hegemónica de la realidad. Y el soporte documental hemerográfico nos brinda el acceso a diversas voces: manifestantes, dirigentes partidarios y gremiales, funcionarios del gobierno, empresarios, comerciantes, personalidades ligadas a la iglesia, etc.; lo que nos permite construir un corpus de distintas dimensiones con un acceso día a día -un panorama global y al mismo tiempo específico en distintos tiempos y espacios- de los acontecimientos. En tal sentido, el procesamiento de datos que proponemos se acerca a lo que Petracci y Kornblit (2004) definen como *métodos interrogativos*: analizar la explicación que se da de los hechos mediante declaraciones recogidas de soportes gráficos. (p. 95).

Por otra parte, reconocemos que los diarios de circulación masiva no son los únicos núcleos de datos a utilizar para indagar en la percepción del conflicto; ni mucho menos un indicador general que de cuenta de la interacción simbólica o de la asimilación de significados en diversos grupos sociales. Pero consideramos que la prensa escrita se ha convertido “en un medio estandarizado de una gran masa de información de todo tipo, lo que la transforma en una fuente de ‘saberes’ indispensables para el estudio de lo social” (Izaguirre y Aristizábal, 2002, p. 19), además de desempeñar “un papel primordial en la

²³ En una entrevista, la lingüista M. L. Pardo señala la “civilidad expulsora” que establecen los medios de información cuando tratan no ya la cuestión de la protesta social y los cortes de calles y rutas, sino también temas como la pobreza y la marginalidad: “en la prensa hay una construcción muy negativa de la pobreza a través de asociación con la delincuencia, las drogas, la violencia, la locura. En la medida en que hay una construcción tan nefasta de una parte de la sociedad, la civilidad resultante aparece dividida en un nosotros /ellos. En lugar de ser una noción de civilidad contenedora, se produce una civilidad expulsora” (diario *Página 12*, 12-05-2008).

conformación de las cogniciones sociales del público general, por no decir de otras elites de influencia” (van Dijk, 2003 a, p. 232).

¿Podemos considerar entonces al relevamiento de declaraciones publicadas en los diarios como la “materia prima” para reconstruir representaciones sociales del conflicto? Consideramos junto a Gastrón et al (2003) que

hasta el momento, no se ha descubierto ni utilizado ningún instrumento decisivo que permita aproximar la realidad compleja, oculta y subjetiva que constituye una representación, pues se plantea la dificultad de alcanzar un pensamiento social que está en elaboración a través de opiniones individuales (p. 96).²⁴

Desde hace décadas existen investigaciones que utilizan a los medios gráficos como fuente para el estudio de las RS. Se basan en el cuerpo teórico y metodológico de la corriente conocida como Análisis Crítico del Discurso (ACD), en particular lo trabajado por uno de los fundadores, el lingüista holandés Teun Van Dijk. Encontramos en las investigaciones de esta corriente de la sociolingüística una compleja y completa “caja de herramientas” para nuestro trabajo. Se reconoce como una escuela interdisciplinaria, por lo cual no pretende ningún programa estricto para su aplicación (Fairclough, 1998). Parte del marco teórico del ACD está fundado en autores denominados usualmente como “neomarxistas”-en particular los provenientes de la escuela de Frankfurt-, que es aplicado al estudio del discurso en la prensa o en las conversaciones cotidianas, teniendo como objetivo general indagar en las relaciones de desigualdad, el abuso de poder, la discriminación ideológica y racial o la justificación de la violencia evidenciadas a través del lenguaje. Es decir, cómo el abuso del poder y el dominio son practicados, reproducidos -y ocasionalmente combatidos- en diversos textos en relación al contexto en que se producen. El ACD propone una mirada crítica de los discursos como cuerpo empírico, asumiendo que difícilmente se pueda lograr un análisis desinteresado de esas interpretaciones ya que el investigador mismo está cruzado por infinidad de relaciones de poder. Así, los estudiosos que adoptan el ACD consideran que

“Estudiar, por ejemplo, el discurso racista sin adoptar una posición moral acerca del racismo es tan imposible para un analista del discurso como para un sociólogo estudiar

²⁴ - Las declaraciones publicadas en la prensa no escapan a esta contrariedad, entendiendo además que “una de las dificultades radica en la operacionalización de un pensamiento social en proceso de elaboración, que difiera de la suma de las opiniones individuales, dado que las representaciones son captadas básicamente a través de las opiniones” (Petracci y Kornblit, 2004, p. 94, citando a Di Giácomo, 1981).

el levantamiento de campesinos explotados sin tomar conciencia de la naturaleza de su opresión y la legitimidad de su resistencia” (van Dijk, 2000, p. 50).²⁵

Consideramos que las principales pautas metodológicas de esta corriente son pertinentes para el análisis de las declaraciones en la presente tesis:

1. Búsqueda y análisis de actos repetidos, no aislados, de episodios o hechos que son considerados como inaceptables por sectores de poder político y/o económico. 2. Búsqueda de críticas de *personificaciones* antes que de personas, es decir, sujetos que responden a un claro grupo de pertenencia. 3. Focalización en actos que indiquen –y legitimen o sostengan– un abuso del poder y una relación de dominación.

Para construir las unidades de registro dentro de la estructura de la nota periodística, no incluiremos el relato o la crónica de datos “despersonalizados” que generalmente realiza el cronista o el periodista al referirse al lugar o ámbito del hecho, el momento en que ocurrió, posibles razones del hecho, antecedentes, personas que intervinieron, etc. Obviamente, el relato o la crónica de los hechos son rescatados para reconstruir el episodio de protesta, comparando la información con las distintas fuentes trabajadas.

Teniendo en cuenta que los relatos no están exentos de ciertos criterios de selección editorial al reconstruir los hechos, nos detendremos en aquellas expresiones *explícitas* –que también incluyen las notas de opinión y las editoriales volcadas por los periodistas o directores de los medios de información– en pos de construir unidades de registro singulares en la interpretación de los hechos.

La intención de evaluar las opiniones vertidas durante un conflicto en los medios de prensa escrita nos aporta, incluso como muestra documental incompleta, un panorama complejo y rico para rastrear las interpretaciones de la realidad. Nos basaremos específicamente en las frases que otorgan valoraciones, evalúan y caracterizan el conflicto, denuncian o reclaman sobre el tratamiento del mismo. Gráficamente, la utilización de la noticia sería la siguiente (con negrita, las secciones de la noticia que utilizo como observables para el análisis):

²⁵ En una entrevista el autor expresó que “las elites tienen un papel y una responsabilidad especiales. Sus discursos no son privados, sino públicos, y pueden afectar a millones de personas. Una palabra racista de un ministro en un titular de un diario puede hacer más daño que miles de conversaciones informales.” (Teun Van Dijk, *La Nación*, 2-04-2008). Como en las temáticas tratadas en el ACD, los objetivos de esta investigación también están cruzados indudablemente por una motivación política y moral. Reconocer estas dimensiones, sin embargo, no impide que desde el análisis del discurso (o desde la investigación sociológica en general) se pueda arribar a resultados sistemáticos que aporten al conocimiento en las ciencias sociales.



Identificaremos los momentos en que estas expresiones se emiten, sus autores, sus roles sociales o políticos, su filiación político-ideológica, la finalidad -aparente o explícita- de sus dichos, etc. Estableceremos a las oraciones como la unidad empírica, cual “fotografías” de un momento en que un sujeto articula y forma un discurso. Teniendo esto en cuenta, el corpus empírico estará constituido a partir de dos criterios básicos de análisis:

- Sobre la *temporalidad* de las unidades de registro. Trabajaremos sobre declaraciones publicadas durante cada uno de los conflictos, desde que el tema comienza ser publicado en el diario en cuestión hasta que desaparece como noticia. Esto, desde ya, no implica que el conflicto mismo haya comenzado o finalizado según las decisiones editoriales de cada diario. Algunos hechos no son ni siquiera mencionados por la prensa, mientras que en otros períodos se registra una redundancia en el carácter y tenor de las noticias sobre un conflicto en particular. Esto en parte se debe a que la prensa, como “productor textual global” (Zullo, 2002) impone dinámicas y tratamientos específicos de los hechos de la realidad.

Por otra parte, esto no significa que los conflictos aquí tratados hayan adquirido presencia en los medios de información debido sólo a una estrategia comunicativa, y que por eso han sido tratados casi en exclusividad durante un período. Se trata de enfrentamientos que fueron relevantes antes que nada por conformar procesos de luchas económicas, políticas e ideológicas con niveles de intensidad que incluyeron desde el reclamo a las autoridades hasta choques con fuerzas de seguridad. En los períodos en que se desarrollan los conflictos existen *epicentros* que condicionan la difusión de noticias y apreciaciones. Dichos epicentros o hitos del conflicto suelen ser los enfrentamientos materiales, registrando así por lo menos tres momentos: 1- una etapa de ascenso en la frecuencia de declaraciones, 2- un período de “meseta”, generalmente de días o a lo sumo

semanas, en que se publica una gran cantidad de opiniones en momentos en que se producen los enfrentamientos más violentos, y 3- una etapa de descenso de la cantidad de declaraciones. El siguiente es el esquema de relevamiento de declaraciones en los diversos diarios seleccionados, según el período de cada uno de los hechos de conflicto y el día en que se efectuaron las diversas represiones:

	1. Cutral Có y Plaza Huincul (25-06-1996)	2. Neuquén, Cutral Có y Plaza Huincul. (27-03-1997 y 12-04-1997)	3. Corrientes. (17-12-1999)	4. Tartagal y General Mosconi. (10-11-2000)	5. Tartagal y General Mosconi. (20-06-2001)	6. Puente Pueyrredón, Avellaneda. (26-06-2002)
Período analizado	Primera y segunda quincena de junio de 1996	Primera quincena de marzo a segunda quincena de abril de 1997	Segunda quincena de noviembre de 1999 a primera quincena de enero de 2000	Segunda quincena de octubre a primera quincena de diciembre de 2000	Primera quincena de junio a primera quincena de julio de 2001	Primera quincena de junio a primera quincena de julio de 2002
Fuente Hemerográfica	<ul style="list-style-type: none"> • Clarín • La Nación • Página 12 • La Mañana • Río Negro 	<ul style="list-style-type: none"> • Clarín • La Nación • Página 12 • La Mañana • Río Negro 	<ul style="list-style-type: none"> • Clarín • La Nación • Página 12 • El Norte • El Litoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Clarín • La Nación • Página 12 • El Tribuno 	<ul style="list-style-type: none"> • Clarín • La Nación • Página 12 • El Tribuno 	<ul style="list-style-type: none"> • Clarín • La Nación • Página 12 • El Día

- Sobre la *selección* de las declaraciones. Registramos todas y cada una de las declaraciones que fueron reproducidas en los medios de prensa. Para cada episodio tomamos tres diarios nacionales (*La Nación*, *Clarín*, *Página 12*), y dos provinciales en las localidades donde se produjeron los hechos, o cercanas a ellas. En los casos de Salta y de Avellaneda (casos 4, 5 y 6) se tomó solo un diario sumado a los tres nacionales, por una contingencia geográfica: las noticias fueron abarcadas por el diario El Tribuno (principal diario de Salta) y El Día, de la ciudad de La Plata.

Muchas de estas declaraciones se repitieron en distintos medios, pero en la mayor parte de los casos los diarios recogieron una misma declaración de maneras distintas, conformando diferentes estructuras semánticas. Además, estas declaraciones fueron difundidas en localidades distantes y en momentos también diferentes, aunque la diferencia sea sólo de un día. Lo que constituye en definitiva un cuerpo de expresiones con características de tiempo, espacio y contenido singulares.

1.3.1. La sistematización de declaraciones.

Según van Dijk (1996) y Graesser et al (2000), los discursos periodísticos pueden considerados como macroestructuras -lo concerniente a títulos, copetes y encabezamientos de la noticia- que anteceden a varios temas o tópicos llamados *microestructuras*, constituídos por oraciones o *proposiciones*: “una proposición hace referencia a un estado, a un suceso o una acción y frecuentemente tiene un valor de verdad en relación con un mundo real o imaginario” (Graesser et al, 2000, p. 420). Estas pueden tener distintos niveles de abstracción, generándose una jerarquía de proposiciones u oraciones. Dentro del ACD existen una serie de pasos, o *macrorreglas* (van Dijk, 1996), para la reducción de información y el análisis del discurso. Si bien estas reglas se aplican al análisis de notas periodísticas tomadas en su totalidad, las considero pertinentes para nuestra investigación:

1- *Supresión o eliminación*: “Suprimir información que no sea relevante”. En este caso serán los elementos que en la nota periodística excede a la declaración: titular, encabezamiento, relato, descripción de episodios, etc., elementos que utilizaremos para contextualizar los casos. Las unidades de registro serán cada una de las declaraciones – provenientes de uno o varios autores- que contengan caracterizaciones, comentarios, expectativas, evaluaciones, acusaciones, exigencias, reclamos, etc. En la estructura de la nota periodística generalmente encontramos este tipo de enunciados entre comillas (“”), señalando lo dicho por alguien. Cuando son varias las frases provenientes de un mismo autor dentro de una misma nota (y que contienen una misma línea argumentativa), tomaremos todo lo dicho en conjunto, diferenciando los espacios entre las oraciones con (...). Si esa persona emite opiniones en diversas notas o apartados del diario, éstas serán registradas como unidades distintas.

2- *Generalización*: “En segundo lugar, podemos tomar una secuencia de proposiciones y reemplazarlas por una generalización”. En momentos de alta intensidad de la protesta, las declaraciones públicas se presentan como un sistema complejo de disputas simbólicas. Los autores implicados en el conflicto o que simplemente opinan sobre él, dejan de lado las descripciones de la situación y pasan a tomar partido en el conflicto, simplemente porque en un conflicto los discursos también forman parte de la confrontación. Así se generan diversos aspectos que están constantemente interrelacionados, plausibles de ser operacionalizadas en un sistema de categorías y que

aquí diferenciamos con un fin analítico: a) *Demandas y reclamos*, hacia el Estado, exigiendo trabajo, intervenciones políticas, partidas de dinero, el fin de la represión; o hacia los manifestantes, exigiendo que depongan sus actitudes, desalojen las rutas, etc. b) *Calificaciones y caracterizaciones* producidas mayormente por manifestantes y aliados a éstos dirigidos a los agentes políticos y de seguridad del Estado y, en contrapartida, calificaciones dirigidas a los manifestantes vinculados con la ilegalidad, la violencia y la infiltración política.

3- *Construcción*: En este tercer estadio se construye el “suceso total por medio de sus detalles constituyentes”. El criterio es seleccionar todas aquellas frases que contengan determinados vocablos, o siguiendo a Vasilachis de Gialdino (1997), los *nudos* que presentan señales discursivas referentes al conflicto y que conforman la o las ideas centrales de la interpretación.

Dentro de una determinada formación discursiva, los vocablos que configuran los nudos de la red semántica están en el núcleo de los modelos interpretativos de la realidad que emplean los hablantes, los que a nivel de la argumentación configuran sus paradigmas argumentativos entendidos como los *marcos que delimitan las diferentes formas en que los hablantes representan discursivamente la realidad*. (p. 193).

Estos vocablos, nudos o *palabras clave* son las que guían la confección de las categorías y variables correspondientes en el seno de cada declaración.

Como ejemplo, presentamos una declaración que encierra los pasos descriptos: supresión -ya realizada al seleccionar solo las secciones de la declaración que refieran a un conflicto dentro del marco de la noticia-; generalización -el señalamiento en negritas y en subrayado marca las ideas significativas que son recurrentes en distintas declaraciones y que encierran el sentido general de la opinión-; y construcción -la generación de categorías a partir de esas ideas centrales para la posterior codificación y análisis-.

“La gente que continúa estas drásticas medidas está cometiendo un delito, y en esas condiciones no puedo dialogar con la investidura de gobernador. No puedo dialogar con gente que está cometiendo un delito. Si la gente quiere que vaya yo, va a tener que volver a su casa y despejar la ruta.” (24-6-96, Felipe Sapag, Gobernador de Neuquén. Diario *La Mañana del Sur*.)

Caracterización: Manifestantes vinculados a lo delictivo.

Reclamo: exhortación a abandonar o terminar la protesta.

La mayoría de las declaraciones que interpelan distintas dimensiones sobre la protesta suelen ser concisas, figurativas y directas, es decir, contienen un lenguaje accesible con cargas valorativas claras.²⁶

Se podría decir que en el acto de identificación de quienes emiten los mensajes, “los nombres no tienen el propósito de ser señales de expresión personal, sino identificaciones secundarias de una voz institucional” (van Dijk, 1996, p. 113, citando a Lindegren-Lerman, 1983). Sin embargo, en estos casos son numerosas las oportunidades en que se publica el nombre y la función de la persona que emite la opinión. Inclusive los periodistas firman notas de opinión y vuelcan de manera explícita la interpretación de los hechos que los convoca (en estos casos, incluimos al periodista o editorialista del diario como emisor de interpretaciones).

En el relevamiento que proponemos analizamos las partes individuales (las declaraciones) dentro de un conjunto más complejo de interpretaciones, por ello sabemos que corremos el riesgo de perder de vista la imagen general del problema ateniéndonos a sus partes. Tal como en el análisis químico del agua encontramos moléculas de oxígeno e hidrógeno, completamente distintas entre sí y distintas al elemento que juntas conforman. Es por eso que la propuesta es indagar lo más exhaustivamente posible en las enunciaciones y en los momentos en que fueron dichas, además de los hechos materiales que conformaron el “escenario” de esos discursos.

Las categorías construidas a partir del análisis de las declaraciones serán sistematizadas a través de un software de análisis cuantitativo. En este caso será el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) que nos permitirá generar un “mapa” de magnitudes de frecuencia y el cruzamiento de variables combinando la información sobre los autores de las declaraciones, sus contenidos y períodos de emisión.

El recurso cuantitativo que planteamos nos acerca a otra corriente de análisis discursivo como lo es el Análisis de Contenido, a través del cual se busca “descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un texto escolar, un decreto ministerial, etc.” (Gómez Mendoza, 1999, p.2). Esta corriente analítica también concibe la cuantificación de datos con el fin de establecer

²⁶- Algunos autores plantean que desde el ACD “las unidades de análisis no son las pequeñas unidades gramaticales, como las oraciones” (Kornblit y Verardi, 2004, p. 113). Sin embargo, considero pertinente aplicar este modelo a las declaraciones como unidades dentro de las noticias o entrevistas, pues si bien se presentan como frases u oraciones, su contenido (es decir, el significado global o tema que encierran aquellas frases) es la base para la construcción de observables.

frecuencias y la sistematización de contenidos del discurso como unidades de significación en las que podemos incluir a las frases. Si bien la aparición de ciertas palabras será el núcleo de nuestro análisis, no nos adentraremos en la contabilizar el número de veces que aparecen o el porcentaje que representan las mismas dentro de una nota periodística o de un período en particular, uno de los elementos clave en la técnica cuantitativa del Análisis de Contenido. De todos modos y como hemos visto, nuestro análisis estará basado en la construcción de unidades de registro, variables y sus categorías correspondientes, y una codificación de los enunciados que hace posible la sistematización y cuantificación de la información.

1.4. Las entrevistas.

Además de la construcción de los observables fundamentados en los enunciados publicados en medios gráficos, realizamos un registro de fuentes primarias conformado por entrevistas. A partir de los postulados teóricos más arriba expuestos, partimos de la premisa de que la existencia de ciertos *hechos* y su *conocimiento* o interpretación (su construcción como observables) son instancias indefectiblemente ligadas, pero también distinguibles analíticamente. En tal sentido, el objetivo general de la realización de entrevistas a los manifestantes de los casos trabajados fue en primer lugar indagar en la reflexión luego de la acción. Y en segundo lugar, interpelar a los mismos con las interpretaciones que se hicieron en los momentos precisos del conflicto y que se publicaron en los diarios, es decir, las unidades de registro de la investigación. De este modo, el camino elegido en esta instancia intenta una concordancia con el trabajo realizado con las fuentes hemerográficas, donde intentamos la reconstrucción de los hechos sobre la base de la información contextual para luego abocarnos a la interpretación de los actores allí involucrados.

Nuestra premisa en las entrevistas fue la búsqueda de “saturación” en la información, es decir, la redundancia en los datos obtenidos para llegar a un momento en que sustantivamente la información fuera similar a la obtenida en entrevistas anteriores, aseguramos un colectivo de voces que relatan un hecho social antes que apreciaciones individuales. Para ello utilizamos la técnica de “bola de nieve” (snowball), que permitió el contacto con informantes clave que dieron la llave para conocer a las personas que fueron entrevistadas, que a su vez ofrecieron otros contactos. Es decir que el total de los

entrevistados y entrevistadas no fue establecido a priori mediante cuotas sino que surgió a medida que los sucesivos contactos y búsquedas lo posibilitaron. En tal sentido, el hecho que algunas hayan sido individuales y otras grupales no tiene que ver con una planificación previa: en numerosas ocasiones una entrevista individual se transformó espontáneamente en grupal, cuando familiares, amigos o compañeros de trabajo o militancia que también habían intervenido en los hechos, se sumaban al relato y contaban su propia historia. Esto, lejos de entorpecer la entrevista, resultó de una riqueza invaluable pues motivaba a nutrir el relato y que éste no esté condicionado sólo por las preguntas que fueron realizadas.

Dentro del gran arsenal disponible en cuanto a los tipos y modos de entrevistas, utilizamos un cuestionario semi estructurado con preguntas abiertas que apelaron a los recuerdos sobre las vivencias de los hechos desde la perspectiva del actor. Para ellos nos centramos en un modelo que no era exactamente rígido con un seguimiento controlado de preguntas y respuestas, como tampoco absolutamente libre, en el que el rol del entrevistador se limita simplemente a señalar ejes muy generales. Tomamos a Valles (2007) para decir que realizamos entrevistas de tipo *estandarizada programada* por poseer las siguientes características: “1) que el *estímulo* sea el mismo para todos los encuestados; 2) que sea posible redactar todas las preguntas de modo que tengan el *mismo significado*; 3) que el orden de las preguntas deba ser el mismo para todos para conseguir un contexto equivalente” (p. 24).

La técnica de la entrevista cualitativa si bien no habilita la formulación de conclusiones generales o standarizadas –al menos en el camino metodológico adoptado en esta tesis-, sí nos permitió un acercamiento de mayor profundidad a la percepción de distintas experiencias de los manifestantes en cada uno de los conflictos. Aunque en las declaraciones registradas en los diarios también se alzan voces de los mismos manifestantes, acceder a entrevistarlos nos abrió las puertas a una serie de conocimientos que apelando sólo al análisis hemerográfico hubieran quedado velados.

Las entrevistas fueron realizadas en distintas etapas, privilegiando la necesidad de conocer a cada protagonista en los espacios donde habían participado. La cantidad de personas tampoco fue estipulada de antemano y estuvo supeditada al grado de saturación de información que se iba obteniendo, dependiendo de la magnitud de cada protesta, el tiempo que se mantuvo y los hechos acontecidos. El itinerario fue el siguiente:

a) En el mes de febrero de 2007 en las ciudades de Neuquén, Cutral C6 y Plaza Huincul contactamos a quienes formaron parte de las protesta de vecinos en junio de 1996 y abril de 1997, y a algunos docentes de la huelga de marzo de 1997. Fueron 14 entrevistas (9 entrevistas individuales y 5 grupales) a un total de 21 personas.

b) En el mes de noviembre de 2007 en la ciudad de Corrientes se entrevistaron a 18 personas en tres entrevistas grupales y nueve individuales

c) En septiembre de 2008 en las ciudades de Tartagal y General Mosconi contactamos a quienes habían participado de las revueltas de noviembre de 2000 y junio de 2001. Fueron un total de 12 personas en donde hubo una sola entrevista grupal y diez individuales.

d) En el mes de marzo de 2009 entrevistamos a 7 personas (una entrevista grupal y cuatro individuales) pertenecientes a algunos de los movimientos y organizaciones pol3ticas que participaron del corte del Puente Pueyrred6n. Fueron realizadas en distintas localidades de la zona sur del Conurbano Bonaerense y en la ciudad de La Plata.

Como se3alamos m6s arriba, el trabajo estuvo dirigido en primer lugar, a la reconstrucci6n de los hechos a partir del recuerdo de antecedentes, motivos y objetivos de cada episodio, la descripci6n de los hechos m6s sobresalientes, sus consecuencias. Lo que nos transporta al mundo de la memoria de los entrevistados, que lejos de ser algo estanco o cristalizado, est6 en permanente construcci6n y dinamismo.²⁷ Estos elementos est6n en 3ntima relaci6n con los relatos autobiogr6ficos y con los detalles particulares de las experiencias vinculadas al conflicto (el empobrecimiento, la desocupaci6n o la insuficiencia salarial, la decisi6n de la confrontaci6n, la represi6n, el balance resultante); y con los recuerdos construidos luego de a3os, condicionados por vivencias y experiencias tambi6n distintas en cada caso. Esto nos permiti6 acceder con cada entrevistado a los “hitos o marcas, ocasiones cuando las claves de lo que est6 ocurriendo en la subjetividad y en el plano simb6lico se tornan m6s visibles, cuando las memorias de diferentes actores sociales se actualizan y se vuelven ‘presente’” (Jelin, 2005, p. 232)

²⁷ - En este sentido realizamos una “etnograf3a de las memorias” (Auyero, 2004 a, p. 209) sobre los conflictos. El autor se3ala que hacer esta distinci6n es crucial puesto que “la investigaci6n no se realiz6 durante la protesta (...) sino 6 a3os despu6s de acontecida, centr6ndose por lo tanto en sus recuerdos”. Los casos analizados retoman esta premisa, con la diferencia que aqu3 se trata de una cantidad variable de a3os transcurridos desde los episodios.

En segundo lugar, además del relato de los hechos, la motivación principal en estas entrevistas consistió en confrontar la memoria de los entrevistados con las declaraciones que se realizaron tanto sobre los episodios de protesta como sobre ellos mismos por parte de sus contendientes políticos (representantes del poder ejecutivo, judicial, etc.) y eventuales aliados (comerciantes, iglesia, otros dirigentes políticos) que hayan colocado a las protestas en un lugar de condena. Aplicamos esta técnica usualmente utilizada en las *entrevistas focalizadas* porque consideramos relevante registrar la reflexión ante las mismas palabras que fueron publicadas durante el conflicto, antes que con una pregunta que se pudiera haber realizado desde el rol de entrevistador. La idea es que mediante el mismo tipo de estímulo de interrogación aplicado a todos los entrevistados se obtendría un grupo de respuestas que permitirá acercarnos al grado de conocimiento y explicación tanto sobre las acciones propias –la intervención en la protesta- como ajenas, –los diversos agentes del Estado en su intervención tanto física como simbólica-.

A partir de estos criterios, la información obtenida mediante las entrevistas conforma un universo sustantivamente distinto al realizado con las declaraciones recogidas de los medios de información. Pues desde las entrevistas no sólo accedemos a un conocimiento sobre las luchas pasadas, sino también sobre lo que dijeron e interpretaron los representantes del poder político acerca de esos mismos episodios. Tomando a Jelin (2005), consideramos que el pasado reciente es una parte central del presente, y en tal sentido, las identidades negativas adjudicadas desde el poder político junto con las experiencias vividas en las protestas -y las identidades forjadas allí-, permitirán acceder a un conocimiento de la realidad muchas veces alternativo a las voces oficiales, enriqueciendo la comprensión de un espectro de subjetividades en disputa.

Hasta aquí hemos intentado dar un marco teórico y metodológico general sobre los diversos aspectos -lingüísticos, ideológicos, discursivos- utilizados para el análisis de las representaciones del conflicto. A continuación nos referiremos a la situación económica y política del país, en un proceso de creciente desigualdad política y económica en el que se registraron los enfrentamientos materiales e ideológicos.

Capítulo 2

Expropiación económica, instituciones democráticas y conflicto social.

En este capítulo trataremos el marco económico en el que se desarrollaron los casos que analizaremos. Nos referiremos también a los aspectos institucional y político del régimen²⁸ y del conflicto que se suscitó en él.

Nuestro punto de partida será revisar la progresiva eliminación de las políticas económicas proteccionistas y desarrollistas aplicadas durante el denominado “Estado de Bienestar” en el ámbito local: el Estado -principalmente durante la década de 1940- como gestor del mercado de trabajo y de las inversiones públicas, asumiendo además la responsabilidad de promover diversas medidas de seguridad social a la población. En la bibliografía sociológica reciente encontramos que la desarticulación de este modelo es la principal razón para comenzar a explicar los niveles de desocupación y marginalidad –y los consecuentes conflictos- en los últimos veinte años en el país.

Quizás el inicio de aquel modelo de distribución social debamos encontrarlo en el “crack” bursátil de 1929, a partir del cual el gobierno de EUA rescata las ideas del economista inglés John M. Keynes, quien dio forma al programa que colocaría al Estado como principal motor en la tarea de redistribuir ingresos y fomentar el desarrollo capitalista en occidente. El proyecto conocido como “New Deal”, bajo la presidencia de Roosevelt apuntaba a contrarrestar las consecuencias devastadoras de la crisis de los años 30, a las que luego se sumaron las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.

Las políticas sociales aplicadas por el Estado en este período no revertían la relación antagónica entre capital/trabajo, sino que la reformulaban conformando “un sistema de estratificación en sí mismo, una fuerza activa en el ordenamiento de las relaciones sociales.” (Esping Andersen, 1993, p. 44). El mismo autor señala que dicha reestructuración económica está directamente relacionada al auge del movimiento obrero organizado en todo el mundo, impulsado con el triunfo de la Revolución Soviética. El

²⁸ - Diferenciamos por un lado el concepto de *régimen*, y por otro a los distintos gobiernos que lo administran y se establecen en él. Izaguirre (2006 b) señala que “*regimen de dominación*, es el conjunto de las instituciones orgánicas del modo productivo del capital y de los poderes del Estado y la sociedad, articulados por el sistema normativo y jurídico- el “orden” social- , y *gobierno*, como el uso de lo orgánico por el conjunto de funcionarios electos y no electos.”

sindicalismo y los partidos políticos también afectaron de forma decisiva las demandas sociales y políticas en la primera mitad del siglo XX. En tal sentido, el economista estadounidense James Cypher (2006) señala que

las ideas de Keynes fueron tomadas por algunos economistas que consideraban que la manera de salvar al capitalismo era por medio de una mayor intervención del Estado en la producción y circulación de las mercancías. Para Keynes, la mejor manera de evitar el socialismo cuando el capitalismo estaba en crisis era que el Estado gastara mucho, ya que en tales circunstancias el déficit no era un problema, porque el motor del capitalismo iba a volver a funcionar. (p. 9).²⁹

En Argentina la aplicación de las políticas económicas keynesianas coincide con el paulatino abandono del modelo agroexportador, mantenido en parte durante la conocida “década infame” inaugurada con el golpe militar de septiembre de 1930. Uno de los hechos más sobresalientes en la política económica de los primeros años de esa década fue el pacto Roca-Runciman³⁰ bajo el gobierno fraudulento de Agustín P. Justo, indicador de la alianza de la burguesía agrícola-ganadera y de las fracciones pro británicas del Ejército que gobernaban el país.

Sin embargo, la crisis de 1930 se tradujo en un fuerte retraimiento de la demanda y de los precios de bienes primarios, lo que produjo la disminución de la producción agrícola dejando a miles de empleados y peones rurales desocupados. Allí comenzó a registrarse un verdadero éxodo del campo a la ciudad, decenas de miles de personas que arribaron y poblaron las primeras “villas miseria” en la ciudad de Buenos Aires. Pero además de la baja en la exportación de bienes primarios también disminuyó la importación de productos manufacturados, lo que obligó a un desarrollo paulatino de una industria liviana de

²⁹- En tal sentido, la denominación de “Estado de Bienestar” -que habitualmente se utiliza para referirse a esa etapa del desarrollo capitalista- posee un carácter ideológico, dado que el núcleo de sus políticas económicas consistió en primer lugar en privilegiar las estrategias de acumulación de los sectores económicamente dominantes. Los primeros indicios de políticas públicas implementadas por un Estado moderno se pueden registrar en la Alemania de Otto von Bismarck, a fines del siglo XIX, cuando se crea la institución del seguro social. Allí se dio origen a la moderna política social que, a diferencia de las legislaciones sociales provenientes del feudalismo -dirigidas a paliar rudimentariamente la supervivencia de miserables y mendigos-, considera en mayor medida al proletariado como base fundamental del desarrollo capitalista antes que al pobre o desposeído.

³⁰- Así se conoció el pacto realizado por el entonces vicepresidente de la Nación Julio A. Roca (h.) y el presidente del British Board of Trade, Walter Runciman. En plena crisis del '30, Gran Bretaña priorizó su importación de carnes provenientes de las naciones que conformaban el *Commonwealth* británico (en particular Canadá y Australia). El gobierno argentino, con el objetivo de no afectar la balanza comercial y asegurarse un mínimo de exportación cárnica a Gran Bretaña, aceptó que los frigoríficos exportadores fueran británicos en su enorme mayoría y mantener libres de aranceles aduaneros a sus mercancías importadas, entre otras medidas claramente beneficiosas para el país del norte. Ideológicamente, el pacto fue producto de una sugestiva concepción: la Argentina era considerada por el vicepresidente “una parte integrante del Reino Unido”.

productos sustituibles que comenzó a nutrirse de la mano de obra desocupada proveniente del campo.³¹

La industrialización de alimentos, bebidas, cuero y otras ramas que suplían la demanda de productos externos fue acompañada por el despegue de la industria metalúrgica y textil. La conocida ISI, o Industrialización por Sustitución de Importaciones ya estaba en marcha provocando que en 1941 “el aporte industrial al Producto Bruto Interno haya superado al registrado en la actividad agropecuaria, convirtiendo ese sector en el núcleo económico de mayor peso en la estructura productiva nacional” (Rapoport et al, 2007, p. 230). A pesar de la escasa inversión y de la imposibilidad de importar insumos a causa de la Segunda Guerra Mundial, la naciente industrialización fue afirmándose.

El Primer Plan Quinquenal (1947-1951) del gobierno peronista institucionalizó aquel modelo de fomento de la industria liviana que no requería grandes inversiones en bienes de capital proveniente de las potencias industriales. Motorizar la demanda interna de bienes de consumo mediante el impulso de la redistribución del ingreso fueron algunos de los ejes centrales de la política económica y social de esta etapa. Así se aumentaron los salarios mínimos y se reformaron las leyes laborales con el establecimiento de la seguridad social, el aguinaldo, etc. -objetivos que habían sido impulsados con la lucha de los sectores asalariados preponderantemente comunistas, anarquistas y socialistas en las décadas anteriores-. Una importante política de obra pública y la estatización de empresas de servicios -como los teléfonos y la red ferroviaria- y de industria de base -siderurgia, química, desarrollo tecnológico- evidenciaban el nacimiento de un “Estado empresario” que condicionó la economía de las décadas subsiguientes.

Quizás la primera crisis de importancia que tuvo el modelo keynesiano aplicado en el país fue la de 1949, con una ola inflacionaria disparada por el crecimiento del consumo interno, el aumento de precios de los insumos para la industria y el estancamiento de los salarios -lo que generó una serie de huelgas obreras-, una balanza comercial negativa cuando se retomaron las importaciones de los países centrales y una consecuente baja en la reserva de divisas.

La respuesta a corto plazo fue un programa de disminución relativa del gasto público y el fomento del ahorro para “enfriar” de la economía doméstica. A largo plazo, el

³¹- Izaguirre (2006 b) señala a partir de datos tomados de Murmis y Portantiero (*Estudios sobre los orígenes del peronismo*, pág. 50, nota 13) que de los 58.000 empresas inscriptas en 1941 en el Registro de la Dirección General de Estadística, los establecimientos industriales fundados antes de 1930 ocupaban el 70% del total de la mano de obra empleada y fabricaban más del 80 % del valor de la producción.

“segundo Plan Quinquenal” pretendía reducir el condicionamiento externo sobre la economía, para lo cual se planificó un desarrollo en infraestructura e industria de base y el fomento de la inversión extranjera, tratando de superar aquella primera etapa “fácil” de la sustitución de importaciones basada en la producción de bienes de consumo.

Tras el sangriento golpe de Estado al segundo gobierno de Perón, se ejerció una nueva reestructuración de la economía: las fracciones más poderosas de la burguesía impusieron el retraimiento del intervencionismo estatal, el fomento de la producción agropecuaria y la exportación de bienes primarios y una política de aumento de impuestos y tarifas públicas; medidas en detrimento de las conquistas obreras. Para 1956 la distribución del ingreso había virado en un sentido contrario al que se había impuesto con los gobiernos peronistas, nuevamente a favor de la burguesía agro-exportadora.

Asumiendo que el subdesarrollo económico de Argentina se basaba en un intercambio desigual en el comercio internacional, el desarrollismo de Frondizi intentó revitalizar el ahorro interno y el proyecto de atraer inversiones externas con el fin de fomentar una industria pesada en el país. Sin embargo, no se trató de un proyecto estratégico de largo plazo, y las transnacionales que se instalaron -en particular las automotrices- no constituyeron un área de exportación y de generación de divisas sino un polo productivo interesado en la oportunidad de rebajas arancelarias y en fomentar un consumo interno en un mercado con un poder adquisitivo todavía considerable. Hacia el final del gobierno de Frondizi estas inversiones se desactivaron e influyeron sobre la cotización del dólar que, para evitar que se devalué, fue mantenido por el Banco Central con una constante reducción de reservas.

Tras el nuevo golpe de Estado y la presidencia de Guido –signada por el conflicto militar iniciado en el gobierno de Frondizi entre *azules* y *colorados*, estos últimos incondicionales antiperonistas-, se aplicó una “ortodoxia” liberal que permitió la fluctuación libre del mercado cambiario. Lo que generó una casi inmediata devaluación de la moneda y una consecuente reducción del salario real y un ajuste en el gasto público.

Con el peronismo proscripto y una elección con magros resultados, la administración de Illia (1963-1966) se caracterizó por aumentar el gasto público como dinamizador de la economía, el control de precios sobre la canasta familiar y una redistribución del ingreso hacia los sectores asalariados que representó el 45,8 % del PBI hacia el final de este gobierno radical (Rapoport et al, p. 453). Durante este período se registró por un lado una

fuerte escalada de reclamos sindicales liderados por la CGT, y por otra parte la presión de los sectores antiperonistas que veían la posibilidad de retorno del líder exiliado.

El golpe de Estado de Onganía y la “Revolución Argentina” impuso una política fiscal restrictiva y una “racionalización” del aparato administrativo de la mano del liberal y ex ministro de economía de la “Revolución Libertadora” Adalberto Krieger Vasena, Ministro de Economía a partir de diciembre de 1966. Se promovió una industrialización claramente beneficiosa a las transnacionales y en detrimento de las pymes, se abrió nueva etapa de devaluación de la moneda y liberalización del mercado cambiario mediante renovados y estrechos lazos con el Banco Mundial y el FMI.

Las resistencias al modelo se unificaron en una alianza de distintos sectores asalariados y de la pequeña burguesía que incluyó la conformación de agrupaciones armadas: “los sectores populares se muestran dispuestos a la lucha abierta de calles, y son acompañados por la incipiente formación de grupos político-militares con proyección nacional, de origen cristiano, peronista y marxista en distintos puntos del país” (Izaguirre 2006 b, p. 5). La respuesta represiva se instaló rápidamente en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, y uno de sus objetivos fue el ataque directo a la Universidad, considerada la cuna de las ideas comunistas y contestatarias, fundamento de la subversión.

El aumento constante de las contradicciones entre capital y trabajo fueron el escenario del ascenso de una clase obrera movilizada a fines de la década de 1960 y comienzos de 1970. El auge de esas movilizaciones obreras, estudiantiles y populares se vio plasmado en las acciones colectivas más importantes de la época (los llamados “azos”). El Cordobazo y más tarde el secuestro de Aramburu (mayo de 1970) significaron el fin del régimen de Onganía, además del inicio de una nueva etapa del conflicto social. Fue sucedido por un corto período de Levingston y luego por Agustín Lanusse, quien condujo la etapa final de la dictadura procurando una restitución institucional mediante la participación de partidos políticos en elecciones libres. Antes de ello, en pleno crecimiento de la actividad de las agrupaciones armadas y del activismo político contestatario, la Masacre de Trelew en agosto de 1972 se llevó a cabo como un intento más del disciplinamiento del régimen sobre una fuerza social y política de carácter revolucionario en pleno proceso de construcción.

La corta experiencia de la presidencia de Cámpora y de las fracciones más progresivas del peronismo en 1973, confluyó en un intento de reactivar la economía mediante una burguesía nacional con vocación industrial que forjaría un pacto social con el movimiento

obrero. Podríamos decir que el comienzo del fin de este proyecto se dio con el enfrentamiento armado de Ezeiza, el cual abrió un período de guerra civil abierta.³²

Con las fracciones más reaccionarias del peronismo instaladas en el poder luego del virtual golpe de Estado a Cámpora, los sectores económicamente dominantes comienzan a imponer una valorización financiera –la expansión del capital oligopólico en desmedro de la producción de bienes industriales-.³³ En este marco, una de las primeras medidas que toma el Ministro de economía Rodrigo a mediados de 1975 es una devaluación de la moneda y el aumento de las tarifas y de los combustibles, que suben de un día para otro un 70% en promedio.³⁴ La situación se agravó con el intento de reducción de paritarias negociadas con la CGT, lo que llevó a un ciclo de huelgas en todo el país.

Este período el alza del conflicto social comenzó a “resolverse” sistemáticamente mediante la eliminación de miles de militantes y cuadros sociales. Se realizó mediante la consolidación de las organizaciones paramilitares³⁵ que, avaladas por el Gobierno y la dirigencia sindical aliada al mismo, asumieron la tarea de eliminar a quienes tenían una identidad ideológica y política “peligrosa”.

³²- “Los hechos armados” de Juan Carlos Marín da cuenta de la magnitud de los enfrentamientos de este período: son contabilizados alrededor de 8000 hechos de enfrentamiento armado en 3 años.

³³- En el plano internacional la denominada “crisis del petróleo” (1973) puede ser considerada a nivel mundial como el inicio de otro cambio de modelo económico que comenzó afectando a las políticas públicas en países como Gran Bretaña o EUA.

³⁴- El “Rodrigazo” del 4 de junio de 1975 es indicador de las reformas económicas que beneficiaban al capital financiero más concentrado. A través de un drástico ajuste, se devaluó el peso con relación al dólar en más del 100 % y la inflación llegó a los tres dígitos. Los productos de primera necesidad registraron un aumento sideral de precios, generando una situación crítica en los sectores asalariados. “La corta y decisiva gestión ministerial del Dr. Celestino Rodrigo (junio-julio), con su política del shock y la consiguiente contracción de la demanda interna, trajo aparejada una profunda contracción en el nivel de actividad industrial del segundo semestre que, por su magnitud (-6,8%) revirtió el crecimiento moderado que se había verificado en la primera mitad del año (2,1%)” (Khavisse et al, 1989, p. 103-104).

³⁵- Además de la “Triple A”, se conformaron otros grupos paramilitares (Comando Rucci, Comando Libertadores de América, Comando Gral. Viola, etc.) que operaron bajo el gobierno justicialista, luego de la renuncia de Cámpora (13-07-1973) y con mayor intensidad luego de la muerte de Perón (1-07-1974). Algunos antecedentes históricos de estas organizaciones paramilitares son la “Mazorca” de mediados del siglo XIX, brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora del gobernador J. M. de Rosas. Ya durante las primeras décadas del siglo XX, la agrupación rompehuelgas “Asociación del Trabajo” y la “Liga Patriótica”, se conformaron durante el gobierno de la UCR. Esta última organización, que operó con el aval de un gobierno elegido democráticamente, tuvo una participación activa en la represión de obreros conocida como la “semana trágica” de enero de 1919, durante la cual también se ejecutó un verdadero pogromo (del ruso *pogrom*: matanza, masacre). Las bandas armadas ocuparon las calles de la ciudad expoliando sinagogas y bienes de la comunidad judía, agrediendo y violentando a sus miembros. Se trataba de inmigrantes judíos en gran parte provenientes de Rusia, y fuertemente vinculados a la Revolución Bolchevique. Más tarde, grupos conservadores afines al gobierno de facto de Uriburu constituyeron la “Legión Cívica Argentina” al comienzo de la década 1930. Con la excusa de que la nación se encontraba –una vez más- bajo la amenaza de las ideologías de izquierda, esta organización paramilitar se encargó de reprimir y amedrentar a trabajadores y sindicatos.

Ante lo que se concibió como una creciente amenaza anticapitalista, se afianzaron las tácticas y estrategias de exterminio que se sistematizarían posteriormente en los años de la dictadura. Es el caso del llamado “Operativo Independencia” realizado durante 1975, verdadero ensayo de guerra legal interior en la provincia de Tucumán. Durante este período los representantes de las instituciones democráticas otorgaron sentido a la violencia estatal, intentando legitimarla y construyendo la justificación *subjetiva* sobre la *objetividad* de los hechos.³⁶ Dicho de otro modo, en el período 1973-76 se registra lo que Marín (2003) llama “acumulación originaria del genocidio”, impulsada mediante las instituciones democráticas y “con la ley en la mano”,³⁷ promulgando las acciones represivas de fuerzas militares regulares:

el secuestro y la desaparición comenzaron siendo los dos instrumentos típicos que fueron desplazando y subvirtiendo las formas institucionales tradicionales de la represión policial legítima del sistema. Se convirtió en una política sistemática de aniquilamiento de los cuadros más combativos del movimiento popular, cualesquiera fueran sus orientaciones políticas. (Marín, 2003, p. 67).

Las presiones ejercidas por una alianza entre distintos sectores de la burguesía y las FF.AA. se consumaron en la dictadura iniciada en marzo de 1976, la cual abortó el proceso de industrialización por sustitución de importaciones y reinstaló el esquema agro exportador y una profunda reforma en beneficio del sistema financiero. Con la intención de frenar la inflación se redujo el salario real con una consecuente retracción del consumo en el mercado interno, se aumentó la presión tributaria y los precios de servicios públicos, además del despido de empleados estatales y el comienzo de algunas privatizaciones.

³⁶- En otra investigación (Artese, M. y Roffinelli, G., 2007), observamos que de un total de 195 declaraciones publicadas en el diario *La Gaceta* de Tucumán referidas al Operativo Independencia desde el 1-1-1975 hasta el 24-3-1976, más del 90 % de las mismas tuvieron como finalidad apoyar a las fuerzas del régimen y caracterizar de manera negativa al “enemigo subversivo”, esté o no vinculado a organizaciones armadas. Se trataba de manifestaciones provenientes de funcionarios de los tres poderes del Estado tanto nacional como provincial, además de dirigentes partidarios y sindicales, industriales y empresarios, miembros de la comunidad eclesiástica y educativa. Esto nos permite hoy no “proseguir con el engaño de atribuir el exterminio sólo a la dictadura militar, que tuvo el aval de la dirigencia política y del aparato jurídico, amén de otras complicidades”. (Izaguirre, 2005, p. 44).

³⁷- En septiembre de 1974 el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que fue aprobado en 48 horas por ambas cámaras legislativas y sancionado el 28 de septiembre de 1974, como ley n° 20.840 de “Seguridad Nacional”, que reprime “los intentos de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”. (Boletín Oficial del 2-10-1974). Luego, el decreto 261 del 5 de febrero de 1975 habilitaba legalmente al comando del Ejército a ejecutar acciones de aniquilamiento en Tucumán. Estos fueron los primeros pasos dirigidos a amparar a las FF. AA. para que tuvieran injerencia plena en conflictos internos, no sólo en Tucumán sino ya a nivel nacional: el 6 de octubre de 1975, se emitió el decreto N° 2772: “Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Continuó más extensa y sistemáticamente el proceso de aniquilamiento de toda disidencia de carácter anticapitalista iniciado previamente al golpe militar:

El golpe militar de marzo de 1976, la disolución de la CGT, la intervención a los sindicatos, la suspensión de las actividades gremiales –castigadas con una represión hasta allí desconocida, tanto por sus formas como por su intensidad-, y la supresión del derecho de huelga, suponen una modificación sustantiva de las pautas de funcionamiento del mercado laboral, reguladas, ahora, bajo el objetivo de ‘disciplinar’ a la clase obrera y anular, por completo, aquella presión sindical. (Aspiazu, Basualdo, Khavisse, 1986, p.108).

En pleno proceso de sometimiento del campo popular, el nivel de marginalidad y deterioro social de los trabajadores fue incrementándose registrando un aumento del plusvalor absoluto y relativo mediante una incipiente flexibilización laboral que generaba máxima jornada de trabajo y sobreocupación de los empleados, con un salario que a largo plazo se vería disminuido tanto en términos nominales como reales.³⁸ Paralelamente y mediante una reforma financiera, la economía se subordinó a la especulación sobre altísimas tasas de interés –que significó una retracción en la inversión productiva y el giro del caudal de capitales al sistema bancario-, incrementando la participación de este sector privado en la economía y minimizando el rol del Estado. De este modo, “la redefinición de la relación, de por sí desigual, entre el capital y el trabajo tuvo tal magnitud que sólo puede entenderse como una *revancha oligárquica* sin precedentes históricos en el país, acorde con el profundo resentimiento que guardaba la oligarquía nativa hacia la clase trabajadora argentina.” (Basualdo, 2006, p. 117).

2.1. El bienestar fugaz del capitalismo.

Los vaivenes en los diversos proyectos económicos en el último medio siglo, producto de un enfrentamiento constante de intereses contrapuestos, finalizaron con el triunfo del modelo neoliberal, iniciado a mediados de la década de 1970 e impuesto completamente a fines de la década de 1980. Sus características principales fueron la

³⁸- Aspiazu, Basualdo, Khavisse (1986) analizan el proceso de centralización de capitales y de flexibilización laboral iniciado en la década de 1970 y 1980. Como ejemplo de este proceso: suponiendo que en 1974 los indicadores base de la industria manufacturera se igualen en 100, para 1984 los obreros ocupados de esta industria pasan a 65.7 y el salario real a 82.7, mientras que la productividad de la mano de obra es de 137.6 y la relación de horas trabajadas/obrero de 105.9. Estos datos permiten inferir un mecanismo intensivo de extracción de plusvalor –tanto la prolongación del tiempo de trabajo como de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo- que es apropiado por el capital. (p. 102).

reestructuración en la producción basada en manufacturas agro-industriales de bajo valor agregado destinadas a la exportación y una apertura del mercado financiero basada en créditos y préstamos que funcionaron como sostén de esa reconversión industrial y tecnológica. Una inversión externa directa dirigida principalmente a las empresas privatizadas y a la intervención en capitales locales (Piva, 2007, pp. 76-80) terminaron por consolidar a un sector dominante de la burguesía y el desplazamiento en primer lugar de la clase obrera en general y luego de las fracciones de la burguesía industrial local.

Las principales medidas que sellaron el cambio de modelo fueron La Ley de Reforma del Estado de agosto de 1989 y la Ley de Convertibilidad sancionada en marzo de 1991. En medio de las escaladas hiperinflacionarias de 1989 y 1990, la “Reforma del Estado” fue votada en el Poder Legislativo Nacional y sancionada el 17 de agosto de 1989 como Ley N° 23.696. Declara “en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional”. Su artículo 11 reza: “Facultase al Poder Ejecutivo Nacional para proceder a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones a obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo, o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional.”³⁹

Mientras que se abrían las puertas a capitales nacionales y extranjeros para la intervención en la prestación de empresas estatales, la Ley de Convertibilidad establecía la paridad cambiaria entre el peso y el dólar y se liberalizaba el funcionamiento del Banco Central, reorientando una vez más el norte de la economía al capital financiero internacional.

Algunas de las empresas estatales que entraron en el plan de privatización habían llegado hacia 1989 a un punto crítico tanto en la eficiencia del servicio que ofrecían como en su estado patrimonial, situación provocada durante la última dictadura militar que preparó el terreno para su virtual remate. Gerchunoff y Canovas (1995) señalan que los capitales privados adjudicatarios en la reforma del Estado adquirieron tanto empresas de servicios (transportes, distribución de agua, gas, electricidad y teléfono) como de industrias

³⁹- Boletín Oficial del 23 de agosto de 1989. El período tomado en esta investigación y los casos de protesta aquí analizados están en absoluta relación con el modelo de acumulación impuesto desde estos sectores dominantes. Cuatro de los seis conflictos que serán tratados (Neuquén en 1996 y 1997 y Salta en 2000 y 2001) están directamente vinculados con la venta de YPF, una de las empresas estatales liquidadas con la ejecución de estas políticas económicas.

de base (extracción de petróleo y producción de sus derivados, siderurgia y minería), transformándose en monopolios sin competencia alguna. Por otra parte, las empresas industriales nacidas con el proceso de sustitución de importaciones debieron someterse a la apertura comercial con un cambio fijo que en definitiva era desfavorable para su proceso productivo. Con lo cual se redujo la mano de obra ocupada en pos de una “reestructuración” y “racionalización” de recursos humanos. Ante la falta de infraestructura productiva que permitiera competir con mercados del exterior, también se expulsó mano de obra de pequeñas y medianas empresas. De modo que esta reconfiguración del capital público en privado, provocó un “incremento de significación en la tasa de desocupación, una mayor precarización de la mano de obra ocupada y, de resultados de ello, una creciente regresividad en materia de distribución del ingreso”. (Duarte, 2002, p. 89).

Según Basualdo (2006), estas medidas se pueden considerar la manifestación cabal de un conflicto entre las fracciones dominantes del capital: la *oligarquía diversificada*⁴⁰ y los organismos internacionales de financiamiento como el FMI y el BM, enfocados en “sanear” el creciente endeudamiento externo. Lo que se tradujo en una pronunciada pauperización de los sectores asalariados: “esas pugnas fueron la manera específica en que la valorización financiera profundizó el predominio del capital sobre el trabajo, porque los sectores dominantes avanzaron en la distribución del excedente y de la riqueza acumulada socialmente.” (p. 284).

Sin embargo, los primeros indicadores económicos posteriores a la aplicación de la Ley de Convertibilidad arrojaron, según Lo Vuolo y Barbeito (1998), una tendencia positiva: “aunque se disminuyeron salarios y se expulsaron planteles, la dimensión del problema se diluyó por la recuperación del poder de compra debido a la caída del impuesto inflacionario, al tiempo que los trabajadores formales vieron facilitado su acceso al crédito, lo cual les permitió vivir por encima de los ingresos.” (p. 195). Pero el contexto económico que denotaba un aparente ciclo virtuoso entraría en crisis a partir de 1995. El “efecto tequila” fue una de las primeras variables macroeconómicas que influyeron.⁴¹

⁴⁰- Así denomina el autor a las fracciones del capital de distinto origen y grado de diversificación: capitales de origen extranjero instalados desde fines del siglo XIX con destacada presencia en la producción y propiedad agropecuaria -que además controlaban múltiples empresas industriales- junto a familias terratenientes locales y a grupos económicos estrechamente vinculados a capitales extranjeros de carácter financiero. Esta fracción empresaria se diferenció por sus orígenes e intereses de las subsidiarias extranjeras instaladas en el país en la segunda etapa de la ISI (post Segunda Guerra Mundial), con intereses en la industria, el agro y otras actividades económicas (pp. 30-31).

⁴¹- En pocos días se devaluó el peso mexicano (el 40 % de su valor), se registraron fugas de capitales y la suba de la tasa de interés por parte del Banco Central de ese país, entre otros indicadores. En Argentina, la

Con la segunda presidencia de Menem la tendencia recesiva de la economía se convirtió en depresión abierta. El empleo se consolidó como una realidad cargada de incertidumbre y en pocos años se registró una desocupación del 20% de la PEA. De modo que la contracción del mercado de trabajo arrojó una *superpoblación relativa* de una magnitud comparativamente superior a décadas anteriores.⁴² Como integrantes fundamentales en la aplicación de estas medidas, los organismos internacionales de financiamiento otorgaron préstamos al Estado nacional -aumentando el rango de endeudamiento- para pagar las indemnizaciones de los llamados “retiros voluntarios” de decenas de miles de empleados de las empresas privatizadas.

También se profundizaron las reformas educativas comenzadas en la dictadura: el traspaso de la educación primaria a las administraciones provinciales y municipales ahora se continuaba con la educación secundaria. A esto se sumó el desmembramiento de las obras sociales, lo que generó nuevos problemas en el área de la salud pública. Las cajas de previsión social también fueron modificadas, impulsando el sistema de “capitalización”, que terminó decantando en nuevas incertidumbres ante el aumento de la desocupación y del trabajo en negro. Además de aumentar la inestabilidad, se bajaron los costos de despido y de seguros por accidente: “con el argumento de que el gasto social en Argentina es elevado e ineficiente, se generó un proceso de deslegitimación gradual de las instituciones de política social mediante la erosión de insumos claves para su funcionamiento” (Lo Vuolo y Barbeito, 1998, p. 199).

Este plan en el que los sectores del capital concentrado pasaron a dominar no sólo al conjunto de las clases subordinadas sino a las fracciones menos poderosas de la burguesía,

semejanza entre los modelos implementados por el gobierno de Salinas como por la administración de Menem, provocó que en el país se afectaran los fondos públicos y el financiamiento externo, entre otras consecuencias.

⁴²- En sus Manuscritos de 1857-1858, Marx (1987) ya caracterizaba a la población excedente como producto del desarrollo capitalista: “no es sino en el modo de producción fundado en el capital, donde el pauperismo se presenta como resultado del trabajo mismo, del desarrollo de la fuerza productiva del trabajo. (...) La invención de trabajadores excedentes, vale decir, de hombres privados de propiedad y que trabajan, es propia de la época del capital” (p. 111-114). En base a estos estudios, José Nun (1969) hablará de superpoblación relativa cuando una porción del trabajo excedente “deja de ser necesario para el capital, [y] es el trabajo necesario para el trabajador el que se vuelve excedente y, por lo tanto, el trabajador mismo pasa a ser superfluo” (p. 191). Su proporción es fluctuante y dependiente de las relaciones de producción hegemónicas, y se diferencia de la masa marginal, que forma parte de la población afuncional o disfuncional para el funcionamiento del sistema. La masa marginal compone así la población sobrante, de “bajo grado de integración del sistema debido a un desarrollo capitalista desigual y dependiente que genera una superpoblación relativa no funcional a las formas productivas hegemónicas” (p. 225). Los miles de planes de trabajo precario otorgados por el Estado indican esa porción de población marginal que, aunque en menor proporción a la segunda mitad de la década de 1990, aún subsiste y no es integrada por el actual modelo de acumulación. Lo que Marx (1992) señalaba como pauperismo oficial o “el peso muerto del ejército industrial de reserva” en el capítulo XXIII de “El Capital”, Tomo I.

se llevó a cabo con una adecuada justificación ideológica. El Estado fue caracterizado como un gran fondo público de empleo ineficaz, una maquinaria obsoleta con empresas superpobladas que debían ser “ajustadas”.

Ese andamiaje político-ideológico divulgado por la administración menemista y fundamentado por los organismos de financiamiento internacional tenía múltiples aristas. Una de ellas era la afirmación de que los problemas cada vez más profundos de pobreza e indigencia se seguirían acentuando siempre y cuando no se aplicaran las pautas económicas que estos organismos recomendaban. Bajo el llamado “Consenso de Washington” y la “teoría del derrame”,⁴³ el Gobierno nacional aseguraba que los índices de desocupación eran sólo un paso necesario para la recuperación económica que inevitablemente llegaría.

Este conjunto de ideas dominantes tuvo fuerza de paradigma al punto que se lo denominó críticamente *pensamiento único*. Fueron medidas económicas y políticas impuestas durante un gobierno votado masivamente en dos ocasiones. Este dato no es menor: se estableció lo que podríamos llamar, rescatando a Bonnet (2007 a), una *hegemonía menemista*, que no fue sino una hegemonía neoconservadora que combinó “tópicos provenientes de la tradición liberal con otros provenientes de la tradición conservadora tamizados a través de la tradición discursiva populista autóctona” (p.255).

Aquellas políticas desarrolladas en el Palacio de Hacienda como resultado de negociaciones entre funcionarios políticos, organismos de financiamiento internacional y representantes de grandes grupos económicos nacionales y extranjeros significaron en definitiva la concentración de capitales y una cada vez más inequitativa distribución de la riqueza; lo que acentuó los índices de pobreza, indigencia, desocupación y subocupación.

2.2. Capitalismo, democracia y conflicto social.

⁴³- Se llamó “consenso de Washington” al conjunto de medidas económicas desarrolladas a fines de la década de 1980 que gozaban del total respaldo del departamento del Tesoro de EUA., de organismos multilaterales y de algunos circuitos académicos donde el estudio de la economía estaba dirigido a sustentar intelectualmente estos postulados. El “derrame” sobrevendría luego de que la economía de un país creciera, y de que el mismo mercado provocara un desborde de aquella acumulación de riqueza sobre el resto de la sociedad. El neoliberalismo en Latinoamérica toma una forma acabada con estas medidas que en realidad consolidaban las relaciones de desigualdad y explotación capitalista. Claro está, se trata de medidas que son aceptadas a través de un “consenso” en el que sólo participaron los sectores económicamente dominantes internacionales y locales.

Sabemos que el orden social capitalista está fundado en una profunda desigualdad originaria, una violenta y sistemática expropiación social que fue necesaria para que pudiera desarrollarse como modo de producción hegemónico.⁴⁴ Desde este punto de partida, no sería arriesgado afirmar que la confrontación entre sectores sociales antagónicos es por antonomasia el hecho sobresaliente del proceso de consolidación de dicho sistema.

Con respecto a los modos de producción precedentes, el capitalismo supone cambios profundos no sólo económicos sino también en el orden político, cultural y por supuesto, en las dimensiones jurídico-administrativas de los Estados. Así, el *orden* que sostiene las desigualdades materiales -frente al *desorden* de las luchas por mayor igualdad o equidad- fue conseguido no sólo mediante el enfrentamiento físico sino con el aval de leyes y normas; es decir, con un andamiaje jurídico e ideológico no menos desigual que el sistema económico que ampara.

Meiksins Wood (2000) señala que una de las principales características de ese proceso fue la diferenciación entre el ámbito político y económico con respecto al proceso productivo. En las sociedades precapitalistas las relaciones de propiedad y las relaciones de poder se diferencian menos: el poder coercitivo del apropiador se ejercía tanto en el proceso productivo como en otras esferas de la vida (relación amo - esclavo, o señor feudal y siervo). A diferencia de los sistemas productivos medieval o esclavista, en el capitalismo la coerción está diversificada: con la separación entre los medios de producción y los productores -y la gradual transformación del productor en relación de servidumbre a trabajador formalmente libre-, se gestaron otros espacios de coerción política que fueron conformando su propia especificidad. Señala Meiksins Wood que

la esfera política en el capitalismo tiene un carácter especial porque el poder coercitivo que respalda la explotación capitalista no está manejado directamente por el apropiador y no se basa en la subordinación política o jurídica de un productor al amo. Pero siguen siendo esenciales un poder coercitivo y una estructura de dominio, aunque la libertad y la igualdad del intercambio entre capital y fuerza de trabajo significa que el 'momento' de coerción está separado del 'momento' de apropiación. (p. 37).⁴⁵

⁴⁴- Marx llamó a la etapa primigenia de este proceso "acumulación originaria" o primitiva, que podemos ubicar entre los siglos XVI y XVII. La violencia desplegada fue siempre sustentado con un marco legal, destinada a disciplinar a las comunidades expropiadas de sus medios de vida, que iban desde los azotes y la mutilación hasta la muerte, incluyendo la posibilidad de esclavizar por un lapso de tiempo determinado a aquellos que vagabundeaban sin permiso. Esto no quita que posteriormente hayan existido "contratos" y consensos, pero se trata de un esquema de igualdad sólo dado en un plano "formal", y que implica una instancia previa de dominación/violencia.

⁴⁵- Esta diferenciación de momentos -y el rol que adopta el Estado como aparato de coerción social- se puede ver en numerosos episodios históricos: si nos detenemos en la Europa occidental del siglo XIX, uno de los hechos de enfrentamiento social de mayor envergadura lo conforman las revoluciones obreras de 1848, rápida

Aunque desde ya, las formas coercitivas también integran otras esferas de la vida social más allá del ámbito jurídico del Estado y de sus fuerzas de seguridad, es decir, de su aparato coercitivo. Desde la teoría marxista del Estado –en particular desde la perspectiva de Althusser y Poulantzas- la escuela, los periódicos, los partidos políticos, los sindicatos, las instituciones culturales, las iglesias, etc. son instrumentos donde se reproducen las clases sociales, su relación de explotación intrínseca y la ideología del Estado capitalista. Constituyen –desde una perspectiva gramsciana- las “trincheras” de la sociedad civil que otorgan legitimidad a las acciones de la sociedad política.

Pero el Estado moderno no podría sostenerse simplemente con una reproducción benéfica sólo para los sectores dominantes a costa de represión y control constante a los sectores subordinados -a menos que nos refiramos a un régimen fundado en el terror-, y por ello los ámbitos públicos o privados también representan “intereses universales”. Así, el Estado se establece como hegemónico –nuevamente, en términos gramscianos- a través del consenso. Desde ya, no se trata de una imposición definitiva y mecánica sino fluctuante y relativa a las tensiones y relaciones de fuerza establecidas entre las clases o sectores sociales antagónicos. El camino al cambio y superación de estas sociedades occidentales será, siguiendo al autor, desde una *guerra de posición* en las trincheras de la sociedad desde las cuales se transformen paulatinamente las voluntades, el sentido común y el modo de pensar del conjunto de la población.

Este *centauro*⁴⁶ que combina en su cuerpo lo bestial de la coerción y la violencia con la racionalidad humana del consenso, varía su composición dependiendo de las circunstancias en el proceso de construcción de hegemonía. La coerción estatal –que excede el uso del monopolio legal de la violencia y abarca aspectos económicos, ideológicos y políticos- es aplicada con un basamento de consenso mínimo. Bonnet (2007

y violentamente reprimidas. En El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx (1995) describe cómo las distintas fracciones política y económicamente dominantes francesas se alían en un “partido del orden”, impulsando distintas medidas restrictivas para el proletariado ante el creciente temor a las exigencias socialistas. La burguesía y la dirigencia política cerraron filas en desmedro del propio sistema de gobierno constitucional y parlamentario: se abolió el sufragio universal y se apoyó la figura monárquica de Luis Bonaparte, que se impuso mediante el golpe de Estado en 1851. Veinte años más tarde, la Comuna de París de marzo a mayo de 1871 encarnó un proceso de luchas mucho más intenso en el cual los trabajadores pasaron a conformar un pueblo en armas, un enemigo interno que mereció un castigo institucional aún más brutal que el ejercido durante 1848. Luego del avance de las tropas de Versalles sobre París, y una vez derrotados los comuneros, los fusilamientos dejarían más de 20.000 muertos en pocos días.

⁴⁶- Se puede hallar esta conceptualización política cuando el autor se refiere fundamentalmente a los estados parlamentarios y su “hegemonía revestida de coerción” (Gramsci, 2003, p. 125-126 y 157-163). Bonnet (2007) rescata esta concepción para aplicarla al caso argentino (cap. 4).

b) sugiere como ejemplo del ejercicio de coerción/consenso a la violencia hiperinflacionaria de comienzos de la década de 1990, violencia que “no puso en juego los mecanismos de persuasión ideológica asociados con la noción de consenso, aunque sustentó un ceñido consenso alrededor de la convertibilidad” (p. 120).

¿Podríamos pensar que la represión del conflicto y de las protestas sociales en esta etapa de “hegemonía neoconservadora” también precisó de un *consenso represivo* basado en mancillar el carácter político, moral e ideológico de los sectores subordinados? Recurriendo a la historia del conflicto social podemos observar que cuando las fracciones subordinadas se presentan como parte de un proceso en el que los “cuerpos dóciles” dejan de serlo, se recurre al monopolio de la violencia no como exceso, sino como único modo de “enderezar conductas”.⁴⁷ Los sujetos se convierten entonces, aunque sea temporalmente, en “no ciudadanos”, y cargan con otras diversas categorías cercanas a la idea de peligrosidad o desviación que apuntan a deslegitimar su presencia en un proceso de confrontación. Revisemos entonces cual es el carácter que toman esos antagonismos concretos en el capitalismo democrático local.

2.2.1. El Estado y el “desorden social” en el escenario local.

Retomando lo dicho más arriba, hoy es evidente que las políticas de acumulación capitalista “neoliberal” aplicadas en el país durante la década de 1990 fueron el marco de una reconfiguración en el campo del conflicto social. ¿Qué relación se puede trazar entre el funcionamiento concreto de las instituciones democráticas del Estado y el conflicto social en el marco del desarrollo del capitalismo en Argentina?⁴⁸ Entendiendo que los índices

⁴⁷- En su obra *Vigilar y Castigar*, Foucault (1989) señala que los dispositivos de control minucioso del cuerpo en la modernidad “fabrica” sujetos disciplinados. Se podría pensar que durante los procesos de conflictividad social algunos de los términos que Foucault describe acerca de la disciplina sobre los cuerpos sometidos (p. 142), se invierten. Ante un amotinamiento o rebelión social se *disminuyen* las fuerzas del cuerpo en términos económicos de utilidad y productividad, y se *aumentan* esas mismas fuerzas en términos políticos de *desobediencia*.

⁴⁸- Con respecto al *carácter concreto* en las categorías de análisis, Marx (1990) dirá en su Introducción General a la crítica de la Economía Política de 1857 que “la población es una abstracción si de lado, por ejemplo, las clases de que se compone. Estas clases son, a su vez, una palabra vacía si desconozco los elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo el trabajo asalariado, el capital, etc. (...) Si comenzara, pues, por la población, tendría una representación caótica del conjunto y, precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples: de lo concreto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples.” (p. 39). Retomamos esta conclusión

crecientes de pobreza y marginalidad son parte integral del capitalismo, retomamos a Marín (2003) al señalar que

la pobreza no es sólo una consecuencia sino también una necesidad de la reproducción social del modo de producción de los capitalistas. Es uno de los instrumentos que utiliza el ordenamiento capitalista para bajar los salarios de la fuerza de trabajo ocupada: contraponiéndola y amenazándola con la pobreza de la fuerza de trabajo desocupada” (p. 120).

Cercano a esta lectura, Borón (2000) dirá –siguiendo las tesis de Marx en *El Capital*– que la expresión neoliberal del capitalismo se basa en “un modelo económico y social que cuando ‘funciona bien’ genera desocupación (...) y niveles crecientes de pobreza, desigualdad y polarización social y empobrecimiento.” (p. 128).

Nun (2001) señala que “la dominación capitalista afronta una tensión inevitable cuando debe articularse con un régimen político democrático; y no logra hacerlo si no se establece un *compromiso*” (p. 49). Un modo de *producción* basado en la desigualdad necesariamente debe tener un andamiaje político e ideológico que le dé legitimidad y que permita su *reproducción*. Parte de ese compromiso en los Estados modernos radica en la representatividad electoral: existe un contrato básico entre la población y sus gobernantes para que estos administren y conduzcan el sistema político y económico. Según David Held (1991), en esas condiciones se basa un sistema democrático: “la capacidad de los ciudadanos-votantes que son capaces de hacer responder a los que adoptan las decisiones políticas; y, en segundo lugar, el *output* de los que toman las decisiones y sus electorados, en último término, el pueblo en un territorio delimitado” (p. 361). Para Tilly (1995), la democracia es una forma particular de ciudadanía, ya que combina una cantidad relativamente amplia e igualitaria de ciudadanos con la posibilidad de ser consultados por las políticas del Estado, y de ser protegidos de su acción arbitraria. El autor considera en esta definición general de las democracias que existen cuatro elementos fundamentales (Igualdad, amplitud ciudadana, consulta vinculante y protección de acciones arbitrarias del Estado) que combinados, resultan diversos escenarios analíticos de formas de gobierno.⁴⁹

epistemológica que elabora Marx para revisar las *instituciones democráticas* en torno al desarrollo *concreto* de la protesta social.

⁴⁹- Estos escenarios van desde las tiranías, donde estos cuatro elementos no se registran, hasta las democracias plenas, donde por el contrario se dan todos estos elementos. En el medio quedan distintas combinaciones, como las formas oligárquicas de dominación, las democracias tutelares, las democracias corruptas, etc. (pp. 11-17). Estas tipologías son utilizadas para pensar la experiencia democrática moderna en Europa (específicamente en Inglaterra).

En realidad deberíamos referirnos, siguiendo a Borón (2000), al *capitalismo democrático* si quisiéramos dar mayor especificidad al concepto y retirar el velo que nos presenta que el derecho, las leyes, la libertad de expresión y de elecciones libres son aspectos “naturales” de las democracias modernas. No se trata simplemente de una adjetivación, sino de comprender que esos aspectos en realidad “no bastan para eclipsar, neutralizar ni mucho menos disolver la estructura intrínsecamente antidemocrática de la sociedad capitalista (...) que gira en torno a la incesante reproducción de una fuerza de trabajo que debe venderse en el mercado como una mercancía para garantizar su supervivencia” (p.163). Es por ello que las consecuencias de la desigualdad económica y social no se salvan a través de actos electorales, y la supuesta correspondencia ordenada entre Estado y ciudadanos votantes se quiebra en la realidad cotidiana.

En cuanto al concepto de ciudadanía, debemos caracterizarlo en el contexto de desarrollo e imposición de determinadas formaciones económicas, políticas y sociales que venimos exponiendo. El “ciudadano” es una abstracción producto de relaciones de poder que lo presentan con un grado de “igualdad ante la ley”, o que sólo remite al acto electoral que periódicamente se ejerce en las democracias modernas. Retomo lo señalado por J. C. Marín (1981) al referirse a la ciudadanía como

un operador del poder de la burguesía, un ámbito que no sólo aísla y produce la ruptura de ciertas relaciones de clase entre los individuos, sino que constriñe a la docilidad de esos individuos. La ciudadanía forma parte del proceso expropiatorio del poder de los cuerpos (p. 62).

Como manifestación histórico-concreta, el capitalismo democrático es en sustancia un sistema de desigualdad. Aunque persiste la idea de que la variación en “la correcta aplicación de las garantías democráticas” está supeditada a los intereses del poder económico. Nun dirá en este sentido que

la democracia representativa sólo está resultando viable dentro de límites muy estrechos que los políticos deben negociar continuamente con los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, para los cuales este régimen aparece por ahora como más confiable que tantas dictaduras militares que terminaron por revelarse arbitrariamente, inconsultas y difíciles de controlar (p. 152).

Sin dudas los regímenes democráticos pueden llegar a ser muy diversos, y en esa diversidad no podemos obviar las disputas en el interior del poder político y económico por distintos y a veces contradictorios planes de gobierno. Pero mientras nos ubiquemos en los

sistemas actuales, señalemos que esas *negociaciones* entre políticos y grandes grupos económicos sucumben en los períodos en los cuales las demandas sociales exceden la capacidad de maniobra de los gobiernos. Cuando la reproducción de la desigualdad se ve cuestionada y esas demandas se tornan “peligrosas” para cierta estabilidad política -la llamada “governabilidad”- o económica, las condiciones de coerción se extreman hasta en la más representativa de las democracias. La relación entre la imposición de un modelo económico y coerción estatal incluso puede llegar al límite de las dictaduras, que si bien pueden ser más *difíciles de controlar* para los grupos económicos, fueron las que consolidaron los cimientos del modelo de acumulación que hoy llamamos “neoliberal” –no sólo en nuestro país- en la década de 1970.

En cuanto a las democracias actuales, De Sousa Santos (2005) habla de “fascismo societal”⁵⁰ para entender la desigualdad inherente a un sistema capitalista que ya no necesita sacrificar gobiernos democráticos y que expulsa a grandes sectores de población a la marginalidad económica y a la exclusión de cualquier tipo de contrato social. Una de las formas de fascismo societal que describe Santos es el del *Estado paralelo* (p.30) en el que se utiliza la ley de manera arbitraria y parcial, produciendo el marcado de *zonas civilizadas* y *zonas salvajes*, estas últimas, donde el Estado actúa sin ningún respeto por el derecho.

Por la violencia institucional desplegada y por ciertas “irregularidades” que más adelante describiremos, ¿podríamos ubicar a los casos que estudiaremos en esas *zonas salvajes* que el autor menciona? Sean zonas o períodos, la ejecución arbitraria o parcial de las *garantías republicanas* por parte del Estado es una constante y no una anomalía, pues las relaciones de fuerza de una sociedad no se subordinan a las leyes o al derecho. Todo lo contrario, en la historia del conflicto social la legalidad siempre fue compatible con la irrupción violenta institucional, sea cualquiera la magnitud de ese conflicto. Convertir al Estado en un *novísimo movimiento social* –la transformación de la actual democracia representativa en una de tipo participativa (De Sousa Santos, 2005, pp. 49-88)- se convierte en una meta poco probable con un Estado que limita o directamente elimina el desarrollo de las fracciones subordinadas políticamente y expropiadas económicamente mediante el uso legal del monopolio de la violencia.

⁵⁰- Se trata de un término controvertido, al encontrar un régimen de dominación -una expresión de los Estados capitalistas- expandido en el tejido social, es decir, *un fascismo que está entre nosotros*. Sin embargo, el concepto permite pensar la expansión en la sociedad de conductas autoritarias y la intolerancia política o ideológica aunque sea de manera periódica.

Capítulo 3

Hacia un estado de la cuestión. La protesta social, los cortes de ruta y sus caracterizaciones.

En este capítulo presentaremos sucintamente lo que consideramos los principales ejes en las investigaciones recientes sobre movimientos sociales y acciones colectivas de protesta relacionados a los cortes de ruta. Intentaremos una lectura crítica y dejar sentada nuestra perspectiva para luego poder abocarnos al estudio de casos.

Continuando con nuestra exposición, diremos que la década de 1990 nos muestra una intensa, heterogénea y compleja historia de insubordinaciones populares ante la profundización de un modelo económico puesto en marcha con la expropiación masiva de bienes sociales. ¿Cómo han sido inscriptas, desde las ciencias sociales, esas diversas formas de rebelión en esta instancia del capitalismo local en donde el movimiento piquetero y los cortes de ruta ocuparon un lugar de indiscutido protagonismo?

Son numerosos los trabajos e investigaciones que intentan dar respuesta o al menos analizan estos interrogantes, abarcando distintas dimensiones de análisis hasta hoy bastante desarrolladas. Algunos de estos trabajos refieren a diversos enfrentamientos en la última década, en los que se analiza:

a) la penalización e intervención legal y represiva del Estado en cada uno de ellos (CELS 2000 y 2003; Svampa y Pandolfi 2004, Gargarella 2004, Verdú 2009); y la estigmatización mediática además de su judicialización y criminalización (Maneiro 2004; Scribano y Schuster 2004; Díaz Muñoz 2005, Scribano 2009);

b) los distintos movimientos y acciones colectivas de protesta, sus objetivos y modos de participación en distintas provincias del país y en el conurbano bonaerense (Lapegna 2000; MTD Anibal Verón 2003; Svampa 2003, 2005, 2006; Svampa y Pereyra 2003, 2005; Giarraca y Wahren, 2005, Petruccelli 2005; Giarraca 2007);

c) los enfrentamientos y los sujetos que en ellos participan y la periodización, carácter y formas de estas luchas, que incluyen la relativización de las hipótesis sobre los nuevos repertorios y nuevos movimientos de protesta (Ibarra 2000; Maceira y Spaltemerg 2001; Iñigo Carrera y Cotarelo 1998, 2000, 2001 y 2003; Klachko 1999, 2002, 2003 y 2008;

Oviedo 2004; Acuña et al 2004; Cotarelo 1999, 2004 y 2005 a; Iñigo Carrera 2005 y 2007; Izaguirre 2006 a; 2006 b; Gómez 2007; Inda y Duek 2007; Benclowicz 2007 y 2009);

d) la constitución de identidades individuales y colectivas en las acciones de protesta de diversos movimientos sociales, los *nuevos repertorios de la acción colectiva* y la *estructura de oportunidades políticas* que se abrieron en esos procesos (Schuster y Pereyra 2001; Giarraca y Bidaseca 2001; Barbeta y Lapegna 2001; Scribano y Schuster, 2001; Auyero 2002, 2003, 2004 a, 2004 b; Svampa 2003; Delamata 2004; Massetti 2004a, 2004b, Schuster 2005; 2007; Wahren 2009).

En primer lugar proponemos un análisis concreto de la protesta durante la década de 1990. Cotarelo e Iñigo Carrera (2004) contabilizan un total de 7643 hechos en el período 1993-2001, en el cual distinguen tres momentos con alzas y bajas en la magnitud del conflicto. Veamos la proporción protestas signadas por el corte de ruta en el total de episodios:

Cuadro 1: Argentina 1993-2001. Frecuencia de protestas y cortes de ruta.

	Período 1 ascendente (1993-1997)	Período 2 descendente (1997-1998)	Período 3 ascendente (1999 -2001)	Total
Hechos de protesta	1090	1299	5254	7643 (100 %)
Hechos en donde hubo cortes de ruta	166 (15,2 %)	316 (24,3 %)	1684 (32,0 %)	2166 (28,3 %)

Fuente: elaboración propia basada en datos de Cotarelo e Iñigo Carrera (2004, p. 129).

Los cortes de ruta se posicionaron como uno de los métodos de lucha más visibles utilizados por los sectores asalariados, representando en un promedio general algo más del 28 % del total de hechos de protesta desde diciembre de 1993 a diciembre de 2001.⁵¹

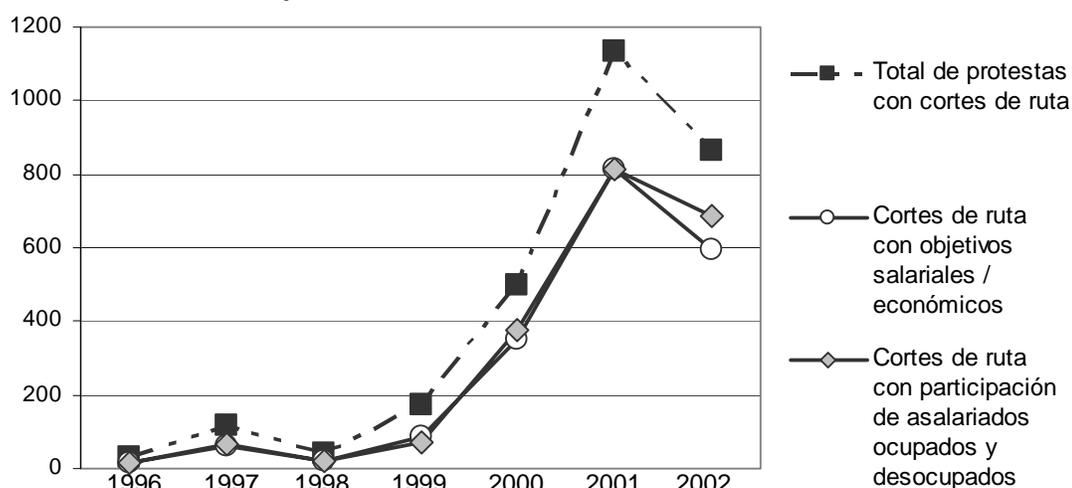
Allí se combinan un heterogéneo conglomerado social y un no menos diverso conjunto de objetivos y reclamos. Lograron en mayor o menor medida, como señala Klachko (2002), “concitar la atención nacional, solidaridad y alineamiento de vastos sectores populares, unir a trabajadores ocupados y desocupados, y a éstos con otras

⁵¹- Un informe del año 2002 elaborado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría arroja datos similares. Los cortes de ruta contabilizados en 1997 fueron 140, pasando a ser 51 en 1998. A partir de allí fue en constante crecimiento: 252 en 1999, 514 en 2000, 1383 en 2001 y 1609 hasta el mes de junio de 2002 (*La Nación*, 28-06-2002). Un aumento de la frecuencia de más del 1000 % en menos de cinco años.

fracciones sociales, sobre un mismo espacio, la ruta nacional, de envergadura social y económica” (p. 212).

Nuestra investigación se centra en seis casos determinados por el “formato” del corte de ruta, impulsado por trabajadores asalariados y desocupados con objetivos directamente relacionados al deteriorado acceso al mercado de trabajo y a la crisis económica; todos ellos objeto de represiones con diversas magnitudes. Conozcamos entonces qué tipo de incidencia han tenido tanto los objetivos económicos como la participación de asalariados ocupados y desocupados en el total de cortes de ruta durante el período que trabajamos en la investigación (1996-2002):

Grafico 1: Argentina 1996- 2002. Participación de asalariados ocupados y desocupados y objetivos laborales- económicos en cortes de ruta ⁵²



Fuente: elaboración propia basada en datos cedidos por el PIMSA

En primer lugar observamos cómo el desarrollo de las protestas con cortes de ruta se acrecienta al ritmo de la crisis económica general. Los objetivos de corte económico dan muestra de ello, conformando los objetivos predominantes en el contenido de los cortes año a año. Los mismos incluyen reclamos salariales, por puestos de empleo, en contra de

⁵²- Las categorías utilizadas no son excluyentes y pueden ser observadas independientemente una de otra. La intención de introducir mediante la evidencia empírica el nivel de preponderancia que han tenido tanto los objetivos laborales-económicos y la participación de asalariados ocupados y desocupados en el total de cortes de ruta, está supeditada a la exposición del presente capítulo y a la revisión de la bibliografía sociológica local.

despidos, del ajuste, del trabajo en negro y la flexibilización laboral y también reclamos por subsidios por desempleo, planes de trabajo y planes alimentarios. Debemos mencionar, en cuanto al ascenso de la frecuencia de cortes a medida que transcurren los años, la progresiva consolidación de diversas organizaciones piqueteras que asientan definitivamente el método de lucha como estrategia en el reclamo.

Si bien los reclamos laborales y económicos prácticamente abarcan la totalidad de objetivos en el lapso 1996-1998 y siguen ocupando la abrumadora mayoría en los años siguientes, progresivamente se han ido integrando otros objetivos y otros protagonistas en el reclamo. A medida que transcurren los años, la curva del total de cortes de ruta marca una leve separación de los cortes con objetivos económicos y con protagonismo de sectores asalariados. En el año 2001 se da la consolidación de esta tendencia, cuando los cortes de ruta incluyeron reclamos de refinanciación de deudas, objetivos educativos, por la liberación de presos políticos, en contra de la represión, para evitar desalojos de viviendas tomadas, etc. Aunque estos reclamos tienen un trasfondo evidentemente político y económico inseparable de la crisis de esos años, decidimos separarlos para contrastarlos a los reclamos que estrictamente pueden ser considerados salariales, laborales o económicos, es decir, directamente vinculados a las condiciones de existencia.

La merma de los cortes que incluyen este tipo de objetivos junto con el total de cortes se produce en 2002, en comparación al año anterior. Suponemos que la represión aplicada a fines del año 2001 y la primera mitad de 2002 en consonancia con la política estatal de mayor control de los movimientos piqueteros más radicalizados –cuyo momento de mayor tensión se vivió con la conocida “Masacre de Avellaneda”–, sumado al proceso de retroceso y fractura de muchas organizaciones populares, habría influido en la disminución de cortes de ruta.

En segundo lugar y en cuanto a los sujetos que impulsaron los reclamos, corroboramos que son los trabajadores ocupados y desocupados los que protagonizan total de acciones realizadas en el período seleccionado. Nuevamente el año 2001 marca la distancia mayor entre los cortes realizados por asalariados y aquellos en donde participan otras personificaciones sociales: sectores de pequeño-burguesía urbana, estudiantes, productores agrarios, jubilados. Así y todo, participan trabajadores ocupados y desocupados en el 72 % del total de cortes registrados ese año.

Con respecto a los trabajadores ocupados, si bien ha ido decreciendo su participación en este tipo de metodología con el transcurso del tiempo, su presencia no deja de ser

significativa. En 1996 son 13 los cortes de ruta realizados por trabajadores ocupados de un total de 29 (44 %), llegando a participar en el 37 % de los cortes registrados todavía en el año 2000. Durante el año 2002, en plena crisis económica y con los indicadores de desocupación en su marca más alta, es cuando se registra la menor participación de asalariados ocupados con el 18 % del total de cortes. En un promedio general de todo el período seleccionado, la participación de trabajadores ocupados en los cortes de ruta asciende al 27 %.

En cuanto al tratamiento político aplicado por el Estado en los cortes, aquellos que han finalizado con enfrentamientos físicos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad no son la mayoría dentro de los miles de hechos de protesta que se han registrado en el período democrático iniciado en 1983, y más puntualmente luego de 1991 con el definitivo establecimiento de las medidas económicas “neoliberales”.

El principal argumento que esgrimieron los gobiernos durante la década de 1990 sobre los cortes de ruta era que coartaban no sólo la libertad de los otros ciudadanos, sino que también se interrumpía la circulación de mercancías que provee tanto al comercio internacional como al consumo interno: se perjudicaba el normal desenvolvimiento de la economía. La función coercitiva del Estado se evidenciaría en estos casos de manera transparente como regente del modelo económico.⁵³

Sin embargo, remitiéndonos al período enero de 1996 a diciembre de 2002, apenas el 5,8 % de las protestas fueron reprimidas, de un total de 10650. Si tomamos las protestas que incluyeron cortes de ruta, la proporción aún es menor, con el 3,4 % de enfrentamientos en un total de 2723 cortes de ruta en el mismo período. Es decir, los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad no fue el común denominador en las protestas, evidentemente.

¿Cuáles fueron los factores determinantes para que sólo un porcentaje tan bajo de manifestaciones haya registrado enfrentamientos? Los episodios que analizamos en nuestra investigación –también referentes en los trabajos en los que se aplican las teorías sobre la acción colectiva en la investigación sociológica local- están caracterizados por un común denominador que es el uso de la violencia institucional. Con diversas magnitudes e

⁵³ - Al respecto, Meiksins Wood (2000) señala que “no es el capital en sí, sino el Estado, el que se hace cargo del conflicto de clases cuando intermitentemente rebasa los muros y adopta una forma más violenta. El poder del capital generalmente permanece en segundo plano; y cuando el dominio de clases se hace sentir como una fuerza coercitiva directa y personal, surge la apariencia de un estado ‘autónomo’ y ‘neutral’” (p. 55).

intensidades, dicha violencia significó en mayor o menor grado la finalización de las protestas y el aplacamiento al menos momentáneo de las reivindicaciones de los manifestantes.

En su estudio sobre la violencia colectiva, Charles Tilly (2007) diferencia acciones que pueden ser toleradas o prohibidas según el tipo de gobierno en el que se ejecutan. El autor distingue cuatro tipos de regímenes que varían según el grado de democracia y la capacidad de gobierno. A partir de estas premisas distingue los regímenes democráticos con capacidad alta o baja, y los no democráticos con la misma variación de capacidad (pp. 41-49). En los regímenes democráticos de capacidad baja –en los que el autor coloca a Bélgica y a Jamaica como ejemplo- se toleran una cantidad mayor de actuaciones y se prohíben o reprimen una cantidad menor, comparados a los regímenes autoritarios.

Una de las modalidades que describe para entender la violencia institucional es la específica de las manifestaciones. El autor distingue un tipo de reclamo que denomina como *negociaciones rotas* (pp. 195-206), que consiste en reclamos que comienzan siendo pacíficos y que sin embargo en un porcentaje mínimo, como vimos anteriormente, terminan en choques violentos. Es decir, concentraciones que en un principio cuentan con cierta “tolerancia” hasta que esta es fracturada. Remitiéndonos a los casos que aquí analizamos, el detallado estudio de Tilly sugiere elementos para pensar las manifestaciones en la historia reciente y sus desenlaces. Pero persiste la pregunta de por qué *sólo algunas* manifestaciones no fueron toleradas en un ciclo comprendido por miles de protestas. O qué elementos intervinieron para que esas “negociaciones” –en algunos casos más implícitas que en otros, o directamente inexistentes- finalicen y dejen abierto el camino de la represión.

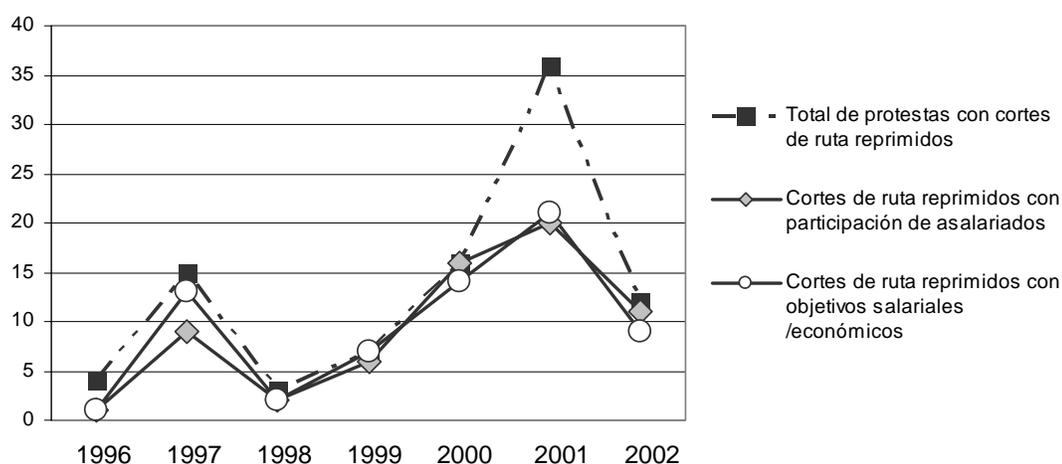
En cuanto a las formas que adquieren las acciones colectivas de protesta, Tarrow (1997, pp. 183-195) contempla a 1) las acciones violentas, que son las más antiguas y relativamente fáciles de realizar puesto que implican una menor organización, aunque son menos efectivas ya que desatan procesos represivos.⁵⁴ 2) Las acciones organizadas y convencionales, generalmente no violentas y de grandes proporciones en donde se reúnen multitudes con estrechos lazos de solidaridad, como las huelgas o manifestaciones pacíficas con objetivos económicos. Pero incluso estas formas de protesta que hoy aparecen como

⁵⁴- El autor se refiere a ciclos de protesta donde habla estrictamente de manifestaciones y/revueltas, sin introducirse en lo variable de las relaciones de fuerza desplegadas durante, por ejemplo, procesos revolucionarios donde la violencia no sólo es efectiva y organizada sino que permite el cambio de estructuras políticas, sociales y económicas de una sociedad.

formas “clásicas”, tradicionales o corporativizadas de la protesta, si son historizadas, también han sido disruptivas, todas han sido “nuevas” en algún momento. 3) Por último menciona las acciones colectivas disruptivas, que se basan fundamentalmente en la generación de incertidumbre hacia las elites, es decir, no son violentas pero pueden llegar a serlo y se mantienen en un lapso poco determinado de tiempo en el que se emplean mecanismos de manifestación poco convencionales.

Siguiendo la tipología hecha por el autor, consideramos que los cortes de ruta conformaron una acción de protesta disruptiva que por su frecuencia y expansión fue convirtiéndose en el tiempo -como *repertorio disponible*, utilizando un concepto de este autor- en un tipo de manifestación convencional. Los mismos no tuvieron como objetivo en sí mismo el despliegue de actos de violencia: por el contrario, en los casos en que se registraron enfrentamientos fue a partir de la violencia aplicada por parte del Estado, siendo adoptada por los manifestantes como hecho respuesta a las fuerzas de seguridad. Teniendo esto en cuenta, y atendiendo al interrogante acerca de los elementos que intervinieron en aquellas manifestaciones que fueron reprimidas, detengámonos a ver cuáles son algunas de sus características principales en una limitada línea de tiempo. Reiteramos para ello las variables que vimos anteriormente, concerniente a los objetivos de las protestas y a los sujetos predominantes que las protagonizan:

Gráfico 2: Argentina 1996- 2002. Participación de asalariados ocupados y desocupados, y objetivos económicos en cortes de ruta reprimidos.



Fuente: elaboración propia basada en datos cedidos por el PIMSA

En principio observamos que los dos grandes picos represivos en los cortes de ruta se efectuaron en los años 1997 y 2001. En 1997 se encuentran las protestas reprimidas en Neuquén (un total de 10 a lo largo de todo ese año) junto a otras provincias como Santa Fé, Salta y el Gran Buenos Aires. En 2001, los cortes reprimidos no incluyen directamente las manifestaciones con objetivos económicos, que sí fueron preponderantes en los cortes de los años 1998, 1999, 2000 y 2002. Es así que 2001 fue un año en el que la acción represiva se expandió a diversos tipos de protesta en un período en donde la crisis económica y política llegó a su punto culminante: la represión incluyó a manifestaciones con reclamos contra la instalación de personas pobres e indigentes en diversos barrios, por la libertad de presos y procesados políticos, impedir el desalojo de viviendas ocupadas o en contra de aumento de precios de productos o servicios.

Salvando este año del resto del período, la represión año a año ha sido efectuada prácticamente en su totalidad sobre trabajadores ocupados y desocupados que elevaron reclamos salariales, laborales y otros de corte económico, representando más del 70 % del total durante todo el período.

Aunque los cortes que aquí graficamos tuvieron como objetivo la mejora de elementales condiciones de vida y no el cambio de las estructuras políticas o económicas – lo que significaría una afrenta directa al Estado o al sistema institucional-, requirieron prácticamente en todos sus casos de una “solución” represiva. Esta fue la conclusión a la que se arribó desde el Estado luego de anular la posibilidad de acceso a mejores condiciones de vida a un mercado de trabajo cada vez más restrictivo.

En síntesis, los actores principales en los cortes de ruta del período analizado son los asalariados ocupados y desocupados, y los objetivos de esas protestas están directamente vinculados a la crisis económico-política. Las mismas características se encuentran en aquellas manifestaciones que fueron objeto del avance represivo del Estado. Sabemos, sin embargo, que la inmensa mayoría de los cortes de ruta que no fueron reprimidos, también incluyeron las características mencionadas. Una hipótesis a plantear es que la diferencia en el tratamiento institucional de este tipo de conflictos radicaría en que la represión se ejecuta sobre agrupaciones con menos lazos de negociación con los gobiernos –provincial o nacional- de turno y que habrían representado, al menos desde el plano discursivo, cierta peligrosidad.⁵⁵ Esta propuesta será desarrollada en los seis estudios de caso que aquí

⁵⁵- Puntualmente en los casos de Cutral C6 1997, Tartagal y Mosconi 2000 y 2001, la represión acompañó la interpretación del Gobierno de que se trataban de protestas aisladas, o que entraban en un momento de

trabajaremos, pero es un planteo que requiere una averiguación más detallada en el total de cortes de ruta reprimidos, y cuya respuesta escapa a esta tesis.

Si bien nuestro objetivo en este apartado no es arribar a una explicación final sobre el por qué de la represión en los cortes de ruta, consideramos que un análisis preliminar arroja un esquema del conflicto que podríamos considerar “clásico”. Es decir, advertimos que las contradicciones entre el capital/trabajo son el eje preponderante del enfrentamiento, y en tal sentido hemos señalado lo que consideramos los aspectos principales de este esquema a través de la frecuencia, los objetivos y los protagonistas de estos hechos. A partir de aquí nos introduciremos en su caracterización desde la investigación sociológica teórica y empírica.

3.1. Circunscribiendo los hechos.

En la bibliografía sociológica reciente existe una extensa producción sobre los hechos de protesta fundamentados en las teorías de la acción colectiva y los *–nuevos–* movimientos sociales. Mediante las mismas se intentó caracterizar a las movilizaciones y acciones masivas en un mundo postindustrial en el que las teorías clásicas –las del conflicto social y la lucha de clases entre ellas- en apariencia ya no otorgarían respuestas satisfactorias.

Reconocemos dos grandes ejes, siguiendo la distinción hecha por Barbeta y Lapegna, (2001), Schuster (2005) y Rebón (2006), en el que podríamos ubicar por un lado a los estudios que ponen el acento en las *protestas sociales* como acción racional: las teorías de “la movilización de recursos” y de la “estructura de oportunidades políticas” de la escuela norteamericana, que se dedican al *cómo* y *cuándo* de las acciones colectivas. Por otro lado encontramos los estudios sobre los *movimientos sociales* y en particular sobre su constitución identitaria e intersubjetiva, proveniente de la corriente europea, la cual intenta dar respuesta al *por qué* de las acciones colectivas. Hoy podemos encontrar una amplia combinación de trabajos que rescatan ambas perspectivas.

Las explicaciones que abordan la protesta desde el concepto de *la movilización de recursos* colocan en primer plano las redes construidas entre los movimientos sociales y las instituciones, y las estrategias operativas que emplean dichos movimientos en relación a

eventual aislamiento. En los capítulos dedicados a cada uno de los casos veremos cómo la dicotomía legitimidad/ilegitimidad giró en torno a las resoluciones represivas.

sus fines. Según Jenkins (1983) y Munk (1997), desde esta perspectiva se considera que los actores participantes impulsan una acción racional capaz de adaptarse según diversas coyunturas, y sus logros básicos están supeditados al conflicto de intereses plasmados en relaciones de poder institucionalizadas (Jenkins, 1983, pp. 528-534). Además, se examina la variación en los recursos utilizados por los movimientos, el grado de condicionamiento del apoyo de diversos sectores de la sociedad y la relación establecida por las autoridades en su pretensión por controlar o incorporar a aquellos movimientos (McCarthy y Zald, 2002, p. 1213). Esta lectura *utilitarista* –en cuanto a la maximización de elementos para obtener un fin beneficioso para un grupo- de los objetivos y del desarrollo de los movimientos sociales es aplicable a organizaciones con fuerte centralización en su estructura interna. Coloca el peso del análisis en conocer cómo se organizan esos movimientos y consiguen respuesta a sus reivindicaciones, dejando en un plano secundario el contexto histórico en el que se desarrollan.

Frente a estas explicaciones encontramos el concepto de *repertorio de la acción colectiva* del sociólogo estadounidense Charles Tilly. Ubicándonos en el escenario local de la protesta, dicho concepto fue usado para constatar una serie de elementos disponibles y efectivos como los saqueos, cortes de ruta, asambleas populares y demás modalidades no institucionalizadas provenientes de sectores subordinados. Metodologías que contrastarían frente a otras que quedaron en el pasado, como las huelgas o tomas de fábrica, concerniente a la acción sindical predominantemente.

Sydney Tarrow, propone el concepto de la *estructura de oportunidades políticas*, intentando dar respuesta a las explosiones de acción colectiva más allá de las condiciones estructurales, ya sea la pobreza o al nivel de necesidades insatisfechas. Tarrow (1997) dirá que “lo que varía ampliamente con el tiempo y el lugar son las oportunidades políticas, y los movimientos sociales están más íntimamente relacionados con los incentivos que éstas ofrecen para la acción colectiva que con las estructuras sociales o económicas subyacentes” (p. 148). Reconoce, sin embargo, que los primeros teóricos de los movimientos sociales que estudiaron estas dimensiones se inscriben en el materialismo histórico; advertencia que no suele ser común en la bibliografía que aplica estas herramientas teóricas al espacio local. Efectivamente, para el autor fueron Marx, Engels, Lenin y Gramsci quienes estudiaron sistemáticamente la movilización de masas mediante la historia de la lucha de clases y que

incluso introdujeron pertinentemente el concepto de *estructura de oportunidades políticas* (pp. 36-40).⁵⁶

La escuela europea también desarrollada en la década de 1970 y cuyos quizás principales exponentes sean Donatella della Porta y Alberto Melucci, encaran la temática desde las identidades colectivas que se forjan en los movimientos sociales y en sus acciones. “Los teóricos europeos de los ‘nuevos’ movimientos sociales, al contrario de los americanos, se caracterizaron por basar sus análisis en una noción más estructural de la identidad colectiva o de la identidad.” (Munck, 1997, p. 3).⁵⁷ Los elementos centrales de los movimientos sociales son, desde esta perspectiva, la implicancia política en la construcción de un “nosotros” y la red de relaciones afectivas y solidarias que se establecen en tanto *sujeto colectivo*. Mientras que las acciones de protesta perfectamente pueden ser realizadas por sujetos no aglutinados en un colectivo identitario, las acciones de los movimientos sociales implican esa identidad, una organización, una continuidad en el tiempo y una extensión en el espacio (Schuster, 2005, p. 48). El movimiento obrero o estudiantil podría ser ejemplo de esto.

En cuanto a la producción local, entendemos que con el objetivo de conceptualizar y sistematizar el análisis, se evidencia una reiterada inquietud por formular nuevas hipótesis y aplicar algunos aspectos de estos “paradigmas teóricos” en la protesta social en el ámbito nacional durante la década de 1990 y principio de la década actual.

Los casos particulares que nos convocan en esta tesis, muchos de ellos considerados emblemáticos, son rescatados para apoyar muchas de las dimensiones de estas teorías reconocidas como “de alcance medio”, contrastando las explicaciones que retoman las teorías del conflicto y la lucha de clases. Consideramos que a partir de nuestras y otras investigaciones sobre los conflictos de la historia reciente, es necesario intentar revisar y enriquecer el debate. Diferenciamos tres aspectos interrelacionados (los dos primeros

⁵⁶- En el clásico Manifiesto Comunista de 1848, Marx y Engels (1998) señalan que “en general, las colisiones en la vieja sociedad favorecen de diversas maneras el proceso de desarrollo del proletariado. La burguesía vive en lucha permanente, al principio contra la aristocracia; después, contra aquellas fracciones de la misma burguesía cuyos intereses entran en contradicción con los progresos de la industria, y siempre, en fin, contra la burguesía de todos los demás países. En todas estas luchas se ve forzada a apelar al proletariado, a reclamar su ayuda y arrastrarle así al movimiento político. De tal manera, la burguesía proporciona a los proletarios los elementos de su propia educación, es decir, armas contra ella misma” (p. 36). Análisis que hoy perfectamente podría pensarse como un ejemplo del estudio de la *estructura de oportunidades políticas*.

⁵⁷- (Os teóricos europeus dos "novos" movimentos sociais, ao contrário dos americanos, caracterizavam-se por fundamentar suas análises em uma noção mais estrutural de identidade coletiva ou simplesmente de identidade).

concernientes a la constitución del sujeto colectivo de las protestas, el tercero referido a las acciones racionales empleadas), que aquí separamos simplemente con un fin analítico

I- Acerca de los actores involucrados en la protesta. El término “nuevos movimientos sociales” en el plano de la protesta, da cuenta de un conjunto de actores y de objetivos en el reclamo heterogéneos y multifacéticos, en contraste con las movilizaciones populares precedentes.

II- Estrechamente relacionado al punto anterior, los sujetos con similares motivaciones y objetivos plasman, a través de los lazos sociales que estrechan, una *identidad* que los define en las protestas. Dimensión tomada para rastrear el *por qué* de ciertas acciones colectivas de protesta.

III- Acerca de lo novedoso de los repertorios, “formatos” o herramientas utilizadas en las manifestaciones, en particular el corte de rutas. Este aspecto se rescata para elucidar el *cómo* de la acción.

Veamos:

I- Acerca de los nuevos sujetos y objetivos de la protesta. Autores como Schuster y Pereyra, 2001; Scribano y Schuster, 2001; Svampa y Pereyra, 2003; Schuster et al, 2006, consideran a los manifestantes de las protestas de los últimos años como sujetos que renovaron el escenario político nacional. Coinciden en que la figura sindical en el reclamo frente al Estado ha ido cediendo ante el surgimiento de una nueva red de movimientos sociales heterogéneos, con identidades, objetivos y conformaciones diferenciadas. El aumento de la desocupación y de la precariedad laboral habría influido en la desarticulación de la presencia de trabajadores asalariados como núcleo de los reclamos sociales. Así, las protestas pasaron a estar protagonizadas por movimientos que acusaban diversas inequidades y desigualdades sociales, ya sean de carácter económico, de género, producidas por la violación a los derechos humanos, o por el uso irracional del medio ambiente.

También se registraría una descentralización en el interlocutor del reclamo. Tras la reforma del Estado y la consecuente “provincialización” de la planificación de políticas públicas, los distritos del interior del país comenzaron a experimentar sus propias crisis, con ritmos, magnitudes y en coyunturas diferentes una de otra. En palabras de los autores, se asistió a

una alta localización de las protestas (tendencia a restringir su expansión territorial); a una limitada continuidad temporal (tendencia a establecerse buscando un mayor grado

de expresividad de sus demandas en períodos temporales breves); y a una multiplicación de actores (incremento en la cantidad y diversidad creciente de los actores de la protesta social). (Schuster et al, 2006, p. 10).

Es decir, las movilizaciones no habrían logrado mellar el rumbo político y económico del gobierno -si nos ubicamos principalmente durante la administración menemista-, pues al ser casi nula la articulación del conflicto, los reclamos eran aislados y rápidamente disueltos.⁵⁸ Los sindicatos, otrora aglutinadores de grandes masas en marchas y manifestaciones y poderosos adversarios políticos de diversos gobiernos, en esta nueva instancia “no pudieron poner en jaque a la política privatizadora y fueron vistos por amplios sectores de la opinión pública como protagonistas melancólicos de una Argentina del pasado” (Scribano y Schuster, 2001, p. 18).

Sumado al hecho de la descentralización territorial, estos movimientos dan cuenta de una diversificación de identidades: es decir, habría una “singularización de la protesta, una multiplicación de actores y desarticulación de las identidades tradicionales” (Schuster et al, 2006, p. 10) en la escena del reclamo. Siguiendo esta línea, Schuster y Pereyra (2001) consideran que la ampliación del espectro de movimientos sociales y de las acciones colectivas de protesta fueron dejados de lado por el análisis marxista porque estos movimientos “no respondían a cánones de constitución clasista, y no se orientaban hacia una transformación integral de la sociedad” (p. 42). Es que el análisis durante buena parte del siglo XX se habrían centrado en el posible poder emancipatorio de las acciones de protesta, buscando de manera “esperanzada y ficcional” (Naishtat, 2005, p. 36) horizontes revolucionarios en dichas acciones.

Por su parte, Javier Auyero reflexionaba en una entrevista en junio de 2002 sobre su trabajo titulado “La protesta”, en el que enmarca a las manifestaciones populares en el avance de las medidas neoliberales y la explosión del hiperdesempleo. Considera que así “surgen nuevos actores (desempleados) y nuevas demandas (puestos de trabajo o subsidios de desempleo), y cambia el blanco de las demandas: de reclamarle al Estado nacional la protesta se traslada al ámbito provincial” (*La Nación*, 29-06-2002). Conviene reconsiderar lo novedoso de la figura o la *personificación* del trabajador desocupado,⁵⁹ teniendo en

⁵⁸- La Marcha Federal convocada en 1994 (a la cual asistieron numerosas agrupaciones sindicales, políticas y sociales del país, culminando en una jornada de movilización a la Plaza de Mayo con más de cien mil personas), o el paro general de 36 horas convocado por la CTA y la CGT en septiembre de 1996, fueron algunos de los indicadores más relevantes que contrarrestaron episódicamente esta tendencia.

⁵⁹- En cuanto a este tipo de categorías rescatamos el prólogo de “El Capital”, donde Marx advierte que se refiere a las personas “*en cuanto personificación de categorías económicas, como representantes de*

cuenta la gran participación de fracciones de asalariados ocupados en las protestas recientes. Y no sólo por esta presencia: el trabajador desocupado (incluso el que conforma el movimiento piquetero) está obligado a vender su fuerza de trabajo para subsistir, aunque la coyuntura económica y política lo encuentre en una situación de marginalidad y desempleo.

De este modo, los “nuevos movimientos sociales” a los que se les adscribe el escenario de la protesta y el conflicto social reciente, son enfrentados a los “viejos movimientos”. Los primeros vinculados a la construcción de una identidad colectiva, a una organización interna sin jerarquías o verticalismos y que utilizan en sus reclamos y expresiones públicas medios “no convencionales”. Mientras que los segundos no están interesados en construir una identidad colectiva, no reivindican relaciones autónomas sino que tienen una organización jerárquica y utilizan medios convencionales o tradicionales de participación política. “La cuestión, sin embargo, no resulta nada clara cuando descubrimos que esos llamados viejos movimientos sociales también fueron nuevos, eventualmente lo son y desde luego, pueden volver a serlo” (Ibarra, 2000, p. 17).

Ciertamente, la desarticulación del escenario de empleo masivo instalada mediante la variante local del Estado keynesiano o desarrollista ha provocado que el sujeto colectivo mayoritario de las luchas también se haya diversificado, y no se sitúe exclusivamente en las movilizaciones de la clase obrera industrial. Los reclamos de aquellos asalariados en el sitio mismo de producción y acumulación de capital (la fábrica, el taller) serán llevados a cabo durante la hegemonía neoliberal por trabajadores desocupados que en afán por no quedar excluidos impiden con la ocupación de las rutas uno de los eslabones fundamentales para la realización del capital, es decir, la distribución de mercancías. Siguiendo a Bonnet (2002), “la modalidad de lucha del movimiento piquetero está signada –como en los casos del MST en Brasil o del EZLN en México- por su dimensión espacial: impedidos de detener la producción, los trabajadores desocupados se ven obligados a detener la circulación” (p. 16). Gómez (2007) también define este ámbito de manifestación –y

determinados intereses y relaciones de clase” (Itálicas del autor. Prólogos, p. XV, Tomo 1, Fondo de Cultura Económica). En tal sentido el asalariado -su personificación en una relación de producción capitalista- es desocupado como *categoría* o condición de esa personificación. Se trata de no perder de vista determinadas relaciones económicas, sociales y políticas *históricas*.

reconstitución de identidades- en torno a la redefinición productiva determinada por las políticas de ajuste, flexibilización laboral y la desocupación.⁶⁰

Así como el cambio de los patrones de acumulación capitalista implica que sigue habiendo acumulación y reproducción del capital y relaciones de explotación, la disminución de obreros industriales como sujeto líder de las protestas o el incremento coyuntural de trabajadores desocupados ¿puede implicar que la escena de la protesta social esté conformada hoy por sujetos absolutamente nuevos? Es claramente reconocible que desde la apertura democrática y más aún desde 1991 se presentó un escenario de nuevos reclamos y sujetos que los llevan a cabo. Estos reclamos, dicho sea de paso, también están íntimamente vinculados al desarrollo capitalista y al aparato coercitivo del Estado que opera como regente de ese desarrollo, como las protestas por la degradación del medio ambiente o por reclamos relacionados a los Derechos Humanos -que en nuestro país tienen una historia determinada por el proceso genocida de la última dictadura-. Es decir que la pugna entre sectores sociales antagónicos, lejos de diluirse, está presente en esas manifestaciones y en esos sujetos como resultado irrefutable del avance de un sector sobre otro. Sin embargo, esas manifestaciones son caracterizadas como provenientes de una “matriz cívica” escindida de los reclamos sindicales o clasistas de décadas pasadas, como si estos últimos estuvieran al margen de esa matriz.⁶¹ Se habilita de este modo “el comentario displicente que ‘la clase obrera ha desaparecido’. (...) La presencia ilusoria de los *ciudadanos* que se movilizan, de un modo que se presenta como ‘nuevo’, ha sustituido toda referencia a la lucha de clases.” (Izaguirre, 2006 a, pp. 114-115).

Aunque se sugiera –como señalamos más arriba- que los análisis “materialistas” sólo están dedicados a rastrear conflictos específicamente obreros en cuanto a la composición de

⁶⁰- Entendemos que los criterios de análisis acerca de los *nuevos movimientos sociales* no sólo se supedita a un cambio estructural evidenciable con la era postindustrial. En tal sentido coincidimos con Inda y Duek (2007) acerca de un cambio de paradigma epistémico e intelectual que abandonó las herramientas teóricas del marxismo por considerarlas obsoletas; sentencia condicionada también por el “fracaso de los ‘socialismos reales’ y de los partidos comunistas europeos, el derrumbe de los grandes movimientos nacional-populares en América Latina, el avance de las políticas neoliberales o la liquidación de las conquistas históricas del movimiento obrero. (...) Transformaciones que ‘paradójicamente’ responden en última instancia a los cambios en las correlaciones de fuerza económica, política e ideológica entre las clases” (p. 2).

⁶¹- Dependiendo de las distintas coyunturas históricas, los reclamos sindicales estuvieron signados por fuertes enfrentamientos, aunque han sido progresivamente institucionalizados, o sea han pasado a formar parte de las negociaciones reguladas por el Estado y aceptadas por la burguesía capitalista. Denis Merklen (2005) si bien sigue la lectura que indica la disminución de la intervención sindical en el escenario político, relativiza el carácter dicotómico entre una matriz “cívica” de la protesta frente a otra “sindical”, que paulatinamente fue diluyéndose. Ante estos axiomas que colocan al sindicalismo escindido de la ciudadanía y de la lucha por derechos universales, el autor señala que “este tipo de visión deja desnuda a la sociología frente al poder que una teoría de la democracia y de la ciudadanía ‘puras’ tiene sobre sus autores” (p. 38).

clase y que impulsen el cambio social en cuanto a los objetivos de las luchas, proponemos revisar el estudio concreto realizado sobre las acciones de protesta. Tomando el período 1993-2001, Iñigo Carrera (2005) señala que más del 55 % de los hechos de protesta registrados están protagonizados por asalariados, tanto ocupados como desocupados. Dentro de estos, los trabajadores ocupados representaron más del 65 %, mientras que el 17 % refiere a trabajadores desocupados. Recordemos que el promedio de la participación de asalariados ocupados en el total de las protestas en este período es superior a su participación en las protestas realizadas bajo la forma de cortes de ruta, como vimos más arriba.

A su vez, casi el 40 % de los hechos fue convocado por organizaciones sindicales (p.2). De manera que el sector sindical, lejos de estar desplazado de la protesta social, se confirma como una de las organizaciones con mayor convocatoria de masas en relación al resto de organizaciones.⁶² Incluso la permanencia de la acción sindical se tradujo en la década de 1990 en 9 huelgas generales -de un total de 38 realizadas desde 1979 a 2002-, y una de ellas en 1996 “reunió a 70 mil personas en Plaza de Mayo, en lo que fue considerada por el diario La Nación, la segunda más numerosa movilización política de la década” (Iñigo Carrera, 2007, p. 92).

El problema no es reconocer la diversidad de los conflictos y de los sujetos que allí participan –que ciertamente existen-, sino el carácter que se les da. Siguiendo a Solericens (1993), el término de “nuevo” que se aplica a los movimientos que protagonizan acciones colectivas de protesta en las últimas décadas, todavía es objeto de debate. Sobre todo en Latinoamérica, sub continente con procesos sociales complejos y sumamente diversos, en el cual el proceso de segmentación económica y de marginación social, lejos de disiparse, se ha profundizado. De modo que los “movimientos sociales urbanos adscritos al territorio [latinoamericano] reconocen una influencia de la experiencia del movimiento obrero, lo

⁶²- Retomamos la clasificación que hacen Cotarelo e Iñigo Carrera (2004) en la periodización del conflicto social reciente: un período ascendente de luchas (de diciembre de 1993 a agosto de 1997), uno descendente (septiembre de 1997 a diciembre de 1999) y uno final y nuevamente ascendente (diciembre de 1999 a diciembre de 2001). En estos tres períodos la intervención de organizaciones sindicales es de un 51 %, 31% y 33, 5 % respectivamente. Al mismo tiempo, las manifestaciones protagonizadas por agrupaciones vecinales, étnicas, religiosas, villeras, de DD. HH., de pequeños propietarios, de familiares de víctimas, profesionales, ecologistas, etc. representan el 6 %, 9 % y 6,5 % en cada uno de los períodos diferenciados. Incluye la investigación dirigida por Schuster (2006) arroja datos similares en lo que respecta a la participación sindical: los gremios y sindicatos que intervienen en las protestas entre 1989 y mayo de 2003 representa el 49 %. Aunque entre 1998 y 2002 esa marca baja al 26 % del total de protestas (p. 37). En la misma investigación y en el mismo período se establece que el promedio de protestas con demandas económicas, laborales, salariales y políticas suman el 64 % sobre el total. Se trata de valores que difícilmente podrían calificarse como “residuales”.

que podría revelar una línea de continuidad y no de ruptura del movimiento social popular” (p. 3). Junto a esta lectura, Gómez (2007) relativiza lo novedoso de las formas de incursión social de los movimientos de desocupados de Argentina, sus objetivos y su estrategia en los conflictos de la década de 1990:

“(…) es necesario reintegrar la historia de los movimientos de desocupados en la historia de los cambios de las luchas de clases en la década del ’90. La perspectiva de largo plazo permite ver procesos de constitución menos ‘puros’ y lineales pero más precisos en la detección de los pasajes, en los aprendizajes y adaptaciones continuas al contexto” (p. 135).

En cuanto a las lecturas sobre la fragmentación espacial y temporal de los reclamos que mencionamos más arriba, creemos que se obvia un rango de estudio más extenso –en el que evidentemente se distinguen diversas etapas, formas, objetivos de lucha y sujetos participantes- que consideramos un *proceso* en un período histórico y en un espacio determinado. En tal sentido, Iñigo Carrera y Cotarelo (2003) consideran que los hitos más importantes ocurridos en la década de 1990 en la provincia de Neuquén, Salta, Jujuy, Corrientes, Gran Buenos Aires (algunos de los cuales analizaremos aquí), aunque se nos presenten como aislados y atomizados

“constituyen momentos de articulación nacional. Tanto el desarrollo de las formas de lucha como el proceso de formación de fuerza social indican (...) un ciclo de enfrentamientos sociales que recorre de lo local a lo nacional. (...) El desarrollo de este ciclo no es lineal y contiene momentos ascendentes y descendentes” (p. 213).⁶³

Es decir que estos conflictos que se presentan en espacios y tiempos distantes pueden ser leídos como partes constituyentes de un mismo camino de experiencias, formas y magnitudes de las luchas que abarcaron todo un período. La idea de continuidad frente a la de fragmentación se sostiene, tomando a los autores, al observar el carácter cualitativo de las primeras manifestaciones y su “evolución” hacia las más recientes. Mientras que en un

⁶³- El término ciclo –*ciclo de protesta*- se aplica en las investigaciones recientes que trabajan con las teorías de la acción colectiva. Tarrow (1997) dirá que dichos ciclos refieren a “una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social (...) no sólo en las relaciones laborales, sino en las calles; y no sólo en las calles, sino también en las aldeas y las escuelas. En períodos así la magnitud de la acción colectiva conflictiva de diferentes tipos supera apreciablemente el nivel típico, tanto anterior como posterior” (pp. 263-267). Consideramos que dicha definición no contradice una lectura multidimensional de la lucha de clases. Lejos de interrumpir períodos “de paz” frente a otros de conflicto, consideramos que existen estadios de conflictividad variable y permanente, y que los llamados ciclos de protesta son las demostraciones empíricas de esas fluctuaciones o alza en su magnitud. En la segunda mitad de la década de 1990 el estadio de conflictividad toma especial protagonismo mediante el corte de ruta entre otras manifestaciones, en una coyuntura económica y política específica.

principio estuvieron cercanas a la figura del motín popular o a un estadio más espontáneo de lucha, paulatinamente fueron transformándose en acciones más organizadas, constituyéndose en formas de lucha más sostenidas y sistemáticas (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2001 y 2003; Klachko, 2008).

II- Acerca de la producción de simbología y la conformación identitaria de los sujetos que protestan. El proceso de luchas y protestas a lo largo de la década de 1990 evidenció la profundización de las condiciones de marginalidad en la mayoría de la población y al mismo tiempo la reconstrucción de lazos entre diversas fracciones sociales, lo que habría renovado el arco de identidades de los sujetos que se manifestaron. Dichas identidades colectivas se construyeron en un campo de “debilitamiento de las identidades ‘partidarias’ o ‘de clase’, para abrirse a una posibilidad de definir una identidad con respecto a otros anclajes; en este caso específico, la comunidad de pertenencia” (Barbetta y Lapegna, 2001, p. 242). Si bien no se niega la presencia de asalariados ocupados o de los sindicatos en las protestas recientes, el carácter identitario renovado estaría basado en la ausencia de *una conciencia de clase* -o de un proceso de construcción de una identidad de clase *para sí*, dicho en términos marxistas.- Estaríamos entonces en presencia de reivindicaciones centralmente económicas, salariales y laborales que mayormente no cuestionan el sistema imperante, objetivo que sí se registra en buena parte de los conflictos laborales, sindicales y políticos desde fines de la década de 1960 hasta mediados de los 1970.

En cuanto a los cortes de ruta, la acción misma trascendió cualquier otro tipo de condición previa de los sujetos que los llevaron a cabo: la condición social (o estructural) del desocupado se transformó en la identidad política del *piquetero* (Schuster, 2005, p.52). Es lo que Massetti (2004 b) llama “hipótesis del reemplazo”, en la que “la disolución del Estado de Bienestar se convierte en dinámicas positivas de encuentro social” (p. 1), generando un viraje identitario centrado en la figura del desocupado y del piquete como forma predominantes de la protesta. Es el caso de las protestas neuquinas de junio de 1996 y marzo de 1997, considerados “hitos” en las luchas populares recientes, símbolos indiscutidos de la protesta mediante el corte de rutas. Massetti (2004 a y 2006) señala que el corte de ruta de 1996 es considerado como el “caso mítico”. Sostiene que

la rápida, exitosa y positiva instalación de una ‘imagen’ de estas revueltas permitió la afirmación y usufructo de una fuente de representaciones políticas cargadas de

legitimidad, por lo que es entendible y loable su desarrollo (su refundación) organizacional. (2004 a, p. 5).

Lo sostiene luego afirmando que la imagen de los piqueteros “en un primer momento (1990-1998) se asoció a la reacción justa de las poblaciones del interior del país frente a la desestructuración de la vida social a raíz de la implosión de las fuentes laborales” (2007, p.63). Esto, siguiendo al autor, habría llevado a que se expanda una “identidad piquetera” finalmente instalada en los posteriores actos de protesta, fundamentalmente en los realizados en el conurbano bonaerense (2004). De modo que los piquetes, además de ser una metodología de lucha, se convirtieron en la usina de una *identidad particular* en este tipo de acciones colectivas de protesta que adquiere un nuevo teatro de operaciones: la calle en vez de los lugares de trabajo. Podríamos decir que los piqueteros y fogoneros neuquinos surgieron en estas circunstancias.

Barbetta y Lapegna (2001) señalan algo similar con respecto a los primeros cortes de ruta, en particular los acontecidos en el norte salteño a partir de 1997, algunos de los cuales trataremos más adelante. Sostienen que en dicha protesta fue posible en parte debido a “una acción que involucra una identificación colectiva, un ‘nosotros’ en tanto se dio un proceso de solidaridad, (...) como una construcción interactiva y compartida” (p. 241). Svampa y Pereyra (2003) remarcan esta idea al afirmar que los piqueteros surgen como definición alternativa a la indignidad que presentó la figura del desocupado, adquiriendo “un poder desestigmatizador que facilitó la inclusión de esos sectores en las organizaciones” (p. 32). En tal sentido representan “un elemento de identificación positivo para quienes cortan rutas como recurso para hacerse visibles y para recuperar algún medio de presión y de negociación” (p. 135). En esta línea Scribano (1999) señala una “demanda de subjetividad” y de identidad en estos movimientos, es decir, la presencia activa en el espacio público de los sectores subordinados que en sus prácticas y discursos resumen el reclamo de una igualación de derechos.

Esta activación de redes y de conformaciones identitarias determinada por el corte de rutas y la carga simbólica con la que nacen los piqueteros como actor político colectivo, fue retomada por otros sujetos que en el marco de su organización se autodefinieron como piqueteros. Es el caso del norte salteño, o de las organizaciones del conurbano bonaerense.

Efectivamente, los “piqueteros” y “fogoneros” son producto de una autodefinición –y de una profusa difusión mediática de la época- sobre quienes vieron en las rutas la única manera de convocar la atención del poder político. Ese carácter identitario llegó a

plasmarse en un “movimiento social piquetero” integrado por numerosas agrupaciones de trabajadores desocupados en distintos barrios y ciudades del país, con una organización interna específica y con una red inter agrupaciones que logró diversos mítines y congresos nacionales a lo largo de un desarrollo que llevó varios años.

Debemos reconocer, en primer lugar, que si bien en las protestas de este período la participación de los gremios y sindicatos –como estandartes de los considerados “viejos” movimientos- ha estado supeditada a la dinámica de estas organizaciones *ad hoc*, en los casos que aquí analizaremos no sólo no estuvieron ausentes, sino que condicionaron el desarrollo de la protesta. En el caso de Neuquén en 1997, cuna de estos símbolos, la acción sindical fue determinante al conducir la protesta durante semanas, que luego derivó en el corte de ruta, la represión a los “fogoneros” que terminó por provocar la muerte de Teresa Rodríguez. En Corrientes en 1999 –en donde la figura predominante fue la de los “autoconvocados”- la protesta que derivó en la toma del puente Belgrano fue iniciada por un sindicato, y también fueron numerosos los gremios y partidos políticos de izquierda presentes durante todo el conflicto, aunque se puede reconocer que no ejercieron un liderazgo total y abarcador sino que se sumaron a un movimiento que tenía una dinámica por fuera de espacios tradicionales.

La personificación del *piquetero* que adoptaron los sectores asalariados desocupados responde a una coyuntura particular que no excluye una militancia partidaria o sindical presente en la inscripción política de la historia de vida de muchísimos de los integrantes de este “nuevo movimiento”. Tal es el caso de los numerosos MTD del conurbano bonaerense, en los cuales muchos de sus integrantes, inscriptos en el movimiento piquetero, poseían un camino previo en la militancia territorial y política. En cuanto a los casos que estudiamos, la aclaración vale prácticamente para todos los episodios, en especial el de las ciudades neuquinas y del norte salteño, tal los casos de la Comisión de Padres en Cutral Có, o la UTD en el norte de Salta. Si tenemos en cuenta la multiplicidad de sujetos y experiencias involucradas en la alianza de asalariados ocupados y desocupados que impulsaron este tipo de protestas, podemos hablar de una “mixtura de identidades”.

Por otra parte, esa construcción de identidades está supeditada a una dinámica de enfrentamientos que está condicionada por al proceso de criminalización y represión de la protesta. La imagen “exitosa” del naciente movimiento piquetero (Masseti, 2004 a) hacia mediados de la década de 1990, o la “identificación positiva” y “desestigmatizadora” (Svampa y Pereyra, 2003) entre los manifestantes también están supeditadas a un *carácter*

relacional, es decir, no sólo están en constante construcción e interacción dentro de los espacios en donde se gestan (el movimiento piquetero en este caso), sino que también entran en perspectiva a partir de la *representación* de esas identidades fuera de las propias agrupaciones.⁶⁴

La potencia y el alcance con que fue difundida esta simbología de la protesta y del reclamo por condiciones dignas de vida estuvieron permanentemente “puestas a prueba” por una simbología dominante que se encargó de revertir y estigmatizar permanentemente esos significados generados en las movilizaciones populares. Si bien el aspecto discursivo es central en los análisis sobre la construcción identitaria de los nuevos movimientos sociales, la producción discursiva “oficial” es escasamente tomada en cuenta. ¿Fue posible la sistemática represión y penalización de quienes ejercieron diversos cuestionamientos y reclamos a las elites sin una producción discursiva que deslegitimó, penalizó y condenó esas acciones desde un principio, más allá de las esferas judiciales? Los más de 4.000 procesamientos de militantes sociales judicializados y criminalizados en los primeros cinco años de la década actual (Svampa, 2005; Svampa y Pereyra, 2005), dan cuenta de ese proceso de reconversión de ciertas imágenes que fueron emparentadas a lo delictivo. La avanzada represiva habilitada desde el PEN y el PJN mediante la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles y con la posterior persecución judicial se extendió incluso luego de la llamada Masacre de Avellaneda -que veremos más adelante- en pos de una criminalización de la pobreza.⁶⁵ Si bien no podemos relacionar causalmente ambas dimensiones, verificamos que la represión y la persecución judicial fueron acompañadas por una construcción de identidades negativas que significó una decodificación del sentido de las protestas. Su finalidad, avalada y promulgada por diversos agentes del Estado, los medios de información masiva y diversos sectores de la sociedad, fue abonar la imagen

⁶⁴- Massetti (2007) reconoce esto al afirmar que la “identidad es un proceso: no es un producto estático, sino relacional” (p. 67). Esta “representación piquetera”, según el autor, se ha ido institucionalizando o cristalizando, no permitiendo una mayor profundidad en el debate sobre las políticas que generan pobreza, etc. Giarraca y Bidaseca (2001) consideran que en las acciones de protesta “se ponen en acto los esquemas cognitivos, los de interpretación, las traducciones que posibilitan negociaciones o enfrentamientos” (p. 31).

⁶⁵- Svampa y Pandolfi (2004) señalan que la centralidad que ha venido adquiriendo la problemática de la “inseguridad ciudadana” se ha traducido en una política de criminalización de la pobreza, como aparece ilustrado por el llamado Plan de Protección Integral de los Barrios, que comenzó en noviembre de 2003 con la ocupación por parte de las fuerzas de seguridad de tres grandes villas de emergencia del conurbano bonaerense y que pretende extenderse a otras diez villas más. Esta avanzada conlleva una naturalización de la asociación entre “pobreza” y “delito”, categorizando a las poblaciones pobres como “clases peligrosas”, distinguiéndolas del resto de la sociedad y señalando sus núcleos habitacionales como mera fuente del delito.” (pp. 290-291).

maniquea de quienes protestaron –y de los piqueteros en particular- fomentando la estigmatización y discriminación de sus acciones y sus identidades político –ideológicas.

En este plano, esas “voces morales” señaladas más arriba fueron sistemáticamente contrastadas con igual o mayor fuerza por un esquema de interpretaciones dirigido a contraponer otro tipo de moralidad, relativizando la permanencia y difusión de aquellas identidades colectivas construidas en y por los sectores subordinados.

Así, quienes anunciaban perseguir la recuperación de condiciones dignas de vida, la reinserción laboral y mayor justicia social, etc., fueron objeto de una *resignificación* no recién en los últimos años, sino desde el comienzo mismo de su presentación en sociedad. Por ejemplo, el corte de rutas de 1996 fue inmediatamente calificado como una insubordinación popular al margen de la ley al ser definido por una jueza como *delito de sedición*. Figuras que se sistematizarían a lo largo de los años posteriores casi de manera directamente proporcional a la expansión geográfica de los hechos de protesta, a su intensidad y magnitud. De modo que aquella “presentación en sociedad” hecha en 1996 que gozó en principio del apoyo y simpatía de buena parte de la población –e incluso de dirigentes políticos locales-, fue también el punto de partida de la sistematización de las caracterizaciones negativas de esas luchas y de legitimidad de las acciones represivas por la mayoría de la dirigencia política y fracciones sociales eventualmente aliadas a aquellos, constituyendo lo que podríamos llamar una “*contraidentidad piquetera*”.

III- Acerca de lo novedoso de la forma de lucha. El concepto de *repertorio de acción colectiva* elaborado por Tilly es aplicado en los estudios locales para explicar las *rutinas de beligerancia* (Auyero, 2002) en el marco del modelo de acumulación neoliberal. Este último autor rescata al corte de rutas como uno de los repertorios sobresalientes en las luchas populares, construido, aplicado y retomado en los últimos años. Como ya señalamos, según estudios del PIMSA, los cortes de ruta representaron un método que había ido imponiéndose progresivamente en el período 1993-2001, conformando el 28 % del total de protestas. Según Schuster et al (2006), los cortes de ruta representan el 10 % del total de hechos de protestas registrados entre 1989 y mayo de 2003.

Se constituyen en repertorios culturales en tanto “se centran en los hábitos de beligerancia adoptados por los distintos actores, en las formas que toma la acción colectiva como resultado de expectativas compartidas e improvisaciones aprendidas” (Auyero, 2002, p.189). Lo cual nos permitiría entender que no sólo una situación de descontento social, de

marginalidad o pobreza es suficiente para disparar una acción colectiva de protesta, sino que es necesaria una serie de experiencias socialmente compartidas para que puedan ser dispuestas como herramienta de lucha. Esta explicación hermanada al concepto de estructuras de oportunidades políticas, no sólo es aplicable a las luchas de los últimos años, sino también a la de décadas anteriores e incluso, retomando la cita de Marx que mencionamos más arriba, a diversos conflictos desarrollados en la historia del capitalismo.

En otro trabajo el autor señala que “las huelgas en las fábricas dejan su lugar como forma predominante de protesta, a los cortes de rutas nacionales y provinciales” (Auyero, 2003, p. 46). Surgen así “nuevos formatos –el corte de ruta-, una nueva modalidad organizativa –la asamblea-” (Svampa y Pereyra, 2005, p. 347). Auyero reconocerá la influencia del movimiento obrero o del movimiento de tomas de tierras de fuerte raigambre en la zona suburbana en torno a la ciudad de Buenos Aires: “estas ‘nuevas formas’ no reemplazan a otras, como la huelga y la manifestación callejera, ni pueden ser asociadas simplemente a una demanda en particular como el reclamo de empleo” 2002, p. 192; 2003, p. 49). Pero, ¿cuán novedoso es este *repertorio* de la protesta?

Además de que el piquete fue utilizado reiteradamente en los últimos años por trabajadores empleados –y no es adjudicable sólo a los trabajadores desocupados-, dicha “herramienta de lucha” no se origina en sentido estricto en la década de 1990, como tampoco es propio solamente de los sectores populares de Argentina. Giarraca y Bidaseca (2001) consideran que en estos tipos de manifestaciones deben tomarse en cuenta la permanencia de una “memoria colectiva” de los reclamos. Las autoras se remiten al llamado “Grito de Alcorta”, la rebelión agraria de 1912 en el sur de la provincia de Santa Fe que diera origen a la Federación Agraria Argentina. Esta protesta que también se materializó en la interrupción de caminos se suma a otras experiencias para ser “actualizadas en años recientes a través de la memoria generacional” (p. 34). Agregamos que mucho antes de este hecho acontecido en un territorio estrictamente rural y nacional, las barricadas obreras en la Francia del siglo XIX –en un espacio urbano y en una etapa capitalista industrial ya desarrollada- fueron reiteradamente utilizadas como método de lucha/resistencia contra las fuerzas armadas de la burguesía durante revoluciones y revueltas obreras.⁶⁶

⁶⁶- Marx hace una profunda descripción de la utilización de esta metodología en las revoluciones de 1848 y 1871 en “Las luchas de clases en Francia (1848 a 1850)”, “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte” y en “La guerra civil en Francia”.

Trayéndonos a una etapa más reciente de la historia, Barbeta y Lapegna (2001) también reconocen que el corte de rutas como herramienta o dispositivo de protesta no es novedoso. En uno de los primeros artículos que trabajan estos problemas, consideran que una de las diferencias fundamentales entre los cortes y barricadas más recientes con respecto a los realizados en la década de 1970, está basada en un factor de permanencia: en la actualidad los cortes se realizan durante varias jornadas y no sólo una, en protestas masivas que toman forma de “puebladas” (p. 238), las cuales también aparecen adjudicadas a las protestas recientes y al movimiento piquetero (Svampa y Pereyra, 2005, p. 354).

Sin embargo, si nos remitimos a aquellas grandes manifestaciones populares de fines de la década de 1960 y comienzos de la década de 1970, nos encontramos que tanto las puebladas como las insurrecciones populares hoy conocidas con el sufijo “azo” en ocasiones involucraron a decenas de miles de personas durante varios días de manifestación. El “Tucumanazo” de noviembre de 1970 es ejemplo de esto.⁶⁷ Por otra parte, si bien hubo una fuerte intervención del movimiento obrero y estudiantil agremiado, en la mayoría de estas manifestaciones también hubo un contenido plural y heterogéneo de distintos sectores de la población y diversos intereses.⁶⁸

Además de ser dispositivos de posicionamiento territorial y combate fundamentalmente durante los Cordobazos, los Rosariazos, el Mendozazo y los Tucumanazos, la interrupción de vías de comunicación fue utilizada en pugnas gremiales y laborales. Durante las tomas de fábricas, los piquetes impidieron el acceso a las plantas e interrumpían el proceso productivo, o también eran utilizados como barrera de contención en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.⁶⁹

⁶⁷- En su trabajo “El Tucumanazo” (1997), Emilio Crenzel detalla la cronología de dicha insurrección popular día tras día.

⁶⁸- Por solo dar un ejemplo mencionamos al “Rocazo”, ocurrido en la localidad de General Roca, Provincia de Río Negro, en julio de 1972. Esta revuelta popular no comenzó teniendo objetivos sindicales o económicos, sino que su raíz se encuentra en un conflicto político entre fracciones de la pequeñoburguesía y de los sectores dominantes locales con el gobierno nacional. La protesta derivó en la incursión del Ejército y en un posterior enfrentamiento durante varios días, al cual se sumaron estudiantes, asalariados y población de los barrios pobres adyacentes.

⁶⁹- Algunas publicaciones recientes que señalan las barricadas obreras como herramienta de confrontación en ámbitos laborales son: Santella, A. (2007): “De la derrota de 1970 al Villazo de 1974”, sobre las luchas de los metalúrgicos de Villa Constitución, o Flores, G. (2007): “Lecciones de batalla. Una historia personal de los ’70”, sobre el proceso de huelgas y tomas de fábricas en el complejo industrial de Córdoba desde 1966 a 1970. También en la entrevista realizada por Néstor Kohan a Antonio Alac, dirigente gremial durante el “Choconazo”, la huelga de los obreros de la represa hidroeléctrica del Chocón en la provincia de Neuquén durante los meses de febrero y marzo de 1970. En “Antonio Alac, el Choconazo y las enseñanzas del clasismo”, www.rebellion.org.

En estos episodios la toma de la vía pública como campo de contienda, las barricadas, cortes de calles y rutas también estuvieron presentes como herramienta de lucha. Aquellos conflictos –mucho más recientes en la *memoria colectiva* más arriba señalada- fueron los momentos más sobresalientes de la organización popular frente a los proyectos político-económicos de las dictaduras de Onganía y Lanusse.⁷⁰

Podemos reconocer, sin embargo, dos aspectos a destacar que se diferencian con respecto a las luchas precedentes: 1) en primer lugar la frecuencia de su utilización y el uso dado en los conflictos, y 2) el carácter que adquiere en distintas coyunturas políticas.

1) Se han registrado miles de cortes de ruta en pocos años. Como vimos, su uso estuvo fuertemente condicionado por una etapa de masiva destrucción de puestos de trabajo, y la afrenta a las políticas económicas del Estado y a sus fuerzas de seguridad se trasladó a las calles y rutas durante buena parte de la década de 1990. Con la utilización de la interrupción de caminos se marcó el posicionamiento territorial como medida de presión más efectiva, y así *todo el proceso* de conflicto pasó a estar determinado por ese dispositivo de protesta. Frente la lucha en las calles de fines de 1960 y comienzos de 1970, en el que la barricada o piquete estaba supeditado a un recurso táctico dentro de un arsenal mayor de tipos de enfrentamiento (huelgas, ocupación de establecimientos, marchas e inclusive el enfrentamiento armado).

2) Lo que nos señala, en segundo lugar, la diferencia con respecto al carácter político que adopta la metodología usada. Los cortes de ruta de la última década se presentaron como herramienta en una serie de lo que podríamos llamar generalmente *luchas defensivas*: de las condiciones de vida, por la recuperación de bienes materiales básicos para la supervivencia y de inclusión a un modelo expulsivo del mercado de trabajo. Frente

⁷⁰- “Lucha de calles, lucha de clases” de Beba Balvé, Miguel Murmis, J. C. Marín et al; “El ’69. Huelga política de masas: Rosariazo - Cordobazo – Rosariazo”, de Beba y Beatriz Balvé; y “El Tucumanazo” de Emilio Crenzel, son algunos de las investigaciones que analizan exhaustivamente las rebeliones populares y sus métodos de lucha en Córdoba, Rosario y Tucumán respectivamente. Izaguirre y Aristizábal (2002) sostienen empíricamente lo que venimos exponiendo, incluso luego de las dictaduras de Onganía y Lanusse. Las formas de lucha de las fracciones obreras también son las asambleas, las marchas, movilizaciones y la ocupación de rutas y calles. Si bien la abrumadora mayoría de las acciones son en lugares de trabajo y sedes sindicales, la ocupación de la vía pública representa un 9 % en el total de hechos de conflicto (5656) desde la asunción de Cámpora (25/5/1973) hasta mediados de julio de 1975. De julio a octubre de 1973 (presidencia Lastiri), las movilizaciones en rutas y calles ocupan el 12,3 % del total de hechos de ese período (cuadro 6, p. 48). Si bien estrictamente no hablamos de piquetes, en esta coyuntura también existieron *territorios sociales* que incluyeron “no sólo la ‘toma’, sino también el paro, la asamblea, la reunión, el petitorio. (...) Por ello, la definición “social” de la posesión de un espacio es un dato insustituible cuando se trata de comprender las luchas entre clases o fracciones” (pp.47-48). La persistencia de ciertas herramientas rescatadas de la historia también es señalada por Tarrow (1997): “los trabajadores saben cómo hacer una huelga porque generaciones de trabajadores la han hecho antes que ellos; los parisienses construyen barricadas porque las barricadas están inscritas en la historia de las revueltas de esta ciudad” (p. 51).

a las metodologías de lucha de décadas anteriores llevadas a cabo durante dictaduras militares en un período de alza del conflicto político, sindical y estudiantil, con un carácter clasista en la mayoría de aquellos enfrentamientos. Es decir, un posicionamiento contestatario a las burocracias sindicales, a las patronales, a la persecución política y al modelo económico que imponían las Fuerzas Armadas aliadas a la burguesía local e internacional.

En tal sentido, el carácter “novedoso” del piquete sólo es concebible si no se tienen en cuenta los procesos de lucha precedentes en el marco del orden capitalista local. Su novedad radica no en el método en sí mismo, sino en todo caso, en su recuperación y utilización en una coyuntura política y económica distinta.

En conclusión, como formas de resistencia y organización de los sectores subordinados en la etapa del modelo de acumulación capitalista neoliberal, el análisis sociológico exige no escindir el método de lucha de una *historia* de luchas precedentes. Tanto el eventual surgimiento de “nuevos actores” (punto I), como el enfrentamiento de subjetividades y la construcción de identidades a partir de las protestas (punto II) y la permanencia o reformulación de métodos o “repertorios” de confrontación (punto III), nos plantean un escenario de pugna entre sectores con intereses sociales y políticos antagónicos que no está separado de un período más extenso de conflictos y que es necesario rescatar.

3.2. Los cortes de ruta: ¿protestas sin conflicto?

Las protestas mediante el corte de rutas –en algunos casos verdaderas revueltas populares- han sido caratuladas, desde las perspectivas teóricas revisadas, como *acciones contenciosas*, es decir acciones que implican un enfrentamiento. Allí los aspectos conceptuales acerca de los sujetos que intervinieron, las metodologías usadas y las identidades construidas aluden a un escenario renovado del conflicto. Esto se debe, creemos, a que los episodios de protesta son analizados como *hechos aislados* de los que los precedieron, es decir, escindidos de una multiplicidad de condiciones sociopolíticas históricas.

Desde nuestra perspectiva, nos alejamos de una lectura tendiente a la atomización de las formas, contenidos y los sujetos que componen un *nuevo repertorio* de la protesta durante la década de 1990. Remarcamos la necesidad de proyectar una genealogía de esas

manifestaciones y del condicionamiento histórico que ejerce el triunfo de las fracciones dominantes que lograron imponer el nuevo patrón de acumulación sobre la derrota política del campo popular. Sostenemos que deben ser entendidas como la expresión de un extenso *proceso* de resistencia a una expropiación social y económica en el que los “piqueteros” surgen como el sector más movilizadado de las clases asalariadas, como protagonistas de un estadio particular de luchas en el capitalismo local.

¿Cómo hacerlo? Ajustándonos a las protestas caracterizadas por el Movimiento Piquetero y por el corte de rutas como metodología de lucha, son justamente aquellas acciones contenciosas o enfrentamientos los que permiten una dimensión fundamental para el análisis si se toman como *unidades históricas* del conflicto.

Hablar de enfrentamiento no implica referirse unívocamente al encuentro armado; por el contrario consideramos que las acciones colectivas de protesta –en particular en aquellas caracterizadas por objetivos económicos y laborales- implican en sí mismas una confrontación con el poder político y económico dominante. Tampoco nos referimos a cualquier tipo de enfrentamiento, sino a aquellos que significan una toma de posición, que implican una organización previa de la acción colectiva. Y en este sentido consideramos junto a Izaguirre y Aristizábal que el enfrentamiento es “el eje heurístico más importante de la vida social. (...) Las diversas versiones vulgares sobre la teoría de la lucha de clases ignoran la mirada dialéctica, y tienen en cambio un sesgo positivista que ha tendido a cosificarla, como si primero existieran las clases y luego su movimiento” (pp. 9-10).⁷¹

Desde ya reconocemos que los enfrentamientos en sí mismos como unidades aisladas no permiten la adopción de un marco teórico en especial para poder conceptualizar un proceso, una genealogía o una historia de la conflictividad. De modo que la teoría de la lucha de clases como una de las teorías del conflicto social no puede ser determinada a partir de la clasificación o categorización de una serie de enfrentamientos, ni de un recorte temporal o en un estudio de casos como el que aquí analizamos. Dicha teoría es holista, es decir, requiere un marco de totalidad de análisis para poder ser aplicada.

⁷¹- Desde otra perspectiva teórica pero refiriéndose también al carácter histórico de la acción colectiva, Tarrow (1997) llega a una conclusión similar: “la acción colectiva ha caracterizado a la sociedad humana desde que existe el conflicto social. Esto es, desde el momento en que puede decirse que existe una sociedad humana.” (p. 142). Foucault (2000) también rescata la violencia y la confrontación como elementos primordiales en la configuración de la vida social y de la civilización moderna. Seleccionamos un párrafo que grafica esta idea: “el derecho, la paz, las leyes nacieron en la sangre y el fango de las batallas. (...) no se trata de una especie de salvajismo teórico. La ley nace de las batallas reales, de las victorias, las masacres, las conquistas que tienen su fecha y sus héroes de horror; la ley nace de las ciudades incendiadas, de las tierras devastadas; surge con los famosos inocentes que agonizan mientras nace el día” (p. 56).

Nuestra intención entonces es establecer a los casos a estudiar en un sistema político, económico e ideológico de carácter histórico en el que a partir del enfrentamiento como momento de *síntesis*, las protestas pueden ser comprendidas como parte de una totalidad, de un proceso de lucha más extenso en el cual interviene la historia de los enfrentamientos materiales y simbólicos precedentes.

Tomados como unidades centrales del análisis, los enfrentamientos hacen visibles a los sujetos que intervienen, o a las fracciones sociales en un proceso de lucha; es decir, la conformación de *fuerzas sociales* en formación y en pugna. Estos momentos de síntesis también abarcan diversos métodos de confrontación, que como hemos visto, tienen una raigambre histórica. Al mismo tiempo, estos momentos son los ejes por los cuales, a lo largo de un período, se constituyen identidades que también se encuentran en disputa: las provenientes de los mismos impulsores de las protestas frente a las de los sectores dominantes y sus aliados.⁷²

Sugerimos que la dinámica de estos conflictos expresa una instancia particular de un proceso amplio de lucha de clases; y para ello abandonamos de plano el prejuicio que se suele tener: aparentemente sólo habría lucha de clases cuando las “masas proletarias movilizadas” se enfrentan a un régimen de dominación burgués. Escapamos a “las diversas versiones vulgares sobre la teoría de la lucha de clases que ignoran la mirada dialéctica, y tienen en cambio un sesgo positivista que ha tendido a cosificarla, como si primero existieran las clases y luego su movimiento” (Izaguirre y Aristizábal, 2002, pp. 9-10).

Rescatamos esta evaluación porque no pretendemos descifrar de manera economicista el eslabón que ocupan esas clases en la cadena productiva, sino cómo se articulan entre sí en un proceso de enfrentamientos para poder hablar de lucha de clases. En su análisis de las clases sociales en el capitalismo, Poulantzas (1998) dirá que las mismas “cubren *prácticas de clase*, es decir, la lucha de clases no se dan sino en su *oposición*. (...). El *aspecto principal* de un análisis de las clases sociales es el de sus *lugares* en la lucha de clases: no es el de los *agentes* que las componen” (pp. 13-16). Se trata de

asumir que la formación de las clases es un proceso histórico donde se articulan factores políticos, ideológicos, culturales, organizativos, que son tan decisivos como el anclaje estructural. En consecuencia, la identificación de las clases y de su lucha no puede llevarse a cabo mediante una deducción abstracta de determinados rasgos

⁷²- Los “piqueteros” y “fogoneros” neuquinos (1996-1997) o los “autoconvocados” correntinos (1999) se autodenominaron así a partir de la toma de rutas, plazas y puentes, de las exigencias elevadas a los representantes del poder político y de confluir en una serie de objetivos en una confrontación abierta.

estructurales, sino a partir de análisis que combinen la atención a la estructura con la identificación de los mecanismos por los que es posible referir a ella el comportamiento efectivo de los actores colectivos en situaciones particulares. (Vilas, 1995, p. 70).

Así, hablamos en todo caso de un *repertorio del conflicto* que es necesario contextualizar en la expresión local del desarrollo concreto del capitalismo, en el que las expresiones materiales y simbólicas de esa afrenta -la represión y penalización de las fracciones insubordinadas de la sociedad además de su vinculación a lo delictivo y lo ideológicamente peligroso- constituyen un mapa que difícilmente podríamos definir como *nuevo*.

Entendidos así, los episodios de enfrentamiento que aquí se analizarán son parte de un *proceso histórico* de disputas entre sectores antagónicos. Entendemos que esas disputas se presentan como una instancia anterior (o posterior) a la conformación de las clases sociales; son parte de su *sociogénesis*, en la que las confrontaciones pueden tomar diversos grados de desarrollo, objetivos de lucha, y personificaciones sociales.

3.3. Antecedentes de los casos.

Antes de la presentación de los casos señalaremos algunos hechos que representan lo que consideramos sus antecedentes directos, por el carácter del conflicto, las metodologías utilizadas y el marco económico, político y social en el que se realizaron. Es el caso de los trabajadores mineros despedidos por la empresa Hipasam en Sierra Grande, provincia de Río Negro, en 1991. La protesta en ese caso se inició cuando la mina de hierro desaceleró su producción expulsando fuerza de trabajo y clausurando la mayor fuente de recursos laborales del lugar.

Años más tarde, e inscribiéndose quizás como uno de los hechos de mayor relevancia en la trayectoria de conflictos de este período, señalamos el levantamiento popular de Santiago del Estero en diciembre de 1993, episodio que reúne una serie de elementos que resurgirán en las posteriores protestas (principalmente en Salta durante el año 2000). Esta rebelión popular conocida como “Santiagueñazo” se efectuó el 16 de diciembre de 1993, y fue el corolario de un período de reclamos elevados por asalariados estatales a raíz del atraso de meses en el pago de los haberes. La situación se tornó caótica en una provincia donde prácticamente el 40 % de la población económicamente activa dependía del empleo

público. Luego de una serie de manifestaciones que fueron acrecentándose en el nivel de enfrentamiento y en la represión por parte de las fuerzas de seguridad, miles de manifestantes -asalariados del Estado, jubilados, maestros, trabajadores desocupados y estudiantes- quemaron las sedes de los tres poderes del Estado provincial e incendiaron los domicilios de los principales funcionarios políticos del gobierno -pertenecientes al Partido Justicialista- y de dirigentes sindicales, todos ellos fuertemente cuestionados por la población. (Ver Cotarelo, 1999; y Auyero, 2004 a).⁷³

Sin dudas se trató del episodio de confrontación social más importante de la primera mitad de la década de 1990. También en esta ocasión se registró una producción discursiva que condenó moral e ideológicamente a sus integrantes: el propio presidente Carlos Menem se preguntaba “si esto es producto de nuestros hermanos o de agitadores profesionales que son los que incitan a la violencia” (*Clarín*, 18 y 19/12/1993, citado en Bonnet, 2007 a, p. 256).⁷⁴

Otro hecho relevante fue la protesta obrera en Tierra del Fuego durante la Semana Santa de 1995. Los trabajadores despedidos de la fábrica Continental Fueguina tomaron el establecimiento en reclamo de fuentes laborales y del pago indemnizatorio. Luego de una orden judicial, las tropas de Gendarmería avanzaron en las instalaciones y arremetieron violentamente contra los trabajadores. El saldo del enfrentamiento fue, además de decenas de heridos, la muerte de Víctor Choque, víctima de una bala disparada por un policía. Choque se transformó en la primera víctima de la represión institucional en una protesta obrera desde el retorno de la democracia en 1983.

En el plano de la construcción de sentido, las acciones de quienes combatían las condiciones de pauperización continuaron siendo objeto de una sistemática condena por parte de la mayoría de los agentes del Estado. Así se establecieron

⁷³- Este hecho es considerado un motín por su carácter espontáneo (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000), en donde no hubo un objetivo o dirección política clara en las acciones de protesta. En los posteriores episodios es posible registrar, de manera gradual, una tendencia a una mayor actividad política colectiva conciente (prácticas asamblearias, intervención de organizaciones de trabajadores desocupados y ocupados -sindicatos-, elección de delegados y representantes en cada una de las protestas, etc.). En esto radicaría lo que los autores señalan como formas más sistemáticas de protesta.

⁷⁴- Poco después comparó el hecho con la naciente rebelión zapatista en el sur de México (enero de 1994) y apuntó a la militancia de izquierda como la responsable de los ataques a los edificios públicos: “hay que mirar alrededor de nuestro país y vamos a ver en otras partes del mundo cómo la subversión no deja avanzar a los pueblos. Eso es lo que pretenden instalar algunos pequeños políticos aquí en nuestro país.” (*Clarín*, 9-04-1994, citado en Cotarelo, 1999, p. 88). Meses más tarde el presidente reivindicó sin eufemismos el papel de las FF. AA. y del Ejército en la dictadura: “Nosotros, gracias a la presencia de las FFAA en este caso el Ejército- lo cortés no quita lo valiente- triunfamos en esta guerra sucia que puso al borde de la disolución a nuestra comunidad” (*Página 12*, 3-11-1994). En este tipo de declaraciones, las palabras del primer mandatario mantuvieron la coherencia en la caracterización de los distintos conflictos que analizaremos.

nuevos criterios de demarcación al interior de un mundo popular que ha implosionado: individuos peligrosos, no por su condición de trabajador, sino justamente por haber dejado de serlo. Algo de esto se advierte en distintos movimientos hacia la criminalización de la protesta social por parte de algunos medios y ciertos miembros de los sucesivos gobiernos desde diciembre de 2001. (Armony, V. y Kessler, G., 2004, p. 111).

Pero, como ya señalamos y comprobaremos a continuación, no es a partir de la crisis de 2001 que se criminalizó y penalizó a los sectores populares en lucha.

Como antecedentes en este eje de investigación podemos mencionar los trabajos de Díaz Muñoz (2005), Maneiro (2004), Scribano y Schuster (2004), Scribano (2009) y Maneiro, Farías y Santana (2009). En el trabajo del año 2004, la autora intenta una sistematización de declaraciones y producción simbólica en torno a la protesta social y a su criminalización. Específicamente toma tres territorios (Neuquén 1996 y 1997, Salta en mayo y diciembre de 2000 y Puente Pueyrredón en junio 2002) en donde recoge una serie de declaraciones “como momento de cristalización de una determinada relación de poder en el plano ideológico” (p. 10) junto a otros conflictos en donde intervino la justicia iniciando causas penales a los manifestantes. En el artículo de 2009, los autores trabajan sobre más de 300 noticias publicadas por el diario *Clarín* desde el año 2004 al 2007 en una situación política y económica del país sustancialmente distinta a la estudiamos en la presente tesis. Mediante la estrategia comunicativa del diario, las identidades que se le otorgan a las movilizaciones piqueteras y de desocupados cambian: a través del análisis de contenido (la frecuencia de aparición de palabras específicas en los titulares y cuerpos de las noticias), se concluye que existe “una fase ascendente para el *núcleo desocupación* y una fase descendente, con tendencia a la desaparición, del *núcleo piquetero*” (p. 17), marcando diversas etapas de confrontación.

Scribano y Schuster (2004) rescatan las tergiversaciones de las causas sociales de la protesta y en particular los piqueteros, y el peso que adquirió lo que los autores llaman una “lógica lombrosiana”, o la adjudicación de características criminales a quienes protestan (Scribano, 2009). Lo que Massetti (2006) llama “teoría de la manzana podrida”, aludiendo a la estrategia oficial por desprestigiar la protesta social. Por su parte, Klachko (2002) indaga en la organización popular a lo largo de una serie de hechos de resistencia al modelo neoliberal durante la década de 1990. También hace mención a la intervención discursiva

de diversos funcionarios políticos cuando existieron desenlaces represivos, focalizándose en los casos de la provincia de Neuquén.

En la presente investigación tomaremos en cuenta algunas de las dimensiones analizadas en las investigaciones mencionadas. Aunque el objetivo principal es, como se especificó, circunscribir y *sistematizar* las declaraciones en tanto construcción de conocimiento y de disputas simbólico-ideológicas en relación con el aspecto material de los enfrentamientos durante conflictos realizados mediante el corte de ruta.

3.3.1. Por qué se seleccionaron esos hechos.

Luego de la revisión del contexto, causas, objetivos y actores involucrados en la protesta y en particular de los cortes de ruta, explicaremos brevemente los criterios de selección de los casos de estudio.

Algunos de los cortes de ruta más relevantes en el inicio de la actual década se dieron en la ruta 3 en el conurbano bonaerense en octubre de 2000 y en mayo de 2001. El partido de la Matanza se convirtió por esos años en una verdadera “usina” de cortes de ruta, impulsados por dos organizaciones piqueteras fuertemente arraigadas en ese municipio: la CCC (Corriente Clasista y Combativa, ligada al Partido Comunista Revolucionario) conducida por Juan Carlos Alderete y por la FTV (Federación de Tierra y Vivienda, ligada a la CTA), conducida por Luis D’Elía en el mismo distrito. Simultáneas a los cortes de ruta realizados de Salta que más tarde analizaremos, las protestas de La Matanza nunca terminaron en choques con las fuerzas de seguridad. En el primer caso se trató de un corte que duró 5 días, mientras que el del año 2001 se extendió por 17 jornadas, aunque allí también se escucharon voces desde el gobierno que señalaban la intervención de “activistas infiltrados”.

Pero, ¿por qué estas manifestaciones no fueron finalmente reprimidas? Una respuesta tentativa apuntaría a los ámbitos y sujetos que intervinieron en los conflictos. La movilización de miles de personas en el conurbano interrumpiendo los principales accesos a la Capital Federal contaba con el apoyo de CTA, uno de los principales agrupamientos sindicales que, en alianza con estas organizaciones piqueteras, contaba con el poder de paralizar la actividad en la administración pública y la docencia. Por otra parte, en esos años sendas organizaciones administraban casi 50.000 subsidios y planes de trabajo para

desocupados, en un distrito –La Matanza- que contaba con una de las tasas más altas de desocupación, indigencia y trabajo precarizado de todo el país. Con estas especificidades y a menos de media hora de la Capital Federal, aquellos cortes se presentaban como sumamente problemáticos para un tratamiento represivo. Además, las organizaciones mencionadas siempre tuvieron un canal de diálogo abierto con los Gobiernos nacional y provincial, aunque por momentos se haya interrumpido o tornado más disruptivo.

Esa correlación de fuerzas era muy distinta a la presentada por las manifestaciones de los pueblos salteños, con un grado mayor de aislamiento con respecto a otros movimientos (sindicatos, organizaciones piqueteras de mayor envergadura o Movimientos de Trabajadores Desocupados más desarrollados, como sí ocurría en el conurbano bonaerense). Aplicar políticas represivas en cortes de ruta de dos localidades pequeñas del norte del país tendría costos políticos menores, como efectivamente sucedió.⁷⁵

La magnitud de la violencia institucional aplicada en las provincias de Neuquén, Corrientes o Salta, llegaría a los movimientos piqueteros de los partidos del Gran Buenos Aires recién luego de la crisis y los enfrentamientos de diciembre de 2001. Meses después del llamado “Argentinazo”, y con un Gobierno nacional presuroso por reorganizarse políticamente ante la profundísima crisis económica, no hubo espacio para la negociación. Así, durante la conocida “masacre de Avellaneda” ocurrida durante el gobierno de transición de Duhalde, se atacó a las corrientes más contestatarias del extenso arco de las organizaciones piqueteras, alejadas de aquellas que por entonces sí tenían un canal de diálogo con el Ejecutivo Nacional.

De modo que nos limitaremos a aquellas protestas que, además de compartir algunas características similares con otros hechos que aquí no tomamos, concuerdan en ser episodios de insubordinación por parte de diversos sectores postergados, disueltas mediante la violencia estatal acompañada por una producción ideológica y moral que la justificó y avaló. Podemos señalar cuatro criterios o factores particulares que los hacen distinguibles y

⁷⁵- De hecho en las provincias donde hubo mayor represión y alta intensidad de enfrentamientos se registró una cantidad marginal de cortes dentro del panorama nacional. El estudio del Centro Nueva Mayoría publicado en el diario *La Nación* (28-06-2002) reflejó esto con respecto a los cortes de ruta de 1997 a 2002 según el lugar donde se realizaron.: Neuquén con el 4 %, Corrientes con el 1 % y Salta con el 6 %. La provincia de Buenos Aires y la Capital Federal representaron el 28 % y el 12 % del total respectivamente. Otro indicador de la magnitud que alcanzó el movimiento piquetero bonaerense a partir del año 2000 fue el Primer Congreso Piquetero, realizado en la localidad de San Justo en julio de 2001. Allí asistieron más de 2000 delegados en representación de cientos de organizaciones populares, territoriales y de trabajadores desocupados de todo el país, además de representantes de partidos de izquierda, de la CTA e incluso el poderoso sindicalista Hugo Moyano, aunque fue abucheado por los asistentes.

que los aúnan dentro del conjunto de los hechos de protesta que incluyeron desenlaces represivos durante la década de 1990:

1- La metodología de protesta y la magnitud en la participación: los casos seleccionados estuvieron condicionadas por el corte de ruta o piquete como acción directa de confrontación en los cuales participaron miles de personas. En cinco de los seis casos tomados (1996 a 2001) se convirtieron en verdaderas puebladas, involucrando en algunos casos a decenas de miles de personas de una o varias ciudades;

2- La perduración en el tiempo: se trata de protestas que se sostuvieron como mínimo durante una semana, o que sus enfrentamientos fueron el corolario de un período extenso de reclamos;

3- La delimitación territorial como escenario del conflicto: se trata de protestas que ocuparon y “sitaron” zonas aledañas a sus viviendas, lugares de trabajo o vías de comunicación y traslado de mercancías;

4- La intensidad del enfrentamiento con la dirigencia política: en todos estos casos intervinieron las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales de manera violenta provocando muertos –excepto en el caso de Neuquén en 1996- decenas de heridos y detenidos.

Las características de los conflictos seleccionados están circunscriptas, a su vez, a un período de profundización de las consecuencias sociales ocasionadas por el modelo “neoliberal”. Se trata, en tal sentido, de conflictos que reúnen en sus protagonistas una “voluntad de resistir a determinados efectos de las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno (...), experiencias de organización propia que, aunque transitorias, son independientes de los partidos políticos tradicionales” (Klachko, 1999, p. 154).

Capítulo 4

Cutral Có y Plaza Huincul, 1996. Los indicios de la deslegitimación del conflicto.



La jueza Gudiño de Argüelles, reunida con los manifestantes antes de declararse incompetente

Cutral-Có: Sapag se instaló en el pueblo con su gabinete

Sediciosos: así calificó la jueza Gudiño a los manifestantes que bloquean las rutas 17 y 22; el gobernador Sapag viajó al lugar y los gremios convocaron a un paro activo para hoy.

"El gobernador Sapag se quedará lo que sea necesario, diez, quince días..." aseguró a LA NACIÓN el intendente de Cutral-Có, Daniel Martínez (Movimiento Popular Neuquino), luego de la conferencia de prensa que se realizó en el lugar y a la que asistió el gobernador de Neuquén, Felipe Sapag. Mientras tanto, un grupo de manifestantes se acercaba desde Pasaje Tierra hasta la intendencia para dialogar con Sapag.

Los gremios estatales de Neuquén, junto con el Congreso de los Trabajadores Argentinos, convocaron a un paro para hoy en apoyo a la protesta de los habitantes de Cutral-Có y Plaza Huincul, en demanda de fuentes laborales.

Sapag viajó de urgencia desde La Pampa cuando se enteró de que la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles se había declarado "incompetente" para de-

salajar a los manifestantes de la ruta 22, que lo exigen a gritos "que venga Felipe".

El intendente Martínez explicó que "la gente está en un pico de tensión, pero yo creo que se tiene que tranquilizar y retomar su curso normal; la patada ya está hecha". Con respecto a la decisión de la jueza Gudiño, opinó que "tomó una decisión de acuerdo con la realidad". La jueza, que regresó a su domicilio en Neuquén alrededor de las 17.30 de ayer, pidió a sus asistentes que expliquen que "desea descansar".

Por su parte, el director de Comunicaciones de la provincia, Andrés Ogando, dijo a LA NACIÓN que "el gobernador Sapag y su gabinete tienen una carpeta de actividades lista para trabajar en Cutral-Có y en Plaza Huincul", pero no especificó cuáles serán las tareas.

Ogando afirmó que "el problema es del gobierno anterior" en referencia al antecesor de Sapag en el cargo, Jorge Schisch, y precisó que lo que hicieron es frenar "un tema desventajoso para la provincia", al tiempo que reiteró que en 30 días Sapag convocará a una licitación internacional para construir la planta.

Además, afirmó que el gobernador no está de acuerdo con la jueza Gudiño de Argüelles, que aproró que los manifestantes están "en delito de sedición".

Figura 1: Diario *La Nación*, 26-06-96. En la foto, la jueza que intervino en el desalojo junto a tropas de la Gendarmería –uno de ellos filmando a los manifestantes– y la Policía federal.

4.1. El contexto provincial

La provincia de Neuquén -junto con Río Negro y el resto de las provincias patagónicas- fue declarada Territorio Nacional a partir de 1884, luego de la campaña de expropiación y exterminio llevada a cabo por el general Julio A. Roca contra los pueblos originarios de la región. Fue constituida como provincia recién en 1955.

Se ubica en el norte patagónico en lo que podríamos llamar una “comarca petrolera”, una región con vastas reservas de ese combustible y de gas natural. La explotación hidrocarburífera se convirtió en la principal actividad económica, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Junto con la construcción de los complejos hidroeléctricos El Chocón -a fines de la década de 1960, el mayor de la Patagonia, privatizado en 1993-, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila, Neuquén se convirtió en un importante polo energético a nivel nacional, clave para el desarrollo de infraestructura.

El impulso estatal dado a la exploración y explotación de petróleo y a la construcción del embalse El Chocón, transformó a la región en un centro de migración interna y de países limítrofes a raíz de la prometedora actividad económica. Entre ellos, numerosos militantes sindicales y políticos que, instalados a fines de la década de 1960, también empezaron a ejercer una militancia en las nacientes fuentes de trabajo.

El ingreso a la provincia de este tipo de migración conformó “una pirámide caracterizada por una población joven con base ancha y cúspide estrecha, aunque después de los años ochenta se observa un leve ensanchamiento de los grupos de edad activa” (Favaro, 2002).⁷⁶ Esta tendencia es reconocible todavía en el censo de 1991, en donde se registra que el 28 % de la población en Neuquén era proveniente de Buenos Aires, Río Negro o Córdoba.

El desarrollo de las actividades mencionadas provocó consecuentemente el incremento del sector terciario (servicios de administración, finanzas, transporte, comercio,

⁷⁶- Durante fines de la década de 1960 y primera mitad de la década de 1970 muchos de estos migrantes fueron personas vinculadas a la militancia social, política y/o gremial que recurrían a la provincia de Neuquén como “refugio interno” ante la escalada del conflicto social a nivel nacional. El papel del monseñor Jaime De Nevaes fue determinante para que estos nuevos pobladores se asienten tanto en la capital como en el interior de la provincia, y encuentren un amparo en la militancia de Derechos Humanos que la iglesia local mantuvo desde entonces. El sacerdote tuvo una activa participación en la defensa de las luchas obreras de la época, como en el conocido Choconazo de 1969.

etc.). Los trabajadores de este sector sumados a los trabajadores del Estado abarcan en la última década a dos tercios del total de asalariados ocupados. Pese a la privatización de YPF y de Gas del Estado, el empleo generado por el Estado sigue siendo importante en la actualidad: “los obreros y empleados del sector público son casi tantos como los del sector privado (56.396 y 57.648 respectivamente, según el censo de 2001); y del total de la población ocupada un 34 % trabaja para el Estado, porcentaje muy superior al existente a nivel nacional (alrededor de un 18 %)” (Petrucci, 2005, pp. 16-17). Por último, la producción frutihortícola es reducida en comparación con los valores generados por los yacimientos y es llevada a cabo por pequeños chacareros en el departamento de Confluencia (que limita con el valle rionegrino).

Dentro de la geografía provincial, las ciudades de Cutral C6 y Plaza Huincul se ubican a poco m6s de 100 Km. al oeste de la capital, en medio del 6rido territorio patag6nico. Su origen est6 determinado por el descubrimiento de los recursos naturales del subsuelo: con el emplazamiento del primer pozo petrol6fero en la zona (1918) se funda Plaza Huincul y m6s tarde Cutral C6 en 1933 (D6az, Fern6ndez y Gerez, 2006). Hoy los l6mites que separan estas ciudades son casi imperceptibles, conformando una poblaci6n pr6cticamente unificada.

El desarrollo de la empresa YPF en la regi6n constituy6 lo que I6nigo Carrera, Podest6, y Cotarelo (1999) denominan “capitalismo de Estado en enclaves”. Es decir, una actividad productiva limitada a pocas ramas y una econom6a basada en la extracci6n de materias primas y su elaboraci6n, con un peso relativamente importante del proletariado industrial, asalariados del Estado. La empresa signific6 la fuente de trabajo para ingenieros, obreros calificados, operarios, empleados administrativos, etc.; y tambi6n implic6 la presencia del Estado como administrador de pol6ticas de contenci6n y desarrollo social y comunitario a trav6s del fomento de establecimientos educativos, viviendas, servicios urbanos (sanitarios, iluminaci6n, pavimentaci6n de caminos) e instalaciones para actividades culturales y de esparcimiento. En tal sentido, Svampa (2002) se6ala que adem6s de fomentar una econom6a regional, YPF se convirti6 en un “Estado dentro del Estado: el mundo laboral de la zona explotada, y de manera m6s extensa, la vida social, estuvo estructurada en torno de YPF.” (p. 27).

Este escenario se revirti6 completamente con el paradigma neoliberal de la d6cada de 1990 y la caracterizaci6n del Estado nacional como una enorme bolsa de empleo ineficaz e ineficiente. La reforma del Estado y el consecuente “ajuste” de empleados sepult6

definitivamente aquella vida laboral y social en derredor de YPF. La empresa redujo su fuerza de trabajo a escala nacional de más de 51 mil empleados en 1990 empleados a casi 6 mil luego de las privatizaciones (Svampa y Pereyra, 2003, p. 105). Estas políticas se sintieron en carne propia en ambas ciudades neuquinas, pues allí la empresa despidió paulatinamente a la mayor parte del personal, alrededor de 3.500 personas -aunque también se afirmaba que de los 5000 empleados con que contaba la empresa en esta región, solo 500 quedaron ocupados (*La Nación*, 29-06-96)-. Sumada a esta política de menores costos -o la puesta en práctica de *las furias del interés privado*- significó, como señalan Díaz, Fernández y Gerez (2006) “no comprometerse con el saneamiento ambiental, con la salud, con la educación o el bienestar de los participantes en el proceso productivo.” (p. 15).⁷⁷

Luego de los despidos, los empleados que contaban con mayor antigüedad recibieron una cifra de dinero que les permitió asociarse y formar nuevas pequeñas y medianas empresas de servicios dirigidas a la tercerización de actividades relacionadas a la extracción de petróleo, algunas de las cuales hoy todavía funcionan. Pero esta no fue la suerte que corrió la gran mayoría de empleados despedidos.

Las firmas interesadas en YPF se dedicaron en “asesorar” a quienes iban a ser “desvinculados” de la empresa para que con las indemnizaciones puedan comenzar sus propios proyectos productivos. Parte de esta estrategia incluía los Programas de Propiedad Participada (o PPP), incluidos en el artículo 16 de la ley 23.696 de Reforma del Estado (ver capítulo 2). Estos programas involucraban a una parte de los despedidos como “copropietarios” de una parte del capital social de YPF, a través del 10 % las acciones que retuvo el Estado nacional en la venta de la empresa (acciones que se vendieron posteriormente en 1999). Pero tanto las indemnizaciones –pagadas con préstamos de los organismos internacionales de financiamiento mediante un nuevo endeudamiento del Estado nacional- como la promesa a los miles de ex empleados de convertirse en virtuales accionistas, no resolvieron a mediano plazo la situación estructural de la economía regional.

⁷⁷- La privatización de YPF implicó una serie de violaciones graves al medio ambiente y a las comunidades circundantes a las zonas de explotación del petróleo. “Repsol YPF arrebató y devastó tierras pertenecientes a las comunidades Mapuches Paynemil y Kaxipayiñ en Loma de la Lata, Neuquén. Ha ocurrido una severa disminución de los recursos naturales y esto se nota en la menor superficie utilizada para áreas de pastoreo, pérdida y fragmentación de áreas naturales con la consecuente extinción de plantas de uso medicinal además de la desaparición de especies autóctonas como guanacos y choiques.” (Observatorio de las empresas transnacionales, 2008, p. 16).

En realidad se abrió un proceso de pauperización de los sectores asalariados calificados y no calificados y de la vida urbana en general, pues la mayoría de los micro-emprendimientos iniciados terminaron en quiebra (Cotarelo, 2005). Esto se refleja en el relato de los ex obreros de la empresa e incluso en personas no directamente vinculadas a la misma. Juan Carlos Garcés fue operario de YPF hasta que fue despedido a principios de la década de 1990. Actualmente es cuentapropista y sigue viviendo en Plaza Huincul. Fue uno de los protagonistas de la masiva protesta de 1996, y recuerda desde su perspectiva lo que significó la privatización:

“YPF era la mayor fuente de trabajo genuino en estas localidades. Fueron echados a la calle alrededor de seis mil empleados efectivos de todos los sectores: ingeniería de obra, montaje, perforación, carpintería, soldadura, herrería, comunicaciones, destilería, producción, transporte pesado y liviano... Es decir, toda esa infinidad de trabajadores calificados que tenía la empresa fueron marginados. Cuando ocurren las privatizaciones, el Estado mafioso de Menem y los grupos económicos tratan de disfrazar los despidos masivos con un poco de plata. Algunos que entendían decían ‘no, con veinte mil pesos no compro ni un auto nuevo’. A otros los tentaban con cuarenta mil, con cincuenta mil. En mi caso yo cobré trece mil pesos. (...) Pero echaron trabajadores, no echaron empresarios. Y los trabajadores no sabían más que trabajar. Ahí empieza la debacle. En el '92 algunos ya no tenían un mango más. En el '93 se fue agravando más, empezaron las separaciones en los hogares, o muchos se mataban, se ahorcaban...”

Las privatizaciones fueron ejecutadas sin un plan estratégico a mediano y largo plazo que contuviera la enorme masa de población económicamente activa que finalmente quedó desocupada. Retomando las palabras del entrevistado, quienes vendían su fuerza de trabajo como único modo de subsistencia, fueron obligados a terminar ese contrato con sus nuevos empleadores sin perspectiva inmediata.

Rita Santarelli en 1996 tenía 40 años y era empleada no docente en la secretaría de extensión universitaria de la UTN. Con un grupo de psicólogos sociales coordinó actividades de expresión corporal en su ciudad. Luego de la protesta de 1996 fue diputada provincial de la UCR. Vive en Cutral C6, como en aquel entonces. Sobre lo que significó la venta de YPF en las ciudades, recuerda:

“Lo que pasó en 1996 tiene relación directa con lo que pasó con YPF. Con la explotación petrolera en estas comunidades se vivía muy bien porque todo el mundo tenía trabajo, y trabajo con excelentes sueldos, así que era una entrada de dinero muy grande y de un bienestar muy importante. Cuando YPF y Gas del Estado se privatizan son cuatro mil personas las que quedan sin trabajo con todas sus familias. Así que realmente eso fue de un impacto terrible. (...) Nosotros teníamos una actividad, un grupo de dramatización en

donde se veía una semana antes de los cortes que la gente anunció lo que iba a pasar aca... Por supuesto no lo leímos en el momento, pero una semana antes en los sketches que la gente armaba se hacían protestas, por ejemplo yendo a visitar al vicegobernador, y lo representaban haciéndole reclamos, haciendo movilizaciones... Por eso te digo que esto fue mucho más allá de la mecha que lo dispara porque creo que el ánimo social era compartido por todos.

En menos de un lustro, la estructura económica de la región basada en la explotación del subsuelo prácticamente no había cambiado, pero el rango de inclusión en el proceso productivo sí lo había hecho, y de manera dramática. Hacia 1993 la actividad productiva ya estaba “limitada a pocas ramas extractivas, lo que sigue dando esa característica de economía de enclave y predominio de la gran industria en pocas empresas monopólicas.” (Iñigo Carrera, 1999, p. 64).

La Encuesta Permanente de Hogares realizada en abril de 1996 (un mes antes de los episodios de protesta en las ciudades en cuestión) registraba en toda la provincia una desocupación del 13 % de la PEA. Pero en Cutral Có y Plaza Huinca esa tasa superaba el 20 % (alrededor de 4.000 personas). Todavía en el año 2001, según el Censo Nacional, se registraba en ambas ciudades una PEA de 17.700 personas de la cual aproximadamente el 29 % estaba desocupada. Esto influyó sin dudas en el crecimiento poblacional: en 1991 la población de estas ciudades en conjunto sumaba, según datos del INDEC, unos 45.384 habitantes, cifra que para el año 2001 sería de 46.268 habitantes. Un incremento de la población que no llega al 2 %, mientras que el crecimiento del departamento Confluencia (que contiene a estas ciudades y a Neuquén capital) fue del 19 %, y el promedio provincial del 22 %.

La desarticulación de la empresa tal y como había existido hasta principios de los años '90 no solo significó un fuerte impacto negativo en las relaciones laborales y económicas de la comunidad. También se vio afectada la relación entre población e instituciones políticas, tanto estatales como partidarias. Esto se debe en parte a que el carácter de exclusividad que adquirió la explotación de yacimientos carburíferos en la economía regional está en concatenación directa con la historia política y partidaria de los últimos sesenta años en la provincia.

Como vimos más arriba, Neuquén tuvo una “ciudadanización” tardía, a partir de una organización institucional que recién se emprendería en 1958, durante el régimen militar que derrocó a Perón. Con el peronismo proscripto, la Unión Cívica Radical Intransigente salió victoriosa durante la primera elección provincial. Pero a partir de 1960 el peronismo

regional constituyó un partido que reunía a la dirigencia política activa durante el primer y segundo gobierno de Perón. Con la prohibición de siquiera mencionar el nombre del ex presidente, en 1961 surgió el Movimiento Popular Neuquino (MPN) que comenzó a gobernar en 1963 manteniéndose hegemónico hasta la actualidad (Favaro y Iuorno, 2005). Incluso durante gobiernos de facto sus miembros estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo provincial (el mismo Sapag, fundador y líder histórico del partido, fue interventor luego de los golpes de Estado militares de Onganía y Lanusse). Este mapa político condicionó fuertemente la gestación y el desenvolvimiento de la representación partidaria hasta nuestros días.

Antes de la privatización de la extracción y producción de petróleo y con el Estado nacional promoviendo dicha actividad, el desarrollo de una burguesía industrial en la provincia fue prácticamente nulo. Consecuentemente creció y se propagó una burguesía comercial y de servicios en torno a aquella economía de enclave, que fue la que en buena parte nutrió las filas del MPN dado que las estrategias de acumulación de los propietarios de las empresas de servicios y comercio están en relación directa con la política de regalías que deja el negocio del petróleo a las arcas provinciales.⁷⁸

Las relaciones entre dirigencia partidaria y burguesía comercial no han impedido que el MPN desarrolle un fuerte anclaje entre los sectores más postergados de la población. Por el contrario, sus prácticas clientelares con grandes sectores de la población neuquina se acentuaron con el proceso de desmantelamiento de la economía de enclave que significó la empresa estatal YPF y el posterior crecimiento de la desocupación. Es justamente el carácter de “Partido - Movimiento - Estado” -según la denominación de Favaro y Iuorno (2005)- lo que permitió un perfil de partido policlasista que utiliza el aparato de Estado desde hace décadas como usina de políticas clientelares.

A comienzos de la década de 1990 surgió una disputa interna de la cual resultó la división entre *amarillos* (corriente liderada por Sapag) y *blancos*, (línea conducida por Sobisch –inicialmente cercano a Sapag-, de carácter tecnocrático y liberal). La disputa marcó los últimos quince años de existencia de este partido.

⁷⁸- “La elite dominante de Neuquén está integrada por empresarios ligados al Estado y al Partido –Sapag, Salvatori y Sobisch (los tres gobernadores en diversas épocas) eran empresarios antes de llegar al poder, el último de hecho un empresario semifundido- y por un estrato de funcionarios estatales (profesionales o más llanamente ‘punteros’), buena parte de los cuales logran amasar en poco tiempo una considerable fortuna privada.” (Petrucci, 2006, p. 18). En 2003 el MPN contaba con alrededor de siete mil punteros en toda la provincia y más de cien mil afiliados (Favaro y Iuorno, 2005, p. 46).

Tanto la situación económica estructural -con un nivel de desocupación enorme en poblaciones relativamente pequeñas- como el fuerte cuestionamiento de la población a la administración de Sapag, conformaron el panorama en el cual se desarrollaron las protestas de 1996, luego revitalizadas y retomadas en 1997.

4.2. Génesis y desarrollo del conflicto

Hacia 1996, con las ciudades de Cutral C6 y Plaza Huincul sumidas en la crisis económica y laboral que brevemente repasamos, se hablaba de la instalación de una importante inversión privada. Desde 1992 corría una versión que concentraba las esperanzas en la población de atenuar el crucial problema de desocupación, basada en la posibilidad de abrir una planta de fertilizantes. Las tratativas con la empresa de origen canadiense “Agrium” comenzaron durante la anterior administración de Sobisch, opositor a Sapag en la interna del MPN, quien se había comprometido a financiar el emprendimiento con una suma de cien millones de dólares.

Sin embargo esto nunca se llevó a cabo en el gobierno de Sapag, posterior gobernador, quien argumentó que la provincia no estaba en condiciones de asumir semejante compromiso. Con el proyecto de reactivación económica prácticamente trunco, el 20 de junio de 1996 el gobernador informaba acerca de “una actitud dilatoria de la empresa en responder a las propuestas alternativas de la gobernación”. (*La Mañana del Sur*, 20-6-96).⁷⁹ Aunque se insistía en que el proyecto no se cancelaba sino que se suspendía (había promesas de comenzar a trabajar en los pliegos para una nueva licitación pública), la sensación en la población de ambas ciudades fue de suma decepción. La posibilidad de la instalación fabril se esfumaba definitivamente, generando el punto máximo de descontento popular.

Con el anuncio de la paralización de las negociaciones emitido por una radio local el mismo 20 de junio de 1996, algunos vecinos llamaron a una manifestación para las 16.00 hs. que finalmente interrumpió la Ruta Nacional 22 entre los pueblos de Cutral-C6 y Plaza Huincul. En pocas horas los cortes se multiplicaron en distintos puntos de la ruta con la

⁷⁹- La versión empresarial fue otra. Pocos días después de suspenderse el contrato, la empresa canadiense publicaba una solicitada en donde anunciaba que “se reservaba el derecho de iniciar acciones legales” por lo que consideraban abrupto fin a tres años de negociaciones “transparentes, de buena fe y con arreglo a disposiciones legales vigentes”. (*La Mañana del Sur*, 27-06-96)

movilización de cientos de personas. Los primeros en apostarse en los cortes fueron docentes y estudiantes, luego acompañados por operarios desocupados de la ex empresa estatal YPF junto a sus familias; además de asalariados y fracciones de la pequeña burguesía local, cuentapropistas, e incluso dirigentes locales de los partidos mayoritarios como el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical.⁸⁰

El objetivo central de la movilización era reclamar la presencia del gobernador Sapag y encontrar algún tipo de solución a la crisis provincial de manera inmediata, ante el fracaso de reconversión productiva que personificaba la industria de fertilizantes. El gobernador no se hizo presente, y el principal punto de corte de ruta se extendió colocándose frente al acceso de la planta destiladora de Plaza Huincul, perteneciente a la ya privatizada Repsol-YPF. Este acto resumía el carácter representativo de la crisis en la región, la vinculación estrecha entre desocupación y privatización de las instalaciones de la empresa petrolífera. A raíz de esta decisión se reforzó la cantidad de efectivos y patrullas de seguridad privada de la empresa en el perímetro de la planta, además de solicitar la presencia de la policía provincial.

Durante los primeros días de protesta –cuando los piquetes todavía no superaban la decena- circuló un texto que se había leído en diversas radiodifusoras de la zona. En el mismo se expresa condensadamente los objetivos de la acción de los miles de vecinos movilizados, su percepción de la situación crítica en la que se encontraban y sus motivaciones:

“Hoy el pueblo de Cutral Có y Plaza Huincul está de pie, luchando por la dignidad de su gente, cortamos las rutas de ingreso a estas dos ciudades porque pretendemos hacer escuchar nuestros derechos en búsqueda de una reactivación económica real y concreta. La desocupación, el hambre y la falta de respuestas del gobierno provincial nos llevaron a esto. Si hoy cortamos las rutas es porque sentimos indignación, marginalidad y olvido. Nuestra gente que hoy ocupa las rutas es la misma que durante varias décadas brindó su trabajo de sol a sol para que esta provincia y el país creciera... Entonces considerando la “falta de respuestas oficiales”, lo mínimo que podemos pretender es una reparación histórica. (...) Ya no nos sirven las mentiras de algunos segundones... Hoy queremos a Felipe Sapag sí o sí.” (La mañana del Sur, 23-06-96).

Con el transcurso de los días el corte se propagó a otros accesos (rutas provinciales N° 17 y N° 10) y a las “picadas”, o caminos de acceso a los pozos petrolíferos trazados por las

⁸⁰- Si bien en la mayoría de las investigaciones que trabajan sobre la protesta social y los cortes de ruta recientes ubican a este episodio como el que “inaugura” un ciclo de protesta, en rigor no es el primero. A fines de 1994 y comienzos de 1995 en la localidad de Senillosa, a unos 30 Km. al oeste de la capital, obreros desocupados de la construcción comenzaron sus reclamos por puestos de trabajo cortando rutas y organizándose en asambleas, como indicio de lo que ocurriría en 1996. (Oviedo, 2004, p. 31).

mismas compañías. El ingreso al aeropuerto de Cutral-Có quedó interrumpido, y se suspendieron los vuelos previstos a la región. Con el bloqueo a la refinería ubicada en Plaza Huinca pronto comenzó a sentirse el desabastecimiento de combustible, y las naftas, el gasoil y el querosén –principal elemento de calefacción de hogares para la mayoría de la población- debieron ser transportados desde las destilerías de Comodoro Rivadavia y Luján (Mendoza). Lo propio ocurrió con los alimentos frescos, que comenzaron a escasear con el impedimento del paso de camiones.

Para contrarrestar la situación los mismos pobladores organizaron el abastecimiento de alimentos y combustible en los salones comunitarios de los barrios. Taxis y otros vehículos acercaban gratuitamente a quienes se dirigían a los “puestos de bloqueo” (tal es el nombre que se le daba a los cortes de ruta en los diarios durante los primeros días del reclamo).



Figura 2. Una de las calles principales de Cutral Có. La avenida C. H. Rodríguez, vía de comunicación directa al corte de la ruta 22.

Los docentes se organizaron en grupos para cocinar y distribuir alimentos en cortes cercanos a los establecimientos educativos, mientras que diversas asociaciones vecinales y centros de jubilados participaban de la repartición de viandas a los puestos de guardia. (*Río Negro*, 24-06-96).

Desde un principio la adhesión a la protesta fue masiva: los bancos oficiales y privados permanecían cerrados, no se dictaron clases, los negocios permanecieron cerrados en un 90 % y en las estaciones de servicio solo podían cargar combustible los vehículos de apoyo al bloqueo (*Clarín*, 22-6-96).

La reacción del gobernador Sapag cuando la interrupción del tránsito tomó estado público fue llamar a los intendentes de las ciudades para avisar que estaba dispuesto a dialogar, siempre y cuando se depusiera la actitud de los pobladores. Sin embargo, las barricadas se fueron multiplicando a lo largo de la ruta, pasando a ser el epicentro de reuniones sociales, discusión política e incluso de esparcimiento. En cada piquete se congregaban cientos de personas, llegando a ser alrededor de 5.000 si sumamos a todos los puestos. Durante algunos períodos y en asambleas generales se llegó a picos de 20.000 personas, es decir, prácticamente la mitad del total de ambas poblaciones.

La presencia de dirigentes políticos -desde consejales hasta diputados provinciales e intendentes, tanto oficialistas como opositores- es una de las características a destacar de esta protesta. Su presencia, según lo que se desprende de la lectura de los diarios y de la versión de los mismos protagonistas del reclamo, fue importante en los primeros días, siendo prácticamente nula hacia el final.

Surgen algunas explicaciones al respecto. En primer lugar la presión popular fue tan masiva, rápida y contundente que obligó a algunos dirigentes políticos a intentar plegarse a la protesta,⁸¹ “salir a la calle” e intentar contener los reclamos invocando la presencia del gobernador. Este fue el caso de los intendentes de Plaza Huincul y Cutral Có, Alberto “Tucho” Pérez y Daniel Martinasso respectivamente, ante una situación que había desbordado sendos gobiernos municipales.⁸² Además de tener que otorgar asueto a los trabajadores municipales y de la administración pública que se sumaron a la protesta, los intendentes asistieron a los cortes flanqueados por policías de civil e intentaron el diálogo con los manifestantes, con el objetivo de apaciguar los ánimos en un clima de reiterados pedidos de renuncia e insultos. (*Río Negro*, 22 y 25-6-96). Daniel Baum, diputado provincial del PJ residente en Cutral Có sufrió la misma reacción de los pobladores al intentar arengar a los presentes al comienzo de la protesta. El hecho de que los funcionarios

⁸¹- Tal el caso del Secretario de Acción Social de la municipalidad de Plaza Huincul inició una huelga de hambre junto a otras seis personas, reclamando la presencia del gobernador y en solidaridad con los manifestantes.

⁸²- Ambos pertenecían a la corriente “amarilla”, interna del MPN leal al gobernador Sapag. Aunque Martinasso se mantuvo crítico al gobierno provincial durante todo el conflicto.

se sometieran cambiar el ámbito de conversación –de sus despachos a las rutas- y dieran explicaciones *in situ*, nos habla de la magnitud de la movilización, más aún si se tiene en cuenta que esta situación es prácticamente nula en las protestas de la década de 1990. También debemos tener en cuenta que desde el principio la protesta fue impulsada por sectores de la pequeña burguesía empobrecida de la zona, que llamaron rápidamente la atención de los funcionarios locales.⁸³

En segundo lugar intervinieron políticos que explotaron la veta del conflicto interno “emepenista”. Desde un principio Sapag apuntó a la “oposición interna del MPN y al PJ” como responsables de la movilización. Esta acusación se basó en que algunos dirigentes habrían vislumbrado una posible acreditación política para sus propias huestes a partir del fracaso de la negociación entre el gobierno y la empresa canadiense. Dirigentes de la UCR y el PJ pero principalmente de la corriente perteneciente a la línea “blanca” del MPN -en donde militaba el ex gobernador Sobisch en 1996-, cargaron acusaciones de ineptitud e ineficiencia contra la administración Sapag. Es el caso de Adolfo Grittini, ex intendente de Cutral C6, quien fue uno de los que convocó a los manifestantes a iniciar la medida y a continuarla trasladando la protesta, si era necesario, a la ciudad capital. Sobre 6l cayeron las principales sospechas provenientes del oficialismo que lo acusaban de “agitar” políticamente a la poblaci6n. Grittini manifestó su solidaridad y su presencia física en la protesta prácticamente desde el primer día, y sus enunciados eran prácticamente iguales a los de un manifestante más:

No vamos a aflojar. En cualquier momento traemos maquinaria y hacemos alg6n talud de tierra, para asegurar las barreras. Si viene Gendarmería, veremos qué hacer...” Adolfo Grittini, ex intendente Cutral C6, (MPN). *La mañana del Sur*, 23-6-96.

En la investigaci6n de Auyero (2004 a) se menciona la cantidad y calidad de recursos que el ex intendente habría movilizado para la realizaci6n de la protesta. Muchos de los entrevistados por el autor hablan del aporte de camiones cargados de cubiertas para alimentar el fuego de las barricadas, la provisi6n de combustible gratuito a los veh6culos que se dirigi6n a los puestos de bloqueo en las estaciones de servicio de su propiedad, como dem6s insumos para sostener la presencia de los manifestantes: alimentos, frazadas, combustible para calefaccionarse, etc. Incluso desde el oficialismo se acus6 a la radio “FM Victoria” –que difundió por primera vez el fracaso de las negociaciones entre la empresa de

⁸³- Con el an6lisis de los pr6ximos casos veremos que la extracci6n social y pol6tica de quienes protestan ser6 un dato importante en cuanto al itinerario de respuestas dado por los Gobiernos nacional o provincial.

fertilizantes y el gobierno- de estar vinculada con el ex intendente y de cumplir un rol de “alcahueta” al incentivar a la población a cortar la ruta. El intendente de Cutral Có, Daniel Martinasso declaraba que “hay gente de mi propio partido que sigue manejando intereses personales y sectoriales”. (*Río Negro*, 24-06-96, p. 11). El mismo gobernador hablaba de la agitación de “cinco o seis dirigentes que todos conocen” (*La mañana del sur*, 24-06-96, p. 4) pertenecientes a la corriente interna del MPN opositora a su gestión, quienes habrían fomentado la protesta.⁸⁴ En otro artículo (Auyero, 2004 b) pero siguiendo el mismo aspecto, el autor señala que los políticos locales facilitaron ciertos recursos que fueron aprovechados por los manifestantes (p. 420).⁸⁵

Pero, ¿hasta qué punto la intervención de agentes del Estado fue determinante en la movilización popular, en un marco de descontento de larga data y con un conflicto con una empresa extranjera que presentaba un escenario altamente desfavorable para los gobiernos municipales? Si bien la acción de algunos dirigentes políticos pudo haber sembrado un marco de singular “oportunidad” para el desarrollo de la protesta –y para el aprovechamiento en la disputa entre internas partidarias-, esos recursos dispuestos por algunos funcionarios no son directamente proporcionales a la intensidad y masividad que tuvo la protesta casi desde un principio.

Por otra parte, la protesta tuvo desde un principio un carácter autogestivo por fuera de los círculos políticos tradicionales que eran fuertemente repudiados. De hecho la presencia de punteros o dirigentes que en un principio intervinieron facilitando ciertos elementos o “haciendo sugerencias”, fue diluyéndose paulatinamente a medida que el reclamo, lejos de disminuir, acrecentara su intensidad y presencia en la vía pública.

⁸⁴- Diez años después de la pueblada, el ahora ex intendente mantiene su posición: “No tengo dudas de que fue un intento de desestabilización, querían un quilombo grande”. El propio diario Río Negro hoy relata los episodios atribuyendo la responsabilidad de lo ocurrido a la interna partidaria: “la 'vendetta' de una facción del partido provincial (los blancos sobischistas) contra sus archienemigos (los amarillos de Sapag). (...) Fueron los blancos los que pusieron en marcha la maquinaria que terminó mutando en una anárquica manifestación popular que birló a todos los gobernantes: la pueblada de Cutral Co y Plaza Huinul. Abría los ojos un Frankenstein de compleja genética.” (*Río Negro*, 25-6-06). La definición de “anárquica” es utilizada como sinónimo de “caótica”, aunque a todas luces se evidenciaba una creciente organización popular. No sería la última vez que la movilización de una población es reducida a esas características o al manejo especulativo o conspirativo de dirigentes políticos, descartando factores sociales más complejos relacionados con la estructura social, el contexto y la historia de un conflicto. Poco después de esas declaraciones, en octubre de 2006 Martinasso fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue hallado culpable del delito de fraude a la administración pública por la utilización irregular de recursos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional durante la gestión del ex presidente Carlos Menem. (*Río Negro*, 21-10-2006).

⁸⁵- (“In the language of Tilly’s classic *From Mobilization to Revolution*, we witness a veritable mobilization of resources that, linked to elite factionalism, provides aggrieved actors the opportunity to voice their discontent”).

El 23 de junio, con tres días seguidos sosteniendo los cortes de ruta, se realizó al aire libre una multitudinaria misa con la presencia del obispo Agustín Radrizzani, quien se ofreció a mediar entre los manifestantes y el gobierno. Fue ante unas 1.500 personas, en donde apeló a que se arribe a una postura dialoguista. Ese mismo día quedaron expuestas dos posiciones diferenciadas. En primer lugar se encontraban quienes estaban más dispuestos a la negociación y a trasladarse al despacho oficial del gobernador en Neuquén capital. Aunque los intendentes de las dos ciudades nunca obtuvieron el apoyo pleno durante la protesta, en principio lograron una alianza con estos grupos “moderados” más dispuestos a una negociación. La idea era formar una comisión junto con concejales, comerciantes y comisiones barriales y ser recibidos por el gobernador en la capital, aunque bajo la condición de que se mantengan los cortes. Los intendentes no solo no lograron la negociación temprana que pretendían, sino que debieron ofrecer apoyo a quienes se mantuvieron firmes en el reclamo. Así, los municipios de Plaza Huincul y Cutral C6, exigidos por los manifestantes, enviaron camiones y leña hacia las barricadas para mejorar su funcionamiento. (*La mañana del sur*, 22-6-96).

El segundo grupo, mayoritario en las asambleas y en los piquetes, insistía en exigir al gobernador que se traslade a la zona del conflicto para discutir una serie de medidas urgentes como la restitución de suministro eléctrico a domicilios a los que se les había cortado y fundamentalmente una estrategia de corto plazo para la generación de empleos. Para ello, este grupo “duro” -así mencionado en los diarios locales- sostenía los 21 piquetes durante día y noche a lo largo de varios caminos tanto en las rutas nacionales que unen las localidades con la capital neuquina como en los caminos rurales entre campos de empresas y pozos petroleros.

El debate entre ambas posiciones no era menor. Optar por la segunda alternativa demandaba seguir sosteniendo el importante despliegue de presencia física e insumos en la ruta, y el inminente enfrentamiento con el poder ejecutivo y judicial de la provincia que ya habían comenzado a categorizar la protesta como ilegal. Pero el enfrentamiento no era solo retórico, ya que se hacía cada vez más firme la posibilidad de un enfrentamiento físico en la ruta con las fuerzas de seguridad del Estado provincial y nacional.

El funcionamiento interno de los grupos que sostenían las barricadas -y el mayor peso relativo que tenían los manifestantes que pretendían la continuidad de la protesta- se basaba en un hecho que los medios gráficos registraban con cierta perplejidad: en ningún momento se pudo esclarecer quiénes eran “los cabecillas” del reclamo. Si bien sí existían delegados

en cada uno de los piquetes, la presencia heterogénea de participantes (trabajadores ocupados y desocupados, comerciantes, estudiantes secundarios, profesores, organizaciones civiles, etc.), impidió que una fracción en particular pudiera hablar por todos. La consigna que se repetía desde las asambleas era que los representantes de la protesta eran todos los que participaban en ella, quienes decidían los pasos a seguir a través del debate y de la toma de decisiones de forma directa.

Esto no significa que un mismo tipo de organización haya abarcado todas las barricadas por igual. Por ejemplo, muchos de los entrevistados mencionan que había “puestos de peaje” en algunos sectores de la ruta por fuera de la tutela de las asambleas; jóvenes que dejaban pasar a algunos vehículos que entraban o salían de las ciudades a cambio de alguna “colaboración” (cigarrillos, alguna moneda, etc.).

De todos modos, cada piquete contaba con una autorregulación mediante el consenso y el debate en asambleas para definir tanto las normativas internas de funcionamiento como las decisiones en la discusión con el poder político. De manera que los manifestantes en su acción cotidiana avanzaron -con diversos matices y con prácticas heterogéneas- hacia un intento de reconocimiento entre iguales, a una dinámica autónoma de toma de decisiones. Aunque se trate de un saber provisorio (no se trata de una forma representativa constante que haya logrado plenitud sino surgida eventualmente en torno a un conflicto), nos habla de un modelo organizativo y representativo diferenciado de la representación política tradicional, más ligada a la heteronomía o a la verticalidad en la toma de decisiones.⁸⁶ Una metodología que si bien no es nueva en la historia de las luchas populares en el país, fue característica en esta protesta, en los posteriores cortes de ruta del país y en la dinámica interna de muchas de las “organizaciones piqueteras” que protagonizaron esos cortes y que conformaron luego agrupaciones políticas (muchos de los MTD del conurbano bonaerense, principalmente antes del asesinato de Kosteky y Santillán, por ejemplo).

La firme intención de permanecer con el corte de ruta luego del día 23 de junio generó algunos incidentes -menores, en comparación a los que ocurrirían en los días siguientes-: una camioneta de una empresa privada vinculada al negocio del petróleo embistió contra otra camioneta que cortaba la ruta, resultando heridas tres personas;

⁸⁶- Esto no quita que una vez finalizada la protesta aquellos referentes que tuvieron una participación más activa durante las asambleas, se hayan acercado a la “política tradicional”. Es el caso de algunos vecinos que se insertaron en partidos políticos mayoritarios en la provincia, llegando a ser candidatos e incluso funcionarios públicos.

además de la amenaza que hizo un gendarme con un arma de fuego a quienes se apostaban en el camino.

En un nuevo intento oficial por disipar la protesta, el vicegobernador Ricardo Corradi desde una emisora de radio local invitó una vez más a los manifestantes a trasladarse a la ciudad de Neuquén para acceder a una entrevista con el gobernador Sapag. El mensaje generó aún más indignación en los manifestantes, quienes siguieron reclamando que el gobernador se traslade a la zona del problema. Mientras tanto, en la capital se comenzaban a registrar manifestaciones de apoyo al corte mediante una marcha de trabajadores desocupados que finalizó frente al edificio municipal.

Quizás porque las metodologías de reclamo utilizadas todavía resultaban poco comunes en 1996 -sin olvidar la pueblada de Santiago del Estero de fines de 1993, que de todas formas no consistió en un corte sistemático de rutas-, las caracterizaciones todavía no contenían todos los elementos de desvalorización que luego serían regulares y directamente proporcionales al incremento de intensidad de las luchas. Sin embargo comenzaba a registrarse un enfrentamiento en el plano subjetivo en el que se disputaba el sentido de las acciones. Casi desde el comienzo de la protesta las caracterizaciones del gobierno provincial apuntaron a deslegitimar a los manifestantes vinculándolos a la figura de lo delictivo y la insubordinación política:

"No puedo ir a un lugar donde hay insubordinación. Ellos están en una actitud de fuerza que no es legítima. Ocupar el camino e impedir que la gente se mueva y trafique es un delito." Felipe Sapag, Gobernador, MPN. *Río Negro*, 22-6-96.⁸⁷

"(La investidura de gobernador) corre peligro de ser maltratada o regalada por un capricho de **alguien que está cometiendo un delito**. (...) Prácticamente todo el interior de la provincia ha quedado aislado. **Los que protestan no representan a nadie...**". Felipe Sapag, Gobernador, MPN. *Río Negro*, 24-6-96.

El problema de la representatividad y la legitimidad seguía siendo una constante para condenar y/o restar importancia al reclamo. En una provincia en donde las prácticas clientelares junto a un virtual ejército de militantes del MPN tenían décadas de ser el común denominador en la vida política, una protesta sin líderes reconocibles generaba

⁸⁷- El gobernador y todos los funcionarios de los tres poderes del Estado que se refieren al corte de rutas como un delito se respaldan en el Código Penal de la Nación. El artículo que hacen referencia a este hecho como delito se encuentra en el capítulo II del Título VII (Delitos contra la seguridad pública). Se trata del artículo 194, que reza: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años."

desconcierto y rechazo en los despachos oficiales, implicando casi automáticamente la ausencia de representatividad. Sin embargo, el conflicto continuaba registrando un apoyo popular inédito hasta entonces en aquellas ciudades. A esta altura la protesta había entrado en una fase de “desinstitucionalización” (Klachko 1999, p. 150), es decir, un funcionamiento autogestivo regido por asambleas en el que la poca participación



Figura 3. Corte en la ruta N° 22. En el epígrafe de la foto: “La medida de los pobladores se mantiene, aunque el gobernador dijo que cometen un delito.” Diario *Río Negro*, 24-06-96

institucional de un principio se convirtió en casi nula a medida que pasaban los días. Estos elementos políticos “no tradicionales” fueron utilizados para ubicar a esta protesta en un lugar de desprestigio para el poder político.

Frente a este tipo de percepción, los manifestantes que fueron entrevistados relataron otra perspectiva de los hechos. Como mencionamos en el apartado metodológico, propusimos un “dispositivo de rememoración” que consistió en la lectura de algunas de las declaraciones con juicios de valor negativos. Esto nos permitió abrir un arco de reflexión a partir de la interpelación de otras interpretaciones de la acción, que iba más allá del relato sobre la

experiencia propia durante los cortes de ruta.

Cabe destacar que la mayoría de estas personas, protagonistas de los cortes, tenían una idea más o menos certera sobre los términos publicados por entonces. De modo que la lectura de aquellas declaraciones no sorprendía, aunque sí generaba cierta consternación: la pueblada marcó en todos los manifestantes un hito en el que, además de una lucha por objetivos económicos y directamente vinculados a la generación de empleos, también se

dirimían cuestiones afectivas, de solidaridad, de búsqueda mancomunada por mejores perspectivas de vida.

Rita Santarelli (ex empleada no docente en la secretaría de extensión universitaria de la UTN y ex diputada por la UCR) participó del corte de rutas desde el principio, y ante la lectura de las declaraciones que hablaban de delito e ilegalidad, señala lo siguiente:

“El ánimo social era compartido por todos. Nadie pensó que la protesta era ilegítima. Yo tenía amigas que iban con trajecito y tacos altos a ver qué pasaba, saliendo del laburo. (...) Todos los días, hasta los más reacios, se sumaron a la ruta a ver qué pasaba. Me parece que si todo el mundo acciona algo, es totalmente legítimo.”

Juan Carlos Garcés (ex operario de YPF) opina sobre el carácter representativo de la pueblada y sobre la *dimensión delictiva* que comenzó a circular desde el gobierno provincial:

“La constitución tiene previsto el derecho a peticionar ante las autoridades, a manifestarse libremente, asociarse, agremiarse, a publicar sus ideas sin censura, a participar en movimientos políticos libremente. Nosotros estábamos ejerciendo un derecho constitucional de peticionar ante las autoridades la falta de trabajo, la exclusión social. ¿Está claro eso? No consideramos en ningún momento que era delito. Porque siguen habiendo miles de cortes y no es delito. ¿La jueza va a procesar a 40 mil tipos? ¿De qué los va a condenar, a ver? El que comete delito es el Estado opresor, el que hambrea, el que somete, el Estado que afana en nombre de los pobres.”

Omar Pinchulef actualmente es obrero en la fábrica de cerámicos Zanón. En 1996 tenía 25 años y era cadete de un policlínico en Neuquén. Opina acerca de la representatividad:

Por ahí están acostumbrados a que haya un líder de todo movimiento que represente... Por ahí pretendían que haya alguien que les diga lo que estaba pasando. Y en ese momento era todo el pueblo el que estaba ahí, ¿qué más verdad que esa querés? Ahí estaba el pueblo, era la representación completa. (...) Evidentemente no se hacen cargo que si la gente está ahí es porque hay una necesidad que los motiva y esa necesidad fue generada por las decisiones políticas que el Estado tomó, o por la falta de previsión en las políticas.

Para los funcionarios políticos, las razones y motivos de la protesta pasaron a un segundo plano y el hecho que comenzó a primar y a requerir una solución fue la desobediencia a las autoridades. El método para esa solución era, cada vez con más fuerza,

el de la movilización de tropas. El día 24 de junio arribó un grupo de la Gendarmería a la capital neuquina en tres aviones Hércules del Ejército, provenientes de la base aérea de El Palomar (provincia de Buenos Aires), mientras que otro grupo provenía por vía terrestre desde Santa Rosa (La Pampa). Además se alistaban 400 efectivos y unos 33 vehículos (entre ellos varios camiones hidrantes y una tanqueta), y perros adiestrados.



Figura 4. Diario Clarín, 25-6-96

El reclamo seguía firme y el gobernador seguía negándose sistemáticamente a acercarse y dialogar con los pobladores. Durante estos días fueron más frecuentes los mensajes que emparentaban violencia e ilegalidad con la protesta, al tiempo que el llamado a que sea disuelta por medio de la fuerza se hacía más notorio:

"No es con violencia como se puede solucionar el problema. La crisis está culminando; la gente que está en la ruta 22 debe desalojarla inmediatamente. Felipe Sapag, Gobernador, MPN. *Río Negro*, 25-6-96.

"No pueden entorpecer una vía de comunicación. Si no acatan la orden, se desocupará la ruta mediante la fuerza pública." Margarita Gudiño de Argüelles, Jueza federal. *Página 12*, 25-6-96.

"Vamos a atravesar los piquetes, no puede ser que no nos dejen salir de nuestro pueblo. Que vengán los gendarmes y entren a los garrotazos, ya me forrearón cuatro días, no aguanto más. No nos pueden manejar el pueblo dos o tres personas, vamos a pasar." Alberto César Pérez, Intendente de Plaza Huinul, *La Mañana del Sur*, 25-6-96.

Esta última declaración es paradigmática en cuanto al comportamiento de los dirigentes políticos oficialistas: aunque cinco días antes el entonces intendente de Plaza Huincul había intentado formar una alianza con una parte de los vecinos en los mismos piquetes, ahora sin eufemismos exigía el uso de la violencia legal –sobre un pueblo manejado por *dos o tres personas-*, diferenciada de la violencia ilegal que supuso una protesta de ésta índole.

Por su parte, la jueza Federal de Neuquén Margarita Gudiño de Argüelles solicitó al Ministerio del Interior el traslado inmediato de fuerzas del grupo antimotín de Gendarmería. Fue también en su juzgado donde se inició la causa penal que involucró a los pobladores que ejercían la protesta.

Finalmente el martes 25 de junio la jueza dio la orden de desalojo de la Ruta 22. En las asambleas a lo largo de los distintos piquetes se mantuvo la decisión de resistir un posible desalojo, y de un inminente enfrentamiento físico. Mariela Suárez vive actualmente en Cutral C6 y en 1996 era una más de los trabajadores desocupados. Grafica un detalle en la organización interna de los piquetes ante el inminente desalojo:

“Éramos más de diez mil en la ruta. Era tal la organización que ahí estaba uno con un grupo poniendo en la ruta el alambre que quedaba de las cubiertas quemadas, para que se enreden debajo de los hidrantes y no pudieran pasar. Venían y nos avisaban que iban a estar allá haciendo ese trabajito y que iban a tardar tanto..., y nosotros chochos. Ese día a las siete de la mañana también sonó la sirena y nosotros vivíamos en las quinientas viviendas, en el último barrio. Y vos te levantabas, salías a la ruta, un dedo y todo el mundo te levantaba porque todo el mundo se iba a la ruta. Era una confraternidad impresionante.

Desde las 10 hs. se produjeron choques entre los 400 efectivos de la Gendarmería y varios cientos de personas –en su mayoría jóvenes de los barrios más empobrecidos, con pasamontañas o capuchas, signo que luego se difundiría a nivel nacional en los posteriores cortes de ruta- que decidieron enfrentar a las fuerzas de seguridad. La Gendarmería arremetió contra las primeras barricadas dispuestas en lo que los pobladores llaman “la curva”, alrededor de 500 metros antes de la entrada a la ciudad de Plaza Huincul. Allí dispararon gases y balas de goma y lanzaron varios perros adiestrados al ataque de los jóvenes manifestantes que ofrecieron resistencia. Pero el primer avance contra los manifestantes desató una contraofensiva, fue así que los gendarmes comenzaron a recibir

una lluvia de cascotes y piedras. Uno de los hechos que recuerdan varios entrevistados es que en las primeras filas del combate un grupo de manifestantes capturó algunos de los perros “largados” por la Gendarmería, para luego ser arrojados muertos a la ruta, frente a los camiones hidrantes. Ese enfrentamiento arrojó un saldo de 27 heridos y un detenido por parte de los manifestantes y unos 10 gendarmes heridos.

Luego de avanzar unos cientos de metros, la formación militar se topó con alrededor de 20 mil personas -cifra que surge tanto de las crónicas de los medios gráficos como del relato de los manifestantes- cantando el himno nacional frente a “la torre”. En ese mismo lugar donde se habían llevado a cabo las asambleas generales se autoconvocaron una vez más los miles de comerciantes, docentes, trabajadores desocupados, empleados públicos, obreros, estudiantes (ver mapa en el anexo).



Figura 5. Entrada a la ciudad de Plaza Huincul. “La Torre” y la Ruta Nacional 22, lugar de encuentro y de formación de asambleas.

Frente a ese escenario con el que se toparon las tropas y la jueza, lo dicho por un gendarme se nos presenta hoy, tomando a Auyero (2002), casi como una reflexión sociológica: “no era joda, no podemos seguir porque es todo el pueblo, no son todos pibes... Hay gente bien vestida” (*Río Negro*, 26-06-96). Y “no era joda, no sólo por el

número sino por la diversidad del objetivo” (p. 198), que podría llegar a traer problemas ante la decisión de continuar con la avanzada represiva.

Ocurre que la elocuente frase no la dijo un gendarme cualquiera, sino el comandante mayor de Gendarmería Eduardo Jorge.⁸⁸ Y además del potencial problema que hubiera significado reprimir a la mitad de la población de ambos pueblos, la descripción contiene una carga ideológica y moral: “la gente bien vestida” es la que efectivamente representaba al pueblo o a la ciudadanía para los representantes del Estado en ese momento, y no era merecedora de una acción represiva. Una percepción que discrimina a las otras fracciones sociales sin nombrarlas: los desarrapados o los “pibes”, no representativos de la protesta, fueron más fácilmente ligados a imágenes de desorden y desfalco. Desde esa perspectiva, cabe preguntarse qué hubiera ocurrido si la cantidad de personas -con las singulares marcas sociales que señala el comandante de Gendarmería- no hubiera sido la suficiente para convencer de que *realmente* se trataba de un pueblo movilizado.

Fue así que la jueza decidió tomar una postura dialoguista. Cruzó las barricadas construidas con troncos, piedras y alambrados para hablar con un interlocutor o representante de la pueblada. Pero no pudo satisfacer esa demanda ya que no existía esa figura, de manera que se dirigió al conjunto apostándose con un altavoz sobre un móvil policial. Al momento de comenzar con su arenga para que se desaloje el camino, fue interrumpida con constantes silbatinas y con un repudio generalizado. El grito casi unánime era exigir, como desde el primer día, la presencia del Gobernador para iniciar el diálogo.

Minutos más tarde la jueza informaba –luego de haber pasado por una situación de miedo, tal y como confesó a diversos medios días más tarde- que se declaraba incompetente para resolver el caso y que se retiraba del lugar junto con las tropas.⁸⁹ Esto desató la algarabía de los presentes, que tomaron el hecho como un triunfo producto de su resistencia y organización en el corte.

⁸⁸ - Horacio Verbitsky señala que dicho comandante que formaba parte de Gendarmería desde la década del '70 y que intervino en la pueblada de 1997, había sido responsable del campo de concentración que funcionó en la Compañía de Arsenales del Ejército “Miguel de Azcuénaga”, en la provincia de Tucumán. “(...) Allí asistió personalmente al general Domingo Antonio Bussi en la ejecución mediante disparos en la cabeza de personas cuyos cuerpos caían en pozos donde eran quemados con neumáticos y una mezcla de nafta y aceite” (*Página 12*, 18-12-99). Las expresiones de este comandante son un indicador más de los fundamentos de clase del Estado en cuanto al “orden y a la seguridad interior”.

⁸⁹ - Este lugar de reunión refiere efectivamente a una torre de petróleo que se encuentra junto a una bomba de extracción (popularmente conocida como “cigüeña”). Ambos símbolos de la actividad productiva primordial de la región se ubican en una plazoleta a la entrada de la localidad de Plaza Huincul. En ese lugar semidescampado y a la vera de la ruta es donde se conformaron los arduos debates entre los vecinos. También fue el lugar de reunión durante la pueblada de abril de 1997.

El desenlace de este episodio dejó, sin embargo, una nueva cuota de heridos entre los manifestantes. Al momento de retirarse, las fuerzas de seguridad respondieron a algunos piedrazas con nuevas cargas de gases y de balas de goma.

Además de las declaraciones de funcionarios y dirigentes del poder judicial y ejecutivo, se destaca la actitud tomada por algunos funcionarios del poder legislativo provincial e intendentes de diversas localidades. Sólo a partir de una protesta de casi una semana consecutiva, “manifestaron su preocupación” públicamente por la situación de crisis y elevaron exigencias al ejecutivo provincial para que se efectivice la instalación de la planta de fertilizantes en la región, argumentando la necesidad de “declarar en estado de emergencia social, ocupacional y productiva” a las localidades en cuestión. (*La mañana del sur*, 26-06-96).

El mismo día de los enfrentamientos, la multisectorial de Neuquén -que aglutinaba a los gremios docentes de ATEN, legislativo (ANEL), judicial (SEJUN), estatal (ATE) junto a partidos políticos, la APDH local y otras organizaciones de Derechos Humanos- convocó a un paro general -que obtuvo un alto acatamiento en las escuelas- y la movilización en apoyo a los pobladores de las localidades en conflicto. Según los diarios locales, más de 2.500 personas se movilizaron desde el centro de la ciudad hasta el puente que une las ciudades de Cipolletti con Neuquén -que sería uno de los epicentros en la protesta de marzo y abril de 1997-, interrumpiéndolo desde las 13 hs. hasta las 17 hs. Lo mismo ocurría en el puente que une la localidad neuquina de Centenario (al norte de la ciudad capital) con la localidad rionegrina de Cinco Saltos. Estos actos de solidaridad realizados por los gremios se produjeron, sin embargo, cuando el conflicto culminaba. A pesar de los consabidos trastornos producidos por el corte de estos importantes caminos, la población neuquina adhirió y saludó la medida. (*La Mañana del Sur*, 27-06-96).

Poco después del encuentro entre la jueza y las fuerzas de seguridad con los manifestantes, Sapag abandonaba una reunión cumbre de gobernadores patagónicos en la provincia de La Pampa. Retornó de urgencia a su provincia y finalmente asistió al punto de reunión de la pueblada, donde luego reconoció que pensaba que “los manifestantes no eran muchos”. Admitió públicamente como un error el haber suspendido la negociación con la empresa canadiense y, abucheado por la multitud, ubicó su despacho en el edificio municipal de Cutral Có para disponerse a atender en los días siguientes los reclamos que acercaban los delegados de las asambleas. Desde allí prometió la licitación nacional e internacional para la construcción de la fábrica de fertilizantes y poner en marcha el

yacimiento gasífero “El Mangrullo” para la comunidad. Pocas horas después firmó un acuerdo de 12 puntos con Laura Padilla, una trabajadora desocupada elegida como delegada en las asambleas.

La ruta nacional N° 22 y las rutas provinciales N° 10 y 17 fueron totalmente despejadas por los mismos manifestantes –que ya se denominaban a sí mismos como “piqueteros”- a partir de las 16 hs. del día 26 de junio. Los camiones, formando una larga caravana, se aprestaban a abandonar los lugares que habían ocupado estacionados durante casi una semana y retomaban el tránsito en la ruta saludados por los pobladores con aplausos.

Los representantes de las asambleas piqueteras se convirtieron durante y luego del conflicto en verdaderos actores políticos. Muchos de ellos se ocuparon a partir del día 28 de junio de organizar la labor de distribución de planes, alimentos, vestido, etc. En el gimnasio municipal de Cutral C6 se comenzó con la administración y entrega de estos insumos, además de los subsidios de 150 pesos mensuales a los trabajadores desocupados. Esta situación profundizó alguna situación de desconfianza y recelo mutuo entre los participantes de la pueblada, a partir de la sospecha de que algunos manifestantes estaban conectados con el partido gobernante.⁹⁰

El gobierno provincial dispuso por decreto la emergencia social y ocupacional en las dos ciudades que protagonizaron las protestas. Se logró la restauración inmediata de los servicios públicos (gas y electricidad) a quienes los tenían cortados por falta de pago, la puesta en marcha obras públicas de corto plazo, se repartieron 650 bolsas de alimento, además de la distribución de 2000 chapas, 300 colchones y frazadas, vestimenta y calzado. El Estado nacional envió una partida de 250.000 pesos, ya que la provincia carecía de fondos suficientes. El Banco Hipotecario Nacional dispuso la suspensión por 60 días del remate de las viviendas que contrajeron mora. Incluso se llegó a mencionar la creación de una unión transitoria de empresas para volver a explotar yacimientos petrolíferos en la

⁹⁰- Si bien desde un principio se habían identificado y rechazado a los políticos oficialistas que participaban de las primeras asambleas -los manifestantes no querían vincular la protesta con alguna “interna” política-, la acción del partido oficial nunca estuvo ausente, menos aún luego de llegado a un acuerdo. “El espectro de la traición estuvo presente durante esos siete días. (...) Cuando los piqueteros abandonaron la ruta y volvieron a sus casas, ese espectro se apoderó de la vida del pueblo.” (Auyero, 2004 a, p. 136). Menos de un año después, en la nueva pueblada ocurrida en abril de 1997, quienes cortaron la ruta y se enfrentaron con la Gendarmería se autodenominaron “fogoneros”, diferenciándose de los piqueteros de 1996, quienes habrían traicionado y claudicado la causa de la protesta. Incluso Laura Padilla, pocos meses después de haber protagonizado la negociación con Sapag, debió mudarse a la localidad rionegrina de General Roca, en parte a causa de la atmósfera de cuestionamiento de sus compañeros.

zona, y la construcción de escuelas, jardines de infantes y de un hospital que ocuparía a unas 250 personas.

En definitiva, las soluciones fueron temporarias y paliativas, fundadas en la asistencia del Estado en una región que sufría la reestructuración del único motor productivo de la provincia, la industria del petróleo. Las respuestas del Estado lograron que la protesta cese, aunque volverían a entrar en crisis pocos meses después cuando en abril de 1997 se reanudara el conflicto, esta vez con mayor intensidad.

4.3. De la desocupación a la sedición.

El registro realizado durante todo el episodio de protesta –desde los primeros días de junio de 1996 hasta principios de julio- está compuesto por un total de 95 declaraciones en los cinco diarios trabajados. Como expusimos en el apartado metodológico, las declaraciones contienen básicamente dos dimensiones distinguibles: a) definiciones y caracterizaciones, calificaciones y b) reclamos, denuncias, exigencias.

En la mayor parte de las declaraciones, tanto las calificaciones como los reclamos se encuentran en los mismos enunciados, aunque también estas dos clases de expresiones pueden encontrarse en forma alternada, sin que necesariamente estén juntas. Es decir, algunas expresiones contienen simplemente reclamos o denuncias, y otras específicamente se encargan de emitir opiniones sobre las personificaciones que intervienen en el conflicto, o sobre los hechos acontecidos.

Si bien el fundamento de las declaraciones públicas es su especificidad cualitativa y semántica en base a las interpretaciones, consideramos relevante no perder de vista la magnitud cuantitativa de las mismas (cuantas veces se emite un mensaje, quienes son sus autores, en qué momentos del enfrentamiento, etc.)

Dentro del grupo de las caracterizaciones contabilizamos 56 declaraciones, de las cuales el 34 % están destinadas a vincular los hechos de protesta con imágenes cercanas a lo ilegal, las acciones violentas y perjudiciales para las instituciones. Este tipo de calificativos provienen en su gran mayoría (casi un 80 %) de despachos oficiales.

Por otra parte, más del 20 % del total de declaraciones que contienen reclamos o denuncias están dirigidas a exigir la finalización de la protesta llamando a la intervención de la fuerza pública en el conflicto. Un poco más de la tercera parte de estos reclamos están

destinados a solidarizarse con la protesta y a reivindicarla. Más del 40% reúnen acusaciones entre funcionarios políticos que se responsabilizan mutuamente por la situación crítica de la economía provincial. El alto grado de disputa entre distintas fracciones partidarias también será notorio en los posteriores cortes de ruta. Veamos cómo se distribuyen estos mensajes teniendo en cuenta las personificaciones involucradas y el momento en que intervinieron:

Cuadro 2: Provincia de Neuquén. Cutral Có y Plaza Huincol, junio de 1996. Publicación de declaraciones de distintas personificaciones en relación al día de los enfrentamientos (25-06)

				Total
		Antes de enfrent.	Después de enfrent.	
Quiénes	Manifestantes	15 30,6%	12 26,1%	27 28,4%
	Otros sujetos (no manifestantes)	7 14,3%	7 15,2%	14 14,7%
	Funcionarios Estado	18 36,7%	22 47,8%	40 42,1%
	Dirigentes partidos y sindicatos	9 18,4%	5 10,9%	14 14,7%
Total		49 100,0%	46 100,0%	95 100,0%

Fuente: elaboración propia en base a diarios Clarín, La Nación, Página 12, Río Negro y La Mañana del Sur (Neuquén)

La diferenciación en períodos tiene como finalidad observar la frecuencia y tipo de declaración con respecto al momento del enfrentamiento, ocurrido el 25 de junio, considerando que se pueden establecer relaciones entre el contenido de las declaraciones y el devenir del conflicto. En principio podemos ver que las declaraciones publicadas provenientes de los manifestantes ocupan menos de la tercera parte del total. Prácticamente todas, tanto antes como después del encuentro en la ruta, están destinadas a reivindicar sus acciones de protesta y a hacer exigencias al gobierno provincial:

"Estamos cansados de vivir de limosnas y que nos mantengan nuestras mujeres. No queremos más discursos, si no se arregla vamos a cerrar la válvula del gas y después vemos qué hacen." (*La mañana del Sur*, 22-6-96).

"En Neuquén y también en Buenos Aires dicen que somos indios, bueno, que vayan sabiendo que los indios estamos muy enojados." (*Página 12*, 23-6-96).

“Cuando se privatizo YPF se terminaron los contratos, antes trabajábamos todo el año, pero ahora por ahí nos contrataban por tres meses y después quedas en la calle. Para comer no podemos gastar mas de 10 pesos por día. Cuando los presidentes barriales fueron hasta las barricadas, la gente los saco cagando. El pueblo no quería saber nada con los políticos. **Nos decían que nosotros éramos sus representantes. Ahí nos dimos cuenta de que el pueblo tenía el poder y que podíamos ganar**” (Página 12, 30-6-96).

Las declaraciones emitidas por los llamados *no manifestantes* -quienes no participaron físicamente del conflicto pero sí opinando sobre el mismo: lectores de los diarios, vecinos, sacerdotes, periodistas y directores de los diarios, comerciantes y empresarios- estuvieron destinadas a criticar a las autoridades y prácticamente no tienen variación en la lectura dicotómica antes/después.

En la categoría *dirigentes partidarios y sindicales* se reúnen mayormente miembros de partidos políticos, principalmente MPN y en menor medida UCR y PJ, quienes ejercieron en otro momento alguna función pública. Los dirigentes gremiales que intervienen son casi nulos y pertenecen a gremios de trabajadores estatales (municipales y legislatura). Sus intervenciones se dirigen a criticar al gobierno provincial y a reclamar medidas (por ejemplo, ex diputados o intendentes que critican la gestión de Sapag).⁹¹

Las declaraciones pertenecientes a funcionarios de Estado -miembros poder judicial, legislativo y ejecutivo provincial, además de concejales e intendentes- ocupan la mayor cantidad de declaraciones publicadas. Más arriba hemos visto algunas de estas intervenciones destinadas principalmente a deslegitimar a la protesta.

Luego del encuentro en la ruta, y contrariamente a lo que ocurre con las declaraciones de los manifestantes, los mensajes de los funcionarios son publicados proporcionalmente en mayor medida (casi el 50 % del total). En algunos casos para confirmar el proceso de deslegitimación de la protesta, caracterizando negativamente a quienes se posicionaban fuera del universo del orden social oficial; insinuando incluso que se trataba de una manifestación fuera de la *normalidad*. Tal el caso de interpretar la protesta como un estado de patología mental:

“Lo que está ocurriendo es una locura colectiva con el único espíritu de destruir a Felipe Sapag y con el interés mezquino de no reconocer una trayectoria (de Sapag) de más de 30 años al servicio de la provincia.” Alberto “Tito” Fernández, diputado provincial. *La mañana del Sur*, 28-6-96.⁹²

⁹¹- Si bien los partidos políticos y los sindicatos son parte de la llamada “sociedad civil”, los hemos diferenciado por la frecuencia de sus declaraciones.

⁹²- No era la primera vez –ni seguramente la última- en la que se define con una patología mental a las manifestaciones populares de un conflicto. Las Madres de Plaza de Mayo fueron caratuladas como “las locas de la plaza” durante años.

Pero también producen mensajes apoyando la protesta, sobre todo luego del enfrentamiento con la Gendarmería y de la decisión de no reprimir, como ocurre con el gobernador Sapag. En un comienzo sus opiniones estaban dirigidas a deslegitimar la protesta tratando a sus integrantes de delincuentes y calificando como ilegales sus medidas. Pero sus dichos públicos fueron variando con el desarrollo del conflicto: una vez presente en las ciudades y sin más remedio que tener que pactar con los manifestantes, los felicitó por “haber llamado la atención al país” y les pidió confianza para que “comiencen a resolverse los problemas” (*Página 12*, 27-6-96):

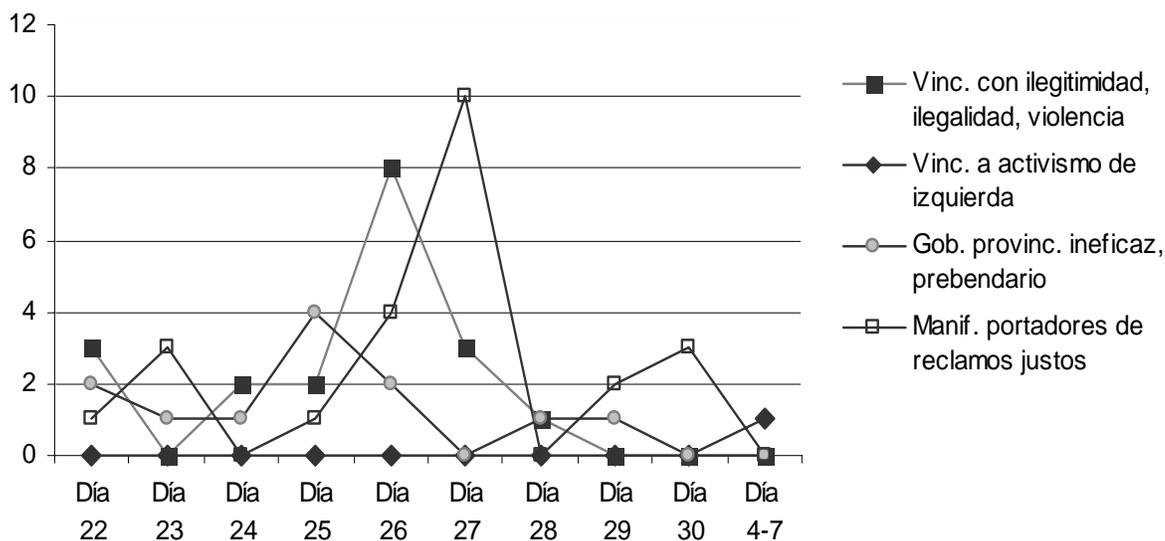
“No fue una sedición, sino que Cutral C6 se ha puesto de pie después de 6 años en que se produjo el vaciamiento de YPF.” Felipe Sapag. *La Mañana del Sur*, 26-6-96.

“[Los piqueteros] **es algo que surgió del pueblo, de gente común**. No sé en virtud de qué cuestión... **tal vez la pobreza y la angustia los ha unido**. Se han organizado y están muy concientes de lo que han hecho. Han sido muy razonables conmigo.” Felipe Sapag. *Río Negro*, 29-6-96.

Las disputas internas entre dirigentes políticos estuvieron presentes durante toda la protesta, y se hicieron notorias en las declaraciones emitidas hacia el final del conflicto. Muchas declaraciones resaltan el corte de rutas sólo como motivo para alimentar la afrenta en la interna blanco-amarilla que caracteriza al MPN durante el período estudiado. O evidencian la voluntad de desligarse de la decisión de enviar tropas de la Gendarmería al corte sugiriendo que ésta era una decisión que excedía al gobierno provincial. Es decir, apoyan a la protesta en una coyuntura de ataque a sus contrincantes políticos.

Volvamos a ver, ahora con más detalle en cuanto a la variable temporal, a aquellas declaraciones que sólo contienen calificaciones y caracterizaciones sobre el conflicto, teniendo en cuenta los actores que intervinieron en ellas:

Gráfico 3: Provincia de Neuquén. Cutral Có y Plaza Huincul, junio de 1996. Tipos de declaraciones durante el transcurso del conflicto



Fuente: elaboración propia en base a diarios Clarín, La Nación, Página 12, Río Negro y La Mañana del Sur (Neuquén)

Como podemos observar, los enfrentamientos materiales son acompañados casi al unísono por una producción discursiva que les otorga sentido. Se destacan en particular las que están destinadas a estigmatizar o caracterizar negativamente a los manifestantes, que son publicadas saltando del promedio diario justo el día posterior a los enfrentamientos, luego de la retirada de la jueza federal (es decir que fueron producidas el mismo día del enfrentamiento).

Ese 26 de junio es cuando salen a la luz voces que insisten en la calidad ilegal e ilegítima de la protesta, argumentando que es detractora de las instituciones y del Estado de Derecho. Apuntaban a conformar un *otro* colectivo que había irrumpido contra un sistema de normas y que desafió durante varios días a las autoridades. Casi como una respuesta inmediata a este tipo de declaraciones, el día 27 de junio se emiten en mayor cantidad enunciados que saludan y apoyan los reclamos, avalándolos como justos o necesarios. También son distinguibles los enunciados que apuntan a criticar a funcionarios gubernamentales y/o municipales por ineficacia o políticas prebendarias. Atendiendo al conflicto interno del partido gobernante, es entendible que en casi un 60 % este tipo de caracterizaciones provenga de diputados, intendentes o concejales que cruzan acusaciones.

Con respecto a la estigmatización sobre ideologías de izquierda, solo un caso proveniente de un informe de la SIDE anuncia la presencia de “militantes de

centroizquierda”, recién cinco días después de finalizado el conflicto. (*Página 12*, 4-7-96). El informe de inteligencia aclara, para mayor tranquilidad, que se trata de una “conmoción social sin implicancia ideológica”.

Como lo hiciera el gobernador en su “evolución” en el tenor de las declaraciones, la jueza que un principio caratuló la medida como un delito y advirtió que debería solucionarse con la intervención de la fuerza pública, una vez que se hizo presente en el lugar dijo que no hubiera sido justo desalojar por medio de la fuerza a los miles de manifestantes. Sin embargo, más tarde explicaría esta actitud:

“Esto es un virtual alzamiento del pueblo contra el Gobierno de la provincia, es más que sedición” Margarita Gudiño de Argüelles. *Clarín*, 26-6-96.

Es un delito mayor que es el de sedición y por tal motivo me declaro públicamente incompetente y me retiro del lugar junto con las fuerzas de seguridad que me acompañan.” Margarita Gudiño de Argüelles. *Río Negro*, 26-6-96.

El *hecho delictivo* fue la figura principal con la que se catalogó a esta protesta y se la criminalizó desde lo retórico y principalmente desde un plano jurídico-político, al movilizar recursos legales para su represión. Aquellas definiciones ofrecidas por la jueza no son un hito aislado sino que dan el comienzo, como veremos, a la sistematización del proceso de penalización de la protesta.

Pese a que la jueza había considerado ilegal e ilegítimo el método de reclamo - aunque era visiblemente masivo-, la decisión de declarar públicamente que no le competía resolver por la fuerza la ocupación de la ruta genera hoy una aceptación considerable entre algunos manifestantes:

Para ella fue muy impresionante cuando vio toda la gente. A mi me parece maravilloso que haya podido hacer esa reflexión, que no sé si cualquier jueza podría haberlo dicho. Decir, bueno, me quedo con mi marco teórico que no me lo puedo despojar porque no puedo negar que es un delito, pero no puedo hacer más nada. (Rita Santarelli).

De todos modos, la decisión de no reprimir estuvo sustentada en un razonamiento que se supo recién días más tarde en una entrevista a un diario local. Interrogada sobre los motivos de haberse acercado a los manifestantes junto con el cuerpo de Gendarmería, respondió que supuso que se encontraría con apenas unas 500 personas, y que al evidenciar que se trataba de una cantidad enormemente mayor, decidió no dar la orden de reprimir. Aparentemente se trató de una cuestión de cantidades: habiendo un número mucho menor

de manifestantes, la orden de una intervención violenta quizás no hubiese sido tan difícil de impartir. O, en contrapartida, se habría necesitado una mayor cantidad de tropas para poder dar término a la situación. Según sus palabras: “hablo con el Ministerio del Interior y me preguntan cuánta gente era necesaria para despejar la ruta, yo valoré unos 1.500 hombres como cantidad suficiente. Me mandan un equipo de 300 hombres de Buenos Aires, más un suplemento de 100 hombres de General Acha. (...) Tenía una tropa capacitada para repeler a 3.000 o 4.000 personas, pero no a 20.000, como yo veía.” (*La Mañana del Sur*, 28-06-96). De todos modos la jueza aclaró que decidió no reprimir porque sino se hubiera tenido un “duelo nacional” durante aquella jornada.

En la misma entrevista relata lo que comentamos más arriba: “Después de un trecho miré y vi que alrededor mío ya no había encapuchados, sino gente a cara descubierta que empezaba a correr y que no tiraba piedras. Entonces le dije al comandante: ‘Dígame usted lo que está pasando’ y él me contestó: ‘dejamos atrás los grupos de choque y esta gente que está acá es gente del pueblo’”. Como en luchas pasadas, irrumpe la figura de “lo extraño” frente a “lo auténtico”. Desde una concepción liberal moderna (pero antes como *idea tenaz* generalizada) *el pueblo* no se manifiesta sino por medio de sus representantes, de manera pacífica, respetando las leyes y las instituciones republicanas. Quienes ejercen demostraciones de repudio al gobierno y sus fuerzas de seguridad por fuera de las instituciones y además desafían físicamente a las autoridades imponiéndose territorialmente –los grupos de choque compuestos por “pibes encapuchados”- *no son miembros del pueblo*. Ni en un aspecto geográfico e histórico –la pertenencia a las localidades con límites jurídico-políticos-, ni en un aspecto de identidad social y política que refiere a la idea de ciudadanía, de comunidad o de ejercicio de soberanía popular.⁹³

Pasados varios años de aquellos episodios, la reflexión de los pobladores sobre sus acciones –y sobre lo que se dijo de las mismas- nos presenta otro tipo de interpretaciones. Durante las entrevistas, Juan Carlos (ex obrero de YPF) leyó en su casa algunas de las declaraciones de los funcionarios políticos, opinando lo siguiente:

⁹³- En la investigación realizada por Auyero también se hace referencia a una doble connotación de la expresión “el pueblo”, pero enunciada por los mismos protagonistas de la protesta. Luego de la retirada de las fuerzas de seguridad y de que se anunciara que Sapag se trasladaría a las localidades, se coreaba que “el pueblo ganó”. El autor observa la “autocomprensión colectiva” (p. 126-127) que se conformó en el conflicto, que habla de un *nosotros* forjado por días de compartir un mismo espacio de convivencia cotidiana, con sentimientos de pertenencia a la protesta que –aunque heterogéneos- permitían estrechar ciertos lazos de solidaridad y un reconocimiento mutuo. Evidentemente dicho término contiene significados peculiares según los sujetos que lo expresen: además de la autoreferencia pronunciada por los manifestantes, existe un “nosotros” proveniente de los representantes del orden legal que define quienes sí pertenecen al pueblo, y quienes no.

“La sedición es un levantamiento armado, cuando no es compartido por el pueblo, cuando son aislados. Acá era el pueblo, la sociedad, el pueblo en su conjunto, no había un alma que faltara. El levantamiento era por una causa justa. Cuando el bienestar no viene de ningún lado, uno tiene derecho a protestar, porque el Estado no da ningún tipo de respuesta. Un Estado malicioso, porque pensá el daño que le han hecho a esta sociedad argentina...”

Juan Vergara tenía 25 años en 1996 y era desocupado. Formó parte de la pueblada desde el principio hasta el final, formando parte del grupo de jóvenes que enfrentó a la Gendarmería. Actualmente trabaja haciendo “changas” en la construcción. Luego de leer las declaraciones de la jueza y del gobernador opina lo siguiente:

“Delito es el de ellos. Delito es no traerle un pan a las pibas, no comprarle los útiles para la escuela, eso es delito. ¿De qué delito me están hablando cuando vos lo que querés es trabajo y algo para tus pibes? Y te vienen a pegar con la Gendarmería... eso directamente es matanza, no delito, una agresión moral. Acá hay pibitos que están anémicos, que tienen desnutrición, gente que no tiene ni para comer. Delito es sacar a mis hijos a un comedor comunitario, y que no haya fuente de trabajo para que comamos todos los días en la mesa juntos. No sé de que delito me viene a hablar la jueza.”

Tanto estas como los anteriores fragmentos de las entrevistas presentadas conforman un conjunto de interpretaciones que, en distintos grados y magnitudes, objetan aquellas caracterizaciones utilizadas para desvalorizar y deslegitimar la protesta. Generan en definitiva una explicación de los hechos alternativa a la que dieron las autoridades.

Tanto las declaraciones en los diarios -indicadores de la interpretación de los hechos prácticamente en tiempo real- como las rememoraciones de los protagonistas del reclamo conforman un terreno de *construcción de sentido* sobre los hechos. En el caso de los entrevistados, contaron con otro tiempo para realizar una *toma de conciencia* de los hechos, es decir, una *conceptualización de las acciones* que implica una interiorización, una reflexión sobre los observables.

Estas interpretaciones surgen del recuerdo de eventos que ya tienen más de 10 años, en el que además de la distancia temporal hubo diversas vivencias y experiencias que sin dudas nos plantean un panorama de reflexión muy distinto a las declaraciones rescatadas en los medios gráficos. Se trata de saberes provisorios y ligados a ese episodio, pues –lo planteamos a modo de hipótesis- la abrumadora mayoría de los manifestantes no poseía una formación política anterior o posterior a los hechos, lo que podría explicar un mayor y sostenido cuestionamiento al gobierno. Esto no impide que los observables construidos por

los manifestantes sea antagónico a las explicaciones acusatorias y condenatorias del poder político, y legitimen las acciones de protesta.

4.4. Conclusiones.

La masiva movilización de la población de las dos ciudades neuquinas fue la expresión de un conflicto signado por el resquebrajamiento de un paradigma de cohesión social en base a una economía de enclave que derivó, en base a la “racionalización de recursos humanos”, en el empobrecimiento de toda una población. La situación de crisis económica generó un cambio diametral en los niveles de vida de la población: sectores de la pequeño burguesía que vieron seriamente afectada su estabilidad económica y asalariados con proyección de ascenso en una empresa estatal. O sea, fracciones obligadas a vivir una incertidumbre en sus condiciones materiales de existencia desconocida hasta entonces.

Esta protesta fue considerada un hito en el ciclo que hemos podido diferenciar en la década de 1990, en el que comenzaron a darse los primeros atisbos de reorganización popular en una afrenta masiva al Estado. Sin embargo debemos señalar que la experiencia no tuvo una proyección sostenida mucho más allá del estallido, en el sentido de que no sentó las bases para la formación de redes políticas de importancia entre las miles de personas que participaron. Sin embargo se sentó un “saber hacer” en la organización que se manifestó pocos meses después en otra pueblada, y un “efecto demostración” -de que era posible organizarse y reclamar-, sentando las bases de muchos movimientos en todo el país.

Muchas de las personas entrevistadas dan cuenta de ese conocimiento que aprehendieron por primera vez, mientras que otros los retomaron luego de prácticas de organización gremial en épocas de empleos más estables. Es el caso de la “Comisión de Padres” -conformada en numerosos casos por personas que habían tenido algún tipo de militancia previa-, que fue protagónica en la protesta de 1997 y que posiblemente signifique un salto cualitativo en comparación a la protesta de 1996.

Tanto los aprendizajes nuevos como las experiencias volcadas por quienes ya habían ejercido prácticas autogestivas, estuvieron condicionados por la enorme heterogeneidad de actores sociales que participaron en la protesta. Pese a ello, las ciudades de Cutral Có y Plaza Huinca dieron el puntapié inicial de un método –el corte de rutas- y a una

“simbología piquetero” -los rostros tapados, la organización horizontal en asambleas- que se presentó en miles de posteriores conflictos, mixturados con otras herramientas como las huelgas, marchas, tomas, etc.

La respuesta estatal también sentó una base en el tipo de respuesta dada a las luchas, según el grado de intensidad y de los sujetos que la conformaran. Con procesos de lucha más sostenidos y con sus miembros más vinculados a prácticas de militancia política, la respuesta represiva se iría afianzando.

Desde la construcción de sentido, este episodio nos muestra en primer lugar que las condenas y estigmatizaciones –aunque sean temporales- estuvieron presentes incluso en las primeras protestas con cortes de ruta masivos. Y en segundo lugar, que la respuesta represiva se correlaciona casi al mismo tiempo con una producción simbólica que la justifica.

Dichas condenas no sólo se basaron en caracterizar como ilegal un corte de rutas, sino que adosaron categorías ligadas a la aparente ausencia de representatividad y legitimidad, las cuales implicaban una *protesta violenta* hacia las instituciones. No fue una forma azarosa de entender el conflicto, sino el producto de nociones condicionadas por un paradigma político e ideológico que representa a la desobediencia como una instancia de peligrosidad que debe ser remediada, si es necesario mediante un castigo.

La reelaboración de ese paradigma conforma el germen, la semilla del proceso de criminalización y penalización simbólica de la protesta que sería aplicado a otros episodios en los sucesivos gobiernos constitucionales.

Capítulo 5

Ciudad de Neuquén, Cutral Có y Plaza Huincul, 1997. De la protesta docente al "rebrote subversivo".

3 • POLÍTICA • CLARÍN • 16 DE ABRIL DE 1997

CONFLICTO SOCIAL EN EL SUR

ENTREVISTA AL MINISTRO DEL INTERIOR

Rebrote subversivo: Corach justificó la preocupación oficial

"Esta película ya la vimos", dijo al analizar los incidentes en Neuquén y la Capital. Pero aclaró que esta interpretación "no tiene nada que ver con la que hacían los criminales del Proceso"

VICENTE MALDONADO
WALTER DURIA

El ministro del Interior, Carlos Corach, justificó la descripción que hizo el Gobierno sobre los episodios del fin de semana pasado en Neuquén y la Capital Federal y se abalanzó contra los calificativos "subversivos". "Esta película ya la vimos", dijo.

En una entrevista con Clarín, Corach se mostró molesto cuando se le preguntó sobre el ambiente y el silencio del Gobierno "subversivo". "El silencio que hace el Gobierno es técnico. No tiene nada que ver con lo que hacían los criminales del Proceso. No tiene nada que ver", explicó.

El ministro rechazó cualquier conexión entre las agencias de Neuquén y los demás estados del modelo científico. Cuando se le volvió a Corach respondió: "Hoy no podemos explicar la violencia".

Lo que sigue son los temas principales del reportaje.

—«¿Cuáles son los elementos concretos que hacen que el Gobierno hable de rebrote subversivo?»

—"El me permite, creo que hay un error en el planteo de su pregunta sin tener el tema. Ya lo voy a describir la realidad. En la Cutral-Có-Fuera Histórico, estamos

"Subversión es atacar el orden en el estado de derecho", trató de explicar el ministro Corach

enfrentados con las fuerzas de seguridad: gente de armas, ataques con bombas molotov, disparos de armas de fuego, incendio de comisarías, uso de coacción, intimidación de la población, caso del gobierno de la ciudad, organizaciones controlando la circulación de mercancías en la zona. Si ya es la realidad, ¿cómo puede tratarse como un caso?»

—«¿Pero la palabra subversión significa un ataque a una sociedad imperante?»

—"Por eso es que las agencias tienen que estar más que nunca sensibilizadas para cualquier forma de violencia. El fenómeno que tiene la violencia en la Argentina son los hechos debidamente reprobables en el marco del estado de derecho. Toda la sociedad debe levantar para cubrir a los violentos, sus ideologías, y condiciones socioeconómicas. Ahora, acá en el contexto de



EXPLORACIONES. El ministro Corach, en su despacho, el domingo por la mañana (1997) que vivió el rebrote subversivo.

real de su pregunta? ¿Que se va volviendo una violencia para volver que hay un ataque al orden público? La historia del mundo está plagada de ejemplos de que suceda que pasaban que la violencia había que volver la policía era porque n que el autoritarismo había que volver porque no era importante, se volvieron cuando era muy tarde. Hace diez años que veníamos definiendo la génesis del grupo Querobach. ¿Cuál fue la respuesta? No se me da de acordar. No venían estas cosas cuando la palabra es el rebrote de violencia que hace subversivo es atacar el orden en el estado de derecho.

—«Mientras, el Gobierno parece interesado en definir la ideología de la palabra subversivo. Pero eso no puede evitar volver el silencio con el pasado y con la muerte del que era subversivo como subversivo».

—«Eso no tiene nada que ver. Nadie habló de eso. Es una interpretación absolutamente fuera de contexto. A mí la palabra subversiva me inquieta como a usted. ¿Qué relación puede haber entre lo que nosotros estamos hablando con el silencio con los criminalistas del Proceso que escuchamos a nosotros? Yo le digo que no tiene nada que ver. El Gobierno usa la palabra subversiva sin que conlleve ninguna referencia a la actividad criminal del Proceso».

—«Usted habló de diálogo de la violencia».

—«Las palabras de Neuquén mostraron a personas con ideología...»

—«No, no. Eso es en los episodios. Las ideologías son las que muestran el momento de Querobach. Después a un abogado, a Pujuguet desde la cárcel, diciendo que el MP nunca fue violento. Le voy a dar una pregunta: ¿cómo interpreta usted que uno de los símbolos de los derechos humanos

como fue en su oportunidad la sesión de Rosalita, se presenten con su abogado y le lleve a la gasa que la corrió las retas, las libras y diga que son un ejemplo para la sociedad?»

—«¿Debemos investigar que son los ideólogos, los subversivos?»

—«Mire, en la voy a responder esa pregunta. Usted está insistiendo en un aspecto ideológico. Yo quiero el estado de esta gente como de gran irresponsabilidad. Esta película ya la vimos, ¿qué tiene que ver? ¿Hoy vamos a volver a la violencia? Por otra parte, crítica la actitud de los jueces de seguridad. ¿De qué forma se presenta de la Universidad? ¿Hoy vamos a volver a la violencia? ¿Hoy vamos a volver a la violencia? ¿Hoy vamos a volver a la violencia? ¿Hoy vamos a volver a la violencia?»

Figura 6: Diario Clarín, 16-04-97.

Casi nueve meses después de la pueblada de junio de 1996, en el mes de marzo de 1997 resurgió el conflicto en la provincia de Neuquén. Este nuevo ciclo de protestas estuvo protagonizado desde un principio por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), que convocó al paro y movilización de los docentes en torno a un reclamo salarial y a la aplicación de la Ley Federal de Educación (LFE), fuertemente cuestionada en la provincia.⁹⁴ Dicha ley era una de las herramientas de ajuste aplicada en el marco de las numerosas medidas neoliberales de la época que acentuaba la desigualdad en el acceso a la enseñanza, “racionalizando” recursos y despojando al Estado de la obligación de impartirla de manera igualitaria y universal.

Nos adentramos así a uno de los episodios de protesta más importantes de la década de 1990, que involucró a trabajadores desocupados y a fracciones marginales de población en reclamo por puestos de trabajo, pero que desde un comienzo fue impulsado por un sindicato docente que sostuvo una huelga durante casi un mes, con la movilización de miles de docentes que sí mantenían una relación laboral. Hecho más que significativo para tener en cuenta dentro del paradigma que cubrió el análisis de la protesta social en la última década, que coloca a los desocupados como su principal figura.

El reclamo aglutinó diversas metodologías de lucha –huelga, marchas, cortes de ruta– y aunó a distintos sectores que, en solidaridad con los docentes, se manifestaron en contra de las medidas económicas aplicadas por el gobierno de Menem y seguidas por Sapag en el ámbito provincial. La situación económica global de la provincia continuaba colapsada, contexto que es imprescindible tener presente para entender el proceso de lucha que se reabrió masivamente en las ciudades más pobladas de la provincia (Ciudad de Neuquén, Cutral Có y Plaza Huinul).

5.1. La huelga docente.

ATEN nació luego de numerosas reuniones celebradas desde agosto de 1981, en las cuales intervinieron distintos referentes de la provincia: el obispo Jaime de Nevares, miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la CTERA (Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). La base política del sindicato fue

⁹⁴- Ya había existido un anterior conflicto salarial entre el gremio docente provincial y el gobierno, que llegó a resolverse días antes de la primera pueblada de 1996.

compuesta por docentes de extracción peronista, marxista, y cristiano-progresista (Blanco et al, 2007, p.3), un abanico de tendencias que selló el carácter político-sindical en las décadas posteriores.

Durante la segunda mitad de la década de 1990 ATEN estaba –y lo sigue estando hoy- afiliado a la CTA, y se constituyó como un sindicato poderoso en el espectro provincial, fuertemente contestatario a las medidas educativas implementadas en esos años. Contaba en 1997 con unos 8.000 afiliados, más de la mitad del total de trabajadores de la educación en la provincia. La seccional capital, usualmente llamada ATEN Capital es la más importante del total de las 20 delegaciones en toda la provincia, y contaba con alrededor de 3.000 afiliados. Le seguían en importancia las seccionales de Zapala y Cutral C6, con alrededor de 1.800 delegados entre ambas ciudades (Petruccelli 2005, p. 33). Reunía y reúne a docentes de colegios primarios y secundarios privados y estatales, además de todo el personal no docente (porteros, administrativos, técnicos, celadores, etc.). Es, como lo indica su nombre, un sindicato de trabajadores de la educación en un sentido global.

Quizás por el contenido ideológico diverso de sus dirigentes y por el alto grado de activismo, ATEN es reconocido como un sindicato plural donde primaba la discusión interna mediante prácticas asamblearias. Daniel Zapata, docente de historia en colegios secundarios de Neuquén y delegado de nivel medio de ATEN en 1997, comenta la dinámica política al interior del sindicato:

En el conjunto de los docentes hay un activismo mucho más importante que en el resto de los sindicatos docentes del país. Acá en capital andaríamos en aquel momento en unos 500 o 600 activistas, o sea, compañeros que tienen desarrollo político de distintas tendencias. Es un gremio que resuelve por asambleas, es un gremio en el que no hay ninguna conducción que haya podido estar más de dos mandatos consecutivos, o sea se renueva permanentemente. Hay mucha oposición, mucha discusión, mucho debate y generalmente ha existido una suerte de conducta sindical. Aún dentro de los opositores más acérrimos a la conducción, hay una disciplina. La lucha se da permanentemente pero en las medidas de conjunto, todos se disciplinan gremialmente.

Hacia principios de 1997 la dirección provincial del sindicato estaba en manos de la lista Azul-Celeste, de corte peronista, conducida por María Eugenia Figueroa. El rival político más importante era la lista Rosa, con militantes cercanos al Partido Humanista, el

MST y el PC pero sin una influencia directa de ninguno de estos partidos.⁹⁵ La agrupación, claramente considerada de izquierda, era fuerte en la capital neuquina y Liliana Obregón era su principal exponente en la seccional capital.

Esta delegación generó una fluida comunicación entre padres y maestros, plasmada en la organización de debates en las escuelas y en sucesivas visitas a los hogares de los alumnos para explicar a las familias de qué se trataba la aplicación de la Ley Federal de Educación, el deterioro que se venía sufriendo en las escuelas y el por qué de la medida de fuerza. Estas prácticas fueron quizás el elemento fundamental para entender la alta convocatoria que tuvo el gremio sobre la población de la capital neuquina durante más de un mes de huelga y movilización.

Según el gremio docente, el Consejo Provincial de Educación provocó el despido encubierto de mil trabajadores mediante resoluciones del 2 de enero de 1997, además de modificar aspectos laborales y pedagógicos en el nivel inicial, primario y medio de la provincia durante los meses de enero y febrero. Los reclamos se centraron en la derogación de algunos puntos de la LFE, que en la provincia se tradujo en la fusión de grados, la eliminación de la jornada completa -lo que generaba la superpoblación en las aulas de hasta 60 alumnos-, la reducción de cargos en educación física, plástica, música y otros talleres especiales en todos los niveles, la cesantía de porteros y el incremento general de la jornada laboral. Además existía el rumor de un fuerte recorte presupuestario que afectaría a toda la educación desde el nivel preescolar hasta el terciario, incluyendo programas educativos para adultos. Estas medidas, sin embargo, eran desmentidas por el gobierno provincial.

También se exigía el mantenimiento de las escuelas rurales y anular el descuento del 20 % sobre los salarios de los trabajadores estatales, dispuesto por el gobierno como medida de emergencia desde enero de 1996. Este punto derivó en una presentación judicial que resultó en un fallo a favor de los docentes. Sin embargo, el gobernador Sapag apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para continuar con aquella medida que provocaba un impacto dramático en la economía de la provincia, donde gran parte de la población estaba empleada en el Estado. Esto provocó que el desacuerdo con los docentes se profundizara.

⁹⁵- Ese mismo año la agrupación sufrió una escisión –originalmente era la lista Violeta-Rosa- cuando abandonaron sus filas docentes cercanos al PO, del MAS y del POR (Petruccelli 2005, p. 36).

El día 5 de marzo, luego de una consulta que involucró a más de 5.000 docentes en toda la provincia, el gremio dispuso un plan de lucha mediante la suspensión de clases durante por lo menos dos semanas, demandando como primera medida el aumento del subsidio por desempleo y la renovación de contratos de trabajo de docentes y de empleados no docentes. Sin un acuerdo previsible a corto plazo, desde el gobierno provincial comenzaron a surgir los primeros enunciados dirigidos a deslegitimar el anunciado paro docente: el día 7 de marzo el gobernador declaraba que “los maestros ejercen una extorsión a los padres para que ejerzan presión sobre el gobierno para que les aumentemos el sueldo, pero saben bien que la provincia está en emergencia y no puede pagar más sueldos de los que paga” (*La mañana del Sur*, 07-03-97). Ese mismo día el gobernador instaba “a modo de advertencia, a mirarse en el espejo” de sus colegas de Río Negro que por entonces cobraban la mitad que los neuquinos...

La seccional Capital de ATEN impulsaba con mayor fuerza el paro por tiempo indeterminado, medida discutida tímidamente por el conjunto de los docentes. Las demás delegaciones importantes (Cutral C6 – Plaza Huincul, Centenario, Zapala o Plottier) proponían paros por 72 horas, o de una semana. Según los diarios locales, el 4 de marzo la delegación capitalina organizó una asamblea que reunió a más de un millar de docentes, los cuales marcharon hacia la gobernación confirmando el rechazo al proyecto de ley de educación provincial y el paro de actividades.

La protesta no sólo se basó en la huelga sino también en una constante movilización por la ciudad de Neuquén que fue creciendo en cantidad de adherentes con el transcurso de los días. El día 10 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo, se inició el paro general en colegios primarios y secundarios, estatales y privados en toda la provincia. Ese mismo día ATEN convocó a una movilización en la capital en la que participaron, según los diarios locales, entre 3.500 y 5.000 docentes y padres de la capital y de algunos puntos del interior de la provincia. La marcha se dirigió hacia el Consejo Provincial de Educación para finalizar frente a la casa de Gobierno. Además de la movilización, el acatamiento del paro en las escuelas fue del 95 %. El gobierno señaló la voluntad de dialogar pero excluyendo la cuestión salarial y advirtiendo que no se pagarían los días de paro.⁹⁶

⁹⁶- El 11 de marzo el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia de la provincia publicó una solicitada en el diario *La Mañana del Sur* en donde se sugería: “Lleve a sus chicos al colegio y no convalide la política de impedir, porque seguramente usted, como nosotros, piensa que también en educación... los problemas se superan trabajando”.

Mientras se multiplicaban las asambleas en las escuelas con el fin de explicar a los padres las causas y alcances de la medida de fuerza, el día 12 de marzo se interrumpió durante una hora la ruta 22 que une la capital con la vecina ciudad de Plottier hacia el oeste (camino obligado hacia Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala y a las ciudades turísticas cordilleranas), y hacia el este con la ciudad de Cipolletti. El plan de lucha comenzado por el sindicato incluía así la metodología del corte de ruta, que sería utilizada aún más significativamente en los días posteriores.

El día 13 de marzo unos 3.000 maestros volvieron a interrumpir el camino durante una hora, esta vez en el puente que une la ciudad de Neuquén con Cipolletti. La acción se ejecutó en conjunto con sus colegas rionegrinos convocados por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), quienes reclamaban mejoras salariales y renovación de los establecimientos educativos, insuficientes con respecto a la matrícula. Se manifestaron mediante ayunos, paros y con el corte de diversas rutas durante más de tres semanas.⁹⁷ Maestros y empleados estatales también realizaron cortes de diversas rutas provinciales en algunas ciudades del interior neuquino (Centenario, San Martín de los Andes Cutral Có y Zapala).

El viernes 14 una nueva marcha convocó a más de 4.000 padres, estudiantes y docentes a lo largo de cinco cuadras, según la información de los diarios.⁹⁸ Conocida como una de las primeras “Marcha de las antorchas” –los manifestantes portaban velas-, las principales consignas de la movilización estaban dirigidas a la derogación de la LFE y a la recomposición salarial, que había sufrido importantes recortes sobre todo para los maestros que trabajaban en zonas desfavorables. Ese mismo día en Cutral Có también se organizó una Marcha de Antorchas que convocó a varios centenares de docentes, padres y alumnos.

⁹⁷- Uno de los primeros cortes en Río Negro fue realizado el 12 de marzo, cuando unos 16 docentes se encadenaron a la sede del Consejo Provincial de Educación. El 21 de marzo un grupo de maestros, alumnos, padres y trabajadores estatales cortaron la ruta 237 durante 2 horas, próximos a la ciudad de Bariloche. La docente Marina Schifrin fue imputada en el delito de interrupción y entorpecimiento de medios de transporte, marcado en el artículo 194 del Código Penal. Los magistrados señalaron que “la absolución de la maestra hubiera sido una formidable contribución al caos, la anarquía y la destrucción de los derechos” (CELS, 2003, p. 265). En 2001 la condenaron a 3 meses de prisión en suspenso luego de negarse a realizar una “probation” que consistía en pintar el frente de un hospital público. La docente apeló los fallos y finalmente no fue a prisión por ejercer su derecho a manifestarse. De todos modos, la Justicia sentaba un nuevo precedente en la criminalización de la protesta. El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal rezaba: “La única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo es el sufragio (...). Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en una plaza o lugares públicos, encuestas, huelgas u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.), no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a lo sumo la de un grupo sedicioso”. Ver <http://www.apdhlaplata.org.ar/espacio/n24/esp13.htm>

⁹⁸- Otra de las causas del masivo apoyo de los padres a los maestros era el cotidiano deterioro del sistema de comedores en los colegios, que recibían menos comida a causa del cada vez más escaso presupuesto.

Si bien la postura del gobierno provincial intentó ser algo más flexible ante la contundencia de las demostraciones de fuerza de los docentes, había puntos que se consideraban innegociables. El gobierno aducía que la LFE era parte de una política educativa nacional que excedía el ámbito local, y por otra parte, el recorte salarial debía tratarse mediante la sesión de los legisladores provinciales, para lo cual se requería de tiempo. Así, los reclamos docentes no tenían perspectiva de ser resueltos en el corto plazo, con lo cual los dirigentes llamaron públicamente a intensificar la movilización.⁹⁹

Bajo la consigna “en defensa de la educación pública y gratuita”, el día 19 de marzo unos 8.000 manifestantes –padres, alumnos, docentes, trabajadores estatales y diversos gremios y partidos de izquierda- marcharon nuevamente por el centro de la ciudad y se concentraron frente a la Casa de Gobierno, haciendo caso omiso al intento oficial de frenar la movilización mediante el anunciado descuento salarial de los días no trabajados. Allí los docentes expresaron la voluntad de continuar con un paro por tiempo indeterminado, una vez finalizado el plan de lucha que se había propuesto para esa semana. Aunque la marcha desde el principio fue pacífica, se apostaron dos camiones hidrantes en la zona céntrica.

En el interior de la provincia también registraban movilizaciones: el viernes 21 de marzo una columna de docentes marchó a lo largo de 3 Km. por las ciudades de Cutral C6 y Plaza Huinul y en asamblea reivindicaron la decisión del plenario general del gremio de ir a un paro por tiempo indeterminado, en solidaridad con la situación de sus colegas de la capital. Ese mismo día en Zapala unos 500 maestros y padres se movilizaron en repudio por el achique salarial impuesto por el gobierno provincial, y formaron un fondo de huelga en apoyo a la medida.

⁹⁹- Aunque la figura de los “piqueteros” todavía no se había instalado definitivamente en este nuevo conflicto, persistían sus caracterizaciones negativas. Simultáneamente a la protesta docente en la capital provincial, en la ciudad de Rinc6n de los Sauces –al noreste de la provincia- un grupo de docentes, padres y representantes de la c6mara de comerciantes local reclamaban desde hacfa semanas por el saneamiento de la red de agua potable, contaminada por la actividad petrolera. En este reclamo tambi6n hubo cortes de ruta y “piqueteros”, seg6n la denominaci6n utilizada desde el conflicto de junio de 1996 en Cutral C6. Pero estos actores comenzaron a ser calificados como “forasteros”. Miguel Toledo, periodista del diario “La Mañana del Sur”, relat6 los hechos en una nota del dfa 20 de marzo titulada “Otra vez, los piqueteros se mimetizaron con la gente”: allf seal6 que “esta nueva ‘profesi6n’ ha vuelto a tener trabajo. (...) Queda muy claro que la acci6n de los piqueteros no era una espont6nea manifestaci6n de vecinos, y si no actuaban por espontaneidad lo hacfan por cuenta y orden de alguien”. El corte de rutas que mantenfa sitiada a la ciudad y a los yacimientos finalmente se levant6 luego de que el gobernador Sapag se acerc6 al lugar prometiendo que se controlarf con mayor eficacia a las empresas petroleras. En una arenga ante unas 500 personas el gobernador opin6 que los piquetes eran “una medida magnfca, porque han servido para que la gente haga escuchar sus justos reclamos” (La Mañana del Sur, 20-3-97). Cabe sealar que las protestas fueron dirigidas a las empresas petroleras antes que al gobierno provincial. En este sentido, y obviando su funci6n ejecutiva en la provincia, el gobernador declar6 a los manifestantes que “si no les cumplen los compromisos, ustedes tienen a mano este remedio”. Ocho meses antes, el mismo gobernador calific6 como delinquentes e ilegftimos a quienes cortaban las rutas.

Otro factor que da cuenta de la intensidad del conflicto fue la acción realizada por la “Coordinadora de Padres” –agrupación de padres de alumnos secundarios que acompañaban los reclamos docentes-, cuando oficialmente informó que se apostarían en la entrada de una treintena de colegios apoyando el paro e instando a que las demás familias no envíen al colegio a los alumnos.¹⁰⁰

Por parte del gobierno, la condición para comenzar algún tipo de negociación era la normalización de las actividades, punto que ATEN no estaba dispuesto a atender. Así, el paro por tiempo indeterminado se inició luego de una asamblea de delegados del gremio que anunció un nuevo corte del puente interprovincial para el día lunes 24 de marzo, aniversario del golpe militar. La ministra de educación Susana Decibe denunció que la medida adoptada por el gremio docente neuquino era un “paro político”, intentando descalificar el hecho de que una movilización tenga intenciones no solamente acotadas a lo salarial.

En el marco de la movilización en todo el país realizada el 24 de marzo –con la convocatoria de CTERA y CONADU a una protesta en todo el país contra la Ley Federal de Educación y por aumento de presupuesto- los docentes neuquinos interrumpieron el acceso vehicular en el puente que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén. La movilización reunió a más de 10.000 personas. Poco después del mediodía arribaron al puente los manifestantes que sobre la ruta 22 y a metros del puente formaron barricadas con neumáticos, alambres, chapas, maderas y rieles de vías férreas. Lo propio se hizo en la ruta N° 7 que comunica hacia el norte con la ciudad de Centenario. Asistieron delegaciones docentes del interior de la provincia, padres, gremios asociados a la CTA y empleados de la administración pública, judiciales y legislativos.

¹⁰⁰- Miguel Marconi, miembro de esta agrupación, declaró que “de ninguna manera vamos a tomar u ocupar alguna escuela; lo que vamos a hacer es llevarle más información a los padres que aún llevan a sus chicos a las escuelas para que conozcan lo que vendrá si se sigue adelante con la Ley Federal de Educación” (*La Mañana del Sur*, 23-3-97).

Muy grave: los gremios tomaron dos rutas y puentes en Neuquén



Figura 7. Tapa del diario *La Mañana del Sur*, 25 de marzo de 1997.

El corte se sostuvo de noche con más de 500 personas y con el acompañamiento de numerosas familias que se solidarizaron con la movilización. Hubo diversas actividades gestionadas por los mismos manifestantes, como maestras jardineras improvisando entretenimientos para los niños mientras sus padres articulaban las distintas barricadas en la ruta. En esta instancia la policía intervino para impedir manifestaciones de agresión por parte de algunos transeúntes, y para habilitar caminos alternativos. El corte provocó una larga congestión de vehículos a ambos lados del puente, entre ellos unos 200 camiones detenidos del lado rionegrino a cuyos conductores los manifestantes explicaron las razones de la medida.

Así se provocó un virtual aislamiento de la ciudad y la imposibilidad de acceder a centros turísticos de la provincia, en vísperas de Semana Santa. Por su parte, el gobernador

advertió que descontaría de los salarios la cantidad de días de huelga (alrededor de quince días hacia fines del mes de marzo) si los docentes no retornaban a sus puestos.

La jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles, quien había intervenido en el conflicto de junio de 1996, exhortó a las partes a llegar a una negociación, dando un plazo de 48 hs. para desalojar la ruta. Los mensajes se enviaron al gobernador Sapag, al titular de la legislatura provincial, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a la Secretaria General de ATEN y al principal referente de la CTA. Para el gobierno, la reunión de conciliación convocada por la jueza sólo era factible si la medida de fuerza era suspendida.

El corte se extendió durante todo el día 25 de marzo. Por la noche, mientras el ministro Corach ponía a disposición de la provincia a tropas de la Gendarmería, el gobernador y representantes del ministerio de Educación se reunieron con los gremialistas para trabajar en un acuerdo. El resultado del encuentro fue comunicado y debatido en las asambleas que funcionaban en el corte de la ruta N° 22, donde fue evaluado como un intento de dádiva por parte del gobierno en el que no se llegaba a una solución concreta a los reclamos. Al comenzar la segunda noche de ocupación del puente, la manifestación fue reafirmada con la llegada de una numerosa cantidad de familias neuquinas que nutrieron la ruta, organizando bailes y otras actividades recreativas.

Hacia el 26 de marzo se suspendieron todos los medios de transporte entre Cipolletti y Neuquén –algunas empresas de colectivos incluso iniciaron acciones legales contra los manifestantes-, lo que significaba un elemento más de conflicto. Resurgían así los problemas en el tráfico de mercancías y en la circulación de dinero: los camiones que transportaban comestibles y combustible desde el interior de Neuquén debieron internarse en las bardas y en las laberínticas “picadas” de las empresas petroleras para poder llegar a la capital; los complejos hoteleros recibían cancelaciones de las reservas hechas por turistas; las destilerías de petróleo e industrias locales que tenían compromisos en otras provincias debieron retrasar sus despachos.¹⁰¹ Los supermercados y almacenes neuquinos comenzaron a sufrir el desabastecimiento de productos alimenticios ya que la mayoría de los proveedores de frutas, carnes y lácteos arribaban a la provincia por la ruta y puente

¹⁰¹- En este contexto la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro envió una carta documento al ministro del Interior Carlos Corach “expresando su preocupación por los alcances de la medida de fuerza que aisló totalmente por tierra a Neuquén del resto del país.” (*La Mañana del Sur*, 27-3-97). La comunicación férrea también se vio interrumpida, pues los trenes que entran y salen de la provincia lo hacen por un puente adyacente al que se estaba cortando. Los cargamentos de combustible que provenían de la destilería de Plaza Huincul debieron ser detenidos en la ciudad de Plottier, a 16 Km. al oeste de la capital. La empresa “Ferrosur” envió una carta documento a ATEN responsabilizando al gremio por los perjuicios económicos que devinieron en la suspensión del convoy. (*La Mañana del Sur*, 27-3-97, tercera edición).

cortados. Esto provocó la disminución de un 30 % en las ventas de los comercios, con la ausencia de unos 20.000 rionegrinos que hacían sus compras diariamente en Neuquén. (*La Mañana del Sur*, 27-3-97).

Para diversos agentes del gobierno provincial la protesta iba acentuando su carácter delictivo e irregular. El juez provincial de instrucción José L. Cartolano ordenó a la policía provincial que informe a los manifestantes que sus acciones estaban infringiendo la ley, al tiempo que los dispuso a custodiar bienes privados (instalaciones de las cabinas de peaje) previniendo posibles actos vandálicos. En consonancia a este tipo de caracterizaciones, el 26 de marzo arribaron a la provincia dos aviones Hércules con un total de más de 300 gendarmes.

Con casi tres días de corte ininterrumpido del puente –en el que sin embargo se permitía el paso de ambulancias o vehículos que se trasladaban a hospitales-, la organización de los docentes durante día y noche sorprendía al gobierno, lo que también sirvió para sospechar de la intervención de militantes políticos, en particular provenientes de partidos de izquierda, dirigiendo la protesta. Desde el Ejecutivo provincial se acentuaron las declaraciones en torno a la intransigencia de los gremialistas, y a que se estaba frente a “una huelga política de ideólogos de izquierda que buscaban el desorden y la desestabilización” (*La Mañana del Sur*, 27-03-97).¹⁰² En la madrugada del día 27, y tras otro intento fracasado de acuerdo, el gobernador y su gabinete daban por terminadas las negociaciones y dejaban todo “en manos de la justicia”. La jueza federal Gudiño de Argüelles y el juez provincial Cartolano daban un ultimátum de 3 horas –extendido ante un pedido de diputados provinciales- para desalojar las rutas 22 y 7 respectivamente, so pena de dar órdenes a la fuerza de seguridad para desalojar el puente.

Pero los docentes declaraban estar dispuestos a resistir en las rutas junto a los más de 5.000 manifestantes. Es así que la magistrada dio la orden para que intervengan las tropas de dos escuadrones de Gendarmería. El operativo comenzó ese mismo jueves 27 de marzo poco antes de las 6:00 hs. cuando los gendarmes ingresaron por la ruta desde el oeste, a varias cuadras del cruce interprovincial. La noticia llegó inmediatamente a los

¹⁰²- El 25 de marzo, con más de un día de protesta en la ruta, el monseñor Agustín Radrizzani se acercó en apoyo a los manifestantes y organizó un rezo para solucionar el conflicto. Según *La Mañana del Sur* (26-3-97), uno de los manifestantes comentó “miranos a los ‘ideólogos de izquierda’, pidiendo ayuda a Dios y a la Virgen”. Por otra parte –y sumándose a las caracterizaciones relativas a la delincuencia y la violencia-, en el mismo diario y fecha se publicó una denuncia hecha por un transeúnte que afirmó que al intentar sortear uno de los cortes un grupo de personas dentro de un automóvil lo amedrentaron apuntándole con armas de fuego “calibre 32 o 38”. El mismo hombre señaló que “los maestros están anarquizados”.

manifestantes que se encontraban en el puente y decidieron allí esperar a las fuerzas de seguridad, pese a que un grupo de diputados (dos del Frente Grande y un “emepenista” disidente) intentaron mediar personalmente entre la jueza y los manifestantes.¹⁰³

Muchos de los docentes tenían la certeza de que no iban a ser desalojados por medio de la fuerza, argumentando que allí se encontraban muchas mujeres y sobre todo *porque eran maestros*. Daniel Zapata recuerda al respecto de esta lectura que hacían los docentes con menos experiencia en manifestaciones:

“Me discutían a mí constantemente ‘no nos van a sacar. ¿Cómo nos van a sacar si estamos sentados, como nos va a venir a pegar? Si somos docentes, somos maestros, maestras, estamos con nuestros hijos’. Y nosotros: ‘compañeros, van a venir a pegar’. Entonces se empezó a discutir si hacer una resistencia activa o pasiva, o irse. Cuando viene la primera intimación resolvimos quedarnos, y cuando viene la segunda intimación viene la jueza con la policía y ahí se empieza a discutir a fondo qué hacer cuando se sabe que venían los gendarmes.”¹⁰⁴

Finalmente, entre las seis y las siete de la mañana unos 250 efectivos pertenecientes al Batallón Móvil N° 1 de Gendarmería Nacional rompieron las barricadas colocadas del lado neuquino del puente, reprimiendo con gases lacrimógenos y camiones hidrantes a unos dos mil manifestantes. En el choque fueron gaseados y mojados cientos de docentes e incluso el Obispo Radrizzani que se encontraba allí en solidaridad con la protesta (y que luego sería indagado por la Justicia Federal por haber incurrido en el delito de obstrucción de la vía pública).¹⁰⁵

El puente fue despejado poco después de las siete de la mañana y los docentes prácticamente no ofrecieron resistencia, en gran parte a causa de la sorpresa que significó el avance de las tropas.

¹⁰³- Dos días después de la represión la jueza relató este hecho: “cuando ya teníamos la fuerza ahí se me acercaron los diputados a convencerme y me dijeron: ‘por favor Margarita, ¿no se puede suspender la orden?’. Le dije: ‘por favor señor diputado, hay una orden judicial, crea alguna vez en la justicia y cumpla usted con la justicia’. Ya no había más instancias”. (*La Mañana del Sur*, 29-3-97). Otro diario rescató otro aspecto de su justificación: “No había solución al conflicto. El primer día se ordenó la desocupación, a través de la policía; el segundo día exhorté a los partidos políticos a que se reunieran con los gremios para tratar de solucionar el problema, y el tercer día ordené por resolución el desalojo.” (*La Nación*, 29-3-97).

¹⁰⁴- En su investigación, Ariel Petrucelli (2005, p. 68) señala que la “ingenuidad” frente a la posibilidad de represión también tocó a parte de la dirección sindical, convencida en que no habría un desenlace violento ante la impactante masividad de manifestantes. En estas antagónicas percepciones sobre un desenlace violento pesaba la experiencia previa y la historia política personal de cada maestro. Muchos de los que habían militado durante la última dictadura y en años posteriores tenían una percepción más ajustada a las posibilidades concretas de represión, que finalmente ocurrió.

¹⁰⁵-A la par que en Neuquén, unos 300 manifestantes también cortaban una de las rutas de acceso a la ciudad rionegrina de Bariloche, que igualmente fueron desalojados mediante la acción de medio centenar de gendarmes.



Figura 8. El “Puente Viejo” (el que posee arcos) y el “Puente Nuevo” unen a las ciudades de Neuquén y Cipolletti. Tienen unos 400 metros de longitud, y según el recuerdo de los docentes y vecinos, ambas manos estaban colmadas de manifestantes el día del desalojo.

El enfrentamiento se extendió más allá del puente y del ataque a los docentes e involucró a decenas de jóvenes provenientes del Barrio Sapere, un conglomerado de viviendas populares lindante al puente desalojado y al Río Neuquén. Producto del ataque a los docentes, una gran cantidad de gases envolvió las casas del barrio, lo que provocó que muchos habitantes del barrio –en su mayoría jóvenes- salgan y ataquen a pedrazos a los gendarmes.

Simultáneamente, más de 100 efectivos del Departamento Especial de Servicios Policiales (DESPo, perteneciente a la Policía Provincial de Neuquén) desalojaban a otro grupo de manifestantes en la ruta provincial N° 7, que comunica la capital con la ciudad de Centenario, hacia el norte. Aunque en este corte no hubo resistencia al desalojo, la represión se aplicó con la misma intensidad que en la ciudad de Neuquén: equipados con escudos, bastones, máscaras antigas, lanzagranadas, perros, un carro hidrante y hasta una grúa, el cuerpo de policías arremetió con chorros de agua y el disparo de gases a los manifestantes en primera línea que estaban parados, con banderas argentinas y cantando el

himno nacional, y a los que se encontraban en una segunda posición, sentados sobre la ruta. (*La mañana del Sur*, 29-3-97).¹⁰⁶

En la ciudad de Neuquén, luego de la represión, centenares de manifestantes empapados y golpeados marcharon hacia la casa de gobierno. Lejos de generar una “vuelta a clases”, la acción represiva de la Gendarmería y de la Policía provincial provocó que los maestros intensificaran la medida de lucha por tiempo indeterminado. Dicha ratificación se alineó a una convocatoria a un paro nacional de 24 hs. por parte de los gremios docentes de todo el país nucleados en ATE.

Al día siguiente de la represión, ocurrida un día viernes, una movilización convocada por ATEN y la APDH local llegó a reunir en una nueva marcha de antorchas a más de 10.000 personas que manifestaron en la capital su repudio a la acción de las fuerzas de seguridad, adhiriendo a la derogación de la LFE.¹⁰⁷ A la misma asistieron seccionales de ATEN, centros de estudiantes secundarios, la Coordinadora de Padres, Madres de Plaza de Mayo y partidos políticos de izquierda. También se instalaron decenas de carpas y carteles de diversas delegaciones de ATEN en la plaza Roca, frente a la Gobernación provincial. El acampe duró varios días y noches y llegó a contar con hasta 3.000 manifestantes. Por su parte, la jueza Gudiño de Argüelles decidió retener las tropas cerca del puente que había sido cortado, “por si alguien pretendía romper la tranquilidad de las Pascuas” (*Clarín*, 29-03-97).

En las ciudades de Cutral Có, Plaza Huinul, Centenario y de San Martín de los Andes también hubo manifestaciones en repudio a lo sucedido en la capital. En Zapala se

¹⁰⁶- Ante semejante acción represiva, el diputado Horacio Forni (MPN disidente) y la diputada Teresa Savrón (MPN blanco) denunciaron un “accionar excesivo” por parte de la policía de la provincia. Por su parte, dos semanas después de la represión, la APDH local presentó a la fiscalía federal una denuncia penal para que “se investiguen responsabilidades y se sancione a los culpables de la represión con gases y balas de goma contra hombres, mujeres y niños inermes.” (*Río Negro*, 12-4-97).

¹⁰⁷- Simultáneamente, la CTERA (Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) encabezó un paro nacional y el comienzo de las huelgas de hambre de docentes con la llamada “carpa blanca” frente al Congreso Nacional, que sería levantada recién con la asunción del gobierno de De la Rúa en 1999. Esta medida desplazó la atención del conflicto de Neuquén a la Capital Federal, pero al mismo tiempo significó la nacionalización del conflicto docente involucrando a los gremios de todo el territorio. Una situación que contrastaba con la política educativa del Poder Ejecutivo dirigida a segmentar las demandas docentes al ámbito provincial o municipal. De hecho, la Ley Federal de Educación daba el aval para que los conflictos no puedan ser resueltos por el gobierno Nacional, ya que desde 1992 todas las escuelas secundarias estatales pasaron a depender de jurisdicciones locales. Desde esta perspectiva, el Gobierno nacional fustigaba al gremio neuquino por intentar nacionalizar un conflicto que se pretendía local. Como si las demandas sindicales pudieran ser escindidas de un marco social y político general, la por entonces ministra de educación Susana Decibe “acusó” al gremio docente neuquino de realizar una protesta “absolutamente política, por cuestionar la Ley Federal de Educación, cuando cualquier ciudadano estaría feliz de ver al Estado retomar el lugar que nunca debió abandonar, que es el de ser garante básico de la educación pública.” (*La Mañana del Sur*, 29-3-97).

movilizaron unas 3.000 personas en solidaridad con los docentes (sólo en 1994 fue superado este número cuando 3.500 manifestantes se movilizaron por el asesinato del soldado conscripto Omar Carrasco). En estas ciudades las asambleas docentes ratificaron la voluntad de continuar con el paro por tiempo indeterminado, con lo cual en el gobierno de Sapag se analizaba contratar a nuevos docentes para garantizar el inicio de clases el lunes inmediatamente posterior a los incidentes.

La protesta docente fue reprimida como un delito, una vez más por interrumpir una ruta nacional y la jueza que intervino en el caso ratificó su decisión de desalojar por la fuerza a los manifestantes.¹⁰⁸ La magistrada calificó el conflicto como “gremial y salarial”, a diferencia del Gobierno Nacional desde donde se caratulaba la protesta como “política”, por oponerse a una ley nacional. Ambos aspectos –el meramente salarial o el político– fueron escindidos entre sí, como si uno fuera más aceptable que otro, aunque ambos fueron considerados perturbadores desde los distintos ámbitos gubernamentales y como razones suficientes como para la movilización de tropas.

En un nuevo repudio a la represión, el lunes 31 de marzo se realizó un paro de 24 hs y una movilización convocada por CTERA y CTA a nivel nacional. En Buenos Aires más de la mitad de los colegios porteños acataron la medida, y una marcha de docentes (unos 5.000 manifestantes según los organizadores) culminó en la Casa de Neuquén de la Capital Federal. En Neuquén adhirieron organismos de Derechos Humanos, partidos de izquierda (MAS, MST, PCR), gremios docentes, personal docente y no docente de la Universidad Nacional del Comahue, judiciales, municipales, prensa y rurales. Marta Maffei y Víctor De Gennaro, dirigentes de CTERA y CTA respectivamente, arribaron a la provincia en apoyo a las movilizaciones que se realizarían ese día. La marcha en la capital convocó, según los diarios locales, de 15.000 a 20.000 manifestantes –entre los que asistieron padres, alumnos y docentes de la capital, Cutral C6, Plottier, Zapala, Chos Malal y otras localidades del interior–, que se dirigieron a la casa de Gobierno en contra de la represión que habían sufrido dos días antes y para exigir al gobernador Sapag que atienda personalmente a los docentes.

¹⁰⁸- Así explicaba la necesidad de la orden de desalojo, y diferenciaba esta situación a la ocurrida en junio de 1996, cuando decidió no seguir reprimiendo y declararse incompetente para resolver el caso ante los miles de manifestantes de las ciudades mediterráneas. Aunque una vez más ratificaba también el carácter delictivo de aquella protesta: a diferencia del conflicto docente de 1997, “el de Cutral C6, de acuerdo a lo que yo ví en ese momento, era una sedición contra el Estado provincial. Un delito mucho mayor, por eso (yo) era incompetente” (*La Mañana del Sur*, 29-3-97). Según la interpretación de la magistrada, en aquel episodio no se continuó con la represión porque *normativamente* no le correspondía solucionar el delito, y no por otra razón.

La potencia de la convocatoria luego de varios días con manifestaciones siempre masivas, provocó que el gobernador aceptara reunirse con una comisión de delegados docentes. El encuentro que en principio parecía promisorio para los docentes finalmente quedó trunco, pues el gobernador se negaba a derogar los puntos clave que habían llevado a la huelga (el achicamiento de la planta docente –alrededor de 400 cargos eliminados- y la consecuente variación en las horas cátedra). Y se incorporaba un nuevo reclamo, surgido del mismo paro: se exigía el pago de los días que los docentes asistieron a las marchas, punto que el gobierno provincial también desestimó.

Hacia el 1º de abril, con 22 días ininterrumpidos de huelga, dirigentes del MPN llamaron a sus militantes a poner en funcionamiento los comedores anexos a las escuelas “rompiendo los candados” de las puertas si era necesario.¹⁰⁹ El llamado generó un mayor distanciamiento con el gobierno, pues el gremio docente se colocó en alerta y llamó a realizar las denuncias pertinentes si esto llegaba a ocurrir. Sin embargo al día siguiente decenas de comedores comenzaron a atender a centenares de niños, sin incidentes.

El día 2 de abril, durante de un nuevo intento de negociación en la casa de Gobierno y un nuevo desacuerdo entre las partes, entre 12.000 y 15.000 manifestantes marcharon por el centro de la capital. En parte la movilización fue en repudio a la escalada del conflicto, a partir de que el gobierno instaba a abrir las escuelas por la fuerza. Un grupo de unos 1.500 docentes nuevamente acampó en la Plaza Roca, frente a la Gobernación, reclamando una nueva reunión con el gobernador. En Cutral C6 una protesta estudiantil reunió a 500 estudiantes secundarios que también marcharon por la ciudad en contra de la LFE y favor

¹⁰⁹- En un comunicado de prensa firmado por dirigentes de la Seccional Neuquén del Movimiento Popular Neuquino se llamó a “todos los docentes con vocación de servicio a presentarse a los establecimientos escolares a cumplir con su función primordial que es enseñar.” En este marco, la descalificación hacia los docentes abarcó también el amedrentamiento. El diputado provincial Gustavo Vaca Narvaja fue uno de los que incitó a los militantes del MPN, si era necesario, a enfrentarse con los maestros para poner en funcionamiento los comedores. Inmediatamente Carlos Segovia, abogado de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, presentó una denuncia penal en una fiscalía por “incitación a la violencia”, que poco después se hizo extensiva al gobernador Sapag. Además, desde el gobierno provincial se publicó un llamado a los padres para que apoyen a los maestros que sí quieran dar clases y a garantizar el funcionamiento de los comedores escolares. La solicitada finalizaba con una nueva reflexión política sobre el conflicto: “hacemos notar nuestra preocupación ante una conducción representativa de los derechos del docente como es ATEN se dejen manejar por intereses oscuros de minúsculos activistas independientemente de los reclamos pretendidos”. (*La Mañana del Sur*, 2-4-97). Al mismo tiempo, en la ciudad de Zapala la conducción local de ATEN denunció que los bolsones de comida repartidos en la población por la crítica situación de pobreza, contenían volantes con inscripciones adversas al plan de lucha docente. En la ciudad de Chos Malal, al norte de la provincia, dirigentes locales del sindicato denunciaron amenazas telefónicas: “por el bien de ustedes mejor que vuelvan a trabajar.” (*La Mañana del Sur*, 3-4-97).

del reclamo docente. La convocatoria lejos de decaer permanecía firme y era un punto de presión indiscutible para el gobierno.¹¹⁰

Para el 3 de abril se sumaban a la protesta miembros de la iglesia católica – encabezados por el obispo Agustín Radrizzani, integrante de la pastoral social- y de las iglesias metodista y bautista en un ayuno por 36 hs. en solidaridad con los docentes. El ayuno, iniciado en la catedral de la ciudad, fue saludado por miles de docentes que marcharon hacia el lugar. El poder de convocatoria del gremio seguía siendo importante pese al tiempo transcurrido desde el comienzo del conflicto: fueron alrededor de 5.000 los manifestantes que se movilizaron en distintos puntos de la ciudad.¹¹¹

Ese mismo día el gobernador partió en caravana desde la seccional primera del MPN y recorrió cinco escuelas donde funcionaban comedores que fueron reabiertos en medio del paro, tratando de reunir adhesiones en contra de la medida de lucha. El recorrido lo hizo junto a funcionarios del gobierno, legisladores y militantes de su partido. Luego de haber llamado a “romper los candados de las escuelas”, el itinerario incluyó un colegio que nunca había tenido un comedor, pero que fue montado a último momento para la ocasión (*Río Negro*, 4-4-97).

Hacia el 4 de abril se perfilaba un posible punto de encuentro entre el gobernador y el gremio, producto de las constantes negociaciones. La reunión involucró la mediación de los partidos políticos con representación en la Legislatura (PJ, MPN, UCR y Frepaso), pero las asambleas docentes siguieron optando por la medida de fuerza al no ver satisfechas sus demandas.

En solidaridad con la situación de los docentes neuquinos, la CTERA llamó a un nuevo paro nacional por 24 hs. para el lunes 7 de abril, además de mantener su ayuno frente al Congreso Nacional. En Neuquén se sumaban a la protesta docente -que llevaba ya 28 días- los trabajadores estatales de la Legislatura provincial, judiciales y empleados de hospitales que también reclamaban la restitución del 20 % de descuento de sus sueldos. La

¹¹⁰- Ese mismo día la jueza Gudiño de Argüelles comenzó la recolección de pruebas para luego llamar a declarar a los dirigentes docentes que cortaron la ruta junto a los diputados que desobedecieron la orden de retirarse del lugar. Para ello se habían tomado fotografías y se había filmado a las personas que participaron del corte. En este contexto, algunos dirigentes docentes seguían siendo amenazados telefónicamente, o eran blanco de ataques con piedras en sus domicilios (*Clarín y Río Negro*, 3-4-97).

¹¹¹- Con más de cuatro semanas de conflicto, el no pago de salarios a los miles de docentes en huelga traía aparejado un problema en el sistema financiero de la provincia. Al verse afectado el bolsillo de los maestros, directamente se veía detenida la cadena de pagos de impuestos municipales y provinciales, y a comercios e industrias. Lo cual generaba un factor de desestabilización económica en la provincia.

movilización reunió ese día una marcha de más de 10 cuadras de extensión, unos 15.000 manifestantes.

Ese mismo lunes, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el gobierno provincial tomó la decisión de convocar al listado de docentes suplentes para ocupar los cargos de los que estaban en huelga. Dictó una conciliación obligatoria que empezaba a regir desde las 0 horas del día 8 de abril, y disponía el levantamiento de las medidas de fuerza y la suspensión de las medidas del gobierno en discusión. El gremio rechazó la instancia por no concordar con la fecha a la cual atenerse para retrotraer el conflicto a un “punto cero”, por la dudosa imparcialidad de la Subsecretaría de Gobierno Justicia y Trabajo de la provincia y principalmente por considerar que no modificaba las condiciones por las cuales comenzó la protesta. Oscar Di Diego, secretario general adjunto de ATEN afirmaba que “la medida no tiene efectos legales inmediatos sobre los maestros” –por ejemplo, los 400 docentes que quedaron cesanteados desde enero de ese año no eran objeto de discusión para el gobierno-. (*La Mañana del Sur*, 8-4-97). Así, desde la Subsecretaría de Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia se llegó a barajar la posibilidad de recurrir al Ministerio de Trabajo de la Nación para solicitar una suspensión de la personería jurídica del gremio y declarar ilegal la huelga docente.

En un panorama en donde no se vislumbraba una solución satisfactoria para los docentes, los actos de protesta se multiplicaban por toda la provincia involucrando a 18 localidades que apelaron al corte de diversas rutas y a la marcha de antorchas. Pero además de expandirse territorialmente el conflicto crecía en intensidad y en participación. El miércoles 9 de abril resurgieron los cortes en siete puntos de la provincia, lejos del desgaste de las movilizaciones que el gobierno pretendía. En Zapala la seccional de ATEN junto a otras 350 personas (miembros de ATE, trabajadores de la salud pública, trabajadores desocupados) conformaron una multisectorial que se disponía a plegarse a la protesta docente en relación a las políticas de ajuste. En la ciudad de Centenario, al norte de la capital, unos 500 maestros, padres y alumnos secundarios cortaron nuevamente la ruta provincial N° 7, que había sido desalojada por la fuerza pocos días antes.¹¹²

¹¹²- También fueron interrumpidas las rutas circundantes a las localidades de Plottier (al oeste de la capital), Villa El Chocón, Senillosa, Picún Leufú, Piedra del Águila (al sur), Centenario, Rincón de los Sauces (al norte), Chos Malal, Loncopué, Cavihaue y Copahue (al noroeste).

5.2. Hacia la segunda pueblada.

El día 10 de abril marcharon sobre la ruta 22 a la altura de Cutral C6 y Plaza Huincul alrededor de 400 maestros, padres y alumnos, mientras que en la ciudad capital los cortes se realizaron en cuatro puntos, uno de ellos el puente Neuqu6n – Cipolletti, donde se manifestaron alrededor de 8.000 personas. Estas acciones tuvieron una r6pida respuesta de la Justicia Federal, al abrir causas penales contra los manifestantes tanto de la capital como de las otras ciudades en donde se interrumpi6 el tr6fico.¹¹³

En las ciudades petroleras se decidi6 en una asamblea en la que participaron cientos de maestros, trabajadores afiliados a ATE, padres y alumnos a cortar por tiempo indeterminado la ruta 22 con piedras, alambres y palos, como lo hicieron en junio de 1996. Desde los diarios locales se comentaba la presencia de “un grupo de excitados”, desconectados de los “reales” protagonistas de la protesta. En realidad era la autodenominada “Comisi6n de Padres” –que aglutinaba a decenas de padres de estudiantes secundarios movilizados por la cuesti6n educativa en la provincia- la que coordin6 en Cutral C6 gran parte de las asambleas y actividades que hacían a la protesta. Al corte de la ruta a la altura de Cutral C6 se sumaba un nuevo corte en la ciudad de Neuqu6n, y las intimaciones de desalojo por parte de la Justicia no se hicieron esperar. En esta ocasi6n intervino el juez Oscar Temi, al frente del mismo juzgado de la jueza Gudiño de Argüelles, quien en ese momento se encontraba de licencia.

Mariela Su6rez, pobladora de Cutral C6 que para 1997 seguía desocupada, conform6 aquella comisi6n de padres y particip6 de los enfrentamientos. Explica de la siguiente manera la decisi6n de tomar las rutas en apoyo a los docentes:

“Con respecto a la ley Federal de Educaci6n, ahí estaban entregando toda la educaci6n, estaba destruida. El tema de la educaci6n nosotros como familia siempre lo vimos como un pilar fundamental. Entonces cuando te atacan eso es como un ataque a la Patria. Es lo que se tendría que haber hecho cuando se estaba vendiendo YPF. Es una traici6n a la Patria, y el ciudadano tiene el derecho, ante esa traici6n, a peticionar con diferentes tipos de reclamos. Por eso el corte de ruta no puede ser catalogado como un delito com6n porque vos tenés un aval constitucional. El derecho al trabajo, como pas6 en

¹¹³- Desde una fiscalía federal se libraron oficios a medios de informaci6n televisivos y radiales para establecer qui6nes fueron las “cabezas visibles” de la protesta: “la Justicia se valdrá de un video producido por un camar6grafo de Gendarmería” señalaba la jueza Gudiño de Argüelles. (*La Mañana del Sur*, 10-4-97).

el '96, sí o sí te lo tienen que garantizar. Cuando se está violando una de las cuestiones de la constitución vos tenés que salir en defensa.”¹¹⁴

Muchos manifestantes entendían este tipo de protesta como una medida que se debía adoptar sólo luego de haber superado numerosas instancias de reclamo. El corte de ruta era una decisión que implicaba muchísimas horas de debate entre vecinos y, a la hora de llevarse a cabo, representaba un enorme esfuerzo colectivo. Luego de los episodios de junio de 1996, asumir una decisión de ese tenor implicaba comenzar a objetivar una situación de violencia que hasta ese momento era potencial: la posibilidad de la confrontación directa. Era, en definitiva, la apuesta más comprometida del reclamo. Y desde la perspectiva de los manifestantes, si bien se reconocía que el corte de una ruta generaba una situación litigante con el Estado, la ilegalidad del hecho quedaba para ellos en un plano secundario.

Luego de un mes de paro docente ininterrumpido, el conflicto se había expandido involucrando a diversos sectores sociales solidarios con los maestros, pero que además introducían otra serie de reclamos sociales irresueltos. El eje geográfico y social del conflicto se había instalado nuevamente en las ciudades que habían protagonizado la pueblada de 1996, al punto tal que los cortes en la ciudad capital se realizaban ahora en apoyo a los manifestantes de Cutral Có y Plaza Huinul.

En esta instancia la ATEN participó de manera más marginal en comparación al inicio de la protesta en la capital neuquina. Así lo hicieron saber públicamente sus delegaciones dejando en claro que los cortes en estas ciudades no sólo eran la expresión de un reclamo docente: “sólo apoyamos esta medida que tomó el pueblo para defender la escuela pública, pero todo esto lo manejan los padres”, señalaba un comunicado de la dirigencia del gremio. (*La Mañana del Sur*, 11-4-97). Fue así que el sindicato oficialmente se retiró de la ruta –aunque muchos de los docentes agremiados siguieron participando del corte corporizado ahora en cientos de “fogoneros”-,¹¹⁵ lo que generó críticas de muchos de

¹¹⁴- Los episodios de protesta en Neuquén de 1996 y 97 no eran los primeros catalogados como delitos comunes. Son innumerables los casos en donde los medios de comunicación incluyen en sus páginas policiales los enfrentamientos de carácter político entre distintas fracciones sociales. Y no solo en los medios de información: “Lo que le pido es que lleve a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los delincuentes comunes que saquearon mi casa el 16 de diciembre y se llevaron armas de fuego, un televisor, un reproductor de videos, un equipo de audio y otras cosas. La impunidad generó alarma en la zona... Por el bien de Santiago le deseo éxito en su gestión.” Telegrama enviado por el senador Juárez (luego gobernador de Santiago del Estero) al brigadier Antoniotti el 12 de enero de 1994, con respecto a la manifestación popular ocurrida en esa provincia en diciembre de 1993. (Auyero, 2004, p. 231).

¹¹⁵- Como señalamos en el capítulo anterior, los “fogoneros” se constituyeron en contraposición a los “piqueteros” de 1996, pues según ellos habían “traicionado” a la población al haber claudicado con una serie

los manifestantes que conformaban el sector más contestatario de la movilización.¹¹⁶ La retirada del sindicato y la conducción del corte de ruta por parte de una fracción de padres con una postura más contestataria proveniente de sectores asalariados junto a los jóvenes fogoneros –un conglomerado distinto al que se había levantado en 1996- llevó a que desde el gobierno se profundicen las medidas contra el corte de ruta, desde el plano material y discursivo.

El juez Federal de la provincia Oscar Temi intimó al desalojo de los manifestantes que cortaban de la ruta N° 22 a la altura de Plaza Huincul y solicitó al Gobierno nacional la movilización de tropas de Gendarmería. Alrededor de las 18 hs. del día 10 de abril, la secretaria del Juzgado Federal Silvia Domínguez se acercó personalmente junto a los gendarmes para notificar que se desalojaría la ruta por la fuerza si no se abandonaban los piquetes, dando plazo hasta las 23 horas de ese día.

Mientras un nuevo intento de conciliación obligatoria quedaba en la nada, los piquetes en las ciudades de Cutral C6 y Plaza Huincul seguían nutriéndose de manifestantes. La llegada de la Gendarmería a desalojar la manifestación era inminente, con lo cual se hacía notoria la presencia de personas con piedras y gomeras en los piquetes (experiencia que ya se había instalado en la manifestación del año anterior). Esto motivó que desde los medios se hicieran analogías con la Intifada Palestina, sumado al rumor de “infiltrados” que proveían bombas molotov a los manifestantes.

Paralelamente se informaba de una fracción lumpenizada de manifestantes, retratados por los diarios locales literalmente como “borrachos” que tomaban alcohol y aspiraban pegamento. (*La Mañana del Sur*, 12-4-97). Las caracterizaciones abarcaban diversos tópicos morales que apuntaban a una construcción de un *otro desviado y peligroso*, como el caso de un periodista que señaló que “los ‘fogoneros’ se mueven cómodos en una anarquía

de medidas sólo paliativas ofrecidas por el gobierno. Como vimos anteriormente, buena parte de los sectores medios que protagonizaron la protesta de 1996 se vieron “obligados a salir a las rutas”; y por su capital cultural y social, mantenían estrechos lazos con la “vida legal” de las ciudades. Distinto al caso de los “fogoneros”, jóvenes marginalizados y de escasos recursos, quienes sentían que en pocos meses se habían olvidado de ellos y de sus familias. Se jactaban de no tener líderes y de “mandar todos” entre sus filas y constituían el frente de choque ante un posible avance represivo, con el ánimo de no claudicar ante las dádivas del gobierno.

¹¹⁶- Aunque la ATEN se retirara oficialmente de estos nuevos cortes de ruta en el interior de la provincia, el día 11 de abril la Subsecretaría de Trabajo provincial decretó la ilegalidad del paro docente por no haber aceptado la conciliación obligatoria. Tres horas más tarde el decreto era suspendido a través de la intervención del Juzgado Laboral N° 4, que dio lugar a una medida cautelar presentada por abogados de ATEN cuestionando la competencia de dicho organismo para requerir la conciliación.

que está directamente emparentada con esta zona. No tienen miedo y asustan, y con piedras palos y gomeras se animan a cualquier locura: no saben de límites.” (*Río Negro*, 12-4-97).

La cuestión docente sirvió en esta instancia para que se resalte una y otra vez desde los medios gráficos y desde el Gobierno la supuesta “desconexión” entre los manifestantes y los objetivos originales de la protesta. Las demandas sindicales habían quedado paulatinamente diluidas en esta nueva movilización popular, rescatándose las demandas de la pueblada del año anterior. Además, la composición social de la protesta efectivamente había cambiado. Los maestros que permanecían en la ruta eran ahora muchos menos y eran los empleados estatales, trabajadores desocupados o subocupados –muchos de ellos jóvenes-, y fracciones de la población con condiciones de vida de marginalidad o indigencia los que impulsaban los piquetes. Habían tomado como propios los primeros reclamos docentes en un panorama de crisis económica que no había cambiado estructuralmente desde la pueblada realizada el año anterior.

En la madrugada del día 11 de abril dos aviones de Gendarmería y tanquetas llegaban a Neuquén y se sumaban a los efectivos que ya estaban apostados en una localidad cercana para reforzar el operativo de desalojo. La intervención de las fuerzas de seguridad era inminente y el sector más duro de los manifestantes (los jóvenes fogoneros) estaban dispuestos a esperar el enfrentamiento. Dichos grupos se trasladaron a los puntos de la ruta donde se habían efectuado los piquetes durante 1996. El conflicto tomaba una dirección prácticamente idéntica a la vivida diez meses antes.

Ese mismo día comenzaron a registrarse una serie de incidentes con la policía provincial cuando un grupo de unos 25 jóvenes armaron una barricada en la ruta 22, pero en dirección al aeropuerto de Zapala, al oeste del principal corte. El encuentro se produjo luego de que los jóvenes fueran acusados por un automovilista por haberle destruido los vidrios del vehículo.

En la madrugada del día 12 de abril, las columnas de la Gendarmería se apostaron en la ruta dispuestos a avanzar contra los manifestantes. Previo al avance, el jefe del operativo intimó por última vez mediante un megáfono a desalojar la ruta.¹¹⁷ Finalmente el desenlace represivo se efectuó: a las 5: 45 hs., unos 400 gendarmes avanzaron con una máquina vial y

¹¹⁷- Una vez más estaba al mando de la Gendarmería el Comandante Eduardo Jorge, miembro de los grupos móviles de Gendarmería creados a principios de la década del '70 (ver nota 88). Luego de los hechos de represión en Neuquén, Jorge siguió su carrera en la fuerza como un referente en el ministerio del Interior: “en la actualidad es el Subdirector de Gendarmería Nacional y el candidato preferido de Corach para suceder al actual director, comandante general Timar Musumeci.” *Página 12*, 14-6-1998.

un camión hidrante contra las barricadas, al tiempo que atacaban con armas antimotines, gases lacrimógenos y perros adiestrados, siguiendo esta vez la orden del juez Oscar Temi.

Quienes opusieron resistencia en primera línea fueron jóvenes “fogoneros”, en su gran mayoría desocupados, quienes respondieron a los gendarmes a fuerza de gomeras y piedras. Sin embargo la superioridad militar fue contundente frente a los manifestantes, y en menos de 40 minutos las primeras barricadas fueron eliminadas. Las tropas avanzaron unos 1.500 metros hasta la entrada a la ciudad de Plaza Huincul, donde el desalojo de los manifestantes había sido casi total.

A diferencia de lo ocurrido en junio de 1996 cuando las rutas se poblaron de “gente bien vestida”, tal como habían observado la jueza y el jefe de Gendarmería, en esta ocasión las tropas nunca detuvieron su marcha. La represión siguió así su curso sobre una cantidad de jóvenes notablemente menor a la del año anterior, esta vez sin observaciones elocuentes de las autoridades para detener a las tropas.

Alrededor de las 7 hs. centenares de jóvenes se reagruparon y siguieron haciendo frente a las tropas. Nuevamente fueron reprimidos junto a mujeres con niños que salieron de sus casas en defensa de los manifestantes. Allí se registró la primera carga de gases lacrimógenos arrojados sobre las viviendas aledañas a la ruta.

Según el relato de los vecinos, la Gendarmería no lograba desalojar completamente la ruta, pues a medida que avanzaba los jóvenes nuevamente ingresaban al camino a espaldas de la fuerza, rearmando las barricadas y atacándolos por detrás. Pese a ello las tropas ingresaron por las calles de la ciudad lanzando gases y deteniendo a varios manifestantes, muchos de ellos menores.

Mientras los gendarmes avanzaron por la ruta nacional, la jueza penal Beatriz Martínez dispuso que la Policía provincial intervenga en las calles aledañas a la ruta, pues la Gendarmería no tenía jurisdicción para avanzar en ese ámbito. El avance de esta fuerza provincial en las calles internas de Plaza Huincul tuvo una consecuencia fatal: a las 9:30 hs. Teresa Rodríguez, una empleada doméstica de 24 años y madre de tres niños, fue herida de gravedad tras una bala policial que ingresó a su cuello (ver mapa en anexo).



Figura 9. Cutral C6. Por esta calle ingres6 la policia provincial arremetiendo contra los manifestantes. La figura marca el lugar donde habria sido herida de muerte Teresa Rodr6guez.



Figura 10. En la actualidad: el puente sobre un canal aliviador bautizado con el nombre de Teresa Rodr6guez, ubicado a metros de donde fue asesinada. Por sobre este puente cruz6 la policia provincial proveniente de la ruta 22 para reprimir a los manifestantes.

Según el relato de los diarios, la joven salía de su casa rumbo al trabajo. Sin embargo, días después de los enfrentamientos, su suegra declaró a un diario local que Teresa salió de su casa “a ver qué está pasando” (*Río Negro*, 16-4-97).

El ataque a la joven, que murió pocos minutos después, provocó que miles de pobladores salieran a las calles y, solidarizándose con los manifestantes que estaban siendo reprimidos y detenidos, atacaron masivamente a todas las fuerzas de seguridad. En pleno enfrentamiento, algunos concejales intentaron liderar la protesta y negociar con el juez y el jefe del operativo de Gendarmería. La respuesta de los manifestantes fue excluir por la fuerza –a puntapiés, según la crónica periodística- a dichos concejales (*Río Negro* 13-4-97). El hecho constataba la voluntad de autogestión de los manifestantes, quienes desde un inicio rechazaban la intervención de funcionarios políticos en la protesta.¹¹⁸

Poco después del mediodía, luego de casi siete horas de enfrentamientos a lo largo de 10 Km., los gendarmes debieron comenzar a replegarse ya que utilizado prácticamente todas sus municiones ante la embestida constante de piedras lanzadas desde distintos flancos. Incluso una de las columnas, superada por la cantidad de manifestantes, debió responder al ataque con las mismas piedras que les arrojaban. Alrededor de 15.000 personas obligaron al total de los gendarmes a seguir de largo por la ruta hacia el aeropuerto de Cutral C6 rumbo a Zapala, a unos 8 Km. del centro de la ciudad, sin poder retornar. La retirada fue realizada junto a una última descarga de gases en el barrio General San Martín, a las afueras de Cutral C6.

Además de la muerte de la joven empleada, el saldo del enfrenamiento arrojó alrededor de 30 heridos (muchos de ellos con orificios de bala de plomo) y 16 detenidos, la mitad de ellos menores de edad. Casi inmediatamente después de la muerte de Teresa Rodríguez los policías de la provincia que participaron en la represión fueron sumariados y se habló de la remoción del titular de la comisaría que intervino.¹¹⁹

¹¹⁸- El concejal Francisco Ferreira (UCR Cutral C6) participó en la protesta como uno de los manifestantes. Según su relato los gendarmes “tiraban gases dentro de las casas y disparaban indiscriminadamente. En un momento, uno disparó a los pies de una mujer que caminaba con una chiquita, prácticamente desde al lado.” (*La Mañana del Sur*, 16-4-97). Esta fue otra de las acciones que también se repetirían en los posteriores cortes de ruta con altas magnitudes de enfrentamiento (Corrientes y Salta). Con este tipo de hechos las fuerzas de seguridad ejercieron, además de acciones ilegales, una táctica sistemática dirigida a los manifestantes y a las poblaciones aledañas, como dispositivo represivo para los primeros y aterrador en el segundo caso.

¹¹⁹- La investigación y los peritajes para averiguar las causas y los responsables de la muerte de la joven estuvieron desde un comienzo repletas de irregularidades. Según la suegra de Teresa Rodríguez, la misma noche del día que reprimió la gendarmería, “unos tipos de civil vinieron en un auto gris a arrancarme el postigón donde quedó la marca de la bala”. Se refería a la ventana de su vivienda, con varios orificios de bala provenientes de la policía (*Río Negro*, 16-4-97). El fiscal Santiago Terán, quien tuvo a su cargo la instrucción del asesinato, expresó que existía la sospecha sobre “un grupo de personas pertenecientes a la Policía Federal

Las primeras explicaciones oficiales sobre la represión intentaron velar la responsabilidad sobre la muerte de la joven empleada. El comisario de la fuerza que intervino (efectivos de la Comisaría 6ª de Plaza Huinca) señaló la “presencia de francotiradores” para explicar la muerte de la joven (*La Mañana del Sur*, 13-4-97); figura que sería reiterada, como veremos, en otros cortes de ruta que terminaron en represión.¹²⁰ Por su parte, tanto el juez Temi que dio la orden de reprimir como el ministro de Gobierno de Neuquén Carlos Silva, aseguraron que la trayectoria del proyectil en el cuerpo de la víctima y sus características (se trataba de un calibre 32, de uso no reglamentario en las fuerzas de seguridad) hacían imposible que provenga de la policía, concluyendo que se trataba de un disparo de los propios manifestantes.¹²¹

En concordancia con esta línea, el Ministro del Interior Carlos Corach aseguró que las fuerzas de seguridad no habían provocado esa muerte. Ante las acusaciones de diversos sectores, el ministro intentó, además, mantener una distancia en cuanto a la decisión política que habilitó a la Gendarmería a reprimir: “en este caso la Gendarmería no está bajo la conducción operativa del Ejecutivo. Actuó bajo la orden del juez federal Oscar Temi, que en todo momento estuvo presente en el lugar. No podría decir si la fuerza cometió excesos.” (*La Nación*, 13-4-97).

En medio de rumores que afirmaban la intervención federal o de la imposición del Estado de Sitio en la provincia –versión que el mismo Corach luego desmintió-, una nueva

que ayer por la noche (por el sábado, día del enfrentamiento) estuvieron manipulando el cuerpo. De ser así –agregó- el caso sería muy grave ya que nada tienen que hacer en el lugar y menos con el cuerpo de la joven.” (*La Mañana del Sur*, 14-4-97). También fue amenazado de muerte uno de los quince testigos que declararon ante el fiscal (*Clarín*, 16-4-97). Días más tarde, el 29 de abril de 1997 el fiscal pidió a la jueza que intervenía en la causa que indague al médico policial Aníbal Raggioni por estar sospechado de no preservar en perfectas condiciones de seguridad el proyectil que causó la muerte de Rodríguez y de no manipularlo frente a testigos, además de no preservar las ropas que vestía al momento de su muerte. Además aseguró que “la acción del médico fue muy grave ya que me obligó a recurrir a la prueba de ADN para que no queden dudas de que ése era el proyectil que se le extrajo en la operación”, afirmó el fiscal (*La Mañana del Sur*, 30-4-97).

¹²⁰- En cuanto al tratamiento de la información por parte de los medios gráficos nacionales, también encontramos coincidencias entre este hecho y otros posteriores. Al día siguiente de la muerte de Teresa Rodríguez, el 13 de abril de 1997 el diario *Clarín* tituló: “La crisis en Neuquén ya produjo una muerte”. Cinco años más tarde, luego de las muertes de Kosteki y Santillán a pocos kilómetros de la Capital Federal, el diario reprodujo de manera casi calcada una nueva versión de la mirada fetichista sobre el conflicto, anunciando que “La crisis causó 2 nuevas muertes”.

¹²¹- Años más tarde y frente a estas explicaciones que sugerían que el disparo provino de los manifestantes, el juez que investigaba en la causa solicitó que dos físicos del Instituto Balseiro realizaran una pericia acústica para conocer el origen de los disparos. A partir de un estudio de la posición de los policías registrados en los videos de TV y de los efectos acústicos de los disparos en la zona, la conclusión fue contundente: “no tenemos evidencia de que haya habido disparos de otro lugar que no sea de grupos de policías. (...) El tiro está bien localizado pero no es claro quién lo dispara: es un grupo de por lo menos tres policías que no podemos individualizar.” (*Página 12*, 21-09-00). Aunque poco después de la muerte de Teresa Rodríguez se iniciaron sumarios en los agentes policiales, al día de hoy el crimen sigue impune.

marcha de antorchas en repudio a la violenta represión se organizó la misma noche del 12 de abril en el centro de la ciudad de Neuquén, a la que asistieron unas 15.000 personas y a la que adhirieron fracciones de la iglesia y los partidos políticos opositores. La marcha se detuvo en la casa de Gobierno de Neuquén, donde los manifestantes permanecieron varias horas repudiando al gobierno.



Figura 11. Casa de Gobierno de Neuquén, donde acudían los miles de manifestantes en las marchas que se realizaron a lo largo de todo el conflicto.

Ante el enorme descontento popular y en las puertas de una posible crisis institucional en la provincia, el gobernador Sapag dispuso una reunión con los dirigentes del sindicato docente. Se firmó un acuerdo por el cual los maestros se comprometían a levantar los cortes a cambio de mantener los puestos de trabajo, reintegrar del 50 % de los sueldos descontados por los 34 días de paro y reestablecer los talleres especiales que habían sido eliminados. La rapidez de la concertación causó el repudio de muchos de los manifestantes presentes en el acto, que indignados gritaban a los dirigentes por haber “vendido la sangre de Teresa Rodríguez”.¹²² Se exigió además la inmediata liberación de

¹²²- Todavía hoy aquel acontecimiento genera visiones dispares y sentimientos encontrados en los docentes neuquinos. Muchos delegados docentes opositores a la línea que dirigía ATEN en ese entonces aducen que no había necesidad de negociar esa misma noche con el gobernador, cuando el costo pagado por la protesta había sido altísimo. El acuerdo significó para el gobierno destrabar el conflicto con un mayor margen de acción, ya que en medio de un repudio generalizado de toda la población (incluso se hablaba de intervención federal de

detenidos durante los enfrentamientos y la separación del jefe policial de Cutral C6, puntos que se lograron a las pocas horas.

Los miles de manifestantes se dirigieron luego a la ruta que se comunica con el puente Neuqu6n-Cipolletti, en repudio a la represi6n y a la negociaci6n apresurada de la dirigencia de ATEN. All6 permanecieron docentes, padres, estudiantes secundarios universitarios toda la noche, hasta retirarse espont6neamente el domingo 13 de abril por la madrugada. Tambi6n hubo manifestaciones en distintos pueblos y ciudades de la provincia: en la Ciudad de Centenario se movilizaron 1500 personas y en Chos Malal unas 400, cifras in6ditas en esos puntos.

Ese domingo en Cutral C6 el obispo Radrizzani ofici6 una misa por Teresa Rodr6guez ante 4.000 personas en el Gimnasio Municipal de Cutral C6. Luego hubo una marcha hacia el cementerio –el mismo en el que fue sepultado Omar Carrasco, asesinado por miembros del ej6rcito en 1994- a la que asistieron unas 15.000 personas y m6s de 100 autos en una caravana de 3 km. de extensi6n. Al entierro llegaron dirigentes de la CGT regional Neuqu6n y R6o Negro adem6s de un dirigente radical neuquino, a quienes los fogoneros les impidieron participar de la marcha, por considerar que se trataba de un acercamiento oportunista. La marcha pas6 por el frente de dos comisar6as que hab6an sido destrozadas la noche anterior por decenas de j6venes.

La CTERA y ATE convocaron a un paro nacional para el lunes 14 de abril (el tercero en menos de un mes), acatado masivamente y acompa6ado por distintos gremios docentes en todo el pa6s, junto a organizaciones estudiantiles universitarias (FUA Y FUBA) y de colegios secundarios. En Buenos Aires hubo adem6s una movilizaci6n convocada por estos sindicatos a la que adhirieron partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y otros gremios. La marcha culmin6 en la Plaza de Mayo y concurrieron alrededor de 35.000 personas.¹²³ La CTERA exigi6 adem6s que la CGT se pronunciara como los dem6s

la provincia), lograban el compromiso de los docentes de volver a las aulas, justo en el momento de mayor tensi6n.

¹²³ - Durante esta marcha hubo un ataque a la Casa de Neuqu6n en Buenos Aires: se destrozaron las vidrieras a pedradas y se atribuyeron estos hechos a militantes de “ultraizquierda” (diarios *La Naci6n*, *R6o Negro*), como el grupo Quebracho, PCR, MAS y la CCC. Durante los destrozos no hubo polic6as que intentaran detener la acci6n, aunque luego hubo choques con la polic6a federal que dejaron un saldo de 50 detenidos. Al d6a siguiente el dirigente del entonces FREPASO, Carlos “chacho” 6lvarez, declar6 que “tenemos que evitar que se sumen a estas marchas personas que creen que pueden alcanzar el poder mediante la violencia”, en alusi6n directa a estas agrupaciones (*La Ma6ana del Sur*, 15-4-97). Por otra parte, la titular de CTERA Marta Maffei declaraba que “sabemos que hay muchos servicios infiltrados, que terminan haciendo intento por vulnerar las expresiones populares” (*La Ma6ana del Sur*, 16-4-97). Siendo miembros del FREPASO, ambos dirigentes adjudicaron las acciones violentas a los infiltrados, aunque de 6rdenes pol6ticos dis6miles. La opini6n del gobernador Sapag fue m6s elocuente: “la casa del Neuqu6n en la Capital fue destrozada y han dejado sus

gremios y llamara a un paro, hecho que no ocurrió. Si bien el Secretario General Rodolfo Daer repudió los hechos de violencia, solo llamó a un paro de una hora distribuido en distintos turnos en los gremios afiliados y que resultó una medida de bajo acatamiento.

En Neuquén los docentes de la ATEN se movilizaron junto a más de 12.000 manifestantes por el centro de la ciudad, en una marcha que tenía caracteres reivindicativos sobre los días de lucha, pero también un carácter de luto. Adhirieron centros de estudiantes secundarios y universitarios, y los comercios de la ciudad apoyaron permaneciendo cerrados. Las marchas se multiplicaron por el interior de la provincia y por ciudades de provincias vecinas, como en Bariloche y General Roca, donde se movilizaron 1.200 y 1.000 personas respectivamente.

Los docentes todavía permanecían en paro, condicionando su levantamiento total hasta tanto no haya respuestas desde el gobierno para con las poblaciones que todavía cortaban la ruta. Esto generó que desde un juzgado laboral provincial se volviera a intimar al gremio a finalizar la medida de fuerza y a someterse a la conciliación obligatoria.

Ese mismo lunes 14 de abril el Gobierno nacional comenzó a retirar a unos 600 gendarmes, aunque se mantuvo una cantidad no especificada de los mismos (alrededor de 400) en estado de alerta en un sitio no especificado, cerca de las ciudades donde ocurrieron los incidentes. Así lo dispuso el juez Oscar Temi, con la intención de que las fuerzas puedan desbaratar rápidamente nuevos “focos de agitadores” en la zona de Cutral Có. (*La Mañana del Sur*, 15-4-97).

Por su parte, Sapag viajó a Buenos Aires e instaló presuroso el problema ante el Jefe de Gabinete y los ministros de Interior y Trabajo, logrando una vez más una serie de promesas de mediano y largo plazo para tratar de satisfacer las demandas de los pobladores de Plaza Huincul y Cutral Có. También expuso ante los funcionarios del Ejecutivo Nacional su preocupación por el “activismo de grupos de ultra izquierda que le llenan la cabeza a la gente en los piquetes” (*Río Negro*, 16-4-97).

Algunas de las medidas a implementar consistían en la entrega de granjas a 300 familias, un programa de ayuda crediticia a pequeños emprendimientos, el otorgamiento de becas de estudio a niños y adolescentes de familias pobres, y la creación de 500 puestos de trabajo de cuatro horas diarias y un salario de \$ 200 al mes en tareas de mantenimiento en pozos petrolíferos de YPF por el lapso de 120 días. Recurrió una vez más a la promesa de

nombres Quebracho, Patria Libre, el Partido Obrero, el MAS, los comunistas. Donde hay escándalo están prendidos con las armas y el desorden” (*La Nación*, 17-4-97).

una inmediata licitación internacional para la construcción de una planta de fertilizantes en Cutral Có, tema que había postergado desde el año anterior. Las medidas más inmediatas fueron paliativas: la entrega de unos 1000 planes laborales por 180 días y bolsones de comida dirigidos a los jóvenes y a familias en situación de indigencia, muchos de los cuales permanecieron por varios años.

Sin embargo los cortes continuaron en las ciudades mediterráneas, y se desconoció la negociación realizada en la capital entre la dirigencia de ATEN y el gobierno, donde ya existía el compromiso de volver a clases. La Comisión de Padres volvió a conformar asambleas y, luego de los debates, entre 500 y 1.000 personas regresaron a la ruta al día siguiente de la represión, una vez más para reclamar soluciones concretas de largo plazo, que hasta el momento no se habían dado. La represión y la muerte de Teresa Rodríguez ahondaron la indignación de los pobladores, que decidieron no retirarse de la ruta, pese al rumor que afirmaba que los gendarmes estaban listos para desalojarlos nuevamente si recibían la orden. Volvieron a la conocida torre que indica la entrada a la ciudad de Plaza Huincul, donde rearmaron las barricadas con alambrados, troncos, carteles publicitarios de chapa y caños para transportar petróleo. Tras una asamblea –en la que muchos manifestantes afiliados del MPN quemaron públicamente sus credenciales en señal de repudio al partido gobernante- confirmaron la voluntad de proseguir con los piquetes. Además elevaron un petitorio por la libertad de 16 personas que permanecían detenidas tras el enfrentamiento y exigieron la investigación por el asesinato de Teresa Rodríguez.

Resurgieron los problemas de abastecimiento de combustible en estaciones de servicio y en el aeropuerto de Neuquén, con lo que se ponía en riesgo la continuidad del tráfico aéreo. La posibilidad de desabastecimiento de alimentos provocó que se generaran grandes filas en los supermercados y almacenes, únicos comercios que permanecían abiertos. Pese a ello, y sin llegar a los niveles de participación popular de 1996, el apoyo a la medida seguía siendo importante.

Los manifestantes exigían como condición indispensable para levantar el corte el cumplimiento de los 12 puntos que el gobierno se había comprometido a cumplir en 1996. Y el desprocesamiento de las personas que habían sido detenidas y que luego fueron liberadas con la condición de no participar de ninguna manifestación pública. (*La Mañana del Sur*, 16-4-97). Mediante una delegación que viajó a reunirse con el gobernador, los manifestantes exigieron el total retiro de las tropas de Gendarmería, hecho que no sucedió. Según el registro de los diarios, el gobernador esta vez se mostró reticente y expulsivo -de

modo contrario a la negociación que tuvo con los docentes-, y transmitió una vez más a sus interlocutores que “se encontraban al margen de la ley” por continuar con la protesta. Aquella reunión fue un indicador del estado de virtual aislamiento de los manifestantes, luego de que la situación con los docentes de la capital fuera descomprimida. Con esta relación de fuerzas desfavorable y con poco margen de negociación, el corte de rutas se hizo más difícil de sostener.

Los docentes finalmente volvieron a clases el martes 15 de abril, tras 35 días de paro. En un plenario en donde participaron más de 1300 delegados de la capital neuquina (ahora impulsores de levantar la huelga) y los del interior, el 70 % de los asistentes votaron volver a las aulas. La discusión fue ardua e incluyó un debate moral: la decisión de retornar a clases y automáticamente abandonar la lucha sostenida por los pobladores de Cutral C6 y Plaza Huincul. Sin embargo una mayoría consideró que buena parte de los objetivos habían sido cumplidos.

Una nueva marcha en apoyo a los piqueteros de Cutral C6 fue convocada por la CTA y el MTA en Neuquén capital –trabajadores de la salud, legislativos y judiciales- y contó con unos 2.000 manifestantes, notablemente menos a las marchas masivas que transitaban la ciudad hasta el día anterior. Aunque en la entrada de Plaza Huincul el corte de ruta se nutría de unas 3.000 personas. Los piquetes no se habían levantado, y aunque las promesas oficiales eran muchas, los manifestantes –principalmente los jóvenes fogoneros- descreían los anuncios y pretendían hechos concretos.

Tras nueve días de bloqueos, la situación en Cutral C6 y Plaza Huincul también se definió en una multitudinaria pero controvertida asamblea realizada la noche del 18 de abril, en la cual se decidió levantar los cortes.¹²⁴ La medida fue tomada luego de una jornada de encuentro entre el gobernador Sapag, el secretario de la presidencia Alberto

¹²⁴- Muchos recuerdan lo controvertida de esa asamblea realizada en el medio de la ruta. El debate sobre las medidas que se tomarían duró horas. Un camión provisto por la CTA hacía de las veces de palco, en el que –según el recuerdo de muchos entrevistados- “el micrófono no se le daba a cualquiera” y eran mucho más recurrentes las mociones que justificaban levantar la medida de fuerza. Alrededor de las 20:00 hs., al momento de pasar al recuento de mociones antes de la votación final, repentinamente las luminarias de la ruta se apagaron y la asamblea quedó en una absoluta penumbra. Los faros de los automóviles de los vecinos intentaron salvar la situación, aunque infructuosamente. La votación, sin poder ver las manos alzadas de los participantes, debió hacerse “por aplausos”. El volumen de éstos fue lo que determinó finalmente levantar la medida. Si bien no se trató de una resolución transparente, muchos reconocen que más allá de la “casual” oscuridad, la medida no se habría podido continuar. Los comerciantes ejercían una presión considerable para terminar con la medida, al verse perjudicados en sus ventas. Por otro lado, la sensación predominante era de cansancio y congoja por la muerte de Teresa Rodríguez, lo cual mellaba el ánimo para continuar con la medida de lucha en la gran mayoría.

Kohan y algunos de los delegados fogoneros y de la Comisión de Padres, elegidos en las asambleas populares.

La decisión generó posiciones encontradas. Una mayoría votó por el definitivo levantamiento de los cortes como muestra de “buena voluntad” a negociar con las autoridades provinciales, mientras un grupo menor (integrado en su mayoría de jóvenes fogoneros) pretendían seguir firmes con la protesta. Quienes votaron por el levantamiento de los cortes se consideraron dueños de una “nueva victoria”, pues se plasmaba por escrito el compromiso del gobernador –con carácter institucional, involucrando al PEN- a atender un pliego de demandas de los manifestantes, que incluía algunas de las medidas nunca cumplidas desde 1996, con fecha de vencimiento el 26 de junio de 1997. Además de no iniciar causas judiciales contra los manifestantes, dar prórrogas en el vencimiento de impuestos, cobertura social a familias desocupadas, etc.

Esa misma noche miles de personas (comerciantes en buena parte) circularon en sus autos en una caravana por el centro de Cutral Có festejando el levantamiento de los piquetes, la reanudación de la actividad comercial y el abastecimiento de alimentos y de combustible en estaciones de servicio.

El día 19 de abril por la mañana dos máquinas viales despejaron finalmente los restos de las barricadas sobre la ruta y las casillas de caña improvisadas a los costados de las rutas donde se alojaban momentáneamente algunos manifestantes. El tránsito volvió a circular con normalidad y los comercios y bancos abrieron en su horario habitual.

El lunes 22 de abril las oficinas municipales de Cutral Có y Plaza Huincul debieron atender a cientos de personas que formaron filas de hasta cinco cuadras de largo, en espera por alguno de los precarios planes de trabajo que se habían preparado. La prioridad la tuvieron, por consentimiento de las asambleas, los jóvenes fogoneros que estuvieron presentes durante todo el conflicto y en los enfrentamientos físicos. La sensación de festejo iría modificándose con el paso del tiempo, cuando se confirmó que los cambios venideros no eran ni tan profundos ni tan veloces como se pretendía.

El lunes 28 de abril, y tras la dilación en la ejecución de los planes, un grupo de unos 50 jóvenes fogoneros cortaron nuevamente la ruta durante 4 horas. Pretendían acelerar la ejecución de planes de trabajo y la inclusión en las listas de empleo, que hasta ese momento no había ocurrido. Lograron una presurosa promesa del intendente de Cutral Có, Daniel Martinasso, quien viajó a la Casa de Gobierno para disponer de un plus salarial y de la puesta en marcha inmediata de más planes de trabajo. La nueva protesta generó que los

distintos bloques de la legislatura -entre ellos la fracción “blanca” del MPN- inicien un juicio político al intendente por mal desempeño de las funciones públicas.

5.3. El fantasma que recorrió Neuquén.

El conflicto visto en su conjunto, desde mediados de marzo a mediados de abril de 1997, adquirió una permanencia e intensidad mucho mayor a la protesta de 1996. En este caso la acción represiva se ejecutó hasta el desalojo total de manifestantes, lo cual implicó también un grado mayor de enfrentamiento. Pero no sólo en este aspecto el conflicto adquirió mayor magnitud en comparación al año anterior. Existió un masivo rechazo a las políticas económicas y educativas reflejado en miles de personas en las calles de la ciudad capital casi diariamente durante un mes. En las ciudades de Cutral C6 y Plaza Huincul se retomó el conflicto docente impulsado por la “Comisión de Padres” de esas ciudades y fracciones empobrecidas de los sectores asalariados, que una vez más ejercitaron prácticas autónomas de representación política, aunque de manera temporaria e inorgánica. Así fue que en estas ciudades nuevamente quedaron virtualmente anuladas las instituciones representativas, como la Legislatura y el Ejecutivo municipal en el lapso de más de una semana.

Este conjunto de acciones motivó a que las explicaciones provenientes principalmente de la dirigencia política local y nacional también crecieran en cantidad y en el tenor de las acusaciones morales y político-ideológicas. Registramos un total de 290 declaraciones en los diarios de tirada nacional *La Nación*, *Clarín*, *Página 12*, y en los provinciales *La Mañana del Sur* y *Río Negro*. Un primer dato a tener en cuenta es la intervención de los manifestantes (docentes en una primera instancia y padres ocupados o desocupados en la segunda instancia), que no pasa del 11 % en el total de las declaraciones. Una baja notable en proporción al casi 30 % en la anterior protesta de junio de 1996.

Hay, en el total de registros, 155 declaraciones que contienen reclamos, denuncias o exhortaciones. Podríamos decir que el contenido de estas demandas se distingue en dos grandes porciones: por una parte en un 50 % del total que incluyen llamados a repudiar las acciones represivas del 27 de marzo y 12 de abril (luego del desalojo de docentes en Neuquén capital y de los piquetes en Cutral C6 respectivamente), y elevan llamados a continuar con la protesta y de solidaridad con los manifestantes. En su gran mayoría son

estos mismos manifestantes los que emiten estos llamados y reclamos: los docentes neuquinos y los manifestantes de Cutral C6 y Plaza Huincul. Tambi6n estos reclamos fueron elevados por periodistas y funcionarios pol6ticos opositores al gobierno nacional y provincial, fundamentalmente luego de las intervenciones de las fuerzas de seguridad:

“Con la medida de fuerza dispuesta para hoy, queremos nacionalizar el repudio a la represi6n y no agudizar el conflicto provincial. El apoyo a los reclamos sigue con la huelga de hambre por tiempo indeterminado frente al Congreso de la Naci6n.” Marta Maffei, Dirigente CTERA, *Clarín*, 31-3-97.

Un 20 % est6n dirigidos a reclamar soluciones al gobierno nacional, o son cr6ticas por no ejecutar soluciones. Este tipo de declaraciones provienen de los mismos manifestantes, sindicatos (CTA y CTERA principalmente), dirigentes de partidos opositores al gobierno de Menem (FREPASO y UCR) y tambi6n de legisladores nacionales provenientes de dichas fuerzas pol6ticas.

Por otra parte, un 23 % de los mensajes exigen el fin de las interrupciones en la ruta o reclaman al gobierno que actúe para poner fin a la protesta.

“Los docentes tienen motivos de sobra para protestar, pero ning6n gobierno puede darse el lujo de tolerar el bloqueo de caminos y puentes como forma de subrayar quejas sectoriales, por leg6timas que 6stas sean.” Editorial del diario *Río Negro*, 8-4-97.

Una porci6n de este tipo de exigencias y acusaciones apuntan a los propios manifestantes de la muerte de Teresa Rodr6guez luego de la represi6n en Cutral C6. Como vimos, este tipo de mensajes fueron difundidos, contra todo tipo de evidencia, por los jefes de las fuerzas de seguridad y por funcionarios pol6ticos del ejecutivo nacional.

La Gendarmería fue atacada y **los responsables de crear situaciones de violencia son aquellos que no conducen los conflictos gremiales dentro de la ley** porque cuando se convoca a una marcha o manifestaciones hay que evitar los desbordes. Las responsabilidades que les caben a los dirigentes es el no haber podido evitar esos desbordes. Carlos Corach, Ministro de Interior, *Página 12*, 15-4-97.

“Frente a la desesperaci6n de la gente se enancan los ide6logos de ultraizquierda que generaron la muerte de esa chica (Teresa Rodr6guez). No fueron los maestros los que provocaron esta pueblada. Yo hablé con ellos y estaban atemorizados por lo que esta ocurriendo.” Felipe Sapag, *Río Negro*, 18-04-97.

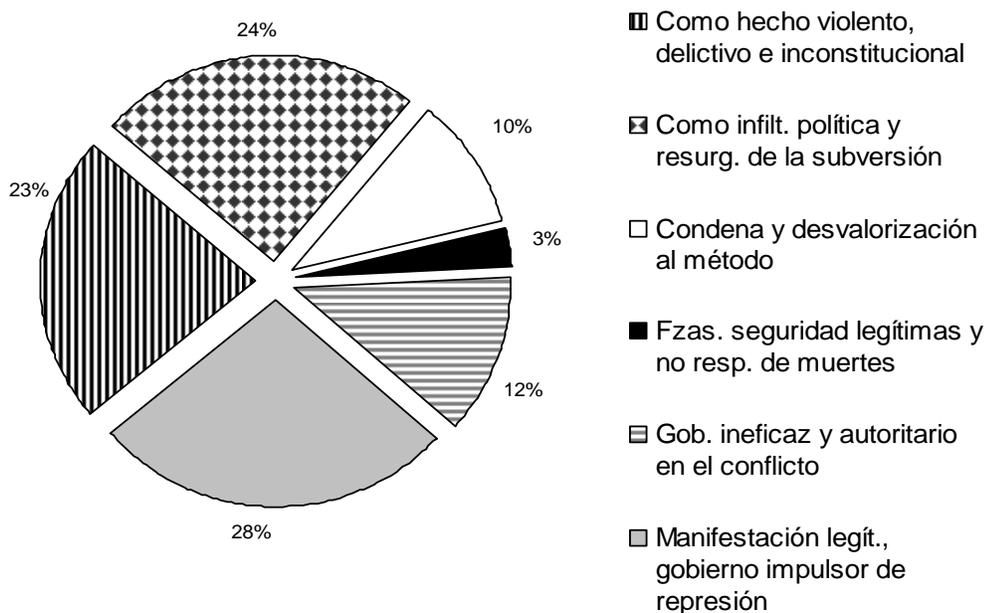
Por 6ltimo, un 6 % de las declaraciones reclaman la intervenci6n de la fuerza p6blica y del restablecimiento del orden, principalmente durante el desarrollo de la protesta docente

antes del desalojo en el puente interprovincial. Proviene en su gran mayoría de funcionarios del poder judicial y el ejecutivo provincial y nacional:

Se intima a que se levante esa extrema medida bajo el apercibimiento de hacer uso de la fuerza pública si fuera necesario." Justicia Federal de Neuquén. *La Mañana del Sur*, 27-3-97.

Por otra parte, las declaraciones que poseen caracterizaciones o definiciones son 217 de un total de 290 (el 74 %). En ellas se registraron claros mensajes donde se califica tanto a los sujetos que protagonizan la protesta y a sus acciones como a diversos agentes del gobierno nacional y provincial. El mapa sería el siguiente:

Gráfico 4: Ciudad de Neuquén, Cutral C6 y Plaza Huincul, marzo y abril de 1997. Tipos de caracterizaciones durante el período de conflicto (N = 290).



Fuente: elaboración propia en base a diarios La Nación, Clarín, Página 12, La Mañana del Sur (Neuquén) y Río Negro.

En principio podemos observar que menos de un tercio de los mensajes apuntaron a calificar a los manifestantes como compañeros, portadores de reclamos justos y pacíficos (27 %), mientras que otra porción caracterizan negativamente al gobierno provincial o nacional como ineficaz o autoritario (13 %).

El 60 % de las declaraciones contienen caracterizaciones negativas hacia los manifestantes, las cuales desagregamos de la siguiente manera: en primer lugar, un 23 %

está compuesto por mensajes que califican a la protesta como ilegítima y/o ilegal, y a sus integrantes como impulsores de acciones violentas, antidemocráticas y en detrimento de las instituciones y la constitución. No sólo provinieron de la dirigencia política, sino también de otros sectores de la sociedad que no participaron de las protestas pero que se aliaron a los discursos gubernamentales:

"El corte de ruta es un atropello a la ciudadanía. No se puede perjudicar con la protesta a otros sectores como el que representamos, que brinda mano de obra y ocupación a numerosas personas de la región." Miguel Miquel, Presid. Cámara Fruticultores Integrados, *Río Negro*, 26-3-97.

"El dilema que planteó el corte de ruta no sólo fue muy importante porque causó graves pérdidas económicas, sino porque evidenció algo **muy peligroso para la salud de la democracia: que se instituya como práctica habitual el método del corte de rutas nacionales** cada vez que un sector determinado tenga un problema, no es un detalle sino todo un caso." Rubén Boggi, Periodista. *La Mañana del Sur*, 30-3-97.

"El corte de la ruta 22 en Plaza Huinca y Cutral Có **atenta contra los derechos constitucionales de libre circulación, libertad de trabajo y abastecimiento** de los casi 30 mil habitantes de la zona norte neuquina." Aldo Vivas, Presidente Cámara de Comercio, Industria y Producción de Chos Malal. *La Mañana del Sur*, 17-4-97.

Las imágenes tendientes a "demonizar" a las ideologías de izquierda constituyen casi la cuarta parte del total. El factor político-ideológico tuvo un peso específico en la caracterización de los dirigentes del gremio docente, al acusarlos de ser desestabilizadores y perjudiciales para el orden social. Esto ocurrió desde el principio del conflicto y fundamentalmente luego del enfrentamiento en Cutral Có. La estrategia utilizada desde los despachos oficiales tanto de la provincia como de la nación –y adoptada por diversas fracciones de la sociedad- pareció ser la de sembrar sospechas de todo tipo en los manifestantes basándose en su filiación ideológica. Algunas de estas percepciones se reflejan en los siguientes mensajes:

"El paro docente está potenciado **por grupos de ideólogos de izquierda que quieren destruir la educación.**" Felipe Sapag, *Río Negro*, 25-3-97.

"Cuando el gobernador dice que el tema está politizado tiene razón, **porque los que están al frente de ATEN son todos de izquierda y los que lo apoyan nunca apoyaron al MPN.**" Gloria Sifuentes, *La Mañana del Sur*, 30-3-97.

"Estamos sorprendidos por la incapacidad de los dirigentes de esta protesta, **y se ven superados por los partidos de izquierda que se infiltraron, como siempre, para hacer estallar la paz social.**" Juventud MPN, Neuquén. *La Mañana del Sur*, 2-4-97.

"ATEN es un partido trotskista que esta utilizando la metodología del foquismo consistente de generar un conflicto en un lugar, no dejar ninguna puerta para resolverlo y cuando explota y hay un muerto extender el conflicto al resto del país". Eduardo Amadeo, Secretario de Desarrollo Social. *Página 12*, 16-4-97.

Era de público conocimiento que la dirección de la seccional capital de ATEN en 1997 estaba conformada por una lista de izquierda, pero este hecho en sí mismo fue presentado como el problema central del conflicto. Estas apreciaciones sobre “la izquierda” se difundieron como indicadores de un conocimiento previo que claramente excedía a la protesta docente.

Revisemos por separado el contenido de los mensajes según el momento en que fueron difundidos. Diferenciamos para ello tres períodos según los dos principales hechos de enfrentamiento: momento 1- antes de la represión en el puente Neuquén-Cipolletti (etapa del conflicto docente enteramente), momento 2- período comprendido entre el desalojo del puente y la represión en Cutral C6 y Plaza Huincul (etapa de alza y traslado del eje geográfico del conflicto) y momento 3- posterior al desalojo violento de la ruta 22 y del asesinato de Teresa Rodríguez en estas ciudades. Nos detendremos en primer lugar en las declaraciones que caracterizan favorablemente a los manifestantes y a la protesta o que caracterizan negativamente al gobierno (86), y en segundo lugar en aquellas que hacen lo propio con los manifestantes (131).

Cuadro 3: Ciudad de Neuquén, Cutral C6 y Plaza Huincul, marzo y abril de 1997.

Caracterizaciones a favor de la protesta y en contra del gobierno según momentos del conflicto.

				Total
	Mom 1 (antes de 27-3)	Mom 2 (entre 27-3 y 12-4)	Mom 3 (después de 12-4)	
Gob. ineficaz y autoritario en el conflicto	4 80,0%	14 43,8%	9 18,4%	27 31,4%
Manifestación legít., gobierno impulsor de represión	1 20,0%	18 56,3%	40 81,6%	59 68,6%
Total	5 100,0%	32 100,0%	49 100,0%	86 100,0%

Fuente: Elaboración propia. Diarios *La Nación*, *Clarín*, *Página 12*, *La Mañana del Sur* y *Río Negro*. Meses de marzo y abril de 1997.

En primer lugar podemos observar que los mensajes que caracterizan de ineficiente y autoritario al gobierno provincial y nacional y los que expresan solidaridad a los manifestantes crecen en proporción al desarrollo de la protesta, hasta demostrar su máximo peso luego de la represión en Cutral C6 y Plaza Huincul. Contrariamente a lo que se podría suponer –y lejos de lo que ocurría con los reclamos y exigencias al gobierno- sólo el 22 %

del total de estos mensajes fueron producidos por los manifestantes, siendo los dirigentes gremiales y partidarios opositores los principales emisores. Es el segundo momento cuando fueron realizadas en mayor proporción, es decir, luego del desalojo de los docentes del puente interprovincial.

Por otra parte, las caracterizaciones que hablaban de los manifestantes como “compañeros”, portadores de reclamos “justos” y que al mismo tiempo colocaban al gobierno nacional y provincial como responsables de la represión y la muerte de una persona, fueron emitidos en su gran mayoría luego del enfrentamiento más importante. Provinieron también de dirigentes sindicales y partidarios, manifestantes, y de personas no directamente involucradas a las partes en disputa pero solidarias con los manifestantes (periodistas, lectores de diarios, centros de estudiantes, etc.). Haremos el mismo ejercicio con los mensajes dirigidos a denostar a los manifestantes y a apuntalar la acción represiva:

Cuadro 4: Ciudad de Neuquén, Cutral Có y Plaza Huincul, marzo y abril de 1997.

Caracterizaciones negativas de la protesta y apoyo a las políticas represivas según momentos del conflicto.

				Total
	Mom 1 (antes de 27-3)	Mom 2 (entre 27-3 y 12-4)	Mom 3 (después de 12-4)	
Como hecho violento, delictivo e inconstitucional	7 36,8%	9 31,0%	33 39,8%	49 37,4%
Como infiltr. política y resurg. de la subversión	6 31,6%	6 20,7%	41 49,4%	53 40,5%
Condena y desvalorización al método	6 31,6%	14 48,3%	2 2,4%	22 16,8%
Fzas. seguridad legítimas y no resp. de muertes	0 ,0%	0 ,0%	7 8,4%	7 5,3%
Total	19 100,0%	29 100,0%	83 100,0%	131 100,0%

Fuente: Elaboración propia. Diarios *La Nación*, *Clarín*, *Página 12*, *La Mañana del Sur* y *Río Negro*. Meses de marzo y abril de 1997.

Como en las anteriores declaraciones, la frecuencia de la publicación de estos mensajes es proporcional a la magnitud material de los enfrentamientos. Las que hablan de los cortes de ruta como un “hecho violento e ilegítimo” fueron emitidas mayoritariamente

por funcionarios del poder ejecutivo y legislativo provincial y también por fracciones de la burguesía y pequeña burguesía (cámaras de comerciantes, industriales y de productores frutihortícolas). Representan casi el 37 % del total de declaraciones y, en términos absolutos, se realizaron en mayor medida luego de la represión y asesinato de Teresa Rodríguez.

Algo similar ocurre con los mensajes que vinculan la protesta con actividades subversivas. Estas interpretaciones son las de mayor peso relativo con el 40 %, provenientes en su mayoría de despachos oficiales provinciales y nacionales. Acusaban a los manifestantes de acciones subversivas, de la existencia de “infiltración ideológica de izquierda”, de “impulso de la violencia política” e incluso de “prácticas revolucionarias y guerrilleras”.

Al principio del conflicto estos mensajes caracterizaron al gremio docente, durante el paro y con movilizaciones casi cotidianas. Según este planteo, un grupo de “ideólogos” habría “copado” el gremio docente, es decir, lo habría infiltrado con elementos “extraños”. De modo que el reclamo además de ser violento e ilegal, no habría sido auténtico; negando así las prácticas asamblearias del gremio y su dirección política legítimamente acreditada en elecciones internas. Posteriormente, luego de la represión más violenta que causó una muerte y decenas de heridos y detenidos, estos mensajes fueron más frecuentes y vincularon la infiltración y la violencia política en toda la región con la acción de la “comisión de padres” y de los fogoneros: en el tercer y último momento diferenciado, estos mensajes ocupan la mitad del total de caracterizaciones negativas.

Le siguen las condenas y desvalorizaciones a la metodología del corte de rutas, que habrían estado “perjudicando al conjunto de la sociedad en favor de un sector particular”. Consideran que la medida es “enteramente política” –como si esta adjudicación fuera negativa en sí misma-, además de “excesiva”, “desmesurada”, “salvaje” y “extrema”. Representan casi el 17 % del total de declaraciones, pero representan casi la mitad del total de ese tipo de declaraciones en el segundo período. Es decir, días inmediatamente posteriores al primer desalojo y represión de docentes en la ciudad de Neuquén.

Por último se encuentran las expresiones que legitiman la acción de las fuerzas de seguridad y que niegan su responsabilidad en la muerte de Teresa Rodríguez, todas ellas emitidas luego de la represión en Cutral C6 y Plaza Huincul. Este tipo de mensajes incluso colocó a los propios manifestantes, acusados de portar armas, como responsables de la muerte de Rodríguez.

Ahora bien, los mensajes emitidos sobre la dirección política del gremio docente que hablan de prácticas “foquistas” y de infiltración ideológica, no sólo rescatan imágenes de luchas pasadas, sino que además apuntan a un supuesto aislamiento de los dirigentes gremiales con respecto al resto de trabajadores y de la población. Salen a la luz en momentos en que la causa docente tenía, por el contrario, un apoyo en las calles pocas veces visto en la historia reciente de la provincia.

Liliana Obregón era docente de literatura y formaba parte de la dirección de ATEN seccional Neuquén en 1997. Reflexiona acerca de este tipo de mensajes:

“Copar el gremio docente es referirse a la dirección. Ellos no podían entender cómo en Neuquén una comisión que abiertamente se decía marxista podía haber ganado las elecciones. No lo podían entender. Y que la comisión que dirigía el conflicto fuera de Neuquén Capital. Todo el mundo sabía eso, por eso la gente no les daba ni cinco de bolilla.”

Marcela Romero no formaba parte de la dirección de ATEN ni era delegada, aunque también era docente de letras. Describe algunos aspectos internos de gremio luego de leer aquellas declaraciones:

“Más allá de toda esa publicidad, al tener las asambleas una gran participación, la gente sabía que lo que se hacía era lo que ellos habían votado. Porque en realidad la conducción era para ejecutar lo que la asamblea decidía. Entonces eso inhabilita todo este tipo de declaraciones. Yo no estaba en la conducción en ese momento, pero vos estabas con los compañeros y te decían ‘eso es mentira porque esto lo decidí yo’. Porque primero lo discutimos en los distritos, estábamos horas discutiendo, y en ese proceso vos ibas viendo como viene la mano, qué es lo que se podía hacer, cómo viene el gobierno... Todas esas discusiones políticas se van desarrollando en la asamblea... Se discutieron cosas muy gruesas, como la conciliación obligatoria, qué era, qué significaba para el trabajador, cuál fue su origen... Todo ese tipo de cosas se discutieron en lo cotidiano. Por eso cuando Sapag decía que había infiltrados toda la gente se le reía porque no existía eso, porque la que decidía era la base”.¹²⁵

Daniel Zapata, docente de historia y delegado, comenta:

“En política el infiltrado es un tema muy propio de los ’70 y era usado para descalificar. Nosotros no lo vemos así, ponerle el mote de infiltrado a una persona, ¿que quiere decir? En realidad hubo compañeros que venían de otros lugares, que trataban de

¹²⁵ - El funcionamiento asambleario y autónomo que mantuvo el gremio docente durante el período de protesta no coincidía con las necesidades “expeditivas” del gobierno provincial, lo que también generó valoraciones negativas: según Marcelo Berenguer, diputado provincial del MPN, “el gremio tiene un sistema indirecto de arreglos, lento y difícil; en definitiva, perverso.” (*La Mañana del Sur*, 31-3-97).

influnciar y que tuvieron participación en asambleas, pero cuando los hechos de lucha son de masas, no se dan esas cuestiones. La gente no es tonta y no la vas a llevar para donde quieras. La decisión que se impuso siempre fue la decisión soberana de la asamblea, y en este sentido cualquiera podía bajar una moción. Y eso es lo más legítimo posible, si es que esa moción se desarrolla en la asamblea. Porque en la medida en que se desarrollan las tendencias en la asamblea la gente cuando vota tiene la claridad para saber qué vota. Y cuando se vota con claridad las medidas se sostienen. Nunca hubo reparos a quien quería expresarse. En definitiva, el tema de los infiltrados (...) no se puede condenar o desacreditar a una persona por pertenecer a un partido político.”¹²⁶

La representatividad de los dirigentes docentes, vapuleada por el gobierno provincial, no sólo se plasmaba en asambleas multitudinarias de delegados. El plan de lucha tuvo un altísimo apoyo de la población neuquina, hecho que todavía es recordado por muchos maestros como algo inédito. Norberto Calducci, profesor de economía política en el secundario y agremiado en ATEN, pertenecía a una lista de izquierda opositora a la conducción provincial y de la capital en 1997. Reconoce, sin embargo, la conexión de la dirigencia con las bases dentro y fuera del sindicato:

Las asambleas docentes eran masivas, tenían apoyo popular. En el '97, no puede haber una movilización de 10.000 docentes. 20.000 personas ese 12 de abril en la casa de gobierno, no son 20.000 docentes, imposible... Sólo hubo movilizaciones más grandes que las que hubo en ese momento en la Semana Santa del '87, que esa tarde hubo... 40.000 personas en la calle, no sé, eran mareas y mareas de gente, cuadras y cuadras. O sea que si el reclamo era ilegítimo, no podría explicarse semejante cantidad de gente en la calle.

Es por esto que, según muchos docentes, la población neuquina hacía caso omiso a las declaraciones locales y nacionales dirigidas a descalificar o difamar a los manifestantes. Sin embargo, el estigma sobre la violencia, las ideologías perniciosas y la ilegalidad, seguiría en aumento en momentos precisos en donde el conflicto recrudecía.

Otro análisis realizado desde el gobierno provincial era que a medida que el conflicto se fue extendiendo en el tiempo, al gremio “se le estaba yendo de las manos” por la participación de personas externas al plan de lucha docente y que luego habrían influenciado en el desenlace violento en Cutral Có. Efectivamente el conflicto era generalizado e involucraba a distintos sectores de la ciudad capital como del interior de la

¹²⁶- Ante la constante valoración negativa que se plasmaba en solicitudes y declaraciones públicas, dirigentes del movimiento político “Patria Libre” manifestaron que “no vino gente de afuera a participar del conflicto docente, dado que integramos la conducción de ATEN capital a través de la Lista Rosa. (...) Nuestra organización no está compuesta por gente de afuera sino por trabajadores, hijos de esta tierra por origen y decisión.” (*La Mañana del Sur*, 3-4-97).

provincia. En la “comarca petrolera” el conflicto docente permitió retomar la lucha por los reclamos todavía irresueltos desde 1996. Pero la explicación de esta situación era, para la dirigencia política provincial, la infiltración política que atizaba el descontento social:

“En la asamblea **hay muchos grupos de izquierda que se imponen por encima de los dirigentes sindicales** (...). Me refiero a grupos de izquierda, como Patria Libre, como Quebracho. Son grupos numerosos, que incluso están identificados. **Sabemos perfectamente que hay gente de afuera, ideólogos que aprovechan estas situaciones, el hambre del pueblo.** Porque el pueblo está mal, pero esta gente viene desde afuera cada vez que hay un ‘incendio’ en la provincia”. Felipe Sapag, Gobernador Neuquén. *La Mañana del Sur*, 2-4-97.

“Uno de los piquetes **está compuesto por personas no vinculadas con el conflicto docente, algunos de las cuales no pertenecen a nuestra provincia.**” Carlos Silva, Ministro de Gobierno, Educación y Justicia de Neuquén. *Río Negro*, 12-4-97.

A medida que el conflicto avanzó, los atributos sobre la violencia e ilegalidad fueron incluyendo el factor de estigmatización ideológica más explícitamente.

“Uno de los piquetes está compuesto por personas no vinculadas al conflicto docente, algunas de las cuales no pertenecen a nuestra provincia. **Se ha constatado que dicho grupo está fuertemente armado con bombas molotov y armas de grueso calibre. Este grupo ha tomado una actitud provocadora, incitando al enfrentamiento abierto, con el evidente objetivo de generar un desorden institucional grave.** Carlos Silva, Ministro de Gobierno de Neuquén, *La Mañana del Sur*, 12-4-97.

Luego de la represión, desde el poder político se relataban los hechos de la siguiente manera:

“Hay **grupos rearmándose en el ámbito de la subversión, realizando ejercicios pre-revolucionarios. Son grupos que han actuado en otra época y que ahora están rearmándose en el ámbito de la subversión.** Habría que preguntarse si quienes son los que mataron a Teresa Rodríguez.” Carlos Menem, Presidente. *Página 12*, 16-4-97.

“**Es el resultado de una escalada de violencia. (...) No eran docentes los grupos que en la noche del viernes (11 de abril) ocupaban las ruta.**” Susana Decibe. *Clarín*, 13-4-97.

“Los disturbios fueron provocados por **agitadores profesionales de la izquierda que pretenden que la Argentina retroceda su camino y nada tienen que ver con el reclamo docentes.** Sin embargo, el Ministerio del Interior se enteró cuando ya era tarde.” Fernando Bustelo, dirigente del partido Nueva Alternativa. *Río Negro*, 14-4-97.

“**La usurpación de bienes de dominio público, los daños causados a la propiedad, el impedimento al libre ejercicio de los derechos de terceros, lejos de constituir una forma legítima de petición a las autoridades, implican un atentado contra la convivencia pacífica y el efectivo goce de los derechos de todos y cada uno de los argentinos.**” Jorge Rodríguez, Jefe de Gabinete. *Clarín*, 15-4-97.

“**Hay agrupaciones extremistas que se suman a estos conflictos** para obtener algún tipo de rédito.” Daniel Martinasso, Intendente de Cutral C6, MPN amarillo. *Río Negro*, 18-4-97.

Pero esta matriz de pensamiento en la caracterización del conflicto no fue exclusiva de los funcionarios del Gobierno nacional o provincial. La columna de opinión de un periodista del diario *La Mañana del Sur* del día 16 de abril de 1997 –luego de la represión y asesinato de Teresa Rodríguez- iba en el mismo sentido que las versiones oficiales: “muchos maestros se dejaron llevar por la instigación de los grupos de ultraizquierda. Estos boicotearon cada una de las asambleas donde se intentó discutir un acuerdo entre ATEN y el gobierno, y llegaron a dar vuelta algunas votaciones en las que parecía que el conflicto llegaba a su fin.” Esta visión maniquea y reduccionista contrasta con la complejidad que fue adquiriendo el conflicto en todo su proceso. Rescata los conceptos de invasión y “apresamiento” de un colectivo (tal como lo hiciera una enfermedad que degrada un organismo) que se instalan sistemáticamente al referirse a agrupaciones de izquierda que participan de movimientos contestatarios al poder político.

La idea de subversión del orden y de la violencia política se relaciona, además, a la imagen de lo foráneo, de una otredad externa a una comunidad que degrada el grupo social generando el enfrentamiento:

“Los graves hechos de Cutral Có exceden el inicial conflicto docente del descuento del plus por zona desfavorable, y muestran con dramatismo, en la lamentable muerte de una joven, **el resultado de una escalada de violencia.** (...) **No eran docentes los grupos que en la noche del viernes (11 de abril) ocupaban las rutas,** incluso en contra de la voluntad de aquellos de la asociación de padres.” Susana Decibe, Ministra Educación de la Nación, Clarín, 13-4-97.

“Hubo grupos armados con bombas molotov y armas de grueso calibre, que no están vinculados al conflicto docente” Carlos Silva, Ministro Gobierno, Educación y Justicia de Neuquén. *Clarín*, 14-4-97.¹²⁷

¹²⁷- Días más tarde el mismo ministro afirmó que “no existen informes de inteligencia, sino de la policía y lo publicado por el periodismo. Si hubo activistas, no sabemos de qué sector, ni están identificados. No hay precisiones, se está investigando.” (*La Nación*, 17-4-97, p.7). La contradicción en la información proviene del mismo funcionario que en primer lugar afirma la intervención de grupos armados “ajenos al conflicto”, para luego dudar de esa misma aseveración. Este tipo de argumentos también fue compartido por otros funcionarios del Ejecutivo Nacional, luego de que la hipótesis de un rearme y una “gimnasia pre subversiva” no tuviera la acogida que se pretendía (*La Nación*, 23-4-97, p.11). El aparente “desliz” en la interpretación de los hechos no evitó que la versión sobre infiltrados, activistas y violentos ajenos a la protesta circulara y se instalara en los medios de información inmediatamente después a los hechos de violencia, como la primera explicación dada desde los despachos oficiales tanto provinciales como nacionales.

Lo afirmó Kohan después de firmar el acuerdo

Insiste Nación: "Hay un brote subversivo"

Desconfianza y calma reinaban el día después en Cutral Co

Pare asociarse la provincia exige a CALF bajar sueldos

Página 8

Los obispos toman evamen a la Justicia, desde mañana

Página 25

El secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, se refirió ayer a la situación en Cutral Co y aseguró que hay brotes subversivos, reflejados de esa manera los conceptos del presidente Menem. "El que corta una ruta, encapuchado, está fuera de la ley", opinó.

Páginas 2 a 3



Trabajeros pisan tierra de la ruta que se reanuda a ser repavimentada después de haberse suspendido en la Ruta 22, tras los hechos que dejó la protesta de 5 días.

CUTRAL, CO. Después de 9 días de violencia y de suspender la normalidad de todo el país, una calma gradual empezó a ser inaugurada, con los vecinos que día a día se van volviendo a sus tareas cotidianas y los empleados municipales que regresaron a sus puestos laborales como en la Ruta 22. El secretario Kohan dijo que no se debe perder de vista que en Cutral Co se han producido algunos hechos que son de gran gravedad. Desde la otra orilla, los funcionarios siguen decididos sobre cómo se termina que haya orden y normalidad. Los dichos hechos demuestran que aun más firme y dilucos que se levanta el sur que se levanta, pero con escaltos en decreciente de que el país acordó la solución al problema.

Figura 11. Tapa del diario La Mañana del Sur del día 20 de abril de 1997.

Luego de la represión y con la sospecha inmediata de que la bala que mató a Teresa Rodríguez fue disparada por la Policía, desde el discurso oficial los manifestantes fueron directamente identificados como asesinos. La subversión, con una clara reminiscencia a la década del '70, es sacada a luz durante estos momentos.

"Hubo grupos subversivos que actuaron activamente aprovechando una situación dura, de falta de trabajo, de pobreza de Cutral Có y Plaza Huinul. Donde hay un 30 por ciento de desocupados, en su mayoría jóvenes." Felipe Sapag, gobernador de Neuquén. *La Nación*, 17-4-97.

"Cuando hay gente afectando el derecho de los demás se está frente a brotes subversivos, porque están en contra de las reglas de juego del sistema democrático. **El que corta una ruta, encapuchado, está fuera de la ley. Uno, más que preocupado, tiene que estar alerta por el retorno de una actividad subversiva.**" Alberto Kohan, Secretario General de la Presidencia. *La Mañana del Sur*, 20-4-97.

El andamiaje conceptual rescatado del pasado incluso aborda una versión primaria y maniquea del conflicto social, como lo es la "teoría de los dos demonios":

“Los encapuchados y la bombas molotov me provocaban el funesto recuerdo de la guerrilla. Y el discurso del presidente Carlos Menem, acusando a los manifestantes de prácticas subversivas, me hacía recordar la trágica retórica de las juntas.” Rodolfo Terragno, presidente de la UCR. *Río Negro*, 17-4-97.

¿Qué es lo que se genera con estas declaraciones, cual es el objetivo de hablar de una etapa presubversiva, de delincuencia y violencia en una manifestación, por qué la utilización de este tipo de términos? Juan Vergara, fogonero durante 1997 y en ese momento desocupado, esboza una respuesta desde su perspectiva:

“Argentina es un pueblo que odia a los zurdos. Y no te estoy hablando de Cutral Có, te estoy hablando del país en general, odia a los zurdos. Y donde hay una bandera zurda, trata a todos de zurdos. Entonces la misma sociedad se nos pone en contra. Y el gobierno fomentó eso y el resto de la sociedad no quería saber nada, se nos ponía en contra.”

Al recurrir a estos conceptos se intentó fomentar el contenido negativo de las luchas. Con menos de un año de diferencia y en la misma zona, este segundo episodio generó descalificaciones más pronunciadas para deslegitimar un conflicto de mayor envergadura que el anterior. Mariela Suarez opina al respecto:

“Aca no hay ningún delincuente, es gente que la está pasando muy mal, gente que está pasando por una situación muy grave, que tiene a los hijos desnutridos. La protesta era fruto de la espontaneidad sin politización, por eso no había ideólogos de izquierda que habían armado esto. Era la espontaneidad y un grupo que intentábamos darle un camino, pero éramos eso, un grupo, no teníamos estructura, no había partidos ni nada. Ojalá hubiéramos tenido organización porque el resultado hubiera sido otro.”

La pueblada de 1997 contó con un cúmulo de saberes construidos en una protesta de gran magnitud realizada nueve meses antes, con lo cual no podríamos hablar de un *levantamiento espontáneo*, ya que las prácticas de enfrentamiento y organización habían dejado “huellas” en la población. Tampoco podríamos hablar de un cuadro de desestabilización premeditada: no existieron agrupaciones políticas y sociales que hayan conducido la protesta con objetivos políticos puntuales en contra del gobierno. La Comisión de Padres, por ejemplo, surgió prácticamente durante el apoyo que se daba desde la delegación de ATEN Cutral Có a la de Neuquén capital.

La confrontación fue explicada desde la dirigencia política oficial y desde las cúpulas de las fuerzas de seguridad de otra manera. Acusando la ilegalidad, la violencia y específicamente el rebrote subversivo, se rescató un elemento recurrente en la construcción social de las disputas ideológicas y culturales en la historia del país. En este punto fue clara

la intervención del gobernador Sapag al hilvanar las ideas de violencia-comunismo-caos que se instaló en años en que imperaba la Doctrina de Seguridad Nacional para controlar a grupos que “ponían bombas” o instalaban el terrorismo. Lo hace con quienes encarnan - para una parte importante de la sociedad- la presencia de una época de violencia política subversiva: “el lunes pasado (14 de abril) junto con el paro y las protestas registramos más de 200 llamados anunciando bombas en supermercados, comercios y bancos con el sólo objetivo de sembrar el terror. Esos no han sido los maestros ni el pueblo de Cutral C6. ¿O alguien cree que la llegada de Bonafini a la provincia es una casualidad? Los ultraizquierdistas se fueron concentrando en la localidad y han aprovechado esta situación armados con bombas molotov y armas de grueso calibre.” (*Río Negro*, 18-4-97).

Además de la justificación de la represión y de intentar instalar la sospecha de acciones antidemocráticas sobre los manifestantes o sobre militantes de izquierda, este tipo de observables discursivos permite entender las acciones de gestión política que se dieron en los días siguientes a este conflicto. Finalizados los cortes de ruta, el Gobierno nacional consideró que debía sentar un antecedente jurídico para intervenir en futuros conflictos.

Bajo la hipótesis del “rearme subversivo”, el día 20 de abril de 1997 el PEN anunció que habría una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, a partir de las 16, en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada.¹²⁸ El encuentro fue presidido por el ministro del Interior, Carlos Corach, y el secretario de Seguridad, brigadier general (R) Andrés Antonietti. Estuvieron además “todos los ministros de Gobierno de las provincias acompañados por sus respectivos jefes de policía. (...) El Gobierno busca unificar las acciones con las provincias frente a hechos como los de Cutral-C6. Y aún más: quiere curar en salud una eventual nacionalización de conflictos. “Queremos una acción federal”, dijo la fuente.” (*La Nación*, 20-04-97).

El gobernador Sapag y el ministro de Gobierno de Neuquén Carlos Silva “asesoraron” sobre la situación al ministro del Interior previamente a la reunión. La misma duró alrededor de cuatro horas y se informó sobre la situación social de cada una de las

¹²⁸- La reunión se propuso días después del ataque a la Casa de Neuquén en la Capital Federal, hecho en el que no intervino la policía y que como vimos, fue endilgado a distintas agrupaciones de izquierda: el Secretario General de la Presidencia Alberto Kohan aseguró que “Quebracho y Patria Libre destruyeron la Casa de Neuquén. Parecen ejércitos prerrevolucionarios. [Es necesario] la sanción de una ley antiterrorista.” *Página 12*, 16-4-1997.

provincias a partir de un informe de Gendarmería Nacional en donde se “confirmó” que existía un rebrote subversivo.



Figura 12. Facsimil del informe de inteligencia confeccionado por Gendarmería Nacional informando las supuestas actividades subversivas en Neuquén. Diario Clarín, 20-4-97, p. 3.

Se trató de una reunión entre ministros llevada a cabo con la finalidad de inyectar más dinero a las fuerzas de seguridad (mayor equipamiento y armas) e incluso una propuesta desde el PJ para crear la figura del “agente encubierto”: un agente de alguna fuerza de seguridad o policial en actividad que en forma encubierta se introduzca en una “organización delictiva” (cualquier organización considerada como tal, inclusive agrupaciones políticas).

Es claro el contraste entre la visión oficial sobre la legitimidad, la necesidad y la autenticidad del reclamo frente a la de los manifestantes, versiones sin dudas condicionadas por el carácter social y político de los sujetos que confrontaron, las alianzas que tejieron y principalmente: los objetivos que persiguieron. La reflexión de los manifestantes nos

presenta otro entendimiento de lo legal, lo legítimo, lo delictivo y la violencia. De todos modos, no podríamos hablar de interpretaciones con elementos diametralmente distintos a los discursos provenientes de los sectores dominantes. Tanto de algunas entrevistas como de las declaraciones registradas en los diarios se desprende el reconocimiento de que el corte de rutas era una opción de protesta que podía ser catalogada como “delictiva”. Verena Sandoval formó parte de la Comisión de Padres en 1997, momento en que tenía 40 años y trabajaba de empleada doméstica. Reflexiona acerca de la relación entre el reclamo y el marco legal

“Siempre dijeron que cortar la ruta era un delito... Porque lógico, nosotros molestamos a por ejemplo un trabajador, los que manejan camiones, los que llevan comestibles a otros lugares, los que transportan combustible... Pero a nosotros se nos comió un delito más terrible. Llega un momento en que vos no ves otra salida para hacer escuchar el reclamo.”

Oscar Flores, antiguo operario de YPF, fue despedido durante la dictadura. También participó de la agrupación de padres ad hoc:

“Puede ser que cortar la ruta sea un delito, pero antecede el derecho a trabajar, a comer, a vivir, a educarse. Esos derechos son prioritarios, y nosotros no vamos a cortar las rutas porque se nos antoja, vamos como resultado de una política de sometimiento, brutal, feroz, que nos oprime permanentemente y a la cual hemos reclamado de distintas maneras, de todas las maneras posibles.

Aunque este tipo de explicaciones sean alternativas a las interpretaciones “oficiales” de la protesta, se reconoce el carácter *litigante* de la misma frente al sistema de normas y leyes. Pero se hizo prevalecer una *legitimidad alternativa* a la de las instituciones -aunque más no sea durante el período de conflicto-, lo cual nos habla de un estadio de conocimiento particular de esos hechos.

En Cutral C6 y Plaza Huincul, muchos de quienes participaron de las puebladas en 1996 y 1997 consideran que el balance no fue positivo, que se soport6 la ignominia luego de las represiones y que “se pidieron tonterías” en vez de llevar el reclamo hacia un cambio real de situación. Las promesas de reactivación económica fueron incumplidas o cumplidas de manera sumamente rudimentaria, sin un plan estratégico para la región. En la actualidad, los planes de trabajo atenúan la indigencia pero no son considerados trabajo genuino.

Por otra parte, muchos asumieron que pudieron enfrentar al gobierno provincial y llamar la atención de la administración nacional sólo a partir de la cooperación y la organización colectiva. Sin una organización sindical o política formal, los pobladores de estas ciudades encontraron en ATEN un “aliado natural” para retomar la lucha de 1996. La Comisión de Padres, los estudiantes secundarios y los Fogoneros fueron en este sentido la expresión de una colaboración colectiva aunque rudimentaria. El aprendizaje *luego de la acción* fue la importancia del tejido cooperativo, tanto en los jóvenes que salieron a las rutas por primera vez, como en los mayores quienes portaban experiencias de luchas anteriores.

5.4. Conclusiones.

ATEN sostuvo su plan de lucha con un tibio apoyo de las grandes centrales sindicales durante todo el conflicto y, en contrapartida, con el apoyo de la sociedad neuquina materializado en miles de personas que marcharon junto a los docentes en movilizaciones casi diarias; algo pocas veces conseguido por una organización sindical durante la década de 1990. El conflicto docente alcanzó una repercusión nacional y junto con el nuevo levantamiento de Cutral C6 y Plaza Huin cul, se constituyeron como uno de los momentos trascendentes en las luchas populares de los últimos años.

La decisión de no negociar, establecida por el gobierno provincial durante todo el conflicto, sólo cambió luego de la represión más cruenta y de la muerte de una persona, cuando los docentes se encontraron más debilitados. En tal sentido, la negociación se llevó a cabo en un marco de altísimo costo para los docentes, en primer lugar por la magnitud de la represión a una protesta que había desarrollado una dinámica propia, pero que nació completamente ligada a la lucha docente. Y en segundo lugar por el conflicto al interior de la organización sindical, que provocó el alejamiento de no pocos dirigentes en desacuerdo con el manejo de la situación; sumado al descrédito de miles de personas que habían apoyado y acompañado a los docentes por más de un mes, y que vieron en el apresurado acuerdo un “aprovechamiento” de la situación a costa de la represión.

Salvando la negociación con los docentes, la presencia del Estado durante toda la protesta se tradujo en el desalojo de los caminos mediante la violencia.

En cuanto a la esfera de las representaciones del conflicto, parte del andamiaje discursivo oficial fue sostenido mediante la reactivación del fantasma de la violencia política y el “rearme subversivo”. Se profundizó en la difusión de un conjunto de imágenes fuertemente instaladas durante la década de 1970, en el que el “ser de izquierda” constituía de por sí una identidad peligrosa. En un primer momento difamando al gremio por la metodología de lucha utilizada y apelando a la supuesta ilegitimidad política de sus decisiones, basándose en categorías grabadas a fuego durante la historia cultural y política reciente del país.¹²⁹ Más tarde, el conflicto docente se expandió incorporando a otras fracciones de clase: trabajadores -ocupados y desocupados, entre ellos una nutrida porción de pobres y marginales- y estudiantes. Allí fue cuando se acentuó la estigmatización ideológico política, justificando además la acción violenta de las fuerzas de seguridad.

El esquema de conocimientos anteriores sobre luchas políticas -que en principio parece “aletargado”, pues son discursos que no se escuchan ni se dicen en cualquier circunstancia- se restableció así durante una coyuntura y momento particular de conflicto. Como expusimos en los capítulos precedentes, operaron como indicadores de formas de representar la realidad, condicionadas por marcos ideológicos y paradigmas dominantes. En tal sentido comprobamos en este caso también una curva ascendente en el tenor y cantidad de discursos condenatorios de manera correlativa a los enfrentamientos físicos.

Días después de la represión y de la muerte de Teresa Rodríguez, el gobierno Nacional trató de “bajar el tono” a las declaraciones hechas, al aclarar que las mismas “no conllevan ninguna referencia a la actividad criminal del proceso” (Carlos Corach. *Río Negro*, 20-4-97). Sin embargo, la referencia sistemática a la ilegitimidad del reclamo, la violencia, la ilegalidad y el rearme de grupos subversivos –con todo lo que invoca este concepto en la historia política del país- se utilizó para denostar a quienes protestaban, y no sería la última vez que se utilizaría.

¹²⁹- Difícilmente podríamos imaginar una acusación dirigida a la militancia peronista “copando” un gremio, un sindicato o una protesta en general, ya que este no es un cuadro disruptivo, sino regular, de normalidad. Durante otra protesta gremial, pero esta vez de trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, resurgieron acusaciones que nuevamente apuntaron a la cuestión ideológica como problema en sí mismo. Los delegados de estos asalariados pertenecían también a listas de izquierda, lo que provocó que el ministro de salud y candidato a legislador porteño, Ginés González García, reclame sanciones. “Pidió ‘mano firme y sancionar a estos grupos que extorsionan al Gobierno’ y vinculó la protesta ‘al PO, que en otros momentos paralizaron el Garrahan y extorsionan todos los días a la democracia’” (*Página 12*, viernes 18-05-07). Estas dirigencias gremiales disímiles a las burocracias sindicales tradicionales, representan desde la retórica oficial -más que un conflicto para un gobierno o para una administración en la cartera de trabajo- *un peligro* para la democracia.

Capítulo 6

Corrientes, 1999. Se afianza la criminalización de la protesta.

a minuto» los sucesos en Corrientes serían convulsionada en estas últimas horas.

Añadió que De la Rúa y el ministro del Interior, Federico Storani, «están abocados absolutamente a la situación de esa provincia, y enfatizó la «preocupación» del gobierno por «el pronto restablecimiento de la paz social».

«La noticia de la intervención debería haber sido una noticia que descomprimiera la situación y no está sucediendo, de modo que se pide todo el esfuerzo a la población para que se mantenga la calma», puntualizó el vocero.

Alfonsín: actúan grupos ultras

BUENOS AIRES. El ex presidente Raúl Alfonsín advirtió que podrían «explotar» conflictos como los ocurridos en Corrientes en otros distritos del país si se «alimenta a sectores ultras».

«No sé si es contra el Gobierno de Fernando de la Rúa o contra el sistema» democrático, evaluó Alfonsín en breves declaraciones formuladas a la prensa sobre

la crítica situación en la provincia de Corrientes.

Agregó que los enfrentamientos que cobraron varias víctimas en Corrientes «son muy lamentables y procuraremos superarlos», y defendió la figura del ex gobernador cordobés Ramón Mestre como interventor en la provincia.

«Mestre es un administrador con una

austeridad extraordinaria y algunos dicen que eso le costó la reelección», evaluó el ex mandatario radical.

Por eso, consideró que es correcto el «criterio» para su designación, ya que es un «gran administrador» y, para una provincia que «tiene los problemas de Corrientes, es el hombre indicado».



Una familia que viajaba comenzó a sonreír, pese a los episodios, porque podían continuar su tour.

DESDE LA ROSADA

"Son sectores radicalizados"

BUENOS AIRES. El gobierno alertó que en Corrientes están operando activistas políticos y grupos radicalizados que pretenden convertir a la provincia en un territorio ingobernable y dejó entrever que posee información sobre los responsables de los hechos de violencia ocurridos hoy en la provincia.

«Son grupos radicalizados que aparecen por izquierda, pero son financiados por derecha.»

Tenemos los nombres, pero no sería conveniente que lo digamos ahora», señaló el secretario de Financiamiento para las provincias del Ministerio del Interior, Walter Ceballos.

El funcionario consideró que «hay grupos que no tienen nada que ver con la realidad correntina y que se presentaban como representantes del «foro empresarial»; tenemos detectado también un nivel de logística que de algún lado recibió financiamiento».

También el designado interventor Ramón Mestre salió a denunciar la presencia de activistas y defendió la tarea cumplida por los gendarmes.

«Las balas que tienen los heridos son calibre 22 y la Gendarmería no ha usado armas de fuego, sino simplemente balas de goma y gases lacrimógenos que no matan a nadie», afirmó al retirarse esta tarde de la Casa de Gobierno.

A su turno, el viceministro del Interior, Carlos Becerra, precisó que «efectivamente ha habido disparos que han provenido de sectores de los manifestantes».

Poco antes, el secretario de Comunicación y Cultura, Darío Lopérfido, confirmó que el Ministerio de Interior tenía «chequeada información respecto de que hay balas que se dispararon y que no son las usadas habitualmente por las fuerzas regulares».

Esto revela «la presencia de civiles armados que están provocando en muchos casos estas situaciones, como francotiradores en edificios y grupos organizados», agregó Lopérfido.

Al entregar a la prensa un comunicado difundido por el presidente Fernando de la Rúa, el responsable del área comunicacional dijo también que desde el gobierno nacional se exhorta «a aislar a estos grupos violentos» para que quede en evidencia su accionar.

También disparó advertencias de similar tono el ex presidente Raúl Alfonsín, quien sostuvo que «van a explotar problemas si los sectores ultras son alimentados».

Figura 13. Diario *El Litoral*, 18-12-99, un día después de los enfrentamientos y de la muerte de dos jóvenes por parte de la Gendarmería.

La provincia de Corrientes forma parte de la región mesopotámica junto a Misiones y Entre Ríos. Es una provincia predominantemente agropecuaria y de escaso desarrollo industrial, lo que condicionó una estructura social con una relativamente poco desarrollada división social del trabajo (es una de las provincias con menor desarrollo manufacturero) y a su vez con grandes segmentos de población sumida en la pobreza y la marginalidad.

Siguiendo el estudio de Iñigo Carrera, Podestá y Cotarelo (1999), la provincia se inserta en una estructura económica social concreta caracterizada por la pequeña producción mercantil, principalmente en el campo, con una alta inserción laboral en el Estado (pp. 51-56). Hacia el este de la provincia, en torno al margen del Río Uruguay y la zona centro y sur de la provincia, se desarrollan los emprendimientos agroindustriales, principalmente las plantaciones de yerba mate, cítricos, arroz, algodón y cultivo forestal. Los esteros del Iberá (segundo humedal más grande del mundo), al centro de la provincia representan un centro turístico importante. Mientras que en el extremo oeste, cercano al margen del Río Paraná es donde se insertan los arcos ganaderos.

Su homónima ciudad capital es una de las más antiguas de la región, fundada como paso obligado de comercio entre Asunción y Buenos Aires. Debe su nombre (San Juan de Vera de las Siete Corrientes) a las siete puntas que sobresalen de la ciudad a lo largo de su costa sobre el Río Paraná, lo que provoca siete remolinos o corrientes. En contraste con la vecina ciudad de Resistencia –con avenidas anchas y grandes plazoletas-, Corrientes posee un trazado urbano mucho más antiguo, con calles y veredas estrechas y con muchos edificios y viviendas de arquitectura colonial. El casco céntrico no excede el radio de cinco cuadras, donde se encuentran los principales edificios públicos y una peatonal de dos cuadras. La Avenida 3 de Abril (así nombrada en conmemoración de la fecha de su fundación en 1588) es la que comunica al Puente General Belgrano rumbo al oeste hacia la capital chaqueña. Dicha avenida literalmente divide en dos a la ciudad y marca el fin del “centro” y el comienzo de los barrios, marcando dos espacios completamente distintos en cuanto a las viviendas, calles y veredas. En la ruta costanera, lindante al Río Paraná, es donde se ubican los edificios, comercios y locales de esparcimiento que escapan al promedio general, demarcando un circuito exclusivo de consumo y ocio.

Esta ciudad contaba en 2001 con una población de 328.868 habitantes, algo menos de la mitad de la población total de la provincia. Según datos censales del INDEC, para el año 2001 la población con NBI en la capital ascendía al 21,2 % del total; más del 23 % de la PEA estaba ocupada o subocupada, el 34 % de la población tenía necesidades básicas insatisfechas, además de elevados indicadores de analfabetismo, indigencia y mortalidad infantil. (Klachko 2003, p. 147). La administración pública y los servicios urbanos – principalmente comercios- son la principal fuente de inserción laboral: alrededor de la quinta parte de la PEA de la ciudad capital se insertaba en el mercado laboral como asalariados del sector público. A nivel provincial casi el 40 % del total de empleados y obreros eran asalariados estatales. El peso relativo de asalariados estatales será esencial para entender el conflicto desarrollado a lo largo del año 1999.

La dirigencia política de la provincia estuvo definida durante toda la segunda mitad del siglo XX por su carácter caudillista y conservador, en donde los partidos mayoritarios a nivel nacional (UCR y PJ) nunca han tenido una inserción masiva. La hegemonía conservadora se plasmó en el llamado Pacto Autonomista-Liberal en 1961, producto de la alianza del Partido Liberal y el Autonomista. El PAL tuvo una total predominancia en la política local luego de 1983: José Antonio “pocho” Romero Feris ¹³⁰ y Raúl Leconte se sucedieron en las gobernaciones desde 1983 a 1991.

Además de tener un peso inigualable en el mapa político provincial, la familia Romero Féris también ocupa un lugar importante en los medios económicos y de comunicación regionales. Raúl Rolando (“Tato”), hermano de José Antonio, posee casi la totalidad de las acciones del diario “El Norte” de la provincia de Chaco, y es uno de los propietarios de grandes extensiones de tierra de cultivo. Sus políticas económicas estuvieron siempre cercanas a las corporaciones como Pérez Companc (control de energía proveniente de Yaciretá) o Massalin Particulares (producción y comercialización de tabaco) a través de la exención de impuestos o de subsidios estatales (Sánchez, 2000).

Las irregularidades en las elecciones de 1991 provocaron que el gobierno de Menem intervenga la provincia hasta 1994. Nuevas elecciones dieron el triunfo nuevamente al PAL esta vez con “Tato” Romero Feris hasta 1998. A poco de comenzar con su gobierno, una alianza realizada con el Gobierno nacional plasmada en el envío de fondos a la provincia para obras públicas, generó que el gobernador sea cuestionado y

¹³⁰- La vida política de José Antonio Romero Feris incluye ser asesor de la junta militar presidida por el dictador Roberto Eduardo Viola (1980-1981) y embajador en Costa Rica en ese período.

expulsado del Partido Autonomista, históricamente opositor al PJ. Así fue que durante su gestión “Tato” Romero Féris formó el PANU –Partido Nuevo, con militantes del PAL y del PJ-, más cercano al menemismo. El rompimiento significó el distanciamiento político y personal entre los hermanos y la gestación casi automática de la principal fuerza opositora a la vieja alianza política.

En 1997 el PANU ganó las elecciones con más del 70 % de los votos producto de una alianza con el PJ, en medio de un importante déficit financiero debido a un sistemático endeudamiento público de larga data, destinado a financiar obras públicas y políticas clientelares.

En ese escenario, Pedro Brillard Pocard fue elegido gobernador y Raúl “Tato” Romero Feris se erigió como intendente de la ciudad de Corrientes, impedido por la constitución provincial de presentarse como candidato a gobernador. Durante este gobierno se desencadenó la crisis y la protesta que fue sostenida durante más de medio año en la ciudad capital, conformándose como una de las movilizaciones populares más importantes de las últimas décadas en la provincia.

6.1. La crisis política y económica, el auge de la protesta.

El conocido popularmente como “Correntinazo” de 1999 fue un proceso de enorme riqueza y complejidad llevado a cabo por distintas fracciones de la sociedad correntina en una situación de crisis política y económica de características inusitadas desde el restablecimiento de las instituciones democráticas. Expondremos un recorte de este largo proceso para dar cuenta del carácter y magnitud de represión y el soporte ideológico que acompañó y justificó la misma.

En un escenario de endeudamiento y falta de crédito, el Gobierno nacional aliado al PANU había girado a la provincia dinero de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para tratar de financiar la crisis, pero fue una solución de corto plazo. Con varios meses de sueldos sin pagar, hacia diciembre de 1998 comenzaron a movilizarse los trabajadores agremiados en el SITRAJ (Sindicato de Trabajadores Judiciales, afiliado a ATE). En ese momento el gobierno provincial estaba acusado de malversar fondos de más de 50 millones de pesos.

Es importante dejar aclarado que este proceso de conflicto también fue abierto por una protesta sindical. Juan Carlos González, Secretario General del sindicato de trabajadores Judiciales al momento de las entrevistas (noviembre de 2007), era en 1998 tesorero del sindicato y recuerda el comienzo de las manifestaciones reclamando los sueldos atrasados:

Se han iniciado una serie de movimientos en virtud de la crisis económica que estaba sumergiendo la provincia en un caos. Y los trabajadores judiciales vieron un panorama bastante oscuro, el virtual quiebre de nuestra provincia ya que se veía inclusive que no se iba a poder pagar los sueldos, y esto lamentablemente en el año siguiente ocurrió. El '98 fue con medidas de fuerza, paros, movilizaciones, y encontramos una respuesta positiva en el resto de las organizaciones porque en las movilizaciones apuntamos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial por mirar para otro lado mientras se vaciaba la provincia.

El reclamo comenzado a fines de 1998 se extendió a los primeros meses de 1999, momento en el que los gremios docentes de la provincia se incorporaron a las manifestaciones de protesta, pues también se les adeudaban varios meses de sus haberes. Así fue que los principales sindicatos de docentes llamaron al paro en el inicio del ciclo lectivo: el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECó) y la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), junto a gremios menores como el Movimiento Unificador Docente (MUD) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET). Se conformó la “multisectorial”, entre el SUTECó y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con un amplio apoyo de la población y con la repercusión en diversos gremios en el interior de la provincia (ciudad de Goya y Saladas, al sur de la capital).

Klachko (2003) y Barrios (2006) diferencian cuatro momentos en el desarrollo del conflicto. Un primer momento de gesta y formación de la protesta, de marzo a junio de 1999; un segundo momento de consolidación de la protesta y de unificación de todos los actores que montaron más de 200 carpas en la plaza 25 de Mayo rebautizada como “Plaza de la Dignidad” o “Plaza del Aguante”, de junio a agosto. Un tercer momento, hasta principios de noviembre, estuvo caracterizado por la permanencia de la protesta, que entra en un estado de indefiniciones frente a las dádivas otorgadas por un nuevo gobierno de coalición que no terminó de resolver la crisis. Un cuarto y último período estuvo caracterizado por el avance de los manifestantes hacia un estado de mayor intransigencia frente a las indefiniciones del gobierno provincial y nacional –la protesta había tomado

un estado de conocimiento mucho mayor-, que termina en la violenta represión de diciembre. Trataremos de reconstruir las particularidades de la protesta a lo largo de estos períodos.

En marzo de 1999, cuando los sueldos de los empleados públicos fueron directamente suspendidos, los docentes estatales fueron los primeros que comenzaron a agruparse en colegios a través de asambleas para debatir cómo encarar el problema salarial. Así surgieron los primeros grupos “autoconvocados”, denominación que definía elocuentemente la esencia del movimiento que iniciaba un proceso de lucha durante casi un año: la organización por fuera de la negociación de las cúpulas sindicales, a las que consideraban lentas o ineficientes y sin una representación real.¹³¹

Efectivamente, el reclamo poco a poco fue tomando una dirección que no estuvo protagonizada por los sindicatos provinciales o partidos políticos ya sean de izquierda u oficialistas. Los dirigentes sindicales que iniciaron la protesta cuestionaron esta iniciativa “autonomista” –tal el caso de ATE Corrientes-, e incluso se vieron subordinados a la dinámica asamblearia, que fue la marca indeleble de todo el movimiento de protesta correntino.

Una de las primeras medidas adoptadas por los docentes autoconvocados fue la llamada “retención de servicios”, que consistía en ir a los colegios pero sin dictar clases. Allí surgieron las primeras asambleas docentes sin la organización de la dirección gremial. Lucía Abad tenía 41 años en 1999, era docente de una escuela media y pública, y cuenta su percepción acerca del por qué la escisión entre gremios y docentes en el comienzo de los reclamos:

“Surgió la idea en las escuelas, por qué no nos juntamos los docentes para ver cómo continuar y así surge la primera asamblea autoconvocada. Y fue así que pedimos apoyo a los gremios para que respalden lo que estábamos haciendo. (...) Nosotros sentíamos que no eran suficientes las medidas de los gremios. Lo que nosotros queríamos era ya por tiempo indeterminado, algo contundente, un ‘basta ya’, porque veíamos que no sólo las respuestas del gobierno no existían (nosotros decíamos que era un gobierno autista), sino que veíamos que los gremios no respondían. Que sí, que diálogo, que se yo que cuanto... Y a todo eso se sumó lo económico que fue fundamental. Pero ellos no se definieron, y

¹³¹- Este caso se diferencia rotundamente del acontecido en Neuquén en 1997, donde la figura del sindicato docente siempre estuvo presente y aglutinó las prácticas asamblearias desde el principio del conflicto, teniendo además una convocatoria de singulares características en la sociedad neuquina. Los sindicatos docentes de Corrientes, si bien como dijimos estuvieron siempre presentes en el conflicto, no pudieron contener la demanda de sus bases por una democratización en la toma de las decisiones.

entonces decidimos definirnos nosotros. Sentíamos que los gremios no nos representaban, no tomaban las medidas que debían tomar.”

Esa situación indicaba una crisis de representatividad entre los dirigentes sindicales y los docentes, quienes requerían respuestas de manera más rápida. Darío Rambau, docente de derecho en la escuela media y dirigente del SUTECO con tradición militante en el peronismo y en el Frente Grande, hace referencia a esta situación:

“Había un importante sector de la docencia que menospreciaba y que no quería saber nada de la actividad sindical. Por eso se autodesignaron docentes autoconvocados, con una aversión a la actividad sindical. La CTA dio muestras suficientes de que estaba muy lejana del sindicalismo empresarial de los llamados “gordos”. Yo personalmente tenía la predisposición, la capacidad y la buena voluntad de representar adecuadamente y dignamente los intereses de los trabajadores. Sin embargo esa docencia que se tituló autoconvocada repudiando la actividad sindical especialmente es aquella que no tenía una tradición de lucha. (...) Yo en una asamblea me reconozco con orgullo como dirigente de una organización sindical, no la reniego, pero a su vez si se trata de no romper con ese movimiento que surge con fuerza, enhorabuena que estemos todos juntos. Pero en todas las asambleas de las cuales unas cuantas coordiné, siempre toda la gente me reconoció como SUTECO.”

Evidentemente las circunstancias excedieron la capacidad organizativa de los sindicatos, y cientos de docentes que quizás formaban parte de aquella “retaguardia” menos apegada a la actividad política que menciona el dirigente, decidieron tomar sus propias decisiones. De todos modos es necesario aclarar, como acabamos de ver, que la mayoría de los sindicatos que iniciaron la protesta por falta de pago de haberes se mantuvieron presentes durante todo el conflicto, fueron su motor inicial e incluso promovieron acciones llevadas a cabo masivamente durante todo el proceso.

Así fue que los docentes autoconvocados comenzaron a ser acompañados por otras agrupaciones que también adoptaron esa definición. A medida que el conflicto fue creciendo, se iban sumando a los docentes estatales distintas agrupaciones que representaban un arco heterogéneo y amplio de la sociedad correntina. Casi inmediatamente se sumaron los docentes rurales y de los colegios privados, diversas delegaciones gremiales de la capital y del interior de la provincia, trabajadores judiciales, de prensa, estudiantes secundarios y universitarios, padres de alumnos –denominados “Tutores autoconvocados”-, agrupaciones de profesionales, cuentapropistas y comerciantes, desocupados, miembros laicos de entidades religiosas, pequeños

agricultores del interior de la provincia, militantes de Derechos Humanos, etc.; y se denominaron autoconvocados durante todo el conflicto.

La situación se fue agravando gradualmente ante la ausencia de respuesta del gobierno provincial. Como sucedió en la economía neuquina, el atraso y suspensión de salarios en los empleados públicos y docentes estatales desencadenó una retracción de la economía local, principalmente en la capital. Generó una cadena de faltante de dinero y los consecuentes endeudamientos, suspensión de pagos a créditos bancarios y servicios urbanos provocando el corte de servicios (agua, gas, luz), sumiendo a la población en una situación límite.

El estado de disconformidad y malestar fue creciendo en distintos sectores de la población, lo que se demostró en las marchas y manifestaciones en el centro de la ciudad con más de 15.000 personas a fines del mes de abril. O la llamada “marcha de la luz” convocada por los “Tutores autoconvocados”, quienes se solidarizaron con los maestros prácticamente de inmediato. A esa marcha realizada el 19 de mayo asistieron cerca de 30.000 personas que portaban velas o linternas.



Figura 13. Una de las multitudinarias marchas por el centro de Corrientes. Foto: Hilda Presman.

Las primeras movilizaciones no estuvieron exentas de disputas con militantes del partido gobernante, quienes protagonizaron provocaciones y trifulcas con los

manifestantes.¹³² La iglesia correntina también intervino como otro de los tantos actores que confrontaron con los manifestantes, al dar apoyo sólo a los docentes católicos que también se habían adherido al paro. La intervención parcial en el conflicto provocó que el día 22 de mayo de 1999 las fachadas de los edificios del Arzobispado y de la Catedral correntina amanecieran con pintadas dirigidas hacia los jefes eclesiásticos locales. Ante la creciente cantidad de marchas de protesta, el partido gobernante convocó a una contramarcha el 28 de mayo que incluyó algunos incidentes entre militantes oficialistas y manifestantes.

Recién el 4 de junio se comenzaron a pagar los sueldos, de manera limitada. Pero para ese mes la participación en las manifestaciones se había acrecentado notablemente con el apoyo de la población del interior de la provincia y sobre todo de la ciudad capital, en demanda del saneamiento económico, institucional y político de la provincia.

El 7 de Junio de 1999 comenzó la segunda toma del puente General Belgrano,¹³³ al cual asistieron alrededor de 30.000 personas miembros de asambleas autoconvocadas de docentes y agrupaciones estudiantiles, de la iglesia, comerciantes, jubilados, asalariados estatales y desocupados. Provinieron cientos de personas del interior de la provincia, donde también ya se realizaban cortes de ruta apoyando el reclamo de la capital: Goya, (segunda ciudad en importancia en la provincia), Saladas, Esquina, Bella Vista, Virasoro, etc. La orden del intendente Romero Feris para desalojar el puente por la fuerza fue desobedecida por los policías de la provincia, autoacuartelados también por falta de pago de sus salarios.

Al regreso del corte del puente por algunas horas, los manifestantes se apostaron en la Plaza 25 de Mayo, frente a la casa de Gobierno. Cada agrupación autoconvocada y sindical involucrada en la protesta se apostó en la plaza con carpas –llegaron a ser alrededor de 200- y anunciaron no retirarse hasta que se den respuestas concretas a los reclamos.¹³⁴ En un hecho que da cuenta de la magnitud de la participación de la población –inédita desde el restablecimiento de la democracia en 1983- en la vida política

¹³²- Fueron los casos en donde intervinieron militantes del oficialista PANU: la conocida “contramarcha” en favor de Romero Feris, la toma de la Legislatura a mediados de junio; o la marcha hacia la Plaza 25 de Mayo a enfrentarse con los movimientos Autoconvocados, neutralizado por la policía provincial.

¹³³- El primer corte se había efectuado a mediados de mayo. En total fueron seis los cortes y tomas realizados en el puente durante todo el año 1999 hasta el desalojo final ocurrido en diciembre. El puente, paso estratégico en el circuito de mercancías de la región y ruta obligada del MERCOSUR, sigue siendo hoy para la población local un espacio representativo de las luchas recientes.

¹³⁴- Klachko (2003) hace una exhaustiva descripción de todo el conflicto y de la participación permanente de sindicatos de distinta índole también en esta etapa.

de la provincia, ese día el espacio público fue rebautizado como “Plaza de la Dignidad” o “del Aguante” (ver mapa correspondiente). El reclamo fundamental era ya que el gobernador renuncie, acusado de graves hechos de corrupción, y poner fin a la crisis económica.

La plaza se convirtió en una tribuna de debate político, de reclamo, de confraternización, de esparcimiento, de promoción de actividades culturales entre las carpas. Allí se instalaron ollas populares, las que sirvieron para alimentar a los manifestantes y a personas que en ese año habían profundizado su nivel de pobreza. Además se organizaron peñas y otros eventos culturales y políticos –muchas carpas incluso emitían documentos y declaraciones periódicamente- que formaron parte de la vitalidad que tuvo el reclamo.



Figura 14. La Plaza 25 de Mayo, frente a la Gobernación durante el invierno de 1999 (Foto gentileza Hilda Presman). Hoy en uno de los parques se encuentra el monolito en el que se lee “Lugar de la lucha por la Dignidad. Docentes Autoconvocados. 7 de Junio de 1999”.

Aunque no se mantuvo una asistencia regular de personas durante todo el tiempo que duró la ocupación, al principio fueron alrededor de 5000 personas que se mantuvieron haciendo una vigilia en el lugar, y con el paso de los días la cantidad fue fluctuando. La ocupación de la plaza requirió de otros aspectos organizativos, como la constitución de una red logística que incluía a comercios y vecinos cercanos para la provisión de comida o acceder a sanitarios. Una escuela cercana sirvió de centro de distribución de los alimentos que allí acercaban vecinos y comerciantes, y cada carpa fue identificada con un número para poder acceder a su cuota diaria de comida. El fenómeno se extendió a otras plazas de las localidades del interior de la provincia, pero fue el acampe de la ciudad capital el que se mantuvo durante seis meses ininterrumpidos. El acampe no estuvo ausente de incidentes: el 10 de junio algunos miembros del partido gobernante se trenzaron a golpes con los manifestantes docentes frente al palacio legislativo.

El 20 de junio, con la policía provincial declarada en rebeldía, el gobernador Pedro Pocard fue destituido de su cargo mediante un juicio político iniciado por los diputados provinciales del Partido Autonomista, el Partido Liberal, la UCR y sectores del PJ no alineados al PANU. Asumió la gobernación el vice gobernador, Víctor Hugo Maidana. Las distintas agrupaciones autoconvocadas promovieron un nuevo juicio político, y Maidana fue suspendido el 2 de julio con una plaza con más de 15.000 personas reclamando por su renuncia. Comenzó así la intervención del justicialista Hugo Perié (PJ) que encabezó un nuevo gobierno de coalición de partidos opositores al PANU. El 8 de julio esta coalición promovió la destitución del entonces intendente de la ciudad de Corrientes, Raúl “Tato” Romero Feris.

En la “plaza del Aguante” transcurrió la sexta Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados el 19 de julio, a la que asistió el gobernador Perié y otros funcionarios para tratar de conciliar con los manifestantes y para prometer la pronta partida de dinero desde la Presidencia. Sin embargo la Asamblea en conjunto decidió continuar con las medidas de fuerza por descreer de las promesas, y anunciaron una nueva movilización al puente para el día 27 de julio, día en que el ex presidente Carlos Menem arribaba a la ciudad de Resistencia.

Ese día alrededor de 15.000 personas tomaron el paso interprovincial con el apoyo del gobernador justicialista, quien intentó desviar la dirección del reclamo hacia el

Gobierno nacional.¹³⁵ Tras varias asambleas que fueron decidiendo sucesivamente la permanencia en el puente, la Gendarmería avanzó con una violenta represión sobre los manifestantes el día 28 de julio, que dejó varias decenas de heridos. Uno de ellos fue Juan Pereyra, quien estuvo en estado de gravedad al recibir un proyectil de gas lacrimógeno en su rostro a pocos metros de distancia.

Se trató del primer enfrentamiento de importancia y significó una experiencia determinante en los manifestantes que hasta ese momento consideraban a los gendarmes como “aliados” suyos. Esta idea no era caprichosa, ya que la fuerza “convivía” pacíficamente con los manifestantes en la plaza, quienes llegaron a compartir su comida con algunas tropas. Además, pocos días antes habían sido aplaudidos por los manifestantes cuando la fuerza custodió la Legislatura que estaba siendo asediada por los militantes ligados al partido de Romero Feris. También nos habla de un cierto grado de ingenuidad por parte de los manifestantes, mayoritariamente maestros, que confiaban en que no serían desalojados aún si había una orden proveniente de un juez federal. Su labor de docencia, figura relativamente “sacralizada” y respetada en la sociedad, junto a la presencia de símbolos nacionales como la bandera o el canto del Himno eran los principales motivos de esa fallida creencia. Ambos prejuicios fueron derribados rápidamente con el avance contundente de la fuerza.

Luego de ser desalojados y ya en la bajada del puente, los manifestantes intentaron retornar a sus puestos, dando inicio a un nuevo lanzamiento de gases y al disparo de balas de goma. La reacción fue inmediata: miles de personas comenzaron a arrojar cascotes a los gendarmes y a atacarlos con gomeras y piedras, en particular los más jóvenes provenientes de los sectores marginalizados de la capital. La superioridad numérica provocó que las fuerzas estatales acabaran con su munición y tuvieran que replegarse hasta la ciudad de Resistencia, lo que se consideró una victoria parcial sobre la fuerza.¹³⁶

¹³⁵- Esa misma fecha partieron hacia la Capital Federal cuatro ómnibus con 200 personas -en su mayoría dirigentes gremiales- con el objetivo de exigir una respuesta al gobierno radical, que no lograron obtener. Por el contrario, el entonces viceministro del Interior Jorge Matzkin consideró que se trataba “de un extorsión al gobierno nacional” (*Página 12*, 28-07-1999).

¹³⁶- Un documento publicado por una de las agrupaciones autoconvocadas un año después de ese enfrentamiento da cuenta de lo que se vivió ese día: “El 28 de Julio de 1999, como lo describiera muy bien un periodista de Buenos Aires para todo el país, “el pueblo de Corrientes con un coraje y una masividad pocas veces vista, está construyendo su historia, está diciendo ¡BASTA!, ¡HASTA AQUI LLEGAMOS!, ¡NO SE AGUANTA MAS!, tomó el Puente Gral. Belgrano con sus demandas de Justicia y Dignidad, y con una cuenta de cuatro meses de sueldos adeudados por el Estado Provincial, pedía el auxilio de la Nación, y esta respondió; si, respondió, llegó una ayuda llena de condiciones para el castigado pueblo de Corrientes, no sin antes desatar una brutal represión contra los miles de correntinos que aguardaban pacíficamente



Figura 15. Al pie del puente General Belgrano, los gendarmes comienzan la retirada al verse ampliamente superados por los manifestantes. (Foto gentileza Hilda Presman).

Luego de la represión y de los enfrentamientos hubo una transferencia de parte del Tesoro Nacional a la provincia para paliar la situación al menos momentáneamente y redistribuir salarios, lo que fue tomado por los manifestantes como un triunfo parcial.

El 3 de agosto el juez de instrucción Juan Manuel Segovia ordenó la detención de Romero Feris en la causa por fraude con bonos de consolidación de la deuda provincial. Estuvo detenido en el Sanatorio del Norte por un cuadro de hipertensión hasta el 27 de diciembre de 1999, cuando fue trasladado al Escuadrón 48 de Gendarmería (*Página 12*, 17-11-2003). Fue acusado, detenido y embargado por administración fraudulenta y “sublevación” contra las instituciones. Las detenciones alcanzaron a numerosos funcionarios de su gestión, acusados del desvío de bonos provinciales y de otros hechos de corrupción ligados a malversación de fondos. A partir de ese momento el Poder Ejecutivo de la provincia y el municipio de la capital pasaron a ser gobernados por una coalición de partidos opositores al PANU.

Hacia fines de agosto se había registrado “cierto retroceso en la lucha pues se producen algunas divisiones entre quienes quieren seguir profundizando la lucha en oposición al gobierno interino y los que más alineados con éste comienzan a cuestionar y flexibilizar las medidas de fuerza” (Klachko, 2003, p. 175). Esta suerte de desarticulación se vio durante el mes de septiembre, cuando el movimiento de docentes autoconvocados

desde el día anterior a que sus demandas fueran escuchadas.” (PUEBLO CORRENTINO AUTOCONVOCADO, 28 de Julio de 2000).

fue objeto de presiones desde distintos sectores para que abandone la protesta, a medida que la posibilidad de perder el año escolar se hacía más firme.

Durante octubre y noviembre la crisis institucional se fue agravando y llegó a fin de año con una nueva acumulación de sueldos estatales adeudados. El mes de octubre hubo elecciones generales, y si bien el PANU tuvo una drástica baja en su electorado que lo llevó a casi la mitad de votos obtenidos en la última elección, los demás partidos como el FREPASO y el PJ se vieron beneficiados. Mientras que el porcentaje de votos impugnados, en blanco o de inasistencia fue prácticamente igual al de 1997 (Klachko, 2003, p. 179).

Sin embargo, el movimiento de protesta que a esta altura abarcaba a un enorme arco de agrupaciones representativas de diversos sectores de la sociedad correntina, debatía no sólo la manera de resolver las cuestiones económicas que dieron inicio a la protesta, sino también la propuesta de alternativas políticas. La conformación del “Cabildo Abierto” como una “nueva forma organizativa autoconvocada que encabezó el reclamo desde noviembre” (Pilar Sánchez, 2000, p. 56) es producto de esta serie de debates. Dicha agrupación incluía a las fracciones más contestatarias de los movimientos autoconvocados y a militantes de partidos de izquierda. Muchas de sus propuestas, que significaron una radicalización en una parte del movimiento, fueron ratificados por el resto de las organizaciones, inclusive por parte de los sindicatos. Así las asambleas entrelazaron discusiones acerca de la dirección política que debía tomar el movimiento: participar en elecciones como una fuerza alternativa, aliarse a algún partido político, o fortalecer el movimiento generado hacia una alternativa de poder popular real.¹³⁷

Algunos de los participantes recuerdan este tipo de debates, tal el caso de Eugenio Montero, de 45 años en 1999, periodista independiente y con experiencia sindical, que participó del período de conflicto:

Las posiciones más avanzadas las tenían los Tutores Autoconvocados que influían a su vez sobre los docentes autoconvocados, aportando las decisiones más de vanguardia. Y en un momento se debatió la posibilidad de tomar el gobierno, de formar un gobierno

¹³⁷- La “Coordinadora 7 de Junio” era una de las que promovía este debate. En un documento publicado el 7 de diciembre, a seis meses de su gestación –y a pocos días de la última etapa de la protesta antes de la represión- titulado “Los ‘arreglos’ de estos políticos no son las soluciones para el pueblo de Corrientes”, la agrupación manifiesta en uno de sus puntos: “A pesar de los cambios de “figuritas”, hoy seguimos con los mismos reclamos del primer día del aguante, un cambio total en la manera de hacer política. Ya que el tiempo de los políticos no es el tiempo de la gente y los intereses de ellos no son las reivindicaciones del pueblo.”

alternativo con sectores de la iglesia, del comercio... Las organizaciones de comerciantes tradicionales son totalmente conservadores y oportunistas, o sea se vuelca al poder de turno, no son los comerciantes de los barrios, pero me acuerdo que mandaban sus máximas delegaciones al puente a expresar su solidaridad... Venía el párroco de la Catedral que tiene el guiño del Arzobispado a dar las misas arriba del puente... Las fuerzas vivas de la ciudad mandaban sus delegaciones, y en ese momento se discutió formar un gobierno con los mejores vecinos, se decía, porque acá no había gobierno, no había elecciones, y otra vez las discusiones sobre quién debía ser gobierno, a quién le correspondía. Y para evitar el camino de la intervención se propone esto, pero no, evidentemente no se expandió como posibilidad directa y real, como una alternativa. (...) En la casa de gobierno, si había una alternativa, se iban. No tenían con quien conversar, no había representación. No se puede hacer futurología, pero te digo hasta donde se llegó y hasta donde se planteó esa posibilidad.

Más allá de los debates entre las fracciones más contestatarias de los manifestantes que incluían objetivos políticos y no sólo el reclamo económico, el movimiento de protesta estaba lejos de ser una potencial alternativa de gobierno. Estas fracciones más contestatarias estaban recién comenzando un proceso de construcción política, y eran relativamente minoritarios en comparación a todo el movimiento.

El 23 de noviembre las asambleas resolvieron subir nuevamente al puente y cortarlo durante unas horas, acto al que asistieron más de 2000 personas. En este caso no asistieron políticos locales de los principales partidos, y el “Cabildo Abierto” tomó un mayor posicionamiento en la organización. Tras una promesa del gobernador interino de atender a los manifestantes, éstos abandonaron el puente al día siguiente.

6.2. Hacia un desenlace violento.

Ante la persistencia en la falta de soluciones concretas, en diciembre de 1999 los docentes autoconvocados impulsaron un nuevo corte del puente. Votaron y acompañaron dicha resolución los trabajadores judiciales agremiados en el SITRAJ junto a otros sindicatos y partidos políticos: CTA y ATE y sindicatos docentes como AMET, SUTECO y ACDP, la Asociación de Periodistas, agrupaciones políticas como el Frente de la Resistencia, la Coordinadora de agrupaciones autoconvocadas “7 de junio” (llamada así

por el día del comienzo del acampe)¹³⁸ y el Cabildo Abierto; además de asalariados del transporte público, de la salud, estudiantes, cuentapropistas, pequeños productores del interior, jubilados y desocupados (*El Litoral*, 10-12-99). La decisión esta vez fue movilizarse y permanecer en el puente por tiempo indeterminado, para lo cual los manifestantes fueron preparados para resistir varios días. Trasladaron sus carpas y elementos de cocina para mantenerse allí durante varios días, además de conformar nuevas redes logísticas para mantener la provisión de alimentos (teníamos en cuenta que los manifestantes se asentaron casi en la mitad del puente, a casi 1 Km. de distancia de las primeras casas de la ciudad).

Así fue que el día 10 de diciembre, mientras de la Rúa y su equipo asumían el Gobierno nacional en Buenos Aires, el Puente General Belgrano era tomado una vez más por alrededor de 2000 personas. El arco de manifestantes era sumamente heterogéneo: docentes –entre ellas muchas madres con sus hijos–, comerciantes, trabajadores estatales y estudiantes. Con la experiencia de los anteriores enfrentamientos, unas tres barricadas se desplegaban a lo largo del puente, formadas con neumáticos apilados y otros elementos que impidieran o al menos retrasen el paso de las fuerzas de Seguridad.



Figura 16. Asamblea en el puente y construcción de barricadas. Día 13 de diciembre de 1999. (Fotos Pablo Teler).

Inmediatamente llegó la orden judicial de desalojo, y para el día 11 de diciembre, el sindicato de trabajadores judiciales (SITRAJ) decidió abandonar el puente cuando

¹³⁸- Dicha agrupación fue una de las pocas que mantuvo su cohesión incluso un año después de la represión de diciembre de 1999. Aglutinó al conjunto de manifestantes más críticos y que pretendían un cambio político más profundo en la provincia y no sólo una intervención del PEN.

recibieron la noticia de que serían recibidos por el flamante ministro del Interior Federico Storani en Buenos Aires, lo que generó el masivo repudio de los demás manifestantes.¹³⁹

El 13 de diciembre la asamblea formada sobre el puente decide resistir el inminente desalojo tras el anuncio del arribo de tropas de la Gendarmería del grupo apodado los “Quebrantahuesos”, por su fama represiva. Mostrando mayor precaución que en el mes de julio, los manifestantes atravesaron algunos guardarrail y los soldaron transversalmente en el camino, más un entramado de alambres a poca altura del piso para impedir el avance de tropas y carros hidrantes. La orden de avanzar finamente se materializó y más de 3000 personas resistieron a pedradas la represión de gases y balas de goma, logrando que la Gendarmería se repliegue.¹⁴⁰

Luego de la represión los manifestantes decidieron continuar en el puente y exigieron la presencia de Storani, quien argumentaba que su voluntad era dialogar y que los manifestantes mantenían una intransigencia a la negociación. En tanto en Buenos Aires, el 14 de diciembre asumían 35 secretarios de Estado, entre ellos Enrique Mathov como secretario de Seguridad Interior.

El día 15 el conflicto se agravó cuando un grupo de camioneros varados del lado chaqueño hacía varios días, iniciaron a su vez un corte de ese lado del puente. En el interior de Corrientes, además, comenzaron a cortarse las rutas nacionales 12, 14, 118 y 123 en las localidades de Mercedes, Paso de los Libres, Esquina y San Cosme. Ante esta situación y con apenas cinco días transcurridos desde su asunción como nuevo presidente, de la Rúa envió al Congreso Nacional un proyecto de intervención federal a la provincia de Corrientes, que tuvo media sanción en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados ese mismo día. Antes de medianoche, la intervención de Corrientes se convirtió en ley, y se creó un “minigabinete interministerial” para coordinar el auxilio a Corrientes a cargo de Graciela Fernández Meijide, mientras que Ramón Mestre era

¹³⁹- Juan Carlos González, tesorero del SITRAJ, certificó este hecho, pero relató que una vez llegados a Buenos Aires se percataron que la propuesta de diálogo era en realidad una medida dilatoria, ya que el 13 de diciembre comenzó la represión -anterior al día 17, día del desalojo-, mientras los judiciales estaban en Buenos Aires. El gremialista también contó que inmediatamente anularon el encuentro, volvieron a Corrientes y retornaron al puente, información que no se publicó en los diarios.

¹⁴⁰- Paralelamente los conflictos institucionales se sucedían en la gobernación. El 13 de diciembre Tomasella, presidente del Senado provincial -y referente principal del Partido Liberal- fue elegido por ese cuerpo legislativo como gobernador de la provincia. La designación no fue reconocida por el gobernador interino Perié (PJ), quien proclamaba una intervención federal como única solución a la situación crítica de la provincia.

elegido por el Gobierno Nacional como el nuevo interventor.¹⁴¹ El anuncio fue acompañado por la promesa del pago de sueldos atrasados, pero el nuevo interventor dejó en claro que asumiría su función sólo una vez que el puente fuera despejado.

Sin embargo, el plan diseñado por el nuevo Ejecutivo nacional no provocó la retirada de los manifestantes del puente Gral. Belgrano. Para ellos no había señales claras de solución a la crisis que venían soportando. La decisión de los manifestantes era confirmada “a través de asambleas soberanas donde el consenso siempre está presente. Los piqueteros del puente se mantuvieron en buena medida gracias al apoyo de la gente que no pudo estar en el corte por diversas causas, pero que hizo su aporte con víveres, agua, y hasta con las cubiertas de los retenes.” (*El Litoral*, 17-12-1999).

Tras 8 días de estar sobre el puente, de prácticas asamblearias y de preparativos para un nuevo enfrentamiento que cada día se hacía más inminente, la respuesta final del gobierno nacional llegó la madrugada del día 17 de diciembre de 1999. La táctica de la Gendarmería fue completamente distinta a las anteriores intervenciones, cuando se vieron desbordados por la cantidad y constancia en la resistencia de los manifestantes. Esta vez las tropas desplegaron toda una ingeniería para que la represión y el desalojo resulten efectivos: ingresaron al puente desde el lado chaqueño a las cuatro de la mañana, cuando eran apenas algunas decenas de personas las que hacían guardia. Los mismos fueron desalojados rápidamente a fuerza de camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. También se incluyó una lancha que cruzó el río Paraná con decenas de gendarmes, y una vez en la orilla correntina tuvieron por misión cortar el suministro eléctrico en los transformadores de la usina que alimenta a la ciudad, a unos 400 metros de la bajada del puente. Esto provocó que las luminarias se apaguen y que la zona circundante a la bajada del puente quedara en completa penumbra.

Alberto Chiappe, quien fue responsable del desalojo, admitió poco después que había actuado sin ninguna orden del juez federal Carlos Soto Dávila, a cargo de la jurisdicción.¹⁴² Según su propia declaración, el juez le habría ordenado que “desaloje el

¹⁴¹- Se trataba de la 17° intervención en la historia de la provincia –que se extendió hasta dos años-, y Mestre se convertía en el interventor N° 53, seguido de Oscar Aguad. En ese período los salarios nunca fueron del todo regularizados y se instaló el CECACOR, un bono provincial que suplía la falta de circulante.

¹⁴²- “El comandante mayor de Gendarmería Ricardo Alberto Chiappe, jefe de las tropas que ayer abrieron fuego sobre civiles desarmados en Corrientes, estuvo asignado a dos de los principales campos de concentración que funcionaron en unidades del Ejército durante la guerra sucia de la década del 70: los de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, y La Perla, en Córdoba. (...) Su nombre no figura en las listas de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, lo cual significa que no fue reconocido

puente cuando considere oportuno” (*Clarín*, 18-12-99). Desde el Poder Ejecutivo Nacional siempre se dejó en claro que las fuerzas de seguridad se ponían a disposición del Poder Judicial, aunque la decisión final para “resolver” un problema social fue tomada por un comandante de una fuerza de seguridad interior.

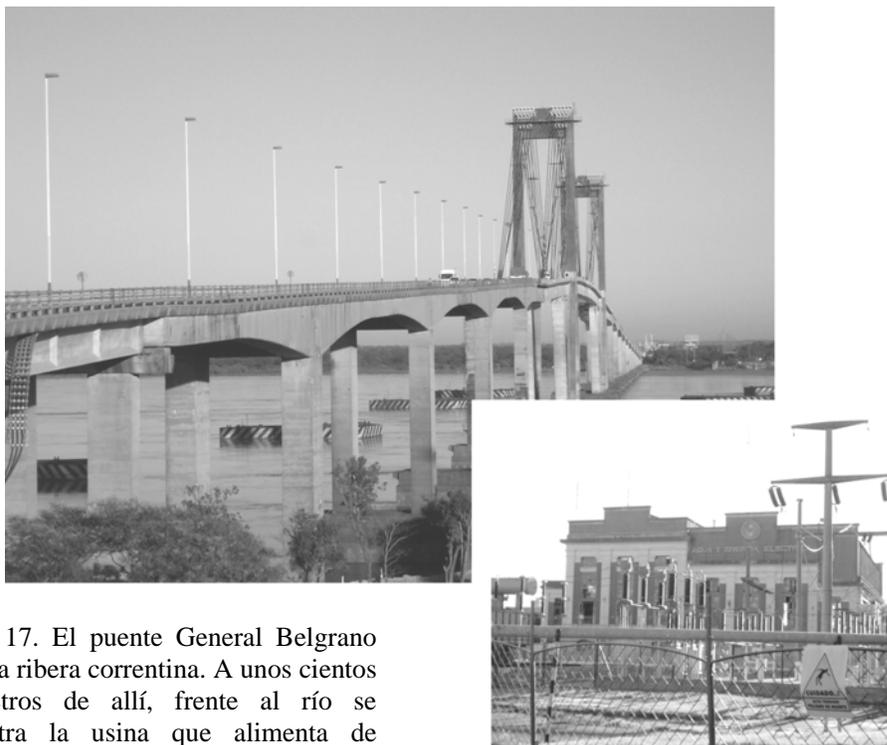


Figura 17. El puente General Belgrano desde la ribera correntina. A unos cientos de metros de allí, frente al río se encuentra la usina que alimenta de electricidad a la ciudad.

La represión en el puente fue en realidad una represión en los barrios cercanos. Los manifestantes, en principio desbordados por el súbito ataque, comenzaron a reagruparse – una gran cantidad de ellos jóvenes provenientes de barrios marginales- dando inicio a un largo enfrentamiento que se extendió durante más de 10 horas de combate sobre la Avenida 3 de Abril. El avance de la Gendarmería incluyó prácticas que no se daban por primera vez y que también estarían presentes en los siguientes casos que analizaremos, como tropas que ingresaron ilegalmente a los departamentos en el barrio Ferré, un conglomerado de monoblocks cercano al puente en busca de manifestantes que habían

por ninguna víctima (por lo cual puede presumirse que no hubo sobrevivientes, M.A.). La información acerca de su desempeño en aquellos campos de concentración en los que se torturaba y asesinaba a personas detenidas, proviene de fuentes internas de la Gendarmería.” (Horacio Verbitsky, *Página 12*, 18-12-99).

sido cobijados por los vecinos, y con la intención de subir a los techos y poder disparar desde allí.

Las primeras imágenes en TV y los informativos en las radios locales provocaron que miles de personas se dirijan a la ruta a solidarizarse con los manifestantes, dispuestos a enfrentar a las tropas. A media mañana se produjeron la mayoría de los heridos de bala, indicando el momento en el cual las tropas arremetieron con armas de fuego sobre los manifestantes. El combate se extendió durante la siesta, cuando la distancia entre manifestantes y tropas fue la más corta, algo menos de 100 metros. Alrededor de las 14 hs. la policía de la provincia recibió la orden de interponerse entre los bandos con banderas blancas, lo que hizo disminuir los enfrentamientos.¹⁴³

Durante los enfrentamientos también fueron registrados por los medios gráficos distintos ataques a los comercios cercanos al puente, vidrieras rotas y saqueos por personas “con los rostros tapados”. Estos hechos fueron adjudicados a *personas que estaban infiltradas* en las manifestaciones, que no formaban parte de ninguna organización gremial o social.¹⁴⁴ Nunca se comprobó quiénes eran realmente estos supuestos infiltrados que realizaron desmanes, o si en realidad pertenecían a miembros de inteligencia de las mismas fuerzas de seguridad que operaban dentro de las agrupaciones que protestaban. Tampoco se comprobó que “militantes rentados para generar el caos” se hayan trasladado a Corrientes para aprovechar una situación de protesta social. Sin embargo, todas las acusaciones que remitieron a personas infiltradas fueron formuladas en este sentido.

La represión dejó como saldo la muerte de dos jóvenes: Mauro César Ojeda cayó cerca de las 7 de la mañana cuando fue alcanzado por una bala de plomo. Tenía 18 años, vivía con su madre y sus cuatro hermanos y estaba desocupado, aportaba en su casa haciendo changas. Francisco Escobar, de 25 años, cayó alrededor de las 9 de la mañana a poca distancia de la anterior víctima, en la Avenida 3 de Abril y la calle Chaco -a unos 300 metros del puente-, cuando un disparo de arma de fuego impactó en su pecho. Sus cuerpos pudieron ser velados gracias a la donación del sepelio que hizo una casa funeraria de Corrientes. Hubo además más de 60 heridos de bala y con contusiones

¹⁴³- Días más tarde, el Gobierno nacional acusó a la fuerza provincial de haber distribuido entre los manifestantes armas de bajo calibre para combatir a la Gendarmería.

¹⁴⁴- Hilda Presman, veterinaria y militante de DD. HH. que participó de las manifestaciones y presenció la represión, menciona que sobre la Avenida 3 de Abril se atacó a un único comercio, un supermercado propiedad de Raúl Romero Feris.

diversas (de los cuales por lo menos 5 ingresaron a los hospitales cercanos con pronóstico reservado), y cerca de 30 detenidos.¹⁴⁵

Teniendo en cuenta la cantidad de heridos de bala y el tipo de herida que sufrieron, los muertos podrían haber sido muchos más de dos. Algunos de los relatos recogidos dan cuenta de esto. José Luís Talavera tenía 40 años durante la protesta en la que participó durante casi todo el año. Era vendedor ambulante en ese entonces, y la merma de circulante provocado por la ausencia de pago de haberes lo llevó a estar semi-desocupado. Luego de ver las imágenes de represión por TV, se dirigió a la avenida a manifestarse y allí recibió un balazo en su pierna que le partió el fémur, teniendo secuelas hasta el día en que fue entrevistado. Estaba junto a su amigo Ignacio Cardozo, de 58 años en ese momento y changarín, quien recibió un impacto de bala en la cadera y otro en el brazo que le rompió el hueso del radio. Asistió a la movilización en plena represión con su hijo Jorge, de 29 años, que en aquel momento era empleado público del Consejo Deliberante y agremiado al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, y quien recibió una perdigonada de munición de goma en distintas partes de su cuerpo. Según su relato:

Nosotros estuvimos el día anterior hasta las 2 de la mañana y era inminente el desalojo. Cuando amanece me avisan que había habido represión, que habían desalojado el puente y que habían despejado, y escucho por la radio que dicen 'la gente lejos de retirarse, se está concentrando cada vez más en la esquina de 3 de Abril y Chaco'. Ahí es cuando tomo la decisión de irme, y detrás mío salió mi padre. Cuando llegamos allá realmente confirmamos que era un campo de batalla, pero que también había llegado mucha gente. Ahí es cuando caen los dos jóvenes y a nosotros nos hieren. (...)

Ahí es cuando le digo 'Papá, escondete detrás del árbol, cubrite', le terminé de decir eso y le balearon. Yo tengo tres perdigones en el cuerpo y uno en el rostro. Ahí me di cuenta que estaban tirando y no les importaba nada, que eso era una caza de patos. (...)

Lo que me indigna es que hubo dos crímenes y que el Estado fue incapaz de investigar quienes mataron a los jóvenes. Yo estuve en frente, a 30 m. de la columna de los gendarmes, que cortaron a lo ancho toda la avenida y ahí se acantonaron. Es como si hubiera matado dos perros y los dejó tirados ahí. Los heridos están luchando hasta el día de hoy tratando de conseguir algún tipo de ayuda.

¹⁴⁵ - Días después de la represión, un grupo de abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advirtieron que las víctimas podrían ser más de dos. Indicaron que, producto del enfrentamiento, se registraron más muertos "que no fueron denunciados por el terror social impuesto por el accionar de la gendarmería" (*El Litoral*, 27-12-99). Estas versiones no oficiales acusaban la existencia de entre cinco y ocho muertos provocados por la represión, y que habrían sido "blanqueados" en la morgue judicial como personas ahogadas en el río, o como víctimas de riñas callejeras.



Figura 18. Durante el enfrentamiento del 17 de diciembre. (Foto gentileza Hilda Presman).

Lucio Mauriño era estudiante y tenía 18 años. Estuvo el día de los enfrentamientos además de haber participado de todo el corte del puente. Da testimonio de su visión de lo brutal de la represión:

Esa noche había 20 personas, estaba mi vieja ahí. Había estudiantes de medicina, había pibes de la calle, había maestras... Básicamente estábamos encargándonos de repartir agua y trapos y llevándola a compañeros que estaban intoxicados con los gases lacrimógenos. Esto fue totalmente espontáneo, veíamos la necesidad y actuamos en ese momento. Ya muy temprano empiezan las balas que después de un tiempo me enteré que eran balas de verdad. Y lo concreto es que a mi me hirieron a las 9.10 de la mañana más o menos.

A las 9.05 yo estaba trasladando agua, viene una andanada de gases y cuando se va limpiando siento un impacto. La bala provenía directamente de la Gendarmería Nacional y me ingresa en la zona torácica, y tengo la salida en la espalda, me acuerdo que me deja dando vueltas como un trompo. Automáticamente me empieza a salir sangre de la espalda y un compañero saca un pañuelo y me lo pone en el orificio de salida, todavía estaba parado. Ahí me abraza y empezamos a trotar. Yo voy perdiendo el conocimiento y este compañero me cuenta que me tiran adentro de la ambulancia. Llegamos al hospital y junta médica, el traslado al quirófano...

(...) Fue una bala que caminó, complicada, caminó bastante, bajó y subió nuevamente y me tocó el baso, vísceras. Tengo compañeros heridos, hay balas alojadas en segunda y cuarta vértebra, hay estallidos de hoides... y sabes lo terrible de todo esto, es cómo quedan los compañeros. Hay gente que la sigue pasando muy mal. Se tuvo una asistencia inmediata, pero no se tuvo asistencia de psicólogos, de psiquiatras, fueron muy difíciles los años que vinieron.



Figura 19. Cartel en la Avenida 3 de Abril, donde fueron asesinados Escobar y Ojeda. A metros de allí todavía –noviembre de 2007- se encuentran rastros de la represión. En este cartel de un autoservicio sobre la Avenida 3 de Abril, marcas de las balas.

Los piquetes continuaron durante la tarde hasta la madrugada del día siguiente. Las versiones oficiales, como veremos más adelante, tergiversaron completamente los hechos: informaron sobre el ataque con armas de fuego desde los manifestantes, y de la existencia de francotiradores que atacaron las tropas. Durante los días siguientes a los enfrentamientos, la Gendarmería se mantuvo “preventivamente” en el lugar de los enfrentamientos, asegurando que la protesta no resurgiera.

Mestre llegó a la provincia el 20 de diciembre, con una plaza todavía repleta de carpas. Prometió un cronograma de pago de sueldos adeudados, pero pocos días después de su ingreso en la gobernación comenzó un programa de “racionalización” de empleados estatales. Arribó con 30 millones de pesos para pagar sueldos, y ante el rápido agotamiento de esa suma de dinero, la respuesta fue simplemente que “no había más plata”. Se anunció que “más de 4.000 empleados transitorios no cobrarán sus magros haberes porque no quedan más fondos en las arcas provinciales” (*El Litoral*, 23-12-99). Luego, con el pretexto de que existían “ñoquis” cobrando sueldos sin siquiera presentarse a sus trabajos, se empezó a hablar del despido de miles de empleados. En una reunión con dirigentes de ATE de Corrientes, se llegó a hablar de un exceso del 35 % de empleados en la administración pública (unos 18 mil trabajadores estatales). La voluntad del

interventor llegó incluso a no renovar los contratos vencidos al 31 de diciembre de 1999, provocando una nueva escalada de reclamos, protagonizados esta vez por el gremio ATE de Corrientes.

Ante esta situación los gremios propusieron nuevas medidas de lucha, pero no se retomó la metodología del corte del puente. Un nuevo plan de reclamos se extendió hacia los primeros días de enero de 2000 con protestas de menor magnitud.

La inusitada movilización popular en la capital provincial y numerosas ciudades del interior con numerosos reclamos de tipo económico y político fue finalmente disuelta con la sistemática presencia de la violencia institucional. La misma selló de manera contundente el proceso de lucha en diciembre de 1999 con una constante criminalización de la protesta que pasaremos a analizar. Retomando a Cazorla Artieda (2002),

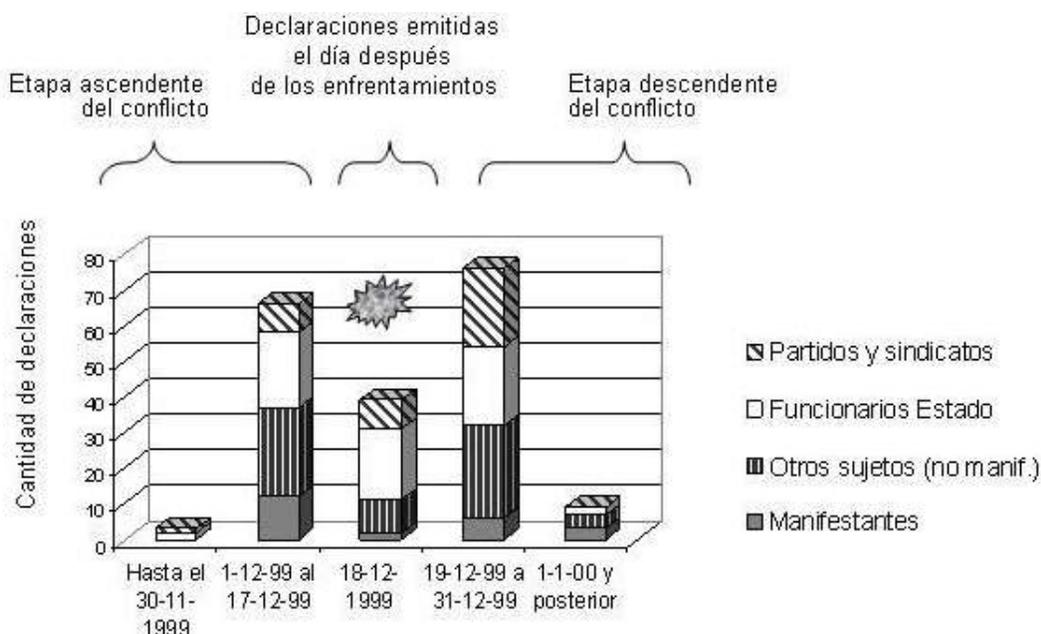
“La fortaleza del movimiento social radicaba en su amplitud y masividad, así como en los mecanismos de toma de decisiones basados en asambleas populares que hacían virtualmente imposible de influir para la clase política. Su debilidad en cambio, radicó en la incapacidad de generar una síntesis política y una consecuente herramienta que pueda disputar el poder a aquellos a quienes se criticaba” (p. 13).

6.3. Activistas infiltrados, protesta ilegal.

Nos detendremos a analizar cuales fueron los mensajes producidos centrando el eje temporal en la última etapa del conflicto (diciembre de 1999). Lo hacemos porque allí se concentran los enfrentamientos más violentos y, consecuentemente, la producción discursiva más intensa, objeto de esta investigación. El soporte empírico está constituido por 193 declaraciones rastreadas durante la segunda quincena de noviembre y todo diciembre de 1999, además de enero y febrero de 2000 en los diarios *La Nación*, *Clarín*, *Página 12*, *El Litoral* (Corrientes) y *El Norte* (Chaco). En los tres primeros diarios de tirada nacional se concentra el 28 % de las noticias relevadas, y el 72 % restante en los dos diarios provinciales.

En primer lugar veamos cómo se distribuyen temporalmente el total de las declaraciones relevadas según quienes fueron sus emisores. Hemos distinguido los períodos a partir del día 18 de diciembre, posterior a los enfrentamientos más duros - ocurridos el día 17-, pues ese día engloba la mayor cantidad de declaraciones en comparación con las demás jornadas:

Gráfico 5: Corrientes, diciembre de 1999. Personificaciones que emiten mensajes en distintos momentos del conflicto.



Fuente: elaboración propia en base a diarios *La Nación*, *Clarín*, *Página 12*, *El Norte*, *El Litoral*. (Noviembre '99 a febrero '00).

El criterio de categorización de quienes emiten declaraciones está conformado de la siguiente manera:

1- Sindicatos: aquí ubicamos a los dirigentes de partidos nacionales y provinciales, incluyendo a los partidos gobernantes que al momento de realizar la declaración no cumplían funciones de gobierno. Estas declaraciones se suman a las de los dirigentes sindicales que no participaron de la protesta (son los que en mayor medida critican y condenan a las fuerzas de seguridad). Dentro de esta categoría también se encuentran mensajes provenientes de partidos políticos contrarios al oficialismo (luego de los enfrentamientos y condenando la acción del Estado), aunque en mínima cantidad.

2- Funcionarios de Estado: se reúnen las declaraciones de funcionarios pertenecientes a los tres poderes (tanto provinciales como nacionales) al interventor de la provincia y los agentes con diversos rangos pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Sus intervenciones están presentes desde el principio del conflicto pero se intensifican luego de los principales enfrentamientos, en mayor medida justificando las acciones represivas.

3- Otros sujetos no manifestantes: se encuentran las declaraciones de quienes no participan físicamente del conflicto, sino sólo a través de sus interpretaciones. Se trata de mensajes registrados de los lectores de los diarios que envían "cartas del lector", transeúntes del puente ajenos a la protesta y que fueron entrevistados para conocer sus opiniones, camioneros varados por el corte -quienes criticaron reiteradamente los métodos utilizados para el reclamo), comerciantes y empresarios de la ciudad de Corrientes, representantes de la Iglesia, miembros de organismos de DD. HH., de establecimientos educativos, periodistas y directores de los diarios que utilizan sus propios medios como tribuna de opinión. Entre ellos el diario "El Norte", propiedad de Raúl Romero Feris, donde se publicaron sistemáticamente condenas a la protesta de parte de periodistas y directivos.

4- Manifestantes: son un conglomerado heterogéneo de personas que tomaron el puente: las distintas agrupaciones de “autoconvocados”, miembros de la Coordinadora 7 de junio –que engloba a distintas agrupaciones autoconvocadas y a manifestantes con una tradición de militancia política y en Derechos Humanos-, el “Cabildo Abierto”, formado en la última etapa del conflicto y que integraba a manifestantes que habían protagonizado las acciones directas de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Es decir, trabajadores del sector público (docentes, empleados públicos y judiciales), asalariados del sector privado, cuentapropistas, desocupados, estudiantes y padres de los mismos. Entre los manifestantes se encuentran también los representantes de los gremios docentes, de empleados estatales y judiciales que desde el inicio del conflicto impulsaron las movilizaciones y los cortes del puente. En su gran mayoría, estos mensajes se realizaron durante la ejecución del corte.

La periodización nos permite ver ante todo que a medida que el conflicto entra en una etapa de mayor intensidad y enfrentamiento físico, también aumenta la frecuencia de caracterizaciones. Y en esta correspondencia de hechos y sus interpretaciones, cobra importancia el contenido de los mensajes a lo largo del tiempo. Se trata de un conjunto dinámico que involucra al enfrentamiento físico, a la producción simbólica surgida del mismo, y a los sujetos que intervienen en ambas dimensiones del conflicto.

Si comenzamos por las declaraciones emitidas por los manifestantes, vemos que ocupan un lugar mínimo en el período analizado, tendencia acentuada en los días posteriores al enfrentamiento. Los dirigentes sindicales y partidarios, como veremos, reúnen gran cantidad de mensajes de solidaridad con los manifestantes, que se plasmaron recién después del día de los enfrentamientos. Las personas que personificamos como “no manifestantes” intervinieron a lo largo de todo el conflicto, primero criticando los métodos de la protesta y llamando a su final, aunque luego del desalojo, dirigieron su crítica a las fuerzas de seguridad.¹⁴⁶

Las declaraciones provenientes de funcionarios de distintas agencias y despachos oficiales están destinadas, como veremos más adelante, prioritariamente a descalificar a los manifestantes, tanto antes como después de los enfrentamientos. Y a justificar represión violenta: el día 18 de diciembre más de la mitad de las intervenciones corresponden a estos actores.

Veamos de manera desagregada los elementos que componen las intervenciones discursivas. Como ya mencionamos, diferenciamos dos “nudos” conceptuales o variables

¹⁴⁶- Esta ambivalencia es sugerente para pensar en una subjetividad atomizada y cambiante del conglomerado social que no se involucró físicamente en el conflicto. Tengamos en cuenta, además, que apenas dos años antes, episodios similares de protesta finalizaron con represión y con la muerte de manifestantes; pese a ello, se repitieron demandas de intervención de la fuerza pública para resolver un problema social aunque luego se condenó la intervención represiva.

que como en los anteriores casos, se encuentran interrelacionadas en el cuerpo de cada una de las declaraciones, y su distinción es con fines analíticos. En el conjunto registrado (recordemos, 193 declaraciones) existió una tendencia mayor a caracterizar o definir acciones y sujetos antes que a efectuar reclamos o exigencias. Son 169 los enunciados que contienen calificaciones de los hechos o los sujetos en disputa, representando algo más del 87 % del total. En menor cantidad, las declaraciones que contienen reclamos, exigencias o denuncias son 130, un 67 % del total. Presentaremos ambos subtotales para ver, en cada caso, los componentes hallados:

Cuadro 5: Corrientes, diciembre de 1999. Caracterizaciones y definiciones de los hechos; y denuncias, exigencias y demandas en las declaraciones publicadas.

CARACTERIZACIONES o DEFINICIONES del hecho	N	%	DENUNCIAS o DEMANDAS	N	%
Vinc. a delictivo o ilegítimo	40	23,7	Llamados a uso de fuerza	31	23,8
Vinc. a izquierda y violencia	29	17,2	Exigencias a terminar la protesta	11	8,5
Métodos inapropiados	11	6,5	Reclamos financieros al Estado	24	18,5
Fzas. Seg. legítimas	5	2,9	Denuncias de represión	64	49,2
Dirig. política corrupta	29	17,1	Total	130	100
Estado respons. de represión	55	32,6			
Total	169	100			

Fuente: elaboración propia en base a diarios *La Nación*, *Clarín*, *Página 12*, *El Norte*, *El Litoral*. (Noviembre 1999 a febrero 2000).

Con respecto a las caracterizaciones, casi la mitad de los enunciados contienen condenas a los gobiernos nacional y provincial por la represión y por manejos prebendarios, corruptos y clientelares (sumados, 84 casos sobre 169). Se trata de mensajes registrados en gran parte en el diario *Página 12* y en el diario *El Litoral*, luego de los enfrentamientos. Aunque por separado, los dos grandes grupos de declaraciones son minoritarios: el 17 % contienen elementos de crítica al gobierno provincial – producidos en buena parte por los mismos dirigentes locales que cruzan acusaciones en el marco de la profunda crisis política y económica-, ¹⁴⁷ y casi el 33 % en los llamados de solidaridad con los manifestantes o que condenan las acciones represivas.

¹⁴⁷ - Prácticamente el total de las declaraciones dirigidas a criticar a funcionarios del gobierno provincial y nacional, son tomadas del diario “El Litoral” de Corrientes. Recordemos que tanto el intendente de la ciudad de Corrientes, Raúl Romero Feris, como el gobernador Pedro B. Pocard (ambos miembros del PANU), fueron destituidos en junio de 1999 mediante sendos juicios políticos. Hugo Perié, del PJ, fue nombrado como gobernador interino. Frente a esta situación, el diario “El Litoral”, dirigido por una parte

El resto de los enunciados constituyen el cuerpo de construcción de un “otro peligroso” en torno a la protesta, que operaron deslegitimando o estigmatizando a sus integrantes. Aquellos primeros indicios de descalificación de la protesta ocurrida en Neuquén en 1996 –todavía sin mayor fuerza-, llegan en 1999 en el caso de Corrientes al 45 % del total de declaraciones registradas entre caracterizaciones de violencia, ilegalidad, vinculaciones con la infiltración política y prácticas subversivas, críticas a la metodología del corte de rutas y apoyos a las fuerzas de Seguridad que llevaron a cabo la represión. Podemos encontrar los siguientes ejemplos que refieren a la manifestación como un acto violento, ilegal o ilegítimo, o que definen con esos conceptos a quienes la protagonizan.

“En Corrientes se agrega una **pérdida de legitimidad política** porque hay un conflicto político muy agudo que incorpora **elementos que antes no estaban, como elementos de violencia.**” Federico Storani, dirigente UCR, *Clarín*, 27-11-99 (antes de ser Ministro del Interior).

“Creemos que **toda forma violenta de protesta, que cercene tanto derechos privados como públicos**, no puede encontrar en el resto de la sociedad organizada espacio de justificación.” Comisión Justicia y paz del Arzobispado de Resistencia. *El Norte*, 16-12-1999.

“**Los que crean tener derechos deben cambiar el modo desordenado de pedir su cumplimiento**, porque **el desorden es padre de la violencia.**” Dionisio A. Nieto, lector. *El Norte*, 17-12-1999.

“**Conocemos la existencia de grupos violentos, provocadores que estaban mezclados** con los manifestantes que legítimamente reclamaban” Federico Storani, Ministro del Interior, UCR. *Clarín*, 18-12-99.

Con respecto a las denuncias y/o exigencias, casi la mitad (64 sobre 130) apuntan a denunciar los hechos de represión, en su mayoría luego del 17 de diciembre, día en que se produjo la represión y los posteriores enfrentamientos. Se suman a las exigencias a dirigentes políticos para sanear la situación política de la provincia. Este tipo de pedidos provienen tanto de los manifestantes como de los funcionarios provinciales, en reclamo al Gobierno nacional.

Como era previsible, tanto los enunciados que exigen terminar con la protesta como los que reclaman el uso de la fuerza para el desalojo del puente (sumados son casi el 33 % de las exigencias) se dan mayormente antes de la represión.

de la familia Romero Feris, publicó frecuentes pedidos de intervención nacional a la provincia, así como las acusaciones provenientes del gobierno nacional que hablaban de corrupción y clientelismo político en la nueva dirigencia justicialista del gobierno provincial.

Volvamos a las declaraciones que contienen caracterizaciones o definiciones (169 sobre el total). Teniendo en cuenta el contenido de los mensajes, veamos de qué manera intervienen los distintos actores involucrados retomando las personificaciones que presentamos anteriormente:

Cuadro 6: Ciudad de Corrientes, diciembre de 1999. Caracterizaciones realizadas según el sujeto emisor.

	Emisores				Total
	Manifestantes	Otros sujetos no manifest.	Funcionarios Estado	Partidos y sindicatos	
Caracterizac. o definiciones					
Vinculación a lo delictivo o ilegítimo	0 ,0%	10 16,9%	28 45,2%	2 6,5%	40 23,7%
Vinculación entre izquierda y violencia	1 5,9%	11 18,6%	15 24,2%	2 6,5%	29 17,2%
Métodos de protesta inapropiados	0 ,0%	9 15,3%	2 3,2%	0 ,0%	11 6,5%
Legitimidad a las Fzas. de Seguridad	0 ,0%	2 3,4%	3 4,8%	0 ,0%	5 3,0%
Dirigencia política corrupta	5 29,4%	9 15,3%	11 17,7%	4 12,9%	29 17,2%
Estado como responsable de represión	11 64,7%	18 30,5%	3 4,8%	23 74,2%	55 32,5%
Total	17 100,0%	59 100,0%	62 100,0%	31 100,0%	169 100,0%

Fuente: elaboración propia en base a diarios *La Nación*, *Clarín*, *Página 12*, *El Norte*, *El Litoral*. (Noviembre '99 a febrero '00).

Podemos observar que la mayor cantidad de declaraciones emitidas pertenece a cuadros de los tres poderes del Estado, tanto nacional como provincial (62 declaraciones). En su gran mayoría relacionan la protesta con acciones violentas e ilegales, o cercanas a figuras delictivas (45 %), mientras que en segundo lugar relacionan el conflicto con la “aparición” o “infiltración” de activistas de izquierda (24 %).

Las centrales sindicales (CGT, CTA principalmente) así como algunos partidos provinciales y nacionales, cuando emitieron declaraciones lo hicieron mayoritariamente condenando la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad. Todas estas condenas las realizan después que las fuerzas de seguridad se cobraran muertos y heridos. Este es un dato a tener en cuenta, ya que si bien el conflicto es protagonizado desde un principio por diversos gremios de trabajadores docentes y estatales (agrupados en aquellas

centrales sindicales), antes de los enfrentamientos más duros del 17 de diciembre aparecen en todos los diarios consultados sólo dos mensajes de dirigentes sindicales –que no intervinieron en la protesta- solidarizándose con los gremios y con los demás manifestantes que sí participaban activamente en el corte. De todos modos, la represión tampoco aunó una estrategia de lucha a nivel nacional, y la reacción de los dirigentes sindicales fue disímil. El Secretario General del CTA Víctor De Gennaro en principio habló de convocar a un paro nacional en repudio de los hechos, propuesta que luego fue desestimada, junto a los dirigentes de la CGT y del entonces existente MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos) liderados por Rodolfo Daer y Hugo Moyano respectivamente, que no apoyaron dicha tentativa.

Los manifestantes ubicaron al Estado como responsable de la represión: más del 60 % del total de sus declaraciones son en ese sentido. Sin embargo, la intervención de los manifestantes en los diarios es mínima en relación al total de las opiniones vertidas en este período (17 sobre un total de 169).

Respecto de las declaraciones realizadas por “otros sujetos no manifestantes”, condenan los actos represivos y se solidarizan con los manifestantes el doble de veces (30 % del total) en comparación a las que sólo critican los métodos utilizados en la protesta (un 15 %). No obstante, más de la tercera parte del total de declaraciones que consideran “infiltrada” la protesta por la izquierda o que la evalúan ilegal o violenta, provienen de este mismo agrupamiento (11 mensajes sobre 29). De modo que la solución represiva también contó con el aval de distintos sectores de la sociedad, aunque desde estos mismos sectores se registraron más tarde las condenas a la represión y solidaridad con los manifestantes.

Algunas imágenes televisadas y difundidas desde días antes de la represión favorecían la vinculación entre violencia y protesta social, como la de manifestantes con rostros tapados, palos y gomeras que se enfrentaban a las fuerzas estatales. La violencia se vinculó primero a los choques físicos, en particular del 13 de diciembre, y luego a la idea de *infiltración* en las filas de los manifestantes.¹⁴⁸ Algunas de estas acusaciones tanto antes como después de los principales enfrentamientos del 17 de diciembre, provienen de personificaciones del poder político-militar del régimen.

¹⁴⁸- Tal vinculación fue potenciada por los desmanes y saqueos en los comercios de la ciudad, ocurridos luego del desalojo del puente. Nunca se comprobó quienes eran realmente los sujetos que los realizaron.

“No estábamos dispuestos a atacar con todo porque vimos que había familias enteras, pero **también había infiltrados entre la gente**”. José Antonio Caruso, Jefe operativo Gendarmería. *El Litoral*, 14-12-1999.

“La Gendarmería no utilizó armas de fuego para reprimir en Corrientes, las muertes fueron causadas por **grupos de provocadores infiltrados y por francotiradores** que dispararon desde los edificios cercanos al puente”. Federico Storani, Ministro Interior. *Clarín*, 18-12-1999.

“**Esos infiltrados nos tendieron una emboscada a nosotros y a la gente** que se manifestaba con la intención de provocar un caos”. José Antonio Caruso, Jefe operativo Gendarmería. *Página 12*, 27-12-1999.

Se referían a individuos que se habrían trasladado a Corrientes específicamente para aprovecharse de la situación y arremeter contra las fuerzas de seguridad, o para cometer actos delictivos. Juan Carlos González, dirigente gremial del SITRAJ, señala al respecto:

“Esta información de francotiradores de parte nuestra es lo que utilizaron para allanar los distintos barrios por la Gendarmería. Con este pretexto ingresaron a las casas que nada tenían que ver con el tema, pateando puertas, ingresando intempestivamente, y sin hallar nada porque no había armas. No encontraron los supuestos francotiradores. (...) Esto no era una cuestión de cuatro o cinco loquitos, como se pretendía demostrar. El pueblo fue el que se manifestó. Llegó un momento en que se cortaron todas las vías de ingreso a la capital, pero no éramos nosotros o dos gremios, era el pueblo mismo que se había levantado contra la impotencia de poder modificar esta situación.

Sin embargo, la versión oficial insistió con la idea de que la protesta estaba “contaminada” por grupos minúsculos y externos a la población que habrían conspirado contra las instituciones y contra los mismos pobladores, que sí se movilizaron por reclamos justos. Este tipo de razonamientos no sólo tergiversaban el objetivo principal de quienes reclamaban -ya que paulatinamente las interpretaciones eludían las causas y objetivos de la protesta- sino que justificaban la solución violenta al afirmar que el reclamo estaba corrompido, adulterado en su seno mismo: el pueblo infiltrado por sujetos extraños. La reiteración en el tiempo y en distintos conflictos de este tipo de razonamientos señala la permanencia de un sustrato ideológico de aprobación de los hechos represivos que, lejos de manifestarse como actos aislados, fueron sistemáticamente avalados por la dirigencia política.

Balbina Pittoni, de 39 años en 1999, docente de biología que no poseía filiación gremial y no era activista de ninguna agrupación, participó de todo el proceso de lucha desde el comienzo de los grupos autoconvocados en los cuales participó hasta el desalojo de diciembre. Sobre las acusaciones de militantes infiltrados recuerda:

Todo lo que se hizo fue porque la mayoría decidió. Corrientes es un pueblo grande, todos nos conocemos, entre los docentes nos conocemos todos, entre los judiciales también. (...) Es más fácil culpar a un grupito y no a todo un pueblo que está manifestando por lo que corresponde, pero no fue así, no había grupos radicalizados, éramos todos los sectores los estábamos manifestando. (...) Incluso en las asambleas cuando venían representantes de gremios para hablar nosotros votábamos a ver si los dejábamos hablar o no, todos decidíamos todo, teníamos representantes porque sino es imposible, pero todos nos consultábamos y decidíamos.

Las caracterizaciones sobre la infiltración política iban en una dirección concreta, pues no se acusó a los partidos mayoritarios de “proveer” infiltrados, ni se sospechó en primera instancia que los desmanes en los alrededores de la Avenida 3 de Abril pudieron provocarlos personas con la tarea específica de provocar un escenario que justificara la represión. Por el contrario, los infiltrados y violentos, provenían –según las versiones oficiales- de la militancia de izquierda. Principalmente luego de los hechos de marzo y abril de 1997 en Neuquén y Cutral C6, las ideologías de izquierda siguieron siendo presentadas como un factor destabilizador dentro de la protesta, y en ocasiones como responsables de los hechos:

“A todas luces resultó evidente la **participación de activistas de izquierda enrolados en Quebracho y el Frente de la Resistencia, que fueron rechazados por ciudadanos** que vieron en su acción una actitud desproporcionada.” Jorge Requena, Periodista. *La Nación*, 14-12-1999.

“(Los radicales) no sirven ni para sacar del puente **a cien pibes que están confundidos, cien maestras que tienen razón y un grupo de la izquierda fracasada**”. Luis Molina, Ex diputado, dirigente PANU, *El Litoral*, 17-12-1999.

“**En Corrientes están operando activistas políticos y grupos radicalizados que aparecen por izquierda**, pero son financiados por derecha. Tenemos los nombres, pero no sería conveniente que lo digamos ahora.” Walter Ceballos, Secretario Financiamiento del Ministerio del Interior de la Nación, UCR. *El Norte*, 18-12-1999.

“Los gendarmes fueron recibidos por descargas de armas de fuego. **La violencia está vinculada a la presencia de activistas de agrupaciones de ultra izquierda Patria libre, Venceremos y Quebracho.**” Federico Storani, Ministro Interior, UCR. *Clarín*, 18-12-1999.

“Se veía venir desde hace días, con **esa mezcla de gente común y activistas de izquierda.**” Ricardo Alberto Chiappe, Jefe de Gendarmería. *Página 12*, 18-12-1999.¹⁴⁹

“**Permitir una guerrilla urbana. ¿No sabían Perié o Storani que el movimiento de autoconvocados fue copado, hace rato, por los quebrachos, Paria Libre, Venceremos o dirigentes de la Corriente Clasista y combativa?**” Carlos Obreg6n, Periodista. *El Norte*, 18-12-1999.

¹⁴⁹- Una vez más el elocuente “análisis sociológico” de parte de un comandante de Gendarmería –y ex represor- que, como en el caso de Cutral C6 en 1996, distingue a la “gente común” de los activistas.

“Los posibles responsables de los homicidios [son] los grupos de izquierda que acompañaban a los manifestantes” Federico Storani, Ministro Interior, UCR. *Página 12*, 27-12-1999.¹⁵⁰

La interpelación a los manifestantes de este tipo de declaraciones -realizadas por una alianza social-política-militar e ideológica del régimen- provoca un recuerdo y un conocimiento antagónico a la versión oficial:

José Luis Talavera, vendedor ambulante: “Fijesé que el Ministro de Gobierno dijo que hubo más de 100 detenidos, y dentro de los 100 detenidos no hubo uno sólo de Qubracho ni nada. Eramos todos correntinos, todos los que estamos acá. Todo mentira para decir que hubo infiltrados.

Jorge Cardozo, empleado municipal: “Ese mismo argumento ya lo utilizó Tato Romero Féris, mucho antes cuando jaqueado por la sociedad salía a decir como si fuera una mala palabra ‘¡esas movilizaciones están siendo conducidas por gente de izquierda!’”. Nos acusaban de izquierda como diciendo ‘vos sos un terrorista, sos un extremista’, y no es así, era gente que estaba participando en democracia desde el primer momento.

Miguel Pelozo tenía 23 años y era estudiante de ciencias económicas, miembro de la congregación salesiana de Corrientes. Participó desde julio en la protesta y opina al respecto:

Tanto tiempo en la protesta ya nos conocíamos todos. Ahí uno identifica un par de caras que uno decía ‘¿y éste?’. Había porteños, me acuerdo, pero en el actuar no, incluso la gente de izquierda de acá nosotros los conocemos de siempre y sabemos de su militancia. Acá no había gente generando violencia. Llevábamos mucho tiempo de convivencia, ya nos conocíamos todos los que quedamos hasta el final. (...)

En el caso de Corrientes y en general, vos hablás de zurdo o de zurdaje y enseguida remitís a los ’70 y que esos grupos pueden volver a una situación similar a la que ocurrió en ese momento. Entonces, ‘combatámoslos ya antes que surja un foco de ese tipo’. Cuando vos decís eso la gente se aleja, no se mezclan.

Las versiones sobre infiltración política resultaban inverosímiles no sólo por la magnitud de la dinámica participativa sino también por el celoso resguardo que mantuvieron los manifestantes durante todo el proceso de lucha, que tenían por objetivo evitar cualquier tipo de posible desvirtuación. Por lo cual la participación de miembros de partidos de izquierda y sindicalistas era, según los entrevistados, en el marco de una

¹⁵⁰- Storani insistió con este tipo de evaluaciones incluso en las posteriores marchas de protesta durante la intervención de Mestre. Un mes después de la represión, señalaba desde Buenos Aires que “los convocantes a la nueva marcha de protesta son un pequeño grupo, un sector de los estatales mas radicalizados que en los días anteriores intentaron medidas de fuerza sin ningún éxito (...) No habrá negociación con los rebeldes” (*El Litoral*, 10-01-00).

participación integrada al resto de los manifestantes durante todo el proceso, y no clandestina.

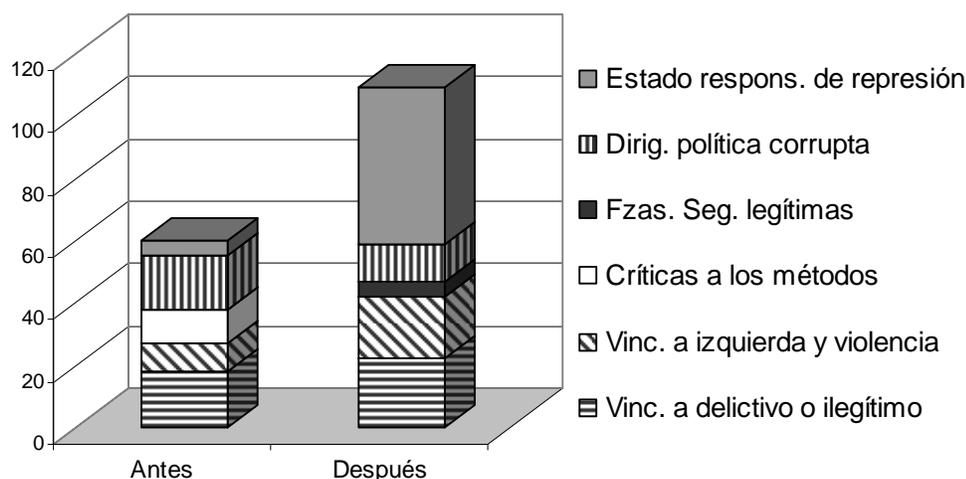
Violeta Groglio, quien en 1999 estaba desocupada y como estudiante de trabajo Social y miembro de la Juventud Universitaria Salesiana opina al respecto:

Cuando estábamos en el puente o en la plaza y escuchábamos lo que decía Storani o lo que decían algunos de los políticos, que nosotros éramos manejados, nos indignábamos. Porque realmente no nos escuchaban para nada, no nos miraban, porque el reclamo era totalmente legítimo y era el pueblo el que estaba haciendo el reclamo. (...) Esa era la única excusa que ellos tenían para deslegitimar el reclamo, que era totalmente justo. Tuvieron que cortar con esto [la represión] porque se dieron cuenta que el correntino no se iba.

Sin embargo, para el oficialismo provincial y nacional –y también para algunas fracciones de la sociedad correntina y chaqueña- el eje de la crisis pasaba por los manifestantes, su orientación política-ideológica, el tiempo transcurrido interrumpiendo una ruta o la magnitud de la desobediencia a las autoridades nacionales o locales. En tal sentido, para los agentes del Estado la construcción de observables de la realidad se basó en una formulación de causalidades no verificadas. La violencia desplegada y las muertes habían sido provocadas aparentemente por manifestantes armados, y la radicalidad de los hechos estuvo vinculada a militantes de izquierda quienes, a su vez, fueron individuos infiltrados en la población. Como ideología dominante, la llamada “teoría de los dos demonios” ha profundizado la vinculación entre izquierda, desestabilización, violencia e ilegalidad no solamente en la versión de los episodios del pasado, sino como corpus conceptual que se activa en períodos de auge del conflicto social.

Haciendo hincapié en el tipo de caracterizaciones –y teniendo en cuenta quienes fueron sus autores- nos interesa graficar el momento en que fueron realizadas. La periodización en este caso fue simplificada en base a una distinción dicotómica (antes-después) en torno al momento de mayor intensidad de la confrontación del puente de Corrientes, el día 17 de diciembre:

Gráfico 6: Corrientes, diciembre de 1999. Tipos de caracterizaciones, antes y después de los enfrentamientos del 17 de diciembre (N= 169).¹⁵¹



Fuente: elaboración propia en base a diarios *La Nación*, *Clarín*, *Página 12*, *El Norte*, *El Litoral*. (Noviembre '99 a febrero '00).

En valores absolutos, suman un total de 84 las declaraciones que critican los métodos utilizados en la protesta (el corte del puente), que vinculan este hecho con la violencia y lo ilegal, con la valoración negativa de la militancia de izquierda, o que otorgan legitimidad a la acción de las fuerzas de seguridad. Estas apreciaciones toman un valor particular según el momento de la emisión. Antes de los enfrentamientos más violentos, este tipo de declaraciones representan en conjunto un 63 %. Aunque no podríamos afirmar que ejercen un papel determinante en la posterior utilización de la violencia institucional, sí señala que previamente a la represión los actores involucrados ejercen un mayor peso en detrimento de la protesta y en el potencial establecimiento de un consenso sobre la necesidad de un desalojo por medio de la fuerza.

El resto de declaraciones son de crítica a los gobiernos por la ineficacia en resolver el problema financiero de la provincia, o califican de distintas maneras a los dirigentes políticos -en buena parte lo hacen los manifestantes y también los funcionarios que cruzan acusaciones entre sí-. Una parte mínima está constituida por las expresiones de repudio a la represión previa a los enfrentamientos más duros.

¹⁵¹ - Se utilizaron para establecer esta secuencia sólo aquellas declaraciones que poseen caracterizaciones de sujetos o de acciones (169 de un total de 193 declaraciones), es decir que no se incluyeron el 13 % de declaraciones que no registraban algún tipo de caracterización.

En el segundo período, posterior a los enfrentamientos), se produce una cantidad significativa (casi el 50 %) de declaraciones en solidaridad con los manifestantes reprimidos y de repudio a la represión estatal. Aunque en ese mismo momento aumentan proporcionalmente con respecto al período anterior:

1- las vinculaciones entre protesta y delincuencia, ilegalidad e ilegitimidad.

2- En mayor proporción lo hacen aquellos mensajes dirigidos a desacreditar a la izquierda y a calificar como violentas las acciones de protesta.

3- Surgen declaraciones que “defienden” a las fuerzas de seguridad en cuanto a su legitimidad para efectuar el desalojo.

Sumados, estos tres tipos de enunciados suman más del 40 % del total de mensajes emitidos luego de los enfrentamientos. Se consolidaba así una justificación del uso de la fuerza: la violencia habría ganado el conflicto, pero introducida por grupos vandálicos y por infiltrados de izquierda.

Respecto del total de 130 declaraciones que contienen algún tipo de reclamo, reivindicación o denuncia, sólo un 24 % se dirigen a reclamar el fin de la protesta por distintos medios, mientras que casi el 50 % son denuncias dirigidas al gobierno por los hechos represivos (ver cuadro N° 5). Ahora bien, si se aplica la periodización anterior – antes y después del momento crítico del conflicto-, se evidencia que en el segundo período las denuncias por represión son la abrumadora mayoría, con más del 73 % del total de declaraciones. Pero durante los días previos a la represión, más de la mitad de los mensajes se reparten entre los que están dirigidos a exigir el cese del corte de ruta, (15, 7 %) y en reclamos de utilizar la fuerza para la restitución del orden (el 37, 3 %).

6.4. Conclusiones.

El conflicto de Corrientes incluyó una nutrida cantidad de manifestaciones de protesta, desde la huelga de distintos gremios pasando por la “retención de servicios” (o la asistencia a los colegios sin dar clases), marchas, acampes, ollas populares hasta llegar al corte de caminos por tiempo indeterminado. Luego de la represión comenzó una serie de intervenciones federales que duraron hasta diciembre de 2001, cuando la provincia comenzó a ser gobernada por lo que años más tarde se conoció como “radicalismo K”, cercano al kirchnerismo.

Durante todo el conflicto, los agentes del Estado provincial y nacional que no gestionaron ninguna solución a una crisis de larga data, producto de años de políticas prebendarias, corrupción y utilización espuria de las arcas públicas. A tono con las políticas neoliberales que marcaron la década de 1990, el Gobierno nacional avaló una salida represiva cuando las vacilaciones y las dádivas se agotaron, lejos del diálogo con los sectores que reclamaban. La estrategia de desconocimiento del reclamo incluyó la táctica de la deslegitimación ideológica y política de los manifestantes. No sólo en su etapa previa a la represión, sino luego de ésta y a modo de justificación, haciendo especial hincapié en el carácter autogestivo de la protesta para remarcar la infiltración política.

Desde los manifestantes se gestó una heterogénea experiencia donde se cruzaron nuevas formas de posicionarse en el espacio público, que sin embargo no están desconectadas de una historia previa de luchas populares. En tal sentido podríamos decir que hubo un “rescate” de la “experiencia de las luchas históricas de la clase obrera en la Argentina que se retoma en las luchas recientes de este período” Klachko (2003, p.192). Desde otra perspectiva, Auyero (2002 y 2003) considera que “el caso del Correntinazo muestra cómo las luchas intra elite, en ocasiones, posibilitan la movilización”, y ejemplifica esta observación con el proceso de sucesiones políticas que se abre a partir de junio de 1999 en medio de la intensificación de la protesta (2003, p. 55 y ss.). Aquella posibilidad que señala el autor a partir de la lucha intra elites -que se puede traducir a una disputa entre fracciones de burguesía de la provincia-, es uno de los principios básicos que se da en la historia de los procesos de confrontación entre sectores antagónicos, como hemos ejemplificado en los primeros capítulos de esta tesis (ver nota 56, capítulo 3).

Pero como hemos visto, la protesta no se remontó a junio, ni a marzo, sino que desde fines de 1998 marchas y paros sindicales iniciaron un ciclo extenso y complejo de protesta. Luego de revisar los hechos, ¿podríamos afirmar que la pugna entre la dirigencia política -que efectivamente existió- abrió un espacio de *oportunidades políticas* para que los sectores subordinados de la sociedad correntina pudieran intensificar sus reclamos; o por el contrario, esa “renovación” política y esa disputa intra elites -que incluyó a la iglesia católica local- no hubiera sido posible sin una fortísima movilización popular previa?

Todos los entrevistados consideran que lo ocurrido en 1999 fue una “bisagra” en la historia, un “antes y un después” según sus recuerdos, y el fin de una etapa de alianza

política conservadora determinada por los Romero Feris. Los docentes, si bien son concientes de que no se estaba realizando un cambio estructural, tenían la certeza de que podía ser *el inicio* de algo, impresión plasmada en que al momento de hacer las entrevistas los cinco sindicatos docentes de la provincia estaban trabajando juntos, algo visto como un logro producto del conflicto.

Por otra parte también hay una sensación de defraudación e impotencia ante el paso de los años y un panorama político y social que no cambió de fondo a pesar del enorme esfuerzo durante la protesta, los muertos y heridos durante los enfrentamientos.

A diferencia de los hechos en Neuquén y de los que veremos posteriormente, aquí no fueron los “piqueteros” los sujetos constituidos en el transcurso del conflicto. Los diversos movimientos “autoconvocados” son los que al día de hoy hegemonizan la memoria de los mismos participantes y de la sociedad toda. Esto nos indica en primer lugar el peso de la gesta que por fuera de las instituciones tradicionales logró una participación democrática; que sin dudas no fue absolutamente “pura” o premeditada, sino que se forjó en las mismas disputas por encontrar una dirección al reclamo popular. Y en segundo lugar, la predominancia de las organizaciones de los sectores medios empobrecidos de la provincia que protagonizaron los reclamos durante seis meses -o un año, si tenemos en cuenta los primeros reclamos sindicales-.

Sin embargo, en los momentos de mayor intensidad de los enfrentamientos los protagonistas fueron las fracciones asalariadas mayormente subocupadas, desocupadas o marginales. Los dos muertos y muchas de las decenas de personas heridas de bala provenían de estos sectores de la sociedad correntina, tal como ocurrió en los enfrentamientos de Cutral C6 en 1997.

Convencidos de que el corte del puente fue una medida intransigente pero el único método posible para poder instalar sus reclamos salariales y políticos, todos los entrevistados de alguna u otra manera reivindican la gesta, recordándola como un episodio sin igual de participación y de reclamo popular ante un avasallamiento de años por parte de un gobierno sumido en la corrupción y en las prácticas autoritarias y clientelares. Incluso en algunos surge una “satisfacción” por haber logrado colectivamente la renuncia de Romero Feris, hecho que resume en la memoria todo un ciclo de participación política con un resultado concreto.

En tal sentido, en torno a la participación de agrupaciones autoconvocadas, partidos y sindicatos en una práctica asamblearia y de decisión directa, todos relativizan durante

aquellos momentos la vigencia de las normas institucionales. Es decir que se reconoce un problema legal en el corte de rutas o puentes, pero inmediatamente se lo subordina a la necesidad colectiva. La acción de tomar un territorio específico como modo de protesta implicó una desobediencia conciente, se asumió un grado alto de enfrentamiento con el marco legal. Sin embargo, como vimos en el caso neuquino, la relativización de la idea de lo “legal” no se sostiene en el tiempo y sólo es atribuido al momento del conflicto: es coyuntural a la magnitud del enfrentamiento.

La actividad militante durante los seis meses de ocupación de la plaza hizo que los manifestantes al momento de las entrevistas recuerden vagamente la manera en que fueron caracterizados por los Gobiernos nacional y provincial. De todos modos resultó sorprendente para ellos recordar los enunciados de los funcionarios y otros actores que intervinieron con una producción ideológica durante el conflicto. Descartan de plano los dichos acerca de la infiltración política, la militancia con intenciones de complot, es decir, la exacerbación del conflicto hasta el límite y la provocación de la represión. Desde sindicalistas hasta trabajadores sin militancia que participaron durante distintas etapas, surge una indignación al leer que la interpretación de los hechos reducía a los mismos a la infiltración de Quebracho u otros partidos de izquierda. Que si bien estuvieron presentes, por todos es sabido que se atuvieron a la decisión de la mayoría.

La clase de enunciados que hemos analizado, provenientes en gran parte del oficialismo provincial y nacional, no tendrían sentido si no tuvieran un anclaje en representaciones previamente formadas, referidas a la historia de las confrontaciones políticas desarrolladas en la década de 1960 y 1970. Los sectores triunfantes en ese largo choque de fuerzas sociales en la historia reciente se impusieron mediante acciones de violencia material directa -el exterminio y el terrorismo de Estado-, violencia económica -el sometimiento y la expropiación de fuerzas productivas-, y una no menor una violencia moral e ideológica, al construir un enemigo colectivo peligroso. Elementos de esta violencia fueron rescatados en los casos que aquí analizamos.

Capítulo 7

General Mosconi y Tartagal, 2000. La "violencia organizada" de los trabajadores desocupados.



Figura 20. Tapa del diario *El Tribuno* del 11-11-2000, al día siguiente de los enfrentamientos.

7.1. Petróleo y pobreza.

La provincia de Salta es una de las que conforman el NOA y su actividad productiva está basada, por una parte –y principalmente- en la explotación hidrocarburífera (petróleo y gas butano), en menor medida en la minería (explotación de oro, cobre, plomo, plata y estaño, entre otros metales). Por otra parte, en la producción agroindustrial mediante el cultivo de soja, tabaco, caña de azúcar, cítricos, ajíes, papas y algodón entre otros cultivos.

En años anteriores a la década de 1990, la estructura económica de la provincia se componía, tomando a Iñigo Carrera et al (1999), por una importante porción de la población asalariada inserta en un “capitalismo de economía privada con peso en el campo (...) con ciertos rasgos de enclaves de gran industria con pocas ramas industriales y mucho proletariado” (p. 54). El desarrollo de la industria del petróleo y elaboración de sus derivados en el departamento General San Martín, en el que se encuentran los principales yacimientos cercanos a la ciudad de Tartagal y General Mosconi, es una expresión de esto. El departamento se encuentra al nordeste de la provincia y limita al norte con Bolivia, y allí también se sufrió el literal desguace de YPF, plasmándose el paradigma ya conocido en otras “ciudades petroleras”: el origen de un asentamiento de pobladores condicionado por el impulso estatal en la explotación y producción de combustibles que, tras el avance del capital privado, derivó en el virtual desbarajuste de la economía regional y la consecuente profundización de la pobreza y la marginalidad de la población.

La historia del trabajo en derredor del petróleo es tan larga como determinante su influencia en la creación de las ciudades en esta región. En manos de la norteamericana Standard Oil, el petróleo comenzó a ser explotado en 1926, año en que se construyó su primer pozo productor. Dos años más tarde la empresa tenía siete pozos en funcionamiento y trece más en preparación, y sólo su personal no calificado estaba compuesto por trabajadores locales (Agosto, 2006, p. 86-88). En esa década se dio inicio al proceso de nacionalización de la producción de los combustibles fósiles interrumpido con el golpe militar de Justo y el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. En los años ‘30 se estableció una política nuevamente beneficiosa para los capitales extranjeros y para los sectores económicamente dominantes salteños, aliados a aquellos. Sin embargo YPF siguió expandiéndose como empresa estatal compitiendo con las privadas.

El gobierno peronista confirmó la presencia estatal en la explotación de las riquezas naturales del subsuelo, estableciendo con la Constitución de 1949 que las mismas son de exclusiva propiedad del Estado. Con la Constitución derogada en 1955 con un nuevo golpe de Estado, YPF sufrió una embestida de la competencia privada en la exploración y explotación -resistida periódicamente por las huelgas de los obreros petroleros agremiados en el SUPE (Sindicato Único de Petroleros del Estado), sindicato que surge en el gobierno de Perón-.

La anulación de los contratos petroleros con las empresas extranjeras en el gobierno de Illia sería un breve *impasse* en este proceso que se extendió hasta 1973. Bajo el gobierno de Cámpora hubo un nuevo intento de impulsar la empresa pública logrando el monopolio estatal sobre la producción y comercialización del petróleo, situación nuevamente interrumpida con el golpe de Estado de 1976.

La crisis en la que quedó la empresa intentó ser superada en el gobierno de Alfonsín a través de un nuevo fomento de la inversión extranjera. Fue en los primeros años del gobierno de Menem cuando finalmente la empresa estatal comenzó a ser vendida a grupos de capitales privados. El proceso de privatización fue acompañado por no pocos dirigentes políticos de todos los niveles, especialmente de los provenientes de las “provincias petroleras”. Ello se debió a la posibilidad de acrecentar las arcas provinciales con las regalías cobradas a las empresas. El gobierno de De la Rúa y Duhalde continuaron con esta política al extender la concesión de la explotación en manos privadas.

En el norte salteño no ha habido cambios significativos en esta tendencia, y menos aún en la redistribución de la riqueza del subsuelo. La explotación allí está en manos de la norteamericana Pluspetrol, de Tecpetrol -perteneciente al grupo Techint- y de Pan American Energy, empresa que produce combustibles en Argentina, Chile, Bolivia y Perú. También trabajan en la zona la refinería Refinor, dedicada al procesamiento del petróleo crudo, y un gran número de empresas más pequeñas (muchas de ellas pertenecientes a los anteriores grupos económicos) que proveen distintos servicios.

El escenario económico no está en lo más mínimo divorciado de la historia política de la provincia, en la cual el apellido Romero se mantiene vigente desde el restablecimiento de las instituciones democráticas. Roberto Romero fue gobernador desde 1983 a 1987, y su hijo Juan Carlos mantuvo tres gobiernos consecutivos, de 1995 a 2007. La sucesión de dichos mandatos necesitó de la modificación de la constitución

provincial, hecho consumado con un Poder Judicial y Legislativo que permanecieron bajo la tutela política del gobernador.

Juan Carlos Romero no ocultó su estrecha relación con los grandes grupos económicos que operan en Salta. Algunos ejemplos de esta trayectoria en donde primaron los intereses privados antes que la distribución social de los recursos naturales son la autorización para el desmonte de casi 500.000 hectáreas de bosques nativos para permitir el avance de los pooles sojeros; o priorizar la venta de gas a Chile mientras que la mayor parte de la población del norte salteño no tiene red de gas natural y debe comprar garrafas -y hasta cruzar la frontera boliviana para encontrar precios accesibles- o cocinar a leña. Panorama que se mantiene en muchas familias en la actualidad.

La familia Romero, además de conservar el poder político durante más de dos décadas y de estar estrechamente vinculada a los sectores económicamente dominantes, también interviene en los medios de comunicación. Roberto Eduardo Romero, hermano de Juan Carlos dirige el diario “El Tribuno de Salta” desde 1986, pocos años después que su padre dejara ese puesto. Históricamente cercano al peronismo (cercanía acentuada durante las últimas administraciones), este diario es el principal en la provincia. Junto con la emisora de radio AM 840, la familia mantiene una presencia determinante en la producción y divulgación de la información. Estas características hacen que esta provincia también sea considerada un “feudo”, en el que diversas actividades se mantienen monopolizadas por un grupo familiar.

7.2. La reorganización social en el marco de la desocupación.

Compuesto por seis municipios que en 2001 reunían una población de 139.204 habitantes, el departamento General San Martín representa alrededor del 13% del total de la población de la provincia. La población con Necesidades Básicas Insatisfechas alcanzaba en el año 2000 casi el 41 % del total, unas 56.000 personas (el departamento con el índice más bajo de NBI era la ciudad capital con el 21 % de su población, y el más alto se encontraba en el departamento de Rivadavia, con el 65 %). Hasta el año 2008 alrededor de 20.000 personas reciben planes de asistencia por parte del Estado.

La ciudad de Tartagal, a 360 Km al noreste de la capital provincial, es la cabecera del departamento y la segunda ciudad más importante de la provincia junto con Orán.

Contaba para el año 2000 con 60.500 habitantes: el 30 % de su PEA estaba desocupada, y de la población ocupada casi una tercera parte trabajaba en el sector público (INDEC). Otras actividades económicas de importancia eran –y lo siguen siendo en la actualidad- el comercio, las actividades productivas agroindustriales (cultivo de soja e industria maderera) y la producción y comercialización combustibles, que como mencionamos hoy está en manos de capitales privados.

Las contradicciones en la distribución del ingreso salen a la luz casi inmediatamente después de ingresar a la ciudad de Tartagal: en contraste con las decenas de camionetas importadas que circulan por las calles -muchas de ellas con el logo de diversas empresas petroleras- la pobreza se hace visible luego de unas 5 cuadras a la redonda del “centro” y de la plaza San Martín, a través de calles de tierra, casillas de madera y falta de servicios básicos como agua corriente y gas, situación que se profundiza mucho más en las “misiones” aborígenes .¹⁵²

A unos ocho Km. al sur, por la ruta nacional 34, columna vertebral de las comunicaciones viales de esa zona del NOA, se encuentra la ciudad de General Mosconi, emplazada en lo que se considera una de las cuencas gasíferas más importantes del país. Fundada en 1932, lleva su nombre en alusión a Enrique Mosconi, quien dirigió YPF desde 1922. Según el INDEC, a principios de esta década la ciudad contaba con poco más de 19.800 habitantes, con una tasa de desocupación similar a la de Tartagal, aunque aquí el sector público reunía a casi la mitad de la población ocupada.

Si bien están separadas por pocos kilómetros y su intercambio de habitantes es constante, las diferencias entre Mosconi (tal cual conocen y nombran al pueblo en la región) y Tartagal son notables. Contrariamente a las localidades neuquinas de Cutral C6 y Plaza Huincul que albergaron en conjunto al personal jerárquico y a los operarios de YPF, General Mosconi fue poblada bajo un esquema diferenciado y desigual. Desde la década de 1920 los primeros asentamientos fueron poblados por una mayoría quinteros o hacheros de monte, mano de obra autóctona no calificada relacionada al trabajo rural que provenían de provincias y países limítrofes que se fueron insertando lentamente en el trabajo de la extracción del petróleo.

¹⁵²- Así son llamadas las poblaciones que viven a pocos km. de la ciudad, donde habitan las etnias Chorote, Wichí, Kolla, Toba, Guaraní y otras, que recibieron la influencia religiosa de misioneros anglicanos en las primeras décadas del siglo XX.

En contraste con estos asentamientos originarios de Mosconi, fue en Campamento Vespucio, a pocos Km. al oeste de la ciudad -y con poco más de 1.500 habitantes en 2001- donde fueron ubicados los cuadros jerárquicos de YPF, tal como señalan algunos autores (Barbetta y Lapegna, 2001, p. 244; Svampa, 2002, pp 28-29; 2003, p. 54 y 2006, p. 153; Svampa y Pereyra, 2003, p. 132).¹⁵³

La ciudad de Mosconi cuenta con un centro comercial minúsculo comparado a Tartagal, calles de tierra en casi la totalidad de su extensión y viviendas en su mayoría precariamente construidas, muchas de ellas pertenecientes a las primeras generaciones de pobladores de la ciudad. Posee una única plaza circular que reúne a su alrededor a los principales edificios públicos.¹⁵⁴ Las poblaciones de ambas ciudades están entrelazadas en vida cotidiana y sus sectores asalariados y más empobrecidos han sido protagonistas de las luchas de la historia reciente en la región.

Aunque con enormes riquezas en a explotar en su subsuelo, en la superficie de estas ciudades la realidad es muy distinta. El deterioro de los barrios populares y el escaso poder adquisitivo de sus habitantes denotan una pobreza estructural que excede al período en que se aplicaron las políticas neoliberales.¹⁵⁵

Aunque sin dudas, la privatización de la explotación de los recursos naturales agravó las condiciones de vida generales: para 2001, la desocupación de ambas ciudades trepaba a un 30 % en promedio. Luego de ser “desvinculados” de la empresa, miles de trabajadores recibieron indemnizaciones con dinero o con bienes como grúas o camiones de la empresa como parte de pago. El dinero terminó diluyéndose en pequeñas inversiones como remiserías, kioscos y otros servicios urbanos que en su mayor parte no dieron resultado. Como señaló un ex trabajador neuquino de YPF entrevistado para esta

¹⁵³- En la actualidad Campamento Vespucio pertenece al ejido municipal de Mosconi muestra un mínimo movimiento de personas por sus calles y muchas de sus casas están en alquiler o en venta. Sus casas parquizadas, calles e instalaciones públicas son la antítesis de General Mosconi. Sin embargo hoy representa los vestigios de una época en la que la movilidad social y el nivel de vida de la población (el acceso a servicios de salud, educación, vivienda y actividades recreativas de calidad) dependían directamente de la empresa estatal. Como ejemplo del contraste entre dos épocas, el hospital de Vespucio, considerado uno de los mejores del norte de Salta por su completa planta de médicos, hoy permanece derruido y cerrado.

¹⁵⁴- Svampa (2003) resume en pocas palabras los factores principales de esta pequeña ciudad, cuando señala su “homogeneidad social (ex trabajadores de YPF de menor rango), un cierto estilo de vida en común (el bienestar *ypefeano*) y, no lo olvidemos nunca, una matriz política peronista” (p. 64).

¹⁵⁵- Un estudio publicado por el CONICET en base al libro “Geografía y bienestar. Situación local de la Argentina luego del Censo de 200” a cargo del geógrafo tandilense Guillermo Angel Velásquez y publicado por Eudeba, colocó a la ciudad de General Mosconi en los lugares más alarmantes en cuanto a la calidad de vida. El 80 % de la población no tenía en ese momento ninguna obra social, la mitad no completó sus estudios primarios y el 90 % de las casas carece de inodoros (*Página 12*, 22-10-08).

tesis, *echaron trabajadores, no echaron empresarios. Y los trabajadores no sabían más que trabajar* en relación de dependencia.

Un ex trabajador de YPF en Mosconi reflexiona de manera similar sobre este punto. Rodolfo “Chiqui” Peralta es uno de los dirigentes de la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados), hijo de “ypefeanos” y contaba con 46 años durante el conflicto de 2000. Cercano políticamente al Partido Intransigente en su pasado, trabajó en la empresa estatal en el departamento de seguridad patrimonial hasta su despido en 1992, para luego ser empleado de diversas pymes. Con respecto a los retiros voluntarios recuerda:

“echaron a la gente con un montón de guita en el bolsillo y sin saber qué hacer. Un tipo que nunca hizo inversiones, que vivió al día, no sabía manejarse con la plata. Algunos pensamos ‘hay que armar cooperativas’, y un montón de cosas que fracasaron. Hay dos o tres nada más que hoy todavía tienen actividad, son los que sobreviven, que dan servicios a las petroleras. Entonces para el ’94 o ’95, ya no teníamos un mango.”

Como ocurrió en Neuquén, los conflictos que analizaremos en esta provincia son inseparables de la historia de privatización de la industria del petróleo, la cual no sólo implicó la expulsión de miles de personas del mercado laboral, sino también la degradación del medio ambiente y de la salud de la población en general. Aumentos de enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas en la piel y en sistema respiratorio de los pobladores de la zona –además de la contaminación del agua y el aire, la deforestación y consecuente crecida de ríos y aludes- dan cuenta de un proceso productivo con un costo altísimo para los habitantes y el entorno.¹⁵⁶ También se registró un aumento en la cantidad de suicidios, divorcios o separaciones y problemas de alcoholismo.

Además de ser el corolario de una situación de constante crecimiento de la marginalidad y la pobreza, el proceso de luchas en el norte salteño no puede ser analizado sin la organización de los trabajadores desocupados. Tal es el caso de la UTD, organización que nace el 1° de abril de 1996 impulsada por una porción de la población asalariada de Mosconi, en su mayoría ex operarios y obreros de YPF. En tal sentido, lo que ocurrió en región dista notoriamente de otras “ciudades petroleras”, en donde las

¹⁵⁶- “Otros flagelos en Mosconi tras la llegada de Repsol YPF son problemas climáticos, muertes de familias por aludes de barro, pérdida de su flora y su fauna, aluviones de lluvia, enfermedades como la malaria, la muerte de sus niños por el hambre originadas en la deforestación.” (Observatorio de las empresas transnacionales, 2008, p. 14). Al respecto ver Bruno y Longo (2006): “Las condiciones de salud en General Mosconi”. En C. Korol (compiladora), *Mosconi: cortando las rutas del petróleo*. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

agrupaciones que levantaron diversos reclamos tuvieron una composición social mucho más heterogénea y una vida más efímera (como en el caso de Cutral Có- Plaza Huincul) o al menos, no tan firme en el tiempo como sí ha sucedido en el norte salteño.

La UTD demostró desde su fundación una capacidad notoria en conseguir y coordinar centenares de planes de trabajo y, consecuentemente, erigirse como una organización capaz de aglutinar demandas esenciales de la población local y no sólo a ex trabajadores “ypefeanos”.¹⁵⁷ La diversidad y complejidad de los emprendimientos puede ser sostenida gracias a la experiencia laboral y sindical de muchos de los integrantes de la organización. La promoción de dichos emprendimientos, su sostenimiento mediante la autogestión y el notable trabajo territorial en la población de Mosconi, ha hecho que se considere a dicha organización como un virtual *municipio paralelo* (Svampa, 2003, p. 33). Para 2008, la UTD administraba casi la misma cantidad de planes que la Municipalidad de Mosconi y más que la Secretaría de Producción y Empleo de la provincia de Salta (Dinerstein et al, 2008, p. 59).

Con respecto a su origen y participación en las protestas, la organización merece algunas observaciones, atendiendo a que ha sido objeto de una profusa cantidad de artículos e investigaciones relacionadas a las teorías de la acción colectiva y de los nuevos movimientos sociales. En primer lugar debemos mencionar, tal como lo hacen Giarraca (2007) y Wahren (2009), que la intervención política de la UTD está hermanada a su acción territorial, a tal punto que una dimensión no puede ser pensada sin la otra.¹⁵⁸ Dicha organización plasma “acciones de protesta, acciones políticas, acciones de disputa por territorios (...), por los recursos de las empresas” (Giarraca, 2007, p. 152), y esa disputa con perfil disruptivo habría permitido construir “nuevas identidades sociales, (...) nuevos mundos de vida, posibles ya por el sólo hecho de irrumpir en acto, presencia

¹⁵⁷- En la actualidad cuentan con un vivero con plantas autóctonas, granjas para la cría de aves y conejos, comedores comunitarios, un taller metalúrgico, de costura y de carpintería, un establecimiento para el reciclado de botellas plásticas, han gestionado planes para la construcción de viviendas y espacios recreativos, trabajos de albañilería, etc. Se recupera, tomando a Giarraca y Wahren (2005), “*la cultura del trabajo*, y a través de la actividad humana (productiva o de servicios para todos) se propone reconfigurar espacios físicos, sociales y culturales” (p. 290). Muchas de estas actividades se llevan a cabo en un amplio predio con galpones que estaban abandonados y que formaban parte de los talleres de YPF.

¹⁵⁸- Remarquemos que la acción territorial no se constituye como una *estrategia nueva* de los sectores subordinados recién en el modelo de acumulación y expropiación neoliberal, pues espacio y tiempo son dos dimensiones básicas de cualquier hecho social. Aunque con distintos caracteres y particularidades, mencionemos las nutridas protestas de inquilinos de principios de siglo en la Capital Federal que tuvieron acción conjunta con los sindicatos anarquistas de la época y que derivó en una huelga en la que decenas de miles de personas dejaron de pagar sus alquileres en cientos de conventillos en 1907. Más recientemente, el movimiento de villeros en la década de 1970 –ligado al peronismo revolucionario- y de tomas de tierra durante la década de 1970 y 1980, ligado a numerosas organizaciones de izquierda, cristianas y peronistas.

pública y experimentación social” (Wahren, 2009, p. 13). Así es que hasta hoy se mantienen diversos proyectos productivos en torno a una explotación racional y social de los recursos naturales de la zona, frente a la monopolización y dilapidación ejecutada por las empresas privatizadas con la connivencia del Estado.

Ciertamente la UTD se ha ido consolidando en base a la organización y el aprendizaje constante de sus integrantes frente una coyuntura económico-social más que adversa. Es necesario dar cuenta que esos aprendizajes, esas “propias prácticas de acción colectiva y la creatividad en sus formas organizativas” (Giarraca, 2007, p. 155) no pueden separarse de la historia personal/social de sus integrantes. En base a esa experiencia previa, los integrantes de la UTD lograron un lugar importante en la representación de trabajadores desocupados y también en relación de dependencia. Retomando a Svampa, “dado la fuerte cercanía del mundo laboral, el modelo bajo el cual se gestó la intervención de la UTD, es sin duda alguna el sindical” (2006, p. 154; Svampa y Pereyra, 2003, p. 136). Es el caso de trabajadores de la construcción, la energía eléctrica, saneamiento público o el petróleo (muchos de estos últimos reinsertados temporalmente a la actividad laboral con la intervención de la UTD), que canalizaron sus reclamos laborales mediante esta organización antes que con sus propios sindicatos. En tal sentido, el carácter disruptivo de esta organización podría ser evaluado a la luz de su relación con el gobierno local y con las multinacionales antes que en su autonomismo territorial, pues adquiere “rasgos que sin dejar de ser originales, se asemejan más a los de una organización sindical combativa que a un nuevo movimiento social” (Benclowicz, 2009, p. 2)

Uno de los reclamos históricos de la UTD a las privatizadas en el negocio del petróleo es la jornada laboral de 8 horas, con el objetivo de que accedan al trabajo una mayor cantidad de personas. Al momento de realizar la investigación y las entrevistas (septiembre de 2008), la mayoría de dichas empresas mantiene un convenio que data del proceso de privatizaciones, cuando encontraron “más conveniente” reformular las jornadas laborales con dos turnos de 12 horas. El lugar ocupado por la UTD en este sentido es ejemplificado por uno de los principales dirigentes de la organización, Rodolfo “chiqui” Peralta:

En junio de 2001, con los compañeros que estaban haciendo el hospital, nosotros estábamos yendo más allá de lo que decía el convenio. Pedíamos un jornal superior a lo que estaba establecido, porque son obras que muy poco se dan y consideramos que uno

no puede mirar impasible como pagan con un jornal que aunque sea legal es una miseria, y entonces se pelea eso también. Los que estaban afiliados a la UOCRA, viendo que la UTD hacía una defensa más importante, se vinieron porque a la UOCRA o a los otros gremios no les importaba si las empresas no les daban ropa de trabajo, si estaban asegurados, si estaban con los aportes... Entonces fue una lucha más compleja, hizo que esa gente se viniera a pedir apoyo a la UTD con el recelo de los sindicalistas y de los políticos. (...)

Nosotros venimos planteando desde el 2000 que se trabaje ocho horas, a los efectos que tengan más turnos principalmente las petroleras y empleen más mano de obra. El sindicato del petróleo es una corrupción total. Se trabaja doce horas y no se paga bien, y generalmente son dos o tres horas de transporte hasta el lugar de trabajo. El tema de seguridad de la gente, que no le dan los botines, cascos, todo lo que tiene que hacer el sindicato o el Estado con el Ministerio de trabajo, pero no lo hacen. También hacemos un seguimiento en la agricultura, cuando están desmontando, que no lo podemos parar pero se hacen presentaciones, protestas. Para que esa madera que voltean sea aprovechada por el desocupado, y ver que no la quemem porque los tipos están desesperados por sembrar ya, y te dan tiempos miserables para que la saques, y ese seguimiento hay que hacerlo.

Aunque algunos de los integrantes de la UTD declaran “aborrecer” la política tradicional, sería por lo menos incompleto suponer que las prácticas políticas que se conciben hoy en esta organización se generaron recién a partir de su fundación. Muchos de los integrantes que continúan en la UTD han tenido una vasta experiencia tanto en partidos políticos como en la acción sindical independiente, entre ellos militantes de izquierda provenientes del trotskismo, del PC y el PI (Benclowicz, 2007). Lo que sin dudas ha dotado de una vasta experiencia a muchos de sus integrantes. Esta es una de las razones, sumado al carácter contestatario de la UTD con respecto a las autoridades políticas y empresariales de la provincia, por las cuales al día de hoy permanece la desacreditación, criminalización y represión selectiva sobre sus dirigentes.

En segundo lugar, si bien es cierto que durante todo el período de conflictos protagonizado desde 1997 en adelante -pero en particular durante los años 2000 y 2001- la UTD fundó en la región una experiencia política basada en las prácticas deliberativas y de organización colectiva, la agrupación se mantuvo a lo largo de los años con una “dirección” de miembros relativamente estables. Los mismos que promueven los microemprendimientos productivos y definen acciones y alianzas políticas.¹⁵⁹ Con lo

¹⁵⁹- En 2007 uno de los miembros de la dirección de la UTD tomó la decisión –no acompañada por buena parte de los demás miembros- de formar parte de las elecciones como candidato a intendente de General Mosconi en la plataforma electoral del PJ. A mediados de marzo de 2009 se realizó un nuevo corte de ruta con un petitorio de quince puntos mayoritariamente abarcados por reclamos laborales y de participación en las riquezas explotadas en la zona. El mismo dirigente de la UTD que había sido candidato del PJ fue detenido y encarcelado en esta ocasión. Estos hechos nos hacen cuestionar nuevamente el pretendido carácter novedoso de las protestas recientes y de sus protagonistas, teniendo en cuenta que las estructuras

cual si bien es innegable la generación de prácticas autogestivas y de cierta horizontalidad en la toma de decisiones, también debemos mencionar que las mismas se mixturán con formas más “tradicionales” de hacer política.

Antes de pasar a los hechos que son parte de los objetivos de este y el próximo capítulo presentaremos una breve cronología de algunos de los episodios de protesta previos al año 2000, también fundamentales en el proceso de luchas sociales en la región. Consideramos que los hechos que aquí analizamos no son producto de actos espontáneos o aislados, sino de procesos contradictorios en los que en determinados momentos se concreta una acción confrontativa. En el caso del norte salteño este proceso se explicita de manera contundente en un largo corolario de hechos de protesta y enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

-1997: A sólo un mes de los acontecimientos en Cutral C6, durante los primeros días de mayo se iniciaron una serie de reclamos por el faltante de suministro eléctrico por parte de la empresa local de electricidad en Tartagal. El reclamo se inició con una huelga de hambre de un periodista que con el paso de los días terminó convocando a sectores medios de la ciudad –principalmente comerciantes y profesionales- aglutinados en la “Comisión de vecinos” y sectores asalariados ocupados y desocupados, trabajadores madereros y miembros del pueblo Wichí que sumaron otros reclamos, desde la baja de impuestos y créditos bancarios hasta planes de trabajo.

En una asamblea a la que asistieron cientos de personas se decidió cortar la ruta N° 34 que comunica al territorio boliviano y une las ciudades de Tartagal y General Mosconi, y el reclamo principal pasó a ser la exigencia de fuentes de trabajo. La protesta llegó a aglutinar a alrededor de 4.000 personas que interrumpieron el camino frente a las oficinas y tanques de la empresa Tecpetrol, que desde 1992 se dedica a la producción y comercialización de derivados del petróleo. Luego de una semana los manifestantes sumaban más de 15.000.

Ante el inminente desalojo por la fuerza, el 14 de mayo los manifestantes abandonaron la ruta con la promesa del gobernador Romero de otorgar Planes Trabajar como una solución provisoria a la grave crisis de la zona. Días más tarde, el 16 de mayo,

partidarias tradicionales se han vinculado a este movimiento y que sobre todo –y a pesar de eso- la represión y persecución se ejerció sobre un representante de trabajadores, casi en simultáneo a un nuevo intento de sabotaje económico realizado por los empresarios agrícolas de la cuenca sojera, que en marzo de 2009 –luego de la masiva movilización durante la primera mitad de 2008- mantuvieron durante una semana decenas de rutas cortadas. La marcada diferencia en la persecución y penalización de la protesta nos señala la presencia de formas de dominación que, una vez más, difícilmente podamos calificar de nuevas.

en menos de una hora las dos cámaras del Congreso Nacional aprobaron la intervención federal de ambos municipios.¹⁶⁰

Barbetta y Lapegna (2001) analizaron el masivo corte de ruta de mayo de 1997 y, desde el eje de la configuración de identidades, mencionan una polarización en la construcción de alianzas:

“los manifestantes se dividieron en dos piquetes principales; el ‘piquete norte’, ubicado en la entrada de Mosconi (...) y el ‘piquete sur’ que se dispuso 300 metros más al sur. Este último piquete estaba formado principalmente por desocupados y changarines, mientras que el primero contaba con la presencia de docentes y comerciantes” (Barbetta y Lapegna, 2001, p. 244).

Señalan que esta polarización se debería a “otras dimensiones de la personalidad que no fueron borradas” (p. 245) durante el conflicto. Si tenemos en cuenta que este episodio de protesta -como los que sobrevinieron en la provincia- estuvo protagonizado mayoritariamente por sectores asalariados ocupados y desocupados, no podríamos descartar que aquellas llamadas *otras dimensiones de personalidad* que los autores mencionan sean más bien caracteres relativos a una pertenencia de clase. La polarización que se registró en el corte de ruta de 1997 se debería, siguiendo este supuesto, a historias de vida, lazos culturales, localización territorial y experiencias de lucha comunes.

En el mes de julio de ese año, en el departamento de Orán en el norte salteño decenas de miembros del pueblo Kolla cortaron un camino vecinal para el paso de los camiones y equipos de desmonte que impulsaba el ingenio San Martín del Tabacal, adquirido por la norteamericana Seaboard Corporation, multinacional dedicada a la industria de alimentos y propietaria de “Tabacal Agroindustria” en Salta. La comunidad Kolla reclamaba títulos por una extensión de 100.000 Has. de tierra que habían sido ocupadas ilegítimamente por la empresa para la plantación de caña de azúcar.¹⁶¹ El

¹⁶⁰- En ese entonces se encontraba al mando de la Secretaría de Seguridad de la Gobernación Sergio Nazario, quien intervino en la ruta 34 representando al Estado provincial. Al ser grabado por canales de TV, fue visto en Buenos Aires por un ex detenido-desaparecido de la última dictadura militar, quien lo reconoció como uno de los torturadores del centro clandestino de detención “Olimpo”, en el barrio de Floresta. Identificado por su alias “Estevez”, se supo que Nazario integraba los grupos de tareas comandados por Julio Simón, más conocido por “turco Julián”, e incluso figura en el informe “Nunca Más” de la Conadep. Su pasado no impidió que el entonces gobernador Juan Carlos Romero (quien luego fue candidato a vicepresidente junto a Carlos Menem en 2003) lo ubicara en un cargo estratégico para la política interior de la provincia. Luego de ser reconocido, el ex represor se vio obligado a renunciar el mismo año 1997.

¹⁶¹- Un detallado relato de las protestas de los pueblos originarios del norte salteño durante la década de 1990 se encuentra en el trabajo del periodista Marco Díaz Muñoz: “Orden Represión y Muerte” (2005).

conflicto concluyó con el avance de efectivos de la policía provincial y una posterior represión con decenas de heridos y detenidos.

-1999: En el mes de junio reprimieron y detuvieron a pobladores de Pichanal, localidad del departamento de Orán, que denunciaban y se manifestaban por irregularidades en las elecciones municipales. A mediados de diciembre de ese año se cortó nuevamente la ruta N° 34 por empleados municipales despedidos en Tartagal – cerca del 40% de la planta- que exigían ser reintegrados, y por desocupados que reclamaban trabajo. La protesta fue coordinada en un principio por el Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) regional San Martín, sindicato que decidió manifestarse mediante el corte de ruta por ser la modalidad que más atención había convocado en la zona. Así fue que una vez en la ruta y casi simultáneamente a la represión realizada en Corrientes (17 de diciembre de 1999), se movilizaron tropas de la Policía Provincial y se reprimió a los manifestantes. Uno de los detenidos fue Fermín Hoyos, dirigente de ATE, lo que generó a su vez una escalada en el enfrentamiento. Hoyos es topógrafo de la municipalidad y Secretario General de ATE seccional del departamento San Martín desde 1995, y participó de la mayoría de los cortes de ruta desde 1997. Con respecto a esa protesta recuerda:

El día 13 de diciembre en una asamblea frente a la municipalidad de Tartagal los trabajadores mocionan el corte de ruta. De esa manera salimos, llegamos a Mosconi porque ahí es un punto estratégico porque están todos los tanques de combustible, así que de acá nos fuimos caminando, llegamos y cortamos. Nosotros no alcanzamos a montar el piquete cuando llega la policía con balas de goma. Ahí es cuando me detienen y me suben a un camión y me traen detenido. Eso ha sido transmitido en la televisión en el acto y salió todo el pueblo de Mosconi y de Tartagal a pie, era una peatonal de la cantidad de gente que salió. (...)

Ahí fue que lo agarran al comisario Amado Gaspar y a un cabo a cambio de la liberación mía. Le sacaron la ropa, la gente estaba enardecida, y lo dejaron arriba de un tanque al sol con 45 grados de temperatura. En la radio se pedía que me larguen, hasta que me dieron la libertad con la condición de que lo liberen a Gaspar en el corte.

El corte de ruta perduró durante 11 días, y luego del enfrentamiento y del episodio del dirigente gremial detenido, se obtuvieron planes de empleo a desocupados y la reincorporación de los empleados despedidos.

-2000: En enero la Gendarmería reprimió a empleados municipales de General Güemes a los que se les adeudaba nueve meses de salarios y a ex obreros del quebrado ingenio San Isidro en reclamo por el pago de indemnizaciones, quienes protestaban en un

nuevo corte de la ruta nacional 34. El 13 de marzo unas 300 personas cortaron esa misma ruta al norte, en las localidades de Salvador Mazza y Araguay, convocados por los mismos motivos que no habían tenido solución.

El día 2 de mayo comenzó un nuevo corte en la misma ruta, convirtiéndose quizás en la protesta más importante antes del estallido popular ocurrido en el mes de noviembre. En esta ocasión comenzaron a difundirse mensajes que vinculaban a los manifestantes con el vandalismo, con la posesión de armas de fuego y se mencionó la presencia de “francotiradores” en las filas de los manifestantes. El arco de la estigmatización incluyó la vinculación al narcotráfico, por tratarse de un sitio cercano a la frontera y a zonas de contrabando. No sería la última vez que se efectuaba tal relación: “es una zona de frontera caliente, donde hay recursos económicos provenientes de otro tipo de actividades que tienen interés en mantener este tipo de conflicto para tener impunidad” (Federico Storani, Ministro del Interior. *Clarín*, 13-05-2000).¹⁶² Este tipo de declaraciones tomaron un peso muy mayor durante los posteriores cortes de ruta.

Mientras el gobernador Romero se encontraba en Tel Aviv -en donde afirmaba que la provincia no se encontraba en crisis (diarios *Clarín* y *La Nación*)-, el 12 de mayo de 2000 se desató un nuevo enfrentamiento. Luego de 12 días de manifestaciones, unos 500 gendarmes junto a efectivos de la policía provincial comenzaron a desalojar por la fuerza la ruta 34 en donde se manifestaban centenares de personas que reclamaban planes trabajar y a decenas de familias de comunidades aborígenes que reclamaban por tierras. La represión desató el levantamiento de la población de Tartagal y Mosconi, lo que derivó en un comienzo de incendio de la Municipalidad, la Dirección de Rentas y el mercado central de esta última ciudad. En medio de los enfrentamientos murió Víctor Jofré, de 45 años, a raíz de un paro cardíaco, además de registrarse decenas de heridos de bala de goma y plomo. Por las requisas ilegales a domicilios de la zona, se detuvo a decenas de personas por efectivos que en muchos casos tenían pasamontañas para evitar

¹⁶²- En noviembre, cuando el conflicto se reinstaló en las rutas, fue reiterado el mensaje que apuntaba a una relación entre las protestas y la circulación de estupefacientes. El día 20 de ese mes, con la justificación de haber incautado 17 kg. de cocaína en la frontera con Bolivia durante el corte de la ruta 34, el secretario de Relaciones con las Provincias del gobierno radical Walter Ceballos, sospechaba que “los narcotraficantes estuviesen interesados en la alimentar y aprovechar la conmoción social de la zona.” (*La Nación*, 20-11-2000).

ser reconocidos. La mayoría de los detenidos luego denunció torturas que consistieron en golpes y simulacros de ejecuciones (Díaz Muñoz, 2005, p. 85).¹⁶³

7.2. La intensificación de la protesta y de la represión.

A lo largo del año 2000 el corte de ruta se presentó como la metodología más recurrente en las acciones colectivas de protesta, no sólo en Salta. Un informe del Ministerio del Interior publicado por el diario *La Nación* contabilizó a fines del mes de octubre unos 307 cortes durante 301 días transcurridos; es decir, más de un corte diario en promedio realizado en todo el país. Si tenemos en cuenta que en una protesta los piquetes solían ser más de uno, la cifra ascendía a 670 piquetes o barricadas durante todo ese período (*La Nación*, 30-10-2000). La provincia de Salta encabezaba la lista con 27 cortes sobre la ruta nacional 34, seguida por la provincia de Buenos Aires con 25 y la provincia de Chaco en tercer lugar con 20 cortes.¹⁶⁴

En forma simultánea se interrumpían distintas rutas nacionales y provinciales: la ruta 7 en Mendoza, 38 en Tucumán, 88 en Mar del Plata, 11 en Chaco,¹⁶⁵ la ruta 40 en Catamarca, y nuevamente la ruta 22 en Neuquén a la altura de Plottier; todas ellas, manifestaciones protagonizadas por trabajadores desocupados u ocupados en relaciones laborales precarias. Por su expansión geográfica y su persistencia expresaban, más que una coyuntura particular, un estado de conflicto estructural protagonizado por sectores asalariados en con diversos objetivos económicos y/o laborales.

A principios de noviembre, un corte de la ruta 3 en Isidro Casanova, partido de La Matanza, era la protesta que más atraía la atención de los medios de información de Buenos Aires y la preocupación del Poder Ejecutivo. A pocos Km. de la Capital Federal

¹⁶³- Días antes, el 9 de mayo, murieron Alejandro Gómez y Orlando Justiniano de 19 y 20 años respectivamente, quienes según versiones oficiales fueron víctimas de “un accidente automovilístico” en una ruta de Jujuy. Sin embargo un compañero de ambos jóvenes aseguró que al momento de juntar leña para llevar a los piquetes se les cruzó una camioneta “Traffic” blanca de la que bajaron policías uniformados que empezaron a tirar a quemarropa, para luego llevarse a los jóvenes. Poco después sus cuerpos fueron hallados al costado de la ruta con signos de haber sido torturados (falta de uñas y molares). Estas muertes siguen siendo impunes al día de hoy y no se han ubicado posibles responsables del hecho.

¹⁶⁴- En dicho informe también se señalaba que el Ministerio del Interior habían logrado “quitarle protagonismo a los activistas infiltrados” (*La Nación*, 30-10-2000).

¹⁶⁵- Esta protesta generó que el gobernador radical Angel Rozas inicie una denuncia penal contra los manifestantes, y hable de “la politiquería comunista por enancarse en la protesta de verdaderos desocupados”. (*Página 12*, 02-11-2000).

unos 4.000 desocupados agremiados en la CCC y la CTA reclamaban por fuentes legítimas de trabajo, becas de estudio para hijos de desocupados y alimentos. A pocos días de iniciado y mientras los funcionarios políticos tanto del Ejecutivo nacional y provincial se responsabilizaban mutuamente por la falta de solución a la protesta, el corte de ruta fue rápidamente penalizado cuando el juzgado federal N° 1 de Morón abrió un procesamiento contra los manifestantes.¹⁶⁶

La táctica utilizada por el Gobierno nacional en La Matanza fue por un lado negociar con una capacidad mínima de respuesta a las demandas, pues los funcionarios suponían –lo reconocían abiertamente en distintos medios de comunicación- que si accedían a las mismas, las protestas se profundizaría aún más en todo el país.¹⁶⁷

Por otra parte, la retórica gubernamental recurría una vez más a la figura de la ilegitimidad de las protestas. El ministro de interior Federico Storani afirmaba que “lo que existe es una multiplicidad de conflictos, algunos con un trasfondo real y en otros casos también tienen un aprovechamiento político”. (*Página 12*, 8-11-2000). La ministra de trabajo Patricia Bullrich señalaba en tal sentido que “estamos lejos de un estallido social espontáneo, lo que hay son manifestaciones sociales, algunas espontáneas y muchas organizadas”. (*Página 12*, 9-11-2000). Como en otros hechos de protesta, la organización política es significado de envilecimiento de un movimiento.

Mientras se desarrollaba este conflicto en el oeste del conurbano bonaerense, el 30 de octubre comenzó a plasmarse otra protesta en la provincia de Salta que tendría un desenlace antagónico a la protesta de La Matanza. Ese día unos 300 trabajadores desocupados cortaron la ruta nacional 34 en Cuña Muerta, un paraje 7 Km. al norte de la ciudad de Tartagal. La noticia de un recorte de 200 Planes Trabajar –la continuación de medidas paliativas y clientelares ahora bajo el gobierno central de la Alianza y del

¹⁶⁶- La condena a este corte también abarcó esferas no jurídicas. El editorial del diario *La Nación* –cuyas noticias referían a los manifestantes como *revoltosos* en todo momento- calificó al corte de la ruta 3 “como otras formas ilegales de ocupación de los lugares públicos, vulneran el principio de que el Estado debe concentrar en sus manos, sin excepción, el poder de coerción sobre las personas. (...) Atentan el derecho de terceros y es, también quebrantar la paz social y la tranquilidad pública” (1-11-2000). Además de promover la judicialización de la protesta, la interpretación del diario equipara a la misma con la función estatal de concentrar un monopolio –en este caso *ilegítimo e ilegal*- de la violencia.

¹⁶⁷- La preocupación proveniente del Gobierno nacional daba cuenta de uno de los elementos que menciona Tarrow (1997) en su estudio sobre la acción colectiva. Tres características principales pueden hallarse en los diversos tipos de acciones colectivas de protesta: desafío, incertidumbre y solidaridad (pp. 179-206). Al desafío que implica una protesta por medios no institucionales, la incertidumbre radica en no conocer la dirección y la temporalidad que pueden llegar a tener dichos actos de protesta. De este modo, la potencialidad del acto se establece no sólo en hacer público un reclamo sino en los costos políticos desconocidos que pueden desencadenarse para la dirigencia, en este caso, la multiplicación de cortes de ruta durante el gobierno radical y un panorama de imposibilidad de control del conflicto social.

Partido Justicialista en la provincia- originó la movilización de los “beneficiarios” de los planes, y el levantamiento de barricadas sobre la ruta. En pocos días la cantidad de manifestantes se duplicó, cuando trabajadores despedidos de la empresa de transporte de pasajeros Atahualpa y de una empresa contratista de EDESA (Empresa de Electricidad Salta) se sumaron a la protesta con el objetivo de lograr el pago de indemnizaciones negadas. La empresa Atahualpa había sido prácticamente vaciada por cuestiones económicas y era propiedad del cuñado del gobernador Romero, quien adeudaba hasta nueve meses de sueldos.

Desde el principio de este corte, luego de que unos 300 policías de la provincia fueron destinados a la zona inmediatamente, se produjeron mensajes relativos a la delincuencia e involucrando a los manifestantes en robos, ataques a transeúntes, amedrentamientos y acciones con armas de fuego.

En la ciudad de Metán, al sureste de la capital provincial, se desarrollaba otra protesta simultáneamente a la de la ruta 34. La orden de la justicia federal destinó tropas de la Gendarmería que disolvieron el corte mediante la represión con balas de goma y gases lacrimógenos a unos 150 manifestantes, más la detención a 10 mujeres y 8 hombres.

En el conurbano bonaerense, el conflicto encontraba un cauce cuando el 4 de noviembre se levantaban los cortes sobre la Ruta 3, luego de un acuerdo logrado entre los gobiernos nacional, los funcionarios bonaerenses y una delegación de trabajadores desocupados que consistía en el otorgamiento de unos 16.000 puestos de trabajo, dos millones de pesos en medicamentos, materiales y herramientas, tres millones de kg. de comida anual, 10.000 pares de zapatillas y el compromiso para la construcción de hospitales y escuelas. La medida fue considerada como una victoria por parte de los manifestantes, a partir los funcionarios del ejecutivo nacional recomendaron tener “prudencia” a los dirigentes de la protesta. (*La Nación*, 5-11-2000). Pese a lo reticentes de las propuestas de solución, se otorgó esta batería de propuestas ante un conflicto que prometía extenderse en el tiempo en un punto neurálgico del Gran Buenos Aires, y que además estaba recibiendo el apoyo de las centrales sindicales (CGT “disidente” y CTA, que amenazaban con un paro si no había una pronta solución).

Mientras que en el norte salteño, los desocupados de Gral. Mosconi y los despedidos de las empresas mencionadas no obtenían ningún tipo de solución. El reclamo era acompañado desde el día 6 de noviembre por 18 comunidades indígenas que

reclamaban la paralización del desmonte en sus tierras con el fin de ser cultivables, además de pedir unos 2.000 nuevos Planes Trabajar y la entrega efectiva de tierras que estaban a nombre de las comunidades, pero que no eran entregadas por el Estado provincial. Como había sucedido en los conflictos de Neuquén, comenzaban los problemas de desabastecimiento de mercancías que afectaban a todas las localidades del departamento General San Martín y sus alrededores.

El 6 de noviembre el corte de ruta en el paraje Cuña Muerta cumplía una semana de existencia, convirtiéndose en ese momento en el más prolongado en todo el país. Ya funcionaban comisiones de desocupados provenientes de una media docena de pueblos cercanos que se sumaron al corte.

Hacia el 8 de noviembre la los manifestantes profundizaron las medidas de protesta al restringir no sólo el paso vehicular de la ruta 34 sino también el paso peatonal. El día 9 una parte de los manifestantes de Tartagal se trasladó a General Mosconi junto a trabajadores desocupados de esa ciudad, instalándose en la entrada de la empresa Tecpetrol, quedando en Tartagal un grupo de manifestantes pertenecientes a las comunidades aborígenes. Ese día pasaron a disponibilidad cuatro gendarmes que fueron protagonistas de un hecho que da cuenta del “tratamiento” estatal al conflicto: estaban acusados de haber violado a una piquetera en el paraje Cuña Muerta (*Clarín*, 10-11-00).

Mientras tanto, diversas protestas surgían o se mantenían en distintos puntos del país: cortes de ruta al sur de Resistencia, Chaco, y en diversas localidades del Gran Buenos Aires; la toma de la Catedral de Goya, Corrientes; todas ellas acciones realizadas en su mayoría por trabajadores desocupados en reclamo de planes de trabajo o bolsones de comida. Esta situación agudizaba la tensión política con el Gobierno nacional y evidenciaba la falta de políticas públicas inmediatas para resolver las crisis regionales. Los cortes de ruta retornaron a La Matanza, y el Jefe de Gabinete Crhystian Colombo afirmaba que había sido un error otorgar los planes de trabajo paliativo, porque esto había multiplicado los reclamos por más planes (*El Tribuno*, 10-11-2000).

Ese mismo 9 de noviembre el juez federal de Salta Abel Cornejo se trasladó a Mosconi para intentar dar término a la medida de fuerza. El intento fue infructuoso ya que los manifestantes consideraban que los representantes del Gobierno provincial o nacional nunca habían atendido sus reclamos hasta el momento.

El día 10 de noviembre por la madrugada se ejecutó la respuesta estatal a la protesta: por orden del juez, a las 4.30 hs. la policía provincial comenzó el desalojo de la

ruta 34 a la altura de General Mosconi. El avance de las tropas fue inesperado para quienes estaban en la ruta, ya que horas antes algunos funcionarios del gobierno provincial habían asegurado a los manifestantes que no habría una intervención de las fuerzas de seguridad.

Los enfrentamientos comenzaron como resultado del intento de desalojo forzado, entre unos 500 manifestantes y un grupo no definido de policías y gendarmes, en el que se produjeron avances y retrocesos de parte de los dos bandos enfrentados. Luego de tres horas de comenzado el desalojo, a las 7.30 hs. una bala calibre 22 impactó en el pómulo izquierdo de Aníbal Verón, un operario mecánico de 35 años y padre de cinco hijos que había participado de los cortes de ruta desde el primer día, a fines del mes de octubre. Era empleado de la empresa de transportes Atahualpa desde hacía 17 años, y fue despedido sin el pago indemnizatorio correspondiente. Todos los testigos aseguraron ver un brazo con un arma de puño que sobresalía desde atrás del primer cordón de tropas en avance. El disparo se efectuó a menos de 3 metros de distancia de Verón, quien murió mientras era trasladado a un hospital.¹⁶⁸

Luis Gil, cuñado de Verón y desocupado, también estuvo presente en el corte de ruta desde sus comienzos:

Estuvimos 17 días cortando a la altura de Cuña Muerta y tomamos la decisión de ir a Mosconi con la UTD de allá, gente con trabajo y sin trabajo. En el '97, 2000 y 2002 el desocupado era apoyado por el ocupado. De las empresas venían y colaboraban con algo a los que estábamos tirados en la ruta. En ningún momento nosotros bajábamos mercadería a la fuerza, la gente nos traía de su propia voluntad, los supermercados nos ayudaban, gente de acá del pueblo, las carnicerías nos ayudaban. Nunca se cobró un peaje, absolutamente nunca, sin embargo el gobierno decía que éramos delincuentes. (...) En Mosconi llegó el Intendente, el jefe de la Policía, la senadora Sonia Escudero, el sacerdote, para decirnos que no iba a pasar nada, que no nos iban a tocar, que ya estaba canalizado nuestro tema, que tengamos un poquito de paciencia. Como a las 10 de la noche mi cuñado se acuesta sobre la ruta y me dice “me siento mal, me parece que tenemos que irnos” y quería ver a su hijo. (...) A eso de las 12 de la noche tuvimos una charla, dándonos manija entre nosotros porque éramos poquitos los que habíamos quedado esa noche. (...)

¹⁶⁸ - Como sucedería en 2002 con el asesinato de Maximiliano Kosteky y Darío Santillán, el papel de la prensa local fue desdibujar el hecho represivo, posicionándose junto al poder político. En el caso de Aníbal Verón, el diario *El Tribuno* informó que el operario había sido “víctima de la violencia”. Así, las muertes fueron adjudicadas en primera instancia a la “crisis” y la “violencia” como entelequias en abstracto y sin personificaciones sociales responsables.



Figura 21. Señalamiento del lugar donde fue asesinado Aníbal Veron al costado de la ruta 34. Al fondo los tanques de combustible de la empresa Refinor.

A eso de las siete de la mañana uno de los muchachos del lado sur avisa que tengamos cuidado porque veía unos bultos negros. Nos levantamos, despertamos a todos y empezaron a caer gases lacrimógenos, empezó el tiroteo y nos terminan corriendo de la ruta. Ni siquiera nos vinieron a avisar que estaban por desalojar, ni siquiera nos vinieron a intimar que teníamos orden de desalojo, esa tarde se comprometieron que no nos iban a tocar. (...)

Tomamos la decisión de volver a tomar la ruta como a las siete y media, pero ellos no retrocedían y nosotros tampoco, y ahí es cuando empiezan los disparos y le dan a Verón. Uno de los policías, se abrió la fila delantera y la segunda fila disparó y yo ví que mi cuñado se agachó y me dijo “me han pegado” y lo quise agarrar y me quedé agachado ahí con él. Y ahí fue cuando salió todo el pueblo y rompieron todo.¹⁶⁹

Efectivamente, la primera incursión de la policía y la Gendarmería hizo que el frente de manifestantes sobre la ruta se dispersara rápidamente. Pero la gran violencia desplegada sobre unas pocas decenas de personas y el asesinato de Verón –hechos

¹⁶⁹- Relatos de algunos entrevistados aseguran que la familia de Verón desistió de cualquier acción legal ya que recibió amenazas permanentes y amedrentamientos -como ir de noche y golpearle la puerta de la casa- de parte de la policía provincial. Mabel Carrizo, periodista del canal local de Tartagal VideoTar, otro hecho: “mi compañero fue a filmar la autopsia, y se ve cuando lo lavan al cadáver. El médico que actualmente es médico legal de la Policía, lavaron a un cadáver para hacer una autopsia... Ni en mis años de enfermera, nunca vi eso, porque el cadáver tiene que quedar así, no se tiene que te tocar absolutamente nada. Y a este muchacho lo lavaron previo a hacerle la autopsia, entonces borrarono todo.” A fines de noviembre de 2000 el Juez que intervino en la causa de la muerte de Verón se declaró incompetente y la investigación recayó en el Juez Cornejo, mismo que había dado la orden de reprimir a los manifestantes. Sin ordenar siquiera la requisa de armas utilizadas por los efectivos policiales, instaló en el expediente la hipótesis de que a Verón lo había matado un piquetero, provocando que la investigación quede prácticamente en la nada (Díaz Muñoz, 2004, pp. 98-103).

transmitidos a la población por las radios locales casi en tiempo real- desataron la furia de la población de Mosconi. En pocos minutos miles de personas (los entrevistados hablan de cerca de 10.000) se volcaron al centro de la ciudad y a la ruta, atacando la municipalidad y la comisaría 37.¹⁷⁰



Figura 22. En septiembre de 2008, los espacios baldíos donde se encontraban la Municipalidad de Mosconi y una de las Comisarías.

Cerca de las 10.30 de la mañana miles de personas marcharon 7 kilómetros hacia Tartagal, de donde era oriundo Verón, lo que provocó que la policía, sobrepasada en la cantidad de personas dispuestas al enfrentamiento, se resguarde en el Regimiento de Infantería de Monte N° 28, ubicado entre las dos ciudades.¹⁷¹

Sobre la ruta 34, un kilómetro antes del ingreso a Tartagal, se encuentra el hotel cinco estrellas “Pórtico Norte”, empresa que para los pobladores estaba administrada por

¹⁷⁰- Producto del ataque y del incendio, los edificios debieron ser demolidos. Al momento de viajar a General Mosconi (septiembre de 2008) todavía permanecían sendos terrenos baldíos donde antes funcionaban los edificios. La Municipalidad funcionaba en el edificio del Consejo Deliberante, mientras que la comisaría lo hacía en una casa de familia alquilada.

¹⁷¹- El regimiento lleva el nombre “Teniente Coronel Juana Azurduy”, como homenaje a la líder guerrillera que batalló en el norte argentino y en Bolivia durante la guerra por la independencia de España. De dicho Regimiento en 1975 partieron tropas al Operativo Independencia para combatir al ERP en el monte tucumano.

testaferros del gobernador Romero. Una parte de la columna de manifestantes que se dirigía a Tartagal intentó el ingreso al hotel, destruyendo los vidrios y parte de las instalaciones de la sección del comedor. Oscar Mongelli trabajaba como administrador de la cocina del hotel el día en que los manifestantes fueron reprimidos y volvieron a la ciudad de Tartagal. Expone una versión contraria a la difundida por los medios locales, que mencionaron el episodio como el producto de vándalos y delincuentes que ingresaron al lugar con premeditación:

“Nosotros trabajábamos en el hotel, eran las 11 de la mañana y empiezan a venir de Mosconi y empiezan a tirar piedras. Entran 300 personas más o menos de las cuales había 10, 15 o 20 con la cara tapada. En el hotel trabajaban 45 personas, en ese momento al mediodía debe haber habido 30 personas de Tartagal y de Mosconi. Qué casualidad que los que estaban con la cara destapada nosotros no conocíamos a ninguno, no reconocimos a ninguno, no era gente ni de Mosconi ni de Tartagal. El dueño del hotel también es nacido acá, somos todos de acá. Los de la cara tapada deben haber sido de acá, pero eran una ínfima minoría. Quemaron un auto, rompieron vidrios, robaron vajilla y cubiertos, rompieron todo lo que pudieron romper, iniciaron un foco de incendio... Nosotros lo que sospechamos siempre -y yo hice una denuncia y nunca me llamaron a certificarla en los tribunales- es que los punteros políticos de Romero han traído 10 o 20 colectivos a plantar el saqueo para dividir a la gente”.

Aunque los entrevistados cuentan el episodio como algo espontáneo y no premeditado, el hecho no deja de tener rasgos que no están del todo aclarados. De todos modos, aunque asumamos que hubo personas externas a la población que fueron trasladadas sólo para incentivar saqueos y destrozos, lo cierto es que la magnitud de la movilización y la indignación provocada por la represión a un reclamo considerado justo llevó a los pobladores a una cadena de ataques (ver mapa en el anexo).

Ya en la ciudad miles de personas salieron a las calles y se unieron a las columnas provenientes de Mosconi, tomaron el centro de la ciudad y confluyeron en ataques a edificios institucionales y privados relacionados directamente con la protesta. En la entrada de la ciudad de Tartagal se dirigieron a la empresa de transportes Atahualpa, donde había trabajado Aníbal Verón, y destruyeron las oficinas e incendiaron dos ómnibus y una camioneta estacionados en el playón de la empresa. Una vez en el centro de la ciudad incendiaron la Unidad de Empleo Municipal, la comisaría 36 y la Municipalidad, la cual debió ser reconstruida debido a los daños severos en su estructura.

Igual suerte corrió la sede del Banco Nación y una agencia del diario *El Tribuno* cercana a la Municipalidad, propiedad de la familia del gobernador Romero.¹⁷²



Figura 23. La municipalidad de Tartagal, septiembre de 2008. El edificio luego de ser incendiado fue parcialmente demolido y reconstruido. La pueblada provocó una arquitectura “antidisturbios”: antiguas ventanas hoy tabicadas, entradas con persianas metálicas “ciegas” y vidrios blindados y polarizados.

Otro grupo incendió oficinas de la empresa de electricidad EDESA, (empresa eléctrica que debía el pago de indemnizaciones a sus trabajadores despedidos). También fueron atacados el depósito del Poder Judicial provincial –donde los manifestantes habrían sustraído alrededor de 300 armas, según el diario salteño -, las oficinas de Acción Social de la comuna, de donde se sustrajeron colchones, camas y bolsones de mercadería; y la Unidad Carcelaria N° 5, lo que provocó la fuga de varias decenas de presos. Los ataques también incluyeron una serie de saqueos en algunos comercios de alimentos y electrodomésticos del centro de Tartagal. Muchos de los entrevistados –los vinculados a agrupaciones políticas y sociales- reconocen que los saqueos a comercios fueron una

¹⁷²- Es menester mencionar que este medio de información gráfica, a diferencia de los diarios locales en la provincia de Corrientes, Chaco o Neuquén, tuvo una cobertura muy pobre sobre el desarrollo de la protesta. Las crónicas prácticamente ignoraron el episodio desde el principio, para luego –en las noticias que no llevan la firma de quienes las redactan- colocar reiteradamente a los manifestantes en la figura del delincuente.

consecuencia no querida de los ataques que sí tuvieron un corte más político. Cerca del mediodía, se produjo un nuevo enfrentamiento cuando efectivos policiales y gendarmes avanzaron sobre las calles de Tartagal intentando disipar los ataques a los edificios municipales y los saqueos.

Además del asesinato de Verón, el saldo de los enfrentamientos fue alrededor de 50 personas heridas y más de 70 detenidos. La represión se llevó a cabo el mismo día que en el conurbano bonaerense (partidos de Almirante Brown, La Matanza y La Plata) se levantaban los últimos cortes de ruta luego de la intervención del Gobierno nacional y la asistencia con planes de trabajo y alimentos

El asesinato de Verón tuvo repercusiones en todo el país. Al día siguiente de la represión la Unión Tranviarios Automotor llamó a un paro nacional del transporte público. La medida tuvo un 85% de acatamiento en todo el país e incluyó el paro de ómnibus y subtes, afectando el transporte de pasajeros en la Capital Federal. Medio millar de personas pertenecientes a partidos de izquierda, la CTA y organismos de DD. HH. marcharon a la Casa de la Provincia de Salta, donde repudiaron la represión. La central sindical liderada por De Gennaro también llamó a un paro nacional para el lunes siguiente. Medida similar tomó el sindicato de empleados municipales de Jujuy, liderados por Carlos “perro” Santillán. El Centro de Empresarios de Tartagal también reaccionó, pero condenando los saqueos y llamando a cerrar los comercios luego de la represión.

Las fuerzas de seguridad fueron repudiadas inmediatamente por la población local. Esto fue graficado por el relato de una de las agentes de policía de la provincia, que se mostró indignada por dicho repudio y por la falta de “orden” que en otro momento sí hubo: “tenemos que andar de civil porque la gente nos escupe, los colectivos y los taxis no nos levantan si estamos con el uniforme. Durante el tiempo de facto había más respeto, más seguridad. No me convence la democracia porque el viernes, cuando la gente golpeaba a nuestros compañeros, los jefes nos decían que nos retiremos. Somos títeres, no nos dejan hacer nada” (Palabras de Marcelina Ríos, agente de la policía provincial. *Página 12*, 12-11-2000).

Al día siguiente de que las fuerzas de seguridad nacional y provincial “pusieran orden” en las ciudades, el gobernador Romero presidió un comité de crisis para mantener el control de la región y también elevar pedidos urgentes al PEN para inyectar planes de trabajo y proyectos de inversión en la zona. La represión no provocó el inmediato retiro de manifestantes. Los cortes de la ruta siguieron al norte de la ciudad de Tartagal (Arroyo

Cuña Muerta) con representantes de 23 comunidades aborígenes ¹⁷³ y al sur, con manifestantes de la ciudad de Mosconi apostados en la entrada de la empresa Tecpetrol.

El Gobierno provincial se negaba a iniciar el diálogo con los manifestantes, por considerarlos delincuentes y por la sospecha de estar armados tras los incidentes en las comisarías. Los cortes de ruta no habían sido disueltos por completo y se especulaba una nueva intervención de las fuerzas de Seguridad. El sábado 11 de noviembre los manifestantes elevaron al gobierno provincial un petitorio con 21 puntos en el cual se pedía la creación de más fuentes de trabajo, la realización de obras públicas por unos 200 millones de dólares, el otorgamiento de subsidios –unos 10.000 planes trabajar-. Se exigía además la renuncia del gobernador Romero, la secretaria de la Gobernación (quien personalmente había asegurado a los manifestantes que no habría represión apenas horas antes), el secretario de seguridad provincial y los interventores de Tartagal y Mosconi. Dicho petitorio fue calificado como “inadmisibile” por el gobierno provincial.

El 12 de noviembre el gobernador, funcionarios del Gobierno provincial y enviados del Ejecutivo nacional –como el secretario de relaciones con las provincias, Walter Ceballos- se instalaron en el Regimiento de Infantería de Monte, donde comenzaron las conversaciones con representantes piqueteros. Asistieron también los delegados de las organizaciones de trabajadores desocupados de Salvador Mazza, Mosconi, Tartagal y Aguaray (departamento al Norte de Tartagal), participaron del encuentro varios delegados de UTA y de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas.

Además de la disolución de los cortes de ruta mediante la represión, el gobernador intentó desarticular el lazo entre la población y las organizaciones de base de las ciudades: decidió que fueran las comunas las que administraran los planes de empleo temporario y no las organizaciones de trabajadores desocupados, como venía ocurriendo hasta ese momento.

Con la disipación de la protesta y de los enfrentamientos, la población de Tartagal y Mosconi fue doblegada ya no por las armas sino por la aplicación de la ley. Producto de la orden del juez de instrucción Nelson Aramayo y de la gobernación de la provincia, ambas ciudades permanecieron virtualmente sitiadas y saturadas de gendarmes en las

¹⁷³ - Algunas notas periodísticas redactadas por esos días no escatimaron rasgos de racismo. Una de ellas fue titulada “Cuando los indios se hicieron piqueteros”, referida a la protesta de los pueblos originarios de la zona que encontraron en el corte de ruta una manera de instalar sus problemáticas. Firmado por el periodista Jesús Rodríguez (*Clarín*, 12-11-2000, p. 24), el titular que pretende neutralidad en verdad sesga tanto la identidad cultural como el reclamo político.

calles, unos 700 que hacían la función de policía.¹⁷⁴ El juez ordenó el allanamiento a más de 400 hogares y la detención de 25 personas implicadas en la sustracción de armas y otros elementos de las comisarías y del poder judicial provincial durante los enfrentamientos. Según afirmó el magistrado, en esos allanamientos también se pudo recuperar mucha de la mercadería sustraída durante los saqueos (*El Tribuno*, 13-11-2000).



Figura 24. Las “tres cruces”, lugar así conocido por los pobladores, en donde se recuerda el asesinato de Aníbal Verón (noviembre de 2000), Orlando Justiniano y Alejandro Gómez (hallados muertos en la ruta en junio, meses antes). Están colocadas casi en frente de la entrada de la empresa Refinol, punto de encuentro de prácticamente todos los cortes de ruta.

Luego de catorce días de cortes de ruta, el reclamo se levantó el lunes 13 de noviembre tras una negociación en la que los Gobiernos nacional y provincial se comprometieron a gestionar una serie de puntos. La discusión estuvo por fracasar a último momento, hasta que finalmente los principales dirigentes piqueteros aceptaron una propuesta con muchísimos puntos que quedaron fuera de la discusión.

¹⁷⁴- El responsable del operativo de seguridad en estas ciudades fue el segundo jefe del Escuadrón 52 de Gendarmería con asiento en Tartagal, Comandante Principal Héctor Daniel De la Colina. También fue quién comandó la represión en 2001 en Mosconi en la cual fueron muertos dos manifestantes, y acusado con posterioridad de torturas, detenciones arbitrarias, vejámenes y acción psicológica sobre las poblaciones de la zona. (<http://correpi.lahaine.org/>). También existen testimonios de manifestantes que recuerdan a De la Colina agredir a camilleros y enfermeros del hospital de Mosconi, impidiendo que atiendan a los heridos de la represión (citado en Claudia Korol (compiladora), *Mosconi: cortando las rutas del petróleo*).

El presidente de La Rúa, el ministro del Interior Federico Storani y el gobernador de salta Juan Carlos Romero se reunieron en Buenos Aires, donde acordaron no tomar represalias contra los manifestantes y otorgarle una pensión graciable de \$ 500 a la familia de Aníbal Verón, y de \$ 150 a la familia de Orlando Justiniano y Alejandro Gómez, los jóvenes que fueron torturados y asesinados durante una protesta meses antes (víctimas de un accidente de tránsito según la versión oficial). El acuerdo también incluía la puesta en marcha de distintas inversiones en la zona en obras de infraestructura y subsidios para Planes Trabajar. Todo aquello con la condición de que los manifestantes no volvieran a las rutas, y bajo amenaza de suspender todos los ítems si la protesta se reanudaba.

Ese mismo lunes renunció el interventor de la municipalidad de Tartagal, Eduardo Raúl Sàngari, quien asumió en mayo de 2000 y había sido intendente de la ciudad de Salta en 1984-1985. Fue reemplazado por un nuevo interventor, el senador justicialista por la provincia Pedro Sández. También presentó su renuncia el jefe de la Policía Provincial Víctor Gómez García. El vicegobernador anunció sendas renunciaciones avalando el papel desempeñado por los funcionarios y absolviéndolos de toda posible responsabilidad en la represión desatada días antes.

Las movilizaciones y protestas se propagaban en todo el país, en un período de alza del conflicto que según el relevamiento empírico realizado por Iñigo Carrera y equipo, se inicia en diciembre de 1999 y se extiende hasta diciembre de 2001 (ver capítulo tres). Uno de los puntos culminantes de este nuevo ciclo de protestas fue el paro nacional de 36 horas iniciado el jueves 23 de noviembre de 2000, pocos días después de los enfrentamientos en el norte salteño. En Neuquén, La Rioja, Tucumán, Mendoza, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Corrientes, Resistencia, Santa Rosa, Jujuy y en el conurbano bonaerense se desarrollaron decenas de marchas y cortes de ruta por parte de desocupados, empleados estatales y estudiantes. El paro fue de un acatamiento altísimo en todo el país, y tocó a todos los gremios aglutinados en la CTA y CGT. Se registraron marchas a supermercados en reclamo por bolsas de comida en decenas de ciudades –en algunas con enfrentamientos-. Las manifestaciones que incluyeron el corte de rutas y avenidas, bregaban por fuentes laborales y en contra del ajuste económico del gobierno de la Alianza, en franca crisis y descomposición partidaria.¹⁷⁵

¹⁷⁵- El paro fue convocado por la CTA y la entonces existente CGT “disidente” conducida por Hugo Moyano y consistió en un paro con marchas y cortes de ruta en las principales ciudades del país, llevados a

En el marco de este paro nacional, en la ruta 34 a la altura de General Mosconi se recordó a Aníbal Verón con una marcha de centenares de personas -entre ellos miembros de organismos de Derechos Humanos y partidos políticos- que partió de la capital provincial hacia las localidades donde ocurrieron los hechos. El acto conmemorativo se realizó luego de que un juez de instrucción de la provincia dispusiera a cientos de efectivos de la Gendarmería en estado de patrullaje permanente para asegurar “la seguridad de las calles”. La otra tarea de los efectivos fue continuar, a pedido de la justicia, con cientos de allanamientos en las viviendas de la ciudad de Tartagal, que se extendieron hasta mediados del mes de diciembre.

De este modo, lejos de comenzar una investigación entre los efectivos de la policía por la muerte de Verón, durante la primera semana de diciembre se siguieron persiguiendo a personas que participaron de los cortes de ruta, incluso bajo la acusación de haber cometido el asesinato. Las hipótesis incluían explicaciones inverosímiles para los propios protagonistas de los hechos: “una versión que maneja el Gobierno salteño es que un piquetero sacó un arma y apuntó hacia los policías. Verón se adelantó para evitar que disparara para que no se agrave la situación, pero la bala, disparada desde tres metros, dio en su cara” (*Clarín*, 7-12-2000).

7.3. El vandalismo, protagonista de una “protesta violenta”.

El relevamiento de las noticias con que se construyeron los enunciados fue realizado en este caso en cuatro diarios: los tres de tirada nacional utilizados en los demás casos y uno provincial, *El Tribuno*, por ser el de mayor llegada y difusión en la provincia. Aunque se trató de un hecho relevante en el espectro nacional en cuanto a su difusión mediática, las declaraciones registradas en la prensa escrita no son demasiadas en relación a la importancia que tuvo todo el proceso de la protesta. Se trata de 53 casos relevados en donde el papel del diario local estuvo casi ausente en la difusión de información, salvo luego de los enfrentamientos. Esto, suponemos, está relacionado a las razones políticas que se manifiestan en la “dosificación” de información en el diario propiedad de la familia Romero. En cuanto a los diarios nacionales tampoco ha habido

cabo principalmente por trabajadores estatales, docentes, de la salud y trabajadores desocupados. La huelga general tuvo un 95 % de adhesión según los registros de las centrales sindicales.

una gran cobertura de los hechos, incluso se deja de tratar el tema muy poco tiempo después de los enfrentamientos. Lo que nos estaría indicando cierto grado de aislamiento de los manifestantes, manifiesto en una escasa capacidad de difusión de sus actos y en una estrategia del poder político local y nacional basada en desconocer la protesta, presumiblemente para evitar posibles aliados y profundizar ese aislamiento.

Como en los anteriores casos, distinguimos aquellas declaraciones que contienen caracterizaciones o definiciones (44 de un total de 53, el 80 %) de aquellas que tienen demandas, acusaciones o exigencias (23, el 43 %). Tomaremos estos valores como totales para analizar los contenidos en cada caso:

Cuadro 7: Provincia de Salta. Tartagal y General Mosconi, noviembre de 2000.

Caracterizaciones y definiciones; exigencias y denuncias en las declaraciones publicadas.

CARACTERIZACIONES o DEFINICIONES	N	%
Hechos ilegales, vandálicos, violentos	21	47,7
Vinc. e/ violencia y activismo de izquierda	4	9,1
Fzas. de seguridad legítimas	3	6,8
Críticas a dirigencia política	5	11,4
Solidaridad con manifestantes	11	25,0
Total	44	100,0

DENUNCIAS o DEMANDAS	N	%
Llamados al uso de la fuerza	7	30,4
Exigencias a terminar la protesta	8	34,8
Exigencias de solución al gobierno	2	8,7
Condenas y denuncias a la represión	6	26,10
Total	23	100,0

Fuente: Elaboración propia. Diarios *La Nación*, *Clarín*, *Página 12* y *El Tribuno*. Meses de noviembre y diciembre de 2000.

Como en los anteriores casos, la cantidad de caracterizaciones encontradas en los enunciados es superior a las denuncias o demandas. Sin embargo, al comparar ambas dimensiones, los valores relativos son similares en cuanto a la calidad de sus contenidos. Veamos: sólo la cuarta parte de las declaraciones con calificaciones se declaran solidarios con la protesta y reivindican como justos o legítimos a los manifestantes, mientras que poco más del 10 % apuntan críticas al gobierno provincial o nacional, provenientes de dirigentes partidarios o sindicales. Casi la mitad de los enunciados contienen mensajes que vinculan la protesta a lo vandálico, la violencia delictiva y lo ilegal:

“Obstruir el tránsito en una ruta, cobrar peajes extorsivos a los vehículos, amenazar a los transeúntes y provocar el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles a los habitantes de una región no sólo es un delito, sino que se trata de

acciones violentas cuyos destinatarios no tienen en absoluto la culpa por el desempleo, la pobreza y la marginalidad. **No es la gente común, no son los pobres ni los desempleados quienes alientan ni ejecutan una violencia de ribetes criminales.**" Roberto Eduardo Romero, Director *El Tribuno*, 11-11-00.

"No pienso hablar con piqueteros que cometen delitos. En Salta actuó la violencia organizada que busca la disolución y el caos en el país y en Salta. Y cuando vuelva el Estado de Derecho, vamos a hablar con los vecinos. No sabía cuáles eran las demandas porque anoche habían cortado la ruta y la policía tenía que liberarla." Juan Carlos Romero, Gobernador de Salta, PJ, diario *La Nación*, 11-11-00.

"La Violencia desatada por un grupo causó la muerte de un trabajador, perjudicó gratuitamente a nuestros comprovincianos, dejó pérdidas millonarias y dañó el aparato productivo de la región. (...) El cambio, el progreso que anhelamos todos **no llegará por la vía de la violencia**, en Salta ni en ninguna parte." Juan Carlos Romero, *El Tribuno*, 14-11-00

"El ingreso de **la horda de manifestantes** a un pueblo sin gendarmes ni policías marca un límite claro. Hubo **gente armada y encapuchada** en una ciudad sin autoridad. Pedro Guillén, abogado. *El tribuno*, 15-11-00.

En cuanto a las exigencias o denuncias, 6 de 23 declaraciones condenaron la represión o la denunciaron, mientras que sólo 3 exigían a los gobiernos soluciones económicas para contener la protesta. Fueron 15 enunciados sobre 23 los que exigieron al gobierno la intervención de la fuerza pública o que se dirigían a los manifestantes para que éstos dejen de cortar los caminos. Algunas de las mismas contenían explícitos pedidos de castigo luego de la represión y de la respuesta de los manifestantes, que derivó en este caso en el ataque a algunos comercios:

"Estoy convencido de que esto va a volver a pasar. Si la Gendarmería o el Ejército hubieran salido a la calle, aunque sea desarmados, esto no hubiera pasado, o a lo sumo hubieran quemado los edificios públicos, pero no hubieran saqueado." Martín Sosa, empleado entrevistado por el diario *El Tribuno*, 13-11-00.

"Si no castigan los desmanes producidos en Tartagal, con los saqueos producidos en los distintos comercios y la destrucción de edificios públicos, seguirá dando lugar a que se produzcan los mismos hechos." Víctor Adriano, Dueño de Hotel. Diario *El Tribuno*, 15-11-00.

A diferencia de los otros casos vistos y que veremos más adelante, en esta ocasión las acusaciones sobre infiltración o militancia política son relativamente menores. Veremos que esto se intensificará en el segundo episodio de protesta ocurrido en 2001, de manera similar a lo ocurrido en Neuquén –dos conflictos en años seguidos en el que el segundo es mayormente reprimido y estigmatizado ideológicamente- Es necesario aclarar que en este caso la palabra "izquierda" no surge en ninguna de las declaraciones que colocan a la protesta como infiltrada por activistas políticos. De todos modos aquí rescatamos esta idea ya que se hace mención a las ideologías de izquierda mediante otras denominaciones –como "guerra revolucionaria"- o eufemismos tales como "autores

intelectuales violentos” o “activistas violentos”. A la criminalización de los manifestantes se sumaron las declaraciones en defensa de las fuerzas de seguridad, y que legitimaban su intervención:

“El profesionalismo de los efectivos de la Policía de Salta quedó demostrado en los últimos episodios en el Norte, a pesar de que algunos medios nacionales dijeron que reprimió y agredió. Pero fue al revés: demostró temple, recibió agresiones, le secuestraron y golpearon hombres y **conservó esa actitud profesional que debe caracterizar a una fuerza encargada de garantizar la seguridad de los ciudadanos.**” Walter Wayar, Vicegobernador de Salta, PJ. Diario *El tribuno*, 14-11-00.

Como en los anteriores cortes de ruta que derivaron en fuertes enfrentamientos, el gobernador Romero -en ese momento en Mar del Plata en el coloquio IDEA junto a empresarios de todo el país- y los funcionarios públicos del Gobierno provincial negaron que el proyectil que causó la muerte de Aníbal Verón haya sido disparado por las fuerzas de seguridad, casi con las mismas palabras utilizadas en los conflictos precedentes. Fue el caso de Daniel Nallar, secretario de Seguridad de la Provincia, al afirmar que “Verón fue herido con un arma calibre 22, que no es utilizado por la fuerza” (*El Tribuno*, 11-11-2000). El argumento del funcionario continuó en los días siguientes arguyendo que el disparo sobre el rostro de la víctima se había efectuado a pocos metros, distancia supuestamente nunca mantenida entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Otra de las versiones dichas por el funcionario daban a entender, como ocurrió en conflictos anteriores y como ocurriría en 2002 en Avellaneda, que los manifestantes se habían trezado en una rencilla interna: “la muerte de Verón habría sido consecuencia de una riña entre los piqueteros” (*La Nación y Página 12*, 11-11-2000). Versión acompañada por funcionarios del Gobierno nacional como la ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide, quien declaró que “además de lo social, hubo en Salta enfrentamientos entre sectores políticos” (*Clarín*, 11-11-2000).

Sin embargo, una declaración del comisario de la policía provincial Miguel Osvaldo Nievas, jefe del operativo de desalojo, contradice de plano estas declaraciones. Da certezas sobre el nivel de negligencia en la fuerza y de cómo fue tratada aquella manifestación: “yo impartí la orden de que nadie llevara armas de fuego, pero no se los revisó porque eran un total de 360 o 460 efectivos aproximadamente. Yo les ordené a todos, inclusive a los oficiales subalternos que no lleven armas de fuego. Ahora bien, si ellos llevaron armas de fuego yo lo desconozco” (Díaz Muñoz, 2005, p. 94).

En total, las calificaciones en desmedro de la manifestación y de sus integrantes que incluyen imágenes sobre vandalismo, activismo político violento y la defensa de la acción represiva, se encuentran en casi el 65 % de las declaraciones. Veamos con más precisión de donde provienen este tipo de declaraciones:

Cuadro 8: Provincia de Salta. Tartagal y General Mosconi, noviembre de 2000. Sujetos emisores de caracterizaciones durante el conflicto.

		Quienes			Total
		Otros sujetos (no manifestantes)	Funcionarios Estado	Dirigentes partidos y sindicatos	
Caracterizaciones y definiciones	Hechos ilegales, vandálicos, violentos	9 56,3%	12 60,0%	0 ,0%	21 47,7%
	Vinc. e/ violencia y activismo de izquierda	3 18,8%	1 5,0%	0 ,0%	4 9,1%
	Críticas a dirigencia política	3 18,8%	2 10,0%	0 ,0%	5 11,4%
	Solidaridad con manifestantes	1 6,3%	2 10,0%	8 100,0%	11 25,0%
	Fzas. de seguridad legítimas	0 ,0%	3 15,0%	0 ,0%	3 6,8%
Total		16 100,0%	20 100,0%	8 100,0%	44 100,0%

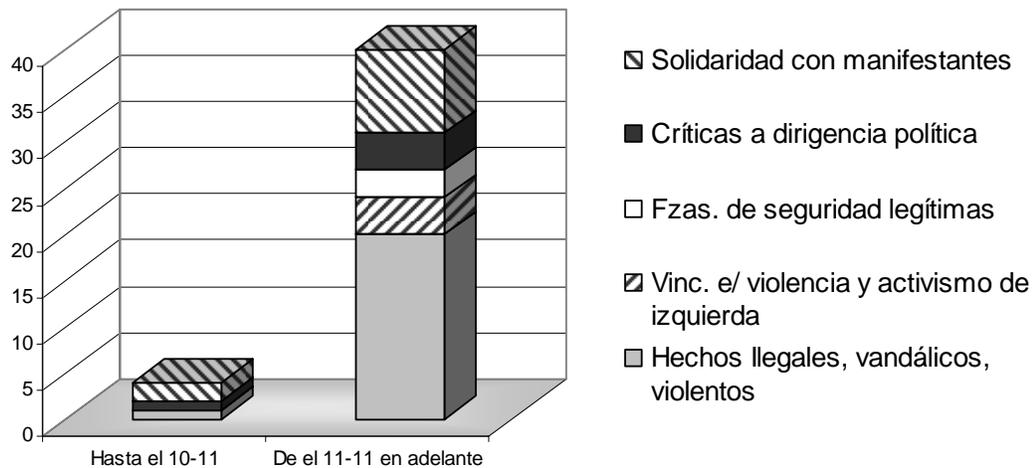
Fuente: Elaboración propia. Diarios *La Nación*, *Clarín*, *Página 12* y *El Tribuno*. Meses de noviembre y diciembre de 2000.

Este es el primer episodio tratado hasta aquí en el que no se registran declaraciones de parte de los manifestantes en ninguno de los diarios consultados. Efectivamente, ninguno de los desocupados agremiados en la UTD u otros manifestantes accedieron a los medios gráficos, lo que nos indica por un lado una deliberada ausencia en el registro de este tipo de actores en el diario local, y una falta de mayor cantidad y calidad de lazos o contactos por parte de los manifestantes con respecto a medios nacionales, pese a que al menos la UTD tenía al momento de la protesta una presencia de varios años en la región protagonizando una actividad social y política de importancia, como vimos al comienzo de este capítulo.

Podemos apreciar que las personas no manifestantes que intervinieron en el conflicto al menos discursivamente caracterizaron a los manifestantes vinculándolos a la delincuencia, lo ilegal e ilegítimo casi en igual proporción que los funcionarios de Estado; incluso más que ellos en el caso de vinculaciones con la infiltración política. Se trata fundamentalmente de los directores del diario norteño y del diario La Nación, comerciantes y empresarios de la zona y vecinos entrevistados por los diarios.

Veamos cómo se localizan las caracterizaciones relevadas según el momento del enfrentamiento, la represión y el desalojo de la ruta 34:

Gráfico 7: Provincia de Salta. Tartagal y General Mosconi, noviembre de 2000.
Caracterizaciones antes y después de la represión (10 de noviembre).



Fuente: Elaboración propia. Diarios *La Nación*, *Clarín*, *Página 12* y *El Tribuno*. Meses de noviembre y diciembre de 2000.

Existe una notable ausencia de intervenciones antes de la represión. Como dijimos anteriormente, los manifestantes no tuvieron acceso a los medios gráficos, pero además de esto, el diario *El Tribuno* ignora el conflicto “como si nada estuviera pasando” durante el desarrollo de la protesta, en la que la ruta estuvo cortada varios días antes de la orden de desalojo. En este período tampoco se registran de manera relevante declaraciones en los diarios nacionales. En los primeros 10 días del corte de ruta fueron sólo 6 las declaraciones al respecto: mientras que la protesta había comenzado el 30 de octubre, la primera declaración surge el día 3 de noviembre. En contraste a, por ejemplo, un corte de ruta en el conurbano bonaerense, lo que ocurría en el norte salteño nos habla de lo

marginal que era esta protesta para la “escena pública” nacional, al menos desde el aspecto mediático y desde los funcionarios políticos.¹⁷⁶

Antes de la represión los pocos enunciados se repartieron entre manifestaciones de solidaridad provenientes de dirigentes sindicales nacionales (CGT), críticas a la dirigencia política provincial y calificaciones que vinculan a los manifestantes con la violencia. Este tipo de enunciados aumenta notablemente luego de la represión, cuando se incorporan las vinculaciones entre protesta y militancia política y el apoyo o legitimación de la acción represiva. Las valoraciones negativas, producidas por los agentes del Estado, representan en conjunto casi el 70 % en esta etapa del conflicto. Evidentemente, la respuesta de los manifestantes a la represión -materializada en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y en los ataques a la municipalidad y otros edificios- fue lo que concentró esta clase de producción discursiva.

Efectivamente, luego de esos hechos los mensajes fueron dirigidos a descalificar a los manifestantes relacionándolos al delito común y la delincuencia. Uno de los primeros que introdujo el factor político ideológico fue el interventor de Tartagal, también rescatando episodios del pasado y aplicándolos a la protesta de la región:

“La ciudad fue testigo de **episodios que parecían un ensayo de guerra revolucionaria, donde activistas adoctrinados y entrenados explotaron un estado de insatisfacción social** que viene de larga data. Ya padecemos, **en un tiempo no muy lejano, de quedar a merced de bandas armadas** de uno u otro signo.” Eduardo Raúl Sângari, interventor de Tartagal. *El Tribuno*, 14-11-2000.

Mario Andreani es periodista independiente de Tartagal y responsable del canal local VideoTar, participó de las últimas protestas y reflexiona sobre las declaraciones que masivamente intentaron instalar la figura delincencial en los manifestantes:

Parece ser que para algunos sectores fueron más importantes los saqueos que las muertes. Yo nunca escuché a un miembro del centro de empresarios de Tartagal que reclame por el esclarecimiento de las muertes en la ruta, nunca escuché a la clase empresaria tartagalense manifestarse por esa situación. Al contrario, había solicitadas donde pedían que vengan a masacrar a la gente que cortaba las rutas, eso querían, que vengan y despejen a como dé lugar. (...)

Lo que se buscaba era que la comunidad dejara de expresarse por miedo, que pierda la calle, que la protesta desaparezca. El departamento de San Martín era una sociedad movilizadora. La introducción del miedo hace que no se proteste, no se salga a la calle, no

¹⁷⁶- Recordemos que simultáneamente se desarrollaba otro corte en la Ruta 3 en la localidad de Isidro Casanova, protesta que requirió de la atención del Gobierno Nacional y provincia, y que prontamente fue “resuelto” con paliativos y programas de asistencia.

se reclame. El escenario que se buscaba era que nos sintiéramos culpables, pasar de ser víctimas de la situación a culpables. (...)

Lo que dice Sàngari es justificar la represión. Yo no ví entrenar a nadie aca, yo soy periodista, participo de los movimientos sociales, no entrenan a nadie. No hay ningún campo de entrenamiento, absolutamente nada. Que me encuentren uno, quiero ver uno y me convencen... Todo esto es juego de palabras. Yo no estoy negando que hubo violencia, pero no en esa magnitud.

Las declaraciones sobre este episodio dejan de aparecer en los medios cerca de un mes después de los enfrentamientos. Incluso a esa altura siguieron publicándose versiones de infiltrados externos en el conflicto. Fue el caso del párroco de Tartagal Daniel Erro quien en una homilía ante cientos de personas en la vía pública resaltó con palabras apocalípticas que “muchos chicos fueron inducidos por violentos autores intelectuales que no deberían ser cubiertos por un manto de olvido, porque ese día levantaron llamas de odio y destrucción”

7.4. Conclusiones.

El grado de impunidad en torno a la represión de esta protesta del norte salteño tuvo niveles similares a la protesta neuquina y al asesinato de Teresa Rodríguez, pero se acrecienta si tenemos en cuenta su historia previa. Más de tres años de organización, luchas y represión -que incluyeron diversas herramientas o modalidades de protesta en reclamo de mejores condiciones de existencia- finalmente se cobró una vida en el desenlace represivo de noviembre de 2000 -que se suma a los dos manifestantes asesinados y hallados al costado de la ruta pocos meses antes-.

Son dos las observaciones que podemos realizar sobre este episodio, atendiendo al modelo de exposición que venimos sosteniendo en la investigación. En cuanto a los enfrentamientos materiales, el conflicto del año 2000 plasmó sobre la ruta hacia Bolivia muchos años de una expropiación que fue más allá de lo meramente económico, y que abarcó aspectos culturales, sociales y hasta de la vida cotidiana. Tras la “racionalización” privatizadora, los Estados provincial y nacional dejaron su lugar de supuesto retiro de la intervención en la economía e hicieron explícita su presencia mediante el uso de la violencia institucional. La persecución, represión y judicialización de los trabajadores ocupados y desocupados, muchos de ellos miembros de una organización que desde su

fundación reconstituyó y reactivó una gestión de política laboral, nos habla de un esquema de enfrentamiento que poco tiene de nuevo y que en realidad se inserta en la historia reciente -y también lejana- de la pugna entre los sectores dominantes aliados al capital y quienes han sido subordinados e intentaron dejar de serlo.

En cuanto a la producción discursiva observamos en un primer momento una deliberada falta de atención al reclamo, plasmado en la ausencia de cualquier tipo nominación de los problemas sociales de la región –entre ellos de trabajo- y en la ausencia de expresiones sobre la protesta misma. Ese vacío discursivo que representó en igual magnitud la falta de una política pública fundada en el reconocimiento de los actores postergados, se revierte cuando mayoritariamente diversos agentes del Estado ocupan un espacio público luego de la acción represiva. La respuesta violenta generó un correlato discursivo destinado a legitimar esas acciones, con un sistemático intento de convertir un problema social en un asunto policial.

Una vez más, en esta clase de mensajes también se tejieron alianzas que escaparon a los funcionarios de los poderes ejecutivos de la provincia y la nación aunque en ellos se mantuvo la hegemonía de producción de la estigmatización de los manifestantes, luego de que fueron reprimidos.

Los términos relativos a lo delincencial fueron totalmente refutados por los propios protagonistas entrevistados, que a su vez relativizan, como en los casos anteriores, el fundamento de la ley y de las instituciones cuando el sustento material para la subsistencia llega a su límite. Si bien no podríamos afirmar que este tipo de calificativos destinados a tergiversar la acción de los manifestantes en prácticas delictivas es el que prima en la región –más bien lo contrario-, se confirma una tendencia en la producción y publicación de denominaciones estigmatizantes y discriminatorias que se profundizaría en el episodio de 2001, como veremos en seguida.

Capítulo 8

General Mosconi y Tartagal, 2001. Piqueteros y francotiradores: el camino de la guerrilla.

Lunes

20 de junio de 2001
Edición: 300.000
Móvil: 300.000
El tiempo

Rep. Instalar y Sin
Lanzamos al aire
El tiempo de la vida

Av. | Grados | Hora
MADRID | 23 | 17:30
MOSCÚ | 23 | 17:30

El Tribuno

81

Murieron dos civiles y 14 resultaron heridos. 23 efectivos de Gendarmería fueron alcanzados por disparos y tres están graves

Trágica emboscada de francotiradores a gendarmes en Mosconi

◆ Carlos Santillán, de 27 años, obrero metalúrgico que no participa en los piquetes, resultó alcanzado por una bala cuando llamaba por el lugar de los incidentes, al igual que Oscar Barros, de 17. "Los gendarmes fueron emboscados luego de despejar la ruta", denunció Enrique Medlov, secretario de Seguridad de la Nación. Gendarmería había desalojado a los piqueteros, alrededor de 80, "ante la presunción de que pretendían ingresar a la planta de Refinar, donde están almacenados 5 millones de litros de combustible", se informó oficialmente. Los incidentes se iniciaron ayer a las 9:30. El juez Abel Cornejo señaló que los francotiradores "eran personas bien adiestradas, pertrechadas con armas de guerra y gran cantidad de municiones". Dispararon desde los montes cercanos a la ruta. El obispo de Orán, Jorge Lugones, los calificó de "señalados que están fuera de la ley". El gobernador firmó un informe que estuvo en conflicto durante toda la jornada con el presidente Carlos Ruiz, el ministro del Interior, Ramón Mestre, y el jefe de Gabinete, Christian Colombo. "La Nación y la provincia de Salta están actuando coordinadamente para garantizar la ley, el orden y la seguridad de los ciudadanos en la frontera Norte", apuntó el gobernador. Al cierre de esta edición la situación en el lugar era de calma relativa.



◆ Denunció. Enrique Medlov, secretario de Seguridad de la Nación, muestra en conferencia de prensa una foto del lugar de los incidentes.

26

Figura 25. Tapa del diario *El Tribuno* del 18 de junio de 2001, al día siguiente de la represión.

Svampa y Pereyra (2003) consideran que “frente a la multiplicación de cortes de fines de 2000, el gobierno decidió un cambio de táctica de resolución de conflictos” (p. 72). Luego del corte de ruta de La Matanza de ese año, el objetivo del gobierno radical era evitar un “efecto contagio” y de allí la creación de comités de crisis y de poner una mayor atención a conocer “quién era quién en cada conflicto” (p. 73). ¿Hubo efectivamente un cambio en el tratamiento del conflicto a partir de ese año, tal como señalan los autores? Sin dudas la proliferación de cortes de ruta colocó “el problema” en la agenda del Gobierno nacional, dedicado más a intentar disipar ese método de protesta que a atacar sus causas sociales y económicas. Pero como veremos a continuación, hubo ciertos cortes de ruta –con actores mayormente contestatarios, con posturas más intransigentes y con la participación verificada de militantes de izquierda- que siguieron recibiendo un tratamiento represivo que no varió desde antes del año 2000, y que por el contrario, continuó en la línea de aplicar la violencia institucional y la estigmatización ideológica.

Apenas siete meses después de las protestas de noviembre de 2000, el conflicto se hizo manifiesto nuevamente en las ciudades del norte salteño. Superó al anterior, casi imitando la tendencia de los cortes de ruta en la provincia de Neuquén de junio de 1996 y abril de 1997: tanto en Neuquén como en Salta la intervención de las fuerzas de seguridad, la justificación de la violencia institucional y la magnitud de los enfrentamientos fueron mucho mayores en los hechos que conforman el segundo episodio.

La situación económica de la región prácticamente no registró cambios desde los últimos reclamos. Según el INDEC, casi el 56 % de los hogares salteños estaban por debajo de la línea de pobreza, y el 17,6 % de éstos entraban en la indigencia, es decir, serias dificultades para acceder a una comida diaria. Las consultoras privadas Datamatic y Equis midieron valores más dramáticos (*La Nación*, 19 y 20-06-01). Según sendos estudios, en lo que fuera una de las regiones más estables del país antes de la privatización de la industria hidrocarburífera, la desocupación llegó para mediados de 2001 al 56,7 % en la ciudad de Tartagal (60.000 habitantes) y al 62,3 % en General Mosconi (22.000 habitantes). El 70 % de la población de estas ciudades habitaba viviendas deficitarias, un 30 % en condiciones de hacinamiento, y dos de cada tres habitantes carecían de toda cobertura médica y dependía de hospitales provinciales y municipales, que a su vez se encontraban en estado crítico.

Podríamos ubicar el inicio de este nuevo episodio de protesta el 30 de mayo de 2001, cuando un grupo de obreros de la construcción que estaban trabajando en la ampliación de un hospital en General Mosconi, cortaron la ruta 34 a la altura de esa ciudad. Lo hicieron en reclamo de una mejora salarial (cobraban un jornal precario en comparación a los albañiles de otras provincias, y pretendían equiparlo: de \$1,25 a \$2,50 la hora). El convenio de los trabajadores de la construcción también condicionaba el patrón salarial para otros gremios, ya que incluso se tomaba como referencia para el pago la hora de los empleados de las refinerías de petróleo.

Pocos días después de comenzado el corte, los trabajadores agremiados en la UOCRA (Unión de obreros de la construcción de la República Argentina) solicitaron el apoyo de la UTD. Unos 500 trabajadores desocupados miembros de dicha organización se solidarizaron con los obreros de la construcción, además de miembros de la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y del PO (Partido Obrero). Así se incorporaron otros reclamos en torno a la crisis laboral y a la desocupación en la zona, sin cambios desde la protesta anterior. Elevaron un petitorio al gobierno provincial en el que se solicitaban unos 5.000 módulos alimentarios para ser distribuidos por la UTD de Mosconi. El corte fue realizado en el acceso sur de Mosconi y también al norte, a la altura de Cuña Muerta, uno de los nudos de las protestas del año anterior, y en el departamento de Salvador Mazza, cerca de la frontera con Bolivia.

La intervención de militantes de izquierda que también administraban planes de trabajo generó interpretaciones negativas desde el principio del conflicto. Las sucesivas crónicas de la situación hechas por el diario local *El Tribuno* referían constantemente a este hecho como algo pernicioso y peligroso. Aunque no fue sólo este medio de información el que colocó a los militantes en un lugar penalizable. El martes 5 de junio, después de una semana de comenzado este nuevo corte y luego de que se suspendieran los trabajos en el hospital a causa de la protesta, una patrulla de la Gendarmería detuvo al militante del PO y miembro de la “Coordinadores de Desocupados de Tartagal” José Barraza mientras se dirigían a uno de los piquetes junto a otras personas. Más tarde fueron detenidos otros dos dirigentes de ese partido, César Raineri y Carlos Gil. Barraza, quien era y sigue siendo trabajador de una empresa de electricidad y fue concejal en Tartagal durante dos años, recuerda el momento de su detención:

Nosotros estábamos cortando en Cuña Muerta a partir de una resolución de la Coordinadora y estábamos avanzando a un camino alternativo donde se iba a realizar una asamblea. Ahí nos atrapa la Gendarmería, primero me detienen a mí. Al rato, no llegué a estar ni una hora, me llevaron a Embarcación [ciudad a 88 Km. al sur de Tartagal]. No llegaron a tomarme declaración ni identificación. Ahí me tienen media hora más en Embarcación y me cargan en una Traffic para Salta, donde estuve 15 días. Había trailers con gente detenida, mucha gente en lugares con capacidad para menos de lo que había. Yo dormía en la mesada de la cocina, gente que dormía en el baño, condiciones inhumanas de detención. La mayoría de los que estaban ahí era por narcotráfico, y después de esos 15 días me pasan al penal de Las Rosas, cárcel común.¹⁷⁷

Al día siguiente un grupo de más de 100 personas se dirigió hacia las puertas del Escuadrón 52 de la Gendarmería Nacional para exigir la liberación de Barraza, hecho que no ocurrió. El juez federal Abel Cornejo, quién había ordenado su detención, rechazó el pedido de excarcelación y el 8 de junio inició un proceso contra Barraza, acusado de ser autor *prima facie* del delito de “sedición en concurso real con interrupción del transporte público”. Consecuentemente le dictó prisión preventiva en el cuartel de Gendarmería en la ciudad de Salta.

Las detenciones continuaron el 10 de junio sobre seis manifestantes más, uno de los cuales debió ser hospitalizado por una descompensación cardíaca. Cinco hombres y una mujer de entre 28 y 44 años fueron acusados y procesados por el mismo juez por “sedición en grado de motín”, entorpecimiento de vías de comunicación e instigación a cometer delitos a raíz de los cortes de ruta realizados en las últimas jornadas. Al día siguiente el juez les tomó indagatoria y decidió que no habría resolución para las excarcelaciones. El 12 de junio se produjo una detención más, esta vez de un miembro de la UTD de Mosconi.

El viernes 15 de junio un grupo de piqueteros ingresó al cuartel de bomberos de Mosconi e hizo sonar la sirena del edificio durante varias horas. Según el diario local “El Tribuno”, el incidente fue un acto delictivo más en la escalada de otros hechos ilegales que se daban hasta el momento luego de más de 10 días de corte de ruta. El relato de este medio asegura que el hecho alteró los nervios de los pobladores, sumando así más antipatías a los manifestantes. Sin embargo, la acción tenía un objetivo claro: el aviso del

¹⁷⁷- Si bien Barraza no fue víctima de maltratos estuvo presente cuando Cabrera, el joven con discapacidad motriz acusado de francotirador, fue brutalmente torturado. Más de dos meses después, en agosto de 2001 Barraza, Gil y Raineri seguían detenidos.

inicio de movimiento de tropas de la Gendarmería en un intento de despejar por la fuerza a los manifestantes, hecho que finalmente no ocurrió.

Con la fuerza de Seguridad en estado de alerta, un grupo de manifestantes decidió atrincherarse en la planta de la empresa Refinor ubicada a las afueras de la ciudad de Mosconi, donde se almacenaban cerca de cinco millones de litros de nafta y gasoil provenientes vía poliducto de la destilería de Campo Durán, a 50 Km. al norte de la ciudad. El hecho ocurrió a las 4.30 de la madrugada, y según los diarios, es lo que habría generado la decisión de terminar con la protesta a través del desalojo.

Mientras el gobernador salteño se encontraba en la ciudad capital encabezando un homenaje al general Martín Miguel de Güemes, a las 9.30 hs. del 17 de junio el Gobierno puso fin a más de dos semanas de reclamo: por orden del juez federal Abel Cornejo unos 300 efectivos de Gendarmería avanzaron sobre los piquetes disparando balas de goma y gases lacrimógenos. Significó una fuerza de choque abismalmente desproporcionada para los cerca de 350 manifestantes que cortaban la ruta. Durante el avance, las tropas interceptaron a un grupo de manifestantes que se dirigía a la empresa Refinor con el objetivo de amenazar con quemar los tanques de combustible.

Ese día el cuartel de bomberos nuevamente dio la alerta a los pobladores del avance de las tropas, y fue también uno de los objetivos de la represión. Un bombero que estuvo presente el día de la represión, relató que desde el cuartel se alertaba a la población de las incursiones de la Gendarmería en la ciudad, o de su avance en las rutas; y que nunca lo hicieron por la fuerza, como señalaba el diario local desde antes de esta represión. Renato Cruz, de 39 años en ese momento, era cabo de los Bomberos Voluntarios de General Mosconi, y su relato contrasta diametralmente con respecto a la información del diario provincial:

“La policía, la Gendarmería saben que tenemos una sirena y que podemos alertar al pueblo por cualquier circunstancia o emergencia. Por esa razón la policía copó el cuartel, cerró el portón, toman el cuartel y nosotros nos encerramos en esta oficina por la situación que estábamos pasando. En un momento un compañero salió a buscar un camperón y en eso en el fondo un policía, no sé que pasó, pero se le escapó un tiro. Nosotros para ellos teníamos “el arma” para alertar a la población, que es la sirena. (...) Incluso nosotros hemos escondido un autobomba, lo dejamos yendo a Vespucio y lo dejamos guardado porque aparentemente la policía lo necesitaba para reprimir, era necesario para ellos.

La incursión policial en el cuartel que incluyó el amedrentamiento a sus ocupantes y que se realizó de manera completamente clandestina, terminó con la quema e inutilización de la sirena.



Fig 26. La estación de bomberos de Mosconi, a metros de la plaza central y a unos 600 metros de la ruta 34. A la derecha se observa el poste que sostiene la sirena, accionada durante las incursiones de la Gendarmería en la ruta.

Con la llegada de los gendarmes a una de las entradas principales de Mosconi aledaña a los depósitos de combustible de la planta de Refinor (ver mapa correspondiente), los enfrentamientos recrudecieron. El diario local *El Tribuno* relató que se perpetuó un ataque proveniente de “francotiradores internados en el monte” a unos 300 metros de la ruta y apostados sobre los tanques, a diez metros de altura. Algunos periodistas de otros medios aseguraron, por el contrario, haber visto a gendarmes armados en los techos de las viviendas aledañas a los cortes y sobre dichos tanques (*La Nación*, 18-6-01).

El jefe de la Gendarmería Comandante General Hugo Alberto Miranda ¹⁷⁸ aseguró que los efectivos estaban desarmados hasta el momento del ataque: “Fuimos emboscados. A partir del herido 18 decidimos cambiar de equipamiento y nuestros efectivos fueron abastecidos con armas de fuego para combatir a los agresores, que se escondieron en una zona de montes” (*El Tribuno*, 18-06-01).

Desde los despachos oficiales también se abonó esa versión: el Juez Cornejo aseguró que “un grupo de gendarmes fue atacado a balazos por piqueteros apostados tras los tanques, que están a diez metros de altura” (*Clarín*, 18-06-01).



Figura 27. La entrada a la planta de Refinor sobre la ruta 34, frente a donde solían apostarse los piquetes.

Los primeros informes del secretario de Seguridad Interior de la Nación Enrique Mathov hablaban de un grupo de “tiradores profesionales” conformado por militantes del PO y de la CCC que utilizaron fusiles y escopetas sustraídas de las comisarías y depósitos judiciales durante el corte de ruta anterior, en el mes de noviembre de 2000. ¹⁷⁹ La

¹⁷⁸- Miranda renunció a su cargo poco más de un año después, en agosto de 2002. Estaba involucrado junto a cinco gendarmes y un verificador de la Aduana desde abril de ese año en una causa que investigaba el juez federal Canicoba Corral. Un comandante de la fuerza lo había acusado de participar en el secuestro y contrabando de un cargamento de cigarrillos por el valor de un millón de pesos para, presuntamente, apoderarse de él y venderlo en comercios del Gran Buenos Aires y del interior. (*La Nación*, 8-08-2002).

¹⁷⁹- También se alertó sobre la desaparición de un camarógrafo contratado por el canal de televisión “América TV”, que inmediatamente abrió la sospecha de un secuestro por parte de los manifestantes. La

represión estuvo repleta de rasgos que nos retrotraen a los métodos de la lucha antisubversiva. Aníbal Arias era camarógrafo de un canal local llamado VideoTar, y debió cubrir los enfrentamientos. Lo que le sucedió nos da la pauta del nivel de impunidad que estuvo presente en esos momentos:

“Yo fui con mi hija a un acto de Güemes, y de ahí me llaman para que vaya a cubrir la nota porque habían reprimido en Mosconi. Nosotros ahí tomamos participación, me llaman por teléfono y ahí nomás me voy a trabajar. Nos juntamos en el canal y la llevo a ella [su compañera de trabajo, periodista del canal] en la moto. Y la Gendarmería que estaba entre Tartagal y Mosconi no nos dejaba pasar porque estaban reprimiendo en Mosconi. (...)

Nosotros queríamos pasar a toda costa, queríamos ir a filmar, y no dejaban, entonces yo aceleré y pasé la primera barrera. Cuando la paso yo ya siento que nos disparan y en la segunda barrera paro. Cuando paro se nos vienen los gendarmes encima. Y ahí ella se queda con la cámara, me agarran, me pegan y me ponen boca abajo como si fuera un delincuente y ahí la pierdo a mi compañera, la moto también quedó ahí. Me alzan, me sacan las zapatillas y con las medias me vendan la cabeza para que no los reconozca y me suben a un vehículo. Yo supongo que era una camioneta doble cabina, no veía nada y boca abajo, en el piso de la camioneta con las botas de los gendarmes encima. Y la tortura psicológica: ‘qué vamos hacer, lo tenemos que hacer boleta’. Y yo lo que sentía más que nada es que no íbamos por la ruta porque no era pavimentado, íbamos por el monte no sé adonde. No sé cuanto tiempo pasó, una hora debe haber pasado entre que me suben a la camioneta y que no sabían qué hacer conmigo. Y ahí me decían ‘así que vos sos el de VideoTar, así que vos sos el que alienta a los cortes, vos sos el que nos filmás a nosotros, ahora hacete el machito’ y patadas, de todo ahí abajo. Y ahí escucho un llamado por radio que dice que urgente al que tenga al camarógrafo de VideoTar que lo hagan aparecer. No sé quién, no sé cómo. Yo después me entero que acá estaban locos, que habían metido un habeas corpus. (...)

Entonces de ahí me trajeron. Me sacan la venda porque entramos por la ruta por detrás de Tartagal, y ahí me acomodan y me ponen en el asiento, y ahí el trato fue distinto. Y lo único que me decían era que no los mire, que ni levante la vista porque me iban a seguir pegando. Yo estaba hecho pelota, con toda la caja torácica apretada. Me bajan en Gendarmería y me pasan a una habitación donde llegan el médico y el enfermero para revisarme así nomás, me hacen que me lave las manos, en ningún momento me pidieron documentos ni me piden los datos. Igual acá a todos nos tienen fichados, todos nos conocemos. Y viene una doctora y ordena que me lleven al hospital para que me revisen. (...) Estuve dos o cuatro días en la clínica, no me acuerdo. Hicimos denuncia, la ratificamos, y no pasó nada. Después que hicimos la denuncia acá nos llaman a declarar desde Salta, y cuando llegamos allá era en calidad de imputados porque estaba la denuncia de los gendarmes por agresión a la autoridad. Nunca me llamaron a declarar.

información abonó la imagen delictiva de los piqueteros, recordando lo que había sucedido meses antes con la retención de policías de una comisaría. La versión se desmintió poco después, cuando se supo que el camarógrafo en realidad se había resguardado de los gases en una casa abandonada de General Mosconi (*Clarín*, 21-06-01). Por otra parte, los funcionarios nunca explicaron que aún con la certeza de que los pobladores poseían armas, no pudieran prever un desenlace de ese tipo. Acaso se trató de una explicación difundida con el fin de abonar mayor sustento a un –iniciado desde antes– proceso de criminalización de quienes protestan.

La represión de la Gendarmería causó dos muertes y decenas de personas heridas con armas de fuego y detenidos. El secretario de Seguridad Enrique Mathov, quien en principio negó las muertes, difundió luego que las heridas a los manifestantes fueron obra de personas externas a la manifestación que emboscaron a la fuerza, y que incluso hirieron a 23 gendarmes. Entre los heridos hubo algunos de gravedad, como el caso de Iván Dorado, joven que quedó parapléjico luego de recibir un disparo de bala de plomo con punta truncada, que le provocó el estallido de los huesos del omóplato izquierdo y de parte de su médula espinal. Carlos Santillán tenía 27 años y era vecino de Mosconi. Una bala impactó en su cabeza cuando se dirigía con su esposa al cementerio situado al lado de la ruta 34, a dejarle flores a una hija fallecida dos años antes. Era obrero metalúrgico de la empresa de servicios petroleros “Talleres Norte”, y padre de una nena de cinco años. A las 13.15 cayó la segunda víctima: Oscar Barrios tenía 17 años, quien vivía en un barrio carenciado. Según el relato del diario local había salido a la ruta en búsqueda de una yegua que se había escapado. Fue allí cuando una bala ingresó en su ingle y le impactó en la cadera.¹⁸⁰ Hubo además casi 70 personas detenidas entre el día domingo 17 de junio y el miércoles siguiente. A todos ellos se les tomó declaración en los juzgados Federales 1 y 2 y se los acusó de sedición, interrupción de vías de transportes e instigación a cometer delitos y permanecieron presos durante más de 2 meses en los que fueron víctimas de apremios y maltratos. Entre las decenas de personas torturadas se encontró Edgar Cabrera, joven que participó de la pueblada y que fue acusado de haber sido francotirador, golpeado por los gendarmes a pesar de su discapacidad motriz y obligado a firmar una declaración sobre “armas escondidas” aunque no sabía ni leer ni escribir.¹⁸¹

Inmediatamente después de provocar el desalojo de los manifestantes unos 800 gendarmes ingresaron a la ciudad de Mosconi y saturaron el espacio público con gases y el disparo de balas de goma. Tomaron el hospital céntrico a fuerza de golpes y amenazas a los enfermeros y médicos, e impidieron que los heridos fueran asistidos en la ruta o que ingresaran al hospital para poder ser atendidos. Algunos médicos del hospital de Tartagal

¹⁸⁰ - Sin ser una herida mortal, las primeras explicaciones sobre la muerte del joven fueron especulativas: se informó sobre esquirlas de la munición que dañaron sus pulmones, de un disparo que en realidad impactó en su abdomen, y también de un desmayo y una muerte por asfixia provocada por la enorme cantidad de gases lacrimógenos en el aire.

¹⁸¹ - Una parte del relato de Cabrera se encuentra en <http://www.copenoa.com.ar/SALTA-Juez-acusado-de-violar-DDHH.html>.

respondieron a esta situación negándose a atender a los gendarmes heridos que allí llegaban, debiendo ser trasladados al hospital de Orán, a cientos de kilómetros de distancia (*Clarín*, 19-06-01). La intervención incluyó “la persecución de manifestantes y el allanamiento a moradas sin orden judicial e incluso se atacó con gases y balas de goma a un grupo de mujeres que había salido en procesión hacia la ruta llevando imágenes religiosas” (CELS, 2003, p. 229).

El repudio a la represión y a la responsabilidad política del PJ y la UCR se dio en prácticamente todo el país. En la Capital Federal la dirección de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la CTA y la CCC convocaron a un paro nacional y una movilización a la casa de Gobierno para el jueves 21, el Movimiento Teresa Rodríguez llamó a cortar el puente Pueyrredón y hubo un “escrache” de Izquierda Unida a la Secretaría de Seguridad y a la Casa de Gobierno de Salta.¹⁸² En Neuquén unos 300 trabajadores estatales y militantes de izquierda se manifestaron en el centro de la ciudad repudiando los hechos. La misma escena se repitió en Rosario con un millar de manifestantes, y en el partido de La Matanza la CCC cortó momentáneamente la ruta 3 también en repudio de lo ocurrido.

Durante los días posteriores los cortes todavía no habían sido disueltos en su totalidad, sostenidos por grupos de jóvenes que mantuvieron alguna reyerta esporádica con las tropas de Gendarmería. La ciudad fue ocupada militarmente por tropas de la región III de la Gendarmería al mando del comandante mayor Roberto Miguel Puccio, con órdenes de quedarse en el lugar durante dos meses más. Con función de policía –el control de documentos a sus habitantes- y con las luminarias de la ciudad deliberadamente apagadas, la ciudad se encontraba en un virtual Estado de Sitio, con un casi nulo movimiento de gente en las calles.

Luego de los enfrentamientos se comenzaron a generar, como en otros episodios, acusaciones cruzadas entre diversos agentes del Gobierno nacional, del Gobierno provincial y de la Justicia Federal, quienes mutuamente se deslindaban responsabilidades. Desde la administración de Romero se recurrió a la idea de una provocación de la

¹⁸²- Luego de dicha movilización que finalizó en la Plaza de Mayo se registró el incendio de dos bancos, destrucción de teléfonos públicos y ataques al hotel del Círculo de Suboficiales de la Gendarmería. Los dirigentes de las agrupaciones convocantes aseguraron que fueron infiltrados vinculados a la Secretaría de Inteligencia del Estado quienes deliberadamente generaron desmanes para generar un clima adverso a la manifestación. Pero desde la SIDE –con el acompañamiento de los medios de información- se apuntó a “infiltrados de agrupaciones de ultraizquierda” como Quebracho, un desprendimiento de la agrupación HIJOS, el PO, PST (sic), CCC y piqueteros del partido de La Matanza como los causantes de los destrozos.

Gendarmería que habría iniciado los enfrentamientos con el fin de perjudicar al gobierno provincial, aunque la orden de intervención fue dada por un juez federal de la provincia. Mientras que desde el Ejecutivo nacional se apuntaba a la ineficiencia de la provincia en atender y resolver sus problemas. La mayoría de estos funcionarios, sin embargo, justificaron al unísono la represión aduciendo la supuesta emboscada de los manifestantes, la participación de personas ajenas a la zona y el activismo político con fines de desestabilización institucional.

En los días posteriores a la represión y con las tropas ocupando la ciudad, los abusos y persecuciones continuaron sobre algunos pobladores. Judith Guerrero es maestra jardinera y durante esos años estaba desocupada. Formó una comisión de madres en Salvador Mazza en el año 2000, ciudad que también pertenece al Departamento San Martín, a poco más de 50 Km. al norte de Tartagal. En esa ciudad también se registraron cortes de ruta y algunos de sus pobladores se solidarizaron con lo que sucedía en el corte a la altura de Mosconi. Luego de los enfrentamientos siguió siendo amedrentada -con rasgos de persecución ideológica- por las fuerzas de seguridad:

Uno salía de su casa y todo el tiempo filmándote, todo el tiempo en las esquinas, vehículos raros que te seguían. Era una presión psicológica, uno no estaba más tranquilo ya, no había tranquilidad. Cualquier problema que había en el pueblo caían a buscarme a mí, a mi casa, sabían todo de mí absolutamente. Recibía citaciones raras, querían hacerme ir a las dos de la mañana a la comisaría. Ya me dijo la abogada que eso no es legal, pero yo antes asistía y “charlaba” con el comisario y me decía que nosotros teníamos ideas socialistas, que éramos comunistas, que lo que nosotros queremos ni Dios lo va a lograr porque lo que nosotros queremos es que todos estén bien y eso es imposible. Y yo no tengo un partido político con el que me identifique porque si tuviera no tendría vergüenza en decirlo, lo único que digo es que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Hasta el día de hoy siguen los aprietes, las causas abiertas por el artículo 194 que es por la interrupción de caminos.

El 18 de junio, las barricadas fueron repuestas en la ruta y se iniciaron fogatas alimentadas con cubiertas de goma y troncos frente a unos 1000 gendarmes en estado de alerta. A partir de esa jornada comenzaron a acentuarse las versiones sobre la intervención de infiltrados y de grupos armados con el fin de desestabilizar políticamente la región. Ese día fueron velados los cuerpos de los jóvenes asesinados en una ceremonia religiosa a la que asistieron unas 300 personas, en medio del sitio ejercido por la Gendarmería. El sermón del párroco local Monseñor Juan Martín Aguirre también apeló

a instalar la versión de los “infiltrados que se están aprovechando de la necesidad real y concreta de la gente” (*El Tribuno*, 20-06-01).

En la madrugada del 20 de junio se registró una nueva acción represiva de la Gendarmería, una vez más con prácticas emparentadas a la represión ilegal. A las 4.15 hs. las tropas avanzaron entre tiros y corridas sobre una de las barricadas todavía existentes, lo que provocó la huída de los manifestantes al monte y hacia las calles y casas cercanas. Nuevamente los gendarmes ingresaron por la fuerza a las casas en busca de armas y manifestantes. Detuvieron a unos 20 de ellos (pesaba la orden de captura por sedición impulsada por el Juez Cornejo) que habían sido alojados por los vecinos.

Las razzias provocaron que más de 800 habitantes de Mosconi -entre ellos el tío de Oscar Barrios, uno de los muertos, y varios dirigentes de la protesta- se congregaran la plaza Hipólito Irigoyen, un gran círculo alrededor del cual se encuentran los principales edificios del municipio y del cual parten 7 diagonales a modo de rayos. Se sumaron dirigentes de organizaciones de Derechos Humanos (Madres de Plaza de Mayo) para repudiar la nueva acción represiva y para exigir el retiro de las tropas. Allí avanzaron contra los efectivos que todavía ocupaban la ciudad con la intención de hacerlos retornar a la ruta, fuera de la ciudad, lo que lograron en pocos minutos. Luego retornaron a la plaza y allí, durante la tarde, comenzó la instalación de carpas, banderas y una olla popular inaugurando otra etapa de la protesta, en la que se incluyó el reclamo por la liberación de los piqueteros arrestados.

Ese mismo día el gobernador Romero se entrevistó en la Casa de Gobierno con el presidente de la Nación, quien en un primer momento encomendó al ministro del Interior Mestre y al secretario de Seguridad Interior como interlocutores frente a los manifestantes para comenzar un diálogo. Sin embargo esta decisión viró rápidamente luego de la reunión con Romero, quien impulsó una política más rígida de “no negociar con personas que tienen pedidos de captura” por parte de la Justicia. Fue así que Mestre, quien llegó a analizar la posibilidad de ordenar el Estado de Sitio en la provincia, anunció que ningún funcionario viajaría hasta que no se “reestablezca la paz”, un día después de haber anunciado que se preparaba una comisión para viajar a la zona del conflicto.

En las casi 20 carpas instaladas en la plaza -bautizadas por los manifestantes como “carpas del aguante”-, se encontraban unas quince personas con pedido de captura. La mayoría de los casi 40 piqueteros detenidos durante las jornadas de protesta (entre ellos dos menores, quienes también fueron golpeados y torturados con descargas eléctricas)

fueron liberados a fines de junio luego de que una treintena de agrupaciones de DD. HH. –entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Madres de Plaza de Mayo- se lo reclamaran al Juez Cornejo.¹⁸³

A partir del mediodía del 21 de junio se realizó una nueva marcha desde el barrio de Liniers hasta el Congreso y luego en la Casa de Gobierno en repudio a la represión, en la que participaron alrededor de 7.000 personas pertenecientes a distintos partidos políticos y agrupaciones. Una parte de la columna fue encabezada por dirigentes de la CTA y partió desde La Matanza con miles de trabajadores desocupados en las filas de este sindicato y de la CCC. Ya de noche, nuevamente un grupo de personas –que fueron aisladas por parte de las agrupaciones y partidos que asistieron al acto- comenzaron a romper locales de bancos y sedes de empresas de jubilación privada.¹⁸⁴

Hacia el 22 de junio en Mosconi se convocó a una reunión ampliada entre representantes de diferentes organizaciones comunitarias y gremiales (entre ellas la UTD de Mosconi, dirigentes barriales, directores de escuelas y representantes del comercio local) con el objeto de reclamar a las autoridades provinciales y nacionales el establecimiento de una negociación. El petitorio incluyó temas como la permanencia de los planes trabajar vigentes, la distribución de regalías provenientes de la explotación petrolera y el apoyo a pequeñas y medianas empresas. De la reunión, realizada en una parroquia de Mosconi, participó el Ministro de Desarrollo Social Juan Pablo Cafiero, quien se entrevistó con una parte de los dirigentes de la UTD que tenían pedido de captura. Pese al pedido del gobernador salteño de no dialogar con “delincuentes”, el ministro analizó la posibilidad de impulsar medidas de reactivación económica, que inmediatamente generaron críticas del gobierno salteño y un roce con el resto del Gobierno nacional, cercanos a la posición de Romero.

¹⁸³- Días más tarde el secretario de Seguridad de la Provincia Daniel Nallar acusó a la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), cuyo secretario general pertenecía al Partido de la Liberación, de ofrecer apoyo logístico a los manifestantes con los vehículos de la universidad. Omar Viera, responsable del gremio, afirmó que los vehículos trasladaron a varios decanos de distintas facultades a recibir a los representantes de organismos de DD. HH. que llegaron a Mosconi a pedir por la liberación de detenidos.

¹⁸⁴- Un cronista del diario Clarín relató que un policía de civil le “recomendó” que no avance sobre Avenida de Mayo porque iba a haber “quilombo”. Instantes después y durante unos 15 minutos, una veintena de personas encapuchadas comenzó con los desmanes sin que en ningún momento intervenga la policía, que sin embargo se encontraba muy cerca de los acontecimientos (*Clarín*, 22-06-01). Los dirigentes sindicales de la CTA se desligaron de los hechos enfatizando que esas personas no pertenecían a las organizaciones que habían convocado a la marcha. El hecho sirvió, sin embargo, para que el Gobierno alzara nuevas advertencias sobre actividades subversivas: el ministro de Interior Ramón Mestre anunció que “el Gobierno nacional repudia la violencia como método (...) y rechaza a quienes la reivindican como actitudes ejemplares de verdaderos actos de guerrilla urbana” (*Página 12*, 23-06-01).

El 25 de junio, luego de más de 20 días de iniciada la protesta, el gobernador y los funcionarios del Gobierno nacional estudiaron implementar un plan de reactivación económica a corto plazo para la región. Consistía en un plan de forestación mediante la plantación de cinco mil Has. por año de eucalipto para la producción de madera en el plazo de 10 años y estimular su industrialización mediante la modernización de una treintena de aserraderos. Prometieron la ampliación de la red de gas natural a hogares y comercios que carecían de la misma –en una región con uno de los yacimientos gasíferos más importantes del país-¹⁸⁵, la construcción de casi tres mil metros de cañerías para abastecer agua a los domicilios de Mosconi, refacción de escuelas y la construcción de viviendas. Es decir, una política dirigida una vez más a ejecutar planes paliativos y asistenciales sólo cuando las coyunturas sociales fueron críticas.

Así y todo Romero siguió insistiendo en no hablar con “quienes tienen pedido de captura por parte de la Justicia Federal” (*El Tribuno*, 26-06-01), ratificando su conceptualización delictiva del conflicto social. Por ello el gobernador sólo se reunió con entidades intermedias, representantes de cámaras de comercio y profesionales, ex trabajadores agremiados del YPF¹⁸⁶ pero no con los manifestantes que continuaban acampando en la plaza principal de Mosconi.

Durante la primera quincena del mes de julio continuaron detenidos varios de las personas involucradas en la protesta y permanecían las órdenes de captura sobre dos de los piqueteros líderes: Oscar “Piquete” Ruiz y José “Pepino” Fernández, ambos pertenecientes a la UTD. También continuaron durante todo ese mes las carpas montadas en la Plaza de principal de Mosconi y unos 400 efectivos de la Gendarmería. Para esta fecha, un informe del Ministerio del Interior –a cargo de Ramón Mestre, quien en 1999 intervino la provincia de Corrientes- daba a conocer que en el conflicto del norte salteño habían operado militantes del MTP (Movimiento Todos por la Patria). Según el informe, dicha agrupación fuertemente ligada a las prácticas de guerrilla urbana luego del asalto al

¹⁸⁵- Con centenares de millones de dólares anuales en ventas para el mercado interno y externo de combustibles, las empresas petroleras trataban de mantener un perfil de “compromiso con la sociedad y con el medio ambiente”. Con anuncios en sus portales de Internet y en los diarios, intentaban disimular la descarnada situación de los pobladores de estas ciudades frente al lucro privado como único objetivo de su función. Así, la empresa “Tecpetrol”, según anunciaba, “destina \$ 500.000 por año a obras, entre ellas las destinadas a *construir letrinas* para una comunidad chorote que vive en condiciones de hacinamiento y extrema pobreza.” (*La Nación*, 2-07-2001. Subrayado nuestro).

¹⁸⁶- Uno de los resultados de esta reunión fue la decisión de que los planes sociales dejen de ser coordinados por las ONG locales, como lo venían haciendo hasta el momento, para ser administrados únicamente por el gobierno provincial.

cuartel de La Tablada en 1989, habría infiltrado a francotiradores para emboscar a las tropas el día de la represión.¹⁸⁷

En reclamo por la liberación de los detenidos, el 6 de julio en Buenos Aires diversas agrupaciones políticas y sociales junto a diversos Movimientos de Trabajadores Desocupados cortaron el Puente Pueyrredón y la autopista Buenos Aires – La Plata. Las protestas mediante el corte de rutas continuaron con una alta frecuencia en distintas localidades del conurbano bonaerense y del país, organizados por diversos MTD con el apoyo del sindicato docente ATE y la central sindical CTA. La situación provocó que la entonces ministra de Trabajo Patricia Bullrich advierta sobre la suspensión de la personería jurídica a aquellos gremios que se plegaran a la protesta. El 31 de julio se congregó una nueva jornada de protesta en la cual se esperaban cerca de 40 cortes de ruta en un solo día. Intervinieron trabajadores de la salud de hospitales de la provincia de Buenos Aires, chacareros y trabajadores estatales en Entre Ríos, trabajadores metalúrgicos en San Lorenzo (Santa Fé) y en Ushuaia aglutinados en la CTA, la CGT, además de la convocatoria de la CCC, la Federación Agraria, partidos de izquierda y otras agrupaciones en plena profundización de la crisis económica y de ajuste sobre las masas asalariadas en pos de lograr el déficit cero, plan del nuevamente ministro de Economía Domingo Cavallo. El Gobierno nacional siguió el acontecimiento recomendando a los gobernadores que movilicen a sus policías provinciales y que acudan a la Justicia Federal para una posible movilización de tropas de la Gendarmería.

En la Casa Rosada existía el resquemor por la influencia de las agrupaciones “más pesadas” (sic) en la escalada de movilizaciones, más específicamente provenientes del arco del movimiento piquetero como la CCC el Movimiento Teresa Rodríguez y Quebracho. El juicio de valor maniqueo se fundaba en la supuesta peligrosidad del “carácter político” que estaba adquiriendo la protesta en todo el país. Como si los reclamos debieran carecer de organización política para que sean del todo legítimos, un

¹⁸⁷- La versión de tiradores profesionales fue alimentada luego de que unos 16 gendarmes resultaran heridos de bala y hospitalizados. Si bien ninguna de las personas detenidas y penalizadas durante aquellas jornadas portaba armas, el tema sigue siendo controversial al día de hoy. La mayoría de los que participaron de las manifestaciones niega que se hayan utilizado armas, mientras que otros admiten que algunos pobladores, producto de la indignación, salieron a las calles de Mosconi con armas que utilizaban para cazar pequeños animales en el monte. De todos modos, y como señalaron algunos entrevistados, fue imposible la existencia de manifestantes apostados a 10 metros de altura sobre tanques de la empresa Refinor, ya que la misma estuvo perfectamente custodiada durante todo el conflicto. Por el contrario, quienes sí se apostaron allí fueron efectivos de la Gendarmería. Muchos señalan que en medio de la trifulca y ante una cortina de gas lacrimógeno que hacía irrespirable pero también invisible el ambiente, muchos gendarmes balearon por error a sus compañeros.

ministro -sin ser mencionado en el medio gráfico- opinaba que “ya no podrán hacer creer que son simples desocupados que espontáneamente defienden sus derechos como cualquier ciudadano. Son un movimiento político que tiene articulaciones en todo el país.” (*La Nación*, 26-07-2001). O resaltaban una vez más la posibilidad de injerencias guerrilleras: en referencia a los nuevos cortes de ruta que se preveían en Salta, funcionarios del PEN “consideraban seriamente la posibilidad de que algunas de las protestas estén siendo alimentadas por grupos guerrilleros llegados desde Bolivia. Con esa hipótesis se explican la acción de francotiradores en Salta.” (*La Nación*, 30-7-2001).

8.1. El canto de las sirenas del pasado.

Aunque escapa a los objetivos de esta tesis, la recepción social que tuvieron las declaraciones públicas que apuntaron a la estigmatización de la protesta social en específicos momentos es una cuestión a tener en cuenta, además de ser objetivo de otra investigación. Un acercamiento es mediante los sondeos de opinión pública realizados en ese entonces. Un informe de la consultora Ibope publicado en el diario *La Nación* el 23 de junio de 2001 arrojó datos significativos sobre la percepción que se tenía sobre la protesta social. El estudio se realizó en base a 450 entrevistas telefónicas y directas en diversos puntos del país e interrogó sobre causas de las protestas en el país, actores involucrados, grados de apoyo o condena, etc. Más del 60 % de los entrevistados ubica a la desocupación como la causa principal, siguiendo la pobreza (11,3 %), el modelo económico (9,6 %) y la injusticia social (6,2 %). Con respecto a los métodos, surge que 7 de cada 10 personas consideraban que los reclamos callejeros no llevan a nada, y puntualmente en referencia a los piquetes, casi un 52 % se manifiesta en contra de esta práctica. Por otra parte, el 85 % de los entrevistados contestó afirmativamente ante la pregunta sobre la existencia de activismo político en las protestas, aunque sólo el 0,6 % consideró que los conflictos se desencadenaban exclusivamente a causa del activismo político, y un 32 % bregó por el diálogo entre las partes antes que la solución violenta.

En el mismo diario y pocos días después, el 9 de julio fueron publicados los resultados de un estudio realizado por la consultora Gallup sobre 1183 personas mayores de edad en 26 localidades del país. Los resultados en este caso fueron disímiles. La encuesta arrojó que un 68 % de las personas se manifestaban en desacuerdo con los

cortes de ruta y un 28 % declaraba que el gobierno debía ser más duro con quienes hacían piquetes. Casi en su totalidad (el 97 % de los encuestados) se manifestó en contra de la violencia en los cortes de ruta, hecho que fue interpretado por el diario como un desacuerdo abrumador con *la violencia* de los piqueteros, y no en contra de la violencia institucional. Aunque no podríamos plantear una relación causal entre la producción simbólica alrededor de los cortes de ruta y la manera en que estos fueron interpretados por distintos sectores de la sociedad, nos parece relevante resaltar estos puntos.

En junio de 2001, mientras se desarrollaba el conflicto en el norte salteño, los cortes de ruta eran considerados una cuestión de peligrosidad para las instituciones y para el Estado. Ese mes la Secretaría de Inteligencia del Estado dio a conocer al PEN que existían alrededor de 150 “focos de conflicto” en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Santa Fé, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Río Negro y Salta. El entonces presidente de la Rúa “pidió a los organismos de seguridad del Estado que le acerquen mayores y pormenorizados informes sobre posibles focos de violencia.” (*El Tribuno*, 25-6-01). Así fue que las protestas siguieron caratulándose con arreglo a una coyuntura de “organización delictiva”. Desde el Gobierno nacional y desde distintos medios de información masiva se apelaba a la infracción constante del Código Penal ¹⁸⁸ y a la necesidad de “reprimir el delito”. Además de revitalizar imágenes delictivas, la interpretación del gobierno nacional y provincial estuvo dirigida sistemáticamente a instalar mensajes vinculados a la peligrosidad política e ideológica de quienes participaron en la protesta. Lo que se profundizó tras la muerte de los manifestantes, cuando el gobierno provincial “denunció” la violencia armada y la supuesta existencia de grupos políticos infiltrados.

En total, registramos 105 declaraciones en un lapso de tiempo de poco más de un mes, desde el 12 de junio hasta el 15 de julio. Como en los anteriores casos, estos enunciados están conformados en su mayoría por caracterizaciones y definiciones de los hechos (92 declaraciones, un 88 % del total) y en menor medida contienen denuncias,

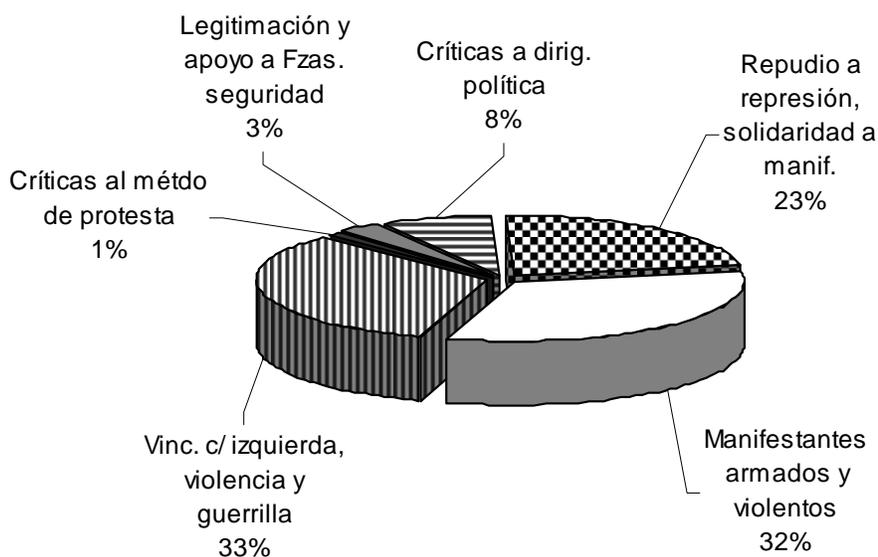
¹⁸⁸- En relación al conflicto en Mosconi se mencionaba constantemente el artículo 210 bis del Código Penal, el cual reza: “Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características: a) estar integrada por diez o más individuos; b) poseer una organización militar o de tipo militar; c) tener estructura celular; d) disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo; e) operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país; f) estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad; g) tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior; h) recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.”

pedidos o reclamos (63 casos, un 40 %). Comprobamos así una tendencia a calificar a los sujetos como parte de una confrontación.

Con respecto a los reclamos, poco más del 30 % exigió el uso de la fuerza y el retiro de manifestantes del corte de ruta, provenientes del Poder Ejecutivo provincial y nacional y de directivos de medios gráficos (en especial del diario La Nación). El 26 % son reclamos de soluciones financieras al gobierno nacional mientras que el resto de las declaraciones incluyen denuncias por la represión desplegada; estas últimas provienen en su mayoría de dirigentes sindicales y solo 1 (de un total de 18) proviene de los manifestantes.

Con respecto a las caracterizaciones, veamos cómo se distribuyeron tomando sólo aquellos enunciados que contienen este aspecto, es decir, retirando las declaraciones que no contienen caracterizaciones:

Grafico 8: Provincia de Salta. Tartagal y General Mosconi, junio de 2001. Distribución de tipos de caracterizaciones en las declaraciones publicadas (N= 92).



Fuente: Elaboración propia en base a diarios *Nación*, *Página 12*, *Clarín* y *El Tribuno*.

Antes que nada debemos mencionar que los mensajes siguieron un esquema temporal muy similar al del año 2000. Sólo 2 declaraciones fueron registradas antes de la represión efectuada el 17 de junio, y 90 luego de la misma. Las registradas antes, son en contra de la protesta, una califica a los manifestantes como armados y violentos, y la otra

critica el método del corte de ruta como inapropiado. La atención prestada por los agentes estatales y de otros sectores de la sociedad fue casi nula durante la protesta, y sólo se produjeron enunciados después de la movilización de tropas, de las muertes y del desalojo de manifestantes.

En primer lugar vemos que la tercera parte de las declaraciones contienen vinculaciones a la violencia política, la militancia de izquierda, la infiltración y las prácticas guerrilleras o armadas. A diferencia del conflicto de noviembre de 2000, fueron abandonados los términos que resaltaban la presencia de “activismo o militancia política”, y se explicitaron las versiones sobre *activistas de izquierda que incurrieron en serias amenazas para las instituciones democráticas*.

Este tipo de caracterizaciones negativas se adiciona a las que colocan a los manifestantes como personas violentas, vándalos y delincuentes que cometieron delitos (32 %) y un minoritario grupo de enunciados que criticaron los métodos de protesta y que legitimaron la intervención de las fuerzas de seguridad. En total, se trata de casi un 70 % de expresiones dirigidas a criminalizar y deslegitimar con diversas valoraciones morales negativas la acción de los manifestantes. Las críticas dirigidas a la dirigencia política sumadas a las demostraciones de solidaridad a los manifestantes reúnen el restante 30 %.

Revisemos algunas de las declaraciones -producidas por quienes constituyen una verdadera alianza social del régimen (gobernador, juez federal, secretario de Estado, jerarquía eclesiástica, diputado oficialista, periodista del diario de la familia del gobernador)- que obviaron en su contenido la más mínima genealogía de los acontecimientos, y el desarrollo de las organizaciones de desocupados de Tartagal y de Mosconi:

“Los manifestantes son parte de un **plan de acción política impulsado por algunos partidos de izquierda** que quieren instalar la violencia en el país y desestabilizar la democracia.” Juan Carlos Romero, gobernador de Salta, PJ. *El Tribuno*, 18-06-01.

Estamos en zona de frontera amplia y despejada. **Acá actuó una ideología antisistema que operó sobre la gente.**” Abel Cornejo, Juez Federal. *El Tribuno*, 18-06-01.

“La otrora orgullosa población petrolera se ha convertido en el **paraíso predilecto de de activistas políticos, mercaderes de la droga, cultores de la violencia y profesionales del caos**, que hacen de los sufridos pobladores un formidable caldo de cultivo. (...) **Criminales por un lado, activistas por el otro**, y la sufrida población en el medio que ya no sabe qué hacer cuando se producen estos acontecimientos.” Juan Carlos Brinsack, periodista. *El Tribuno*, 19-06-01.

“Los **hechos de violencia de los últimos tiempos se pueden comparar con la época en que existían las guerrillas**. Estamos escuchando nuevamente ese canto de sirenas que existió en el pasado, donde algunas personas convencieron a muchos en esos años de que

usando las armas iban a poder resolver las injusticias y los problemas políticos del país.” Enrique Mathov, Secretario Seguridad Interior, UCR. *El Tribuno*, 19-06-01.

“Hay infiltrados que se están aprovechando de la necesidad real y concreta de la gente.” Juan Martín Aguirre, Monseñor departamento San Martín. *El Tribuno*, 20-06-01.

“[En Mosconi] **hay un grupo de gente violenta, que es del partido Obrero y de la Corriente Clasista y Combativa que han decidido el camino de la lucha armada y violenta.** Lo único que han logrado es que haya muertos y heridos. Al respecto me llama la atención que existen los que piensan que eso no es delito.” Juan Carlos Romero, gobernador de Salta, PJ. *El Tribuno*, 28-06-01.

“Yo no tengo miedo de afirmar que en Mosconi hubo guerrilla y, por lo tanto, una guerra. Porque si hubo gente armada atentando contra las fuerzas de seguridad, hubo guerrilla.” Daniel Nallar, Secretario Seguridad Provincial, PJ. *El Tribuno*, 1-07-01.

“La base de la situación de anarquía que vive nuestro pueblo radica en el hecho de que las organizaciones vecinales han sido infiltradas por elementos de ultraizquierda. [Con respecto a la carpa del aguante] tampoco la cosa es difícil de arreglar: hay que meter las fuerzas de seguridad que hagan falta y sacarlos de allí para reestablecer el orden. No hay otro camino.” Roberto Encina, Diputado provincial, PJ. *El Tribuno*, 1-07-01. ¹⁸⁹

Evidentemente la participación de algunos militantes de fuerzas de izquierda involucrados en el movimiento piquetero desde años y reconocidos por los pobladores (o de la UTD, caratulada como una organización perteneciente a esa corriente ideológico-política), desató una serie de relatos que parecen extraídos de conflictos de otra época. El rescate de representaciones de luchas y actores propios de la década de 1970 unificó un discurso en los agentes del Estado provincial y nacional, sin distinción de partidos políticos. Esta “avalancha” de declaraciones con connotaciones de discriminación ideológica y política (la identidad de los manifestantes es reducida a la guerrilla y a la subversión como elementos perniciosos) ubica a los piqueteros en su conjunto como elementos “externos” al pueblo de Mosconi y Tartagal, y como tales, alejados de los padecimientos sociales y económicos de la región. José Barraza, uno de los dirigentes de las movilizaciones, opina al respecto:

Suponer que hay gente que tiene una genialidad que puede llevar de las narices a cualquiera detrás de un objetivo es tener una subestimación muy alta sobre el conjunto de la gente que actúa en un movimiento. Te hace ver a los sectores de poder, cuál es el concepto que tienen de las masas. “Las masas las manejamos como queremos o son

¹⁸⁹- Días después del conflicto en el norte salteño seguían los pedidos de mayor control y acción represiva, no sólo desde funcionarios políticos. Aunque no directamente vinculado al hecho de Salta, algunas cartas de lectores iban en este sentido, mientras los cortes de ruta se mantenían en distintas protestas del país: “Los legisladores deberían implementar urgentemente una legislación que permita a las fuerzas de seguridad detener inmediata y automáticamente a los encapuchados y enmascarados, estuvieran lo que estuvieran haciendo, y que, invirtiendo la carga de la prueba, demuestren su inocencia.” Jorge H. Shedden, Carta de lector al diario *La Nación*, 11-07-2001.

proclives a ser manejadas como quieren”, cuando en realidad las movilizaciones fueron producto de una situación social insostenible, y que no ha sido modificada. (...) Ver morir a un compañero en una manifestación, el caso de Verón, es un golpe muy fuerte. Uno no va a la ruta a ver morir a sus compañeros, va a reclamar algo que el gobierno debe dar respuesta. Lo que se aprende es que el poder del Estado está dispuesto a defender con uñas y dientes un esquema de poder que está orientado a excluir a una importante porción de la población. Hoy en momentos de recuperación económica tenemos una situación parecida, es decir, no hay soluciones nunca.

Siguiendo el tono de las declaraciones oficiales, otra de las conjeturas provenientes del Gobierno provincial y nacional luego de los enfrentamientos fue la vinculación de los piqueteros con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y con agrupaciones locales como Quebracho, además de vinculaciones con grupos de narcotraficantes provenientes de Bolivia:

“Esta es una zona de frontera y el problema aumenta porque los **grupos violentos** tiene una retaguardia con el país vecino, con escape y aportes de dinero. **Hasta puede ocurrir que el narcotráfico financie a grupos violentos, como pasa en Colombia.** Me decían que esa idea es descabellada, pero no es casualidad que en la frontera se generen incidentes de este tipo”. Juan Carlos Romero, gobernador de Salta, PJ. *Página 12*, 19-06-01.

Desde la Iglesia Católica salteña (un informe realizado por el monseñor Jorge Lugones, obispo de Orán) se habló en la incursión de sediciosos provenientes de la agrupación guerrillera peruana Sendero Luminoso (*Clarín*, 24-06-01). Aunque nunca se obtuvieron datos para sostener esos dichos, sistemáticamente se intentó instalar la idea del “resurgimiento de prácticas guerrilleras en el país” (*La Nación*, 20-6-01). Las versiones oficiales provenientes de la SIDE hablaban de una reunión realizada en Ecuador a mediados de 2000 y convocada por la guerrilla colombiana (la llamada “Reunión de Manta”), a la que asistieron entre otras agrupaciones de Latinoamérica, las argentinas “CCC liderada por Carlos ‘Perro’ Santillán, el grupo Quebracho, el Partido del Trabajo y el Pueblo, Patria Libre y otros grupos” (*Clarín*, 24-06-01). El diario local *El Tribuno* afianzó esta serie de hipótesis mediante la voz de los funcionarios de la provincia con una frecuencia casi diaria.

De este modo se hizo hincapié en que existió una actividad armada inclusive desde antes de este corte de ruta. Se suponía que desde noviembre de 2000 (durante el episodio que analizamos en el capítulo anterior) existían “movimientos” realizados por integrantes de las agrupaciones “Democracia Obrera (desde la Capital Federal), el Movimiento Teresa Rodríguez y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (desde La Matanza), y

el Partido Obrero (desde Cutral C6)” (*Clarín*, 24-06-01). Es decir, un aparente plan premeditado para iniciar un proceso revolucionario en el norte salteño.



Figura 28. Nota del diario *El Tribuna* al día siguiente de la represión.

El Ministerio del Interior calificó a quienes manifestaron en Gral. Mosconi y a quienes repudiaron los hechos en marchas realizadas en la Capital Federal como ejecutores de “verdaderos actos de guerrilla urbana y de una violencia inusitada con desprecio por la vida de otros ciudadanos” (*El Tribuna*, 23-06-01). Las fotografías en los diarios con personas portando palos y con sus rostros tapados graficaron las expresiones de los funcionarios que nuevamente recortaban las causas de los conflictos para instalar valoraciones con sesgos de discriminación ideológica (la peligrosidad del activismo de izquierda). Esto fue certificado desde funcionarios del Gobierno nacional preocupados por “neutralizar la influencia que algunos grupos de izquierda han logrado en la población de General Mosconi, Salvador Mazza y secundariamente en Tartagal. (...) si no se consigue separar el grueso de la población del activismo extremo, pueden producirse acontecimientos más graves aún” (*Clarín*, 20-06-01).

Complementadas con este tipo de declaraciones, se produjeron aquellas que apuntaban a aislar a los manifestantes creando una imagen lejana a la idea de “dignidad” y “justicia” que pudiera haber tenido en algún momento el movimiento piquetero. En este

caso las vinculaciones fueron con respecto a lo vandálico, la violencia como forma de manifestación y lo delictivo:

"Quien actúa de esta forma está cometiendo lisa y llanamente un delito. Toda persona que usando un arma de fuego dispare sobre otra es un homicida, un delincuente común." Enrique Mathov, Sec. Seguridad Interior, UCR. *El Tribuno*, 18-06-01.

"No veo por qué sentarnos a negociar con **cientos personas violentas que están armadas**. Cualquier acercamiento se debe dar después de que la Justicia haya recuperado el orden." Juan Carlos Romero, gobernador de Salta, PJ. *La Nación*, 19-06-01.

"Los piqueteros son vagos y nada más. Y ¿sabe por qué nadie quiere decir su nombre cuando ud. Pregunta? **Porque la gente tiene miedo. Igual que yo que tengo que seguir viviendo aquí.**" Pedro L., vecino. *El Tribuno*, 28-06-01.

En casi todos estos enunciados se emparentó la violencia armada con el delito común. Se difundieron estas declaraciones relacionadas a los gendarmes heridos que, como dijimos, pudieron ser blanco de algunos manifestantes (aunque lejos del cuasi ejército popular) e incluso por obra de gendarmes que dispararon sin una visión clara, producto de la densísima nube de gas lacrimógeno sobre la ruta. Teniendo la relación temporal -la casi totalidad de declaraciones realizadas luego de los enfrentamientos- veamos las personificaciones de quienes emitieron este tipo de mensajes:

Cuadro 9: Provincia de Salta. Tartagal y General Mosconi, junio de 2001. Caracterizaciones según los sujetos emisores.

	Emisores				Total
	Manifes- tantes	Otros sujetos (no manifestant es)	Funcionarios Estado	Dirigentes partidos y sindicatos	
Manifestantes armados y violentos	0 ,0%	9 33,3%	21 41,2%	0 ,0%	30 32,6%
Vinc. c/ izquierda, violencia y guerrilla	1 33,3%	8 29,6%	21 41,2%	0 ,0%	30 32,6%
Críticas al método de protesta	0 ,0%	0 ,0%	1 2,0%	0 ,0%	1 1,1%
Legitimación y apoyo a Fzas. seguridad	0 ,0%	0 ,0%	3 5,9%	0 ,0%	3 3,3%
Críticas a dirig. política	1 33,3%	3 11,1%	1 2,0%	2 18,2%	7 7,6%
Repudio a represión, solidaridad con manif.	1 33,3%	7 25,9%	4 7,8%	9 81,8%	21 22,8%
Total	3 100,0%	27 100,0%	51 100,0%	11 100,0%	92 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a diarios *Nación*, *Página 12*, *Clarín* y *El Tribuno*.

En este cuadro en el que nos centramos sólo en los enunciados que poseen caracterizaciones o definiciones de los hechos, vemos nuevamente que el acceso de los manifestantes a los medios masivos es casi nula: sólo 3 de un total de 92 declaraciones. Llamativamente entre ellas se encuentra una que vincula de manera negativa a los propios manifestantes con la infiltración de partidos de izquierda. Corresponde a Oscar Antequera y Juan Carlos Lucero, entrevistados por el diario propiedad de la familia Romero, donde afirman lo siguiente:

“Los nuevos piqueteros cambiaron la camiseta del hambre por la de partidos políticos. Antes, luchábamos nosotros. Ahora, hay gente extraña: porteños, mendocinos y extranjeros. Hay dirigentes como ‘Piquete’ Ruiz, Pepino Fernández o el ‘Hippie’ Fernández, cuyas vidas están envueltas en un aura misteriosa. Alguien, inocentemente les dio el manejo de los planes Trabajar y las consecuencias están a la vista.” *El Tribuno*, 1-07-01.

Cabe destacar que ninguno de los entrevistados miembros actuales de la UTD reconoció el nombre de Antequera y Lucero. Por otra parte, podemos observar que las muestras de solidaridad o defensa de los manifestantes y el repudio a la represión se reparten entre los funcionarios políticos del Estado (miembros de la Alianza gobernante que criticaron la movilización de tropas), dirigentes sindicales y partidos de izquierda (más del 80 % de sus intervenciones son en este sentido) y otros sujetos no manifestantes, en su mayoría periodistas. Ninguna de las declaraciones de este tipo provino de los manifestantes, como señalamos anteriormente.

El resto de las declaraciones con caracterizaciones negativas se reparten casi equitativamente entre funcionarios del Estado y sectores de la sociedad que no participaron del corte. En el primer caso se trata de miembros de los tres poderes nacionales o provinciales y de las fuerzas de seguridad, quienes intervienen caracterizando a los manifestantes de manera negativa en más de un 80 % de sus declaraciones. Entre los sujetos no manifestantes que se alinean con esta tendencia se encuentran directivos de medios gráficos (*El Tribuno* y *La Nación* principalmente), quienes casi en igual proporción –en 17 de 27 enunciados- atribuyen a las ideologías de izquierda o a la delincuencia común los hechos de violencia. Incluimos entre ellos al obispo de Orán, quien también abonó a la definición maniquea proveniente de los sectores de poder político al afirmar que “los pobladores de Mosconi son gente pacífica y trabajadora. No es un pueblo de piqueteros como a veces lo muestran los medios de la

capital provincial y de Buenos Aires” (*Clarín*, 20-06-01). “Pueblo de piqueteros”, ergo, pueblo de delincuentes: no trabajan y no son pacíficos. Resurgieron los mensajes que reducían el conflicto a personas extrañas que en una intervención “artificial” se montaron en la protesta y “usaron” a una mayoría políticamente inocente.

La adjudicación de prácticas sediciosas en algunos casos dejó el anonimato o la acusación generalizada, y se adjudicó a dirigentes reconocidos públicamente, opositores al gobierno y vinculados a partidos y movimientos de izquierda, en este caso el PCR/CCC:

Grupos de la Corriente Clasista y Combativa liderada por Santillán hacen entrenamientos de combate a orillas del Río Grande.” Raúl García Goyena, diputado provincial ALIANZA Jujuy. *Clarín*, 19-06-01.

Algo similar ocurrió con los dirigentes de la UTD de Mosconi, directamente ligados a la violencia armada. Tal el caso de José “Pepino” Fernández, a quien desde el Ministerio del Interior se lo caratulaba como “uno de los 10 o 15 tiradores expertos que están infiltrados entre los pobladores” (*Clarín*, 20-06-01).¹⁹⁰

¿Qué conocimiento o interpretación tienen los protagonistas de las protestas sobre este tipo de enunciados? Judith Guerrero, maestra que participó de los cortes:

“Acá nadie levantó la bandera de ningún partido. Estaba el peronista que estaba disconforme con el gobierno, el que no tenía ideas políticas porque necesitaba trabajar, a cualquiera. Lo fundamental era conseguir trabajo y tratar de nacionalizar nuestras cosas porque habían sido nuestras. Para Romero el que exige, el que pide o el que lucha por sus derechos es activista, revolucionario, comunista y socialista, te lo ponen así con un sello en la frente. (...)”

Yo una vez agarré sin querer mi carpeta en la comisaría esas veces que fui a hablar con el comisario que parece que la estaban leyendo y se la olvidaron arriba del escritorio y ahí leí barbaridades mías. En mayúscula, subrayado y en negritas la palabra *activista*. Las personas que se organizan y están activas en algo, es como que estás despertando algo, como que hasta ese momento estaba todo bien, todo tranquilo. (...)”

¹⁹⁰- Ya hemos comentado la inserción de la UTD en la región, su función de “municipio alternativo”, tal como lo definieron algunos autores. Esto se pudo comprobar con la experiencia de haber permanecido algunas horas en la sede de la UTD, presenciando la entrada de numerosas personas pidiendo o preguntando si se sabe de algún emprendimiento que esté requiriendo de mano de obra; hechos que contradicen las versiones provenientes del gobierno aliancista y del PJ. Incluso al caminar junto a “Pepino” Fernández –siete años después de los hechos- por las calles de General Mosconi, no menos de media docena de vecinos saludaron o consultaron por cuestiones laborales al ex trabajador de YPF; una situación ciertamente alejada de lo que se podría pensar sobre alguien “infiltrado” en una comunidad.

Si yo soy delincuente porque estoy violando un artículo cuando corto una ruta porque ya nadie me escucha y no tengo otro recurso, el delincuente más grande es el que me obliga a mí a hacer un corte.”

Los entrevistados además de reivindicar sus acciones de protesta, consideran inverosímiles las versiones creadas durante los conflictos. Ser activista, delincuente o subversivo, se convierten en calificativos que están tan alejados de ellos que al leer los enunciados descalificativos no surge una indignación sino más bien perplejidad. Rodolfo “Chiqui” Peralta, dirigente de la UTD reflexiona al respecto de estas declaraciones:

“Nos han metido en la cabeza que el que no trabaja es porque no quiere. Hay que ir a laburar como negro que uno es y no decir nada, y que te paguen diez centavos. (...) Nosotros desde un principio le decíamos a la Nación y a la Provincia que queríamos laburo porque veíamos que nuestra sociedad aparte de ser pobre, estaba en la decadencia, se han destruido hogares al no haber laburo. Gente grande, gente joven entraban a drogarse, a alcoholizarse, a prostituir a sus hijos, otros ir a Bolivia y hacer la guita fácil llevando droga. Entonces nosotros permanentemente queríamos evitar eso, no queríamos que Mosconi se muera. (...)

Creo que tuvieron información de la Gendarmería, y ahí había milicos que vivieron lo de la subversión, represores. Y ellos tienen la película de la subversión, del comunismo. Cuando tienen que llevar información los tipos entran a pensar de ese modo, dan esa información y a los políticos les conviene porque zafan, en ese momento es una brasa caliente que no saben cómo tratar. Hasta dijeron que había gente de Sendero Luminoso acá, mirá si los de Sendero van a venir a perder el tiempo acá con nosotros... Es toda una armazón para desactivarnos, para zafar ellos y para echarnos mierda encima como hacen todos los días.”

Según la opinión del dirigente entrevistado, la criminalización de la protesta y legitimación de la violencia fue impulsada principalmente por las fuerzas de seguridad, colocando al poder político como receptor de todo el bagaje de información tergiversada. Pero hemos comprobado hasta aquí que se trata de una política sistemática a lo largo del tiempo que involucra a diversas administraciones políticas nacionales y provinciales, las cuales apuntaron a construir un sujeto colectivo peligroso y dañino. Dichos que de plano fueron y son rechazados por los manifestantes y personas más o menos involucradas en el conflicto.

8.2. Conclusiones.

En un marco en el que continúa la postergación del sector del trabajo en beneficio de los sectores concentrados de la economía, en la ciudad de Mosconi y Tartagal el Estado distribuía a fines de 2008 más de 20.000 planes de trabajo precario por un monto de 150 pesos cada uno. Las protestas en el departamento San Martín fueron aplastadas. Manifestantes muertos, heridos, detenidos (la gran mayoría de ellos con relatos de torturas), vejación a mujeres durante las requisas hechas por la fuerza a los domicilios y en las manifestaciones, persecución y represión selectiva a dirigentes públicamente reconocidos. Muchos de ellos han estado encarcelados hasta en diez ocasiones y siguen imputados con decenas de causas de distinto calibre, la mayoría de ellos sobre delitos federales. Las Fuerzas de Seguridad, hoy desprestigiadas y vapuleadas por la población local –y prácticamente sin presencia en las calles–, mantuvieron sitiada las poblaciones durante el período en el que se dieron los episodios más importantes de conflicto.

El panorama social y económico de estas ciudades no cambió demasiado desde la época de sus reclamos más importantes. La violencia política ha persistido en posteriores reclamos hechos por la población desde el año 2002 al 2005, que incluyó la continuación del avasallamiento contra diversas comunidades de pueblos originarios en su lucha por el reconocimiento de tierras.

Salvo por la UTD, quizás el movimiento más importante de la zona que ejerce una militancia social y política y tiene a su cargo la organización y distribución de una importante cantidad de planes de trabajo, no ha habido un cambio de situación significativo en lo que respecta a la autoorganización de los pobladores. Incluso desde esta organización el panorama no es demasiado promisorio en cuanto a la realidad económica y política del movimiento piquetero en conjunto. Algunos de sus integrantes consideran que hay una importante desunión entre las distintas agrupaciones de la zona, que se han multiplicado y diseminado en los últimos cinco años. Situación acentuada, además, por decenas de procesos judiciales a manifestantes que participaron de las protestas, que al día de hoy se sostienen.

Los relatos de torturas y vejaciones a las mujeres surgen en una proporción inusitada en muchas de las personas entrevistadas. Luego de los enfrentamientos Mosconi fue tomado por gendarmes y policías que acosaron a la población con gases lacrimógenos, requisas ilegales y violaciones de domicilios, golpes, torturas y amenazas;

hechos que sin embargo se llevaron a cabo con la anuencia del poder judicial ya que el Juez Cornejo estuvo al tanto de todos estos episodios.¹⁹¹

Desde el aspecto simbólico estos hechos estuvieron acompañados por un discurso oficial que difundió imágenes relacionadas a lo delictivo y a la violencia política. Proporcionalmente, es el caso que reunió la mayor cantidad de este tipo de mensajes (el 65 % del total de registros), que a los oídos de los manifestantes entrevistados sonaron como relatos de ficción, sin punto de relación con sus experiencias personales. Como veremos a continuación, este tipo de interpretaciones no se aplicó sólo a casos lejanos a la Capital Federal y cercanos a la frontera, uno de los factores planteados en este caso como desencadenante de un rearme guerrillero.

¹⁹¹- El magistrado fue ascendido a juez de la Corte Suprema de Salta, cargo que seguía ocupando a mediados de 2009. Pese a que “las pericias demuestran que las balas que asesinaron a Barrios y Santillán durante la represión ordenada por el juez federal Abel Cornejo el 17 de junio del 2001 fueron producidas por una misma arma de un integrante del cuerpo especial de Gendarmería Nacional. El magistrado había ordenado el cambio de postas de gomas por balas de plomo según consta en el expediente. (...) El 15 de diciembre del 2005 se solicitó en la causa donde se investigan los asesinatos de Barrios y Santillán por vía judicial que Gendarmería Nacional informe ‘el o los nombres de los integrantes del grupo de apoyo especial que opero el 17 de junio de 2001 en la localidad de General Mosconi en el desalojo de la ruta nacional N° 34 y oportunamente se les reciba declaración indagatoria’. La que esta la fecha febrero del 2008 el juez Federal Abel Cornejo no hizo efectiva.” (<http://www.copenoa.com.ar/SALTA-Juez-acusado-de-violar-DDHH.html>). En mayo de 2009, Cornejo fue denunciado ante la justicia federal por el supuesto manejo fraudulento de 25.000 dólares provenientes de fondos secuestrados a narcotraficantes (Diario *Crítica*, 5-05-2009).

Capítulo 9

La Masacre de Avellaneda y "el complot por la toma del poder".



Los incidentes en el Hospital San José, momentos después de la represión.

Un manifestante en grave estado

Un manifestante en grave estado fue trasladado al Hospital Norte de Avellaneda como consecuencia de los episodios de violencia represiva ocurridos en esa localidad durante la noche del viernes 25 y sábado 26 de junio.

Varios de los manifestantes que participaron en el corteo de Avellaneda el sábado 25 de junio, se encuentran en estado de shock psicológico y físico, tras haber sido golpeados y sometidos a malos tratos por la fuerza represiva.

Entre los heridos, uno de ellos fue trasladado al Hospital Norte de Avellaneda en un estado de gravedad, tras haber sido golpeado y sometido a malos tratos por la fuerza represiva.

Además, los manifestantes que participaron en el corteo de Avellaneda el sábado 25 de junio, se encuentran en estado de shock psicológico y físico, tras haber sido golpeados y sometidos a malos tratos por la fuerza represiva.

TRAS EL SANGRIENTO PIQUETE

El Gobierno denunció un plan que busca derrocar a Duhalde

Lo dijo el ministro del Interior que aseguró que hay "elementos" de prueba. Llamado a la paz

El ministro del Interior, Jorge Martínez, denunció ayer que el Gobierno nacional tiene "elementos" que le permiten saber que los incidentes de Avellaneda formaron parte de un "plan de hecho organizado" que apunta a "desestabilizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo".

"Los hechos de Avellaneda no constituyen un hecho aislado y, en consecuencia, el Gobierno tiene elementos que le permiten presionar que algunos hechos o acciones preventivas se realicen de forma organizada y sistemática que busque neutralizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo", puntualizó Martínez.

El ministro del Interior hizo estas declaraciones en la Casa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tras haber estado en Avellaneda por el día 25.

El Gobierno tiene elementos que le permiten presionar que algunos hechos o acciones preventivas se realicen de forma organizada y sistemática que busque neutralizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo", puntualizó Martínez.

El Gobierno, en tanto, reiteró que siempre "valdrá la pena" a su alcance para seguir participando de la paz entre los argentinos, pero advirtió sobre la posibilidad de un plan de hecho "organizado y sistemático" que busque neutralizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo.

Tres los puntos incidentales del informe, que depuran como día 2 (sábado) y 29 (domingo), la administración Duhalde valdrá que a su vez se podría haber hecho de violencia y desestabilizar la Presidencia del Poder Ejecutivo.

DECLARÓ PRESENCIAL

En ese sentido, el presidente Duhalde declaró: "no voy a renunciar".

que se refieren los incidentes registrados en Avellaneda y piquetes en las inmediaciones del Puerto de Avellaneda, y en forma "totalmente organizada" que apunta a "desestabilizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo".

"Cuando la policía de esta ciudad fue Nacional entró a los piquetes y los piquetes se desmoronaron, pero los hechos se organizaron y se organizaron para neutralizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo", puntualizó Martínez.

En tanto, el jefe de Gabinete, Alfredo Arias, reiteró el peso del Gobierno por los incidentes, al indicar que "la masacre de Avellaneda fue un hecho organizado y sistemático que apunta a neutralizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo".

En la noche, el ministro del Interior, Jorge Martínez, y el ministro de Seguridad Interior, Juan José Álvarez, realizaron declaraciones públicas de los hechos ocurridos en Avellaneda.

También se realizó un informe de un complot de piquetes que se realizó el pasado 25 y 26 de junio en Avellaneda, en el polígono Unión, en el que se hicieron hechos "organizados y sistemáticos" que apuntan a neutralizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo.

Con este informe, el ministro del Interior, Jorge Martínez, denunció un plan que busca derrocar a Duhalde.

El Gobierno denunció un plan que busca derrocar a Duhalde. Lo dijo el ministro del Interior que aseguró que hay "elementos" de prueba. Llamado a la paz.



Hablan de "profesionales organizados"

El Gobierno nacional reiteró la teoría de que la violencia que sucedió en Avellaneda fue un hecho organizado y sistemático que apunta a neutralizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo.

En la noche, el jefe de Gabinete, Alfredo Arias, reiteró el peso del Gobierno por los incidentes, al indicar que "la masacre de Avellaneda fue un hecho organizado y sistemático que apunta a neutralizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo".

En tanto, el ministro del Interior, Jorge Martínez, denunció un plan que busca derrocar a Duhalde.

El Gobierno, en tanto, reiteró que siempre "valdrá la pena" a su alcance para seguir participando de la paz entre los argentinos, pero advirtió sobre la posibilidad de un plan de hecho "organizado y sistemático" que busque neutralizar a la Presidencia del Poder Ejecutivo.

Tres los puntos incidentales del informe, que depuran como día 2 (sábado) y 29 (domingo), la administración Duhalde valdrá que a su vez se podría haber hecho de violencia y desestabilizar la Presidencia del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el presidente Duhalde declaró: "no voy a renunciar".

Figura 29. Nota del diario *El Día*, dos días después de la represión.

9.1. La insurrección de diciembre de 2001.

El proceso recesivo comenzado en 1998, producto de las medidas económicas aplicadas al comienzo de esa década, tuvo su corolario en la crisis económica, política y social que estalló a fines de 2001. Fue el precedente inmediato de una nueva reestructuración política y económica ejecutada a partir de 2002. El masivo descontento popular de ese período ya se había manifestado institucionalmente en las elecciones de octubre de 2001, cuando la inasistencia a las urnas, el voto en blanco y las impugnaciones tuvieron niveles más que significativos: el distrito de la Capital Federal contó con el 40 % de votos anulados (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003, p. 208).

Sólo durante el año 2001 la cifra de desempleados fue incrementada en más de 500 mil personas que habían sido expulsadas de sus empleos, llevando la cantidad total de desocupados a más de 3 millones de personas en todo el país. La tasa de desocupación alcanzó oficialmente los 21.4 puntos -la más alta jamás registrada en el país- que se sumaba a un 25% de la PEA que se encontraba subempleada, con lo cual más del 45% de la población total tenía problemas laborales.

La salida de capitales, el aumento del endeudamiento con el FMI y la merma de las reservas internacionales debido a la constante demanda de dólares fueron algunos de los elementos que generaron a fines de noviembre de 2001 un “pánico financiero”: el retiro de depósitos y su conversión a dólares -que se retiraron o se enviaron al exterior- realizado por grandes capitales, no hizo más que profundizar el ciclo recesivo. El lunes 3 de diciembre, ante la descontrolada fuga de capitales financieros hacia el exterior, el gobierno de De la Rúa terminó optando por “pisar” los depósitos de ahorristas como medida extrema ante un virtual vaciamiento de divisas.

Según el Ministro de Economía Domingo Cavallo, “la Argentina ha estado sometida a ataques especulativos de quienes esperan beneficiarse con una devaluación de la moneda, y por esta razón el Gobierno se vio obligado a tomar ‘medidas extraordinarias’ para preservar la seguridad del sistema financiero” (Clarín, 1-12-2001). Esas medidas consistían básicamente en conceder a la banca la posibilidad de retener los fondos de cualquier tipo de cuenta (caja de ahorro, plazo fijo o cuenta corriente) dentro del sistema. Luego de que miles de millones de dólares se “fugaran” al exterior a lo largo del año, se prohibieron las transferencias de divisas y se imposibilitó retirar fondos de los

bancos superiores a los \$1.000 mensuales -todavía equivalentes a U\$S 1.000 con la ley de convertibilidad vigente-.

La maniobra del gobierno no apuntó a exigir a los bancos extranjeros (vehículos de la fuga de dinero) que aporten recursos de sus casas matrices si fuera necesario para mantener la liquidez. Por el contrario, se concibió lo que luego fue conocido como “el corralito”, o la prohibición a percibir sueldos o administrar pequeños ahorros, lo que significó una expropiación inusitada e inmediata a millones de asalariados que tenían depositados sus sueldos en cajas de ahorros. ¹⁹²

La medida afectó de manera determinante el volumen de circulante en el mercado y la cadena de pagos, lo que provocó una reacción en cadena que paralizó parte del sistema productivo y que profundizó consecuentemente la expulsión de fuerza de trabajo a las franjas de la desocupación. Incluso la economía informal de aquellos que apenas sobrevivían del cirujeo o de la venta de desperdicios recogidos en la ciudad se hizo imposible de sostener, a causa del vaciamiento de efectivo.

Para el jueves 13 de diciembre se comenzaron a registrar protestas espontáneas por parte de fracciones de la pequeña burguesía urbana en barrios de las zonas centro y norte de la Capital (Caballito, Villa Crespo, Belgrano), de fuerte actividad comercial que venía siendo afectada seriamente por las últimas medidas económicas. Las centrales sindicales CTA y CGT convocaron a un paro de actividades que tuvo un altísimo acatamiento, la séptima huelga general contra el gobierno radical. El paro fue acompañado por manifestaciones en todo el país, muchas de ellas con enfrentamientos entre trabajadores y las fuerzas de seguridad. En la ciudad de Córdoba se llegó a un principio de incendio en el edificio de la intendencia, además de la quema de coches de transporte público.

Ese mismo día el presidente De la Rúa recibió en la Casa de Gobierno al ex presidente Menem -recientemente salido de prisión domiciliaria procesado por tráfico de armas-, quien enarbolaba la bandera de la dolarización en la economía. La medida también era impulsada por el ministro de Economía Cavallo y el jefe de Gabinete Chrystian Colombo con el fin de sostener la convertibilidad y para evitar el colapso inmediato de la economía.

¹⁹²- Siguiendo a Bonnet (2007 a), un antecedente directo de esta retención de capitales sería el “Plan Bonex” de 1990 que consistió en la conversión forzada de depósitos en títulos de deuda pública. En este caso la *expropiación extraordinaria*, abarcó sólo plazos fijos y no las cajas de ahorro y cuentas corrientes como ocurrió en 2001.

El viernes 14 de diciembre se registraron saqueos en supermercados del sur de conurbano bonaerense y en algunas provincias, llevados a cabo por trabajadores desocupados. Fueron acrecentándose en cantidad y en distintas regiones del país y a diferencia de 1989, estos saqueos tendrían mayor violencia ya que desataban enfrentamientos entre comerciantes, fuerzas de seguridad y quienes ingresaban a los comercios.

Los saqueos a supermercados, los “cacerolazos” y otras protestas se extendieron por todo el país, incluyendo manifestaciones gremiales. En Neuquén un grupo de empleados estatales fueron reprimidos cuando pintaban las paredes de la Casa de Gobierno, en Córdoba ocurrió lo mismo con manifestantes del sindicato de Luz y Fuerza. En la provincia de San Juan un grupo de trabajadores estatales increparon a legisladores provinciales por los salarios percibidos en su totalidad en bonos.

La desestabilización económica vio su correlato en una progresiva escalada de movilizaciones en todo el país realizadas por distintos sectores de asalariados ocupados y desocupados, sindicatos, fracciones de la pequeño-burguesía, partidos de izquierda y organismos empresariales (CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Federación Agraria Argentina). Este tipo de manifestaciones se dieron en distintos puntos del conurbano, la Capital Federal y ciudades de distintas provincias, entre ellos, 400 comerciantes y empresarios de La Matanza que el 17 de diciembre interrumpieron el tránsito en la intersección de las Avenidas General Paz y Ruta 3, organizada por la Federación Empresaria de La Matanza.¹⁹³ La reacción oficial fue tratar de ignorar los hechos: el presidente señalaba por esas horas que “las protestas que se registraron en distintos puntos del país no deben ser motivo de alarma, no se puede hablar de conflicto general” (*Clarín*, 18-12-2001). El 18 de diciembre, tras seis días de saqueos en todo el país, el Gobierno intentó retomar el control de la situación con el reparto de alimentos a las franjas más empobrecidas en diversos puntos; sin conseguir calmar los ánimos de descontento.

En medio de versiones sobre renuncias en el gabinete nacional, la frecuencia e intensidad de las protestas llegó a su punto máximo el 19 de diciembre. Ese día miles de pequeños y medianos comercios de distintos puntos del conurbano bonaerense y de los

¹⁹³- Una pormenorizada descripción de los hechos día a día durante el mes de diciembre de 2001 se halla en el artículo “Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina”, de Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006; y en Acuña et al (2004).

suburbios de Rosario, Córdoba, Santa Fé, Mendoza y otras ciudades de todo el país, fueron devastados por decenas de miles de personas en condiciones de marginalidad o indigencia.

Ante la profundización de la crisis y con la imposibilidad de darle continuidad al modelo, de La Rúa decretó el Estado de Sitio sin restricciones.¹⁹⁴ El anuncio provocó casi inmediatamente que decenas de miles de personas tomaran las calles de la ciudad de Buenos Aires hacia la casa de Gobierno, en exigencia por la renuncia del ministro de Economía y del resto del gabinete, lo que finalmente ocurrió la noche del 19 de diciembre.

En la madrugada del 20 de diciembre se registraron saqueos en supermercados medianos y pequeños en todo el país y en algunos barrios de la capital. Los enfrentamientos que se desarrollaron a lo largo de ese día fueron de una magnitud inusitada particularmente en el centro de la Capital Federal, teniendo en cuenta la cantidad de manifestantes involucrados y el espacio ocupado en dichos encuentros. Fueron cientos de heridos y 5 los muertos registrados sólo en la Capital Federal.¹⁹⁵ A nivel nacional se contabilizaron 35 personas muertas por el ataque de las policías provinciales o de comerciantes que apelaron a las armas para disuadir los saqueos que todavía continuaban. Ese día la Central de Trabajadores Argentinos convocó a un paro. Las movilizaciones y cacerolazos se acrecentaron y aunaron en lo que Iñigo Carrera y Cotarelo (2003, 2006) llaman una *insurrección espontánea*:

“una muchedumbre en la calle, no organizada, que espontáneamente levanta barricadas, dando lugar a una lucha de calles en la que las masas pasan por encima de las organizaciones. La observación del hecho investigado permite señalar que estas cinco condiciones se cumplen. El pasaje de *multitud* a *masas* es verificable el 20 de diciembre en tanto existe disposición a la lucha, se ha producido la

¹⁹⁴- El Estado de Sitio es un régimen de excepción equivalente a un estado de guerra, en donde quedan suspendidas las garantías constitucionales. Es aplicado durante la alteración del orden interno o en caso de guerra o invasión exterior: el artículo 23 de la Constitución Nacional (Primera Parte, Capítulo Primero, Declaraciones, derechos y garantías) señala: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspendas allí las garantías constitucionales.” Esta fue la lectura hecha por la administración de la UCR, que terminó por profundizar la “conmoción interna”.

¹⁹⁵- Una vez más la represión al conflicto social reunió una conexión con la “represión antisubversiva” del pasado. El subcomisario Ernesto Sergio Weber comandó a los policías que mataron a los manifestantes Gastón Riva, Diego Lamagna y el militante de CORREPI Carlos Almirón. Dicho oficial, quien también participó de la represión a la manifestación contra el código contravencional en la Legislatura (julio de 2004) y ascendido a comisario durante el gobierno de Kirchner, es hijo de Ernesto Frimón Weber, torturador e instructor de marinos de la ESMA durante la última dictadura (Verdú, M.C., 2009, p. 82).

descorporativización y la lucha callejera se produce contra la fuerza armada del gobierno especializada en ese tipo de confrontación y las fuerzas armadas del Estado han sido preparadas para su eventual participación.” (2003, p. 300; 2006, p. 87).

Por la tarde el presidente convocó al PJ a realizar un gobierno de unidad como última medida posible para salvar su gestión. Los dirigentes justicialistas rechazaron la propuesta, evitando lo que hubiera significado una virtual coparticipación en la responsabilidad por la crisis. Las crecientes y numerosas manifestaciones alrededor de la Plaza de Mayo recibieron por respuesta la represión estatal mediante efectivos de la caballería montada y la infantería, además de helicópteros, motos, y el disparo de gases lacrimógenos, balas de goma y plomo contra los manifestantes. Éstos respondieron con piedras y con destrozos en lugares emblemáticos: decenas de bancos extranjeros que representaban la fuga de dinero al exterior y grandes comercios.

Los choques se sucedieron durante todo el día en todo el centro porteño, provocando cientos de heridos, más de 40 de ellos con balas de plomo. La renuncia del presidente se efectivizó con su huída en helicóptero, mientras que los enfrentamientos en todo el país provocaban alrededor de 40 muertos, centenares de heridos y detenidos. Días después, el 28 de diciembre de 2001, ocurrió lo que luego se conoció como “Masacre de Floresta”.¹⁹⁶

Estas jornadas significaron un punto de inflexión en el reordenamiento político y económico en los posteriores meses, aunque los sectores dominantes y la estructura política económica quedó prácticamente inamovible.¹⁹⁷

Novaro y Palermo (2004) plantean que la crisis de diciembre de 2001 fue una suerte de hito que resumió una frustración “epocal” iniciada en el período democrático de 1983.

¹⁹⁶- Maximiliano Tasca, Christian Gómez y Adrián Matassa participaron de uno de los tantos cortes de calles y cacerolazos que ocurrían casi diariamente por esos días. Al finalizar el cacerolazo los tres amigos fueron al maxikiosco de una estación de servicio y allí fueron asesinados por el policía Juan Velaztiqui, luego de que los jóvenes reivindicaran las imágenes del enfrentamiento de unos manifestantes con efectivos policiales en Plaza de Mayo, que veían por TV. Para "cubrir" el fusilamiento, Velaztiqui sacó los cuerpos del establecimiento y les tiró encima un cuchillo con el fin de que se creyera que las muertes eran producto de una reyerta. La impunidad del asesinato generó nuevas protestas de los vecinos contra la comisaría del barrio.

¹⁹⁷- Eduardo Grüner reflexionó sobre los cambios -y las perpetuaciones- a siete años de las jornadas de diciembre de 2001: “con las honrosas excepciones de siempre, lo que se demandaba era “que se fueran” los políticos, pero no los empresarios, los terratenientes, los consejeros de la city, los grandes banqueros, los propietarios de los grandes medios, todos los que habían fogueado de todas las maneras posibles esa situación que nos acercó al borde apocalíptico. (...) Pero aun si muchos se fueron –en helicóptero o por cualquier otra puerta trasera– la lógica de la ‘base material’ impuesta a sangre y fuego desde 1976 se quedó.” (*Página 12*, 21-12-2008)

Tras una larga secuencia de frustraciones y resignaciones, la crisis produjo inclusive una retórica “contrahegemónica” destinada a detractor a las instituciones democráticas. (pp. 11-16). Mencionan que un caso típico de estas descalificaciones de la democracia

es lo que se dio en llamar ‘setentismo’ y su rechazo del supuesto ‘formalismo institucional’ del 83. Sus componentes basistas, nacionalistas, antiimperialistas, exaltadamente populistas y antiliberales tiñeron el discurso público en los meses posteriores al estallido de 2001, y si bien moderado, siguieron haciéndolo en el ciclo político abierto por las elecciones de 2003, en una profusión de intervenciones periodísticas, intelectuales y políticas. (p. 14).

Este argumento elude el hecho de que el propio Gobierno nacional vilipendió el “formalismo institucional” al imponer un Estado de Sitio en cuestión de horas y al provocar seis muertes y decenas de heridos y detenidos sólo en la Capital Federal. Con respecto a la retórica, hemos comprobado que no es recién en 2001 que se registra una producción discursiva “setentista” -aunque no se trata de reivindicaciones antiimperialistas ni de exaltaciones populistas-, y provienen en su gran mayoría de agentes de instituciones estatales.

Tras la renuncia de De la Rúa y sus ministros, tres dirigentes del PJ ocuparon la presidencia de la Nación en el lapso de una semana: Puerta, Rodríguez Saa –que se mantuvo durante 7 días hasta su renuncia-, y Caamaño. La Asamblea Legislativa decidió volcar en el senador Duhalde la responsabilidad de conducir un gobierno de transición a partir del 1 de enero de 2002, hasta el llamado a nuevas elecciones.

La medida más importante adoptada en el comienzo de su gobierno fue el fin de la ley de convertibilidad y el establecimiento de un tipo de cambio libre, lo que ocasionó una devaluación del peso en más de un 300 % en pocos días. El 6 de enero de 2002 se sancionó la Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, que dispuso el cese de la convertibilidad en relación con el dólar estadounidense. De Mendiguren, presidente de la UIA, fue designado ministro de Producción el 3 de enero de 2002, formalizando la dirección económica más cercana a los sectores relacionados a actividades de exportación, quienes se beneficiarían con el tipo de cambio.

Los primeros meses de 2002 estuvieron signados por una profunda crisis económica y de representatividad de las instituciones del Estado. Con los pagos de la deuda externa suspendidos, una de las preocupaciones principales del gobierno de Duhalde era reiniciar formalmente las negociaciones con los organismos internacionales de financiamiento y

“ordenar” la política interior, lo que significaba poner coto definitivo a las protestas sociales. En este escenario se concretó la llamada “masacre de Avellaneda”.

9.2. Hacia el corte del Puente Pueyrredón.

Ante una realidad que no cambiaba significativamente para los sectores asalariados en continuo proceso de pauperización, las protestas fueron moneda corriente durante toda la primera mitad de 2002. Las asambleas populares tuvieron una activa presencia, se multiplicaron los comedores populares, la toma y reactivación de talleres y pequeñas fábricas por parte de sus antiguos empleados en procesos autogestivos, y una cada vez mayor presencia pública de Movimientos de Trabajadores de Desocupados y del movimiento Piquetero.

Cotarelo (2005 b) contabiliza una cantidad de hechos de rebelión -así considerados por la autora- que si bien fueron mermando a lo largo de todo el año, mantuvieron un nivel importante en la escena pública. De los 3437 hechos de protesta durante todo el año, el 65 % se registró en la primera mitad, en los que nuevamente los asalariados ocupados y desocupados mantuvieron una presencia mayoritaria (más del 50 % sobre el total) con demandas económicas y políticas principalmente dirigidas al Gobierno nacional y provincial (pp. 202-205).

Los enfrentamientos violentos también estuvieron presentes. El 6 de febrero el MTD de la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, mantenía cortada la ruta 205 en reclamos de planes de trabajo. El conductor de un Ford Falcon sin patente quiso superar el piquete con su vehículo y ante el intento de detenerlo, mató de un tiro a Javier Barrionuevo (31 años), integrante del MTD de esa localidad. Las pericias forenses establecieron que el disparo se efectuó a una distancia no menor a los 50 cm. El autor del hecho fue Jorge Bogado, ex policía y un estrecho colaborador del intendente duhaldista Alejandro Granados, del vecino Partido de Ezeiza.¹⁹⁸

La preocupación oficial por el creciente conflicto social se plasmó durante la primera semana del mes de junio con la posibilidad de fusionar la Secretaría de Seguridad

¹⁹⁸ - Según una declaración del mismo Darío Santillán, quien fue asesinado en la Estación Avellaneda, Bogado, “había colaborado con la dictadura militar. Eso no está saliendo en los medios, sale nada más que era un comerciante. Y gracias a la posición que tiene el gobierno de hacernos desgastar han matado a un compañero. ¿Cuántos muertos quieren ellos?” (MTD Aníbal Verón, 2003, p. 31).

Interior con el Ministerio de Defensa, propuesta impulsada por el ministro de extracción radical Horacio Jaunarena, titular de la cartera que coordinaba las FF.AA, y que tenía el aval del jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni. Coincidentemente con estas versiones, el entonces canciller Carlos Ruckauf recordó por esos días el impulso a la lucha antissubversiva dado en 1975, jactándose de que volvería a hacerlo si fuera necesario (*El Día*, 2-07-02).¹⁹⁹ La propuesta no era anacrónica si se tiene en cuenta la legislación imperante en el país que prevé la defensa del régimen cuando ve en peligro su estabilidad.²⁰⁰ Si bien la medida no tuvo una definición certera, nos presenta la lectura que a mediados de 2002 se hacía desde los funcionarios del Estado sobre el conflicto social.

El 18 de junio de 2002 se reunieron en la Casa de Gobierno el Jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, el Secretario de Seguridad de la Nación Juan José Álvarez y los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Allí se decidió poner en marcha un operativo con mayor presencia policial en las calles y se advirtió que no serían aceptados los cortes de ruta, método que estaba manifestando un aumento en su frecuencia. Ante la posibilidad de que se concreten masivas protestas en los siguientes días, el Secretario de Seguridad sintetizó la postura oficial: si se cortaban todos los accesos a la Capital al unísono sería tomado por el Gobierno como “una acción bélica” (*Clarín*, 19-06-02). El anuncio se hizo en un clima de mayor reclamo para aplicar “mano dura” a los reclamos piqueteros.

El día 20, miles de personas encolumnadas tras las banderas de la FTV y la CCC provenientes del conurbano bonaerense interrumpieron calles del centro porteño reclamando “basta de hambre y entrega. No al acuerdo con el FMI. Unirse y forjar el poder popular” (*La Nación*, 21-06-2002). Participaron sindicatos estatales y docentes

¹⁹⁹ - Nos referimos a los decretos 2770, 2771 y 2772 de octubre de 1975 que Ruckauf firmó como Ministro de Trabajo del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Los mismos habilitaron e impulsaron al “comando General del Ejército ejecute las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.

²⁰⁰ - La Ley de Seguridad Interior sancionada el 18 diciembre 1991 y promulgada en enero de 1992, habilita intervención de las FF. AA. en conflictos internos. En su artículo N° 31 dicha Ley señala: “(...) las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación”. La propuesta de intervención de las FF. AA. tenía impulsos “más directos” desde viejos adalides de las soluciones represivas, históricamente aliados al poder militar. En su programa de radio del 11-06-02, Mariano Grondona declaraba: “en el caso eventual de que hubiera un caos absoluto, naturalmente se piensa que alguien va a tener que poner orden. Entonces esa hipótesis lleva a pensar que los militares seguramente están pensando en la hipótesis. Si yo fuera (el jefe del Ejército, Ricardo) Brinzoni, por más que quisiera que no hubiera ninguna perturbación mi obligación profesional sería tener el plan B por si las moscas”. (*Página 12*, 15-06-2002).

agremiados en la CTA además de los metalúrgicos de la UOM, docentes agremiados en SUTEBA y partidos políticos como el ARI²⁰¹ y el Polo Social, liderado por el sacerdote Luis Farinello. El acto fue acompañado por un paro sorpresivo de los trabajadores del sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en reclamo por un reajuste de haberes. Los manifestantes se concentraron en Liniers, Constitución, Plaza Italia y Puente Pueyrredón, y por momentos paralizaron en el tráfico vehicular de la ciudad.

En el marco del endurecimiento de las políticas de seguridad interior, el Bloque Piquetero Nacional²⁰² junto a otras agrupaciones, entre ellas la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón,²⁰³ anunciaron una movilización a realizarse el día 26 de junio. Los objetivos consensuados entre todas las agrupaciones era reclamar por la regularización de planes sociales para desocupados, la implementación de tarifas populares en los servicios, planes para la construcción de viviendas, la entrega de alimentos a comedores desocupados, la libertad del dirigente Raúl Castells y de otros miembros de las agrupaciones que habían sido detenidos y encarcelados en otras manifestaciones, y manifestarse en contra de la política económica emprendida por el Gobierno.

Como en los casos anteriores, el plan de protestas concentrados el día 26 fue el resultado de un sin fin de intentos de negociación y pedidos de audiencia con diversos agentes del Gobierno, siempre sin un resultado satisfactorio. Las agrupaciones

²⁰¹- La organización Argentinos por una República de Iguales (ARI) fue un desprendimiento de la Alianza, coalición política que llevó al gobierno a de La Rúa. Fue creada en diciembre de 2000 entre el Partido Socialista Popular, el Partido Socialista Democrático y sectores disidentes de la Unión Cívica Radical – liderados por Elisa Carrió- y del Frepaso -liderados por Mario Cafiero-.

²⁰²- El Bloque Piquetero Nacional estaba constituido por las siguientes organizaciones: Polo Obrero, el Frente Único de Trabajadores Desocupados (ambos ligados al Partido Obrero, que reunía la mayor parte de militantes dentro del Bloque), Movimiento Territorial de Liberación (ligados al PC), Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (anteriormente vinculado a la CCC y liderado por Raúl Castells), Agrupación Tendencia Clasista 29 de Mayo y la Coordinadora de Unidad Barrial, o CUBa (ambas ligadas al Partido de la Liberación), Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (corriente piquetera del MST) y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), sin ligazón a algún partido aunque con una tradición política de izquierda. También participó el movimiento Barrios de Pie, ligado a la agrupación Patria Libre y cercano a la CTA, y el importante MTD Aníbal Verón –bautizado de esa manera en homenaje al mecánico salteño asesinado en 2000 en Salta, tratado en esta tesis- que reunía cerca de 18 agrupaciones de localidades de la zona sur y oeste del conurbano y de algunos barrios de la capital: MTD Lanús, Florencio Varela, Solano, Ezeiza, José C. Paz, Lugano, San Telmo, etc. El Bloque Piquetero y las agrupaciones que se congregaron ese día, considerados los “piqueteros duros”, distaban de la CCC y FTV, conducidas por Carlos Alderete y Luis D’Elía respectivamente, quienes tenían canales de comunicación con el gobierno.

²⁰³- Conformada por agrupaciones de desocupados nacidas a fines de la década de 1990 en la zona sur del conurbano y la provincia de Buenos Aires, incluyendo la ciudad de La Plata. Vinculada políticamente al peronismo revolucionario y la agrupación Quebracho, dicha Coordinadora no formaba parte del Bloque Piquetero, aunque se alineaba al abanico de agrupaciones piqueteras más contestatarias.

entendieron así que el único camino era una demostración masiva de fuerza con una interrupción masiva de las vías de comunicación –y de flujo de capital y de fuerza de trabajo-.

Debemos mencionar que la protesta fue nacional y no sólo en los accesos del sur de la Capital Federal, pero la envergadura de lo sucedido en el Partido de Avellaneda eclipsó al resto de las manifestaciones en numerosos puntos del país. Agrupaciones integrantes del Bloque Piquetero Nacional y organizaciones campesinas, de Derechos Humanos (HIJOS, Madres de Plaza de Mayo), estudiantiles y gremiales se manifestaron en distintas provincias. En Tucumán la CCC junto a la mayoría de los gremios estatales tomaron las calles de la capital en reclamo por sueldos atrasados, en Salta desocupados cortaron nuevamente la ruta 34 por aumentos en las partidas de los planes de trabajo, en la ciudad de Belén en Catamarca, en Resistencia (Chaco), en la ciudades de Córdoba, Rosario, Cipoletti, Neuquén, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes y Mar del Plata también hubo diversos cortes de rutas. Otro aspecto a destacar, mencionado por algunos entrevistados, es que la protesta no solo reunía a trabajadores desocupados. Muchos de los que asistieron (la minoría, desde ya) estaban sub ocupados o empleados (docentes y trabajadores del Estado entre ellos), que participaban de las organización de los MTD u otras agrupaciones políticas y sociales que asistieron a la manifestación del 26 de junio.

En torno a la Capital Federal, desde la mañana se comenzaron a cortar los puentes Pueyrredón, Alsina y La Noria que unen la Capital con la zona sur del conurbano, además de los accesos oeste y norte, en el barrio de Liniers y en la Avenida General Paz y Panamericana. Sólo en los accesos del sur de la Capital se llegaron a congregarse más de 20.000 manifestantes. El objetivo táctico no era trasladarse al centro de la Capital, sino sitiarla, interrumpir los accesos más importantes

Dos días antes de la manifestación desde los despachos oficiales continuaron los mensajes que advertían que no se permitiría la movilización. Se reafirmó que “el gobierno no permitirá que se incomunique a la ciudad de Buenos Aires con los cortes de todos sus accesos” (*Página 12*, 24-06-02); mientras que Atanasof reiteró que “existe la decisión de utilizar todos los mecanismos para hacer cumplir la ley y evitar que la capital quede aislada” (*Página 12*, 25-06-02).²⁰⁴

²⁰⁴- La información no oficial certificaba que la represión sería de alta intensidad: “un juez de la Nación le anticipó a este cronista, hace 72 horas, que se preparaba ‘una violenta represión contra los piqueteros en el Puente Pueyrredón’. ‘Ojo –dijo el magistrado–, van a meter bala.’ El magistrado lo sabía por personal de

Las advertencias se materializaron el mismo día 26 con un imponente despliegue de fuerzas de seguridad: más de 2000 efectivos de la Policía Federal y Bonaerense y respectivos cuerpos de Infantería, la Gendarmería y el grupo Albatros de la Prefectura Nacional, constituyendo el primer operativo con todas las fuerzas de seguridad presentes en un corte de ruta. Además estaban presentes efectivos de al menos dos comisarías de Avellaneda, y 60 del Grupo “Marea Azul”, cuerpo creado por Carlos Ruckauf en su función de gobernador de la provincia de Buenos Aires, y por el ministro de Seguridad Ramón Oreste Verón para “arribar a un estado ideal de seguridad” (Diario *Hoy* de La Plata, 27-7-2000).²⁰⁵ También convergieron ex agentes y efectivos uniformados y de civil que no figuraron en las planillas oficiales de las fuerzas, así como armas y municiones que tampoco tuvieron registro en los lugares de donde fueron sustraídas. (MTD Aníbal Verón, 2003, p.38).²⁰⁶

Las columnas de manifestantes llegaron por la Avenida Pavón y Mitre, dos avenidas que confluyen en el Puente Pueyrredón. Eran miles de personas tras las banderas del Bloque Piquetero, la Coordinadora Aníbal Verón (MTD de distintas localidades del sur del conurbano) junto a cientos de manifestantes de asambleas barriales, organizaciones políticas, barriales y gremiales. El gran despliegue de efectivos y la anunciada intención de no permitir el avance de las fracciones piqueteras más contestatarias al gobierno, conformaron el escenario del enfrentamiento.

En las distintas bajadas del puente se apostaron las diversas Fuerzas de Seguridad. En la confluencia de las avenidas se encontraban los efectivos comandados por Alfredo Fanchiotti, jefe del Comando de Patrullas de Avellaneda y uno de los responsables del operativo.²⁰⁷ El recuerdo de algunos entrevistados confirma las imágenes televisivas de

seguridad con el que está en contacto debido a sus funciones.” Miguel Bonasso: “La masacre anunciada”, 27-06-2002.

²⁰⁵- Esta fuerza especial estaba instruida y equipada para intervenciones rápidas en zonas específicas. Su nombre da la noción de su táctica: saturar una zona de tropas habilitadas para realizar detenciones, allanamientos y preparadas para posibles enfrentamientos.

²⁰⁶- Dicho trabajo colectivo editado por los integrantes de esta organización da un pormenorizado registro de algunas de las “irregularidades” que se vivieron esa jornada.

²⁰⁷- Fanchiotti ingresó a la Escuela de Cadetes de la Policía Bonaerense el 1 de marzo de 1977. De 1980 a 1987 se desempeñó en la comisaría segunda de San Vicente y fue condecorado en 1989 por la Cámara de Diputados por su actuación en la recuperación del cuartel de La Tablada frente a la toma del MTP. (*La Nación*, 28-06-2002). Había recibido una medalla de plata y el diploma al mérito por su trabajo en el Comando de Patrullas de Avellaneda y se jactaba de “formarse en la calle”, y de estar siempre al frente de los operativos a su cargo. En su carrera tuvo diez arrestos por “faltas leves” y una falta de mérito por dos “homicidios en riña” de los que resultó absuelto (MTD Aníbal Verón, 2003, p. 111). Durante los días inmediatamente posteriores a los enfrentamientos de Avellaneda se lo conoció como comisario “Franchiotti”. Así lo nombraron durante un lapso de tiempo los periodistas y el mismo gobernador Solá y

aquel día: apenas un pelotón de infantería compuesto por ocho efectivos quedó en medio de los miles de manifestantes que llegaron por esas arterias (ver mapa en el anexo). La abismal diferencia de fuerzas en esos pocos metros cuadrados abrió el escenario del inminente enfrentamiento. El puñado de policías se vio rodeado en segundos y sin embargo intentó impedir que los manifestantes siguieran avanzando. El señuelo resultó, y los choques se precipitaron instantes antes del mediodía cuando una mujer empujó a Fanchiotti, lo que derivó en un inmediato choque.

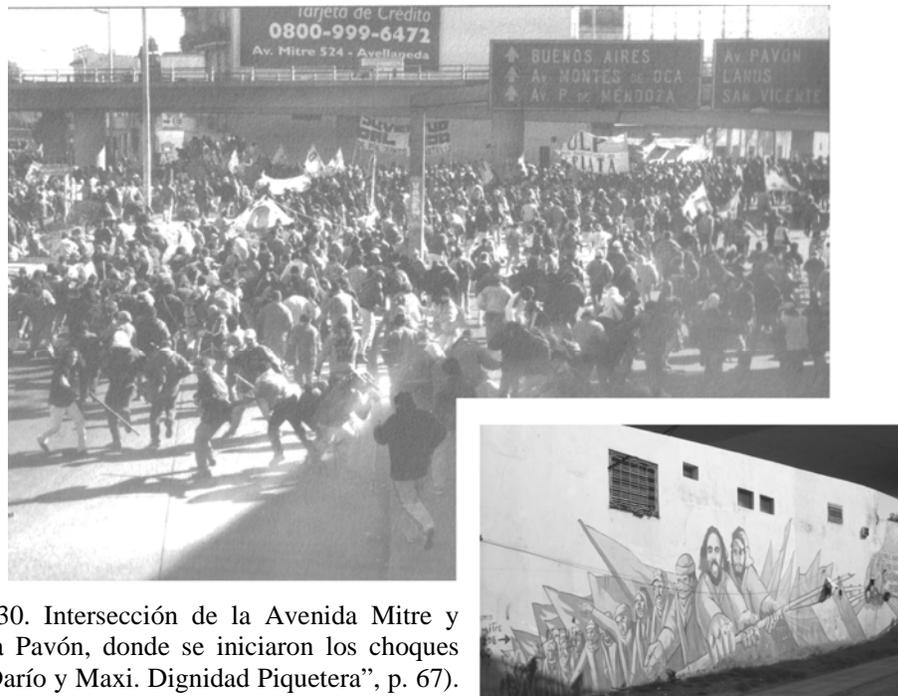


Figura 30. Intersección de la Avenida Mitre y Avenida Pavón, donde se iniciaron los choques (foto “Darío y Maxi. Dignidad Piquetera”, p. 67). En la actualidad, tras una de las bajadas del puente, el mural en homenaje a los dos jóvenes asesinados.

En pocos segundos decenas de tropas comenzaron disparar gases, postas de goma y, como se supo después, munición de plomo. Pero el desalojo de la zona y el inmediato repliegue de manifestantes ante los disparos no detuvo la acción represiva: comenzó una persecución por tierra y aire (mediante un helicóptero de la Policía) en dirección al centro de la localidad de Avellaneda y hacia la estación de de trenes de la línea Roca. Algunos manifestantes recuerdan que la persecución se extendió hasta otras estaciones ferroviarias.

así fue escrito su nombre en los comunicados oficiales. El error era sabido y callado por el comisario, hasta que se descubrió su verdadero apellido una vez que se comenzó a averiguar su legajo en el ministerio de Seguridad de la provincia. (*El Día*, 9-07-02).

Se trató de una virtual “cacería”,²⁰⁸ según las imágenes transmitidas por televisión en directo y según el relato de los manifestantes y de dirigentes políticos publicado en los diarios, constatada con la característica de los heridos, muchos de ellos baleados por la espalda mientras huían. Sin embargo, cuando utilizamos este término no pretendemos presentar un cuadro de una *represión desproporcionada o desmedida*.

En el comienzo de la persecución fue cuando se produjo la mayor cantidad de heridos. Leonardo Escobar, integrante de la Coordinadora Aníbal Verón, aseguró que la herida de bala que dejó en su pierna un orificio de entrada y otro de salida fue provocada por los efectivos de la Prefectura que disparaban en la Avenida Pavón (*Clarín*, 30-06-02). También hubo evidencias de francotiradores apostados en azoteas aledañas y en el puente peatonal junto al puente Pueyrredón: Leonardo Torales, militante de 17 años del Polo Obrero, debió ser operado de urgencia cuando una bala de plomo entró por su hombro y se alojó en una costilla, en un recorrido de arriba hacia abajo (*La Nación*, 02-07-02).

Sergio “Coco” Insaurralde, también del Polo Obrero, fue otro de los heridos de bala de plomo ese día, con un proyectil que dio en su cuello. Con 37 años en 2002, era trabajador gastronómico desocupado y hoy sigue su activismo en el barrio en donde vive, una zona humilde del Partido de Berazategui:

“Antes de llegar al puente nos cagan a balazos y a gasazos, estábamos a cuatro cuadras de donde comenzó la represión. El grueso de la represión era por Pavón, en Mitre hay una resistencia mucho mayor, una pelea palmo a palmo. (...) Ahí lo veo a Leiva [efectivo de la Policía de la Provincia] que empieza a tirar, estábamos a 30 metros y ahí siento que algo me quema, la primera impresión que me dio es que me habían pegado un gomerazo de atrás, pero me toqué y tenía sangre, ahí me di cuenta que era un perdigón. Ya a esa altura había heridos de bala por todos lados, en la espalda, las piernas; tiraban como cazadores, estaban a sus anchas. (...) Yo salgo corriendo de ahí, agarro un colectivo que venía para zona sur y lo paro, estaba todo ensangrentado. Me siento, me saco la campera y la bufanda, y ahí cae el perdigón. Había quedado entre los pliegos de la bufanda, lo agarro y lo presento como prueba en el juicio.”

Más adelante revisaremos otras características de la represión que hacen que todo el operativo no pueda considerarse un producto del “nerviosismo de los policías”.²⁰⁹

²⁰⁸- Sergio Kowalewski, uno de los fotógrafos que registró la represión y el momento en que asesinaban a Darío Santillán, dio una idea de la magnitud represiva: “por la avenida Pavón empezó la clásica cacería posterior a la represión, las camionetas iban a cazar y volvían con gente. Si el objetivo era liberar el puente no se explican el ensañamiento posterior y las persecuciones a los manifestantes por toda la zona durante toda la tarde.” *Página 12*, 28-06-2002.

²⁰⁹- Sin embargo, esta fue una de las explicaciones que se difundieron desde la presidencia: días después de la represión Duhalde consideraba que “un sector policial se sintió agredido y reaccionó de esa manera tan

El saldo de la represión fue en primer lugar el virtual fusilamiento de dos manifestantes piqueteros: Maximiliano Kosteki de 22 años y Darío Santillán, de 21. Kosteki fue baleado frente a un supermercado y desde allí fue trasladado por otros compañeros hasta la estación de Avellaneda, a unos 200 metros de distancia. Darío Santillán venía huyendo junto con otros manifestantes desde la intersección de las avenidas Pavón y Mitre, donde se había desatado la represión, y al entrar al hall de la estación Avellaneda se encontró con el cuerpo agonizante de Kosteki, a quien intentó asistir. En ese momento ingresaron efectivos de la policía provincial, entre ellos el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta (ambos con reclusión perpetua en la actualidad). La secuencia fotográfica revela que inmediatamente Santillán se incorporó a la entrada de los policías y corrió hacia el patio de la estación. Fue perseguido y baleado por los policías, para luego caer y ser arrastrado hacia la vereda de la estación. Murió en la parte trasera de una camioneta de la Policía provincial mientras lo trasladaban al hospital Fiorito, donde también fueron derivados muchos de los heridos con balas de plomo.²¹⁰

A partir de la autopsia se comprobó que recibieron impactos de perdigones de plomo de un calibre aproximado a los 9 mm., munición utilizada por las fuerzas de seguridad. Kosteki había sido herido en ambas piernas, además de recibir un disparo en el esternón a la altura del corazón que le provocó la muerte en pocos minutos, mientras que Santillán fue herido por una bala que fue disparada a una distancia menor a diez metros y que dio en el coxis, para luego romper una arteria en su espalda a la altura de la cintura.

Santillán y Kosteki militaban en distintos MTD de la zona sur del conurbano, enrolados en la Coordinadora Aníbal Verón y no se conocían entre sí. Dicha agrupación contaba al momento de los episodios con más de una docena de comedores en distintos barrios y una sala de primeros auxilios en una escuela, además de otras actividades de inserción barrial. Santillán militaba desde los 17 años y vivía en Monte Chingolo y hacía dos años que se había integrado a la organización, tenía una reconocida militancia social en MTD de Almirante Brown y luego de Lanús, y trabajaba en un obrador comunitario haciendo bloques de cemento con la finalidad de reconstruir las endeble casillas de la

descomedida. Hablar de la policía en general, por los asesinos que puede haber en la policía como en otro tipo de actividad, es un poco injusto” (*Página 12*, 4-07-02).

²¹⁰ - En el libro “Maxi y Darío. Dignidad Piquetera” del MTD Aníbal Verón se menciona que la directora de dicho Hospital fue cómplice de las detenciones hechas dentro del establecimiento. Esto también fue mencionado en algunas entrevistas, en las que se recordaba que la directora no hizo nada para impedir la presencia policial dentro del hospital, transformándose en un virtual centro clandestino de detención por el lapso de algunas horas.

zona. Kosteki se incorporó a la misma organización dos meses antes de los hechos, estudiaba dibujo y pintura y trabajaba en una huerta comunitaria dependiente del MTD de la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón.

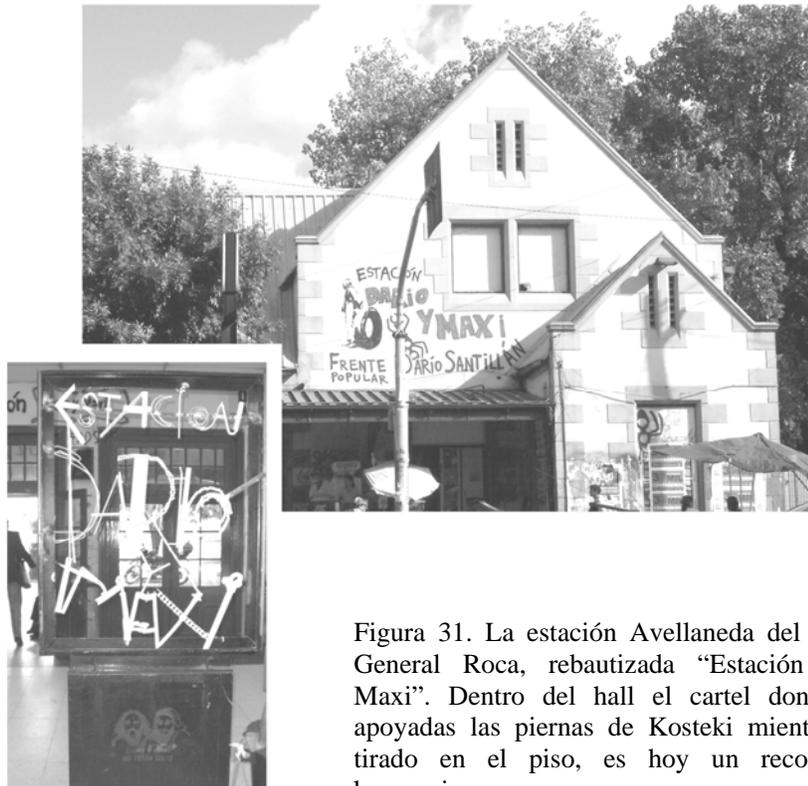


Figura 31. La estación Avellaneda del ferrocarril General Roca, rebautizada “Estación Darío y Maxi”. Dentro del hall el cartel donde fueron apoyadas las piernas de Kosteki mientras estaba tirado en el piso, es hoy un recordatorio / homenaje.

Además de los dos muertos, hubo casi 200 heridos de los cuales más de 30 fueron heridos con balas de plomo, uno de ellos en terapia intensiva. Si tuviéramos en cuenta este tipo de heridas en zonas vitales del cuerpo como el pecho o la cabeza, los asesinados podrían haber sido entre diez y quince personas. La Coordinadora Aníbal Verón reconoció una cifra mucho mayor de heridos, quienes no asistieron a hospitales por temor a represalias (*La Nación*, 30-06-2002). Se detuvo a más de 170 personas que fueron acusadas e imputadas de provocar daños y destrozos a comercios, autos y viviendas particulares, además de atentados y resistencia a la autoridad.

Jorge Jara, dirigente del MTD de Solano y encargado de la seguridad de su agrupación, estuvo presente en los choques con las fuerzas de seguridad y luego fue detenido. Contaba con 32 años en esa época, había sido cocinero antes de quedar

desocupado e integrarse a la militancia en su barrio y comenta las causas de la movilización y los hechos represivos:

“Nosotros sabíamos que si el 26 no salíamos, era una derrota abismal, gigante para el campo popular porque con las palabras nos iban a frenar, ni siquiera con los palos. Y sabíamos que el país no daba para más. La única forma era ir y poner el pecho, no había otra forma. (...) Nos encolumnamos en el puente junto a Barrios de Pie, el MTL, el MTR que era la columna más numerosa... Todos teníamos la lectura de que estábamos rodeados de milicos, los helicópteros sobrevolando la zona, los carros de infantería, los perros... Sabíamos que el mínimo error podía tener un costo enorme. Todo estaba armado para que se pudra, había dos grupos de infantería en el medio de todas las columnas, 16 pibes para 20 mil manifestantes... (...) Ese día hubo una caza de brujas. No es que no tenían intencionalidad de matar, el problema fue que no lo hicieron “profesionalmente”. Estaba todo preparado, si lo primero que dicen es que nos matábamos entre nosotros.

La represión estuvo repleta de incidentes que en conjunto conformaron una represión planificada. Señalemos algunos de estos hechos:

- Militantes de la Coordinadora Aníbal Verón denunciaron torturas y golpes luego de ser detenidos por agentes de la comisaría 1^a de Avellaneda, además de estar detenidos en estado de hacinamiento junto a mujeres, algunas de ellas embarazadas.

- Durante la represión hubo policías de civil que, al no estar identificados como fuerzas de seguridad y pasar desapercibidos en el momento en que comenzaron los disparos, aumentaron la potencia represiva sobre los manifestantes cercanos, presas de un grado mayor de vulnerabilidad.

- La *razzia* posterior a los primeros choques incluyó disparos de balas de goma y de plomo a manifestantes y otras personas cercanas a los enfrentamientos. Una comerciante de la zona, testigo de la represión, fue baleada por un hombre de civil que destruía sus vidrieras luego de desenfundar una escopeta utilizada por la Policía. Otro testigo denunció a la Justicia el número de la patente de una patrulla policial desde la cual se destruían vidrieras (*Clarín*, 1-07-02).

- Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Alfredo Bravo, aseguraron haber visto en la Comisaría de Avellaneda a un “presunto policía disfrazado de piquetero al que luego en imágenes difundidas por TV reconocieron mientras disparaba con una escopeta y recogía los cartuchos” (*El Día*, 3-07-02). Otra versión va en ese mismo sentido: La diputada de la ciudad de Buenos Aires Patricia Walsh declaró que mientras se encontraba en la misma dependencia policial vio a

un hombre “vestido como piquetero charlando de manera familiar con uniformados. Cuando lo vi por última vez se llevaba una bolsa de residuos en la mano izquierda, presumo que residuos no eran” (*Página 12*, 11-07-02).

- Hubo policías uniformados y de civil que recogieron los cartuchos servidos que delataban el uso de postas de plomo. Esto se sumó al hecho de que camiones de recolección de basura recogieron valiosa evidencia de los enfrentamientos en las calles de Avellaneda, y empleados municipales que baldearon el hall de la estación de trenes en donde se produjo uno de los tiroteos y donde fallecieron ambos jóvenes. Días después de los enfrentamientos la Municipalidad de Avellaneda negó que se hubieran emitido sendas órdenes y que los camiones de basura pertenecieran al concesionario habitual, lo que profundizó las sospechas sobre una maniobra deliberada de borrar pruebas.

- Se denunciaron autos sin matrícula que detuvieron a manifestantes. Violaciones de domicilio, entre otras el ingreso por la fuerza a un local de Izquierda Unida de la localidad de Avellaneda, de donde sacaron a una docena de personas que fueron detenidas. Cuatro de los cuales debieron ser atendidos en el hospital por heridas recibidas, entre ellos un joven que recibió un disparo de perdigones de goma en la cabeza (*El Día*, 6-07-02). Testigos que presenciaron el allanamiento ilegal recuerdan que los policías ingresaron gritando “zurdos de mierda” y que incluso hubo vejaciones a mujeres que se habían desmayado (*Página 12*, 17-07-02).

- Muchos de los manifestantes detenidos fueron sometidos a simulacros de fusilamiento y se registraron apremios contra los heridos en el Hospital Fiorito, además de detenciones a quienes llegaban a atenderse, de manera similar a lo que había ocurrido en el hospital de General Mosconi. Torturas sobre algunos de los detenidos y amenazas de muerte a testigos de los hechos se dieron durante y después de la represión. Entre ellos fueron amenazados amigos y familiares de Kosteki y Santillán, periodistas y la totalidad de los trabajadores de la estación ferroviaria de Avellaneda (*La Nación*, 21-07-02). Claudio Pandolfi, representante legal de la CORREPI y de cinco testigos que presenciaron los enfrentamientos, aseguró que algunas personas se acercaron a los vendedores de la estación y les dijeron: “nosotros sabemos que ustedes tenían gases en los ojos y no pudieron ver nada” (*El Día*, 30-06-02).²¹¹

²¹¹- El mismo abogado, quien denunció a algunos de los policías de civil que dispararon contra la multitud, también recibió amenazas. El 1 de julio de 2002, casi una semana después de la represión, una voz anónima dejó grabado en el contestador automático de su estudio jurídico de Lanús: “ya sabemos en qué cuevita te

- La represión y persecución tuvo su correlato en el plano judicial. Hernán Gurián, militante del PO y dirigente de la FUBA, se convirtió en el único manifestante condenado con una pena de 18 meses de prisión en suspenso por el Juzgado en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora. Fue acusado de “atentado a la autoridad agravado y tentativa de hurto” y condenado en 2005, antes que a los responsables de la represión.

Con rasgos cercanos a acciones represivas anteriores (de los años '90 y también de los '70), las fuerzas de seguridad aplicaron un castigo ejemplar a los grupos de manifestantes. Por la noche, más de 5000 personas se autoconvocaron en la Plaza de Mayo y frente al Congreso, el cual se encontraba con actividades en ambas cámaras legislativas y fue evacuado. En la ciudad de La Plata también se movilizaron frente a la gobernación la federación universitaria de esa ciudad y organismos de DD. HH.

Exhortada por el Bloque Piquetero a tomar una posición luego de los enfrentamientos, la CTA repudió la represión y convocó a un paro general en todo el país al día siguiente. Ese 27 de junio más de 20.000 personas se movilizaron hacia el centro de la Capital Federal, convocadas por el conjunto de agrupaciones piqueteras que fueron reprimidas. Asistieron centros de estudiantes, asambleas barriales, partidos de izquierda y la CTA, central sindical que no convocó a la manifestación pero participó marginalmente de la misma. La tensión durante la marcha fue alta: un día después del golpe aplastante dado a las organizaciones piqueteras, se montó un operativo con 2000 efectivos policiales distribuidos en los accesos más importantes a la capital y en derredor del Congreso de la Nación y la Casa Rosada. Más de mil personas fueron “cacheadas” por los policías en la estación de trenes de Constitución, y hubo un centenar de detenidos en Liniers –desde donde provenían columnas de agrupaciones- y un breve incidente en el cual algunas personas apedrearon a efectivos policiales, aunque fueron inmediatamente señaladas y aisladas por las mismas organizaciones.

La FTV y la CCC no asistieron a la convocatoria y realizaron actos en el partido de La Matanza. Luis D'Elía, dirigente de la FTV, ligado a la CTA, manifestó que “no

escondés. Te vamos a matar como a un perro, igual que a Santillán.” (*La Nación*, 2-07-02 y *Página 12*, 30-07-02). Una misa organizada el miércoles siguiente a la represión –día en que Maximiliano Kosteki hubiera cumplido 23 años- debió ser suspendida por las amenazas de muerte que recibieron los sacerdotes de Lanús que iban a officiar el acto. El sábado 29 de junio, Sergio Kowalewsky –el fotógrafo que registró el momento en que los policías dispararon contra Santillán– recibió un llamado a su teléfono particular: “te vamos a reventar” (*Página 12*, 3-08-02). Además de estas denuncias públicas, en las entrevistas realizadas los manifestantes también mencionan amedrentamientos y amenazas hechas en los barrios por personas desconocidas mediante cartas o “aprietes” en la vía pública a miembros de las agrupaciones que participaron en la manifestación.

participamos de lo que no controlamos” (*El Día*, 28-06-02). Si bien reclamó el esclarecimiento de los asesinatos, acentuó sus diferencias con las agrupaciones piqueteras más contestatarias.²¹²

En el resto del país también se registraron movilizaciones en repudio a la represión: una marcha en la ciudad de Neuquén que reunió a más de 2000 personas y cortes de ruta y movilizaciones en La Plata, General Mosconi, Córdoba, Tucumán, convocadas por gremios –principalmente docentes y estatales-, movimientos piqueteros, partidos de izquierda y movimientos de DD. HH.

Al ya particular papel cumplido por los medios gráficos como un actor más en la promoción e instalación de las lecturas de la realidad, durante los enfrentamientos en Avellaneda se sumó el rol jugado por los reporteros gráficos, que tuvieron una importancia específica en comparación a los anteriores hechos aquí estudiados. Varios periodistas gráficos registraron los momentos precisos de la represión y de los asesinatos, evidenciando la utilización de los cartuchos de color rojo en las armas –a diferencia de los blancos, que contienen munición de goma-, lo que constituyó la prueba del uso de postas de plomo.

Fueron publicadas por los diarios *Página 12* y luego *Clarín* y sin las mismas, las explicaciones oficiales sobre los hechos muy posiblemente habrían continuado el rumbo original. Sin embargo, fueron recién publicadas el día 28 de junio, lo que evidenció la manipulación de la información de los grandes medios gráficos.²¹³

²¹²- Capciosamente D’Elía expresó que “nosotros siempre reclamamos en paz y jamás nos hemos tapado la cara” (diario *Clarín*, 28-06-02). Luego adhirió a las hipótesis del oficialismo, abonando las versiones sobre un intento de insurrección y criminalizando directamente a las agrupaciones identificadas con ideologías de izquierda: “hay un sector de la izquierda que desde hace meses se cree la elegida para conducir la revolución en la Argentina y tiene como objetivo derrocar a Duhalde” (*Clarín*, 2-07-02); y “hay infiltración ideológica” (*El Día*, 1-07-02), remitiendo al grupo Quebracho. Este tipo de apreciaciones, ya vistas en los anteriores episodios, profundizaron la brecha existente entre los piqueteros considerados “combativos” y las agrupaciones de D’Elía y Alderete. Sus interpretaciones fueron registradas en el documental “La crisis causó 2 nuevas muertes” de Patricio Escobar y Damián Finvarb, que hace alusión al titular del diario *Clarín* del día 27 de junio. Allí expuso con mayor elocuencia su caracterización de los hechos al considerar que los integrantes del Bloque Piquetero “arreglaron con el gobierno de Duhalde una represión de baja intensidad, o sea ‘nosotros vamos al corte, ustedes nos tiran unos gases y nosotros nos vamos.’ Al gobierno le sirve porque puede demostrar en Washington que tiene autoridad para disolver el conflicto social, y a los dirigentes estos les servía porque les permite colocarse en el centro de la escena política y decir que era un gobierno represor, autoritario, y que ellos eran los verdaderos piqueteros. Era un negocio para ambos. ¿Por qué? Porque necesitaban muertos.”

²¹³- Los responsables de la edición del diario *Clarín*, quienes se jactaban de la labor hecha por el fotógrafo “Pepe” Mateos, anunciaron que tanto el Poder Ejecutivo Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires solicitaron insistentemente al diario las fotografías, las cuales fueron negadas para ser puestas a disposición sólo de la Justicia. Sin embargo, el gobernador Solá manifestó que creía que el diario “le dio todas las fotos, el día anterior, al Presidente” y se las había negado a él (*El Día*, 30-06-02). Días después y a modo de descargo, el diario informó que “al realizar la edición de ese día, ni él [por Mateos] ni los editores

La elocuencia de la evidencia fotográfica provocó un vuelco casi inmediato en el relato de los hechos. Desde los medios de comunicación gráficos, televisivos y radiales, se comenzó a mitigar la inconmensurable cantidad de información tergiversada que había colocado a los piqueteros desde días antes de la movilización como delincuentes que iban preparados para una especie de guerra y que, posteriormente, terminaron asesinándose entre ellos. Por parte del Gobierno nacional y provincial, se colocaron a los funcionarios del Ejecutivo nacional y provincial en un virtual lugar de víctimas: manifestaron que se vieron “sorprendidos” y “engañados” por los policías que habían relatado los hechos de una manera completamente contraria a la realidad. Así, en primer lugar refutaron las explicaciones que había dado el comisario Fanchiotti sobre el enfrentamiento quien, según sus palabras, él y las fuerzas bajo sus órdenes nunca entraron a la Estación Avellaneda y se habrían mantenido a más de 100 metros de los enfrentamientos, además de no haber utilizado nunca munición de plomo. Aseguró que los manifestantes “habían ido a combatir”, y que “se escucharon armas de fuego por parte de los manifestantes” (*Clarín*, 29-06-02). Se demostró la falsedad de esas versiones apenas comenzaron a analizarse las fotos, que demostraban que la munición utilizada sí era de plomo, que él y sus hombres entraron a la estación y dispararon a los manifestantes, y que los manifestantes reducidos estaban inermes. Consecuentemente y en segundo lugar, el registro gráfico echó por tierra las explicaciones difundidas hasta el momento desde el oficialismo, basadas en un aumento en la combatividad de las agrupaciones piqueteras y el inicio de un plan para “tomar el poder”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá ordenó el pase a disponibilidad del comisario inspector Alfredo Fanchiotti. Días después, ya bajo prisión preventiva, fue acusado por varios testigos que vieron como el comisario junto a su chofer el cabo Alejandro Acosta abrieron fuego sobre Santillán, hecho que ambos no

fotográficos (...), con la información que teníamos en ese momento, pudimos armar el rompecabezas. (...) Si uno de los roles del periodismo es ayudar a entender la realidad, éste ha sido un momento para sentirnos orgullosos” (*Clarín*, 29-06-02, p. 7). La decisión de “ayudar a entender la realidad”, se hizo pública recién 48 hs. después de la represión, pese a que los editores del diario ya contaban con la secuencia de fotos pocas horas después de los hechos, tal como ellos mismos reconocieron. Sin embargo la tapa de dicho diario correspondiente al día 27 de junio anunció sugestivamente en su titular que “*La crisis causó 2 nuevas muertes. No se sabe aún quienes dispararon contra los piqueteros.*” Como vimos en el caso de la muerte de Teresa Rodríguez, no era la primera vez el diario atribuía a “la crisis” la causa de muertes durante enfrentamientos con fuerzas de seguridad (ver nota 120 en capítulo 5). Tampoco era la primera vez que se manipulaba la información al no mostrar, contra toda evidencia empírica, que eran los efectivos de seguridad los causantes de las muertes.

reconocieron. Dos policías también acusados fueron declarados prófugos por la Justicia, luego de que se los vinculara a las muertes de los dos manifestantes.

La Justicia Federal ordenó el secuestro de armas de 120 policías pertenecientes al Cuerpo de Infantería, el Grupo Marea Azul, del Comando de Patrullas y de la comisaría primera de Avellaneda. Dos días después los despidos alcanzaron otros integrantes de la policía, entre ellos el Coordinador General de la fuerza, comisario mayor Ricardo Degastaldi y su segundo en orden jerárquico, comisario mayor Edgardo Beltrachi. También debieron alejarse del Gobierno el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Luis Genoud. Pocos días después este cargo sería ocupado por el frepasista Juan Pablo Cafiero, quien tomó como una de sus primeras medidas la intervención de la comisaría 1° de Avellaneda debido a la sospecha del ocultamiento de pruebas por parte de sus efectivos. También fueron identificados y detenidos dos de los policías de civil que dispararon contra la multitud. Esta serie de reajustes de cargos y funcionarios sirvieron de válvula de escape en la gestión de Duhalde y de Felipe Solá, quienes procuraron sortear desde un principio la posibilidad de una renuncia.

El 1 de julio los dirigentes de diversas agrupaciones pertenecientes al Bloque Piquetero ratificaron el cronograma de protestas en los próximos días, entre ellas una marcha a la Plaza de Mayo el 9 de julio.²¹⁴ El miércoles 3 de julio, a una semana de la represión y los asesinatos, se organizó una nueva movilización al Congreso y la Plaza de Mayo convocada por el Bloque Piquetero. El operativo policial para esta marcha fue de grandes dimensiones: se dispusieron alrededor de 1500 efectivos alrededor del Congreso Nacional y la casa de Gobierno y casi un millar más distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Se congregaron tres columnas provenientes del norte, oeste y sur del conurbano bonaerense, lo que generó una nueva interrupción de las principales arterias de entrada y salida de la Capital por el lapso de unas horas.

El anuncio del acto provocó que los funcionarios del oficialismo retomaran las versiones que relacionaban la protesta y la violencia, dejando atrás incluso las explicaciones sobre los “excesos” y los errores, reconfirmando las caracterizaciones anteriores a la represión. Así lo manifestaba el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, quien por un lado reclamaba la averiguación de los crímenes y del desenvolvimiento policial

²¹⁴- La divergencia entre las organizaciones piqueteras tomó un nuevo giro, producto de la represión y de las alineaciones políticas hechas en consecuencia. El Movimiento Barrios de Pie, ligado a la FTV de Luis D’Elía decidió tomar distancia de dicha organización –sin desprenderse de la CTA- por la actitud tomada por el dirigente, quien no participó de los actos en repudio a la represión.

durante la represión, pero quien también advertía que “quienes quieren protestar están en su derecho, pero les pedimos que aislen a los violentos y eviten perjudicar al resto de la población”. Versiones que apelaban además a los antiguos estigmas volcados sobre la izquierda revolucionaria también fueron vertidas desde el Gobierno nacional. El vocero presidencial Eduardo Amadeo identificó en las filas piqueteras a militantes “que desde una perspectiva absolutamente mesiánica, proponen la lucha armada o la violencia para destruir el funcionamiento de la democracia” (*La Nación*, 02-07-2002).

Sin embargo, la marcha del 3 de julio fue masiva y se convirtió en la movilización más importante desde las manifestaciones de diciembre de 2001. Además de las organizaciones piqueteras convocantes, participaron la CCC y la CTA (junto a sindicatos adheridos a la misma), la Federación Agraria, partidos de izquierda, organizaciones gremiales universitarias y de Derechos Humanos, asambleas barriales y agrupaciones estudiantiles. En total fueron alrededor de un centenar de organizaciones y más de 40.000 personas que se movilizaron, además, en rechazo al modelo económico aplicado por el gobierno y en repudio al asesinato de los militantes. En un documento único se exigía la reorientación del modelo de políticas sociales que garantice una auténtica inserción social en trabajo, salud y educación; la actuación independiente y efectiva de la Justicia en el esclarecimiento de los asesinatos de Kosteki y Santillán; y garantizar los derechos y garantías de manifestantes y militantes sociales. Como modo de descomprimir un creciente estado de crisis agravado por el asesinato de los dos militantes, ese mismo día se anunció el adelantamiento a elecciones desde el gobierno, anuncio que no planeaba hacerse antes del año 2003.

¿Podríamos suponer que el anuncio se debió a una *estructura de oportunidades políticas*, abierta a partir de la comprobación de una represión en la que se disparó y mató impunemente a manifestantes desarmados? Sería reducir la complejidad de los hechos y dar una explicación especulativa. La represión -que no fue sólo al movimiento piquetero, sino a todo el arco de organizaciones en estado de movilización- fue rechazada inmediatamente por decenas de miles de personas incluso antes que se publicaran las fotos donde se demuestra la serie de “irregularidades” cometidas. La continuidad del Gobierno nacional se vio jaqueada por esa reacción inmediata y masiva que se extendió durante varios días, antes que por la aparición del material gráfico, que de todos modos fue determinante en el esclarecimiento de las acciones represivas. La envergadura de aquella “puesta en orden” –que sin embargo sentenció la paulatina retirada de las

organizaciones piqueteras de la escena pública, al menos por lo que restó del año 2002- no fue avalada por diversos sectores de la sociedad, en un panorama de crisis económica que todavía afectaba no sólo a los desocupados.

El 9 de julio se preparó una nueva manifestación al Congreso y luego a la Casa de Gobierno. Ese día, según los informes de inteligencia previos a la represión del 26 de junio, habría comenzado el intento de “toma del poder” por parte de las agrupaciones piqueteras. Además de las organizaciones directamente vinculadas a aquellos enfrentamientos, asistieron partidos de izquierda. Se congregaron más de 40.000 personas, muchas de ellas pertenecientes a fracciones de la pequeño burguesía y sectores medios urbanos, concentrados en las asambleas barriales y en su mayoría sin filiación política. Mientras la FTV y la CCC se mantuvieron ausentes, la CTA se unió a la movilización mediante una reducida delegación de Capital Federal. También hubo manifestaciones en Bariloche y Rosario, donde se reunieron alrededor de 10.000 personas.

Pocos días después, a casi un mes de los enfrentamientos de Avellaneda, el INDEC publicaba un informe que confirmaba una serie de datos que los movimientos piqueteros conocían en carne propia: en el país había más de seis millones de desocupados o subocupados, lo que representaba casi el 50 % de la PEA. Se registró además una disminución en la PEA a causa de una cada vez más amplia franja de personas que no buscaban trabajo, un fenómeno que se conoce como “factor desaliento” y que es propio de períodos de grandes crisis: dejar de salir a buscar trabajo porque se tiene la certeza de que no se encontrará.

Si bien la protesta realizada ese día se realizó en un período de alza de las luchas, la represión marcó un punto de inflexión irreversible y consolidó un proceso fractura en la organización de los sectores populares. Con el comienzo de una tendencia a la baja de las movilizaciones de los sectores populares, durante el mes de septiembre representantes de corporaciones empresarias comerciales, inmobiliarios, de propietarios agrícolas e industriales se movilizaron en torno a “un reclamo central de mayor seguridad ante el desarrollo de una ‘ola delictiva’, reclamo que sería luego retomado en 2004” con las marchas organizadas por el empresario Juan Carlos Blumberg (Cotarelo, 2005 b, 211).

9.3. El Gobierno frente a la “guerra de piqueteros”.

La información vertida por algunos medios gráficos y por el Gobierno nacional tuvo un perfil similar a la difundida durante los enfrentamientos de años anteriores. Como señalamos más arriba, antes de la masiva manifestación del día 26 de junio el Gobierno nacional advirtió que no se permitiría ningún tipo de interrupción, so pena de dar la orden a las fuerzas de seguridad de reprimir.

Nos encontramos con que dichas advertencias están bastante presentes en la memoria de los manifestantes que participaron en los hechos, lo que nos lleva a hacer una aclaración sobre el carácter político de los mismos. Los anteriores episodios de protesta estuvieron protagonizados por manifestantes con un grado muy heterogéneo de activismo, desde la militancia en sindicatos y agrupaciones (el caso de la UTD de Mosconi, o de la joven “comisión de Padres” de Cutral C6) hasta la incursión de personas sin un grado importante de militancia previa. Por el contrario, en el caso del puente Pueyrred6n todos los manifestantes tuvieron en mayor o menor medida una militancia en las diversas agrupaciones que participaron, lo que suponemos que influy6 en un registro m6s atento de los hechos previos al corte. Ser6a incorrecto decir que todos los integrantes de estas agrupaciones contaban con una acabada experiencia pol6tica, pero s6 estaban nucleados en organizaciones que promov6an el debate pol6tico, las pr6cticas deliberativas y las decisiones consensuadas, por m6s que una gran porci6n de integrantes haya estado vinculada s6lo por el acceso a los planes de trabajo.

Sumado a esto, las advertencias y el estado p6blico que tom6 la protesta del 26 de junio present6 un escenario de “represi6n anunciada” que difiere de los anteriores casos. Suponemos que estos elementos permiten que hoy sean m6s palpables en la memoria de los manifestantes muchas de las versiones oficiales.

Es el caso de Ram6n Barrionuevo de 28 a6os en 2002, estaba desocupado y colaboraba en los distintos talleres del MTD de Solano desde el a6o 2000. Aunque no formaba parte de la direcci6n de la agrupaci6n, recuerda los dichos:

“Empezaron a decir que nosotros no respet6bamos nada, que no dej6bamos cruzar la calle, y si nosotros no dej6bamos de cortar ya socialmente 6bamos a perder todas las reivindicaciones y pol6ticamente como grupo 6bamos a quedar aislados, sin el trabajo que pol6ticamente ven6bamos haciendo. Entonces dec6bamos en una palabra, plata o mierda, porque si no 6bamos, 6bamos a quedar totalmente sin nada.

Todos los manifestantes entrevistados coinciden en que tenían en cuenta las advertencias provenientes del Gobierno y por lo tanto sabían que iban a asistir a una manifestación con altas probabilidades de que se produzcan choques. “Coco” Insaurralde, del Polo Obrero recuerda la certeza de quienes se manifestaron ese día: sabían que iban a ser reprimidos:

“Nosotros en el Bloque Piquetero sabíamos que había un 99 % de posibilidades de represión. Pero estábamos convencidos de que había que ir, que si no íbamos ese día, no podíamos salir más. En todo caso vas y medís, ‘qué hago, qué no hago’, pero no podés dejar de ir. (...) La carta de la represión era muy jugada, el Fondo Monetario estaba pidiendo que reprima, que ponga orden, era la carta de gobernabilidad. Duhalde tenía que mostrar que era capaz de disciplinar a las bases. Por eso vamos a una marcha donde no van chicos, en nuestras columnas se decide que no participe gente con mucho peso, con problemas motrices, madres con chicos, embarazadas... Y fue una cosa muy interesante pelearse con compañeros y compañeras que querían ir, y hacerles entender que no se podía porque iban a ser un estorbo en caso de que se reprima.”

Esa decisión táctica fue compartida por las demás agrupaciones que asistieron al puente. Pero nunca supusieron que la magnitud de la represión sería como la que finalmente se dio. Ángel Ibáñez, albañil de oficio, era y es actualmente militante de organizaciones sociales en La Plata. En ese entonces, con 28 años, formaba parte de la mesa directiva de la CTD (Coordinadora de Trabajadores Desocupados) de La Plata, y también estuvo presente en la represión. Recuerda al respecto de las declaraciones oficiales:

Dos semanas antes empezaron Aníbal Fernández y Atanasof que plantearon que plantearon que no iban a permitir que llegásemos al puente. Fueron señales. Esa semana nosotros redefinimos la discusión política y planteamos la necesidad de llegar al corte y agruparnos todos, que si nos dividíamos nos iban a cagar a palos por separado. Nunca pensamos que iba a pasar lo que pasó. Y pese a los avisos nos movilizamos, no podíamos amedrentarnos si nos estaban cagando de hambre, es justo lo que estábamos planteando. El problema para ellos era que las barriadas populares, sin los partidos políticos tradicionales estaban discutiendo política. Los pobres estábamos discutiendo política, con sus verdaderos líderes o referentes, como sea, eran los barrios discutiendo política de verdad en el país.

De manera similar opina Elisa Delboy, técnica en salud desocupada en 2002 y miembro del MTD de Guernica (en la Coordinadora Aníbal Verón) donde militaba Maximiliano Kosteki. Hoy dirige el MTD al lado de su casa con el nombre del joven

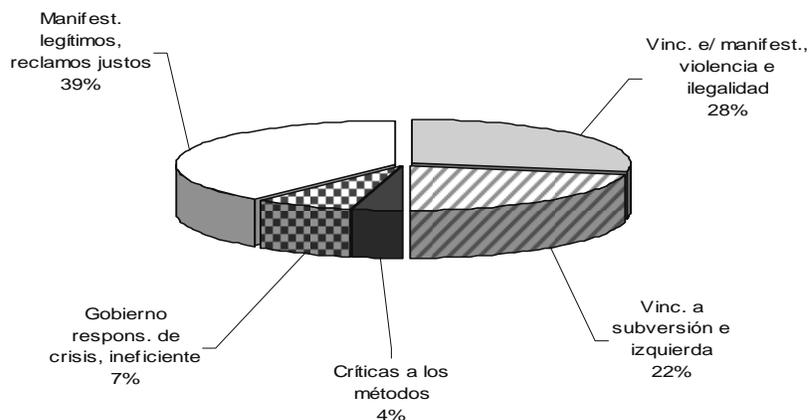
asesinado, en donde brinda almuerzo y merienda a más de 90 chicos, y donde se organizan talleres de música, tallado en madera y pintura, y apoyo escolar. Haciendo referencia a un corte de ruta anterior, señala la voluntad y el clima que se vivía en las agrupaciones piqueteras:

“Eran cientos de familias con sus hijos los que iban a los cortes. Carpas sanitarias, se armaba una infraestructura para resistir, para quedarse varios días. Yo creo que el poder tuvo miedo de un tipo de organización así. Se juntaba el poverío de muchos lugares, pero la gente iba y estaba. Porque la pasaba tan mal en su casa y en su vida, con sus pibes. Incluso en los cortes se hacían varias asambleas al día, masivas, y la gente hablaba y decía que no quería morir de rodillas.”

En cuanto a las declaraciones publicadas en tres diarios nacionales y el diario platense *El Día*, registramos un total de 69. Las que contienen algún tipo de caracterización o definición de los manifestantes o la protesta son 54, mientras que las que contienen reclamos, denuncias o exigencias son menos de la mitad del total, 28 enunciados. De los cuales 24 (el 85 %) son denuncias y condenas a la represión proveniente de periodistas, dirigentes gremiales y políticos; en un conflicto en donde el papel de los medios gráficos tuvieron un peso relativamente mayor en comparación a los otros episodios, inmediatamente luego de los enfrentamientos. El resto de esos reclamos estaban destinados a exigir el cese de la protesta o la intervención de la fuerza pública.

Como en los casos anteriores, predominan las caracterizaciones, por lo cual nos detendremos en el análisis de los casos que las contienen (54 declaraciones):

Gráfico 9: Gran Buenos Aires. Ciudad de Avellaneda, junio de 2002. Distribución de caracterizaciones en las declaraciones relevadas.



Fuente: elaboración propia en base a diarios Clarín, La Nación, Página 12 y El Día (La Plata)

Vemos que más de la mitad de los casos registrados (54 %) fueron en desmedro de los manifestantes, entre calificaciones de tono moral, político e ideológico con valores negativos y una participación menor de críticas a los métodos de protesta. El 39 % de las declaraciones fueron en apoyo y reivindicación de los manifestantes.

La particularidad de estas intervenciones es que, de manera similar a los casos del norte salteño anteriormente vistos, prácticamente todas las declaraciones se produjeron luego de la represión. Allí fue cuando aparecieron básicamente dos hipótesis impulsadas desde el gobierno, principalmente por el ministro del Interior Jorge Matzkin. En primer lugar una versión que ponía el peso en las caracterizaciones vandálicas y que continuaba con la idea de que existió un “enfrentamiento entre los mismos manifestantes”, interpretación que ya había sido difundida en otros cortes de ruta que terminaron con represión y muertes. El gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá fue uno de los primeros que deslizó la idea de que “los piqueteros se mataron entre ellos” (*Página 12*, 30-06-02), y desde el Gobierno nacional se afirmó que las muertes se debían a “una puja entre sectores internos de los piqueteros” (*El Día*, 27-06-02).

En segundo lugar, la difusión de una insurrección en ciernes –versión sostenida en la militancia de izquierda y en un supuesto plan organizado por agitadores profesionales-, confirmada luego por funcionarios de la SIDE y del Ejército. Estos mensajes fueron difundidos por algunos medios gráficos en los dos días siguientes a la represión, como en el caso del diario *La Nación*, cuyos titulares y noticias aseveraban que “grupos radicalizados de izquierda destrozaron negocios y quemaron autos y colectivos”.²¹⁵

Con ambas versiones, la primera maniobra fue intentar desvincular la muerte de los dos manifestantes de las fuerzas de seguridad, argumentando que se habían utilizado postas de goma, falsedad que fue demostrada pocas horas después con el registro fotográfico.

Debemos tener en cuenta que a diferencia de los casos analizados en esta tesis, este episodio se caracteriza por un corte de ruta que no abarcó más que unas horas, lo que no quita que haya sido el corolario de una situación anterior de conflicto. Esta particularidad

²¹⁵- En inmediaciones al corte de calles en Avellaneda, un grupo de personas armadas interceptaron dos colectivos, hicieron bajar al chofer y a los pasajeros y luego los incendiaron. Las agrupaciones piqueteras rechazaron de plano la autoría de esos hechos. Se supuso la intervención de personas que deliberadamente realizaron ese tipo de desmanes para perjudicar la imagen de los manifestantes, como también ocurrió en Corrientes y en Tartagal con el saqueo de comercios, cuyo protagonismo fue siempre negado por los manifestantes.

condicionó en primer lugar una menor cantidad de declaraciones en comparación a otros hechos que ocuparon varios días en los medios gráficos. Y en segundo lugar que prácticamente todos los registros –salvo uno, dirigido a criticar los métodos de la protesta a realizarse el día 26, proveniente de funcionarios del Ejecutivo Nacional- se hayan realizado luego de la represión. Teniendo esto en cuenta, las manifestaciones a favor de los manifestantes no llegan al 40 % del total, y sólo en un caso fueron realizados por ellos mismos además de periodistas y dirigentes gremiales y de partidos políticos de izquierda que se solidarizaron. Además de esa intervención, las otras 3 declaraciones registradas por parte de los manifestantes (son 4 de un total de 69) están dirigidas a denunciar los hechos de represión.

Una parte de las declaraciones difundidas por el Gobierno nacional señala el carácter “foráneo” e ilegítimo de la protesta al denunciar la participación de infiltrados y por sectores de izquierda. La SIDE y la administración de Duhalde manejaban la hipótesis de que la protesta en el Puente Pueyrredón daría comienzo a una escalada de violencia y un plan desestabilizador que duraría 15 días y que acabaría con la toma de la Plaza de Mayo (*La Nación*, 27-06-2002). Muchas de estas versiones hicieron explícitas las vinculaciones a la lucha antisubversiva de los años '70:

“Los dolorosos enfrentamientos que se han registrado en estos días como consecuencia de los disturbios causados por **grupos piqueteros –muchos de ellos con el rostro cubierto, como en los tristes tiempos de la subversión terrorista-** deben encontrar una inmediata respuesta en la conciencia moral de los argentinos (...) tendiente a modificar de raíz los **hábitos de violencia que se están instalando en el campo de la protesta social.**” Bartolomé Mitre, Director diario *La Nación*, 28-06-02.

“**La violencia de quienes llevan esa situación yo la viví hace muchos años, en los '70;** incluso, quienes inducían a estas actitudes después estuvieron exiliados del país.” Eduardo Duhalde, Presidente. *La Nación*, 30-06-02.

“**Hubo infiltración ideológica dentro de las agrupaciones.** Quebracho es un grupo surgido a la sombra de Corach y siempre hace acciones funcionales al poder de turno.” Luis D’elía, dirigente FTV. *El día*, 1-07-02.

“Detrás de los grupos piqueteros **operan sectores de ultraizquierda que buscan cuestionar la vigencia de la democracia. Estos sectores están interesados en convencer a la gente de que la democracia es incompatible con la justicia social y con una política social alternativa.**” Carlos Vila, Subsecretario Seguridad Interior. *La Nación*, 01-07-02.

Al leer este tipo de caracterizaciones realizadas por una alianza social-política-ideológica de los sectores dominantes, la rememoración de los manifestantes dan otro contenido a los términos. Al respecto, Elisa Delboy, del MTD de Guernica, reflexiona:

“Lo que pasó era para frenar la resistencia de distintos sectores, no fue solo para eliminarnos a nosotros porque tenían formas de eliminarnos en los barrios. Pero querían dar un escarmiento público, que lo vea todo el mundo, era un mensaje. Por eso yo siempre digo que fue una avanzada contra el conjunto de la sociedad. Acá había que frenar a los del corralito, había que frenar a todo el mundo. Así que decir que nosotros fuimos de manera violenta... yo creo que la violencia de arriba engendra la de abajo, pero no hubo tal violencia, hubo una autodefensa.

Las definiciones propias de la estigmatización ideológica también generan rememoraciones sobre la época de la dictadura, en los hechos de enfrentamiento de ese entonces y en los mensajes producidos por el poder militar. Tal es el caso de Alberto Spagnolo, militante del MTD Solano, quien contaba con 35 años una importante actividad social en el barrio desde mediados de la década de 1990, desde su acción pastoral como sacerdote en aquel momento:

“En los setenta yo me acuerdo que era pibe, venía el director y decía que nos reunamos en el patio y llamaban a los padres que venían corriendo porque había amenaza de bomba de los guerrilleros. Varias veces, en la zona de San Fernando, General Sarmiento cuando me mudé... La contrainsurgencia opera en base al terror, con una verdad que no es verdad, una verdad inventada. Y cualquier persona con sentido común dice ‘guerrillero hijo de puta, como vas a poner una bomba donde hay pibes’. Eran operativos que hacía el mismo ejército y los políticos también para generar el descrédito y la separación de un movimiento de lucha. Eso era ’74, ’75. Y le achacaban a las organizaciones de lucha cosas terribles. Entonces la contrainsurgencia opera desacreditando a aquellos que encarnan la lucha. Y así viene la separación, nosotros que éramos un grupito chico en Solano, terrorista, subversivo no se qué, pero da miedo. Apartar a la gente, que no se organice, que quede ahí. Y en todos los gobiernos opera la contrainsurgencia, y la legitimidad que tuvimos comienza a perderse cuando estos la iniciativa nuevamente con los medios.”

Este tipo de caracterizaciones no sólo fueron vertidas como información con una alta carga de manipulación, sino que también estuvieron presentes en el mismo “teatro de operaciones”, producidas desde las mismas fuerzas de seguridad. Jorge Jara, del MTD Solano, recuerda al respecto cómo fue su detención junto a decenas de manifestantes:

“Nosotros veníamos por Pavón encarando para los puentes, algunos alcanzan a cruzar las vías y otros cuando estábamos por subir el puente, ya nos vemos que el cuerpo de la bonarense con camionetas cortaron el puente y retrocedemos y ya estábamos encerrados. Todo el mundo al suelo tirados en la calle boca abajo con las manos en la nuca. La policía que te caminaba por encima, te apretaba la cabeza y qué no te decían: ‘zurdo de

mierda, tirapietra, ahora te vamos a enseñar lo que hacemos con los zurditos nosotros.’ Después discutíamos con varios compañeros que decían que es un milico loco Fanchiotti, setentista que la policía no depuró. No, mentira, los que nos basureaban y nos pegaban y nos pateaban la cabeza eran todos milicos de 30, 35 años, no eran setentistas. Nosotros los que protestamos somos todos zurdos negros de mierda para ellos. Esa es la frase corriente en todas las represiones, zurdo, sindicalista, negro de mierda, tirapietra, villero, así nos tienen identificados.”²¹⁶

El relato da cuenta de cómo ese tipo de calificaciones se mantuvieron presentes en la actualidad como “ideas tenaces”, o la construcción de observables sobre hechos de la realidad que responden a un conocimiento precedente, transmitido.

En este caso los enunciados oficiales tampoco fueron improvisados: días antes de la represión, el 22 y 23 de junio, el Bloque Nacional Piquetero se había reunido en su tercer congreso público en un pequeño estadio del Polideportivo Municipal José María Gatica en la localidad de Villa Domínico, Partido de Avellaneda. Allí participaron más de 1.000 delegados de Movimientos de Trabajadores Desocupados, de agrupaciones de ahorristas, de fábricas recuperadas, asambleas barriales y gremios de todo el país (*El Día*, 23-06-02) con la finalidad de aunar fuerzas en un mismo frente de agrupaciones para exigir un paquete de medidas al gobierno que, para estas agrupaciones, estaba aletargando los cambios profundos que se reclamaban desde diciembre de 2001.

La reunión –que distaba mucho de ser secreta, en un estadio provisto por la misma municipalidad, sobre la Avenida Mitre a unos 5 Km. de la Capital Federal- sirvió para que los agentes de la SIDE y de la Secretaría de Seguridad Interior detecten el plan desestabilizador y produzcan un extenso informe denunciándolo.²¹⁷ La “misión” tomó nota detallada de lo que los delegados votaron públicamente: un plan de actividades que incluía cortes de accesos a la Capital y de rutas en determinadas ciudades del país, conformación de asambleas regionales, solidaridad con los establecimientos recuperados por sus trabajadores, frenar los desalojos de casas tomadas, una marcha a Plaza de Mayo el 26 de junio y un acampe en la Plaza de Mayo hacia el día 9 de julio, día de la

²¹⁶- En una denuncia judicial quedó registrado otro relato de un joven estudiante que participó de la manifestación que va en este sentido: “El policía que lo golpeó con la escopeta vestía de civil, que continúa caminando y al pasar al lado de otro policía éste lo golpea con un palo en la espalda y otro policía le pega luego otra patada en el trasero que le provoca la caída boca abajo sobre la acera. Que estando el diciente en esta posición logra escuchar que un policía grita: ‘Bolches, les va a pasar lo mismo que en el ’76’. Exp. Jud. Foja 514.” (MTD Aníbal Verón, 2003, p. 54).

²¹⁷- Uno de los responsables de esta acción de “espionaje” fue Oscar Rodríguez perteneciente al círculo cercano de Duhalde y subsecretario de la SIDE. Hasta enero de 2002 Rodríguez fue intendente del partido de Presidente Perón, municipio creado en 1995y que contiene a la localidad de Guernica, donde militaba Maximiliano Kosteki.

Independencia elegido por su significado histórico. Los agentes de inteligencia confeccionaron un informe a partir de los discursos –que además fueron transmitidos en vivo por el canal Crónica TV ²¹⁸–, registrados por diarios de tirada provincial (*El Día* de La Plata) y varios periódicos de partidos de izquierda.

Los informes incluían la información de supuestos “campos de entrenamiento” y la existencia de una red logística de entrega de armas en las villas del conurbano bonaerense (*Clarín*, 28-06-02). De modo que el acto sirvió para presentar la anunciada protesta piquetera del 26 de junio como el inicio de un plan destinado a derrocar el gobierno de Duhalde en un plazo de dos semanas. La hipótesis fue defendida principalmente por los funcionarios impulsores de la “mano dura” en las políticas de seguridad, entre ellos Carlos Ruckauf, Juan Manuel de la Sota (Córdoba) Rubén Marín (La Pampa) y Juan Carlos Romero (Salta), aunque también la sostuvo el gobernador de Buenos Aires Felipe Solá, quien ubicaba dichos campos de entrenamiento en las localidades de Berazategui y Florencio Varela (*Clarín*, 30-06-02).

El potencial desestabilizador de este plan de lucha es producto de un conocimiento ideológico, sin basamento. Señalemos simplemente que en primer lugar, si bien los movimientos piqueteros y de trabajadores desocupados representaban las fracciones más combativas de los sectores asalariados, todavía permanecían en un estadio de formación de una fuerza a nivel nacional. En segundo lugar, carecían de una estrategia real dirigida a la toma del poder y de la capacidad político-militar para poder ejecutarla. Sin embargo, las versiones oficiales presentaban el plan de lucha como parte de la reconstrucción de una fuerza social armada, en una avanzada de producción simbólica claramente destinada a rescatar reminiscencias del enfrentamiento armado de décadas pasadas y del ideario negativo que fue instalado entonces sobre las organizaciones guerrilleras.

El balance sobre los enfrentamientos incluyó la figura de la militancia extranjera: “las más altas fuentes del Gobierno aseguran que las primeras averiguaciones de las fuerzas policiales y de inteligencia apuntan a las agrupaciones piqueteras Corriente Aníbal Verón y Movimiento Teresa Rodríguez. Y dentro de ellas, estarían identificados activistas vinculados con el representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Javier Calderón, entre otros grupos revolucionarios.” (*La Nación*, 28-

²¹⁸. Ver “A cuatro años de la masacre de Avellaneda. ¿Qué fue de los señalados como responsables políticos de los asesinatos?” por Emilio Marín. En “La Fogata”, junio de 2006. On line: http://www.lafogata.org/06arg/arg6/arg_29-13.htm

06-2002). Versiones que finalmente se desintegraron –pese a los empeños por difundirla– ante el masivo repudio a la represión ocurrido en todo el país, que comenzaron a darse la misma noche del 26 de junio.

El 27 de junio, el ministro de Justicia Jorge Vanossi presentó al procurador general de la Nación una cantidad de denuncias contra los manifestantes. Las mismas incluían figuras como “usurpación con clandestinidad daños, entorpecimiento del normal funcionamiento de transportes o servicios públicos, instigación al delito, asociación ilícita o bandas, intimación pública, apología del crimen, alteración del orden público y del libre ejercicio de sus facultades, sedición, atribución de los derechos del pueblo e impedimento de la ejecución de las leyes” (*La Nación*, 28-06-2002). Del total de declaraciones (69), nos detendremos sólo en aquellas que poseen caracterizaciones o definiciones de la protesta. Allí, la presencia de los agentes estatales fue determinante:

Cuadro 10: Avellaneda, junio de 2002. Caracterización en las declaraciones relevadas según la personificación del emisor.

		Emisores				Total
		Manifestantes	Otros sujetos (no manifestantes)	Funcionarios Estado	Dirigentes partidos y sindicatos	
Caracterizaciones	Vinc. e/ manifest., violencia e ilegalidad	0 ,0%	6 42,9%	9 29,0%	0 ,0%	15 27,8%
	Vinc. a subversión e izquierda	0 ,0%	1 7,1%	10 32,3%	1 12,5%	12 22,2%
	Críticas a los métodos de protesta	0 ,0%	0 ,0%	2 6,5%	0 ,0%	2 3,7%
	Gobierno ineficiente, resp. de la crisis	0 ,0%	1 7,1%	2 6,5%	1 12,5%	4 7,4%
	Manifest. legítimos, reclamos justos	1 100,0%	6 42,9%	8 25,8%	6 75,0%	21 38,9%
Total		1 100,0%	14 100,0%	31 100,0%	8 100,0%	54 100,0%

Fuente: elaboración propia en base a diarios Clarín, La Nación, Página 12 y El Día (La Plata)

Tengamos en cuenta que la gran mayoría de las declaraciones fueron publicadas a partir del día 27 de junio. Con esta aclaración, vemos que más de la mitad fueron producidas por funcionarios políticos y la mínima participación de los manifestantes en el debate público, no destinado a calificar a las fuerzas del orden sino de legitimar sus

propios hechos. La mayoría de las declaraciones que vinculan a los manifestantes con la violencia provienen de diversos agentes del Estado (9 de 15 enunciados) y es mucho mayor la proporción si nos referimos a las declaraciones que vinculan a la militancia de izquierda con esa violencia (10 de 12 enunciados). Por otra parte, la cuarta parte de las declaraciones que definen a los manifestantes como legítimos provienen de este sector, principalmente producidos por legisladores de partidos de centro e izquierda.

En el caso de los dirigentes sindicales y de partidos políticos, 6 de sus 8 declaraciones apuntan a solidarizarse con los manifestantes. Sin embargo en el caso de un dirigente gremial (D'elía, dirigente de la FTV), su interpretación si alinea a la del gobierno. Como vimos más arriba en este capítulo, el dirigente popular grafica la conformación de fuerzas sociales en el plano de las luchas ideológicas, al cerrar filas con los sectores dominantes. No es la primera vez, como hemos visto con los anteriores casos con declaraciones provenientes de sectores asalariados o de la pequeño-burguesía urbana que adhirieron a los llamados de la utilización de la fuerza o con la caracterización negativa de los manifestantes.

Las declaraciones con definiciones sobre ilegalidad, violencia armada y delictiva son importantes también en los llamados sujetos no manifestantes (6 de un total de 14 declaraciones), principalmente en notas de opinión de directivos del diario *La Nación*. Son también periodistas –en este caso del diario *Página 12*- los que en este mismo subconjunto tendieron su solidaridad con los manifestantes.

“Quienes manifestaron lo han hecho de una manera violenta e irracional. Había entre los manifestantes una actitud de provocación que lamentablemente se dio.” Juan José Álvarez, Secretario Seg. Interior. *La Nación*, 27-06-02.

El deber de las autoridades es garantizar el respeto a la ley, evitando provocaciones y atropellos de imprevisibles consecuencias. (...) Lo sucedido ayer no es más que el producto **de acciones delictivas que han superado todos los límites a los que debe acotarse la legítima protesta**, violando libertades básicas de toda la población.” Bartolomé Mitre, Director diario *La Nación*, 27-06-02.

Pero además es notorio el accionar, en el marco de grandes columnas de manifestantes pacíficos, de grupos minoritarios –generalmente actúan **con los rostros cubiertos y armados, por lo menos con palos y piedras- que sostienen una actitud de beligerancia y promueven, en determinadas circunstancias, un alto voltaje de violencia.**” Raúl Kraiselburd, Director diario *El Día*, 28-06-02.

“Insisto, de todos modos, en que **la policía fue agredida de manera feroz por gente que iba a la guerra**, pero eso no tiene nada que ver con que se me haya mentido.” Felipe Solá, Gobernador Prov. Bs. As. *La Nación*, 29-06-02.

Acerca de la relación entre la violencia, el delito y la ilegalidad que implica el corte de calles, la interpretación de los manifestantes evidencia un conjunto de conceptos muy distinto al promulgado por el Gobierno. Como señalamos anteriormente, consideramos que la experiencia política dada por la pertenencia a estas organizaciones –incluso en el enorme caudal de integrantes jóvenes sin experiencia laboral o sindical previa– consolidó una caracterización políticamente antagónica a la oficial. “Coco” Insaurralde, del Polo Obrero piensa al respecto:

“La historia está llena de hechos ilegales, también es ilegal el corralito, el corralón, o sea, la legalidad del Estado tiene que ver con un orden. Es legal la Obediencia Debida, el Punto Final, se votó en el Parlamento... El argumento que el corte sea ilegal, puede ser, ¿y? El aborto es ilegal, ¿y? Las pibas que se mueren es gracias a esa legalidad. (...) Nosotros cortamos rutas pero los sectores capitalistas cortan barrios, hay barrios donde yo no puedo caminar, no puedo llevar a mi hijo y caminar tranquilo porque me mandan a la policía por ser un negrito con zapatillas feas. Y eso es ilegal

“Neka”, ex docente y miembro del MTD de Solano desde hace casi una década, también relativiza los términos de los conceptos difundidos días después de los enfrentamientos:

“Cuando vos criminalizás una protesta, la controlás. Los términos que se utilizan después sirven para condenar la protesta social. Ya había una avanzada de criminalización con la toma de supermercados, con lo de Castels, con Emilio Alf. O montando situaciones de violencia, aparecía que un piquetero rompía el vidrio de un auto, que no dejaban pasar la ambulancia y se moría alguien... Fueron montando cosas en contra (...) Nosotros nunca nos regimos por la legalidad, por ejemplo nosotros nunca avisamos cuando íbamos a cortar, nunca le informamos al enemigo o al poder político lo que íbamos hacer. Y si para ellos somos ilegales, sí, pero nosotros era totalmente legítimo lo que estábamos haciendo. La justicia, la libertad son cosas que nosotros las tenemos que construir, y que nos digan ilegales, es lo que nosotros consideramos, no lo que consideran ellos...”

Por otra parte, algunas de las especulaciones que intentaron explicar las muertes de los manifestantes como producto de una trifulca entre agrupaciones piqueteras incluyeron la versión sobre la operación de sectores políticos enfrentados a Duhalde. Según versiones oficiales se habría perpetrado una suerte de sabotaje: desatar una represión brutal para perjudicar al Gobierno y acelerar la fecha de las elecciones.

Dicha versión estuvo acompañada por una revitalizada *hipótesis del exceso* para explicar las muertes, al declarar que “quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería”, y que “la muerte golpeó a la patria” (*La Nación*, 29-

06-2002). El mismo secretario de Seguridad Juan José Álvarez se apoyó en esta explicación al día siguiente de los hechos, sin dejar de justificar indirectamente lo sucedido: “seguramente veremos a algún policía, asediado por manifestantes, tal vez tirado en el piso y recibiendo palos, que saca un arma y tira, tira y tira. Es la hipótesis más probable de las muertes. Es posible que algún efectivo se haya visto encerrado y saco un arma.” (Página 12, 27-06-2002). Lejos de esta idea, los hechos captados por fotógrafos y camarógrafos demostraron que los policías no reaccionaron a una agresión sino que se dedicaron a marcar, seguir y atacar a los manifestantes.

Tanto en la versión del supuesto sabotaje como la explicación de los excesos en la represión, prevaleció la interpretación de una supuesta “escalada de violencia” impulsada por las agrupaciones piqueteras. El vocero presidencial Eduardo Amadeo y el radical Jorge Vanossi, en ese momento ministro de Justicia y Derechos Humanos, presentaron a fiscales del Poder Judicial una serie de datos provistos por agentes de inteligencia que “revelaban” esta escalada de violencia. El escrito señalaba un plan que “incluía acciones violentas que parten de una alteración del orden público, continúan con la pérdida de vidas humanas, graves destrozos materiales y amenazas de derrocamiento de los poderes constituidos” (El Día, 29-06-02).²¹⁹

Por otra parte, las interpretaciones del Gobierno nacional y provincial nunca se desviaron de colocar a las manifestaciones de ese período como un premeditado ascenso en la estrategia de desestabilizar el Estado de Derecho. En el panorama presentado por el oficialismo posteriormente a la represión, la movilización de tropas habría tenido por objetivo una *defensa* institucional al avance de la violencia radicalizada.²²⁰ El plan desestabilizador nunca se verificó, y los hechos demostraron que en realidad la represión funcionó como un *ataque* ejemplar a las organizaciones populares. El mensaje aleccionador de Duhalde realizado días después de los enfrentamientos confirman ese

²¹⁹- Con poco asidero en la realidad y sin datos que confirmen ese supuesto, Vanossi debió renunciar a principios de julio de 2002. Su cargo fue ocupado por el hasta momento secretario de seguridad, Juan José Álvarez, viejo colaborador de Duhalde y subsecretario de Defensa durante el gobierno de Menem.

²²⁰- Aunque de manera parcial, esta estrategia obtuvo sus resultados. Días después de los enfrentamientos el Gobierno nacional encargó unas encuestas con el objetivo de medir la lectura hecha sobre los hechos. Sobre más de 450 encuestas realizadas por la consultora Rouvier & Asociados, una de las principales preguntas fue “¿Quién es el responsable de los hechos de violencia ocurridos en el acto piquetero?” Si bien más del 35 % de los encuestados colocó a la Policía provincial como principal responsable, la cuarta parte responde que fueron los mismos piqueteros los promotores de la violencia. Con respecto a las versiones sobre un posible complot en contra de la gestión de Duhalde, casi la tercera parte de los encuestados consideró que los hechos fueron realizados deliberadamente para su perjuicio (Clarín, 1-07-02).

objetivo: “estos acontecimientos debería hacerlos pensar a los violentos, no se puede seguir actuando de esta manera” (*Clarín*, 30-06-02).

Luego de la represión, el panorama de las agrupaciones piqueteras viró de una cierta unidad de acción por la construcción de un movimiento mayor al de sus agrupaciones, hacia el paulatino resquebrajamiento. Sin embargo las conclusiones o reflexiones al respecto no han sido negativas en el arco de militancia de las agrupaciones, al tener en cuenta que hubo un aprendizaje de los hechos y que eso ha servido hoy para entrar en una nueva etapa. Ángel Ibáñez, de la CTD de La Plata considera que

Después de la muerte de Kosteki y Santillán implotamos, acrecentamos las diferencias secundarias. Pero el balance es positivo a la hora de lo que significó ese proceso. Fue negativo en lo que significó para el pueblo de una de las organizaciones que pintaba para más. (...) La coyuntura no nos dio tiempo a otra cosa, era todo muy complejo y muy rápido, no había un análisis claro de adonde íbamos. Pero si uno analiza el proceso histórico cometeríamos los mismos errores y los mismos aciertos, me hubiera juntado con la misma gente y hubiera discutido las mismas cuestiones. Pero hoy aprendemos de los errores, de las falencias. A nivel colectivo fue una experiencia rica porque hoy estamos en otro nivel de la discusión.

Con distintos balances y grados de reflexión sobre aquellos hechos, las organizaciones han sufrido en menor o mayor medida una disgregación. Muchas de las mismas derivaron en ONG's y la reactivación económica de los últimos años generó en alguna medida una inyección de trabajos en los barrios, en buena parte precarios y sin demasiada proyección en el tiempo, lo que también vació de miembros a los movimientos. Pero más allá de la coyuntura económica, la represión sirvió de lección sobre la postura que adoptaría el Estado frente a las organizaciones más contestatarias del arco piquetero.

Frente a las movilizaciones que concluyeron en el 26 de junio, el análisis realizado por el oficialismo avanzó en la estigmatización de militantes sociales y miembros de las organizaciones, y en tal sentido marcó una diferencia fundamental con lo ocurrido seis meses antes, durante la insurrección de diciembre de 2001. En comparación, ambos episodios fueron sustancialmente diferentes entre sí en cuanto al carácter de la movilización, la cantidad de personas involucradas y la envergadura de los enfrentamientos. También lo fue en el balance de los funcionarios, que resaltaron *la importancia social* de los sujetos participantes en el primer caso, frente a la voluntad desestabilizadora y peligrosa del segundo caso.

De manera similar al jefe de Gendarmería y a la jueza Federal que en 1996 divisaron a la “gente bien vestida” de Cutral C6 –lo que detuvo la represión y delimitó el carácter de la protesta-, en la Casa de Gobierno consideraron se estuvo “muy lejos de afectar la gobernabilidad porque el 20 de diciembre excedía el marco piquetero, *se movilizaron los sectores medios*. En este caso estaba más sectorizado” (*La Nación*, 1-07-2002).

Con esta comparación, el arsenal ideológico continuó pocos días después de la represión para dejar en claro la concepción oficial sobre un sector del movimiento piquetero. Se trabajó desde un imaginario ampliamente difundido: la nebulosa categoría *sectores medios* es, de por sí, sinónimo de legitimidad, de reclamos justificados y de conciencia cívica, mientras que los protagonistas de la manifestación de junio de 2002, más *sectorizados* –es decir, claramente identificados en agrupaciones con objetivos y proyectos políticos- encarnaron la desestabilización, la ilegitimidad y la ilegalidad. Una vez más, los hechos se justificaron con los dichos.

Conclusiones

Luego del análisis, es muy difícil descartar la hipótesis de una operación política orquestada de antemano que permitió y avaló una represión de alta intensidad a las fracciones más contestatarias del movimiento piquetero. Comprobamos que antes, durante y después de la movilización, el Gobierno nacional y los medios gráficos de información se encargaron de colocar a los manifestantes en un cuadro maniqueo que combinó a una suerte de vanguardia revolucionaria lista para la toma del poder con una horda de desaforados violentos. La operación política se perpetró con las advertencias de no permitir que se interrumpa el puente Pueyrredon, además de las “misiones” de la SIDE que “descubrieron” que el Boque Piquetero tenía un plan para la toma del poder.

Declaraciones con un tenor similar resurgieron poco después cuando las agrupaciones tomaron los días 26 de cada mes como fecha para la movilización al Puente Pueyrredón en reclamo de justicia y en conmemoración de los militantes asesinados.

Sin dudas hubo “desprolijidades” evidenciadas por las fotos que registraron a los autores de la persecución y del asesinato de manifestantes desarmados y las acciones ilegales como el ingreso a locales y domicilios al estilo de los no tan lejanos en el tiempo

“grupo de tareas”. Pero esto no impide pensar en que todos los elementos juntos formaron parte de una avanzada represiva que tuvo carácter de ejemplar: detener el ciclo de protestas de una vez por todas. Más aún si se tiene en cuenta que estos no fueron hechos aislados sino que conforman un ciclo integrado por las represiones en las ciudades del norte salteño, en el Puente Belgrano en la ciudad de Corrientes y antes, en las ciudades de Cutral C6 y Plaza Huincul.

A fines de julio de 2002, para el Poder Judicial los responsables de los asesinatos de Kosteki y Santillán habían sido el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta.²²¹ Fueron acusados de doble homicidio agravado por alevosía y condenados a cadena perpetua. Semanas antes el comisario había asegurado que nunca había ingresado a la estación de trenes de Avellaneda y que no había utilizado balas de plomo sino sólo proyectiles de goma. Son los únicos condenados, y no se ha investigado sobre los autores intelectuales del hecho, como tampoco ocurrió con los anteriores episodios analizados.

¿Qué hubiera sucedido si las famosas fotos jamás hubieran aparecido, si el cord6n de las fuerzas de seguridad hubiera restringido la presencia de periodistas, si los enfrentamientos hubieran quedado solamente en la retina de quienes sólo participaron de los choques? No podemos contestar estas preguntas, pero teniendo en cuenta no sólo la reflexión de los manifestantes sino la concatenación de los hechos –y recordando las decenas de heridos de bala de plomo- hoy podemos decir que la represión tuvo una finalidad no sólo disuasiva, sino aplastante sobre los movimientos más contestatarios del conurbano bonaerense.

²²¹- Sin posibilidad de pergeñar alguna coartada, años más tarde y durante el juicio oral los policías cruzaron acusaciones mutuamente: “el ex cabo Alejandro Acosta, acusado de doble homicidio y siete tentativas de asesinato en el marco de la Masacre de Avellaneda, aseguró que el 26 de junio de 2002 el ex comisario Alfredo Fanchiotti le dijo "a estos negros hay que matarlos a todos", en referencia a los piqueteros que manifestaban durante esa jornada (diario *Clarín*, 31-05-2005).

Capítulo 10

Consideraciones finales. La construcción social e ideológica del conflicto.

Construcción de conocimiento, ideología y discurso, son conceptos que nos permitieron abordar las diversas representaciones del conflicto en un período acotado de nuestra historia reciente. Como hemos visto, la interpretación de estos hechos (la construcción de observables), incluyó la reelaboración de concepciones previas, pertenecientes a conflictos de épocas pasadas más lejanas y más próximas en el tiempo. En tal sentido, y retomando lo que expusimos sobre los estudios de la EG, podríamos sugerir que en los casos analizados se produjeron discursos que remiten a estructuras cognitivas condicionadas tanto por la experiencia sensible –diversos grados de observación o participación en hechos de conflicto- como por marcos epistémicos predominantes, producto de una socialización y de un conocimiento ideológico de la realidad previamente establecido.

Vinculada a una lectura constructivista del conocimiento, volvamos a uno de los postulados epistemológicos que condensa la concepción materialista de la historia de Marx. Se resume en una conocida frase de su Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política: “no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia.” El postulado nos presenta lo que podríamos llamar la *vida material* en conjunto condicionando la vida intelectual y espiritual; las relaciones y las fuerzas materiales de producción de una época comprendiendo las formas jurídicas, políticas e ideológicas, en suma, el mundo intelectual en general. Si retomamos este postulado para referirnos a los conflictos de la historia reciente del país y lo aplicamos a los objetivos y al período que hemos analizado, podríamos decir que *la especificidad de cada conflicto, la época en que se desarrolla, su coyuntura en un régimen de acumulación determinado y los sujetos que intervinieron en las confrontaciones concretas, condicionan la construcción de diversos estadios de conocimiento y representaciones sobre los resultados y formas de esas luchas.* En este sentido, lejos de referirnos a un saber espontáneo, lo que hoy denominamos “criminalización de la protesta” se ha construido mediante una identificación

delincuencial enteramente ligada a la historia de la lucha de clases en el país, en el que la constitución de “enemigos internos” es una parte inalienable de esa historia.

Este bosquejo, sin embargo, no implica plantear una hipótesis de corte mecanicista o determinista –como vulgarmente se presenta al marxismo–, que en definitiva iría en el sentido contrario a cualquier concepción dialéctica de los fenómenos sociales y la historia. Tampoco, como señalamos en el primer capítulo de esta tesis, retomamos la pugna de discursos como unidades en sí mismas, como una narrativa de significantes sin significado, o como una exorbitancia del lenguaje sin conexión objetiva con los conflictos materiales. Nuestra intención fue dedicarnos al discurso como continente de disputas de significados sin divorciarlo de un terreno de disputa concreto, material, al que siempre hicimos referencia.

Hemos visto que en la arena de la lucha ideológica se generaron relatos que definieron la verdad o falsedad de los hechos, su carácter moral –de justicia o injusticia– y político jurídico –en cuanto a la legalidad, legitimidad o peligrosidad institucional de las acciones–. Estas definiciones oficiales sopesaron en la identidad de quienes impulsaron las luchas: nos referimos a manifestantes con sus rostros tapados que interrumpieron las vías de circulación con neumáticos quemados y otro tipo de objetos; y frente a ellos, individuos en formación militar con armas de fuego, escudos, cascos, uniformes y carros de asalto. Sobre esos *datos* se construyeron *observables* dominantes:²²² hablamos de fuerzas *de seguridad* frente a individuos peligrosos o potencialmente peligrosos, el orden frente al caos, lo legítimo y legal frente a lo ilegítimo y delictivo.

La condición de verdad y falsedad y el resto de estos calificativos están basados en articulaciones falaces, es decir, no pueden ser comprobados como enunciados *certeros* en un sentido epistemológico. Pero esa falacia no radica en que no existe una contradicción en esa confrontación material, y que esa contradicción sólo existiría en el momento en que es enunciada como tal. O que esa confrontación no sea parte de un capítulo de un largo proceso de lucha de clases. Por el contrario, el conocimiento ideológico que convierte la lectura de la realidad en una falacia radica en la ausencia de genealogía de esas categorizaciones, en que son resultado de una fragmentación de una totalidad que implica tener en cuenta, siempre, la constitución y el resultado de las confrontaciones precursoras a las actuales. En tal sentido, lo legítimo o ilegítimo de los hechos analizados,

²²²- Dichos observables dominantes rigen incluso en nuestro lenguaje cotidiano, como cuando vemos *salir el sol*, aunque sabemos que la Tierra es la que rota en su eje y se traslada alrededor del astro.

el orden y el caos que radican en ellos, están en relación directa con la permanencia de caracteres ideológicos que se resuelven en el terreno social: en el triunfo -o derrota- de sus portadores.

Recurrimos en tal sentido a las batallas materiales y simbólicas que encierran los enunciados analizados, que conformaron -como señalamos al comienzo de esta tesis- un *nosotros* legítimo frente a un *otros* peligroso. Hablamos así de un campo contradictorio de significados que se encuentra supeditado tanto al *conocimiento de época* en el cual se produce y a las relaciones de fuerza materiales que se tejen entre los sujetos que confrontan; es decir, las personificaciones que encarnan y los objetivos que impulsan.

Por ello algunos hechos de protesta son relativamente aceptables cuando coinciden con un orden moral que dicta que los sujetos que allí participan, son en efecto *socialmente aceptables*. Revisemos, antes de concluir esta tesis, otros hechos que apoyarían esta hipótesis. Los mismos exceden el período que nos propusimos analizar, y son sin duda, objeto para otra investigación.

Pese a que se utilizó objetivamente la misma metodología de protesta a la que dedicamos esta tesis, hubo en los últimos años otros episodios -con otros fines y representando otras personificaciones sociales- que no adquirieron el rol de amenaza social que sí obtuvo, por ejemplo, el movimiento piquetero. Veamos: en febrero de 2006 comenzó en la ciudad de Gualeguaychú la interrupción del puente internacional San Martín, que une esta ciudad con la vecina Fray Bentos, en la república del Uruguay. En reclamo por el peligro ecológico que implica el emplazamiento de una fábrica de pasta celulosa en el margen uruguayo del río Uruguay, fracciones de la pequeñoburguesía entrerriana -mayoritariamente comerciantes, productores agrícolas y representantes de cámaras empresariales- además de docentes y otras fracciones asalariadas apoyaron y llevaron a cabo el bloqueo del puente por 45 días ininterrumpidos.²²³

La acción también obtuvo desde un principio el apoyo de dirigentes políticos locales y nacionales. En los medios de información se mencionaba con cierta gracia que

²²³- La medida se profundizó meses después. En noviembre de ese mismo año comenzó un corte ininterrumpido de la ruta internacional que duró más de un año. Luego de 14 meses del bloqueo del puente, en febrero de 2008 los asambleístas entrerrianos impusieron un sistema de control que consistía en la distribución de unas tarjetas que certificaban el “permiso” para poder cruzar el puente hacia el lado uruguayo. La medida llegó a ser calificada como legítima por Romina Picolotti, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (*La Nación*, 3-2-2008). Por su parte, el Jefe de Gabinete Alberto Fernández avalaba la larga protesta de los asambleístas como si esta, a diferencia de las anteriores, sí fuera legítima y representativa: “es una decisión de los habitantes de Gualeguaychú, porque pareciera ser que colectivamente los habitantes de Gualeguaychú creen en este método de protesta” (*La Nación*, 4-2-2008). Al mes de marzo de 2009, el puente seguía interrumpido.

“entre los asistentes al corte había ayer familias completas, incluyendo bebés y ancianos; jóvenes con reposeras, mesita de camping y cartas de truco; señoras preparando el mate y el repelente a la nohecita; representantes de Federación Agraria; turistas que se solidarizan, gendarmes y policías de civil.” (*Clarín*, 5-02-06). Lejos de una imagen vandálica, los protagonistas de este reclamo efectivamente eran “ciudadanos legítimos” que legítimamente protestaban.²²⁴

Presentada como una suerte de “toma de conciencia colectiva” por la cuestión ecológica, la causa de la protesta y la extracción social de quienes la integraron generó valoraciones del poder político y de grandes porciones de la sociedad diametralmente distintos a las protestas anteriormente analizadas.

En marzo de 2008 se desarrolló otra protesta en todo el país llevada a cabo por miles de empresarios agropecuarios representados por la llamada “Mesa de Enlace”, conformada por las cuatro asociaciones agrarias más importantes del país (Sociedad Rural, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria). También recurrieron al corte de rutas como protesta ante las retenciones móviles aplicadas por el Gobierno nacional a las exportaciones. El sabotaje patronal²²⁵ se estableció mediante decenas de rutas cortadas en diversas localidades las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Salta a lo largo 21 días ininterrumpidos. La medida generó el desabastecimiento de granos y carnes en los mercados internos, influyendo en la capacidad de consumo de alimentos en la población; además de afectar el traslado de una diversidad enorme de insumos para la industria y el comercio.²²⁶

²²⁴- En febrero de 2006 se realizó una encuesta que indagaba, entre otros puntos, sobre la popularidad con que contaban los cortes de ruta en torno al conflicto de las plantas de celulosa. Según H. Haime, el 41 % de un total 500 encuestados estaba a favor de esa metodología en el conflicto de las pasteras; mientras que una muestra de 1100 personas, dirigida por Z. Puceiro, arrojaba que un 66 % de los encuestados apoyaba la medida. (*Página 12*, 19-2-06).

²²⁵- Aplicamos este término frente al de *lock out*, utilizado en ese momento fundamentalmente por el Gobierno nacional. El lock out refiere a la medida ejecutada por los propietarios de fábricas o empresas que a modo de reclamo cierran temporalmente sus unidades de producción. La actividad agrícola-ganadera de quienes llevaron a cabo la protesta contra las medidas fiscales del Estado, sin embargo, continuó “puertas adentro” con la cosecha de cultivos y almacenaje de granos, el ordeño y la faena de ganado, etc.

²²⁶- Un estudio realizado por la consultora Nueva Mayoría reveló que el 65 % de los cortes de ruta desde abril de 2008 a abril de 2009 fue realizado por productores agrícolas vinculados a algunas de las organizaciones de la “Mesa de Enlace”. En los meses de abril y mayo de 2008 y febrero y marzo de 2009 la proporción alcanzó del 78 al 90 % del total de cortes de ruta en esos meses. (*Diario La Nación*, 1-05-09).

En mayo de 2008 “tuvieron lugar 2.539 cortes de rutas y vías públicas en la Argentina, cifra que superó el nivel de la crisis 2001/2002, que registró 2.336 cortes en el 2002.”²²⁷ Una buena parte de la población interpretó legítima no sólo las herramientas de protesta que antaño eran condenadas, sino también normalizó y justificó ciertas acciones de “defensa propia” por parte de los ruralistas.²²⁸

La decisión de adoptar estas medidas contrastó con lo dicho el 31 de julio de 2004 - cuatro años antes- por el mismo presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, al opinar sobre los cortes de ruta realizados por los movimientos piqueteros. Expresó en la muestra ganadera de Palermo que se debía “desterrar para siempre la violencia como método, el pasamontañas y la ocultación de identidad como medio intimidante y la toma de rehenes como recurso, ante la pasividad y la complacencia de quienes deben ser nuestros garantes” (*Página 12*, 21-3-08).

Sin embargo, los cortes de ruta fueron impulsados y sostenidos por los empresarios emulando la metodología de las protestas piqueteras de la década de 1990. Explicaron elocuentemente la validez de esos métodos en comparación a los utilizados años atrás a partir de la discriminación y la desvalorización moral: “yo creo que usted se equivoca o no ha ido a mirar el color de la piel de los que están haciendo los piquetes” (Hugo Luis Biolcatti, Vicepresidente de la SRA, interpelado sobre los cortes de ruta de los empresarios en una entrevista radial. *Página 12*, 20-3-08).

Uno de los puntos más significativos del conflicto ocurrió apenas comenzado éste, el 25 de marzo en medio de un “cacerolazo” en apoyo a las entidades agropecuarias -que generó un enfrentamiento menor con militantes cercanos al gobierno de Cristina Fernández- y el 14 de junio luego de que fueran detenidos durante algunas horas una docena de empresarios agrarios.

Durante más de tres meses de conflicto, ni el Gobierno nacional ni los medios de información masiva descalificaron política o moralmente a este tipo de acciones en el

²²⁷- “Cortes de rutas y vías públicas del 2008 ya superan los niveles registrados en la crisis 2001/2002.” www.nuevamayoria.com.

²²⁸- Alfredo De Angeli, uno de los principales dirigentes de esta protesta, afirmó que muchos de los manifestantes se encontraban armados con escopetas y carabinas a la espera de un posible enfrentamiento con los gremialistas y afiliados del sindicato de camioneros liderado por Pablo Moyano (*Clarín*, 22-04-08). Una encuesta impulsada por el diario *La Nación* mostró que el 73,18 % de sus lectores -de un total de 4233 votos- interpretaron que la portación de armas de los manifestantes agrícolas era un “acto de legítima defensa” (22-04-08). Aunque a mediados de 2008 el Congreso nacional derogó la cláusula por la cual los empresarios agrícolas comenzaron la protesta, los reclamos se reactivaron en marzo de 2009 con nuevos cortes de ruta.

tono en que se caracterizaban los cortes de ruta de antaño.²²⁹ Algunos medios gráficos en particular –recordando el rol político que siempre juegan– demostraron de forma transparente lo que venimos exponiendo. Hagamos una simple comparación de editoriales en distintos períodos y con conflictos también disímiles: luego de que la Gendarmería reprimiera la protesta de junio de 2001 en el norte salteño con el saldo de muertos, heridos y detenidos, el diario *La Nación* publicaba en su editorial:

“Suponer que se puede interrumpir tumultuosamente durante 18 días el paso de vehículos por una vía de comunicación de vital importancia para el movimiento comercial y civil de una provincia sin que la autoridad pública intervenga en algún momento para restablecer el orden equivale a considerar que las leyes de la república no deben ser cumplidas y que los derechos de sus ciudadanos pueden ser pisoteados con absoluta impunidad. (...) El corte de rutas constituye por sí mismo un acto de violencia inaceptable que vulnera principios constitucionales. Por lo tanto, los poderes del Estado no pueden permanecer indiferentes ante esa clase de provocaciones.” “*Corte de rutas sangriento*” Editorial del diario *La Nación*. 19-06-2001

Siete años después, luego de que la Gendarmería detuviera a una docena de productores agropecuarios en un corte de ruta en Gualaguaychú, el mismo diario publicaba:

“Estamos ante un estilo de gestión incapaz de entender que gobernar es también saber escuchar. Que simplemente no tolera el disenso. Que demoniza y humilla a sus adversarios y ataca, cada vez más, a los medios periodísticos independientes. Que no vacila un instante en denostar, insultar y lastimar, pero que se ofende ante los meros desacuerdos. (...) Sin embargo, como lo hemos hecho numerosas veces desde estas columnas en los últimos tres meses, reiteramos que, hoy más que nunca, vale serenar los ánimos y buscar, y encontrar, nuevos caminos para retomar las negociaciones -una tarea ineludible para el Gobierno, porque tiene en sus manos las herramientas para hallar la solución-, pero esta vez sin desplantes y sin engaños. Está en juego la preciada paz de la Nación argentina, y nuestra sociedad espera que se haga realidad, y el diálogo y el reencuentro fructifiquen por fin.” *La siembra de odio y resentimiento*” Editorial del diario *La Nación*. 15-06-2008

Sin embargo, en los hechos la decisión del gobierno fue no adoptar medidas represivas, lo que implicaba, según los funcionarios, una apuesta por el diálogo y el rechazo a la resolución violenta del conflicto. Una muestra de ello fue que en la localidad entrerriana de Arroyo del Sauce un corte provocó una fila de 10 Km. de camiones y

²²⁹- Apenas iniciada la medida, el Gobierno nacional la calificó como “insensible, que no contribuye al país” (Florencio Randazzo, Ministro de Interior, *Clarín*, 15-3-08); “desmedida”, (Alberto Fernández, jefe de Gabinete *La Nación*, 19-3-08); o “injusta, desproporcionada e inoportuna” (Martín Lousteau, Ministro de Economía, *La Nación*, 19-3-08).

micros, mientras que la Gendarmería sólo se mantuvo en el lugar para evitar confrontaciones.²³⁰

A lo largo de nuestra investigación vimos que, en las antípodas de los reclamos enarbolados por burguesía y la pequeño-burguesía agro ganadera de las provincias de la cuenca sojera, las protestas analizadas no sólo se resolvieron violentamente sino que también estuvieron fuertemente ligadas desde lo simbólico a las actividades punteriles, el clientelismo político, la violencia, la ilegalidad, el caos social e inclusive las actividades subversivas. ¿Se trata de un cambio en la concepción política de los conflictos a partir del cambio de gobierno en mayo de 2003? En un mapa económico y político diferente al de la década de 1990, el resurgimiento de las protestas de asalariados sindicalizados o con relación laboral relativamente más estable, planteó un escenario de nuevas –y no tan nuevas- disputas en la arena material y simbólica de la lucha de clases.

En el mes de abril de 2007 en Neuquén, una protesta docente nuevamente terminó en tragedia, como había ocurrido diez años antes.²³¹ Si bien el asesinato del docente Carlos Fuentealba suscitó muestras de repudio generalizado –“mataron a un maestro”, manifestaban con tono desahuciado e indignado funcionarios políticos, dirigentes gremiales, periodistas-, también hubo interpretaciones de conflictos anteriores (1996 y 1997) que se revitalizaron durante el enfrentamiento físico. La acción represiva se explicó por parte de la dirigencia política provincial aduciendo que “los docentes se negaron a correr el lugar del corte de ruta, para que los turistas puedan tomar caminos alternativos. (...) La policía primero quiso dialogar pero ante la negativa actuó en el marco de la ley. Si bien muchos manifestantes acataron las órdenes de la fuerza policial, otra parte se negó a correr el lugar del corte, por lo que desgraciadamente no había otra salida.” (Raúl Pascuarelli, Subsecretario de Seguridad de la provincia del Neuquén. Diario *La Mañana del Sur*, 5-4-2007). La desobediencia de las normas que realizaban los manifestantes al cortar la ruta generó la determinación expiatoria de reprimir, al “no

²³⁰ - El periodista Horacio Verbitsky destacó la estrategia de “no represión” del gobierno: “las fuerzas de seguridad tuvieron conducción política e instrucciones estrictas y no dispararon una bala de plomo ni de goma, no arrojaron una ampolla de gas lacrimógeno, ni dieron un palazo. Apenas forcejearon con sus escudos para despejar algunos puntos estratégicos. Esto no había ocurrido nunca antes en la Argentina ante semejante desafío y ratifica la línea que Kirchner fijó en el segundo año de su mandato.” (*Página 12*, 6-4-08).

²³¹ - Hubo otras coincidencias entre el asesinato del docente en 2007 y el de Teresa Rodríguez en la protesta de 1997: “Carlos Fuentealba (...) recibió en plena nuca el disparo de un cartucho de gas a corta distancia, que le causó la muerte en pocas horas. El autor material, cabo Darío Poblete, fue condenado a prisión perpetua en agosto de 2008. El mismo policía estuvo involucrado, y había sido sobreseído, en la causa del asesinato de Teresa Rodríguez en abril de 2005” (Verdú, 2009, p.168).

haber otra salida”.²³² Luego de la represión y del asesinato de Fuentealba, el gobernador de Neuquén Jorge Sobisch introducía la figura del infiltrado o militante rentado: “sabemos que hay activistas que están visitando Cuenca XV y varios sectores de Neuquén, casa por casa, están ofreciendo 50 pesos y comida para venir esta noche a hacer desmanes en el centro” (*La Mañana del Sur*, 6-4-2007). Durante todo el conflicto se produjeron caracterizaciones sobre lo excesivo, intransigente e ilegítimo de la protesta, sobre la violencia que implicó la interrupción del tránsito y, una vez más, sobre el carácter foráneo de “gente que no parece ser docente” (Diarios *Río Negro* y *La mañana del Sur*, del 30-3-07 al 6-04-07).

Podríamos argüir que la represión al mando de las fuerzas provinciales excede una la decisión del PEN en cuanto al tratamiento del conflicto. Sin embargo, veamos en esta selección arbitraria de hechos cómo la mentada “no violencia estatal” se desvanece en otros conflictos. En el mes de enero de 2008 surgió un reclamo de los trabajadores del Casino de Buenos Aires en el barrio porteño de Puerto Madero por la cesantía de 80 empleados. Fueron reprimidos y encarcelados luego del séptimo enfrentamiento desde que los trabajadores iniciaron los reclamos, que incluyó el encadenamiento en la Plaza de Mayo para ser recibidos por el Gobierno Nacional e intentar una solución. Luego de la represión de la Policía Federal y la Prefectura, los delegados de los empleados denunciaron que sufrieron apremios ilegales y torturas por parte de personal de las fuerzas de seguridad.

Meses más tarde, mientras transcurría el conflicto con los empresarios del agro, el día 6 de junio de 2008 se desató una protesta en la ciudad de La Quiaca en Jujuy por manifestantes que tomaron por unas horas la municipalidad de esa ciudad en reclamo del aumento de planes de empleo. En el hecho intervino la policía provincial que desató una represión con balas de goma y gases lacrimógeno, provocando decenas de heridos –entre ellos una adolescente de 15 años que recibió disparos de perdigones de goma en un ojo- y detenidos. La masa de empobrecidos fue apaleada con la venia del gobernador de Jujuy (partido Frente para la Victoria) y del intendente de La Quiaca.

Si nos retrotraemos en el tiempo podemos encontrar otros ejemplos en el que se sostiene esta variación en el tratamiento del conflicto según los sujetos que participan: en una de las tantas huelgas de de trabajadores del subterráneo de la ciudad de los últimos

²³²- Una interpretación similar del problema la dio la jueza que intervino en el conflicto docente de marzo de 1997, antes de dar la orden de reprimir y desalojar la ruta. Ver capítulo 5.

años, el Ministerio del Interior habilitó en abril de 2006 la movilización de efectivos de la Policía Federal para acabar con el reclamo que paralizó el funcionamiento de los trenes. El entonces Ministro del Interior Aníbal Fernández señalaba al respecto que “no podemos permitir que la ciudad siga siendo un caos. Una cosa es una huelga y otra es impedir a ciudadanos viajar a su trabajo. (...) Uno intenta ser paciente, pero cuando la intransigencia llega a un punto, tenemos que actuar” (*La Nación*, 13-4-2006). De esta manera justificó el desalojo violento de trabajadores que si bien no realizaban un corte de ruta como se estableció en la década de 1990, efectuaban una protesta por aumento salarial cortando vías de comunicación e interrumpiendo la actividad laboral de la ciudad.

Prácticamente un año después, en mayo de 2007, los delegados de los trabajadores del subterráneo reconocidos públicamente como pertenecientes a listas de izquierda, fueron objeto de nuevas acusaciones que apuntaron a la cuestión ideológica como problema en sí mismo. El entonces Ministro de Salud y candidato a legislador porteño, Ginés González García, reclamó “‘mano firme y sancionar a estos grupos que extorsionan al Gobierno’ y vinculó la protesta ‘al PO, que en otros momentos paralizaron el Garrahan y extorsionan todos los días a la democracia’” (*Página 12*, 18-05-07). Así, las dirigencias gremiales disímiles a las burocracias sindicales tradicionales representaron para la retórica oficial *un peligro* para la democracia, antes que –al menos– un conflicto laboral que incluía a la empresa adjudicataria del servicio y al Ministerio de trabajo.

Relacionado al transporte ferroviario, en septiembre de 2008 un incidente en el que pasajeros de la ex línea Sarmiento quemaron ocho vagones ante la sistemática irregularidad en el servicio concesionado, nuevamente derivó en acusaciones que empalmaban el delito con las ideologías de izquierda. El intendente de Merlo Raúl Othacehé, el Ministro de Interior Florencio Randazzo y el Ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández emitieron este tipo de mensajes al asegurar que la quema de ocho vagones en Merlo y los desmanes producidos en la estación Castelar fueron producto de un “sabotaje, un atentado en el sistema de frenos de una formación. Se trató de una situación armada y premeditada por militantes del Partido Obrero” (*Clarín*, 5-09-08). Las acusaciones también involucraron a activistas de Quebracho, el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) y de “Proyecto Sur”, agrupación liderada por el cineasta Fernando “Pino” Solanas, que incluye en su programa político la nacionalización de los ferrocarriles. Como uno de los responsables de los hechos se acusó directamente a José María Escobar, docente de 47 años y dirigente de la agrupación

sindical Tribuna Docente, vinculada al PO. Como en los casos que vimos a lo largo de la tesis, estas imputaciones también fueron difundidas sin ningún tipo de pruebas, casi inmediatamente después de los desmanes.

Hechos objetivamente similares que generaron juicios de valor y tratamientos políticos antitéticos, plasmados tanto en el plano material como ideológico –en el que indefectiblemente interviene la jurisprudencia como parte de la lucha ideológica-: una alianza de clases específica.

10.2. Conclusiones generales.

Como sucede en todo proceso de investigación, a medida que avanzamos con las primeras inquietudes nos fuimos encontrando con nuevas preguntas y problemas que también tratamos de atender. Desde ya, las conclusiones que aquí formulemos no pueden aplicarse al proceso de protesta en la década de 1990 en su conjunto. Tengamos en cuenta, sin embargo, que los seis casos analizados constituyen hitos, episodios emblemáticos del conflicto social del período mencionado.

A partir del rastreo hemerográfico pretendimos reconstruir las representaciones sociales del conflicto, y una *genealogía* de las distintas concepciones de la protesta mediante el corte de rutas en la historia reciente y su criminalización. Lo que nos llevó a intentar reconstruir una lucha ideológica -que sin dudas abarca otros aspectos que aquí no estudiamos- de casos muy distintos entre sí; pero que nos permitieron hilvanar aspectos y dimensiones en los que encontramos ciertas regularidades. El hecho de que en cinco de estos casos haya habido una respuesta represiva del Estado por fuera de la media – recordemos que en el primer episodio hubo una represión “interrumpida”-, nos permitirá también enlazar algunos aspectos comunes.

Como ya mencionamos, nuestra intención no ha sido encontrar una correlación o relación causal entre las confrontaciones materiales y las ideológicas a través de los enunciados, pues los objetivos y el camino metodológico que nos propusimos no lo permiten. Sin embargo, asistimos a un esquema de enfrentamiento con una relación de correspondencia entre una y otra dimensión: en todos los casos estudiados comprobamos que el alza de la magnitud de enfrentamiento y de la violencia estatal tiene una correlación casi directamente proporcional en el alza de las disputas sobre el sentido de

esos hechos. Si bien el discurso del orden operó incluso cuando no existió el uso de la fuerza en forma directa, se evidenció cualitativa y cuantitativamente mucho más en esos momentos. Esta tendencia nos permite asumir que la construcción de conocimiento sobre los hechos de conflicto y su manifestación discursiva estuvo completamente condicionada por la materialidad de los enfrentamientos.

Habíamos señalado en el capítulo tres que consideramos a las protestas del período trabajado (1996-2002) como *luchas defensivas*. Teniendo en cuenta aquel cuadro de correspondencia entre la dimensión material y simbólico-ideológica del enfrentamiento, diremos que las declaraciones registradas por los manifestantes al momento del conflicto también fueron explicaciones que podríamos denominar como *defensivas*. Esto es, declaraciones caracterizadas mayormente por la defensa y reivindicación de los reclamos, de intento de explicación sobre las causas de las movilizaciones, y de caracterización negativa del Gobierno mayormente luego de las acciones represivas. En contrapartida, la disputa simbólica desde los despachos estatales conformaron una estrategia *de ataque* (en el marco de una lucha ideológica) desde el principio al fin de las manifestaciones, caracterizando con diversos juicios de valor morales, políticos e ideológicos a las protestas y a quienes las impulsaron. Es por ello que la dimensión retórica junto a la jurídica y legal, se torna fundamental para comprender el sustento político e ideológico con el que se aplicó la violencia institucional.

No obstante, este planteo en el que podemos encontrar un esquema clásico de confrontación entre sectores sociales antagónicos, no implica una diferenciación maniquea. La afrenta en el plano simbólico incluyó a otras fracciones que se aliaron al poder político e impulsaron una relación heterónoma al reclamar la restauración del orden por medio de la fuerza, la sanción y el castigo a los manifestantes; quienes por el contrario en todos los casos estudiados ejercitaron prácticas que constituyeron una relación de autonomía, más aún a medida que los reclamos se prolongaron en el tiempo. Es decir que hablamos de alianzas que evidencian un corte *transversal* en el que sectores asalariados e incluso dirigentes populares -como en el caso de la Masacre de Avellaneda- se alinearon con el poder político en aquella estrategia que denominamos de ataque. En contrapartida, funcionarios gubernamentales en algunos casos se mostraron solidarios a los manifestantes, algunos desde un plano meramente discursivo con intenciones de capitalizar alguna oportunidad política, en otros casos desde un acompañamiento físico y militante. En tal sentido, la constitución de *fuerzas sociales* que podemos diferenciar

analíticamente en un conflicto, también se configuraron en un plano ideológico en cada uno de los casos analizados.

Para continuar con el análisis proponemos una tipología a partir de los sujetos que intervinieron en cada episodio y de cómo fueron caracterizados, tomando específicamente las definiciones negativas:

Cuadro 11: Tipología de los casos estudiados según sujetos participantes y formas en que fueron caracterizados

		Tipo de caracterización negativa	
		Con peso en lo delictivo, ilegal e ilegítimo	Con peso en lo delictivo/subversivo y militancia de izquierda
Sujetos protagonistas de las protestas	Predominancia sectores medios y sindicatos	1) Neuquén 1996	2) Neuquén 1997 3) Corrientes 1999
	Predominancia trabajadores desocupados y organizaciones piqueteras	4) Salta 2000	5) Salta 2001 6) Avellaneda 2002

En el transcurso de la tesis habíamos retomado las investigaciones realizadas por el PIMSA que hablan del mapa del conflicto social reciente como un proceso que se inicia con protestas con predominancia de acciones cercanas al motín, que *evolucionan* hacia acciones más organizadas. El esquema que proponemos de alguna manera obedece a este análisis: partimos de un corte de ruta en el que comienzan a registrarse formas de autogestión, y finaliza con una protesta en donde esas formas primigenias de organización se desarrollaron al punto de transformarse en decenas de agrupaciones en una red nacional. En este aspecto el movimiento piquetero como fracción contestataria y más movilizadora de los sectores asalariados cumplió un papel más que destacado. Aquellas primeras experiencias dadas en los casos 1 y 2 adquirieron en los tres últimos casos un grado de organización y consolidación que se obtuvo con el desarrollo de métodos de consenso que no implicaron la inexistencia de delegados y dirigentes, tal como vimos en los últimos cinco casos. Es que lejos de conformar una propuesta

absolutamente nueva, ligada a una lectura fetichista de la organización autónoma, los episodios de protesta analizados retomaron la tradición histórica de la clase obrera en sus estadios de mayor crecimiento político. Esta tendencia toca su máxima expresión en el último caso, con miles de trabajadores desocupados movilizados en más de una decena de organizaciones, con una potencial proyección que obligó al poder político nacional a tener que confrontarlos con un despliegue represivo inusitado hasta ese momento.

La tendencia empíricamente contrastada que nos habla de la progresiva organización en las luchas populares –lejos de la atomización o fragmentación que pudiera surgir a primera vista-, puede ser complementada por otras observaciones. También podemos hablar de un progresivo aumento en 1) la respuesta represiva del Estado, 2) el grado de estigmatización y condena en el plano del discurso –que implica un progresivo aumento de la lucha ideológica- y 3) la percepción y reflexión de los hechos por parte de los protagonistas de las luchas a medida que cada episodio implicaba mayor experiencia acumulada o un grado de mayor organización.

1) El aumento en la magnitud de la represión. Desde el caso 1 en el que el avance represivo fue frenado hasta las muertes provocadas en las represiones posteriores, con decenas de heridos con armas de fuego y balas de plomo, detenidos- procesados y heridos, además de acciones con rasgos de lucha antirrepresiva: el allanamiento a viviendas y locales políticos, amenazas, vejaciones y torturas físicas y psicológicas (como el simulacro de fusilamiento). Rasgos presentes en los casos 2 y 3, profundizado en los tres casos posteriores. Dentro de la justificación general de la represión, el poder político caracterizó las muertes y los heridos de bala como “irregularidades” o “excesos”. En primer lugar la “hipótesis del exceso” reduce la violencia institucional a partir de *eventuales hechos individuales de brutalidad sin premeditación*, producto de la impericia de algunos de los integrantes de las fuerzas de seguridad. No se trata de un término nuevo, pues fue utilizado por dirigentes políticos y militares para “explicar” el proceso de aniquilamiento social antes y durante la última dictadura militar. Recordemos que, en el imperio de la teoría de “los dos demonios” -como ideología dominante en las explicaciones del sentido común sobre el conflicto social-, dirigentes políticos y militares explicaban que en esa *guerra sucia* ocurrida en la década de 1970 *hubo excesos*. En segundo lugar, el término esfuma el carácter intrínsecamente violento que adquieren las democracias capitalistas en períodos de crisis.

De modo que tanto en la actualidad como en el pasado, la *hipótesis del exceso* “forma parte de un tenaz y persistente esfuerzo de justificación simbólica de las eventuales acciones represivas” (Artese y Roffinelli, 2007, p. 69). Según la intensidad, el grado de desarrollo y el momento histórico de los conflictos, esa violencia institucional puede justificarse retóricamente de diversos modos, por la defensa de “los valores cristianos y occidentales”, vívido emblema de los sectores dominantes durante buena parte de la década de 1970, o por “la gobernabilidad y las instituciones”, discurso más alineado a las políticas neoliberales de la década de 1990.

En realidad se trata de formas regulares de violencia institucional -en particular en el caso 2 al 6, siguiendo la tipología expuesta más arriba- que al repetirse en diversos momentos y espacios se establecen como sistémicos. Esta metodología forma parte del *modus operandi* que, atendiendo las características de los casos estudiados, adquirió la forma de *terrorismo de estado de baja intensidad*, aplicado sobre sujetos que fueron caracterizados de la manera que analizamos a lo largo de la investigación.

2) El aumento en el grado de estigmatización y condena en el plano discursivo. La magnitud de la represión en los casos se combina con otras particularidades en el carácter social, político e ideológico de sus protagonistas. La acción represiva, como pudimos ver, estuvo acompañada y legitimada desde el plano simbólico. Una constante definición ligada a lo delictivo y lo ilegal (con peso preponderante en los casos 1 y 4) a los que se sumaron caracterizaciones que colocaron a la militancia de izquierda en un plano de peligrosidad, violencia y de actividad anticonstitucional (casos 2, 3, 5 y 6). En los dos primeros de estos cuatro casos, se producen esas caracterizaciones con la intervención de un sindicato con una pública y reconocida militancia de izquierda en parte de su dirección (caso 2) y en la participación de grupos políticos también reconocidos en su ideología hacia el final del conflicto correntino (caso 3). En los casos 5 y 6 se producen sobre organizaciones piqueteras ya consolidadas donde también intervinieron abiertamente manifestantes con militancia de izquierda.

Proporcionalmente, el relevamiento del conjunto de categorizaciones negativas respecto de las protestas fue aumentando con el grado represivo y con la organización de quienes las llevaron a cabo:

1) Neuquén 1996	2) Neuquén 1997	3) Corrientes 1999	4) Salta 2000	5) Salta 2001	6) Avellaneda 2002
36 %	60 %	49 %	64 %	69 %	54 %

Como expusimos a lo largo de la investigación, el relevamiento hemerográfico conforma una fuente sesgada de información que nos permitió, de todos modos, observar una tendencia del tipo y la frecuencia de interpretaciones sobre los diversos episodios de protesta. El acceso y publicación de las voces de los manifestantes también está íntimamente relacionado a la etapa en que se circunscribe la protesta y a los sujetos que la protagonizaron: mientras que en el caso 1 los manifestantes participan de casi el 30 % de las declaraciones, en los casos 2 y 3 la proporción baja al 11 % y 10 % respectivamente, es prácticamente inexistente en los casos 4 y 5 (donde se produce el mayor aislamiento mediático de los manifestantes) y finaliza con el 5 % de la participación en el caso 6.

En cuanto a las declaraciones de estigmatización ideológica, vimos fundamentalmente en los casos 2 a 6 que intervino lo que llamaremos una *lógica de la invasión*: la premisa inicial de esta formulación nos presenta a individuos con ideologías externas a la coyuntura del conflicto que utilizaron al mismo como ariete para la imposición de sus propios objetivos. Consecuentemente, las protestas se tornaron *indefectiblemente* negativas por la participación de estos sujetos calificados como infiltrados. Se trata en realidad de una inferencia que no remite a los hechos observados, sino un conocimiento con anclaje en ese “ser social” –o paradigma político-ideológico-producto de una historia de enfrentamientos políticos recientes.

Aunque las reminiscencias a la infiltración política, la subversión y la violencia armada nos trasladen de inmediato a décadas pasadas –no vividas por las generaciones más jóvenes integrantes de las fuerzas de Seguridad-, se aplicaron significados del pasado sobre distintos referentes, es decir, sobre las *formas actuales de insubordinación política*. Es probable (deberíamos investigarlo) que el sentido que se adjudique no sea exactamente el mismo que se utilizó antaño, aunque es innegable una determinación histórica en el uso de esa y otras palabras que conforman una misma familia de significados.

No sólo forman un corpus de interpretación de la realidad con el fin de denostar a los manifestantes. Son el reflejo –y en este sentido la estrecha vinculación de lo simbólico y lo material- de las políticas represivas impulsadas por distintos gobiernos. Veamos: por las características de las acciones represivas –su contundencia en la aplicación de prácticas hermanadas a la represión ilegal-, diremos que en prácticamente todos los casos estudiados registramos un *terrorismo de estado de baja intensidad*. En paralelo verificamos que una porción de la producción discursiva estuvo acorde con ese

tipo de acciones represivas: se volcó sobre los manifestantes –que episódicamente dejaron de ser ciudadanos transformándose en delincuentes de diversa peligrosidad- toda una serie de figuras relacionadas a la lucha antisubversiva. Esto es aplicable a todos los casos estudiados salvo en el caso 1, donde la represión no tomó los valores que vimos posteriormente –y donde los sujetos que participaron tampoco significaron un colectivo políticamente contestatario y peligroso- y en el caso 4, donde si bien las acusaciones a la izquierda circulaban en formas morigeradas, la mayor parte de los discursos acusatorios son relacionados a la delincuencia común, la violencia y la ilegalidad.

3) El grado de toma de conciencia de los enfrentamientos. A lo largo de las entrevistas con los manifestantes comprobamos en primer lugar que el recuerdo de los hechos fue sumamente enriquecedor para la investigación, que hubiera quedado trunca si sólo nos remitíamos al archivo gráfico. Los detalles de las vivencias, los orígenes, desenlace y consecuencias de cada uno de los conflictos adquirieron un relato particular en cada manifestante. Pero en esta búsqueda en la memoria, los hechos fueron relatados con un arsenal de conceptos políticos más escaso en el caso 1, en el que sectores marginales y de la pequeño-burguesía empobrecida neuquina fogueaban su experiencia política casi por primera vez en aquella autoorganización piquetera de 1996. Algo similar ocurrió con las fracciones de desocupados en Corrientes en la primera etapa de la protesta, en contraste con los sindicatos estatales y docentes que también formaron parte de los reclamos -y los iniciaron, como el caso del sindicato judicial- y con las agrupaciones políticas que integraron el proceso. En estos manifestantes también se registró un cuestionamiento menos político a la hora de interpelarlos con los dispositivos que propusimos, al revisar y opinar sobre las declaraciones que diversos exponentes del poder político hicieron durante el conflicto. En ellos encontramos un reconocimiento sobre la protesta como un hecho que infringía leyes y que estaba cerca de las figuras delictivas, aunque temporalmente consideraron que la acción del corte de ruta era la única salida para colocar en una agenda pública sus reclamos (lo que denominamos saberes provisorios en el transcurso de la tesis).

Sólo en los casos en los que participaron manifestantes con mayor experiencia gremial o en agrupaciones y partidos políticos en el pasado, se explicaron y reivindicaron las protestas como acciones necesariamente fuera de la ley, entendida ésta como herramienta de dominación. Es el caso de los manifestantes con experiencia en la militancia gremial en los casos 2 y 3 y en las agrupaciones piqueteras en los casos 4, 5 y

6. Esto lo apreciamos con mayor intensidad en el último caso estudiado, donde incluso cientos de personas que no venían de experiencias políticas previas (principalmente en los MTD sin vinculación a partidos o sindicatos), constituyeron un movimiento social y político en el que se relativizó conscientemente el carácter político del orden establecido, se impulsó la movilización con objetivos políticos además de los económicos y la continuidad de de sus proyectos. En tal sentido, la reflexión actual de la acción también está condicionada por las experiencias anteriores.

En definitiva, consideramos que las luchas económicas, políticas e ideológicas del período estudiado se enmarcan en el triunfo de sectores sociales dominantes que lograron imponer el nuevo patrón de acumulación y que reaccionaron –tanto en el plano material como simbólico- ante los reclamos de los sectores más postergados, expresando una parte del proceso histórico de lucha de clases.

Luego de años en los que el corte de ruta se constituyó como una de las herramientas prominentes de las luchas populares, la terminología “piquetero” terminó por instalarse en pocos años como sinónimo de delito, vandalismo, vagancia, reclamos injustificados, activismo político rentado, etc. Esas marcas sociales, *signos compartidos* fuertemente arraigados, son indicadores de la reproducción de la idea de un orden social autojustificado que fomenta el repudio y el desprecio de determinadas protestas y de los sujetos que en ellas participan. Dichas concepciones no surgieron comenzada la última década: hemos comprobado que la estigmatización de la protesta en las calles y de la *identidad piquetera* fue denostada desde su primera aparición pública.

Suponemos que el arco de conceptualizaciones y caracterizaciones sobre las formas de lucha reciente y sobre los sujetos que las adoptaron, se ha instalado hoy con la fuerza de la cotidianeidad y la normalidad. Analizarlas es el primer gran paso que lleva a enfrentar y revelar estos momentos en los que se legitima la violencia institucional y se corroen las identidades políticas e ideológicas en un claro marco discriminatorio. En tal sentido nos preguntamos qué contenidos han permanecido o cambiado en las luchas populares producidas inmediatamente después del período que aquí analizamos. Y cuál es el grado de recepción en diversos sectores de la sociedad de esas caracterizaciones de años atrás, en particular las que vinculan a las ideologías de izquierda como perniciosas para la sociedad. Cuestiones que deberán resolverse en próximos planes de investigación.

Anexo Mapas

Mapa 1: Cutral C6 y Plaza Huincul. Junio de 1996



Fuente: elaboración propia. Imagen satelital Google Earth.

Mapa 2 y 3. Neuquén, Cutral C6 y Plaza Huincul, marzo y abril de 1997



-  Avance de Gendarmería. 27 de marzo de 1997
-  Enfrentamiento entre docentes y Gendarmería. 27 de marzo de 1997
-  Acampe de docentes frente a gobernación. Primeros días de abril



-  Piquetes 7 al 18 de abril de 1997
-  Avance de Gendarmería. 12 de abril
-  Enfrentamientos c/ Gendarmería. Ruta 22
-  Avance de Policía Provincial, ruta 17
-  Muerte de Teresa Rodríguez 12 de abril de 1997

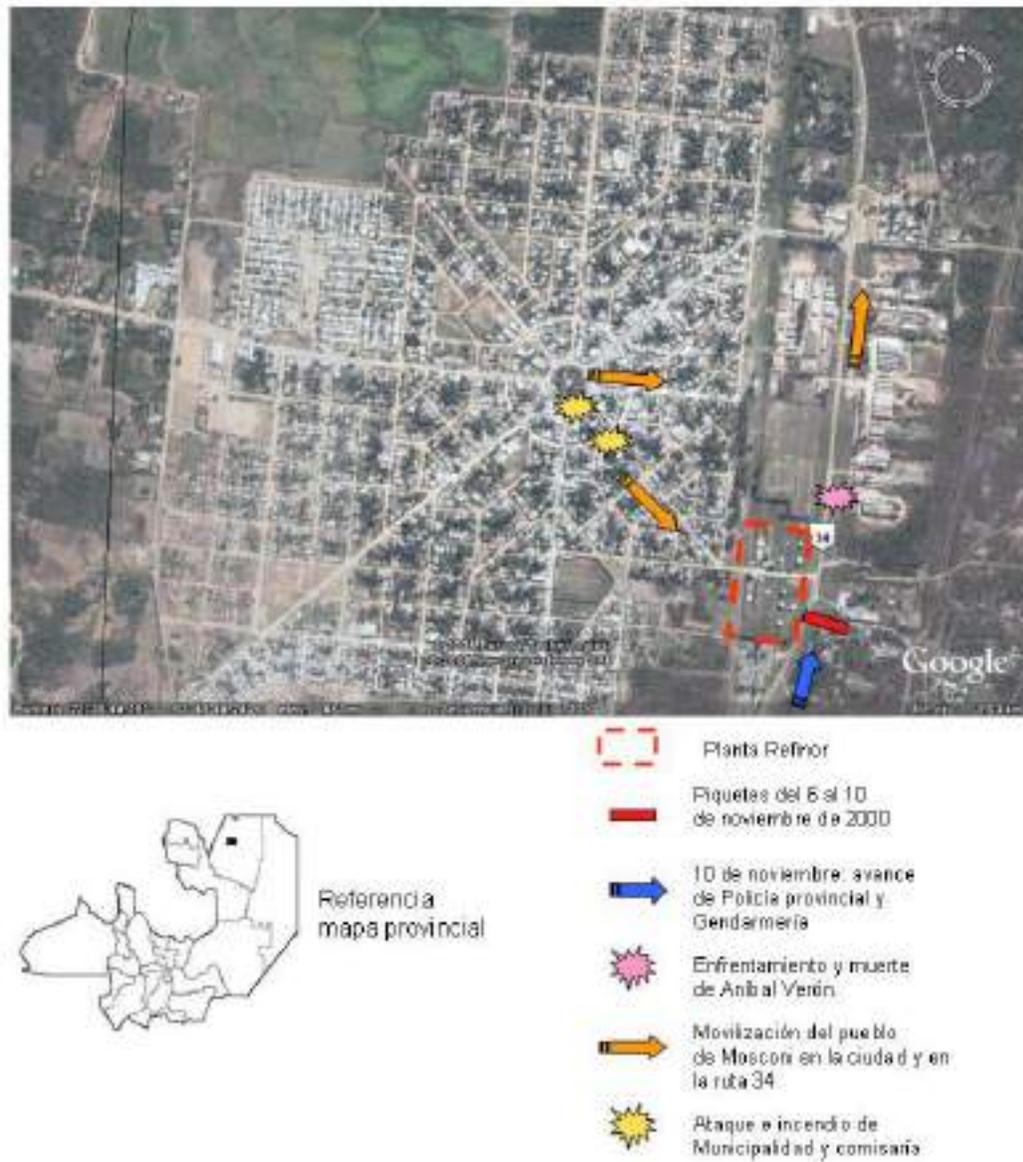
Fuente: elaboración propia. Imagen satelital Google Earth.

Mapa 4: Corrientes, diciembre de 1999



Fuente: elaboración propia. Imagen satelital Google Earth.

Mapa 5: General Mosconi, noviembre de 2000



Fuente: elaboración propia. Imagen satelital Google Earth.

Mapa 6: Tartagal, noviembre de 2000



-  Movilización del pueblo de Mosconi y Tartagal
-  Ataque a la Comisaría 36
-  Ataque a la Municipalidad
-  Ataque a la empresa de electricidad EDESA
-  Ataque a la empresa de transporte Atahualpa, donde trabajaba Verón
-  Ataque a la Unidad de Empleo Municipal

Fuente: elaboración propia. Imagen satelital Google Earth.

Mapa 7: General Mosconi, junio de 2001



-  Planta Refinor tomada por gendarmes, quienes abren fuego desde los tanques.
-  Piquetes del 10 al 17 de junio de 2000
-  Zonas de enfrentamiento
-  Avance de Gendarmes desde el norte y sur, ingreso a la ciudad
-  Muerte de Barrios, frente al cementero de Mosconi
-  Muerte de Santillán en zona de monte
-  Acampe en la plaza, 20 al 25 de Junio

Fuente: elaboración propia. Imagen satelital Google Earth.

Mapa 8: Puente Pueyrredón y Avellaneda, junio de 2002



-  Tropas de Fuerzas de Seguridad (Gendarmería, Prefectura y Policías)
-  Avance columna manifest. (Coordinadora Anibal Verón, MTR, PO, MTL)
-  Retroceso y huida de manifestantes
-  Enfrentamiento y comienzo de la represión. Avenida Pardo y Mitre
-  Balacera, cae herido Maximiliano Kosteki
-  Estación de Avellaneda, asesinato de Darío Santillán

Fuente: elaboración propia. Imagen satelital Google Earth.

Bibliografía citada y consultada

- Acuña, et al (2004). La construcción de fuerza social de las clases y fracciones subordinadas en Diciembre de 2001. Ponencia presentada en el II Congreso Nacional de Sociología / VI Jornadas de Sociología de la UBA. Buenos Aires, 20 al 23 de octubre de 2004. ISBN: 950-29-0816-3.
- Agosto, P. (2006). Una historia a la luz del petróleo. En C. Korol (compiladora), *Mosconi: cortando las rutas del petróleo*. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
- Alonso, G. (2000). *Política y seguridad social en la Argentina de los '90*. Madrid-Buenos Aires: Miño y Dávila Editores (caps. 1-2)
- Armony, V. y Kessler, G. (2004). Imágenes de una sociedad en crisis. Cuestión social, pobreza y desempleo. En M. Novaro y V. Palermo, (Eds.), *La historia reciente. Argentina en democracia*. (pp. 91-114). Buenos Aires: Editorial Edhasa.
- Aréchiga, H. (1997). Los fundamentos neurobiológicos de la teoría de Piaget sobre la génesis del conocimiento. En R. García (Ed.), *La Epistemología Genética y la Ciencia Contemporánea*. (pp. 211-223). Barcelona: Gedisa Editora.
- Artese, M. (2005). Lucha de clases y enfrentamiento simbólico: Corrientes 1999. *Revista Razón y Revolución* N° 14 (pp. 57-85). Buenos Aires: Ediciones RyR.
- Artese, M. y Roffinelli, G. (2007). *Responsabilidad civil y genocidio. Acciones y declaraciones públicas durante el Operativo Independencia*. Buenos Aires: Tientos Editora
- Auyero, J. (2002). Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina. *Desarrollo Económico* N°166, Vol. 42, Julio-Septiembre. Buenos Aires: Ides.
- _____ (2003). Repertorios insurgentes en Argentina contemporánea. *Revista ICONOS*. N°. 15, FLACSO Ecuador, pp. 44-61.
- _____ (2004 a). *Vidas Beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmas.
- _____ (2004 b). When Everyday Life, Routine Politics, and Protest Meet *Theory and Society*, Vol. 33, No. 3/4. (Jun. - Aug., 2004), pp. 417-441.
- Azpiazu, D. (2002). *Privatizaciones y poder económico*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Basualdo, E. (2006). *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Barbetta, P. y Lapegna, P. (2001). Cuando la protesta tomar forma. Los cortes de ruta en el norte salteño. En N. Giarraca (Ed.), *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (pp. 231 - 257). Buenos Aires: Alianza Editorial.
- Barrios, G. (2001). El ejercicio de la violencia legítima en el Estado Neoliberal. La represión al movimiento de protesta social, el caso de Corrientes. Ponencia presentada en el XXIII Congreso de la ALAS, Antigua Guatemala, Guatemala.

- _____ (2006). *Después de la protesta*. Tesis de Maestría en Políticas Sociales no publicada, Universidad Nacional de Misiones.
- Benclowicz, J. (2007). Del conflicto a la protesta, de la protesta al conflicto. Tartagal-Mosconi y la conformación del movimiento de trabajadores desocupados. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores del IIGG. ISBN 978-950-29-1006-2
- _____ (2009). Piqueteros en Tartagal y Mosconi: ¿nuevo movimiento social o lucha sociosindical? Las luchas entre 1999 y 2001. Ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales. 30 y 31 de marzo de 2009, ISBN 978-987-24976-2-0.
- Berger, P. y Luckmann, T. (2001). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Blanco, L., Martínez, M. e Invernizzi, P. (2007). Lucha gremial – lucha política. El conflicto docente en Neuquén. Ponencia presentada en las VII Jornadas de Sociología, FCS, UBA. Noviembre de 2007. ISBN 978-950-29-1013-0.
- Bonavena, P. (s/f). *El concepto de "fuerza social política" en el marxismo*. Manuscrito no publicado. Cátedra de Teoría del Conflicto Social. Carrera de Sociología, FCS, UBA.
- Bonnet, A. (2002). La Crisis de Convertibilidad. *Revista Theomai*, edición especial, Invierno. [on line] <http://revista-theomai.unq.edu.ar/numespecial2002/index.htm>
- _____ (2007 a). *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*. Buenos Aires: Prometeo libros.
- _____ (2007 b). El concepto de hegemonía a la luz de las hegemonías neoconservadoras. *Revista Nuevo Topo* N° 4, Septiembre/Octubre, 109-134.
- Boron, A. (2000). *Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Bourdieu, P. (1990): *Sociología y cultura*. México: Editorial Grijalbo.
- Bourdieu, P.; Chamboredon, J.C.; Passeron, J.C. (2004). *El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Bruno, A. y Longo, R. (2006). Las condiciones de salud de General Mosconi. En C. Korol (compiladora), *Mosconi: cortando las rutas del petróleo*. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
- Carzola Artieda, D. (2002). El Correntinazo. *Revista Rebelión* [on line]. Disponible en <http://www.rebelion.org/hemeroteca/argentina/correntinazo270802.pdf>
- Castorina, J. (2005). La epistemología genética como una epistemología naturalizada. En H. Faas, A. Saal, y M. Velasco (Eds.), *Epistemología e Historia de la Ciencia* (pp. 132-139). Córdoba: Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, Volumen 11, Tomo I.
- Castorina, J. y Kaplan, C. (2003). Representaciones Sociales. Problemas teóricos y desafíos educativos. En J. Castorina (compilador), *Representaciones Sociales, problemas teóricos y conocimientos infantiles*. Barcelona: Gedisa Editora.

- CELS (2003). *El Estado frente a la protesta social 1996-2002*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Cotarelo, M. C. (1999). El motín de Santiago del Estero. Argentina, diciembre de 1993. *PIMSA* N° 3, 83-119.
- _____ (2005 a). Recursos naturales y conflicto social en la Argentina actual. En *Observatorio Social de América Latina* N° 17, 67-77.
- _____ (2005 b). Aproximación al análisis de los sujetos emergentes en la crisis de 2001-2002 en Argentina. *PIMSA* N° 9, 198-217.
- Cotarelo, M. C. e Iñigo Carrera, N. (2004). Algunos rasgos de la rebelión en Argentina 1993-2001. *PIMSA* N° 8, 125-138.
- Crenzel, E. (1997). *El tucumanazo*. Tucumán: UNT- Facultad de Filosofía y Letras.
- Cypher, J. (2006). El militarismo keynesiano y la economía estadounidense. *Realidad Económica* N° 217, 6-20.
- De Sousa Santos, B. (2005). *Reinventar la democracia. Reinventar el Estado*. Buenos Aires: CLACSO libros.
- Delamata, G. (2004). *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Libros del Rojas/EUDEBA.
- Díaz, N., Fernández, N. y Gerez, L. (2006). *Cutral Có - Plaza Huincul y Rincón de los Sauces. Dos modelos de crecimiento contrapuestos*. Segundas Jornadas de Historia de la Patagonia. Cipolletti y General Roca, 2, 3 y 4 de noviembre de 2006.
- Díaz Muñoz, M. (2005). *Orden, represión y muerte. Diario de la criminalización de la protesta social en Salta (1995-2005)*. Buenos Aires: Editorial Tierra del Sur y Colectivo La Rabia.
- Dinerstein, A. et al (2008). Notas de investigación sobre la innovación organizacional en entidades de trabajadores desocupados en la Argentina. *Realidad Económica* N° 234, pp. 51-79.
- Duarte, M. (2002). Los impactos de las privatizaciones sobre el mercado de trabajo: desocupación y creciente precarización laboral. En D. Aspiazú, (Ed.), *Privatizaciones y poder económico*. (pp. 69-90). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmas.
- Eagleton, T. (1997). *Ideología*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Esping-Andersen, G. (1993). *Los tres mundos del Estado de Bienestar*. Valencia: Alfons el Magnànim.
- Fairclough, N. (1998). *Discurso y cambio social*. Buenos Aires: Cuadernos de Sociolingüística y Lingüística Crítica, Facultad de Filosofía y Letras.
- Favaro, O. (2002). Neuquén. La sociedad y el conflicto. ¿Viejos actores y nuevas prácticas sociales? CEHEPYC, Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cehepyc/neuquen.doc>

- Favaro, O. y Iuorno, G. (2005). Poder político y estrategias de reproducción en los territorios de Neuquén y Río Negro, Argentina. 1983-2003. En O. Favaro (Ed.), *Sujetos sociales y políticas. Historia reciente de la Norpatagonia argentina*. Buenos Aires: Editorial La Colmena.
- Ferrater Mora, J. (2004). *Diccionario de Filosofía*. Barcelona: Editorial Ariel, Tomos II y III.
- Foucault, M. (1975). Dialogo sobre el poder. Entrevista informal transcrita por Grant Kim sobre una grabación realizada en mayo 1975 en el Foundres Room del Pomone College de Claremont.
- _____ (1989). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- _____ (1992). *El orden del discurso*. Buenos Aires: Tusquets Editores.
- _____ (2000). *Defender la sociedad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- García, R. (2000). *El conocimiento en construcción*. Barcelona: Gedisa Editora.
- Gargarella, R. (2004). El lugar de la Justicia. Derecho y protesta social. *Revista Encrucijadas*, 27, 12-16.
- Gastron, L., Oddone, J., Vujosevich, J. (2003). Aproximación conceptual-metodológica de las representaciones sociales en el campo del envejecimiento humano. En S. Lago Martínez, G. Gómez Rojas y M. Mauro (Eds.), *En torno de las metodologías: abordajes cualitativos y cuantitativos*. (pp. 87-98). Buenos Aires: Proa XXI Editores.
- Gerchunoff, P. y Canovas, G. (1995). Privatizaciones en un contexto de emergencia económica. *Desarrollo Económico*, vol. 34, N° 136, 483-511.
- Gianella, A. (2005). Epistemología naturalizada y Psicología. En H. Faas, A. Saal, y M. Velasco (Eds.), *Epistemología e Historia de la Ciencia* (pp. 334-341). Córdoba: Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, Volumen 11, Tomo I.
- Giarraca, N. (2007). Organización y Acción Colectiva. El caso de la UTD de Mosconi, Salta. En E. Villanueva y A. Massetti (Comp.), *Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina de hoy*. (pp. 147-155). Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Giarraca, N. y Bidaseca, K. (2001). Introducción. En N. Giarraca (Ed.), *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. (pp. 19-39). Buenos Aires: Alianza Editorial.
- Giarraca, N. y Wahren, J. (2005). Territorios en disputa: iniciativas productivas y acción política en Mosconi, Argentina. En *Observatorio Social de América Latina*. Año 6 no. 16. (pp. 285-296). Buenos Aires: CLACSO. ISSN 1515-3282.
- Giddens, A. (1997 a). *Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica de las sociologías comprensivas*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- _____ (1997 b). *Política, sociología y teoría social. Reflexiones sobre el pensamiento social clásico y contemporáneo*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Goffman, E. (2003). *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Gómez, M. (2007). Origen y desarrollo de los patrones de acción y organización colectiva desafiante de los movimientos de desocupados en la Argentina. En E. Villanueva y A.

- Gramsci, A. (2003). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Buenos Aires: Nueva visión.
- Massetti (Comp.), *Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina de hoy*. (pp. 109-136). Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Gómez Mendoza, M. A. (1999). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: definición, clasificación y metodología. En *Revista Ciencias Humanas*, [on line], N° 20, Disponible en <http://www.utp.edu.co/~chumanas/>
- Gonzalez Bombal, I. (2003). *Nuevos movimientos sociales y ONGs en la Argentina de la crisis*. Buenos Aires: CEDES.
- Graesser, A. et al (2000). Cognición. En T. van Dijk (Ed.), *El discurso como estructura y proceso. Estudios sobre el discurso I. Una introducción multidisciplinaria*. (pp. 417-452). Barcelona: Gedisa.
- Gramsci, A. (1997). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.
- Held, D. (1991). *Modelos de democracia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Horacio Verbitsky (1999, diciembre 18). Quien es Chiappe. *Página 12*. [on line] Disponible en <http://old.pagina12web.com.ar/1999/99-12/99-12-18/pag07.htm>
- Ibarra, P. (2000). ¿Qué son los movimientos sociales? En Grau, Elena e Ibarra, Pedro (Coord.), *Anuario de Movimientos sociales. Una mirada sobre la red*. (pp. 9-26). Barcelona: Icaria Editorial y Getiko Fundazioa.
- Inda, G. y Duek, C. (2007). El día que los intelectuales decretaron la muerte de las clases. Un diagnóstico del momento teórico actual. En *Aposta, revista de ciencias sociales* [on line], N° 35, Octubre, Noviembre y Diciembre 2007. Disponible en <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/indayduek2.pdf>
- Iñigo Carrera, N. (2005, agosto 22-26). Algunos instrumentos para el análisis de las luchas populares en la llamada Historia Reciente (Argentina 1989 - 2001). Ponencia presentada en el XXV Congreso de la ALAS, Porto Alegre, Brasil.
- _____ (2007). La lucha de los obreros y de los pobres en la Argentina del capital financiero. En E. Villanueva y A. Massetti (Comp.), *Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina de hoy*. (pp. 86-95). Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2000). La protesta social en los '90. Aproximación a una periodización. *PIMSA* N° 4, 173-183.
- _____ (2001). La protesta en Argentina (enero –abril de 2001). En *Observatorio Social de América Latina* N° 4, 45-55.
- _____ (2003). La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización. *PIMSA* N° 7, 201-308.
- _____ (2006). Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina. En Caetano, Gerardo (Comp.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. (pp. 49-92). Buenos Aires: CLACSO.

- Iñigo Carrera, N.; Podestá, J. y Cotarelo, M. C. (1999). Las estructuras económico sociales concretas que constituyen la formación económica de la Argentina. *PIMSA* N° 3, 37-81.
- Izaguirre, I. (1984). Reflexiones sobre el desarrollo de una estrategia de dominación en el campo del conocimiento: el caso de la ciencia social. *Realidad Sociológica*. Año 3, N° 6, pp. 4-6.
- _____ (2005). La matanza constitucional. *Revista Encrucijadas*. 30, 42- 46.
- _____ (2006 a). Movimientos sociales y lucha de clases. *Revista Crítica de Nuestro Tiempo*. Año XV, n° 34, pp. 100-115.
- _____ (2006 b). *Sobre la teoría, la realidad y el conocimiento de la lucha de clases*. Manuscrito no publicado. IIGG, UBA.
- _____ (2006 c). Nuevas consideraciones sobre la ideología de la Seguridad Nacional. En I. Antognazzi y L. Lobato (Comps.), *Historia y memoria colectiva. Dos polos de una unidad* (pp. 31-45). Rosario: Universidad Nacional de Rosario.
- _____ (2009). Introducción. En I. Izaguirre (Comp.) *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina 1973-1983. Antecedentes. Desarrollo. Complicidades*. Buenos Aires: Eudeba (En prensa).
- Izaguirre, I. y Aristizábal, Z. (2002). *Las luchas obreras 1973-1976*. Buenos Aires: Documento de Trabajo N° 17, Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS, UBA.
- Jelin, E. (2005). Exclusión, memorias y luchas políticas. En Mato, D. (Comp.) *Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas*. (pp. 219-239). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Jenkins, C. (1983). Resource Mobilization Theory and the study of Social Movements. *Annual Review of Sociology*, Volume 9, 527-553.
- Khavisse, Aspiazu, Basualdo. (1989). *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*. Buenos Aires: Legasa.
- Klachko, P. (1999). Cutral Có y Plaza Huinul. El primer corte de ruta. (Del 20 al 26 de junio de 1996). Cronología e hipótesis. *PIMSA* N° 3, 121-154.
- _____ (2002). La conflictividad social en la Argentina de los '90. El caso de las localidades petroleras de Cutral Có y Plaza Huinul 1996-1997. En Levy, B. (Ed.), *Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: lecturas políticas*. (pp. 169-221). Buenos Aires: Colección de Becas CLACSO - Asdi.
- _____ (2003). El proceso de lucha social en Corrientes, marzo a diciembre de 1999. Los "Autoconvocados". En *PIMSA* 2003, 142-200.
- _____ (2008). Las formas de organización emergentes del ciclo de la rebelión popular de diciembre 1993 a junio 2002 en la Argentina. *Realidad Económica* N° 234, pp. 80-101.
- Kornblit, A. Verardi, M. (2004). Algunos instrumentos para el análisis de las noticias en los medios gráficos. En Kornblit, A. (Ed.), *Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y procedimientos de análisis*. (pp. 113-132). Buenos Aires: Editorial Biblos.

- Kuhn, T. (1993). *La estructura de las revoluciones científicas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Laclau, E. y Mouffe, Ch. (2004). *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Lapegna, P. (2000). *Actores heterogéneos y nuevas formas de protesta: los cortes de ruta en Tartagal –Mosconi, Salta*. Informe de Beca Ubacyt, Buenos Aires, mimeo.
- Lenin, V.I. (1984). *¿Qué hacer?* Buenos Aires: Editorial Anteo.
- Lo Vuolo, R. y Barbeito, A. (1998). *La nueva oscuridad de la política social. Del Estado populista al neoconservador*. Buenos Aires – Madrid: Miño y Dávila Editores.
- Maceira, V. y Spaltemberg, R. (2001). Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera en Argentina. En *Observatorio Social de América Latina*. N° 5, (pp. 23-28). Buenos Aires: CLACSO.
- Maneiro, M. (2004). Las protestas sociales y la judicialización de los conflictos. Un intento de exploración de las características que toma la doctrina de la seguridad interna en el marco del neoliberalismo armado en la República Argentina. *Programa Regional de Becas CLACSO. 2004*. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2003/mili/maneiro.pdf>
- Maneiro, Farías y Santana (2009). Desanudamiento del problema de la desocupación y la acción piquetero. Ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales. 30 y 31 de marzo de 2009, ISBN 978-987-24976-2-0.
- Marín, J. C. (1981). La noción de polaridad en los procesos de formación y realización de poder. CICSO, serie Teoría N° 8.
- _____ (2003). *Los hechos armados. Argentina 1973-1976*. Buenos Aires: La Rosa Blindada.
- Marx, K. (1987). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*. Tomo II. México: Siglo Veintiuno Editores.
- _____ (1990). *Introducción General a la crítica de la economía política/ 1857*. Buenos Aires: Ediciones Carabela.
- _____ (1992). *El Capital. Crítica de la economía política*. Tomo I. México: Fondo de Cultura Económica.
- _____ (1995). *El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*. Montevideo: Ediciones de la Comuna.
- Marx, K. y Engels, F. (1982). *La ideología Alemana*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- _____ (1998). *Manifiesto del Partido Comunista*. México: Fontamara.
- Massetti, A. (2004 a). *Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva*. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias.
- _____ (2004 b). Piqueteros: La "hipótesis del reemplazo" Ponencia presentada en las Segundas Jornadas de Investigación en Antropología Social, Buenos Aires. 5 y 6 de agosto de 2004. ISBN 950-29-0795-7

- _____ (2006). "Piqueteros eran los de antes": Sobre las transformaciones en la Protesta Piquetera. *Revista Laboratorio* [on line] Año VII, número 19. Otoño / Invierno. Disponible en: <http://lavboratorio.fsoc.uba.ar>
- _____ (2007). Piqueteros, o la política como voluntad de representación. En E. Villanueva y A. Massetti (Comp.), *Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina de hoy*. (pp. 62-72). Buenos Aires: Prometeo Libros.
- McCarthy, J. y Zald, M. (2002). Resource Mobilization and Social Movements. A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, Volume 82, Issue 6, 1212-1241.
- Meiksins Wood, E. (2000). *Democracia contra Capitalismo. La renovación del Materialismo Histórico*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Merklen, D. (2005). *Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Editorial Gorla.
- Moscovici, S. (1985). *La era de las multitudes. Un tratado histórico de psicología de las masas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- _____ (2003). La conciencia social y su historia. En Castorina, J. A. (Ed.), *Representaciones Sociales, problemas teóricos y conocimientos infantiles*. (pp. 91-110) Barcelona: Gedisa Editora.
- Muleras, E. (2008). *Sacralización y desencantamiento. Las formas primarias del conocimiento del orden social*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Muños Martínez, E. (1997). Jean Piaget, epistemólogo experimental. En R. García (Ed.), *La Epistemología Genética y la Ciencia Contemporánea*. (pp. 239-272). Barcelona: Gedisa Editora.
- Munk, G. (1997). Formação de atores, coordenação social e estratégia política: problemas conceituais do estudo dos Movimentos Sociais. *Dados*, vol. 40, Nº 1, Rio de Janeiro.
- MTD Anibal Verón (2003). *Darío y Maxi. Dignidad piquetera*. Buenos Aires: Ediciones 26 de junio.
- Naishtat, F. (2005). Ética pública de la protesta colectiva. En F. Naishtat et al (Comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. (pp. 25-42). Buenos Aires: Prometeo libros.
- Novaro, M. y Palermo, V. (2004). Las ideas de la época entre la invención de una tradición y el eterno retorno de la crisis. En Novaro y Palermo (Eds.), *La historia reciente. Argentina en democracia*. (pp 11-33) Buenos Aires: Editorial Edhasa.
- Nun, J. (1969). Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal. *Revista Latinoamericana de Sociología*, Vol. V, Nº 2, 178-236.
- _____ (2001). *Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Observatorio de las empresas transnacionales (2008). Programa de vigilancia de las empresas Transnacionales. Análisis de casos y conclusiones del seguimiento a Transnacionales. [on line]. Buenos Aires, Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos. Disponible en <http://www.foco.org.ar/oet-publicaciones.html>

- Oviedo, L. (2004). *Una historia del movimiento piquetero. De las primeras Coordinadoras al Argentinazo*. Buenos Aires: Ediciones Rumbos.
- Pardo, M. L. (2000). El temor generado por palabras como modo de persuasión en la primera Globalización (1870-1914) en la Argentina. En M. L. Pardo y M. V. Noelia (Ed.) *Globalización y nuevas tecnologías* (pp. 135-165). Buenos Aires, Editorial Biblos.
- Petracci, M. y Kornblit, A. L. (2004). Representaciones sociales: una teoría metodológicamente pluralista. En A. L. Kornblit (Ed.), *Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y procedimientos de análisis* (pp. 91-132) Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Petruccelli, A. (2005). *Docentes y piqueteros. De la huelga de ATEN a la pueblada de Cutral Có*. Buenos Aires: Ediciones El Cielo por Asalto.
- Piaget, J. (1969). Estructura y génesis en psicología. En M. De Gandillac, L. Goldmann, y J. Piaget (Eds.), *Las nociones de estructura y génesis* (pp. 241-266). Buenos Aires: Editorial Proteo.
- _____ (1984 a). *La representación del mundo en el niño*. Madrid: Ediciones Morata.
- _____ (1984 b). *El criterio moral en el niño*. Barcelona: Editorial Martínez Roca.
- _____ (1986). *La epistemología genética*. Madrid: Editorial Debate.
- Piaget, J. y García, R. (2004). *Psicogénesis e historia de la ciencia*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Pierson, P. (1994). *Dismantling the Welfare State?* New York: Cambridge University Press, (Introd., Parte I y Parte III).
- Piva, A. (2007). Algunas hipótesis sobre la relación entre modo de acumulación y hegemonía débil en Argentina (1989-2001). En E. Villanueva y A. Massetti (Comp.), *Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina de hoy*. (pp. 73-86). Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Poulantzas, N. (1998). *Las clases sociales en el capitalismo actual*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Raiter, A. (1999). *Lingüística y política*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- _____ (2002). Representaciones sociales. En A. Raiter (Ed.), *Representaciones Sociales*. (pp. 11-29) Buenos Aires: Eudeba.
- Rapoport, M. et al (2007). *Historia de la economía argentina del siglo XX*. Buenos Aires: La Página.
- Rebón, J. (2006). Trabajadores: estrategias laborales y personificaciones sociales. El caso de las empresas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires. Tesis de doctorado no publicada. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Repetto, F. (2002). *Gestión pública y desarrollo social en los noventa. Las trayectorias de Argentina y Chile*. Buenos Aires: Editorial Prometeo. (cap. 3-4).
- Rock, D. (1971). Lucha civil en la Argentina. La Semana Trágica de enero de 1919. *Desarrollo económico* 11 (42-44), pp. 165-215. Buenos Aires.

- Sánchez, P. (2000). Correntinazo itéva. *Cuadernos de Editorial Agora* N° 9.
- Saussure, F. (1961). *Curso de lingüística general*. Buenos Aires: Editorial Losada.
- Schuster, F. (2005). Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva. En F. Naishtat et al (Comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. (pp. 43-83). Buenos Aires: Prometeo libros.
- Schuster, F. y Pereyra, S. (2001). La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectiva de una forma de acción política. En N. Giarraca (Ed.), *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (pp. 42 - 63). Buenos Aires: Alianza Editorial.
- Schuster, F. et al (2006). Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003. *Documentos de Trabajo*, N° 48. [on line]. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Disponible en: <http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT/DT48.pdf>
- Scribano, A. (1999). Multiculturalismo, Teoría Social y Contexto Latinoamericano. *La factoría* N° 9. Disponible en <http://www.lafactoriaweb.com/articulos/scribano9.htm>
- _____ (2009). Acciones colectivas, movimientos y protesta social: preguntas y desafíos. En *Conflicto Social* [on line], pp. 86-117. Año 2, N°1. Disponible en <http://www.iigg.fsoc.uba.ar/conflictosocial/revista/>
- Scribano, A. y Schuster, F. (2001). Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura. En *Observatorio Social de América Latina*. N° 5, (pp. 17-22). Buenos Aires: CLACSO.
- _____ (2004). Cuidado, protestante a la vista. De la Protesta Social y su Criminalización. *Revista Encrucijadas*. 27, 6- 11.
- Svampa, M. (2003). Organizaciones de Trabajadores Desocupados. El modelo General Mosconi. En I. González Bombal (Comp.), *Nuevos movimientos sociales y ONGs en la Argentina de la crisis* (pp. 49-78). Buenos Aires: Cedes.
- _____ (2005). Los movimientos sociales e izquierdas. *Revista Rebelión* [on line]. Disponible en <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=27657>
- _____ (2006). La experiencia de la UTD. En C. Korol (compiladora), *Mosconi: cortando las rutas del petróleo*. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
- Svampa, M. y Corral, D. (2002). Movimientos sociales en la Argentina de hoy: piquetes & asambleas, tres estudios de casos. [on line]. Buenos Aires: CEDES. Disponible en <http://www.maristellasvampa.net/publicaciones-ensayos.shtml>
- Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- _____ (2005). La política de los movimientos piqueteros. En F. Naishtat et al (Comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. (pp. 343-364). Buenos Aires: Prometeo libros.
- Svampa, M. y Pandolfi, C. (2004). Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina. En *Observatorio Social de América Latina* N° 14, 285-296.

- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Tilly, Ch. (1995). La democracia es un lago. *Revista Sociedad*. 7, 5-29.
- _____ (2007). *Violencia Colectiva*. Barcelona: Editorial Hacer.
- Valles, M. (2007). *Entrevistas cualitativas*. Cuadernos metodológicos Nº 32. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Van Dijk, T. (1996). *La noticia como discurso*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- _____ (1999). *Ideología*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- _____ (2000). El estudio del discurso. En T. van Dijk (Ed.) *El discurso como estructura y proceso* (pp. 21- 65). Barcelona: Gedisa Editorial.
- _____ (2003 a). *Racismo y discurso de las elites* Barcelona: Gedisa Editorial.
- _____ (2003 b). *Ideología y discurso*. Barcelona: Editorial Ariel.
- Vasilachis de Gialdino, I. (1997). *Discurso político y prensa escrita. La construcción de representaciones sociales*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Verdú, M. C. (2009). *Represión en democracia. De la "primavera alfonsinista" al "gobierno de los derechos humanos"*. Buenos Aires: Herramienta Ediciones.
- Verón, E. (1987). La palabra adversativa. En Verón, A. et al (Ed), *El discurso político. Lenguajes y acontecimientos*. Buenos Aires: Hachette.
- Vigotski, L. (2007). *Pensamiento y habla*. Buenos Aires: Colihue Clásica.
- Vilas, C. (1995). Actores, sujetos, movimientos: ¿dónde quedaron las clases? *Sociológica*, año 10, Nº 28, 61-87.
- Voloshínov, V. (1976). *El signo ideológico y la filosofía del lenguaje*. Buenos Aires. Nueva Visión.
- Voloshínov, V. / Bajtín, M. (1998). *¿Qué es el lenguaje?* Buenos Aires: Editorial Almagesto.
- Wahren, J. La territorialidad como dimensión analítica de los movimientos sociales. El caso de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi, Salta: construcción de territorios y nuevas identidades sociales. Ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales. 30 y 31 de marzo de 2009, ISBN 978-987-24976-2-0.
- Wodak, R. (2000). ¿La sociolingüística necesita una teoría social? Nuevas perspectivas en el análisis crítico del discurso. En *Revista Iberoamericana de Discurso y Sociedad*, Vol. 3 (123-147). Barcelona: Gedisa Editora.
- Yocelvezky, R. (1997). Sociogénesis y sociología: el cambio de paradigma en las ciencias sociales latinoamericanas. En R. García (Ed.), *La Epistemología Genética y la Ciencia Contemporánea*. (pp. 153-169). Barcelona: Gedisa Editora.
- Zullo, J. (2002). Estrategias de la prensa actual: Información, publicidad y metadiscurso. En A. Raiter (Ed.), *Representaciones Sociales*. (pp. 49-62) Buenos Aires: Eudeba.